

DIARIO DE SESIONES

Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba

15 de Diciembre de 2010

49 REUNION – 45º SESION ORDINARIA

Vicegobernación:	CAMPANA , Héctor Oscar
Presidente Provisorio:	BUSO , Sergio
Vicepresidente:	CARBONETTI , Domingo (h)
Vicepresidente 1ª:	NICOLÁS , Miguel
Vicepresidente 2ª:	VARAS , Augusto
Secretario Legislativo:	ARIAS , Guillermo
Secretario Administrativo:	DIB , Héctor Daniel
Secretario de Coordinación Operativa y de Comisiones:	DANIELE , Fredy
Secretaría Técnica Parlamentaria:	PASTOR , Graciela del Carmen
Prosecretaría Legislativa:	
Prosecretaría Administrativa:	
Prosecretario de Coordinación Operativa y de Comisiones:	SCANDIZZO , Héctor
Prosecretario Técnico Parlamentario:	MANZUR , Horacio

Legisladores presentes:

ALARCIA, María Leonor.	GUDIÑO, Italo.
ALBARRACIN, Raúl Humberto	HEREDIA, Dante Fortunato.
ALESANDRI, Carlos.	IPÉRICO, Nelson José.
ALTAMIRANO, Alfredo.	JIMÉNEZ, Raúl Ernesto.
ASBERT, Enrique Mario.	LOBO, Héctor Reinaldo.
BIRRI, Roberto César.	MAIOCCO, José Antonio.
BISCHOFF, Eduardo Efraín.	MANZANARES, María Graciela.
BRESSAN, Estela Beatriz.	MATAR, María Alejandra.
BRUGGE, Juan Fernando.	MONIER, José Omar.
BUSO, Sergio Sebastian.	NARDUCCI, Alicia Isabel.
CALVO AGUADO, María Soledad.	NICOLÁS, Miguel Osvaldo.
CARGNELUTTI, Alicia.	NIETO, Gladys del Valle.
CARRERAS, José Benito.	OCHOA ROMERO, Pedro.
CHIOFALO, María Amelia	OLIVERO, María Liliana.
CID, Juan Manuel.	PAGLIANO, Roberto Oscar.
CORIA, Adela.	PASSERINI, Daniel Alejandro.
CUELLO, Hugo Oscar.	PODVERSICH, Norberto Luís.
CUGAT, Alfredo Jesús.	PONCIO, Norma María.
DANDACH, Kasem Merched.	POZZI, Hugo Alberto.
DÍAZ, Sara Cristina Aurelia	RAZZETTI, Edmundo.
DRESSINO, Ana María.	RIVERO, Silvia Graciela.
FERAUDO, Evelina Margarita.	RODRIGUEZ, Esmeralda del Tránsito.
FERNÁNDEZ, Nadia Vanesa.	ROSSI, Dante Valentín.
FLORES, Ernesto Ramón.	ROSSO, Milena Marina.
FROSSASCO, Horacio Marcelo.	RUIZ, Omar Antonio.
GAMAGGIO SOSA, Marisa.	SAIEG, Walter.
GENESIO DE STABIO, Modesta M. Teresa	SCARLATTO, José Luís.
GENTA, Mabel del Carmen.	SECULINI, César Omar.
GIAVENO, Carlos José.	SELLA, Orlando Enrique

SENN, Horaldo Alejo.
SERNA, Rodrigo Leandro.
SERRA, César Miguel José
SOLUSOLIA, Walter Osvaldo.
VALAROLO, Mirtha del Carmen.
VARAS, Augusto Enrique.
VÁSQUEZ, Mario Alberto.
VEGA, Horacio Daniel.
VILLENA, José Eduardo.

Legisladores ausentes

Justificados:

CARBONETTI, Domingo Angel (h)
LIZZUL, Nancy Fabiola.
LÓPEZ, Ricardo Hector.

Legisladores ausentes

No justificados:

SUMARIO

- 1.- Izamiento de la Bandera Nacional.....4754
2.- Versión taquigráfica. Aprobación4754
3.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales4754

De los señores legisladores

II.- Club Atlético San Lorenzo de Córdoba, Campeón del Torneo de Primera División "A" de la Liga Cordobesa de Fútbol 2010. Homenaje y reconocimiento. Disposición. Proyecto de resolución (6717/L/10) de los legisladores de los bloques de la Unión Cívica Radical, del Frente Cívico y Social y de Unión por Córdoba4755

III.- Ley N° 6485, de remuneraciones del personal de la Administración Central y organismos descentralizados del Estado provincial. Planilla anexa del artículo 179. Modificación. Proyecto de ley (6719/L/10) de las legisladoras Feraudo, Bressan, Gamaggio Sosa y Olivero4755

IV.- Proyecto de ley nacional que frene los desalojos y declare la función social de la tierra. Elaboración y sanción. Instrucción a legisladores nacionales por Córdoba. Proyecto de declaración (6722/L/10) de los legisladores Coria, Olivero, Birri y Asbert4755

V.- Dra. Raquel Dodelson de Kremer. Reconocimiento otorgado por B'nai B'rith Internacional, Regional Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (6723/L/10) de la legisladora Chiofalo4755

VI.- Dr. Armando Segundo Andruet (h). Consejero del Consejo Directivo de la Red de Bioética de la UNESCO. Nombramiento. Beneplácito. Proyecto de declaración (6734/L/10) de los legisladores Rossi y Dressino.....4755

VII.- Alumnos de la Escuela Bartolomé Mitre, en Villa Nueva. Destacado desempeño en la Feria Nacional de Ciencias y Tecnologías, en Tucumán. Beneplácito. Proyecto de declaración (6735/L/10) del legislador Frossasco4755

VIII.- Alumnos de la Escuela Especial Pablo VI, en Villa Nueva. Obtención del 1° en la modalidad Educación Especial - Área Tecnologías en la Feria Nacional de Ciencia y Tecnologías, en Tucumán. Proyecto de declaración (6736/L/10) del legislador Frossasco.....4755

IX.- Libro "Caracol Adentro", de Mildre Ambroggio. Publicación. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (6737/L/10) del legislador Jiménez4755

X.- 10° Campeonato Comercial de Fútbol

de Verano 2010, en Pincén, Dpto. General Roca. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (6738/L/10) del legislador Pagliano4755

XI.- XXV Encuentro Nacional de Fútbol Infantil "Nuestro Futuro", en Villa Huidobro, Dpto. General Roca. Proyecto de declaración (6739/L/10) del legislador Pagliano4756

XII.- Sindicato de Recaudadores y Custodios de Valores y Afines de Córdoba. Petitorio de reconocimiento de la inscripción gremial. Apoyo y acompañamiento. Proyecto de declaración (6740/L/10) de los legisladores Rossi, Giaveno y Pozzi4756

XIII.- Ley N° 9724, de suspensión de ejecuciones de sentencia que provean la subasta de vivienda única. Ratificación. Artículo 3°. Modificación. Proyecto de ley (6741/L/10) de la legisladora Valarolo4756

XIV.- Emprendimiento inmobiliario Puerto del Águila, Club -Country Náutico, Los Molinos-Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6742/L/10) de los legisladores Coria, Birri y Olivero ...4756

XV.- Geóloga María Jéssica Giuliano Albo. Premio Novel Profesional. Obtención en el X Congreso de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo, en Caracas, Venezuela. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (6746/L/10) de las legisladoras Feraudo, Valarolo y Bressan ...4756

XVI.- Parroquia San Isidro Labrador, en Portaña, Dpto. San Justo. Centenario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (6747/L/10) de las legisladoras Feraudo, Valarolo y Bressan4756

XVII.- Centro Oftalmológico Dr. Ernesto Guevara. 1º Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (6748/L/10) de la legisladora Chiofalo4756

XVIII.- Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba y la Provincia. Compensación de deudas recíprocas. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6750/L/10) del legislador Varas.....4756

Del Poder Ejecutivo

XIX.- Convenios 60/2010, 61/2010, 62/2010, 63/2010, 64/2010, 65/2010, 60/2010, de desarrollo sostenido para la oferta de productos ganaderos y agropecuarios; de ayuda a productores algodoneros; de ayuda a productores afectados por la sequía; de mejoramiento de caminos del sector lácteo; para el desarrollo del Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2016; y para la ejecución

del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales II, respectivamente, entre la Provincia y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Aprobación. Decreto 1701. Ratificación. Proyecto de ley (6725/E/10) del Poder Ejecutivo4757

XX.- Leyes Nacionales N° 24.449, Ley Nacional de Tránsito, y 26.363, Ley de creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Adhesión de la Provincia. Proyecto de ley (6726/E/10) del Poder Ejecutivo4757

XXI.- Localidad de Viamonte, Dpto. Unión. Radio municipal. Modificación. Proyecto de ley (6727/E/10) del Poder Ejecutivo4757

XXII.- Localidad de Monte Leña, Dpto. Unión. Radio municipal. Modificación. Proyecto de ley (6728/E/10) del Poder Ejecutivo4757

XXIII.- Localidad de Arroyo Algodón, Dpto. General San Martín. Radio municipal. Modificación. Proyecto de ley (6729/E/10) del Poder Ejecutivo4757

XXIV.- Localidad de Punta del Agua, Dpto. Tercero Arriba. Radio comunal. Modificación. Proyecto de ley (6730/E/10) del Poder Ejecutivo4757

XXV.- Localidad de Ordóñez, Dpto. Unión. Radio municipal. Modificación. Proyecto de ley (6731/E/10) del Poder Ejecutivo4757

XXVI.- Localidad de Villa Parque Siquiman, Dpto. Punilla. Radio comunal. Modificación. Proyecto de ley (6732/E/10) del Poder Ejecutivo4757

XXVII.- Localidad de Tío Pujio, Dpto. General San Martín. Radio municipal. Modificación. Proyecto de ley (6733/E/10) del Poder Ejecutivo4758

XXVIII.- Despachos de comisión4758

4.- A) EPEC. Funcionamiento, controles y multas aplicadas por el ERSeP. Período 2001-2009. Pedido de informes. Proyecto de resolución (4473/L/10) del legislador Albarracín, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4758

B) EPEC. Crisis energética en enero y febrero de 2010. Demanda a Transener S.A. y reclamos de usuarios. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5008/L/10) de los legisladores Birri y Varas, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4758

C) EPEC. Administración de fondos recaudados para la construcción de la "Obra Estación Transformadora Arroyo Cabral, Obras Asociadas y Obras Complementarias". Pedido de informes. Proyecto de resolución (5132/L/10) del legislador Bischoff, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4758

D) EPEC. Planta transformadora de la Comuna de San Antonio de Arredondo. Estudio de impacto ambiental para la instalación. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5935/L/10) del legislador Ruiz, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4758

E) Organizaciones no gubernamentales. Solicitud de información pública, por Ley N° 8803. Falta de respuesta. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5250/L/10) del legislador Ruiz, con moción de preferencia.

Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4758

F) Policía Caminera. Estadísticas de controles de tránsito e infracciones. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5556/L/10) del legislador Bischoff, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4758

G) Ministerio de Educación. Cobertura de cargos del Nivel Medio para el año 2011. Convocatoria. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6011/L/10) de la legisladora Rodríguez, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4758

H) Escuelas públicas y privadas. Niveles inicial, primario y secundario. Ausentismo de docentes por carpetas médicas. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5681/L/10) de los legisladores Rossi y Giaveno, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4758

I) Deserción escolar. Índices de los últimos seis años. Pedido de informes. Proyecto de resolución (4644/L/10) de los legisladores Rossi, Giaveno, Pozzi y Calvo Aguado, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4758

J) Escuela Nicolás Rodríguez Peña, en Ciénaga de Brito, Dpto. Cruz del Eje. Problemática edilicia. Pedido de informes. Proyecto de resolución (4346/L/09) de los legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini, Lizzul, Díaz y Coria, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4758

K) Escuelas públicas. Mobiliario. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5035/L/10) de los legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini, Birri, Díaz y Varas, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4758

L) Escuela de Bellas Artes Luis Tessandori, en Villa Dolores. Contrato de locación del inmueble. Deuda en el período 2008-2010. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5502/L/10) de los legisladores Gudiño, Cargnelutti, Pozzi, Calvo Aguado, Cugat, Giaveno, Rossi, Poncio y Dressino, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4758

M) Escuela Ceferino Namuncurá, de Pampa de Achala. Vehículo Ford Ranger. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5719/L/10) de la legisladora Rodríguez, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4758

N) Instituciones educativas de gestión estatal y privada de Nivel Inicial. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6267/L/10) de los legisladores Rossi y Cugat, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4758

Ñ) Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Diversos aspectos. Convocatoria a los Ministros de Finanzas y de Obras y Servicios

Públicos para informar. Proyecto de resolución (6362/L/10) de los legisladores Seculini, Lizzul, Rodríguez y Varas, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4758

O) Secretaría de Educación. Memorando 11/10 sobre la jornada de debate del anteproyecto de Ley de Educación Provincial. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6395/L/10) de la legisladora Rodríguez, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4759

P) Ministerio de Educación de la Provincia. Matriculación de alumnos repitentes. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6396/L/10) de la legisladora Rodríguez, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4759

Q) Colonia Santa María. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5733/L/10) de los legisladores Rossi, Gudiño, Pozzi, Poncio, Calvo Aguado, Matar, Dressino y Cargnelutti, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4759

R) Hospitales públicos provinciales. Compra de insumos y detalle de equipamiento tecnológico. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5752/L/10) de los legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Díaz, Seculini y Rivero, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4759

S) Hospitales públicos provinciales. Cantidad de médicos y enfermeras. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5753/L/10) de los legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Díaz, Seculini y Rivero, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4759

T) Ley 9227, de adhesión a la Ley Nacional Nº 25.929 (incorporación del parto humanizado al Programa Médico Obligatorio). Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5773/L/10) de los legisladores Rivero, Asbert y Olivero, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4759

U) Enfermedad del Sarampión en territorio provincial. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5916/L/10) del legislador Varas, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4759

V) Pacto Sanitario para el Fortalecimiento de la Salud Pública Provincial. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5939/L/10) de los legisladores Lizzul, Rodríguez, Jiménez y Serra, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4759

W) División Bomberos de la Policía provincial. Adquisición de un vehículo para combate de incendios en altura. Licitación Pública Nacional e Internacional. Pedido de informes. Proyecto de resolución (4471/L/10) de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4759

X) PAICOR. Control de alimentos entregados por proveedores. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5443/L/10) de los legisladores Díaz, Rodríguez y Serna, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4759

Y) Subsidio de hogarización fijado por la APROSS desde el año 2008. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6147/L/10) de los legisladores Gudiño, Calvo Aguado, Poncio, Cugat, Matar, Pozzi, Cargnelutti, Razzetti, Rossi, Giaveno y Dressino, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4759

Z) Prevención y lucha contra el narcotráfico. Convocatoria al Sr. Ministro de Gobierno para informar. Proyecto de resolución (4614/L/10) de los legisladores Dressino, Cugat, Rossi, Pozzi, Calvo Aguado y Giaveno, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4759

A') Programa "Banco de la Gente". Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5045/L/10) de los legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio, Dressino, Cugat, Matar y Nicolás, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4759

B') Zona de Traslasierra. Producción de ladrillos. Intervenciones y estudios para preservar el medio ambiente. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5348/L/10) de los legisladores Gudiño, Cargnelutti, Poncio, Cugat, Giaveno, Matar, Pozzi, Calvo Aguado, Nicolás, Rossi y Dressino, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4759

C') Fondo para la Prevención de la Violencia Familiar, Ley 9505. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5465/L/10) de los legisladores Pozzi, Cugat, Calvo Aguado, Cargnelutti, Giaveno, Dressino, Poncio, Rossi, Gudiño, Matar y Nicolás, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4759

D') Personas jóvenes o adultas discapacitadas que no pueden convivir con su grupo familiar. Medidas de contención adoptadas. Pedido de informes. Proyecto de resolución (4504/L/10) de los legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti, Gudiño, Pozzi y Razzetti, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4759

E') PAICOR. Prestación del servicio en Río Cuarto. Pedido de informes. Proyecto de resolución (4840/L/10) de los legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti, Matar, Poncio, Dressino y Rossi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4759

F') Programa "Córdoba con Ellas". Implementación. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5331/L/10) de los legisladores Calvo Aguado y Pozzi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4759

G') Programa de Servicios a Personas con Discapacidad (PROSAD). Pedido de

Informes. Proyecto de resolución (5625/L/10) de los legisladores Razzetti y Cugat, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4759

H') Fundación FUNCAVI. Otorgamiento de subsidios. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5946/L/10) de los legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Razzetti, Rossi, Cargnelutti y Giaveno, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4759

I') Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos y Programas de Obras de Infraestructura para Municipios y Comunas y Mancomunidades Regionales. Asignaciones presupuestarias en el período 2009-2010. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6121/L/10) de los legisladores Seculini y Lizzul, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4759

J') Fondo 1,5 % de Ayuda Financiera a Municipalidades y Comunas (ATP). Asignaciones presupuestarias en el período 2009-2010. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6122/L/10) de los legisladores Seculini y Lizzul, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4759

K') Aspirantes de la Escuela de Suboficiales y Agentes General Manuel Belgrano. Relación con la Asociación Mutual Policial 16 de Noviembre y obligatoriedad de venta de rifas. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6221/L/10) de la legisladora Olivero, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4759

L') Aspirantes de la Escuela de Suboficiales y Agentes General Manuel Belgrano. Haberes, descuento para la APROSS y provisión de uniformes. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6222/L/10) de la legisladora Olivero, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4759

M') Registro Civil y Capacidad de las Personas. Objeciones para casar parejas del mismo sexo. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6092/L/10) del legislador Birri, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4759

N') Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Comuna de Villa Ciudad de América, Dpto. Santa María. Aportes provinciales. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6115/L/10) del legislador Maiocco, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4759

Ñ') Escuela Trinidad Moreno (IPEM Nº 147), en Bº Yofre Sur, ciudad de Córdoba. Estado del campo de deportes. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5249/L/10) de los legisladores Poncio, Cugat, Cargnelutti, Pozzi, Rossi y Matar, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4759

O') Ley Nº 9685, sobre perros potencialmente peligrosos. Reglamentación. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6262/L/10) de los legisladores Giaveno,

Rossi, Gudiño, Razzetti y Calvo Aguado, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4760

P') Entrega de netbooks y capacitación docente en materia informática. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6298/L/10) de los legisladores Poncio, Pozzi, Cugat, Giaveno, Cargnelutti y Calvo Aguado, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4760

Q') Insecto flebótomo trasmisor de la Leishmaniasis. Rastreo y acciones del Ministerio de Salud. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6418/L/10) de los legisladores Poncio, Calvo Aguado, Gudiño, Pozzi, Nicolás, Dressino, Giaveno, Cugat, Rossi y Matar, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4760

R') Radar Doppler para detección temprana de fenómenos meteorológicos. Incorporación. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6515/L/10) del legislador Bischoff. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4760

5.- A) EPEC. Cargo fijo para concluir la obra Nueva Central de Pilar. Establecimiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5563/L/10) de la legisladora Lizzul, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión para su archivo. Se considera y aprueba.....4766

B) Explotación de fluorita en el Dpto. Calamuchita. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6029/L/10) de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical. Moción de vuelta a comisión para su archivo. Se considera y aprueba4766

6.- A) EPEC. Facturación, período enero 2010. Pedido de informes. Proyecto de resolución (4828/L/10) del legislador Bischoff, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4767

B) EPEC. Desempeño ante la crisis de suministro eléctrico. Pedido de informes. Proyecto de resolución (4451/L/10) del legislador Bischoff, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4767

C) EPEC. Transformadores, estación transformadora adicional, planes de contingencia, compensaciones por corte del suministro, previsión e inversión. Pedido de informes. Proyecto de resolución (4570/L/10) de los legisladores Lizzul, Birri, Díaz, Jiménez, Rodríguez, Seculini, Coria, Bischoff y Varas, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4767

D) Obra "Estación Transformadora Arroyo Cabral y obras asociadas". Financiación, fecha de finalización y presupuesto actualizado. Pedido de informes. Proyecto de resolución (4474/L/10) de los legisladores Birri, Seculini y Rodríguez, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4767

E) Empresa AGIMED SRL. Compras realizadas por la Provincia en el período 2007-2010. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5347/L/10) de los legisladores

Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Birri, Rivero y Ruiz, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4767

F) Ley 9331, Compre Córdoba. Aplicación. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5656/L/10) de la legisladora Lizzul, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4767

G) Instituciones educativas públicas y privadas de los niveles primario y secundario. Estado edilicio. Pedido de informes. Proyecto de resolución (4920/L/10) de los legisladores Rossi, Pozzi, Matar, Calvo Aguado, Cugat, Cargnelutti y Giaveno, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4767

H) IPEM Nº 268, ex Colegio Nacional Deán Funes, en Bº Nueva Córdoba. Explotación de dos canchas de fútbol. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5265/L/10) del legislador Ruiz, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4767

I) Escuela Padre José Gabriel Brochero, en Colonia La Severina, Balnearia, Dpto. San Justo. Problemas de falta de agua. Solución. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5363/L/10) de los legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Matar y Poncio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4767

J) Docentes. Salarios adeudados y pago de un anticipo. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5375/L/10) de la legisladora Rodríguez, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4767

K) Preceptor de escuelas. Cursos, requisitos para el nombramiento y funciones. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5764/L/10) de los legisladores Rossi, Giaveno, Pozzi, Poncio, Dressino y Calvo Aguado, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4767

L) Entrega de netbooks. Escuelas beneficiadas y capacitación de profesores y docentes. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5765/L/10) de los legisladores Rossi, Giaveno, Pozzi, Poncio, Dressino y Calvo Aguado, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4767

M) Ley 5326, de Funcionamiento de los Institutos Privados de Enseñanza. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5767/L/10) de la legisladora Coria, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4767

N) Educación secundaria provincial. Planes de Mejora en la provincia de Córdoba, período 2010 y 2011. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (4619/L/10) de los legisladores Coria, Rodríguez y Birri, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4767

Ñ) Ley 8784, Art. 3º, sobre formularios especiales para recetarios de medicamentos.

Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5083/L/10) de los legisladores Cugat, Dressino, Pozzi, Rossi, Poncio, Calvo Aguado, Matar, Cargnelutti, Giaveno, Gudiño y Razzetti, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4767

O) Salud Pública. Obras de infraestructura y nombramiento de personal en los años 2009-2010. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5628/L/10) de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4767

P) Hospitales públicos. Personal de equipos de salud. Categorizaciones, carrera hospitalaria, calificación anual y reconocimiento económico en cargos de conducción según Ley 7625. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5710/L/10) de los legisladores Lizzul y Jiménez, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4767

Q) Sistema de derivación de pacientes. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5754/L/10) de los legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Díaz, Seculini y Rivero, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4767

R) Salud mental. Atención médica a personas con trastornos mentales. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5758/L/10) de la legisladora Lizzul, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4767

S) Sra. Viviana Farías, afiliada a la APROSS. Fallecimiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5770/L/10) de los legisladores Jiménez, Rodríguez y Díaz, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4767

T) Personal paramédico del 136. Antigüedad y capacitación. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5088/L/10) de los legisladores Cugat, Poncio, Dressino, Pozzi, Razzetti, Matar, Gudiño, Calvo Aguado y Rossi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4767

U) Ciudad de Río Cuarto. Detención de un menor por no identificarse. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5908/L/10) del legislador Birri, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4767

V) Hospital Regional Pasteur, en Villa María, Dpto. Gral. San Martín. Incorporación de un tomógrafo y de un neurocirujano. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6139/L/10) de los legisladores Poncio, Calvo Aguado, Gudiño, Rossi, Matar, Cugat y Dressino, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4767

W) Impuesto Inmobiliario Rural. Recaudación Ministerio de Finanzas. Pedido de informes. Proyecto de resolución (4666/L/10) del legislador Varas, con moción de preferencia.

Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4767

X) Predio del ex Molino Centenario, en Córdoba. Compra. Pedido de informes. Proyecto de resolución (4776/L/10) del legislador Varas, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4767

Y) PAICOR. Proveedores, Fondo para la Asistencia e Inclusión Social y beneficiarios. Pedido de informes. Proyecto de resolución (4777/L/10) del legislador Varas, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4768

Z) Ley Nº 9652, Autorización de endeudamiento para obras de gasificación. Financiamiento, grado de avance de la ejecución de los gasoductos y procesos licitatorios. Pedido de informes. Proyecto de resolución (4782/L/10) de los legisladores Coria y Birri, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4768

A') PAICOR. Empresa Aliser SA, proveedora en Río Cuarto. Modalidad de contratación y uso de las instalaciones del viejo Hospital de Río Cuarto. Pedido de informes. Proyecto de resolución (4854/L/10) del legislador Varas, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4768

B') Impuesto al Automotor. Cobro judicial. Pedido de informes. Proyecto de resolución (4902/L/10) de los legisladores Pozzi, Nicolás, Poncio, Gudiño, Cargnelutti, Giaveno, Calvo Aguado, Dressino, Matar y Rossi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4768

C') Programa PAICOR en Bell Ville. Posible atraso en el pago a proveedores. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5289/L/10) del legislador Varas, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4768

D') Plan Vida Nueva. Módulos alimentarios y cantidad de beneficiarios. Pedido de informes. Proyecto de resolución (4919/L/10) de los legisladores Rossi, Giaveno, Cargnelutti, Matar, Pozzi y Cugat, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4768

E') PAICOR. Posible atraso en el pago a proveedores en las localidades de Sampacho, Coronel Moldes y Bulnes. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5219/L/10) del legislador Varas, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4768

F') Fondo de Consolidación y Gestión de Recupero y Cobro de Acreencias No Tributarias del Estado Provincial, a cargo de la empresa Kolektor. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5378/L/10) de los legisladores Lizzul, Rodríguez y Jiménez, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4768

G') Centro Cívico del Bicentenario. Financiamiento de la obra. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5446/L/10) del legislador Varas, con moción de preferencia.

Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4768

H') Modificación de radios municipales y comunales. Situación impositiva de contribuyentes afectados. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5735/L/10) de los legisladores Giaveno, Razzetti, Poncio, Matar, Gudiño, Rossi, Pozzi, Cargnelutti y Nicolás, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4768

I') Escuelas públicas provinciales. Recursos humanos y materiales. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5837/L/10) de los legisladores Rossi y Giaveno, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4768

J') Programa "Internet para Educar". Pedido de informes. Proyecto de resolución (5858/L/10) del legislador Varas, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4768

K') Banco Provincia de Córdoba, Sucursal Huinca Renancó. Extensión de mostrador o cajero automático en Italó. Instalación. Solicitud. Proyecto de resolución (5861/L/10) del legislador Razzetti, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4768

L') APROSS. Estados contables períodos 2006-2009. Presentación a la Legislatura. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5988/L/10) del legislador Varas, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4768

M') Gobierno de Córdoba y Caja de Jubilaciones. Deudas con la APROSS. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5989/L/10) del legislador Varas, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4768

N') Decreto 660, Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5799/L/10) de los legisladores del bloque del Frente Cívico y Social, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4768

Ñ') Ingresos del Gobierno. Subcuenta "Otras Transferencias Corrientes" de la cuenta Transferencias Corrientes. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5252/L/10) de los legisladores Pozzi, Matar, Dressino, Gudiño, Cugat, Calvo Aguado, Cargnelutti, Poncio, Giaveno y Rossi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4768

O') Máquinas tragamonedas o slots. Instalación y explotación en la Provincia. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6161/L/10) del legislador Varas, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4768

P') "Impuesto a la valija". Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6192/L/10) de la legisladora Lizzul, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4768

Q') Imputados en causa por estafa a una ART. Cargo y función que desempeñan en el

Gobierno provincial y actuaciones administrativas. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5860/L/10) del legislador Jiménez, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4768

R') IPEM Nº 269, en Villa Unión. Estado edilicio. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5248/L/10) de los legisladores Poncio, Cugat, Cargnelutti, Pozzi, Rossi y Matar, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4768

S') Escuela Josefina Antonia Vidal, en paraje Balde de la Mora, Dpto. San Alberto. Posible cierre. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6314/L/10) de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4768

T') Boncor. Distintas emisiones. Pedido de Informes. Proyecto de resolución (6347/L/10) del legislador Varas, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4768

U') Ministerio de Finanzas. Vinculación con el Consejo Provincial de Geólogos. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6382/L/10) del legislador Birri, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4768

V') Revista Educando, editada por la Dirección del IPEM 281, en Río Cuarto. Nota firmada por el director. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6414/L/10) de los legisladores Birri, Rodríguez, Seculini y Lizzul, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4768

W') Mortalidad infantil en los Dptos. Colón, General Roca, General San Martín, Minas, Río Seco, San Alberto y Tercero Arriba. Acciones para la disminución. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6431/L/10) del legislador Razzetti, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4768

X') Hospital Dr. José Antonio Ceballos, en Bell Ville. Servicio de Ginecología. Posible cierre. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6502/L/10) de los legisladores Jiménez, Lizzul y Rodríguez. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4768

Y') Ministerio de Finanzas. Montos abonados a la firma Kolektor en el período 2007-2010. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6548/L/10) del legislador Varas. Moción de vuelta a comisión con preferencia. Se considera y aprueba4768

7.- Sistema Educativo Provincial. Organización y administración general. Regulación. Ley Provincial 8113. Derogación. Proyecto de ley (6480/E/10) del Poder Ejecutivo, con despacho de comisión. Se considera y aprueba, en general y en particular, con modificaciones.4776

8.- Asuntos entrados a última hora:

XXIX.- Muestra "Fotoapuntes", en la Legislatura de Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (6751/L/10) de la legisladora Bressan4923

XXX.- Libro "Un Pasito Más", de Anabella Llerena. Publicación. Interés legislativo. Proyecto de declaración (6756/L/10) de los legisladores Monier y Feraudo4923

XXXI.- Ruta Nacional Nº 38. Desmalezamiento de banquetas y demarcación horizontal. Solicitud al PEN. Proyecto de declaración (6757/L/10) de la legisladora Narducci.....4923

XXXII.- Parroquia San Isidro Labrador, en Portaña, Dpto. San Justo. Centenario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (6763/L/10) de los legisladores Senn y Passerini4923

Del Poder Ejecutivo

XXXIII.- Ruta Provincial E-53, tramo Ciudad de Córdoba-Salsipuedes. Denominación como "Autovía del Bicentenario Agustín Tosco". Proyecto de ley (6762/E/10) del Poder Ejecutivo.....4923

XXXIV.- Peticiones y asuntos particulares.....4923

XXXV.- Despachos de comisión4923

9.- A) Club de Rugby Los Cuervos de Bell Ville. Obtención del Subcampeonato del Torneo Ascenso y una plaza en el Torneo Regional del Centro. Beneplácito y felicitación. Proyecto de declaración (6311/L/10) del legislador Carbonetti. Tratamiento en los términos del Art. 157. Se considera y aprueba4924

B) Localidad de Canals, Dpto. Unión. Fiesta Patronal de Exaltación de la Santa Cruz. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (6312/L/10) del legislador Carbonetti. Tratamiento en los términos del Art. 157. Se considera y aprueba4924

C) Piloto Fabián Moscatello. Obtención del Título de Campeón Argentino de Velocidad, en la categoría Superbike de Motociclismo. Beneplácito y felicitación. Proyecto de declaración (6313/L/10) del legislador Carbonetti. Tratamiento en los términos del Art. 157. Se considera y aprueba4924

D) Primera Liga de Fútbol Femenino de Bell Ville, Dpto Unión. Beneplácito. Proyecto de declaración (6328/L/10) del legislador Carbonetti. Tratamiento en los términos del Art. 157. Se considera y aprueba4924

E) Día Internacional de la Solidaridad Humana. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (6544/L/10) de la legisladora Narducci. Tratamiento en los términos del Art. 157. Se considera y aprueba4924

F) Agrupación Gaucha "Santos Guayama", en Villa Dolores. 7º Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (6611/L/10) del legislador Gudiño. Tratamiento en los términos del Art. 157. Se considera y aprueba4924

G) Dra. Raquel Dodelson de Kremer. Reconocimiento otorgado por B'nai B'rith Internacional, Regional Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (6723/L/10) de la legisladora Chiofalo. Tratamiento en los términos del Art. 157. Se considera y aprueba4924

H) Libro "Caracol Adentro", de Mildre Ambroggio. Publicación. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (6737/L/10) del legislador Jiménez. Tratamiento en los términos del Art. 157. Se considera y aprueba4924

I) 10º Campeonato Comercial de Fútbol

PODER LEGISLATIVO – 49ª REUNION -15-XII-2010

de Verano 2010, en Pincén, Dpto. General Roca. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (6738/L/10) del legislador Pagliano. Tratamiento en los términos del Art. 157. Se considera y aprueba4924

J) XXV Encuentro Nacional de Fútbol Infantil "Nuestro Futuro", en Villa Huidobro, Dpto. General Roca. Proyecto de declaración (6739/L/10) del legislador Pagliano. Tratamiento en los términos del Art. 157. Se considera y aprueba4924

K) Geóloga María Jérica Giuliano Albo. Premio Novel Profesional. Obtención en el X Congreso de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo, en Caracas, Venezuela. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (6746/L/10) de las legisladoras Feraudo, Valarolo y Bressan. Tratamiento en los términos del Art. 157. Se considera y aprueba4924

L) Parroquia San Isidro Labrador, en Porteña, Dpto. San Justo. Centenario. Adhesión y beneplácito. Proyectos de declaración compatibilizados (6747 y 6763/L/10) de las legisladoras Feraudo, Valarolo y Bressan y de los legisladores Senn y Passerini, respectivamente. Tratamiento en los términos del Art. 157. Se considera y aprueba4924

M) Centro Oftalmológico Dr. Ernesto Guevara. 1º Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (6748/L/10) de la legisladora Chiofalo. Tratamiento en los términos del Art. 157. Se considera y aprueba4924

N) Muestra "Fotoapuntes", en la Legislatura de Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (6751/L/10) de la legisladora Bressan. Tratamiento en los términos del Art. 157. Se considera y aprueba4924

Ñ) Libro "Un Pasito Más", de Anabella Llerena. Publicación. Interés legislativo. Proyecto de declaración (6756/L/10) de los legisladores Monier y Feraudo. Tratamiento en los términos del Art. 157. Se considera y aprueba4924

O) Ruta Nacional N° 38. Desmalezamiento de banquetas y demarcación horizontal. Solicitud al PEN. Proyecto de declaración (6757/L/10) de la legisladora Narducci. Tratamiento en los términos del Art. 157. Se considera y aprueba4924

10.- A) Caminos de las Sierras S.A. Convenio de Compraventa de Acciones y Addenda, entre la Provincia y la empresa Delta S.A. Aprobación. Proyecto de ley (6652/E/10) del Poder Ejecutivo, con despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se considera y aprueba, en general y en particular4935

B) Caminos de las Sierras S.A. Convenio de Compraventa de Acciones y Addenda, entre la Provincia y la empresa Codi S.A. Aprobación. Proyecto de ley (6653/E/10) del Poder Ejecutivo, con despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se considera y aprueba, en general y en particular4935

11.- Escalafón del Personal Científico y Tecnológico de la Provincia. Establecimiento. Ley 8453. Derogación. Proyecto de ley (6535/E/10) del Poder Ejecutivo. Moción de preferencia. Se considera y aprueba5017

12.- Señora María Belén Cocciolo. Cargo de Secretaria Técnica Parlamentaria. Renuncia.

Nota (6766/N/10). Se considera y aprueba.....5017

–En la ciudad de Córdoba, a 15 días del mes de diciembre de 2010, siendo la hora 11 y 17:

-1-

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Busso).– Con la presencia de 57 señores legisladores, declaro abierta la 45º sesión ordinaria del 132º período legislativo.

Invito al señor legislador Roberto Birri a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Birri procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2-

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Sr. Presidente (Busso).– Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la versión taquigráfica de la sesión anterior.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).– Aprobada.

-3-

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Busso).– Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada legislador en sus bancas con un ejemplar de los mismos, pudiendo solicitar el giro a otras comisiones o la inclusión de coautorías en los respectivos proyectos.

Tiene la palabra la señora legisladora Chiofalo.

Sra. Chiofalo.– Señor presidente: solicito que se incluya como coautor del proyecto de declaración 6748/L/10 al legislador Roberto Birri.

Sr. Presidente (Busso).– Así se hará, señora legisladora.

Tiene la palabra el legislador Cugat.

Sr. Cugat.– Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora al proyecto 6754/L/10 a la legisladora Ana María Dressino.

Sr. Presidente (Busso).– Así se hará, señor legislador.

I

COMUNICACIONES OFICIALES

6743/N/10

Nota del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia:

Remitiendo informe año 2010 conforme lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 26.061 y la Ley Provincial Nº 9396.

A la Comisión de Solidaridad

6744/N/10

Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el archivo, de conformidad con lo prescripto en el artículo 111 del Reglamento Interno, Notas Nros. 3391, 3509, 3624, 3650 y 3651/N/09.

Al Archivo

6745/N/10

Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el archivo, de conformidad con lo prescripto en el artículo 111 del Reglamento Interno, proyectos de Ley, de Resolución y de Declaración de los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.

Al Archivo

6749/N/10

Nota del Poder Judicial: Remitiendo copia de nota dirigida al Sr. Ministro de Gobierno manifestando la preocupación de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia referida a la delicada situación planteada para acceder al mercado laboral a jóvenes de 16 a 18 años con antecedentes penales.

A la Comisión de Solidaridad

PROYECTOS DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II

6717/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques de la Unión Cívica Radical, del Frente Cívico y Social y de Unión por Córdoba, por el que dispone la realización de un homenaje a las autoridades y plantel futbolístico del Club Atlético San Lorenzo de Córdoba, por consagrarse campeones del Torneo de Primera División "A" de la Liga Cordobesa de Fútbol.

A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación

III

6719/L/10

Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Bressan, Gamaggio Sosa y Olivero, por el que modifica la planilla anexa del artículo 179 de la Ley N° 6485, de remuneraciones del personal de la administración central y organismos descentralizados del estado provincial.

A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales

IV

6722/L/10

Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Coria, Olivero, Birri y Asbert, por el cual insta a los representantes de la Provincia en el Congreso Nacional, a acompañar la elaboración y sanción de un proyecto de ley que frene los desalojos y declare la función social de la tierra, tal como lo promueven organizaciones campesinas e indígenas.

A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

V

6723/L/10

Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual expresa beneplácito por el reconocimiento otorgado por B'nai B'rith Internacional Regional Córdoba, a la Dra. Raquel Dodelson de Kremer por sus investigaciones de Enfermedades Metabólicas Hereditarias.

A la Comisión de Salud Humana

VI

6734/L/10

Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi y Dressino, por el cual expresa beneplácito por el nombramiento del Dr. Armando Segundo Andruet (h) como Consejero del Consejo Directivo de la Red de Bioética de la UNESCO.

A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

VII

6735/L/10

Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Frossasco, por el cual expresa beneplácito por el destacado desempeño de alumnos de la Escuela Bartolomé Mitre de la ciudad de Villa Nueva en la Feria Nacional de Ciencias y Tecnologías, desarrollada los días 6 y 7 de diciembre en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

VIII

6736/L/10

Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Frossasco, por el cual expresa beneplácito por el 1º puesto en la modalidad Educación Especial-Área Tecnologías, obtenido por alumnos de la Escuela Especial Pablo VI de la ciudad de Villa Nueva en la Feria Nacional de Ciencias y Tecnologías, desarrollada los días 6 y 7 de diciembre en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

IX

6737/L/10

Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el cual expresa beneplácito por la publicación del libro "Caracol Adentro", de la escritora cordobesa Mildre Ambroggio.

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

X

6738/L/10

PODER LEGISLATIVO – 49ª REUNION -15-XII-2010

Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al “10º Campeonato Comercial de Fútbol de Verano 2010”, a desarrollarse del 18 de diciembre al 18 de enero de 2011 en la localidad de Pincén, departamento General Roca.

A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación

XI

6739/L/10

Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al XXV Encuentro Nacional de Fútbol Infantil “Nuestro Futuro”, a desarrollarse del 17 al 19 de diciembre en la localidad de Villa Huidobro, Departamento General Roca.

A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación

XII

6740/L/10

Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno y Pozzi, por el cual apoya y acompaña la petición del Sindicato de Recaudadores y Custodios de Valores y Afines de Córdoba de reconocimiento de su inscripción gremial.

A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales

XIII

6741/L/10

Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Valarolo, por el que ratifica la vigencia de la Ley Nº 9724 -de Suspensión de ejecuciones de sentencia que provean la subasta de vivienda única-; modificando el artículo 3º de la misma norma legal estableciendo que la misma regirá hasta el 31 de diciembre de 2012.

A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

XIV

6742/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado los Legisladores Coria, Birri y Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el emprendimiento inmobiliario Puerto del Águila, Club-Country Náutico, Los Molinos- Córdoba.

A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

XV

6746/L/10

Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Valarolo y Bressan, por el cual expresa beneplácito por el reconocimiento “Novel Profesional” otorgado a la geóloga sanfrancisqueña María Jélica Giuliano Albo, en el marco del X Congreso de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo, realizado en el mes de octubre en la ciudad de Caracas, Venezuela.

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

XVI

6747/L/10

Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Valarolo y Bressan, por el cual adhiere al Centenario de la Parroquia “San Isidro Labrador” de la localidad de Porteña, departamento San Justo, a celebrarse el 17 de diciembre.

A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunes

XVII

6748/L/10

Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual adhiere al 1º aniversario de la inauguración del Centro Oftalmológico “Dr. Ernesto Guevara”, a celebrarse el 15 de diciembre en la ciudad de Córdoba.

A la Comisión de Salud Humana

XVIII

6750/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la compensación de deudas recíprocas entre la Provincia y la Caja de Jubilaciones de Córdoba en el año 2010.

PODER LEGISLATIVO – 49ª REUNION -15-XII-2010

A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda

DEL PODER EJECUTIVO

XIX

6725/E/10

Proyecto de Ley : Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba los Convenios Nros. 60, 61, 62, 63, 64 y 65/10 celebrados entre la Provincia y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, con el objeto de desarrollo sostenido para la oferta de productos ganaderos y agropecuarios; ayuda a productores algodoneros y otros afectados por la sequía; mejoramiento de caminos del sector lácteo y desarrollo del Plan Estratégico Agroalimentario 2010 -2016, respectivamente, ratificando el Decreto Nº 1701/10 de Autoridad de Aplicación de estas acciones.

A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

XX

6726/E/10

Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el cual adhiere la Provincia a las Leyes Nacionales Nros. 24.449 y 26.363 - Ley Nacional de Tránsito y Ley de creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial-, respectivamente, en todo lo que no se opongan a la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 (TO 2004) y sus modificatorias.

A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

XXI

6727/E/10

Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de la localidad de Viamonte, departamento Unión.

A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

XXII

6728/E/10

Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de la localidad de Monte Leña, departamento Unión.

A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

XXIII

6729/E/10

Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de la localidad de Arroyo Algodón, departamento General San Martín.

A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

XXIV

6730/E/10

Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio comunal de la localidad de Punta del Agua, departamento Tercero Arriba.

A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

XXV

6731/E/10

Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de la localidad de Ordóñez, departamento Unión.

A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

XXVI

6732/E/10

Proyecto de Ley : Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio comunal de la localidad de Villa Parque Siquiman, departamento Punilla.

A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

XXVII

6733/E/10

Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de la localidad de Tío Pujio, departamento General San Martín.

A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

XXVIII
DESPACHOS DE COMISIÓN

Despachos de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables

1)6646/L/10

Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, adhiriendo a la 19º Fiesta Provincial de la Avicultura, a realizarse del 14 al 16 de enero de 2011, en la localidad de Santa María de Punilla.

Al Orden del Día

2)6682/L/10

Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Pozzi, Giaveno, Vega, Passerini, Rosso, Carreras y Cuello, adhiriendo al petitorio de fecha 30 de noviembre de 2010 por el cual los Sres. Ministros de Agricultura de las Provincia de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires han solicitado al Sr. Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, se avance en la apertura de las exportaciones de la cosecha de trigo y en la instrumentación del Registro de Exportación Automático para el treinta y cinco por ciento (35 %) de la cosecha.

Al Orden del Día

-4-

A) EPEC. FUNCIONAMIENTO, CONTROLES Y MULTAS APLICADAS POR EL ERSEP. PERÍODO 2001-2009. PEDIDO DE INFORMES.

B) EPEC. CRISIS ENERGÉTICA EN ENERO Y FEBRERO DE 2010. DEMANDA A TRANSENER S.A. Y RECLAMOS DE USUARIOS. PEDIDO DE INFORMES.

C) EPEC. ADMINISTRACIÓN DE FONDOS RECAUDADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA "OBRA ESTACIÓN TRANSFORMADORA ARROYO CABRAL, OBRAS ASOCIADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS". PEDIDO DE INFORMES.

D) EPEC. PLANTA TRANSFORMADORA DE LA COMUNA DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA INSTALACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.

E) ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA, POR LEY Nº 8803. FALTA DE RESPUESTA. PEDIDO DE INFORMES.

F) POLICÍA CAMINERA. ESTADÍSTICAS DE CONTROLES DE TRÁNSITO E INFRACCIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

G) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. COBERTURA DE CARGOS DEL NIVEL MEDIO PARA EL AÑO 2011. CONVOCATORIA. PEDIDO DE INFORMES.

H) ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS. NIVELES INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO. AUSENTISMO DE DOCENTES POR CARPETAS MÉDICAS. PEDIDO DE INFORMES.

I) DESERCIÓN ESCOLAR. ÍNDICES DE LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS. PEDIDO DE INFORMES.

J) ESCUELA NICOLÁS RODRÍGUEZ PEÑA, EN CIÉNAGA DE BRITO, DPTO. CRUZ DEL EJE. PROBLEMÁTICA EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.

K) ESCUELAS PÚBLICAS. MOBILIARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

L) ESCUELA DE BELLAS ARTES LUIS TESSANDORI, EN VILLA DOLORES. CONTRATO DE LOCACIÓN DEL INMUEBLE. DEUDA EN EL PERÍODO 2008-2010. PEDIDO DE INFORMES.

M) ESCUELA CEFERINO NAMUNCURÁ, DE PAMPA DE ACHALA. VEHÍCULO FORD RANGER. PEDIDO DE INFORMES.

N) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN ESTATAL Y PRIVADA DE NIVEL INICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

Ñ) EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. CONVOCATORIA A LOS MINISTROS DE FINANZAS Y DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.

O) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. MEMORANDO 11/10 SOBRE LA JORNADA DE DEBATE DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.

P) MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA. MATRICULACIÓN DE ALUMNOS REPITENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

Q) COLONIA SANTA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

R) HOSPITALES PÚBLICOS PROVINCIALES. COMPRA DE INSUMOS Y DETALLE DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.

S) HOSPITALES PÚBLICOS PROVINCIALES. CANTIDAD DE MÉDICOS Y ENFERMERAS. PEDIDO DE INFORMES.

T) LEY 9227, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 25.929 (INCORPORACIÓN DEL PARTO HUMANIZADO AL PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO). CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.

U) ENFERMEDAD DEL SARAMPION EN TERRITORIO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

V) PACTO SANITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

W) DIVISIÓN BOMBEROS DE LA POLICÍA PROVINCIAL. ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA COMBATE DE INCENDIOS EN ALTURA. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL. PEDIDO DE INFORMES.

X) PAICOR. CONTROL DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR PROVEEDORES. PEDIDO DE INFORMES.

Y) SUBSIDIO DE HOGARIZACIÓN FIJADO POR LA APROSS DESDE EL AÑO 2008. PEDIDO DE INFORMES.

Z) PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.

A') PROGRAMA "BANCO DE LA GENTE". DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

B') ZONA DE TRASLASIERRA. PRODUCCIÓN DE LADRILLOS. INTERVENCIONES Y ESTUDIOS PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE. PEDIDO DE INFORMES.

C') FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, LEY 9505. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

D') PERSONAS JÓVENES O ADULTAS DISCAPACITADAS QUE NO PUEDEN CONVIVIR CON SU GRUPO FAMILIAR. MEDIDAS DE CONTENCIÓN ADOPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.

E') PAICOR. PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.

F') PROGRAMA "CÓRDOBA CON ELLAS". IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.

G') PROGRAMA DE SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PROSAD). PEDIDO DE INFORMES.

H') FUNDACIÓN FUNCAVI. OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS. PEDIDO DE INFORMES.

I') FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS Y MANCOMUNIDADES REGIONALES. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL PERÍODO 2009-2010. PEDIDO DE INFORMES.

J') FONDO 1,5 % DE AYUDA FINANCIERA A MUNICIPALIDADES Y COMUNAS (ATP). ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL PERÍODO 2009-2010. PEDIDO DE INFORMES.

K') ASPIRANTES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y AGENTES GENERAL MANUEL BELGRANO. RELACIÓN CON LA ASOCIACIÓN MUTUAL POLICIAL 16 DE NOVIEMBRE Y OBLIGATORIEDAD DE VENTA DE RIFAS. PEDIDO DE INFORMES.

L') ASPIRANTES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y AGENTES GENERAL MANUEL BELGRANO. HABERES, DESCUENTO PARA LA APROSS Y PROVISIÓN DE UNIFORMES. PEDIDO DE INFORMES.

M') REGISTRO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS. OBJECIONES PARA CASAR PAREJAS DEL MISMO SEXO. PEDIDO DE INFORMES.

N') CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA COMUNA DE VILLA CIUDAD DE AMÉRICA, DPTO. SANTA MARÍA. APORTES PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.

Ñ') ESCUELA TRINIDAD MORENO (IPEM Nº 147), EN Bº YOFRE SUR, CIUDAD DE CÓRDOBA. ESTADO DEL CAMPO DE DEPORTES. PEDIDO DE INFORMES.

O') LEY Nº 9685, SOBRE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS. REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.

P') ENTREGA DE NETBOOKS Y CAPACITACIÓN DOCENTE EN MATERIA INFORMÁTICA. PEDIDO DE INFORMES.

Q') INSECTO FLEBÓTOMO TRASMITOR DE LA LEISHMANIASIS. RASTREO Y ACCIONES DEL MINISTERIO DE SALUD. PEDIDO DE INFORMES.

R') RADAR DOPPLER PARA DETECCIÓN TEMPRANA DE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS. INCORPORACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.

Moción de vuelta a comisión con preferencia.

Sr. Presidente (Busso).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el legislador Daniel Passerini.

Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo estipulado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 51, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 74, 78, 79, 83, 84, 86, 87, 89, 91, 92, 97 y 101 del Orden del día, vuelvan a comisión con una preferencia por 14 días; es para ser considerados en la 47ª sesión ordinaria.

Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 47ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos del Orden del Día enumerados por el legislador Passerini.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.

Se incorporan al Orden del Día de la 47ª sesión ordinaria.

PUNTO 1

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

4473/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Albarracín, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento, controles y multas aplicados a la EPEC por el ERSEP en el periodo 2001-2009.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

PUNTO 4

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5008/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la EPEC relacionados con la crisis energética sufrida en los meses de enero y febrero en la provincia.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

PUNTO 6

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5132/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la administración por parte de la EPEC de los fondos recaudados para la construcción de la "Obra Estación Transformadora Arroyo Cabral, Obras Asociadas y Obras Complementarias".

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

PUNTO 9

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5935/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ruiz, Birri y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la planta transformadora de la EPEC a ser instalada dentro del ejido de la Comuna de San Antonio de Arredondo cuenta con el estudio de impacto ambiental, conforme la Ley Nº 7343.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

PUNTO 12

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5250/L/10

PODER LEGISLATIVO – 49ª REUNION -15-XII-2010

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que no se contestaron distintos pedidos de información pública formulados de conformidad con la Ley Nº 8803, de acceso a los actos del Estado, por parte de organizaciones no gubernamentales.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 13

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5556/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, para que a través del Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los controles de la Policía Caminera.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 14

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

6011/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la convocatoria para cobertura de cargos del Nivel Medio para el año 2011.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 15

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5681/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el ausentismo de docentes de los niveles inicial, primario y secundario de escuelas públicas y privadas motivado por carpetas médicas.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 16

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

4644/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Pozzi y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la problemática planteada ante los altos índices de deserción escolar en los últimos seis años.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 21

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

4346/L/09

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini, Lizzul, Díaz y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la problemática edilicia de la escuela Nicolás Rodríguez Peña de la localidad de Ciénaga de Brito, departamento Cruz del Eje.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 22

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5035/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini, Birri, Díaz, Varas y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la provisión de mobiliario a escuelas públicas.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 23

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5502/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cargnelutti, Pozzi, Calvo Aguado, Cugat, Giaveno, Rossi, Poncio y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la deuda que mantendría desde 2008 por el contrato de locación del inmueble en que funciona la Escuela de Bellas Artes "Luis Tessandori" de la ciudad de Villa Dolores.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 24

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5719/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Díaz y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al vehículo Ford Ranger entregado por el depósito judicial por Resolución Nº 424/08 a la Escuela Ceferino Namuncurá de Pampa de Achala.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 29

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

6267/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al nivel inicial, tanto en establecimientos de gestión estatal como privada.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 30

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

6362/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Lizzul, Rodríguez y Varas, por el que solicita la comparecencia de los Sres. Ministros de Obras y Servicios Públicos y de Finanzas en el recinto (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre política energética y situación económica de la EPEC.

Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 31

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes–

6395/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el memorando Nº 11/10 de la Secretaría de Educación referido a la jornada de debate del Anteproyecto de Ley de Educación Provincial.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 32

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

6396/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a alumnos repitentes que no son matriculados en instituciones educativas.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 36

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5733/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Gudiño, Pozzi, Poncio, Calvo Aguado, Matar, Dressino y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de la Colonia Santa María de la localidad de Santa María, departamento Punilla.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 37

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5752/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Díaz, Seculini, Rivero y Serra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el presupuesto afectado por el Ministerio de Salud para la compra de insumos y equipamiento tecnológico destinado a hospitales públicos de la provincia.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 38

Pedido de Informes–Artículo 195

5753/L/10

PODER LEGISLATIVO – 49ª REUNION -15-XII-2010

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Díaz, Seculini, Rivero y Serra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de médicos y enfermeras con que cuentan cada uno de los hospitales públicos de la provincia.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 42

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5773/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rivero, Asbert y Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al cumplimiento de la Ley Nº 9227 -adhesión a la Ley Nacional Nº 25.929-.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 43

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5916/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la enfermedad del sarampión en el territorio provincial.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 44

Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–

5939/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Jiménez y Serra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Pacto Sanitario para el Fortalecimiento de la Salud Pública Provincial.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 46

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

4471/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el llamado a licitación pública nacional e internacional para la adquisición de un vehículo para combate de incendios, destinado a la División Bomberos de la Policía provincial.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 47

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5443/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Rodríguez y Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Paicor.

Comisión: Solidaridad

PUNTO 50

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

6147/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Calvo Aguado, Poncio, Cugat, Matar, Pozzi, Cargnelutti, Razzetti, Rossi, Giaveno y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la modalidad con que la Apros distribuye los recursos asignados al subsidio de hogarización desde el año 2008.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 51

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

4614/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que convoca al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), a comparecer ante la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación, a efectos de informar sobre funcionamiento y políticas en materia de prevención y lucha contra el narcotráfico.

Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación

PUNTO 60

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5045/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la ejecución del programa "Banco de la Gente".

Comisión: Solidaridad

PUNTO 61

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5348/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cargnelutti, Poncio, Cugat, Giaveno, Matar, Pozzi, Calvo Aguado, Nicolás, Rossi y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al impacto ambiental que producirían los cortaderos de ladrillo en el departamento San Javier.

Comisión: Asuntos Ecológicos

PUNTO 63

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5465/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cugat, Calvo Aguado, Cargnelutti, Giaveno, Dressino, Poncio, Rossi, Gudiño, Matar y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al "Fondo para la Prevención de la Violencia Familiar", creado por el artículo 23 de la Ley Nº 9505.

Comisión: Solidaridad

PUNTO 65

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

4504/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti, Gudiño, Pozzi y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las políticas sociales adoptadas en cuanto a personas jóvenes o adultas discapacitadas que no pueden convivir con su grupo familiar.

Comisión: Solidaridad

PUNTO 66

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

4840/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la prestación de servicios del PAICOR en la ciudad de Río Cuarto.

Comisión: Solidaridad

PUNTO 67

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5331/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la implementación del Programa "Córdoba con Ellas".

Comisión: Solidaridad

PUNTO 69

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5625/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Razzetti y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al programa denominado PROSAD, dependiente de la Dirección de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social.

Comisión: Solidaridad

PUNTO 74

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5946/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Razzetti, Rossi, Cargnelutti y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre

PODER LEGISLATIVO – 49ª REUNION -15-XII-2010

diversos aspectos referidos al otorgamiento de subsidios a la Fundación FUNCAVI desde el año 2007 a la fecha.

Comisión: Solidaridad

PUNTO 78

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

6121/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Lizzul, por el que solicita al Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre las asignaciones presupuestarias del período enero de 2009 a septiembre de 2010 como coordinador del Fondo Permanente para la financiación de proyectos y programas de obras de infraestructura para municipios y comunas.

Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

PUNTO 79

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

6122/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Lizzul, por el que solicita al Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre las asignaciones presupuestarias del período enero de 2009 a septiembre de 2010 sobre coordinación del Fondo 1,5% de ayuda financiera a municipalidades y comunas, Ley Nº 8663.

Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

PUNTO 83

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

6221/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la relación de los aspirantes de la Escuela de Suboficiales y Agentes General Manuel Belgrano con la Asociación Mutual Policial 16 de Noviembre y si fueron instados a la venta de una rifa.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 84

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

6222/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el monto que reciben y en qué concepto los aspirantes de la Escuela de Suboficiales y Agentes General Manuel Belgrano, descuento para la APROSS y provisión de uniformes.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 86

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

6092/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de objeciones de oficiales públicos del Registro Civil y Capacidad de las Personas para casar parejas del mismo sexo.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 87

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

6115/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con los aportes realizados por la provincia al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Comuna de Villa Ciudad de América, departamento Santa María en los años 2008 y 2009.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 89

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5249/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Cugat, Cargnelutti, Pozzi, Rossi, Matar y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado del campo de deportes de la escuela Trinidad Moreno (IPEM Nº 147) de Barrio Yofre Sur de la ciudad de Córdoba.

PODER LEGISLATIVO – 49ª REUNION -15-XII-2010

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 91

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

6262/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Gudiño, Razzetti y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la reglamentación de la Ley Nº 9685 -de perros potencialmente peligrosos-.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 92

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

6298/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Pozzi, Cugat, Giaveno, Cargnelutti y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la entrega de netbooks y capacitación docente en materia informática en los establecimientos escolares de la Provincia.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 97

Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–

6418/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Calvo Aguado, Gudiño, Pozzi, Nicolás, Dressino, Giaveno, Cugat, Rossi y Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al rastreo y acciones del Ministerio de Salud relacionados con la aparición del insecto flebótomo transmisor de la Leishmaniasis.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 101

Pedido de Informes–Artículo 195

6515/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se incorporará un radar tipo doppler o con qué otro proyecto cuenta el gobierno para la detección temprana de fenómenos meteorológicos.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

- 5-

A) EPEC. CARGO FIJO PARA CONCLUIR LA OBRA NUEVA CENTRAL DE PILAR. ESTABLECIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.

B) EXPLOTACIÓN DE FLUORITA EN EL DPTO. CALAMUCHITA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

Moción de vuelta a comisión para su archivo.

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.

Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito, siempre respetando lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, que los puntos 8 y 90 del Orden del Día sean girados a archivo.

Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de enviar a archivo los proyectos correspondientes a los puntos 8 y 90 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.

PUNTO 8

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5563/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la posibilidad de que el Gobierno y la EPEC creen un cargo fijo en las facturas de la empresa, destinado a concluir la obra “Nueva Central de Pilar”.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

PUNTO 90

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

6029/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la explotación de fluorita en el departamento Calamuchita.

Comisiones: Industria y Minería y de Asuntos Ecológicos

-6-

A) EPEC. FACTURACIÓN, PERÍODO ENERO 2010. PEDIDO DE INFORMES.

B) EPEC. DESEMPEÑO ANTE LA CRISIS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. PEDIDO DE INFORMES.

C) EPEC. TRANSFORMADORES, ESTACIÓN TRANSFORMADORA ADICIONAL, PLANES DE CONTINGENCIA, COMPENSACIONES POR CORTE DEL SUMINISTRO, PREVISIÓN E INVERSIÓN. PEDIDO DE INFORMES.

D) OBRA "ESTACIÓN TRANSFORMADORA ARROYO CABRAL Y OBRAS ASOCIADAS". FINANCIACIÓN, FECHA DE FINALIZACIÓN Y PRESUPUESTO ACTUALIZADO. PEDIDO DE INFORMES.

E) EMPRESA AGIMED SRL. COMPRAS REALIZADAS POR LA PROVINCIA EN EL PERÍODO 2007-2010. PEDIDO DE INFORMES.

F) LEY 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

G) INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LOS NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO. ESTADO EDIFICIO. PEDIDO DE INFORMES.

H) IPEN Nº 268, EX COLEGIO NACIONAL DEÁN FUNES, EN Bº NUEVA CÓRDOBA. EXPLOTACIÓN DE DOS CANCHAS DE FÚTBOL. PEDIDO DE INFORMES.

I) ESCUELA PADRE JOSÉ GABRIEL BROCHERO, EN COLONIA LA SEVERINA, BALNEARIA, DPTO. SAN JUSTO. PROBLEMAS DE FALTA DE AGUA. SOLUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.

J) DOCENTES. SALARIOS ADEUDADOS Y PAGO DE UN ANTICIPO. PEDIDO DE INFORMES.

K) PRECEPTOR DE ESCUELAS. CURSOS, REQUISITOS PARA EL NOMBRAMIENTO Y FUNCIONES. PEDIDO DE INFORMES.

L) ENTREGA DE NETBOOKS. ESCUELAS BENEFICIADAS Y CAPACITACIÓN DE PROFESORES Y DOCENTES. PEDIDO DE INFORMES.

M) LEY 5326, DE FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTITUTOS PRIVADOS DE ENSEÑANZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

N) EDUCACIÓN SECUNDARIA PROVINCIAL. PLANES DE MEJORA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, PERÍODO 2010 Y 2011. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

Ñ) LEY 8784, ART. 3º, SOBRE FORMULARIOS ESPECIALES PARA RECETARIOS DE MEDICAMENTOS. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.

O) SALUD PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y NOMBRAMIENTO DE PERSONAL EN LOS AÑOS 2009-2010. PEDIDO DE INFORMES.

P) HOSPITALES PÚBLICOS. PERSONAL DE EQUIPOS DE SALUD. CATEGORIZACIONES, CARRERA HOSPITALARIA, CALIFICACIÓN ANUAL Y RECONOCIMIENTO ECONÓMICO EN CARGOS DE CONDUCCIÓN SEGÚN LEY 7625. PEDIDO DE INFORMES.

Q) SISTEMA DE DERIVACIÓN DE PACIENTES. PEDIDO DE INFORMES.

R) SALUD MENTAL. ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES. PEDIDO DE INFORMES.

S) SRA. VIVIANA FARÍAS, AFILIADA A LA APROSS. FALLECIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.

T) PERSONAL PARAMÉDICO DEL 136. ANTIGÜEDAD Y CAPACITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.

U) CIUDAD DE RÍO CUARTO. DETENCIÓN DE UN MENOR POR NO IDENTIFICARSE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

V) HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, EN VILLA MARÍA, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. INCORPORACIÓN DE UN TOMÓGRAFO Y DE UN NEUROCIRUJANO. PEDIDO DE INFORMES.

W) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL. RECAUDACIÓN MINISTERIO DE FINANZAS. PEDIDO DE INFORMES.

X) PREDIO DEL EX MOLINO CENTENARIO, EN CÓRDOBA. COMPRA. PEDIDO DE INFORMES.

Y) PAICOR. PROVEEDORES, FONDO PARA LA ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL Y BENEFICIARIOS. PEDIDO DE INFORMES.

Z) LEY Nº 9652, AUTORIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PARA OBRAS DE GASIFICACIÓN. FINANCIAMIENTO, GRADO DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASODUCTOS Y PROCESOS LICITATORIOS. PEDIDO DE INFORMES.

A') PAICOR. EMPRESA ALISER SA, PROVEEDORA EN RÍO CUARTO. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y USO DE LAS INSTALACIONES DEL VIEJO HOSPITAL DE RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.

B') IMPUESTO AL AUTOMOTOR. COBRO JUDICIAL. PEDIDO DE INFORMES.

C') PROGRAMA PAICOR EN BELL VILLE. POSIBLE ATRASO EN EL PAGO A PROVEEDORES. PEDIDO DE INFORMES.

D') PLAN VIDA NUEVA. MÓDULOS ALIMENTARIOS Y CANTIDAD DE BENEFICIARIOS. PEDIDO DE INFORMES.

E') PAICOR. POSIBLE ATRASO EN EL PAGO A PROVEEDORES EN LAS LOCALIDADES DE SAMPACHO, CORONEL MOLDES Y BULNES. PEDIDO DE INFORMES.

F') FONDO DE CONSOLIDACIÓN Y GESTIÓN DE RECUPERO Y COBRO DE ACRENCIAS NO TRIBUTARIAS DEL ESTADO PROVINCIAL, A CARGO DE LA EMPRESA KOLEKTOR. PEDIDO DE INFORMES.

G') CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO. FINANCIAMIENTO DE LA OBRA. PEDIDO DE INFORMES.

H') MODIFICACIÓN DE RADIOS MUNICIPALES Y COMUNALES. SITUACIÓN IMPOSITIVA DE CONTRIBUYENTES AFECTADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

I') ESCUELAS PÚBLICAS PROVINCIALES. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. PEDIDO DE INFORMES.

J') PROGRAMA "INTERNET PARA EDUCAR". PEDIDO DE INFORMES.

K') BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA, SUCURSAL HUINCA RENANCÓ. EXTENSIÓN DE MOSTRADOR O CAJERO AUTOMÁTICO EN ITALÓ. INSTALACIÓN. SOLICITUD.

L') APROSS. ESTADOS CONTABLES PERÍODOS 2006-2009. PRESENTACIÓN A LA LEGISLATURA. PEDIDO DE INFORMES.

M') GOBIERNO DE CÓRDOBA Y CAJA DE JUBILACIONES. DEUDAS CON LA APROSS. PEDIDO DE INFORMES.

N') DECRETO 660, PROGRAMA FEDERAL DE DESENDEUDAMIENTO DE LAS PROVINCIAS. PEDIDO DE INFORMES.

Ñ') INGRESOS DEL GOBIERNO. SUBCUENTA "OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES" DE LA CUENTA TRANSFERENCIAS CORRIENTES. PEDIDO DE INFORMES.

O') MÁQUINAS TRAGAMONEDAS O SLOTS. INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

P') "IMPUESTO A LA VALIJA". DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

Q') IMPUTADOS EN CAUSA POR ESTAFA A UNA ART. CARGO Y FUNCIÓN QUE DESEMPEÑAN EN EL GOBIERNO PROVINCIAL Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. PEDIDO DE INFORMES.

R') IPEN Nº 269, EN VILLA UNIÓN. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.

S') ESCUELA JOSEFINA ANTONIA VIDAL, EN PARAJE BALDE DE LA MORA, DPTO. SAN ALBERTO. POSIBLE CIERRE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

T') BONCOR. DISTINTAS EMISIONES. PEDIDO DE INFORMES.

U') MINISTERIO DE FINANZAS. VINCULACIÓN CON EL CONSEJO PROVINCIAL DE GEÓLOGOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

V') REVISTA EDUCANDO, EDITADA POR LA DIRECCIÓN DEL IPEN 281, EN RÍO CUARTO. NOTA FIRMADA POR EL DIRECTOR. PEDIDO DE INFORMES.

W') MORTALIDAD INFANTIL EN LOS DPTOS. COLÓN, GENERAL ROCA, GENERAL SAN MARTÍN, MINAS, RÍO SECO, SAN ALBERTO Y TERCERO ARRIBA. ACCIONES PARA LA DISMINUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.

X') HOSPITAL DR. JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, EN BELL VILLE. SERVICIO DE GINECOLOGÍA. POSIBLE CIERRE. PEDIDO DE INFORMES.

Y') MINISTERIO DE FINANZAS. MONTOS ABONADOS A LA FIRMA KOLEKTOR EN EL PERÍODO 2007-2010. PEDIDO DE INFORMES.

Moción de vuelta a comisión con preferencia.

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.

PODER LEGISLATIVO – 49ª REUNION -15-XII-2010

Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 2, 3, 5, 7, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 45, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 85, 88, 93, 94, 95, 96, 98, 100 y 102 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 2º sesión ordinaria del 133 período legislativo.

Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 2º sesión ordinaria del 133 período legislativo, de los proyectos correspondientes a los puntos enumerados por el legislador Passerini.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.

Se incorporan al Orden del Día de la 2º sesión ordinaria del 133 período legislativo.

PUNTO 2

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

4828/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la facturación por parte de la EPEC en el período enero 2010.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

PUNTO 3

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

4451/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el desempeño de la EPEC ante la crisis de suministro eléctrico.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

PUNTO 5

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

4570/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Díaz, Jiménez, Rodríguez, Seculini, Coria, Bischoff y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la provisión de energía eléctrica por la EPEC, metodología para efectivizar los descuentos a usuarios por el corte del suministro, previsión e inversiones para los años 2010 al 2014.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

PUNTO 7

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

4474/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini y Rodríguez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al aporte especial destinado al financiamiento de la obra "Estación Transformadora Arroyo Cabral y obras asociadas" recaudado por la EPEC.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

PUNTO 10

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5347/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Birri, Rivero y Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las compras que la provincia realizó en el período 2007–2010 a la empresa AGIMED SRL, mecanismo de contratación, pagos, destino de los equipamientos y aplicación de la Ley Nº 9331 –Compre Córdoba–.

Comisiones: Industria y Minería y de Salud Humana

PUNTO 11

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5656/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.

Comisión: Industria y Minería

PUNTO 17

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

4920/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi, Matar, Calvo Aguado, Cugat, Cargnelutti y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a infraestructura escolar de instituciones educativas públicas y privadas de los niveles primario y secundario.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 18

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5265/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la posible explotación de dos canchas de fútbol, en el predio del IPEM N° 268 "ex Colegio Nacional Deán Funes" del barrio Nueva Córdoba.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 19

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5363/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Matar y Poncio, por el que solicita al Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre la falta de provisión de agua en la escuela Padre José Gabriel Brochero de Colonia la Severina, ciudad de Balnearia, departamento San Justo.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 20

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5375/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al pago de un anticipo a cuenta de dos mil pesos de salarios adeudados a docentes de todos los niveles y modalidades.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 25

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5764/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Pozzi, Poncio, Dressino y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a cursos y requisitos que se deben cumplir para ser preceptor de escuelas, así como el procedimiento a cumplir por los establecimientos educativos que necesiten de ellos.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 26

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5765/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Pozzi, Poncio, Dressino y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a escuelas beneficiadas con la entrega de netbooks y la capacitación brindada a profesores y docentes para su utilización.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 27

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5767/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cumplimiento de la Ley N° 5326 -de Funcionamiento de Institutos Privados de Enseñanza-.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 28

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

4619/L/10

PODER LEGISLATIVO – 49ª REUNION -15-XII-2010

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Rodríguez y Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con las líneas de acción definidas a partir de las Resoluciones del Consejo Federal de Educación N° 84, 86 y 88/09, que se enuncian de modo general en el documento “La Educación Secundaria en Córdoba. Documento Base”.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 33

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes–

5083/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Dressino, Pozzi, Rossi, Poncio, Calvo Aguado, Matar, Cargnelutti, Giaveno, Gudiño y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Ministerio de Salud controla en instituciones públicas y privadas el cumplimiento del artículo 3º de la Ley N° 8784, referido a los formularios especiales para recetas de medicamentos.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 34

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5628/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a obras de infraestructura y nombramientos de personal en la salud pública provincial en los años 2009-2010.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 35

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5710/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre categorizaciones, carrera hospitalaria, calificación anual y reconocimiento económico en cargos de conducción del personal de equipos de salud, según lo establecido en la Ley N° 7625.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 39

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5754/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Díaz, Seculini, Rivero y Serra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento del sistema de derivación de pacientes.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 40

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5758/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a cobertura de atención médica a personas con trastornos mentales.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 41

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5770/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Rodríguez y Díaz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los hechos acontecidos el 9 de agosto que terminaron con el fallecimiento de la Sra. Viviana Farías.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 45

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5088/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Poncio, Dressino, Pozzi, Razzetti, Matar, Gudiño, Calvo Aguado y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al personal que se desempeña en el servicio 136, en las tareas de asistencia paramédica.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 48

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5908/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la detención de un menor de edad el día 24 de agosto de 2010 en la ciudad de Río Cuarto.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 49

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

6139/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Calvo Aguado, Gudiño, Rossi, Matar, Cugat y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se ha previsto la incorporación de un tomógrafo y de un neurocirujano en el Hospital Regional Pasteur de la ciudad de Villa María, departamento General San Martín.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 52

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

4666/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural, correspondiente a los ejercicios 2006 al 2009.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 53

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

4776/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado actual del predio del ex Molino Centenario de la ciudad de Córdoba y la participación de la firma Cobrex en la operación inmobiliaria.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 54

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

4777/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la situación actual del Paicor.

Comisión: Solidaridad

PUNTO 55

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

4782/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria y Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con la aplicación de la Ley Nº 9652, autorización de endeudamiento para obras de gasificación.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 56

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

4854/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la prestación actual del PAICOR en la ciudad de Río Cuarto.

Comisión: Solidaridad

PUNTO 57

Pedido de Informes–Artículo 195

4902/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Nicolás, Poncio, Gudiño, Cargnelutti, Giaveno, Calvo Aguado, Dressino, Matar y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cobro judicial del impuesto provincial del automotor.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 58

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5289/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre supuestos atrasos en el pago a proveedores del Programa PAICOR en la ciudad de Bell Ville.

Comisión: Solidaridad

PUNTO 59

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

4919/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Cargnelutti, Matar, Pozzi y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la distribución de módulos alimentarios correspondientes al "Plan Vida Nueva".

Comisión: Solidaridad

PUNTO 62

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5219/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al posible atraso en el pago a proveedores del Programa PAICOR de las localidades de Sampacho, Coronel Moldes y Bulnes.

Comisión: Solidaridad

PUNTO 64

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5378/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez y Jiménez, por el que solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Fondo de Consolidación y Gestión de Recupero y Cobro de Acreencias No Tributarias del Estado Provincial, a cargo de la empresa Kolektor.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 68

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5446/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al financiamiento de la obra Centro Cívico del Bicentenario.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 70

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes–

5735/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Razzetti, Poncio, Matar, Gudiño, Rossi, Pozzi, Cargnelutti y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la situación impositiva de contribuyentes afectados por la modificación de radios municipales y comunales en virtud de recategorizaciones.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 71

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5837/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la provisión de recursos materiales y didácticos a docentes en las escuelas públicas provinciales.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 72

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5858/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al "Programa Internet para Educar".

PODER LEGISLATIVO – 49ª REUNION -15-XII-2010

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 73

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5861/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posibilidad que el Banco Provincia de Córdoba, sucursal Huinca Renancó, instale el servicio de extensión de mostrador o cajero automático en la localidad de Italó por carecer de servicio bancario.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 75

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5988/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la presentación de balances por parte de la Apross a esta Legislatura.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 76

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5989/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a deudas que el Gobierno de Córdoba y la Caja de Jubilaciones mantienen con la Apross.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 77

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5799/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y Social, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la decisión del Gobierno Provincial de desistir de la acción judicial originada por deudas del Estado Nacional alterando el alcance del Decreto Nacional Nº 660/10 "Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias".

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 80

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5252/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Matar, Dressino, Gudiño, Cugat, Calvo Aguado, Cargnelutti, Poncio, Giaveno y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la sub-cuenta "Otras Transferencias Corrientes" de la cuenta Transferencias Corrientes, como parte de los ingresos del gobierno.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 81

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

6161/L/10

Proyecto de Resolución : Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la instalación y explotación de slots en la Provincia.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 82

Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–

6192/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al llamado "Impuesto a la valija".

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 85

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

5860/L/10

PODER LEGISLATIVO – 49ª REUNION -15-XII-2010

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cargo y función que desempeñan en el gobierno provincial los imputados en la causa por estafa a una ART y sobre lo actuado administrativamente con el personal involucrado.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 88

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes–

5248/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Cugat, Cargnelutti, Pozzi, Rossi, Matar y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio del IPEM Nº 269 de Villa Unión.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 93

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

6314/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al posible cierre de la escuela "Josefina Antonia Vidal" del paraje Balde de la Mora, departamento San Alberto.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 94

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

6347/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con las distintas emisiones del Boncor.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 95

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

6382/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe vinculación y asignaciones presupuestarias del Ministerio de Finanzas para con el Consejo Provincial de Geólogos, conforme la Ley Nº 5759.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 96

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

6414/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Rodríguez, Seculini y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la publicación de la Revista "Educando", editado por la Dirección del IPEM Nº 281 de la ciudad de Río Cuarto.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 98

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

6431/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones llevadas a cabo para disminuir la mortalidad infantil y resultados obtenidos en los departamentos Colón, General Roca, General San Martín, Minas, Río Seco, San Alberto y Tercero Arriba.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 100

Pedido de Informes–Artículo 195

6502/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Lizzul y Rodríguez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al posible cierre del Servicio de Ginecología en el Hospital Dr. José Antonio Ceballos de la ciudad de Bell Ville.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 102

Pedido de Informes–Artículo 195

6548/L/10

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP) informe sobre diversos aspectos relacionados con la firma Kolektor desde el año 2007.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-7-

SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL. REGULACIÓN. LEY PROVINCIAL 8113. DEROGACIÓN.

Sr. Presidente (Busso).- Corresponde el tratamiento del punto 99 del Orden del Día, proyecto de ley 6480/E/10, que cuenta con despacho de comisión, al que damos ingreso.

Antes de darle la palabra a la señora legisladora Evelina Feraudo, quiero comunicarle al Pleno que se encuentran presentes, acompañando el debate del proyecto de ley de Educación, el señor Ministro de Educación, profesor Walter Grahovac, y todo su Gabinete; miembros del Consejo Provincial de Políticas Educativas que trabajaron en el anteproyecto de la Ley de Educación; y representantes de distintas entidades sindicales que participaron en la elaboración del anteproyecto como integrantes de ese Consejo.

Tiene la palabra la señora legisladora Evelina Feraudo.

Sra. Feraudo.- Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer muy especialmente, en nombre de las Comisiones de Educación, de Legislación General y de Economía, la buena predisposición y la búsqueda permanente de consenso por parte de las autoridades del Ministerio de Educación: el señor Ministro de Educación, licenciado Walter Grahovac; la señora Secretaria de Educación, licenciada Delia Provinciali; el señor Secretario de Relaciones Institucionales, doctor Carlos Sánchez; y todo su Gabinete de trabajo, quienes receptaron las propuestas que la comunidad en general nos hiciera llegar a través de las Audiencias Públicas, de las reuniones de la Comisión de Educación a las que asistieron; y, por qué no, de las reuniones que tuvimos en el despacho muchos de los legisladores que estamos especialmente vinculados a esta Ley de Educación. Esto demuestra la nobleza, la idoneidad y la verdadera democracia de quienes saben escuchar, receptar y responder a las inquietudes de toda la comunidad.

También quiero agradecer al equipo de la Secretaría de Comisiones, a los asesores, a los legisladores y a los relatores que nos acompañaron en esta tarea con tanta responsabilidad y dedicación.

Además, quiero agradecer a quienes nos apoyaron en las Audiencias Públicas que llevamos a cabo en distintas localidades del interior y, por último, destacar los aportes que hizo, además del Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, Industria y Comercio.

Quiero agradecer a todos quienes nos apoyaron en distinta forma, pero también a quienes nos cuestionaron, porque las críticas que encontramos en nuestro camino deben servir para superarnos y para nuestro enriquecimiento personal y comunitario. Por lo tanto, agradecemos a todos quienes estuvieron de acuerdo con nuestra postura y a todos quienes elevaron las objeciones correspondientes, porque todo tiene que ser receptado con madurez. Sabemos muy bien que la democracia está basada en la libertad y en el diálogo permanente.

Frente a las situaciones críticas vividas en nuestro país que también afectaron a la educación, los legisladores tenemos la insoslayable responsabilidad de ser protagonistas lúcidos, críticos y permanentes de los nuevos desafíos a emprender, y uno de ellos es, precisamente, la nueva Ley General de Educación para la Provincia de Córdoba.

Atento a ello es necesario el análisis objetivo de acuerdo con las circunstancias históricas y los intereses e ideas de los núcleos predominantes; analizar si los lineamientos dados a la educación siguen teniendo vigencia o si, por el contrario, alguno de sus supuestos carece de actualidad, porque lo que pudo ser óptimo en determinada época puede y debe ser superado, porque así lo requiere la incesante transformación humana. El avance de la ciencia y la técnica, los avances filosóficos, las nuevas concepciones de la psicología y la antropología nos imponen pautas reflexivas que nos ayudan a clasificar los hechos y a decantar procesos para que nuestros juicios sean prudentes y efectivos.

Si hemos de andar por los difíciles caminos de la educación no nos queda otra alternativa que colocarnos en nuestra propia perspectiva histórica e incorporar lo mucho que nos dejó el pasado, fijar con precisión los objetivos e instrumentar los medios para alcanzarlos mediante una dinámica cooperativa y participativa. Nada bueno y constructivo alcanzaremos con discusiones o polémicas, más bien canalicemos nuestros esfuerzos hacia las grandes coincidencias esenciales ya que dignificarán nuestra posición.

Durante dos centurias la educación argentina ha transitado todos los caminos y todos los espacios posibles. Hoy, en este año tan significativo del Bicentenario, también debemos aprovechar y reflexionar sobre la necesidad de unir esfuerzos y voluntades en busca de una Ley de Educación que nos identifique como argentinos y como cordobeses.

El anteproyecto de la Ley General de Educación de la Provincia de Córdoba pretende adecuar la Ley 8113 a la Ley de Educación nacional 26.206, a la Ley de Educación Técnico Profesional 26.058 y también a la Ley de Financiamiento Educativo 26.075. Recordemos que en marzo del año 2006, cuando el Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, y el entonces Ministro de Educación, licenciado Daniel Filmus, inauguraron en Potrero de Garay el período lectivo en nuestra Provincia, expresaron que era voluntad del Gobierno nacional elaborar una Ley de Educación nacional en reemplazo de la Ley Federal de Educación 24.195, surgida en 1990 y de contenido neoliberal.

Al efecto se hicieron consultas, y quiero destacar lo que decíamos los legisladores de esta Unicameral, en ese entonces, y también la Comisión de Educación de la Región Centro, con la cual estuvimos trabajando: "El Estado nacional debe recuperar su función rectora en materia de educación pero sin negar la descentralización y la regionalización de la enseñanza. Es necesario, por ello, lograr una unidad en los sistemas educativos pero basada en la diversidad, donde haya transición y complementación".

En diciembre de 2006 el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Educación Nacional 26.206 que derogó la 24.195, Ley Federal de Educación. Sancionada la misma, desde la perspectiva jurídico constitucional, las provincias deben adecuar sus normas educativas a ella, porque tal como lo establecen los artículos 31 y 128 de la Constitución nacional, los gobiernos están obligados a hacer cumplir en sus provincias las leyes federales dictadas por el Congreso de la Nación.

Al efecto, la Ley Nacional de Educación, en su artículo 121, obliga a los gobiernos provinciales a cumplir y hacer cumplir la presente ley adecuando la legislación jurisdiccional.

En febrero de 2009, en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, el Gobernador, contador Juan Schiaretti, manifestó su voluntad de modificar la Ley Provincial de Educación 8.113 para adecuarla a la ley nacional, anunciando a los legisladores el envío del proyecto respectivo señalando que: "En educación debemos mejorar la calidad educativa de Córdoba; para ello, este año pondremos a discusión la reforma de la Ley Provincial de Educación de 1991 con el objetivo de adecuarla a las nuevas exigencias, en concordancia con la Ley nacional de Educación y la Ley provincial Técnico Profesional."

Recordemos que por Decreto 1.359, del año 2008, en setiembre de ese año se constituyó el Consejo Provincial de Políticas Educativas que está integrado por todos los sectores representativos del espectro educacional con representación en el ámbito de la Provincia, y en su artículo 1º, se establece que entre las acciones de ese Consejo de Políticas Educativas puede "surgir" la reforma de la legislación vigente para atender nuevas realidades.

Precisamente, el Gobierno de la Provincia, con la creación de este Consejo, vio un ámbito adecuado para trabajar en propuestas para la modificación de la Ley provincial 8.113, tarea que llevó a cabo desde febrero de 2009 a julio de 2010, generando consensos y disensos, acordando pautas comunes, valorando las propuestas de los otros y siendo capaces de exponer lo propio como aporte y no como imposición.

El debate responsable dio lugar al anteproyecto respectivo que fue a consulta de: 3.806 institutos, 105 mil personas, entre ellas 4.700 docentes que trabajaron en forma conjunta con inspectores, directivos, 23 mil alumnos, 29 mil ex alumnos, padres de los mismos, miembros de las fuerzas vivas de la comunidad y, en algunos casos, de intendentes y funcionarios municipales. Sus aportes fueron tabulados por personal técnico de la Subsecretaría de Equidad e Igualdad Educativa e incorporados al legajo del anteproyecto, de la misma manera que las propuestas de los estudiantes que trabajaron en este anteproyecto en la última semana de octubre, tal como muchos directivos, docentes, padres y alumnos se expresaron en las Audiencias Públicas legislativas.

No puedo dejar de mencionar la Ley 1.420, de Educación Común, del 8 de julio de 1884, reglamentada el 28 de julio de 1885; y la Ley 1.426.

La Ley provincial 8.113, de 1991, es una norma muy valiosa que contempla aspectos como el principio de educación permanente, la igualdad y la calidad educativa; y aun la cuestionada reforma del año 1825 también aportó en este aspecto. Esta norma legal de sólo cinco artículos –tanto la 8.113 como la 8.025– ha sido estudiada y analizada por el Consejo de Políticas Educativas.

Debemos destacar que de ambas leyes se han obtenido aportes valiosos para ese anteproyecto de la Ley Provincial de Educación, al igual que se han tomado aportes de la antigua –pero siempre actualizada– Ley 1.420. También ha sido de suma utilidad el documento elaborado en el marco de la Segunda Reunión Intergubernamental del Proyecto

Regional de Educación para América Latina y el Caribe, realizado en Buenos Aires en marzo de 2007, que impulsa una política educativa integral, constituyendo, por lo tanto, una guía valiosa para aquellos a quienes les toca decidir en materia educativa.

Tomando en cuenta todo lo hasta aquí expresado y el trabajo responsable de muchas personas que colaboraron en la elaboración del proyecto en tratamiento, relativo a la nueva Ley de Educación provincial, me referiré a los ejes básicos que lo definen, necesarios y trascendentes en el momento histórico que hoy vivimos.

En primer término, se establece que la educación y el conocimiento son un bien público, un derecho personal y social garantizado por el Estado, el que –tal como se desprende del artículo 1º y de sus fundamentos– respetará los principios establecidos por la Constitución nacional y los tratados interprovinciales incorporados a la ley.

Por su parte, el artículo 2º –“principios generales”– establece: “La política educativa se ajustará a las disposiciones de la Constitución provincial”. Además, define a la educación como función obligatoria, principal, permanente y prioritaria del Estado. En tal sentido, debo agregar que la educación es una política de Estado, no partidaria, ya que éste garantiza, en el ámbito educativo, el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes establecidos por la Ley 26.061.

En otro orden, por medio del inciso b) del artículo 3º –“principios generales”, Título I, Capítulo I–, se reconoce a la familia como agente natural y primario de la educación, que implica el derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos y a escoger el tipo de educación más adecuado, conforme a sus propias convicciones.

En tal sentido, el inciso e) del artículo 11 –“Deberes y Derechos de los Padres”, Sección Segunda– expresa que los alumnos recibirán, de manera opcional, en el ámbito de la educación pública de gestión estatal, la educación religiosa que les permita aprender los valores y contenidos básicos de la creencia por la que hubieren optado, lo cual se establece como contenido extracurricular, fuera del horario de clase y a cargo de los ministros autorizados de los diferentes cultos, sin que el Estado comprometa para ello fondos públicos. Sobre este tema específico tan importante, que fue tan discutido y debatido en las Audiencias Públicas, me explayaré más adelante.

Por medio del artículo 4º –“fines de la educación”– se promueve la identidad, la unidad nacional y latinoamericana, así como el respeto y la valoración de la diversidad lingüística y cultural de las distintas comunidades de los pueblos originarios. Este es un importante aporte para nuestra identidad nacional, que debe reconocer siempre las raíces de nuestros pueblos originarios.

Asimismo, luego del debate legislativo y de las propuestas vertidas en las Audiencias Públicas, incorporamos al artículo 4º los objetivos de la educación provincial –que seguramente serán el marco que refleje la política educativa en los años venideros–, entre los que podemos mencionar: desarrollar una educación que posibilite la autodeterminación y el compromiso por la defensa de la calidad de vida; el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y la concientización sobre los procesos de degradación socioambiental; incorporar el cooperativismo, el mutualismo y el asociativismo en todos los procesos de formación, en concordancia con los principios y valores establecidos por la Ley nacional 16.583 y sus normas reglamentarias; fortalecer la centralidad de lectura y escritura, como condiciones básicas para la construcción de una ciudadanía responsable y la libre circulación del conocimiento; brindar una formación que le permita actuar con responsabilidad y compromiso en el cuidado y mejoramiento del ambiente contribuyendo a su desarrollo sustentable.

Además, establece que los padres –esto es muy importante– deben respetar y hacer respetar a sus hijos o representados la autoridad pedagógica de los docentes, las normas vigentes del sistema educativo, las reglamentaciones y normas de convivencia propias de la escuela como el ideario institucional o su proyecto educativo.

En cuanto a la funcionalidad del sistema educativo provincial, artículo 17, consideramos importantes dos incisos: el b) establece la articulación horizontal que posibilita el pasaje entre modalidades, carreras y establecimientos de un mismo nivel, y el d) establece la coordinación externa con los sistemas de otras jurisdicciones evitando superposiciones y estableciendo relaciones de cooperación y colaboración con ellos. Este artículo es muy importante porque bien sabemos que, de acuerdo a la Ley Federal de Educación, se adoptaron distintos sistemas educativos en cada provincia y en algunas de ellas también en distintas jurisdicciones, por lo que muchas veces los alumnos que debían trasladarse de una localidad a otra tenían dificultades para obtener el pase respectivo. Por eso destaco la importancia del contenido del artículo 17.

Extiende la escolaridad obligatoria a 14 años, desde jardín de infantes de 4 hasta la finalización del nivel medio, conforme al artículo 26, Estructura del Sistema Educativo, Sección Primera, Apartado 1º. Un avance muy importante es que la educación inicial es

obligatoria a partir de los 4 años y tiende a universalizar la sala para niños de 3 años, prioritariamente en zonas de vulnerabilidad social.

Sostiene la jornada extendida para 4º, 5º y 6º grado para lograr en forma integral los objetivos de la educación primaria, entre ellos, brindar oportunidades equitativas a todos los niños para el aprendizaje de las áreas significativas en los distintos campos del conocimiento, en especial la lengua, la comunicación, las ciencias sociales, la matemática, las ciencias naturales y el medioambiente, las lenguas extranjeras, desarrollando la capacidad de aplicarlos en situaciones cotidianas.

Generar las condiciones pedagógicas para el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como para la producción y recepción crítica de los discursos mediáticos. Expresa, además, la prohibición para la Provincia de la suscripción de tratados de libre comercio o de otro tipo que consideren a la educación como un servicio lucrativo o alienten la mercantilización de la educación pública –artículo 2º, Capítulo I, Sección Única.

Establece las prácticas educativas en el campo laboral y empresarial, que una renombrada educadora llama “profesionalización del nivel medio”, que permite establecer - como puede apreciarse en el artículo 4º, inciso d)- un vínculo entre educación y el sistema socioproductivo ajustado a lo prescripto en la Ley 26.058, de Educación Técnico Profesional, distinguiendo claramente a estas prácticas del concepto de trabajo formal, tema fundamental que tuvo distintas interpretaciones a las que se hará referencia luego de esta presentación.

Incorpora las modalidades de educación intercultural bilingüe, educación en contextos privados de libertad, educación domiciliaria y hospitalaria, educación especial, educación de jóvenes y adultos, educación artística.

Concede un lugar destacado a la educación rural y establece proveer la instrumentación de estrategias y recursos pedagógicos y materiales que garanticen la escolarización de los estudiantes, la accesibilidad, permanencia y egreso a través de programas específicos con becas, comedores escolares, transporte, salud, textos, recursos informáticos, o lo que la realidad institucional requiera, artículo 59, inciso d), apartado 4º, Sección segunda.

Garantiza el derecho a la educación de las personas con algún tipo de discapacidad, temporal o permanente, y a través del principio de inclusión educativa se asegura la integración de todos los niveles y modalidades según las posibilidades de cada persona. Asimismo, la escuela especial brinda atención educativa a todas aquellas personas cuyas problemáticas específicas no puedan ser desarrolladas por una escuela común.

Conforme a los principios de la inclusión educativa se garantiza la inserción de personas con algún tipo de discapacidad en propuestas de capacitación laboral, deportes, recreación, desarrollo de la expresión y creación cultural -artículos 49, 50 y 51, Educación Especial, apartado 1º, Sección segunda.

La educación permanente de jóvenes y adultos garantiza la alfabetización y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a quienes no la hayan completado en la edad establecida reglamentariamente y brinda capacitación técnico profesional. También incluye a personas con discapacidades temporales o permanentes -artículos 53, 54 y 55, apartado 2º, Sección segunda-, y a las personas en contexto de privación de libertad para promover la formación integral y el desarrollo pleno, sin limitaciones ni discriminación.

Se establece la educación técnico profesional como modalidad de la educación secundaria y superior, responsable de la formación de técnicos medios y superiores en áreas ocupacionales específicas y de la formación profesional, promoviendo en sus integrantes el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas y valores, principios éticos y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterio de profesionalidad, propios del contexto socio-productivo y para su inserción como ciudadano pleno.

Establece que los institutos de educación superior brindarán una oferta de servicios educativos para la formación docente abarcando formación docente inicial, formación docente continua e investigación educativa; además, la formación ética-profesional, formación científica, humanística y técnica, artículos 41, 42, 43 y 44, apartado 5º, Educación Superior.

La educación no formal, actividad pedagógica de carácter participativa, está destinada a satisfacer necesidades educativas, atendidas en forma parcial por el sistema escolar en el marco de la educación permanente, artículo 72, apartado 5º.

El artículo 86 hace referencia a la validez de los títulos y dice: “El Estado provincial certificará las acciones que se desarrollan en el ámbito de la educación no formal destinadas a la capacitación laboral y formación profesional”. Aquí destacamos el aporte del Ministerio de Trabajo, Industria y Comercio.

Además, señala a la educación artística como modalidad para la formación de distintos lenguajes del arte para niños, adolescentes, jóvenes y adultos de todos los niveles y modalidades, incluyendo todas las reformas que hemos producido de la educación artística,

tan solicitado a través de las Audiencias Públicas que hemos tenido con la participación de docentes, padres y alumnos, las que van a ser explicitadas posteriormente al terminar la primera fundamentación.

La educación intercultural bilingüe de nivel inicial, primario y secundario garantiza el derecho de los pueblos aborígenes a una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica.

Además, se establecen los lineamientos de la gestión privada sujeta al reconocimiento, autorización y supervisión del Ministerio de Educación -artículos 78, 79 y 80- y distingue claramente las funciones del director de la escuela y las del representante legal.

Incluye la cooperación económica con los colegios de gestión privada conforme a los recursos y necesidades de los mismos.

Reconoce la educación a distancia como una opción pedagógica y didáctica para jóvenes y adultos, aplicable a distintos niveles del sistema educativo y la supervisión de la veracidad de la información difundida desde las instituciones y el cumplimiento de la normativa federal e institucional correspondiente.

Incorpora el Consejo Provincial de Políticas Educativas con la integración que originó su creación. Su artículo 91 establece que será integrado por el Ministerio de Educación u organismo que en el futuro lo sustituyeren; Ministerio de Ciencia y Tecnología u organismos que en el futuro lo sustituyere; las universidades públicas, las universidades privadas, las entidades gremiales del sector educativo; el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las entidades representativas de las instituciones educativas de gestión privada; la entidad provincial que agrupe a estudiantes de nivel secundario de los establecimientos educativos de gestión estatal; la entidad provincial que agrupe a estudiantes de nivel secundario de los establecimientos educativos de gestión privada; la entidad provincial que agrupe a estudiantes de nivel superior de los establecimientos educativos de gestión estatal; la entidad provincial que agrupe a estudiantes de nivel superior de los establecimientos educativos de gestión privada; la entidad provincial que agrupe a padres o madres de familia de los establecimientos educativos de gestión pública; la entidad provincial que agrupe a padres o madres de familia de los establecimientos educativos de gestión privada. Estas modificaciones fueron incorporadas atendiendo a lo solicitado en las Audiencias Públicas y otros organismos comprometidos con la temática de la educación, a quienes el Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba o quien él designe podrá cursar las invitaciones pertinentes.

Debo recalcar muy especialmente –repito- que se han tenido en cuenta las opiniones que han hecho llegar los representantes de las distintas comunidades a través de las Audiencias Públicas y de las entrevistas en comisiones o personales llevadas a cabo.

Esta ley crea el Consejo de Evaluación e Información Educativa en el marco del Consejo Provincial de Políticas Educativas.

Crea el Consejo Provincial de Educación Técnica y Trabajo con una integración similar a la descrita anteriormente pero acotado al ámbito de la educación técnica.

Incorpora el Proyecto Educativo Institucional, en el artículo 102, Capítulo II.

Regula la verdadera función de las cooperadoras escolares y los clubes de madres que realicen actividades cuyo fin sea sociocultural y en beneficio del hogar común de los hijos y destaca que en ningún caso sus acciones y recursos deben abarcar competencias que son propias del Estado –artículo 107-, tema que ha dado lugar a distintas interpretaciones y sobre el que haremos aclaraciones en el momento oportuno.

Incluye la educación sexual integral, la educación ambiental, la educación vial y prevención de adicciones. Respecto de la educación sexual, debe ajustarse a la Ley 26.150, Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que la define y la incorpora como educación obligatoria en todos los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y del ámbito municipal.

Esta ley reconoce el derecho de los estudiantes a asociarse para participar del funcionamiento de las instituciones educativas a través de centros, asociaciones y clubes de estudiantes, respetando así mecanismos democráticos de representación, artículo 12, inciso e). En su momento haremos conocer nuestra evaluación sobre este inciso.

Establece que el Ministerio de Educación –y esto es muy importante- deberá rendir cuentas de sus acciones ante la Legislatura provincial. Así lo establece el artículo 20, Sección Segunda, Capítulo I.

El Ministerio de Educación informará anualmente a la Legislatura provincial el estado de la gestión educativa y los criterios y mecanismos de evaluación y control de gestión aplicados a los procesos educativos planificados, sus resultados y costos en los diferentes niveles, servicios y localizaciones. Dicho informe será publicado en la página web del Ministerio de Educación. En este sentido tenemos que reconocer y agradecer a este Ministerio

la importancia y legalidad que le está dando al Poder Legislativo de la Provincia y a la representatividad de los legisladores.

Afirma la estabilidad en el cargo para docentes estatales y privados y garantiza que el proceso de modificaciones de planes y programas de estudios, en virtud de la aplicación de la presente ley, no podrá causar ningún tipo de perjuicio moral y/o patrimonial a los docentes. Sería importante recordar aquí el artículo 10, Sección Segunda, Capítulo VIII, que dice: "No podrá incorporarse a la carrera docente quien haya sido condenado por delitos de lesa humanidad o haya incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, conforme lo previsto en el artículo 36º de la Constitución Nacional y en el Título X del Libro Segundo del Código Penal, aun cuando se hubieran beneficiado por el indulto y la conmutación de pena".

Asegura una capacitación docente continua, como derecho de los docentes (artículo 7º, Capítulo II, Sección Primera).

Afirma la jerarquización y especialización en la carrera docente.

Propone un presupuesto educativo como mínimo del 35 por ciento, que debe ser el piso que debe tener el Presupuesto en inversión educativa. Agregamos -a título informativo- que en el 2011 será del 41,2 por ciento, y del Producto Bruto Interno de Córdoba el 7,2 por ciento, siendo el de la Nación el 6 por ciento.

El presupuesto de Educación para el 2011 ha tenido muy en cuenta la educación como debe ser y como hace mucho estamos esperando se le dé el lugar que le corresponde.

Como ya dijimos, esta ley responde a tres leyes o tríada significativa. Estas leyes empezaron sobre las realidades educativas provinciales con un consenso de las provincias en el marco del Consejo Federal de Ministros para tratar de tener una identidad común de educación y recuperar ciertas modalidades que el desarrollo del país necesita.

Esta ley es una norma general para todo el sistema educativo que, por supuesto, no podrá resolver todas las temáticas, las que serán receptadas en el marco de legislaciones particulares, reglamentaciones o vía decreto, pensando hacia dónde estamos caminando, qué educación buscamos, construimos o desarrollamos.

Nadie tiene la palabra justa, ni la receta, ni la solución definitiva. A la historia la vamos construyendo entre todos, como también somos responsables de todo lo que va sucediendo, de lo que no hicimos, de lo que llamamos o miramos para otro lado.

Debemos tener presente que es necesario mirar, aprender, valorar, vincular, acompañar, reconocer, sostener, competir, aportar, soñar con algunas disposiciones que se pusieron en juego en las Audiencias, las que fueron ampliamente valoradas, tanto las positivas como las negativas.

Esta ley introduce cambios que significan crecimiento, madurez, promesas y realidad de buenos frutos. Pero todo cambio viene acompañado de una formación y de una renovación interior y toda acción externa se esteriliza. Óptimas leyes, instituciones, cambios de estructura y acuerdos sociales no se sostienen sin la renovación y un cambio interior en cada uno de nosotros.

Como lo canta Diego Torres: "saber que se puede; querer que se pueda; pintarnos la cara color esperanza y apostar al futuro con el corazón". Eso es lo que pedimos a través de la sanción de esta ley: que apostemos al futuro, que lo veremos no sólo desde el punto de vista institucional sino también desde el punto de vista de la afectividad que merecemos muchos de los que aquí estamos que dedicamos la mitad de nuestras vidas a la docencia y que sabemos muy bien que nuestros docentes, nuestros alumnos y nuestros municipios se merecen esta nueva ley de educación, redactada con toda responsabilidad y conciencia por parte del Consejo de Políticas Educativas y del Ministerio de Educación.

Quiero destacar que hemos valorado los aportes recibidos, tanto los positivos como los negativos porque todo debe servirnos en nuestras vidas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Mabel Genta.

Sra. Genta.- Señor presidente, señores legisladores: voy a referirme a los derechos y deberes de los padres en relación a la educación de sus hijos establecidos en el proyecto de ley 6480/E/10, modificatorio de la Ley 8113, en especial al polémico punto de la supuesta intromisión de la educación religiosa en las escuelas.

El proyecto elevado por el Poder Ejecutivo a esta Legislatura, en su artículo 11, inciso e), sobre el derecho de los padres, establece que sus hijos tienen derecho a recibir, de manera excepcional, en el ámbito de la educación pública de gestión estatal, educación religiosa que les permita aprehender los valores y contenidos básicos de las creencias por las que hubieran optado. Se introduce así una modificación superadora de su antecedente inmediato, la Ley 8113, sancionada en noviembre de 1991 y cuya derogación hoy se propone.

En efecto, el artículo 7º, inciso c), de la mencionada ley, confería a los padres el derecho a que sus hijos reciban en el ámbito de la educación pública estatal, educación religiosa que les permita aprehender los valores y contenidos básicos de la creencia por la que hubieren optado.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que se encuentra en tratamiento, claramente da un carácter opcional a la educación religiosa en el ámbito de la educación pública estatal, apartándose de la equívoca redacción de su antecedente, la Ley 8113.

No obstante, desde algunos sectores arriesgaron las críticas haciendo creer que este proyecto de ley era introductor de la religión en la educación pública. Esto no es así ya que, por un lado, se remarca el carácter opcional de la educación religiosa, superando lo establecido en la Ley 8113. Por otro lado, tal como lo señaló un legislador de la oposición, en 19 años de vigencia de dicha ley jamás se planteó en la realidad la enseñanza religiosa en el ámbito de la educación pública, por lo que mal podría plantearse ahora. Además, se deja fuera un argumento central de carácter constitucional y que analizaremos más adelante.

Es muy claro que el caso de Córdoba no es el de otras provincias como Catamarca, Tucumán o Salta que hoy, en el 2010, tienen educación religiosa católica obligatoria. Los maestros se designan con la anuencia del obispo y cuando éste le quita la licencia permanecen como empleados del Estado porque han sido incorporados a los estatutos docentes.

Una vez desarrolladas en el seno de las Comisiones de Educación, de Legislación General y de Economía las tres Audiencias Públicas en Capital, más las celebradas en Río Cuarto, San Francisco y Cruz del Eje; habiendo escuchado las voces de diversos sectores que se expresaron respecto de la educación religiosa en la educación de gestión estatal -algunos a favor de impartirla en el ámbito de la Educación pública, otros por eliminarla completamente-, los legisladores que acompañamos el proyecto hemos entendido que era necesario establecer un justo equilibrio que asegurara los derechos de unos y otros en el marco de las legislaciones argentina y cordobesa vigentes.

Así y de acuerdo a la Constitución provincial sancionada en 1987, el artículo 11, inciso e), del despacho que hoy ponemos a consideración del Pleno acoge el mandato constitucional provincial del artículo 62, inciso 5), que establece la obligación del Estado cordobés de "asegurar el carácter gratuito, asistencial y exento de dogmatismo de la educación pública estatal" y, además, el de asegurar a los padres el "derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral, según sus convicciones".

Para ello el despacho contempla una modificación del texto enviado por el Ejecutivo que procura conciliar los derechos de todos los habitantes de la Provincia, y de equilibrar lo oído en las Audiencias Públicas, la libertad de conciencia y, además, de cumplir nuestra obligación juramentada de legislador de asegurar la supremacía constitucional provincial como lo hicimos en la redacción del artículo 11, inciso e), una formulación similar a la empleada por la vieja Ley provincial 1420 de Educación Común de 1884, sancionada durante la primera Presidencia de Julio Argentino Roca, cuyo gran impulsor fue Domingo Faustino Sarmiento, de quien no puede ponerse en duda su más sincero y acérrimo anticlericalismo y su convencimiento de la necesidad de impartir una enseñanza laica.

La Ley 1420, en su artículo 8º, rezaba: "La enseñanza religiosa sólo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos a los niños de su respectiva comunión y antes o después de las horas de clase".

Por ello, la redacción final del artículo 11, inciso e), expresa el derecho de los padres a que sus hijos reciban de manera opcional, en el ámbito de la educación pública de gestión estatal, educación religiosa que les permita aprehender los valores y contenidos básicos de la creencia por la que hubieren optado como contenido extracurricular, sin financiamiento estatal y a cargo de los ministros autorizados por los diferentes cultos y que, por interpretación sistémica de las normativas argentina y cordobesa, no podrán ser otros que aquellos cultos reconocidos a nivel nacional por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, garantizando la libertad de conciencia y el mantenimiento del orden jurídico.

Optar es inherente a un régimen democrático y a la formación del ciudadano. En este momento se habla de respetar, no de imponer; no se presenta en el núcleo duro del currículum nada sobre el tema religioso, ya que será considerado como contenido extracurricular y fuera del horario escolar e impartido por los ministros de los distintos cultos.

De esta forma se asegura tanto el cumplimiento del artículo 62, inciso 5), de la Constitución provincial como el del artículo 12, inciso 4), de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, cuando dice: "Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". No hace falta recordar que el referido pacto es parte integrante de la legislación argentina y cordobesa por imperio constitucional.

También se da garantía legal de que aquellos que opten por la enseñanza religiosa en las escuelas de gestión estatal no serán financiados por el Estado, es decir, no será una carga financiera para aquellos que hagan otra opción. Se asegura también que los docentes del sistema provincial no deberán afrontar de ninguna manera la obligación de impartir la enseñanza religiosa optativa.

Así, pensamos haber arribado a un equilibrio que asegura los derechos de todos: los de aquellos que quisieran optar por una educación religiosa en la educación pública y los de aquellos que no quieran hacerlo, apartándonos de los que pretenciosamente fundados en la supuesta división que este tema generaría en la sociedad, no sólo ignoran la Constitución y la ley sino que ignoran el hecho de que nos hallamos inmersos en una sociedad fuertemente impregnada de creencias religiosas -hecho que pudimos comprobar en las diferentes Audiencias Públicas-, ignoran que el dogmatismo no es patrimonio exclusivo de los religiosos. También ignoran que lo que se defiende en este caso no es la religión sino la opción democrática, la libertad de conciencia y los derechos humanos. Esos pretenciosos que se obstinan en ignorarlo se arrojan, además, representaciones de supuestos grandes colectivos, agravados por la supuesta intromisión religiosa, paradójicamente, haciendo gala de su ignorante arrogancia desde su minúscula y casi nula representatividad.

Por todo ello, señor presidente, y por las razones que darán los demás miembros informantes, estamos convencidos de la necesidad de dar aprobación a este proyecto del Poder Ejecutivo, con las modificaciones introducidas por el arduo trabajo conjunto de las Comisiones de Educación, de Legislación General y de Economía, que han receptado las inquietudes de aquellos que quisieron hacer oír su voz, lo que da como fruto un instrumento legal ampliamente legitimado y discutido, por lo que solicito a mis colegas su acompañamiento a este proyecto de ley.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Rosso.

Sra. Rosso.- Señor presidente, señores legisladores: en esta ocasión me referiré puntualmente a una temática inserta en el proyecto de ley en tratamiento, que ha despertado algunas inquietudes entre docentes y alumnos al momento de producirse las Audiencias Públicas y, en virtud de ello, considero oportuno ampliar y aclarar. Me refiero a las prácticas educativas incorporadas en dos artículos del proyecto; en la educación secundaria, artículo 40, y en la educación técnica profesional, artículo 66.

A efectos de ilustrar el proyecto, conviene recordar que las prácticas profesionalizantes son aquellas estrategias formativas integrantes en la propuesta curricular con el propósito de que los alumnos consoliden, integren y amplíen las capacidades, y sabemos que se corresponden con el perfil profesional en el que se están formando. Son organizadas por las instituciones educativas y referidas en la situación de trabajo, y desarrolladas dentro o fuera de las escuelas.

Se trata entonces de contenidos curriculares obligatorios que integran el campo formativo denominado “formación en ambientes de trabajo”, según lo establecido en la resolución del Consejo Federal de Educación, herramienta que reglamenta la Ley Nacional de Educación Técnica Profesional, número 26.058.

Estas prácticas pueden asumir diferentes formatos, siempre y cuando mantengan con claridad los fines formativos y criterios que se persiguen con su realización; entre otros: pasantías en empresas, organismos estatales o privados, o en organizaciones no gubernamentales; proyectos productivos articulados entre la escuela y otras instituciones o entidades; proyectos didácticos productivos institucionales orientados a satisfacer demandas determinadas específicas, producción de bienes o servicios destinados a satisfacer necesidades de la propia institución escolar; emprendimientos a cargo de los alumnos; organización y desarrollo de actividades y/o proyectos de apoyo en tareas técnicas profesionales demandadas por la comunidad; diseño de proyectos para responder a necesidades o problemáticas puntuales de la localidad o la región; alternancia de los alumnos entre la institución educativa y ámbitos del entorno socio productivo local para el desarrollo de actividades productivas; propuestas formativas, organizadas a través de sistemas duales; empresas simuladas.

Su objeto fundamental es poner en práctica saberes profesionales significativos sobre procesos socio-productivos de bienes y servicios que tengan afinidad con el futuro entorno de trabajo, en cuanto a su sustento científico-tecnológico y técnico. Esto implica prácticas vinculadas al trabajo, concebidas en un sentido integral, superando una visión parcializada que lo entiende exclusivamente como el desempeño en actividades específicas, descontextualizadas de los ámbitos y necesidades que les dan sentido, propias de una ocupación determinada o restringida a actividades específicas de lugares o puestos de trabajo.

Asimismo, pretenden familiarizar e introducir a los estudiantes en los procesos y el ejercicio profesional vigente para lo cual utilizan un variado tipo de estrategias didácticas ligadas a la dinámica profesional caracterizada por la incertidumbre, la singularidad y el conflicto de valores. Se integran sustantivamente al proceso de formación, evitando constituirse en un suplemento final, adicional a ella.

El diseño e implementación de estas prácticas se encuadra en el marco del proyecto institucional y, en consecuencia, es la institución educativa la que, a través de un equipo docente especialmente designado a tal fin y con la participación activa de los estudiantes en su seguimiento, se encargará de monitorearlas y evaluarlas.

Por lo dicho, señor presidente, y atento a que en algún momento se planteó la posibilidad de que el ejercicio de estas prácticas pudiera confundirse con alguna modalidad de trabajo encubierto en relación de dependencia, hemos producido en los dos artículos en cuestión las modificaciones que consideramos importantes para zanjar todas las dudas y expresar con claridad que las prácticas educativas son nada más ni nada menos que eso, prácticas educativas, en el marco de un proyecto institucional.

Así, el artículo 40 del proyecto en cuestión, en el marco de la educación secundaria, queda redactado de la siguiente manera: "Prácticas educativas. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba propiciará la vinculación de las instituciones educativas secundarias con el mundo de la producción, el trabajo y otros organismos según su orientación. En este marco podrán realizarse prácticas educativas en las escuelas, empresas, organismos estatales, entidades culturales y gremiales, que faciliten al alumno el conocimiento de las organizaciones, el manejo de tecnologías y le brinde experiencias adecuadas a su formación y orientación vocacional.

La práctica educativa complementa la formación del alumno, pero en ningún caso debe ser considerada trabajo en los términos de la Ley Nacional Nº 20.744, o pasantía conforme lo define y establece la Ley Nacional Nº 26.427".

Y el artículo 66, en el marco de la educación técnica profesional, como sigue: "Artículo 66.- Prácticas educativas. Cuando las prácticas educativas se realicen fuera del ámbito escolar, se garantizará la seguridad de los alumnos y la auditoría, dirección y control a cargo de los docentes, por tratarse de procesos de aprendizaje y no de producción a favor de los intereses económicos que pudieran haber a las empresas.

En ningún caso los alumnos sustituirán, competirán o tomarán el lugar de los trabajadores de la empresa.

La práctica educativa complementa la formación del alumno, pero en ningún caso debe ser considerada trabajo en los términos de la Ley Nacional Nº 20.744".

Destaco que en el artículo 66 no ha sido excluido el tema de las pasantías educativas ya que, por tratarse de prácticas educativas en el ámbito de la formación profesional bien puede adaptarse a las mismas el sistema de pasantías propiciado por la Ley nacional 26.427.

Señor presidente: las prácticas educativas son una herramienta fundamental para vincular a la educación con el mundo del trabajo, y su inclusión en el marco de esta Ley General de Educación le da a la temática la trascendencia que merece.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Busso).- Gracias, señora legisladora.

Tiene la palabra la señora legisladora Gamaggio Sosa.

Sra. Gamaggio Sosa.- Señor presidente: he pedido la palabra para referirme al artículo 12 del proyecto en discusión, específicamente al derecho de los estudiantes de asociarse para participar en la vida institucional de sus escuelas.

En este sentido, uno de los aportes más interesantes de este proyecto es el reconocimiento de la importancia que tiene la participación de los alumnos, no sólo de los jóvenes que asisten a las escuelas secundarias sino también de los niños de jardín de infantes, de la primaria, e incluso de quienes asisten a los institutos superiores dependientes de la Provincia.

Siguiendo este principio, toma especial relevancia la inclusión de todas las formas de organización y asociación que pudieran acontecer en los distintos ámbitos escolares en el inciso e) del artículo 12.

Además de los centros de estudiantes, se incorporan las asociaciones y clubes de estudiantes.

Por otra parte, cabe señalar que respecto a los centros estudiantiles el Ministerio de Educación de Córdoba dictó, en el año 2009, la Resolución 124, a través de la cual no sólo se autoriza la constitución y funcionamiento de estos organismos que representan a los alumnos sino que, además, propone un estatuto modelo, con la recomendación de que sea adaptado por la asamblea general de alumnos de las escuelas secundarias a la realidad particular de cada institución.

A continuación daré lectura al artículo 12 del proyecto de ley mencionado: “Derechos y Deberes de los Alumnos. Los/as alumnos/as de las instituciones educativas de la Provincia tienen los siguientes: derechos: e) A asociarse para participar en el desarrollo de la vida institucional, a través de centros, asociaciones y clubes de estudiantes en relación con las edades y de acuerdo con lo dispuesto por las reglamentaciones que al efecto se dicten”.

Voy a pasar a leer la Resolución 124, del Ministerio de Educación, del año 2009: “Artículo 1º: Autorizar la constitución y funcionamiento de un organismo de representación estudiantil, bajo la denominación de Centro de Estudiantes, en cada una de las instituciones educativas de gestión estatal dependientes de la Dirección General de Educación Profesional, de la Dirección General de Educación Superior, de la Dirección General de Regímenes Especiales y de la Dirección de Jóvenes y Adultos. Similar autorización rige para los establecimientos educativos de gestión privada adscriptos a la Provincia y dependientes de la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza, en los niveles y modalidades referidos precedentemente. Artículo 2º: Aprobar el Estatuto Modelo para Centros de Estudiantes, que como Anexo I forma parte integrante de la presente resolución. Artículo 3º: Recomendar a la Asamblea General de Alumnos y al Cuerpo Directivo de los establecimientos educativos comprendidos en la presente medida, como entidades facultadas para la aprobación y visado definitivo del Estatuto de cada Centro de Estudiantes, la adecuación de aquél a las características propias de la institución y a las modalidades e idiosincrasia de la comunidad educativa, sin perjuicio de respetar –en todos los casos- la base dogmática del estatuto determinada en el artículo 3º del Estatuto modelo.

Habiendo aclarado este punto, agradezco la concesión del uso de la palabra.

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Estela Bressan.

Sra. Bressan.- Señoras legisladoras, señores legisladores, en primer lugar, quiero agradecer a la presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Informática, Evelina Feraudo, y a todos los integrantes de la Comisión de Legislación General y Economía por darme la posibilidad de fundamentar en el tratamiento de este proyecto de ley de Educación 6480 la educación artística.

Por mi historia de vida en las artes, cuando conocí el anteproyecto de la reforma de la Ley 8113 sentí una enorme alegría porque aparecía la educación artística.

No es casualidad, señoras legisladoras y legisladores, nuestro Gobierno tiene testimonios concretos del compromiso con la cultura y las artes; si no, basta visualizar la Ciudad de las Artes, el Museo de Ciencias Naturales, el Museo Evita en el Palacio Ferreyra, el rediseño del Teatro Real, obras que realizó nuestro ex Gobernador José Manuel De la Sota y completa nuestro actual Gobernador Juan Schiaretti, con la inauguración de la remodelación del Museo Caraffa, la iluminación del Teatro San Martín, la puesta en valor del Camino Real, la Ley de Reconocimiento al Mérito Artístico.

Luego de escuchar todos y cada uno de los aportes realizados por los...

Sr. Presidente (Busso).- Solicito a los señores asesores que están presentes que hagan silencio para poder escuchar a la señora legisladora.

Continúa en el uso de la palabra, señora legisladora.

Sra. Bressan.- Luego de escuchar todos y cada uno de los aportes realizados por los alumnos y alumnas, representantes de organizaciones involucradas con las artes, por los padres y madres, por los ciudadanos y ciudadanas en las Audiencias Públicas, en las reuniones que sostuvimos en nuestros despachos y en las escuelas de artes efectuamos agregados y modificaciones que enriquecen y potencian la educación artística en esta nueva ley.

Aparece por primera vez en el artículo 4º, que se refiere a los fines y objetivos de la Educación, el inciso f), que establece un objetivo general garantizando la educación artística integral y continua que permita la apropiación de los distintos lenguajes.

Muchas voces se escucharon reclamando la incorporación de las artes y las humanidades en los distintos artículos de la ley. Con alegría les digo que “artística y humanística” están en la generalización del ejercicio del derecho a la educación en el artículo 6º; “artística y humanística” están en las características de la Educación Superior; “artística y humanística” están en el artículo 47 referido a las opciones académicas.

Entre las modificaciones sumamente significativas se agregaron las artes en el artículo 39, que habla de los objetivos de la educación secundaria, y, además, las incluimos en las actividades de los centros culturales.

Los escuchamos a todos y cada uno; y con enorme satisfacción les digo que no sólo tuvimos en cuenta la Ley nacional 26.206 –como nos pidieron– sino que enriquecimos los artículos que hablan de la educación artística estableciendo las características de la misma en sus distintos lenguajes: su “garantía de calidad” en los artículos 72 y 73; y en el artículo 74, cuando habla de la formación específica, aparece el texto que dice: “Todos los alumnos en el

transcurso de su escolaridad obligatoria tienen la oportunidad de desarrollar su sensibilidad y su capacidad creativa en, al menos, dos disciplinas artísticas”.

Hicimos los agregados y modificaciones porque estamos convencidos de que la educación artística desarrolla la sensibilidad y la creatividad, el encuentro con nuestro mundo interior; porque las artes establecen una pausa, un encuentro de sensibilidades y alimentan lo más importante que tenemos los seres humanos, que es nuestro espíritu; y porque esta Ley de Educación considera que la educación artística es indispensable para la formación de los alumnos.

Solicito, señoras legisladoras y señores legisladores, la aprobación de este proyecto de esta nueva Ley de Educación de nuestra Provincia de Córdoba.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Pozzi.

Sr. Pozzi.- Señor presidente, antes de dar inicio a mi alocución, solicito que se tenga en cuenta el petitorio efectuado por parte de algunos bloques que conformamos la oposición –tal como lo manifestamos ayer en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, luego de la cual algunos legisladores se reunieron con usted y con el presidente del bloque oficialista–, en el sentido que se establezca alguna metodología para posibilitar el ingreso a este recinto de representantes de alumnos y padres.

Finalmente, viene a tratamiento de esta Legislatura el proyecto de ley de Educación General 6480/E/10, en reemplazo de la Ley 8113, dictada en el año 1991, y que fuera la primera Ley de Educación General dictada por una Provincia en el país.

Antes de tratar en particular el presente proyecto de ley, debemos formular dos preguntas esenciales sobre este tema: en primer lugar, ¿es necesaria una nueva Ley de Educación, que reemplace a la vigente Ley 8113? En segundo término, ¿es este proyecto de ley el que mejor cumple con el objetivo de establecer la mejor política educativa ajustada a la realidad actual? A estos interrogantes los debatimos extensamente en el seno de nuestro bloque y de nuestro partido, así como en diferentes ámbitos sociales en los que tuvimos la oportunidad de participar como legisladores, para analizar el proyecto que nos ocupa.

Respecto de la primera pregunta, debo destacar que existe un gran consenso respecto de la necesidad de introducir algunas modificaciones a la Ley 8113, a los fines de adecuarla a la realidad vigente, muy distinta a la de los años '90. Asimismo, resulta imprescindible tomar en consideración el actual contexto normativo, principalmente a partir de la nueva Ley de Educación Federal y de los convenios internacionales –como la Convención sobre los Derechos de los Niños y Adolescentes– a los que ha adherido nuestro país.

Con relación a la segunda pregunta que efectuamos, luego de la lectura detenida de los artículos que integran el proyecto de ley en tratamiento se observa que, más que una nueva ley, se ha tomado como base la Ley 8113 y, a partir de ella, se han elaborado y discutido las modificaciones tendientes a su adecuación a la realidad actual. Por eso, más que hablar de una “nueva ley” –tal como lo expresó el propio Ministro de Educación, junto a representantes del Consejo Provincial de Políticas Educativas, cuando asistieron a esta Legislatura– debiéramos referirnos a la “actualización de la Ley 8113”.

Esta decisión –que fue tomada en la etapa inicial de gestación de este proyecto de ley– nos parece acertada, puesto que implica, en definitiva, un justo reconocimiento a la Ley 8113, la que constituyó una herramienta legal fundamental en la política educativa de Córdoba. En tal sentido, debo decir que me tomé el tiempo de leer las versiones taquigráficas de las Cámaras de Diputados y Senadores de nuestra Provincia, correspondientes a las sesiones en que se trató esa ley; en esa oportunidad, el legislador Luna, por el peronismo, defendió el rechazo de su bloque al proyecto argumentando lo siguiente: “Esta ley no producirá ningún beneficio, ni en los docentes, ni en los padres, ni en los alumnos, que tendrían que haber sido, en definitiva, los únicos destinatarios de este tremendo esfuerzo realizado por toda la comunidad cordobesa y que ahora desaprovecha un mero criterio político. Esta ley va a ser un retroceso, va a significar la anarquía y –lo más grave– la división de la sociedad cordobesa, una división que creíamos absolutamente superada por la madurez del pueblo y, por ende, de sus dirigentes”.

“Sin embargo, señor presidente, hoy vemos resurgir a aquellos que, escondidos en problemas o actitudes ideológicas poco claras o que por lo menos no son totalmente transparentes, van a retrotraer a la sociedad cordobesa a esta división que entre todos habíamos ido superando. Decimos esto y no lo podemos callar, porque tiene que quedar debidamente constancia histórica de que esta ley no será producto del consenso, y no sólo eso sino que estará en contra de la voluntad de todos los actores del quehacer educativo que en todas sus manifestaciones y documentos así lo han dejado establecido”.

Como se observa, señor presidente, son todos argumentos fatalistas y mentirosos pero, afortunadamente, como dijo en aquella oportunidad el senador, se dejó constancia

histórica de dichos argumentos y la historia les dijo a ese legislador y a aquel bloque que se equivocaron, porque la 8113 no significó anarquía, división ni retroceso, todo lo contrario, fue un instrumento legal que permitió un gigantesco avance en la política educativa de nuestra Provincia, a punto tal que la base de este proyecto de ley es, precisamente, la 8113, muchos de cuyos artículos se han repetido sin alteración alguna.

Señor presidente: somos una oposición responsable y nos hacemos cargo de lo que decimos, por eso, no vamos a plantear que la sanción de esta nueva ley implicará una situación de anarquía o de resurgimiento de ideas que retrotraerán a la sociedad cordobesa a una división ni mucho menos. Sin embargo, resultan interesantes algunos de los argumentos que formuló dicho legislador justicialista para oponerse a la ley, como el hecho de que fue tratada a las apresuradas y votada entre gallos y medianoche. No me imagino qué diría el mismo legislador respecto del proyecto que ha impulsado su partido con un tratamiento y discusión mucho menor en tiempo y en profundidad al que tuvo la 8113, seguramente se hubiera sentido demasiado incómodo si tuviera que defender este proyecto. Pero no vamos a hacer futurología, señor presidente, ni analizar argumentos contrafácticos, la Ley 8113 fue producto de un esforzado trabajo teniendo en cuenta el pensamiento de los sectores interesados por la educación y abrevando en todas las experiencias que constituyeron un aporte a la educación en nuestro país, agotándose todas las instancias de un largo debate fuera y dentro del Parlamento cordobés.

La discusión se inició en el Congreso Pedagógico donde participaron todos los sectores interesados y sus conclusiones fueron recogidas por el Poder Ejecutivo para proceder a elaborar el proyecto y girarlo a la Cámara de Diputados de la Provincia. En Diputados se trabajó conjuntamente a lo largo de mucho tiempo en la amplitud y el espíritu democráticos dignos del tema en cuestión.

Numerosas personas hicieron llegar a la Comisión de Educación y Cultura del Senado sus propuestas en representación de instituciones y en forma individual, incluyendo miembros de organismos internacionales, como la OIDEL, hasta grupos de estudiantes secundarios.

Estamos hablando de un verdadero proceso de elaboración de una ley de semejante envergadura cuya realización llevó más de tres años, y puede verse el contraste con la presente ley que fue trabajada durante 17 meses por el Consejo Provincial de Políticas Educativas con representación de distintos sectores como universidades, entidades gremiales, representantes de los tres Poderes del Estado, entre otros. Sin embargo, no estuvieron allí representados dos sectores que, a nuestro juicio, son fundamentales en nuestro sistema educativo: los estudiantes y los padres.

Cuando vinieron del Ministerio de Educación se les preguntó acerca de por qué se excluyó del debate sobre la elaboración del proyecto a estos dos sectores fundamentales de la educación, y nos respondieron que en aquella oportunidad no había centros de representación de dichos sectores, lo que no es cierto porque los centros de estudiantes existen desde hace mucho tiempo; aunque hubiese sido materialmente complicada su intervención en el Consejo, sí existía un modo de asegurar su participación, ya sea recibéndolos en el Consejo o en el Ministerio, que sólo se hizo después de la toma de las escuelas. Otro modo de asegurar su participación hubiera sido mediante el envío del proyecto a las escuelas durante un tiempo razonable para que fuera analizado por toda la comunidad educativa, con la adecuada discusión, que garantizara la mayor participación posible. El proyecto de ley fue enviado a las escuelas dándose solamente un día para que los docentes analizaran sus 113 artículos.

Si bien se dijo que debía invitarse a la comunidad de los establecimientos educativos, no se hizo difusión alguna del encuentro, la mayoría de los docentes -de esa media jornada- leyeron por primera vez el proyecto e, incluso, se les dijo que, más allá de las sugerencias que desearan hacer, iba a salir sin modificación alguna. Esto me lo comentaron varios docentes que participaron de la discusión en estos establecimientos.

Como se imaginarán, muchas instancias de participación, a nuestro juicio, fueron un profundo fracaso, sólo se hicieron para justificar que el proyecto había sido tratado en cada comunidad educativa, pero la realidad es que la asistencia y la participación fue mínima, los padres y alumnos ni siquiera se enteraron del proyecto y de la posibilidad de asistir al encuentro; los docentes apenas tuvieron tiempo de leer el proyecto de ley, y prueba de ello es que ninguna modificación o sugerencia fue recogida en ese día.

Como es de público conocimiento, no se pudo silenciar a los estudiantes y a sus padres ni privarlos de su derecho a opinar sobre este proyecto de ley, y al no abrir el Gobierno provincial ningún canal para que expresen su voz, debieron tomar las escuelas y provocar la paralización de la actividad educacional en nuestra Provincia, sobre lo cual el Gobernador y su Ministro de Educación aún no asumieron la correspondiente responsabilidad.

Es cierto que el primer motivo de la toma de las escuelas –que constituyó una verdadera explosión, producto del ahogo y de la sordera de este Gobierno provincial a los reclamos de los estudiantes, docentes y padres- fue el calamitoso y deplorable estado de las escuelas de la Provincia, principalmente las secundarias.

Señor presidente, yo me pregunto cómo se puede hablar de políticas educativas o de la implementación de una nueva Ley General de Educación cuando los establecimientos educativos –que constituyen el lugar natural donde se imparte la educación- se encuentran en estado deplorable con problemas sanitarios, de paredes, pisos, y con posibilidades ciertas de dañar a los alumnos y al personal educativo. Nos cansamos de presentar desde nuestro bloque resoluciones y pedidos de informes tendientes a la reparación de escuelas, y poco y nada se hizo al respecto.

Como consecuencia de la toma de las escuelas que tuvo como principales perjudicados a los estudiantes –de lo cual, repito, aún no se ha hecho responsable el Ejecutivo- se escucharon las propuestas de los estudiantes, padres y algunos docentes que también participaron. Sin embargo, no fueron incluidas en el proyecto sus propuestas, sino que fueron debatidas luego por el Consejo de Políticas Educativas y enviadas a esta Legislatura en forma de anexo a la ley para respetar “el trabajo” de dicho Consejo.

Repito, las propuestas de los estudiantes, padres y algunos docentes, que constituyen una voz fundamental de nuestro sector educativo, sólo fueron escuchadas después de que se tomaron los colegios y no fueron tenidas en cuenta en el proyecto de ley. Esa voz debió haber sido escuchada y permitido su participación en el Consejo de Políticas Educativas al momento de elaborarse y discutirse cada uno de los artículos del proyecto de ley. Parece que su opinión fuera secundaria y se la remite como un anexo para que la tenga en cuenta la Legislatura.

Valoramos la participación de cada uno de los integrantes del Consejo pero, ¿me pueden explicar quién puede estar más calificado que los estudiantes, sus familias y los educadores para opinar y debatir sobre el presente proyecto de ley?

Me gustaría que explicaran por qué las propuestas elaboradas por los estudiantes y los padres, algunas tan valiosas e importantes que tienen la anuencia del Ejecutivo, no fueron discutidas en el Consejo de Políticas Educativas. ¿Por qué esta ley, tan importante para el futuro educativo de la Provincia, tenía que salir sí o sí antes de fin de año y no se podía convocar nuevamente al Consejo para tratar esta nueva propuesta e integrarla al proyecto de ley?

Son interrogantes que deslegitiman socialmente este proyecto, que debiera ser el resultado de un importante consenso porque, repito, estamos discutiendo la educación que queremos para nuestra Provincia para los próximos 10 ó 20 años.

Continuando con el tratamiento del proyecto, el mismo fue enviado por el Ejecutivo y en su anexo se incluyeron las sugerencias de los estudiantes y padres. En esta Legislatura, como se sabe, se han realizado varias Audiencias, algunas en el interior de la Provincia, donde se pudieron escuchar diferentes opiniones y propuestas de mejoramiento, correcciones y sugerencias de modificaciones muy importantes.

Desde la Unión Cívica Radical también se participó en estas Audiencias y allí expresamos nuestra opinión sobre el anteproyecto de ley, que se plasmó en doce puntos que fueron incorporados en la Audiencia Pública.

Como expresé, se hicieron numerosas y extensas Audiencias, y así como se expresó la oposición de nuestro partido, también se escucharon las voces de diferentes sectores de la sociedad.

Es verdad que a partir de las sugerencias presentadas en las Audiencias y en el anexo que contenía la oposición de muchos padres y alumnos se han realizado varias modificaciones al texto enviado por el Poder Ejecutivo. No obstante ello, pensamos que en general las modificaciones son más formales que sustanciales, una tentativa por mostrar a la sociedad que han sido atendidos sus reclamos, en definitiva, un intento de dar mayor legitimidad a un proyecto que no cuenta con el apoyo social que requiere una ley en la cual se debate la educación a futuro de nuestra Provincia.

Además, si estamos planteando la necesidad de una discusión y análisis serio del presente proyecto, es inconcebible que, como legisladores, conozcamos el despacho de comisión con sus modificaciones recién un día antes de ser tratado en este recinto.

El oficialismo no parece entender que el defecto principal de este proyecto de ley es no haber garantizado la participación y tratamiento que exigía. Es absolutamente irresponsable y poco serio que hoy estemos tratando el despacho presentado en el día de ayer y que ha sido tratado en dos reuniones de las comisiones conjuntas, como bien se dijo.

Puede verse el contraste apenas se comienza a investigar sobre los antecedentes de la sanción de la Ley 8113, la que fue tratada ampliamente en las dos Cámaras legislativas, con participación externa e interna, lo que garantizó un mayor debate y consenso;

lamentablemente hoy, una Legislatura Unicameral -otra de las innovaciones del Gobierno provincial de Unión por Córdoba- atentó contra la institucionalidad del Poder Legislativo debilitando el debate y discusión e imponiendo un sistema que hoy no resulta representativo de la población. Al tratamiento unicameral le debemos agregar que el mismo se hace en forma acelerada, presentándose un día y aprobándose al siguiente. Repito: el proyecto que define el futuro de nuestra educación provincial es poco responsable y poco serio.

Volviendo al proyecto de ley, nos parece entonces que su principal defecto está en su proceso de gestación. Si bien pudo haber sido acertada la constitución del Consejo de Políticas Educativas, similar a lo que fue el Congreso Pedagógico para la Ley 8113, se excluyeron en dicha discusión dos importantes actores del sistema educativo, como son los padres y alumnos; se los marginó de este importante debate sobre qué educación queremos a futuro, y cuando se recibieron sus propuestas no fueron incorporadas al proyecto, enviándose como anexo.

No se atendió, como consta en las actas del Consejo, la necesidad de comunicar a las instituciones qué puntos se estaban analizando en el mismo, y establecer como mínimo dos jornadas de debate explicitando claramente los acuerdos y las diferencias.

La ausencia de participación en el debate de este importante sector educativo, el no haber existido una adecuada difusión y discusión del proyecto en las escuelas -oportunidad en la que podía intervenir toda la comunidad educativa perteneciente a la zona donde se encuentra el establecimiento- hace que el presente proyecto carezca de legitimación social. Y esto no lo decimos sólo nosotros, ni se trata de un cuestionamiento político; esto lo ha expresado una de las entidades educativas más importantes de nuestra Provincia como es la Universidad Nacional de Córdoba, que ha rechazado formalmente el presente proyecto; a dichos fines, invito a los legisladores a leer la Resolución 1084 del 26 de octubre de este año, que aprobó en una sesión extraordinaria el Consejo Superior de la Casa de Trejo. La resolución señala expresamente en el artículo 1º: "Resulta imprescindible que la comunidad educativa de Córdoba y la ciudadanía en general, realice un profundo debate sobre la futura ley de educación provincial, garantizando los tiempos que este proceso requiere previo a su aprobación."

El artículo 2º, por su parte, expresa: "Aprobar el documento que como Anexo se acompaña y que contiene el posicionamiento crítico de este Honorable Consejo Superior sobre el anteproyecto de ley de Educación provincial. En tal sentido, este Cuerpo no avala el texto del anteproyecto de ley propuesto por el Poder Ejecutivo provincial."

Si bien el documento anexo ratificado por el Consejo Superior reconoce que el anteproyecto concibe a la educación como bien público y derecho personal y social que debe ser garantizado por el Estado, también advierte sobre la necesidad de realizar una amplia consulta que garantice espacios y tiempos adecuados de participación y un profundo debate público. En ese sentido, recomienda realizar los esfuerzos conducentes a realizar esa tarea inconclusa.

Para la Casa de Trejo corresponde plasmar expresamente en la ley las garantías de financiamiento de la educación pública estatal por parte del Estado. Por ello, la legislación debe evitar en su articulado ambigüedades o resquicios. Se propone revisar la posibilidad de aportes comunitarios para el sostenimiento de la educación, eliminando el inciso j) del artículo 3º, sobre integración de aportes comunitarios y sectoriales.

Además, recomienda corregir el artículo 105 -artículo 107 del despacho- y establecer funciones específicas para los organismos de apoyo -asociaciones cooperadoras, clubes de madres, etcétera- pero no la captación de recursos.

Respecto a la educación técnica y a la implementación de pasantías, la recomendación de la Universidad Nacional es que se asegure que la experiencia laboral educativa fuera de la institución escolar no se desvirtúe con prácticas orientadas por intereses económicos sectoriales. También señala la necesidad de que se establezca expresamente el derecho de los alumnos a organizarse bajo distintas formas y dar garantías a ese derecho. Aunque el anteproyecto contempla el derecho de los estudiantes a toda forma de agremiación -asociaciones, centros de estudiantes, etcétera-, para la Universidad Nacional debería incluirse en el apartado sobre las instituciones educativas la obligación de garantizar su expresión en las escuelas como espacios de construcción de ciudadanía.

Se recomienda también revisar la conformación y el rol del Consejo Provincial de Políticas Educativas de forma que se habilite la expresión de todos los sectores involucrados. Asimismo, subraya la importancia de que los diferentes niveles del sistema educativo deberían garantizar espacios de participación democrática de todos los actores de la comunidad educativa. El anteproyecto también debería plantear con más claridad el avance hacia la definición de Consejo de Escuela, donde estén representados los docentes, estudiantes y padres, a través de sus propias instancias de agremiación.

La Universidad Nacional de Córdoba sostiene la necesidad de revisar el articulado para garantizar la no superposición de ofertas de carreras, ya que el Estado provincial tiene potestad para crear centros universitarios y de estudios avanzados.

Finalmente, el texto refuerza la necesidad de profundizar el debate con análisis reflexivos e informados sobre el contenido del anteproyecto, fortaleciendo la construcción social sobre el concepto de educación pública en Córdoba.

Como se observa, la Universidad Nacional de Córdoba en dicha resolución reconoce la “indiscutible significación cultural” que tiene un instrumento normativo sobre la Educación como el que estamos tratando, pero considera que el mismo requiere plena legitimidad social así como las garantías de un debate informado y ampliamente participativo de todos los involucrados. Esto no se ha dado en el presente proyecto de ley, por eso la oposición de la Alta Casa de Estudios.

Señor presidente: rescato el valor y la responsabilidad social de nuestra Universidad Nacional para manifestar formalmente su rechazo al proyecto de ley en tratamiento, las razones de ello y, además, acompañar un conjunto de propuestas altamente valiosas, las cuales, desafortunadamente, no han sido consideradas en la presente iniciativa.

Me pregunto cómo se puede acompañar un proyecto de ley que no cuenta con el respaldo de la Universidad Nacional cuando imagino que la mayoría de los estudiantes que egresan de nuestras escuelas estatales, seguramente, continuarán sus estudios en dicha Universidad; es decir, estamos frente a otro actor fundamental de nuestro sector educativo que pidió mayor debate y participación, que formuló importantes propuestas al proyecto y, sin embargo, no han sido tenidas en cuenta.

Esto que reclamamos también fue expresado por un miembro del Consejo de Políticas Educativas, representante de una entidad gremial docente, que decía –y leo textualmente de la versión taquigráfica-: “Quiero agregar que también tuvimos demandas y planteamientos internamente críticos de compañeros y compañeras, porque la metodología y el proceso comunicacional no se dio exactamente en los tiempos que muchas veces se reclama para poder llegar a un consenso sobre una Ley de Educación, que no es pavada.”

En resumidas cuentas, señor presidente, no ha existido el debate, difusión y participación que exigía un proyecto de ley de semejante envergadura en la que, repito, estamos discutiendo la política educativa provincial a futuro.

Recientemente escuchaba al analista internacional Andrés Oppenheimer, quien había visitado Finlandia y, al entrevistarse con su Primera Ministra, le preguntaba cuál era el secreto para que su país estuviera primero siempre en todos los rankings del mundo, tan diferente, como lugar más agradable para vivir, desocupación, crecimiento global, etcétera y la respuesta fue simplemente, “educación, educación y educación”.

Todos sabemos que si queremos discutir la Provincia o el país que queremos a futuro, se debe empezar con el tema de la Educación y es por eso que en dicho debate amplio –y no excluyente- deben participar todos los sectores vinculados a ella, pero también el resto de la sociedad a través de los mecanismos que correspondan.

Por eso nos preocupa especialmente la situación de abandono escolar que, como reconoció el Ministro en nuestra Provincia, es altísimo, sobre todo en el secundario. Dijo que si analizamos el número de alumnos que ingresan a primer año y luego lo comparamos con la cantidad que egresa del sexto año, observamos que el abandono supera el 50 por ciento. Nos llama la atención que se suelte dicho número y luego se justifique diciendo que, de todos modos, se trata de un problema nacional y nada refiere sobre lo que se ha hecho desde hace 11 años para evitar dicha situación; ese número de deserción es el fracaso manifiesto de la política educativa llevada adelante por este Gobierno y es obvio que esto no se resuelve aprobando una ley, pero me preocupa que no se vean acciones tendientes a revertir esta problemática.

Digo estas cifras, y al mismo tiempo me pregunto –porque lo desconozco- cuántos de ese 50 por ciento que finaliza el secundario logra ingresar y terminar estudios terciarios o universitarios. Seguro que muchos menos, de allí la importancia y lo valioso de la opinión de nuestra Universidad Nacional. Por eso, también nos preocupa el deterioro y estado precario de varios establecimientos educativos en nuestra Provincia, porque cada chico que deja de estudiar simplemente es un peor futuro para todos en la sociedad del mañana.

Nuestro partido, la Unión Cívica Radical, ha privilegiado siempre la educación como uno de los motivos de mayor preocupación, porque existe la convicción de que en política educacional se puede pecar por omisión o por negligencia pero en todos los casos en que se descuida la formación cultural del pueblo se contribuye a la degradación del hombre. La formación cultural del pueblo es condición ineludible para su liberación.

Todos coincidimos en que para ser cumplidos los objetivos y fines de una política educativa lo primero que debe atenderse es el factor económico, es decir, la financiación de dicho proyecto educativo. Por esa razón, en la Ley 8113, en su artículo 82, se estableció que

el Estado provincial garantizaba un destino presupuestario anual no inferior al 25 por ciento del total, aclarando el dispositivo legal que no podrán imputarse a dicho porcentaje los servicios asistenciales directamente vinculados al servicio educativo, como el PAICOR. Dicha asignación porcentual fue coincidente con los criterios sustentados por organismos internacionales como la UNESCO.

El Ministro de Economía publicitó como una de las grandes novedades de este proyecto de ley de educación el tema de la financiación. Y resaltó que en el artículo 107 se dispone que se garantiza para el sistema educativo en cada ejercicio un porcentaje mínimo no inferior al 35 por ciento del Presupuesto General. Sin embargo, se excluyó la disposición contemplada en la Ley 8113, acerca de que los servicios asistenciales estarían excluidos de dicha partida.

De modo tal que la discusión del incremento del mínimo no es tal como lo expresó el Ministro; si al 25 por ciento del porcentaje mínimo que garantizaba la Ley 8113 se le agregan los servicios adicionales como el PAICOR, no creo que estemos muy lejos del 35 por ciento.

Por ello, solicitamos al resto de la Cámara legislativa que se incorpore como agregado en el artículo 109 del despacho la exclusión, a los fines de dicho mínimo, de los servicios asistenciales.

De todos modos, estamos hablando de mínimos, y esperamos que el Gobierno provincial destine mucho más que el mínimo, porque consideramos que la educación, además de ser un deber moral, es la mejor inversión para el futuro, y sólo con mejor y más educación tendremos más democracia, más libertad y mayor bienestar.

Señor presidente: me gustaría concluir mi intervención citando a un gran dirigente de nuestro partido y verdadero estadista, al doctor Amadeo Sabattini. En un discurso leído con motivo de la apertura del período de sesiones ordinarias el 1º de mayo de 1937, ante la Asamblea legislativa decía: "He puesto empeño en afianzar los beneficios de la instrucción común incluyendo, en la medida de mis facultades, para el normal funcionamiento de los establecimientos escolares ante la efectiva realización de la docencia y, por primera vez, de la consagración de la estabilidad para los maestros, el proyecto de ley de educación común en consideración de Vuestra Honorabilidad, otorgando autonomía técnica, administrativa y financiera del Consejo de Educación, estabilizando el magisterio, y debe merecer preferentemente atención a fin de que, eliminándose del régimen escolar los vicios políticos que hoy lo apartan de sus finalidades, tengamos una generación que sepa darles debida primacía a los valores del espíritu, alcanzar una conciencia cívica que tolere y respete las discrepancias, obedezca las leyes y, sintiéndose cobijada por la bandera de la nacionalidad, adquiera el sentido efectivo de la responsabilidad y la preocupación permanente por el bienestar de todos".

Rechazamos el presente proyecto porque no se garantizó el debate y análisis que exigía el proyecto de Ley General de Educación. En igual sentido, rechazamos también su gestación, por no haberse garantizado la necesaria participación de los estudiantes, padres y docentes. Lo mismo hacemos con su etapa de tratamiento legislativo, porque el despacho que tratamos fue elaborado recién en los dos últimos días en las comisiones conjuntas y no hemos tenido el despacho definitivo hasta horas antes de venir al recinto. Asimismo, lo rechazamos porque no se han respetado los tiempos que el proceso de tratamiento y debate de esta ley exigía, y porque la presente iniciativa no cuenta con el imprescindible consenso de la sociedad, lo cual llevó a la Universidad Nacional de Córdoba también a rechazarlo por carecer de legitimación.

Parece que el debate parlamentario es público sólo para quienes ingresen a alentar y hacer barra a favor de los proyectos oficialistas, pero no cuando hay discrepancias o se piensa distinto.

Señor presidente, lamentamos que se haya desaprovechado la oportunidad histórica de invitar a toda la sociedad cordobesa para participar en el debate de un tema tan importante y necesario como es el futuro de la educación en la Provincia de Córdoba.

Finalizando, John Kennedy dijo una vez que "la educación es la clave del futuro; la clave del destino del hombre y de su posibilidad de actuar en un mundo mejor".

Esperemos que los defectos que le hemos señalado al presente proyecto sean subsanados y así se asegure en nuestra Provincia la mejor educación para el mejor futuro de todos los cordobeses.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Rossi.

Sr. Rossi.- Señor presidente: antes de entrar a tratar el tema de la Ley de Educación, voy a elevar un recurso de queja, al igual que lo hizo el legislador Pozzi: cuando la gente que ocupa las gradas de esta Legislatura insulta y no deja hablar a la oposición es bienvenida, pero cuando se debate algún tema con gente que no tiene el mismo criterio u opinión que el bloque oficialista se le impide el ingreso mediante vallas colocadas por fuera de este edificio. (Aplausos).

Esta ley va a servir para ponerla mañana en la publicidad del “veo, veo”. Al respecto, fíjense ustedes que pareciera, por la distinguida concurrencia que tenemos en la Legislatura en el día de hoy, que a partir de esta tarde van a cambiar radicalmente las condiciones de la educación en la Provincia de Córdoba; pareciera que cuando nos vayamos del recinto vamos a tener una calidad educativa de excelencia y que la ley que hoy se va a aprobar cuenta con el aval de la Legislatura de la Provincia y socialmente está bien vista. Creo, humildemente, que pasa todo lo contrario.

Quiero hacer referencia a algunas palabras o frases que he escuchado desde hace un par de años en este recinto.

Fíjense que el oficialismo de Unión por Córdoba siempre habla de políticas de Estado cuando tratamos leyes importantes como la Ley de Educación. Las políticas de Estado son ni más ni menos que aquellas que trascienden los distintos gobiernos; ahora, para que eso suceda, tienen que ser fruto del diálogo, del consenso, de la búsqueda de los acuerdos, y ni José Manuel De la Sota ni Juan Schiaretti se han caracterizado por el diálogo; ellos hacen lo que quieren, llevan a la práctica todas las iniciativas que tienen ganas y desdeñan absolutamente a la oposición. José Manuel De la Sota no habló nunca con la oposición, y el actual Gobernador Schiaretti lo hizo tan sólo en dos oportunidades, cuando “le llegó el agua al cuello” en la relación con la Nación, pero cuando terminó de arreglar las cuitas de la interna del peronismo no habló nunca más con la oposición.

No hay políticas de Estado cuando no se consensúa. La democracia implica diálogo, consenso, búsqueda de acuerdos; los gobernantes no tienen que tenerle miedo a esa búsqueda de consenso en leyes trascendentes como la Ley de Educación.

Como primera medida, y al igual que lo hizo el presidente de mi bancada, quiero hacer un homenaje a la Ley 8113, porque leyeron párrafos de esa ley que cuando se sancionó, en el año 1991, el peronismo votó en contra y dijo cosas apocalípticas respecto de su desarrollo.

Es cierto que nosotros tenemos que adentrarnos en el estudio de una nueva Ley de Educación para adecuarnos a la Ley nacional 26.206. Es cierto que tenemos que modificar algunas cosas y que se han tomado muchas otras de la Ley 8113, aunque se la desdeña, no se la reconoce ni se la puso en práctica, a pesar de que fue sancionada en el año 1991.

Esa ley tenía un entramado de discusión que involucraba a toda la sociedad en las cuestiones educativas, porque lo que tiene que ver con la educación no es patrimonio sólo de los docentes, de los directivos de los colegios o de las universidades; todo lo que tiene que ver con la educación debe ser fruto del debate de todos los que integramos la sociedad ...

Sr. Presidente (Busso).- Continúe, señor legislador. Está en uso de la palabra.

Sr. Rossi.- Los veo muy entretenidos.

Sr. Presidente (Busso).- Lo estamos escuchando, señor legislador. Continúe.

- Ocupa la Presidencia el señor Presidente, Vicegobernador Héctor Campana.

Sr. Rossi.- Fíjese que en el tratamiento de esa Ley de Educación estaba involucrada toda la sociedad; hubo participación activa. El Ministerio era asistido por un Consejo General de Educación que involucraba a todos los sectores que tenían algo que decir sobre la educación. Se hablaba de Consejos Electivos, integrados por docentes, alumnos y padres; se hablaba de una comisión representativa honoraria donde estaban representadas las universidades, los particulares, los partidos políticos y el Consejo Económico y Social que este Gobierno nunca puso en marcha; estaban todas las personalidades que tenían que ver con la educación. También participaban, permanentemente, las delegaciones regionales debatiendo sobre la educación.

El artículo 51, inciso 2), de la Ley 8113, sancionada en el año '91, habla de apoyar la constitución y funcionamiento de órganos colegiados, porque no se puede tener miedo de debatir el tema de la educación. Cuando hablamos de educación, de estas cuestiones trascendentes que afectan a toda la sociedad, no puede haber cercenamiento ni miedo al debate, al diálogo.

Quiero dar un pantallazo de cómo estamos hoy respecto a la educación y a la calidad educativa.

Hoy, la educación en la Provincia de Córdoba, previa a la sanción de esta ley que, seguramente, se producirá en unas horas, funciona con más de 40 aulas móviles que son, ni más ni menos, que contenedores de 8 por 4 metros tirados en los patios de los establecimientos educativos donde se comprime a más de 30 chicos para que estudien.

Este Gobierno mantiene condiciones de infraestructura pésimas, y me ha tocado vivirlo; por ejemplo, estuve en Bell Ville, en la escuela Ponciano Vivanco en la que ahora se están iniciando las reparaciones porque funcionaba con letrinas en los baños. Córdoba tiene el doble del índice nacional de repitencia; Córdoba tiene una pésima calidad educativa.

Me voy a permitir -en muy pocos segundos- leer algunos aspectos que están en las respuestas de dos pedidos de informes. En el pedido de informes respecto de la cantidad de escuelas públicas, sobre 1006 escuelas de nivel inicial, hoy tenemos 61 salas de computación, nada más, y hay 4 profesores de computación; en las escuelas públicas de nivel primario hay nada más que 9 bibliotecarios, y tan sólo 122 salas de computación. ¿Saben qué pasa con estos datos? Les cito un caso: hay una escuela pública en Los Chañaritos, a 40 kilómetros de la ciudad de Cruz del Eje -donde estuve-; adonde en el año 2005, el Gobernador Schiaretti llevó 30 notebooks, y la mitad todavía está en cajas porque no hubo docente de computación que pudiera poner en práctica esta cuestión. Pero como el Estado vuelve a regalar notebooks, fue otra vez el Gobernador y les regaló otras 30 notebooks ¿Por qué en vez de regalar tantas notebooks en esos colegios no ponen un docente de computación para mejorar la calidad educativa?

En la respuesta de otro pedido de informes nos dicen que las instituciones educativas públicas de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria no cuentan con el servicio de gabinete psicopedagógico y psicológico. Esa es la calidad educativa en Córdoba.

Algún desprevenido me podrá decir que este Gobierno recién empieza y quieren sancionar una ley de educación porque inicia su gestión, pero este partido de Unión por Córdoba está en el Gobierno hace 11 años, no arrancó la gestión con el Gobernador Schiaretti, sino que hace 11 años que está ocupando el Gobierno.

Algún otro desprevenido podrá decirme que no conozco la teoría del peronista bueno y del peronista malo, esa que hace que haya un gobierno peronista -un gobernador o un presidente- que pertenece al peronismo que es bueno, a los pocos años pasa a ser malo y aparece otro bueno y, a su vez, ese bueno pasa ser malo, y entre ellos no tienen nada que ver. Ítalo Luder en el '83 decía que había que amnistiar al proceso de reorganización nacional, y Kirchner después los sienta en el banquillo de los acusados. Menem no tiene nada que ver con Duhalde, y después Duhalde no tiene nada que ver con Kirchner. ¿Esas cosas pasan en Córdoba? Efectivamente no, porque el Gobernador Schiaretti -que lleva 3 años de gestión- fue Vicegobernador del Gobierno de José Manuel De la Sota, y también fue funcionario en su primera gestión, con lo cual estoy diciendo que son 11 años de gobierno del mismo partido, y en ese tiempo se han dado cuenta de que hay aulas móviles, que la calidad educativa es bajísima, que el nivel de repitencia es el doble que a nivel nacional, y hoy intentan aprobar esta ley cuando les queda tan sólo un año de gestión, y esperan que sirva como política pública.

Ya lo dijo el legislador Pozzi en su discurso inicial. Fíjense que estamos discutiendo esta ley y es fruto de un debate acotado, limitado, comprimido, porque si bien es cierto -y uno hace un reconocimiento a la enorme tarea que hicieron en el Consejo Provincial de Políticas Educativas- la discusión de la educación no afecta solamente a los que están involucrados en este Consejo; desde la Unión Cívica Radical hubiéramos preferido que un Congreso Pedagógico discutiera estas cosas.

Decía el legislador Pozzi: ¿qué hubiera pasado si los alumnos no se hubieran levantado, tomado escuelas y mostrado a la sociedad cuáles eran las condiciones de la infraestructura? Ahí va el segundo reconocimiento -el primero era a la Ley 8113-; a la lucha de los alumnos que, frente a la avalancha de publicidad oficial que hablaba de la cantidad de colegios y aulas que se habían reparado en la Provincia de Córdoba, tuvieron la valentía de mostrar a la opinión pública cuál era la verdad, que el Gobierno de la Provincia mentía descaradamente y que la publicidad oficial era mentirosa absolutamente. Ellos mostraron eso.

También mostraron que los alumnos -que son los destinatarios de la educación y a quienes les interesa, fundamentalmente, la educación pública- no habían sido participados del debate de la ley; y si esto no se hubiera producido, tal vez, a la ley la hubiéramos aprobado antes. Por eso va el reconocimiento. Fíjense que esta ley iba camino a tener 4 horas de discusión entre los docentes y "cero discusión" entre los alumnos y los padres. Pero apareció en escena la juventud para mostrar que están preocupados por las condiciones edilicias, que las condiciones edilicias tienen que ver con la calidad educativa y que, aparte de eso, no habían sido consultados sobre la ley.

Arrancamos el debate, y en la primera oportunidad que nos reunimos en la comisión nos dieron un papelito que fijaba un cronograma que decía que el 15 de diciembre se iba a aprobar esta ley, y nosotros nos preguntábamos: ¿por qué el apuro? -que hoy se verifica ya que recién esta mañana tuvimos en nuestras bancas el despacho de comisión definitivo-, y nos decían que no había problema, que se podía pasar para adelante.

Voy a contar una infidencia: escuchando declaraciones en un programa periodístico, desafié y le aposté a mi amigo, legislador Passerini, que si la ley se aprobaba el día 15 él me tenía que invitar a almorzar o cenar, y si el tratamiento de la ley se prorrogaba para después del 15 -como él decía- yo lo iba a invitar. Seguramente, como el legislador Passerini tiene

honor, en los próximos días me invitará a almorzar o a cenar porque hoy vamos a terminar aprobando el proyecto.

Pasando al análisis en particular de la ley, fíjense que, seguramente, tiene una correcta enunciación de principios –con que algunos nosotros no coincidimos– que de ninguna manera van a cambiar la calidad educativa en los próximos años, que es lo que todos buscamos. Pero adentrándonos en el articulado, observamos que arranca con conceptos con los que nosotros no estamos de acuerdo, como cuando habla de servicios educativos y de gestión educativa, porque esas palabras tienen que ver con una visión, ni más ni menos, economicista de lo que significa el sistema de la educación en la Provincia de Córdoba. Alguien me podrá decir que estaban en la Ley 8113, y sí, efectivamente, era en el año 1991; porque actualmente está de moda analizar la historia desde la óptica moderna –fíjense que hoy cualquiera “baja” el cuadrito de un dictador y parece que eso implica luchar por los derechos humanos, cuando había que tener valentía en el 1983 para hacerlo–, y ahora pasa exactamente lo mismo. En el año ‘91 se había instalado una discusión –moderna, por entonces– en base a criterios que nada tienen que ver con los actuales. En aquella época no se podía pretender, por ejemplo, que la Ley 8113 avanzara sobre el tema de la educación sexual, ni que el radicalismo del ‘83 sancionara la Ley de Matrimonio Igualitario; ya que en aquel entonces no estaba instalado el debate sobre este tema. Por eso, hay que analizar el contexto histórico en que cada cosa sucede, y no argumentar beneficios inventados.

Debo hacer un reconocimiento especial a las Comisiones de Legislación General y de Educación, ya que receptaron muchas inquietudes que fueron planteadas en las Audiencias Públicas, con algunas de las cuales coincidimos –por ejemplo, con la obligatoriedad de los jardines de 3 y 4 años– y con otras no, como que este Gobierno pague 250.000 pesos por cada aula que construye, lo cual me parece absolutamente obsceno.

Por su parte, el artículo 9º comienza refiriéndose a la carrera docente, distinguiendo entre los que están en el aula y quienes cumplen funciones directivas y de supervisión. En tal sentido, nos hubiese gustado que entre todos discutiéramos cuál es hoy el rol del docente en nuestra sociedad, que no es el mismo de antes, puesto que actualmente –sobre todo en las zonas marginales de Córdoba, puntualmente en los sectores más pobres de la ciudad– cumple una tarea extraordinaria que debe ser reconocida porque no sólo tiene que ver con la educación o con brindarles conocimientos a los alumnos, sino también con la contención y lo afectivo, con el diálogo con los padres, encontrándose ante la responsabilidad de modificar ciertas situaciones, para lo cual muchas veces no está preparado.

Nos hubiese gustado que en esta ley se establezca que quienes cumplan funciones directivas y de supervisión tengan que haber pasado en algún momento por las aulas, ya que el Gobierno de la Provincia utilizó esos cargos con criterio político, designando a dirigentes de Unión por Córdoba, lo cual no tiene nada que ver con las políticas de Estado ni con mejorar la calidad educativa.

También nos hubiese gustado que se debatiera por qué en la sociedad cordobesa –es un tema que no sólo tiene que ver con los habitantes de nuestra Provincia sino también con los de todo el país– los alumnos no tienen ganas de aprender. Entonces, ¿no será que hay que trabajar para mejorar el uso de la tecnología por parte de los docentes?, ¿habrá que trabajar para mejorar los cursos de formación docente, para que se puedan transmitir de otra forma los contenidos curriculares, de modo que el alumno vuelva a sentir entusiasmo por ir al aula, por aprender y por pertenecer a la escuela?

Respecto del tema de la educación religiosa –que fue debatido con vehemencia–, creemos que el culto no puede estar involucrado, de ninguna manera, con los colegios públicos porque creemos, humildemente, que hay una confusión al respecto, ya que de muchos de los discursos pronunciados sobre este tema pareciera desprenderse que los valores sólo pueden ser transmitidos por un culto religioso, lo cual no es cierto porque es el Estado el encargado de inculcar en los alumnos la nacionalidad, la idiosincrasia, la honestidad, el esfuerzo, la movilidad social ascendente y las ganas de capacitarse. Esto no es patrimonio de la religión ni de un culto, ya que entendemos que la educación pública debe ser laica, gratuita y obligatoria, y los padres que quieran que sus hijos sean educados desde el punto de vista religioso cuentan con un montón de cultos y templos reconocidos en la Provincia de Córdoba a los cuales acudir para completar la educación que sus hijos reciben por parte del Estado, y no tiene que ser éste el que se involucre en estas cuestiones.

Siguiendo con el análisis del proyecto de ley, quiero referirme a dos temas que también han sido puestos en la agenda como importantes. En primer lugar, el artículo 7º, inciso h), establece el derecho que tienen los docentes a recibir un salario digno; hoy vamos a aprobar una ley que –como dije– va a ser incorporada a la publicidad del “veo veo” como una cosa maravillosa, pero hay que decirles a los docentes que van a seguir cobrando lo mismo; que la ley diga que deben tener un salario digno no implica que el Gobierno de la Provincia les va a mejorar el salario, porque seguramente el salario inicial de un maestro de

2.050 pesos es el salario digno que el Gobierno de Unión por Córdoba cree que los docentes deben cobrar.

A la Unión Cívica Radical le hubiera gustado que ese salario docente digno estuviera atado a algún parámetro que implicara un mejoramiento progresivo y sistemático, porque así como la calidad educativa tiene que ver con los contenidos y con la infraestructura también tiene que ver con el mejoramiento de los salarios docentes; ellos dan clases por vocación, pero esa vocación tiene que estar bien remunerada, y si no remuneramos bien a los docentes seguramente no podremos pedir calidad educativa.

El otro aspecto al que quería referirme es el tema del Presupuesto; con bombos y platillos se anunció que para el año 2011 vamos a tener el 41,2 por ciento del Presupuesto para educación y se fija un mínimo del 35 por ciento, del que no estamos muy lejos de cumplirlo porque en la actualidad estamos cerca del 31 por ciento. Lo que no se dice, y se miente y engaña a los cordobeses, es que dentro de ese 41,2 por ciento se han incorporado otras partidas, por ejemplo, una deuda de 132 millones por construcción de aulas nuevas se va a sacar de la partida donde estaba para ser incorporada en la del Ministerio de Educación; tampoco se les dice a los cordobeses que hay partidas del PAICOR que se van a sacar de otra afectación presupuestaria para incluirlas en este Presupuesto del 41,2 por ciento que se anuncia; tampoco se dice que la construcción de nuevas aulas, antes presupuestada en el Ministerio de Obras Públicas, también va a estar incluida en ese presupuesto.

Por lo tanto, vamos a votar en contra de este proyecto de ley; consideramos que nada va a cambiar a partir de esta tarde cuando se sancione la ley y pensamos que muchos de los objetivos va a tener que cumplirlos la Unión Cívica Radical cuando llegue al gobierno el año que viene, porque a este Gobierno le queda tan solo un año de gestión.

Termino diciendo que en el debate de esta Ley de Educación se ha obviado, tal vez adrede, lo más importante: el objetivo de la educación que queremos para adelante. Nosotros estamos preocupados por fortalecer la escuela pública, porque nos parece que si el chico que va a una escuela pública no tiene las mismas condiciones que en la educación privada se está afectando la igualdad de oportunidades, y para la Unión Cívica Radical la igualdad de oportunidades es una de las cuestiones que el Estado debe garantizar de manera efectiva. No se habla de que en Córdoba en algún momento tendremos que pensar en lograr la movilidad social ascendente, esa que rigió en la Argentina hasta que asumió Carlos Menem y que hoy prácticamente ha desaparecido no solamente en la Provincia de Córdoba sino en toda la Argentina.

Por eso, reitero, vamos a votar en contra del proyecto de ley en tratamiento.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rodríguez.

Sra. Rodríguez.- Señor presidente: de los sesenta años de mi vida he pasado cuarenta dando clases en condiciones adversas, es por eso que llego a este recinto para hablar no como legisladora, lo que me resulta más que un halago una distinción, sino como maestra de las Altas Cumbres, concedora del frío, de las distancias, de la adversidad, del esfuerzo y del sacrificio, compartido con una comunidad educativa que cada año pelea por la vida sin tener conocimiento cierto de hasta dónde llega el horizonte; esfuerzo y sacrificio de comunidades libradas a la deriva y a la buena de Dios, sabedoras que desde su propio esfuerzo nacen las respuestas a las demandas insatisfechas.

A lo largo de muchos años recibí promesas y participé de ilusiones, esperar siempre fue la realidad de cada día. Resolver estas demandas, hacer que las escuelas de las zonas inhóspitas sean escuelas de verdad, es educar; esto no siempre es posible porque los docentes rurales muchas veces deben dar clases a niños de distintas edades y, a veces, con capacidades diferentes; deben ser cocineros, auxiliares, enfermeros y tener el cariño para abrazarlos a la noche y darles mucho pero mucho amor.

Señor presidente, señoras y señores legisladores, autoridades, docentes y alumnos presentes y ausentes en este recinto: el anteproyecto de ley de Educación de la Provincia de Córdoba se gestó en la ilegitimidad. Es ilegítimo desde su origen, ya que se conformó el Consejo de Políticas Educativas sin contar con la participación de los principales actores, como son los docentes, estudiantes, padres y la sociedad toda.

Hay que afirmar que muchos maestros que estaban comprometidos a aportar no se han sentido representados por la Unión de Educadores, y muchos otros no fueron convenientemente motivados y llevados a situaciones ineludibles de participación, por lo tanto, quedaron en una pasividad que en nada contribuyó. Entonces, cabe preguntarse: ¿con qué criterio se designó a los integrantes de dicho Consejo?, ¿y con qué criterio se dejó de lado a los verdaderos protagonistas de nuestra educación?

Es ilegítimo ya que la jornada de los supuestos aportes del 28 de julio en los establecimientos educativos no se dio en tiempo y forma, sólo fue de cuatro horas, sin poder llegar a profundizar la discusión en cada uno de los artículos que componen el presente

proyecto; cuatro horas contra más de un año de elaboración del ilegítimo Consejo de Políticas Educativas.

Es ilegítimo porque, gracias a la movilización de la comunidad educativa, el Ministerio de Educación, a través del Memorándum 11/10, otorgó a los alumnos que así lo solicitasen la posibilidad de acercar propuestas para el anteproyecto de ley pero, en la mayoría de los casos, los alumnos no fueron notificados debidamente; y en otros no se les otorgó el espacio y la instancia pasó sin pena ni gloria.

Es ilegítimo ya que el Poder Ejecutivo debió ceder en su tozudez y, a través de la Resolución 2311/10 de la Legislatura, convocó a Audiencias Públicas no vinculantes. En dichas Audiencias pude escuchar exposiciones verdaderamente enriquecedoras, poniendo de manifiesto problemáticas y cuestiones que el proyecto de ley 6480/E/10 no ha tenido en cuenta. Participaron estudiantes, docentes, padres y hasta inspectores, quienes nos dieron ejemplo de interés y compromiso. Es notable cómo la mayoría de ellos coincidieron en que el proyecto de ley no tuvo consenso y se descreyó que las Audiencias generarían modificaciones válidas al anteproyecto.

En mis manos tengo un documento firmado por ciudadanos del interior, que entregaron a los presidentes de sus comunidades regionales, requiriendo lo que establece el artículo 2º de la Resolución 2311, del 2010, que voy a leer textualmente: "Las comisiones podrán acordar con las comunidades regionales constituirse en otras localidades del interior provincial que así lo soliciten". Muchos cordobeses que tenían aportes para realizar aún están esperando alguna respuesta. Muchos no tuvieron la suerte de poder asistir a las audiencias en cuatro puntos del territorio provincial, por lejanía, por cumplir con el trabajo, por el tiempo, pero fundamentalmente por la falta de difusión, característica que marcó todo el proceso. Ilegítimo porque nuestra Legislatura está siempre vallada. Pregunto, ¿cómo se hace una ley para todos si a este recinto no pueden ingresar los ciudadanos? El vallado representa la resistencia a aceptar todas las voces y la participación.

Nuestros estudiantes y toda la comunidad educativa están movilizados. Esta es una oportunidad histórica, luego de tanto tiempo de apatía; escuchémoslos, están esperando nuestra palabra para poder expresarse.

Sobre los temas centrales del debate, desde nuestras convicciones, el Estado no puede variar el sentido laico de la enseñanza oficial, por más vueltas que se le dé. Paralelamente, su deber irrenunciable debe ser garantizar la posibilidad de la enseñanza por parte de institutos religiosos, expresión de todos los credos instituidos. Del mismo modo, la obligación estatal de retener la hegemonía de la enseñanza asegurando la posibilidad privada -sin que esto equivalga a equiparar una con la otra- es lo que parece que habrá de ocurrir.

En cuanto a la enseñanza técnica, hay que volver a los talleres formativos sin disfraces. Las prácticas profesionalizantes no pueden derivar en precarización laboral, y para ello el Estado debe garantizar la ejercitación.

Hasta ayer se seguían discutiendo puntos que formarán el eje de nuestra educación. Pregunto: ¿cuál es el apuro? Creo que se equivocan al dar por finalizado un proceso que recién comienza.

Digo esto porque nuestra sociedad ha despertado y tomado conciencia de que la Ley de Educación no es una ley más, éste es el momento de la consulta. Por lo tanto, exijo que se permita el verdadero debate en nuestra sociedad, entreguemos este documento a la ciudadanía toda, generemos espacios de participación en todos los rincones de nuestra Provincia, tomemos en cuenta cada uno de los aportes; demosle la legitimidad que este proyecto merece. Si esto no ocurre, nos veremos obligados, en el próximo gobierno, a convocar a un cabildo que en agenda pública concluya la Ley de Educación que los cordobeses sabrán darse.

Por lo antes expresado, el Frente Cívico rechaza el proyecto en tratamiento.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.

Sra. Rivero.- Gracias, señor presidente: en primer lugar, antes de entrar en el tratamiento de este proyecto de ley de Educación, deseo expresar mi repudio a una expresión que acabo de escuchar en este recinto en referencia -tal cual lo dijera uno de los legisladores que me precediera en el uso de la palabra- a que "cualquiera que baja un cuadrito de un dictador se transforma en un defensor de los derechos humanos". Me parece una terrible expresión, no digna de un recinto como éste, Casa de la democracia y de la representación del pueblo. (Aplausos).

Señor presidente, yendo al proyecto cuyo tratamiento nos convoca, quiero recordar que el mismo surge de un proceso representativo -mal que le pese a quien lo tilda de manera diferente- de un proceso surgido de la conformación de un Consejo de Políticas Educativas que trató y definió la letra del anteproyecto con la cual, sinceramente, no he coincidido en todos los puntos, sobre todo con la letra original del mismo, pero que no puedo dejar de ver y

mucho menos de legitimar aquello que estuvo funcionando durante tanto tiempo, estudiado por profesionales idóneos formados en las cuestiones pedagógicas y de políticas públicas.

Este proyecto tiene, ya desde esa conformación previa, un sesgo participativo, pero voy a hacer una defensa del sesgo participativo que tuvo ni bien entró a esta Cámara. Tanto en el trabajo en comisión como en el que cada uno de nosotros hacemos en nuestros despachos, se han recibido a numerosos interesados, además de las participaciones vía mail y carpetas conteniendo diversas opiniones, todas ellas a un tiempo tal que permitió tenerlas en cuenta, obviamente previa ponderación de cada legislador y de la comisión en su caso, para conformar lo que llega a ser este despacho de comisión.

-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Sergio Busso.

En ese proceso no podemos hacer críticas, porque estaríamos deslegitimando nuestra propia tarea. Podemos o no coincidir con el despacho de comisión, pero no podemos deslegitimarlo.

También se ha hecho mención aquí al tiempo de tratamiento, que con lo expuesto puedo decir que me parece más que suficiente. Claro que podríamos dedicarle más tiempo, pero sería a costa de que, como estamos terminando el año, priváramos a la Provincia de poder aplicar la ley de manera plena desde el inicio del ciclo lectivo del año 2011, y la verdad es que no tenemos derecho a hacerlo porque el proyecto ha tenido un tratamiento prolongado, acordemos o no con el resultado final.

Yendo a los temas más polémicos del proyecto, debo mencionar el referido a las cátedras de religión, optativas y opcionales, derecho que pueden ejercer los padres y que está proclamado en la Constitución provincial. Al respecto, debo decir que no acuerdo con ese punto establecido en el artículo 11, inciso e), sobre Derechos de los Padres, que dice: "A que sus hijos reciban de manera opcional, en el ámbito de la educación pública de gestión estatal, educación religiosa que les permita aprehender los valores y contenidos básicos de la creencia por la que hubieren optado". En el mismo artículo, en su inciso b), expresa: "A elegir para sus hijos o representados/as, la institución educativa cuyo ideario responda a sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas." Debo decir que el principio y el derecho proclamado por la Constitución provincial tienen su reflejo en este último.

De todos modos, aunque la mayoría no accedió a eliminar el inciso e) -lo que muchos legisladores proponíamos-, se resolvió sustraer el significado más pesado que tenía en el anteproyecto, dándole la característica de "extracurricular", inclusive fuera de los horarios del dictado de clases y no incluyéndolas en las partidas presupuestarias, dejándolas a cargo de los ministros de las religiones.

De esta manera, se limitó ese espacio que se tornaba amenazante desde el punto de vista de la concepción que tenemos todos de la escuela pública y de la enseñanza laica en nuestro ideario y en nuestra historia y no desde una posición cerrada, ignorante y otros calificativos que se han vertido aquí hacia quienes planteábamos estas observaciones. Tampoco lo hacíamos por ateos sino por tener pensamientos diferentes, ser analíticos y amantes de la libertad, y por tener una concepción ideológica distinta. Sin embargo, debo decir que desde la expresión de este bloque, no exenta de sentimiento religioso porque no somos ateos, tenemos una religión, debo hacer referencia a este aspecto porque no puedo dejar de ver cierta cerrazón intelectual al analizar las cosas de este modo: los buenos y los malos, los demonios y los angelitos, porque el mundo no es así. En este recinto no podemos caer en esa simplificación que lleva a las terribles teorías tejidas en épocas infames.

En consecuencia, acordamos con la nueva redacción dada al inciso e) porque consideramos que se ha corregido y acotado lo que estaba molestando.

En relación a las observaciones formuladas sobre las cooperadoras, clubes escolares y los recursos y las recaudaciones, quiero traer a colación lo que representaba el dinero en la historia de la humanidad, tan demonizado en este punto del proyecto. Entendemos que la comunidad escolar es una pequeña comunidad; es una comunidad perfecta. Originalmente, las comunidades tenían por costumbre trocar sus necesidades de prestaciones de servicios o de necesidades de bienes. Pero a medida que el mundo se fue haciendo más complejo y las comunidades creciendo de tamaño era poco práctico andar por la calle tratando de intercambiar algo y encontrar a quien tuviera lo que se necesitaba; así, nació el dinero.

Para hablar de las cooperadoras, clubes escolares y demás, voy a hacer alusión a algo que tiene que ver ancestralmente con nosotros, con quienes nos consideramos hijos de esta tierra, y es la figura de la minga. La minga es el trabajo comunitario, de mutuo esfuerzo para lograr un objetivo, que un grupo humano, comunidad o actores individualmente y en solitario no pueden lograr con los mismos resultados. Las cooperadoras son como las mingas de las escuelas.

Pregunto: ¿tienen razón de ser las cooperadoras si no recaudan dinero o bienes factibles de ser convertidos en tales para determinados fines o para ser convertidos en servicios o bienes que necesita esa comunidad educativa? ¿Cómo se espera que provean a las

necesidades de esa comunidad educativa? Estamos de acuerdo con el artículo que menciona a las cooperadoras –no recuerdo en este momento el número-; tal cual está expresado no tenemos ninguna objeción que hacer, no nos asusta que las cooperadoras puedan recaudar dinero; de hecho, no nos asusta que nadie pueda recaudar dinero, de manera clara y ajustada a derecho.

También se habló de las pasantías y el riesgo de mezclarse con figuras precarias de relación de dependencia agravada por la participación de niños y adolescentes en ellas. Debo decir que cuando se trató en este recinto la Ley de Educación Técnica, se reconoció el valor que tienen las prácticas educativas en empresas e instituciones.

Desde la experiencia personal debo decir que en su momento, mis hijos –uno educado en escuela pública y otra en escuela pública de gestión privada- realizaron pasantías - prácticas educativas, para llamarlo como corresponde-, y gran parte de su actual capacidad laboral deviene de aquellas prácticas, y que gran parte de la facilidad de acceso a esta movilidad social -que también ha sido mencionada en este recinto- deviene de esas prácticas, porque cuando se selecciona personal en una empresa se lo hace principalmente pidiendo experiencia, un conocimiento previo, algo que acredite que ese cargo no va a estar librado al azar.

¿Acaso está mal que en esta sociedad no todos sean profesionales universitarios? ¿No nos alcanzamos a dar cuenta del daño que nos hizo esta concepción y la destrucción sistemática de la economía interna del país de la década de los '90, con la destrucción de la educación técnica por gobiernos anteriores que nos dejaron sin operarios especializados ni trabajadores calificados? ¿Alguien piensa que eso está bien en nuestra sociedad?

Voy a otro aspecto, la educación artística. Se han introducido -tal como lo mencionara la legisladora informante del bloque de la mayoría- en todos los artículos donde se hace mención a los tipos y objetivos de la educación, también el humanismo y el arte y, por supuesto, estamos de acuerdo. En este sentido, vamos a ir por más: nos gustaría que se tenga en cuenta -y voy a aprovechar la presencia del gabinete del Ministerio de Educación- en la reglamentación de esta ley la necesidad de transdisciplinariedad y su práctica en la escuela media, de que los alumnos de los colegios puedan entender que si les gusta la música es indispensable que entiendan matemáticas, y que si practican enseñanza musical van a tener abierto el camino para entender mucho mejor las relaciones entre los números. Por ejemplo, la relación entre la teoría del color y la física y la química, y muchísimos ejemplos más.

Pero también, señor presidente, porque hace al mayor bienestar de los alumnos el reconocimiento de que materias como las artísticas, que promueven la creación, tienen directa relación con el hemisferio derecho del cerebro; enseñan a pensar de una manera diferente y esto enriquece luego la vida cívica, laboral y familiar, la expresión de las emociones y la facilidad de adaptación a las distintas circunstancias y a la sociedad en su conjunto.

Dicho esto, señor presidente, desde este bloque hago una solicitud de inclusión de un inciso en el articulado del proyecto que estamos tratando. Se trata del artículo 4º, fines y objetivos de la ley, al cual proponemos agregar un inciso a continuación del n) –podría ser n', donde sugerimos promover el aprendizaje y utilización en la comunidad educativa de los métodos alternativos de resolución de conflictos, en el marco de lo establecido por la Ley Provincial de Mediación, 8858, aprobada por esta Legislatura en el 2000. Se trata de una ley modelo aún hoy, diez años después, en materia de articulación legal de la resolución alternativa de conflictos. Pero no sólo eso, el artículo 1º de la Ley 8858 declara de interés público la mediación y su aplicación, tanto en la órbita judicial como privada, y crea el Centro Público de Mediación, el cual existe y tiene una excelente trayectoria.

Necesitamos ir por más, y que la mediación y los métodos alternativos no se queden solamente en la aplicación de la ley, sino que lleguen a la base misma de la sociedad, a quienes van a ser los adultos del futuro, a quienes hoy están educándose. En esta educación para la resolución no controversial de conflictos vamos a estar poniendo la semilla de la disminución notoria de la violencia en nuestra sociedad. Además, vamos a estar poniendo un remedio casi inmediato en la visión de los conflictos dentro de la comunidad educativa y la posibilidad de paliar esos conflictos con las propias herramientas que se pongan en manos de alumnos, profesores y padres. Es indispensable esta mención en este capítulo de la ley.

Otra propuesta que hacemos es un artículo a continuación del 113, en el capítulo complementario, que exprese un anhelo que viene de un reclamo de género y de igualdad de oportunidades de la mujer -en este caso representada por las niñas y adolescentes- para acceder al derecho a la educación. A los fines del cumplimiento de la obligatoriedad escolar establecida por los artículos 26, 27 y 37 de la presente ley, la autoridad de aplicación articulará con el Ministerio de Desarrollo Social la disponibilidad de salas cunas o dispositivos similares, creados o a crearse, a efectos de garantizar la igualdad de oportunidades en el

acceso a la educación para las adolescentes madres. Al respecto, debo decir que también hay niñas madres, sólo que para evitar el prurito de muchos que puedan expresarse con temor en relación con la maternidad antes de la mayoría de edad, preferí dejar solamente el término adolescentes madres. Esta propuesta, señor presidente, facilitaría enormemente la educación a las numerosas jóvenes que intentan terminar la escuela secundaria con un hijo en brazos.

A través de este proyecto se está proponiendo la obligatoriedad del ciclo completo, desde el prejardín de 4 años hasta el sexto año de la escuela secundaria. Esto pondría a la Provincia de Córdoba en un lugar destacadísimo en materia de legislación específica de reconocimiento de los derechos de las niñas y adolescentes y de la igualdad de oportunidades.

Pensamos que este proyecto surge como una necesidad, aunque también como una urgencia. Aquí hay resortes que van a cambiar notoriamente el perfil de la educación en nuestra Provincia -aunque no de manera inmediata- no solamente en lo que hace a los indicadores con que nos miden desde afuera sino el perfil de la educación que hace que nosotros sintamos que en la comunidad algo cambió, y que en la Provincia de Córdoba algo puede llegar a cambiar.

Hechas estas consideraciones, desde el bloque de Concertación Plural vamos a acompañar el proyecto en tratamiento.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.

Sr. Maiocco.- Señor presidente: como siempre, para fin de año nos quedan las leyes más difíciles.

La ley que tenemos en tratamiento no es una ley más. La misma cuenta con un alto contenido político e ideológico. No creo que sea la panacea. Seguramente le faltan cosas. Todos sabemos que hay que mejorar la infraestructura en muchos establecimientos. Coincido en que los docentes deben tener una mejora en sus haberes.

Con la legisladora Feraudo tenemos un proyecto en común presentado en distintos tiempos. Ambos creemos que una de las cosas que se va a tener que considerar es la de hacer planes de emergencia ante posibles contingencias en las escuelas.

Considero que, en definitiva, este es un proyecto superador, aunque habrá dificultades entre la teoría y la práctica; es más o menos como cuando uno va a un examen, aprueba la teoría y después no sabe cómo rendir la práctica. Este es el gran desafío de la ley que hoy se va aprobar.

Uno de los reclamos a que se hizo mención fue la falta de debate. Recién me preguntaron de un medio periodístico si creía que había faltado debate, y les dije que probablemente sí. Pero tenemos que saber lo que pasa en la Legislatura, porque hasta que un proyecto que ha entrado no tiene visos de concreción, la sociedad y la Legislatura no se interesan tanto por él; recién cuando llega el momento de su tratamiento nos abocamos más fuertemente a su análisis.

A lo mejor faltó debate, siempre puede haber más debate, pero no tengo dudas de que, aunque hubiésemos debatido dos años más esta ley, el resultado de la votación hubiese sido el mismo, porque hay componentes políticos, hay estrategias políticas, y no estoy en desacuerdo con eso. Si recién entrara a la Legislatura quizás me hubiese sorprendido, pero hace muchos años que soy legislador y sé que las estrategias políticas a veces hacen decir “no” a lo que en el fuero íntimo uno le diría “sí”.

Una de las cosas que se observó fue la representatividad de quienes participaron en los debates y en la construcción de este proyecto. Recibí a padres y alumnos que cuestionaban a la UEPC, pero yo les dije. “discúlpennme, los votaron, en todo caso tendrán que cuestionar las autoridades que eligen, pero yo no puedo desconocer la representatividad de la UEPC”.

Por otro lado, valoro el esfuerzo de los chicos y de los padres, pero el porcentaje de escuelas de la Provincia que cuestionaron fuertemente el sistema apenas supera el 0,5 por ciento; es un porcentaje tan exiguo como el que tiene asignado esta Legislatura en el Presupuesto; sin embargo, con las modificaciones que se han hecho a la ley, hemos cubierto prácticamente el 90 por ciento de los reclamos que se hicieron.

Voy a saltar los contenidos pedagógicos porque la legisladora Feraudo los expresó con claridad meridiana, pero quiero hacer hincapié en los artículos más controvertidos, sobre los que discutimos fuertemente y a los cuales se les ha dado respuesta.

Los voy a mencionar en el orden en que los incluí en mi discurso. Uno de los puntos, tal vez el más controvertido, es el inciso e) del artículo 11. El tema de la educación religiosa está en la Constitución y en la Ley 8113, y nunca hubo problemas, ¿por qué vamos a tenerlos ahora? A pesar de eso, se hicieron cambios fundamentales. Ahora no queda ninguna duda de que es extracurricular, de que se dicta fuera del horario de clases, de que no es obligatoria ni tiene financiamiento del Estado, de que permite a los alumnos, a voluntad de los padres y sin

obligar a los demás, tener instrucción religiosa. Tal vez no lo podamos entender si lo vemos desde las grandes ciudades, donde tenemos –si me permiten el término- todas las “ofertas” de los distintos cultos, pero, ¿por qué le voy a impedir a una escuela alejada, como las que mencionó la legisladora Rodríguez, ser un facilitador para aquel padre que quiere que un ministro de alguno de los cultos le dé instrucción religiosa a su hijo? ¿Por qué se lo vamos a impedir nosotros, desde esta Legislatura, cuando la escuela es simplemente un facilitador?

Otro de los puntos que se cuestionaba era el de las prácticas laborales. Esta fue una de las cosas que realmente se tuvo en cuenta, se mejoró, se amplió para evitar cualquier tipo de interpretación equivocada y, por eso, se hizo referencia a las leyes de Trabajo 20.744 y de Pasantías 26.427 para asegurar que estas prácticas cumplan realmente con el objetivo que se propone, que es capacitar al alumno para darle una mejor inserción en su futura vida laboral.

Pedimos y se incorporó el tema de la educación sexual en cuanto a lo que se refiera a la Ley nacional 26.150.

Con relación a los centros de estudiantes, debemos decir que, tal vez, sea uno de los puntos en los que no se respondió plenamente al pedido de los alumnos, pero en verdad coincido con como ha quedado redactado en la ley. Me parece que esto de que cada escuela pueda hacer lo que quiera y como quiera, termina convirtiéndose en anarquía. Ayer, en comisión, el legislador Brügge expresó de manera clara y correcta que en cualquier asociación como el Colegio de Abogados, el de Ingenieros, los distintos gremios, hay ciertas normas que cumplir, no puede ser que cada uno haga lo que quiera, máxime cuando hemos logrado en esta ley que tanto los alumnos como los padres tengan representación en los consejos. Entonces tiene que haber un orden, no puede ser que cada uno haga lo que quiera.

En cuanto al artículo 3º, inciso j), vemos un gran temor al financiamiento privado. Si una empresa como FIAT o Renault, o en alguna ciudad del interior donde hay importantes empresas –y la vida del lugar se desarrolla en torno a ellas- como puede ser ARCOR en Arroyito o Mainero o alguna otra empresa quiera colaborar con las escuelas de la zona, ¿por qué lo vamos a prohibir? ¿Le vamos a prohibir al Festival de Jesús María que recaude y lo vuelque en las escuelas de la zona? ¿Por qué le tenemos miedo a esa financiación? En tanto y en cuanto el Ministerio controle que no influya en la currícula, me parece que tenerle temor a esto es algo infundado.

El artículo 41 habla de que se incorpora la formación científica, técnica, profesional, humanística y artística, que fue uno de los reclamos, y lo que dije antes, en los artículos 91 y 98, tanto en el Consejo Provincial de Políticas Educativas como en el Consejo Provincial de Educación Técnica y Trabajo se ha incorporado la figura de la representación de los estudiantes y los padres en los mismos para que participen de la vida institucional.

Nos hubiera gustado que algunas de las cosas que se dijeron en el COPEC cuando se habló del financiamiento educativo, cuando decía “Asumir el compromiso de que el financiamiento del sector educativo debe ser asignado con destino específico y debe quedar protegido de contingencias financieras”, hubiera quedado plasmado, pero más allá de que esto no se haya puesto, nos parece que la ley en su conjunto lo está asegurando.

El artículo 107 habla de las cooperadoras, y observamos que esto implica otro temor infundado. En esto, tal vez me baso en una experiencia personal. Cuando salí de la escuela secundaria, al segundo año entré en el centro de ex alumnos y allí estuve 5 ó 6 años. Después, pasé a la cooperadora y le dejamos a ese colegio –que yo tanto quería, que es el Olmos que está en la Ruta 20- otro escenario, modificamos los baños, no porque el Estado no lo hiciera, sino que se hizo como nosotros quisimos, con la voluntad de los padres y de la comunidad educativa del colegio. Realmente, nos sentíamos orgullosos de haber podido colaborar con la escuela que, particularmente, me había brindado educación en mis primeros años de vida.

Una de las preocupaciones es la parte final del artículo 109 –más allá de la explicación que da el legislador Heredia-, cuando habla de la posibilidad de generar tributos o algún otro medio de financiación por medio de algo a lo que nos tienen acostumbrados, que es la creación de fondos como tantos que ya se han creado.

De todas maneras, nos parece importante que en este artículo, donde se pedía que tuviera un piso del 30 por ciento, se haya puesto un piso del 35 por ciento como mínimo para la educación, más allá de que este año pase el 41 por ciento.

Tengo que reconocer que esta ley –a diferencia de otras leyes cerradas que llegan a esta Legislatura- se debatió, se discutió y se modificó, y hubo amplitud para poder cambiar aquellos artículos que creíamos que había que corregir, y así se hizo.

Lo que creo que no debemos perder de vista es que esta es una ley. Yo no voy a hacer política con lo que voy a decir pero la verdad es que en la próxima elección puede ganar cualquiera de los candidatos –no el contador Schiaretti porque no puede repetir-, y quien gane, si cree que esta ley debe tener ajustes, va a tener la posibilidad de implementarlos. Esto es así porque se trata de una ley, no hay que modificar la Constitución;

posiblemente haya que modificar algún artículo, si es que el próximo gobernador o su equipo de educación consideran que hay que cambiarlo. Por ello, no me parece que sea tan traumático cualquiera de los puntos en los que pueda haber algún conflicto.

Para finalizar, quiero agradecer a la legisladora Feraudo por el reconocimiento que en el día de ayer les hiciera a los asesores.

Cuando llegamos a estas bancas nos damos con que, lejos de ver cuánto sabemos nos damos cuenta de todo lo que no sabemos. Nadie puede conocer todo, sobre todo quienes estamos en bloques unipersonales; no podemos conocer todo el espectro de temas. Realmente la tarea de los asesores para poder cumplir en cada uno de los variados temas que tratamos en esta Legislatura es fundamental y, por eso, quiero unirme al reconocimiento de los asesores que nos han acompañado durante todo el proceso –en mi caso, a Rodrigo, en especial– por el trabajo que han desarrollado para que esta ley pudiera concretarse.

Señor presidente, desde el bloque de Unión Vecinal Federal, consideramos que esta ley es un paso adelante, seguramente perfectible; creemos que hemos avanzado en el sistema educativo para la Provincia de Córdoba y, desde ya, celebro y acompaño el proyecto en tratamiento. (Aplausos).

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Ruiz.

Sr. Ruiz.- Señor presidente, lo primero que deseo decir es que están ausentes en este debate aquellos que fueron protagonistas del sacar a la luz la situación de las escuelas en la Provincia de Córdoba y de muchas en la Ciudad de Córdoba.

Creo que los alumnos que protagonizaron y tuvieron la capacidad de poner en la agenda pública, en la discusión ciudadana, la situación de la educación en general y promover, de alguna manera, o despertar el interés de algunos otros sectores de la población sobre la importancia de la educación en Córdoba, hoy están ausentes y tienen mucho más derecho que otros a estar presentes en este debate, por eso me sumo al reclamo de varios legisladores que estaban pidiendo la posibilidad que ellos accedieran.

Soy de los que creen –estoy convencido de ello– que la participación debe darse con respeto, pero evidentemente el oficialismo tiene una vara distinta para medir la participación ciudadana según los temas que se traten o quiénes sean los protagonistas.

Perfectamente, señor presidente, hoy podríamos votar por unanimidad una nueva Ley de Educación para la Provincia, pero la inflexibilidad evidenciada por el oficialismo con relación a algunos temas nos ha impedido la posibilidad de arribar al consenso con que nos ilusionamos quienes firmamos, meses atrás, el acta compromiso por la educación. Este consenso podría haberse construido si desde el Ministerio de Educación se hubiera alentado y favorecido aún más la participación en el debate previo al tratamiento de este proyecto de ley, si el Consejo de Políticas Educativas hubiera sido más amplio, y si desde esta Legislatura se hubieran escuchado algunas voces que parecieran expresiones minoritarias y que, en realidad, no lo son. Sucede que la gente que participa en los debates públicos siempre es minoritaria con relación al total de la población, por lo que muchas veces a las minorías ciudadanas activas les toca ser las protagonistas a la hora de producir cambios.

Un sector mayoritario de nuestra sociedad –representado por quienes participaron de las Audiencias Públicas desarrolladas en torno a este proyecto– pidió por la educación laica y no fue escuchado. Si bien es cierto que –como dijo el legislador Maiocco– este es un tema ideológico y político, creo que se ha reducido a un aspecto meramente simbólico porque todos han reconocido que no se aplicó, no se aplica ni se aplicará. Por eso, creo que el oficialismo debiera haber atendido lo planteado al respecto desde la sociedad civil y los bloques opositores, que sosteníamos la necesidad –ya voy a explicar por qué– de eliminar del artículo 11 el inciso relativo a este tema.

Si bien reconozco que el oficialismo avanzó en algunas modificaciones que respondieron a los reclamos receptados en las Audiencias Públicas –tales como la inclusión de la educación artística y una nueva composición del Consejo de Políticas Educativas–, que implican claros avances respecto de la Ley 8113, desde nuestro bloque –partidario del consenso y del diálogo– vamos a votar un proyecto propio porque nos parece que hay cuestiones muy valiosas, como la educación laica en nuestra Provincia, que no fueron debidamente atendidas.

Con nuestra postura queremos representar –aunque seamos minoría y, en soledad, quedemos votando un proyecto alternativo– a miles de cordobeses que ven la educación como una política central del porvenir de nuestra Provincia y como una herramienta clara de movilidad y de ascenso social –como ha demostrado la historia argentina–, y que quieren que, más allá de las posiciones partidarias, se arribe a consensos razonables. Creo que al oficialismo le faltó un poco, sólo tenía que abrir este artículo, con lo cual hoy podríamos sancionar por unanimidad este proyecto de ley.

Además de la discusión sobre el texto de la ley, creo que este debate amerita algunas consideraciones sobre la importancia de la educación para el país y para nuestra Provincia en

particular. Muchos pensadores coinciden en que el futuro del mundo se debate en la sociedad del conocimiento, en los recursos naturales y en los alimentos, cuestiones estratégicas que podríamos decir hoy que son la riqueza de las naciones.

América Latina está intentando cerrar un círculo de progreso: en estas últimas décadas logró la democracia política y tenemos crecimiento económico, pero nos está faltando cohesión social, entendida como inclusión social y sentido de pertenencia, es decir, no se trata sólo de resolver los problemas sociales sino de una ciudadanía que esté ligada, que piense, que se sienta parte de un destino común, de un proyecto común de nación, y por eso la educación es tan importante, porque hay una crisis de hacia dónde va la humanidad, los países, hacia dónde va Argentina y hacia dónde Córdoba.

Celebramos que estemos dando este debate; aun cuando podemos señalar déficit de participación, creo que tenemos que elevar el debate de esta Legislatura porque, sin duda, aun sin acompañar esta ley creo que va a ser mejor que la 8113. Nosotros vamos a votar un proyecto propio que consideramos mejor que el proyecto del oficialismo, porque entendemos que es la síntesis de las expresiones de la sociedad civil y de las iniciativas que se han presentado desde el Consejo de Políticas Educativas, los importantes aportes del COPEC y también la iniciativa del Gobierno en este sentido.

Creemos que hay un marco adecuado, los '90 caracterizaron al país –como se dijo– por considerar a la educación como una mercancía, la Ley Federal de Educación significó un claro retroceso al considerar a la educación como un bien transable. A partir del 2000 la política volvió a ocupar el centro de la escena y surgió la Ley Nacional de Educación –nuestro bloque también votó un proyecto alternativo como lo estamos haciendo en este caso en esta Legislatura– que desplazó el foco de atención de la escena privada a la escena pública; en ese sentido, la educación volvió a ser considerada un derecho social que debe ser garantizado por el Estado.

Ese marco nos permite, señor presidente, discutir aun con estas diferencias una Ley de Educación que le dé al Estado un papel central, fundamentalmente, para asegurar un tema que es clave para la igualdad de oportunidades: la inclusión y la calidad educativa. Mientras las escuelas públicas no tengan la misma calidad que las privadas se van a seguir reproduciendo las desigualdades que existen en la sociedad, donde el Estado no asegura puntos de partida igualitarios.

Dicen, señor presidente, que hay dos cosas que uno no elige en la vida: el país y la familia donde nace, eso hace que un niño pueda partir de una familia pobre o de una familia rica y que pueda partir viviendo en Finlandia o en Ghana, y para eso está el Estado dinamizador e igualador que asegure un punto de partida igualitario para todos.

Señor presidente: voy a entrar en el diagnóstico y consideración del proyecto de ley, los aportes que nosotros hacemos y el sentido de votar un proyecto propio. Lo cierto es que si estamos discutiendo una nueva Ley de Educación en la Provincia es porque en estos años –hay que decirlo– la política educativa ha estado bastante alejada de lo que el proyecto de ley en tratamiento propone. Nunca es tarde, si bien se ha perdido mucho tiempo es necesario recuperarlo, y también es necesario que lo que pongamos en una norma, en un papel escrito, después se corresponda con la realidad. Si hablamos de la realidad –aquí se dijo– tenemos alumnos que dejan la escuela y hay estudios que indican que en muchos casos es por falta de motivación y no por problemas económicos; hay alumnos que repiten, docentes que necesitan capacitación, etcétera.

Recién escuchaba al legislador Pozzi que citaba a Andrés Oppenheimer, persona que podemos ubicar en la centro-derecha del pensamiento político, que en una reciente discusión fue corregido cuando reivindicaba gobiernos como los de Singapur o de China y alguien, con mucha razón, le dijo: “yo prefiero que los chicos argentinos estén en el lugar 8 ó 9 y no en el 1º, si se trata de que los chicos estén en una dictadura de izquierda o de derecha como hay en Singapur o en China”. Lo cierto es que hay países democráticos que han logrado grandes avances en la educación, y cuando hablamos de docentes que necesitan capacitación hay casos de países bastante exigentes, como Finlandia, donde los docentes tienen que tener maestrías o posgrados, es decir, hay una gran exigencia en materia de capacitación.

Tenemos que ir de a poco, los cambios son progresivos y creo que hay muchas cosas que esta ley tiene y es importante rescatar.

La realidad nos sigue indicando que hay docentes que se ausentan de la escuela, que hay problemas edilicios; después vino el debate por la Ley de Educación, pero los chicos denunciaron fundamentalmente el estado lamentable de muchas escuelas de Córdoba y la falta de mantenimiento. También hay desentendimiento de parte de los padres y de la sociedad, que no participan ni se preocupan por la educación de sus hijos. A esto hay que decirlo porque no se puede ser demagógico.

Se perdió el hábito de la lectura, en una gran parte de la sociedad se perdió el valor de la educación, seguramente por políticas equivocadas; pero así como interpelamos a un

gobierno para que haga las cosas mejor, también tenemos que hacerlo con los padres, para que todos hagamos mea culpa y nos incorporemos más plenamente al debate ciudadano sobre esta cuestión. Esa realidad se expresa en las estadísticas recientemente hechas, como las pruebas PISA y los Programas para la Evaluación Internacional de Alumnos, donde se manifiesta que Argentina retrocedió cinco lugares, del puesto 58 que teníamos antes; y en la información que obtuvimos en las reuniones de la Comisión de Educación del COPEC hay estadísticas que indican que la situación en Argentina y en Córdoba es preocupante.

En el caso del promedio de horas de clases en escuelas primarias, Argentina está con 774 horas de instrucción anual, Chile 1257, Brasil 869, Uruguay 813; sólo estamos por encima de Paraguay.

Otra estadística ubica a la Argentina, en relación a los alumnos que poseen libros de texto propios, con un 53 por ciento, frente a Uruguay que tiene el 59 por ciento. En la Provincia de Córdoba encontramos que el nivel de escolarización, medido en porcentaje de niños que no asisten a la escuela, es de un 15.2; en Santa Fe 12.9; en la Ciudad de Buenos Aires 6.3 y en la Provincia de Buenos Aires 11.2. Es decir que no estamos bien con la tasa de escolarización.

Si vamos a la doble escolaridad y nos comparamos con la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un 43.8 por ciento, la Provincia de Córdoba sólo tiene un 1.3.

Si vamos a establecimientos con conexión a Internet, vemos que Córdoba tiene un 26 por ciento de establecimientos con esas características, frente a muchas provincias que la superan como Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Santa Fe, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tierra del Fuego.

Lo cierto es que la estadística refleja una realidad, nos parece bien que el Ministerio de Educación, de ahora en más, tome la ley sancionada y cumpla –no sólo éste sino los futuros gobiernos- las metas que están establecidas en la ley a las cuales nos vamos a referir.

Hubiera sido bueno alcanzar un consenso como el que se logró con algunas fuerzas políticas en el marco de la convocatoria del COPEC, en donde adoptamos compromisos en temas de financiamiento económico para la educación, y hay que destacar que el 35 por ciento del Presupuesto en materia educativa es un avance. Tenemos una propuesta en ese sentido para garantizarlo efectivamente y ya nos vamos a referir a ella.

Otro compromiso –al que ya hice mención- tiene que ver con la inclusión y la calidad educativa, y el tema de la brecha digital, en el que se están dando algunos pasos. Destaco en la presente ley la existencia de metas para los próximos años que permiten cuantificar las inversiones que tiene que hacer el Estado provincial, más allá de a quién le toque gobernar esta Provincia.

Aun cuando no apoyemos esta ley y votemos un proyecto propio, vamos a seguir reivindicando muchas cosas, en particular, que por primera vez en una ley haya metas que permitan monitorear y exigir anualmente a esta Legislatura, a los distintos ministros de Educación y gobiernos de turno el cumplimiento de esas metas.

Decíamos que aquí hubo un déficit participativo, también señalado por la Universidad Nacional de Córdoba al hablar de una legitimación social insuficiente, en el sentido de que el tiempo de discusión del proyecto de ley de Educación en las escuelas de cuatro horas en un día resultó escaso. Tuvieron que aparecer los alumnos con la toma de escuelas para que se volviera a discutir de otra manera el proyecto de ley.

En cuanto a nuestro proyecto, voy a señalar algunos aportes y algunas diferencias con respecto al proyecto oficial.

En primer lugar, nuestro proyecto de ley incorpora aportes realizados por la legisladora Adela Coria, con quien compartimos distintas propuestas, que no voy a mencionar para respetar la autoría de la legisladora y seguramente ella va a fundamentar mejor que yo.

Con respecto al artículo 5º, cuando se habla del derecho a la educación, nos parece importante hablar de una igualdad real de oportunidades. No sólo de igualdad de oportunidades porque ha sido una expresión muy utilizada y la seguimos usando; hay que darle un sentido mucho más efectivo y hablar de garantizar esa igualdad real de oportunidades en las posibilidades educacionales.

En el artículo 6º nos parece mejor que, en lugar de usar la palabra “generalización”, se hable de “universalización” del ejercicio del derecho a la educación, y proponemos un encabezado que diga: “El Estado impulsará políticas y acciones tendientes a la universalización efectiva”. Con esto queremos decir que tenemos que empezar a producir avances para que el derecho programático pase a ser un derecho operativo, porque justamente se trata de recuperar el tiempo perdido y que todo lo que se haga en educación pueda ser exigible de manera operativa y no quede consagrado sólo desde el punto de vista programático.

Con respecto al artículo 7º, derechos y deberes de los docentes, en derechos nos parece que el inciso i) debe quedar redactado como figura en la Ley 8113, porque sigue siendo superadora en ese sentido. Por lo tanto, proponemos que el texto quede redactado de la siguiente manera: "a participar en la organización y gobierno del centro educativo en el que se desempeña, compartiendo la responsabilidad de su gestión con los demás integrantes de la comunidad educativa".

Con respecto al artículo 11, inciso e), proponemos que el mismo sea suprimido. En este sentido, voy a citar al Padre Velasco, lo que no hago por primera vez ni tampoco con un sentido político, ya que hemos reconocido en otros debates su inteligencia para advertir sobre distintos temas. En este caso, me permito señalar que en una nota publicada en el diario La Voz del Interior el Padre Rafael Velasco, actual rector de la Universidad Católica de Córdoba, dijo: "Si la religión crispa, hay que sacar ese artículo. Si la educación religiosa sirve sólo para la crispación, entonces hay que sacar el artículo del proyecto".

Creo que el derecho de la familia de poder elegir la educación que quiere para sus hijos ya está garantizado de otra manera. En muchas escuelas de diversas condiciones religiosas llega el aporte del Estado hasta el ciento por ciento, sobre todo a aquellas que cumplen una función social invaluable.

En el mismo sentido, señor presidente, nuestro partido, la Coalición Cívica ARI, en oportunidad de la Audiencia Pública, propuso en uno de los puntos la laicidad de la escuela pública. Ese documento dice: "Debiera suprimirse el inciso e) del artículo 11 y el inciso c) del artículo 35, puesto que la educación religiosa que los padres de los alumnos deseen se imparta a sus hijos debiera ser realizada por los ministros de los cultos autorizados fuera del ámbito escolar. La escuela pública debe ser laica sin perjuicio que los contenidos curriculares introduzcan el estudio de lo religioso y las religiones como disciplina propia de la historia de la cultura".

También reivindicamos el acta que firmamos con estudiantes universitarios y secundarios, acta de compromiso por la educación pública, gratuita, laica, participativa y de excelencia.

Estamos comprometidos porque realmente creemos que la educación debe ser laica, que debe existir una separación entre el Estado y la Iglesia, y entre la escuela pública y la Iglesia. Ya se ha explicado muy bien que todos los contenidos de la reforma de ese artículo indican que la educación religiosa no se debe dar en las escuelas públicas, y que el derecho de los padres a contar con una educación religiosa debe canalizarse a través de los cultos y de los ministros de los cultos, respetándose de esa manera el derecho de todos a recibir la religión que se profese en términos de dogma.

La escuela no puede ser un lugar que se confunda con la religión –sea cual fuere-, y en todo caso lo que tiene que hacer la escuela es brindar en la currícula de algunas materias de ciencias sociales la historia de las religiones y lo que las mismas aportan desde el punto de vista ecuménico en el sentido de los valores que son compartidos. Es cierto que para entender el mundo hay que entender las religiones y respetarlas a todas por igual; pero insistimos en que debe haber una separación absoluta entre la Iglesia y la educación pública, no debiendo brindarse educación religiosa ni siquiera de manera opcional, fuera del horario de clases y, menos aún, con financiamiento.

En el caso de los derechos y deberes de los alumnos, el inciso e) tendría que tener otra redacción, como la de nuestra propuesta, en cuyo último párrafo habla de "garantizar la posibilidad efectiva de los estudiantes de participar en el funcionamiento y en los órganos deliberativos de las instituciones educativas". Nos parece que esa enunciación del artículo que habla de clubes, asociaciones y, al final, de centros de estudiantes no los está jerarquizando como deben serlo, como órganos gremiales y de representación de los estudiantes de las distintas escuelas de la Provincia.

Respecto del artículo 20, sostenemos que se debiera agregar un párrafo que exprese que el Ministerio de Educación también deberá garantizar de manera permanente y efectiva el derecho de acceso a la información de todas las personas e instituciones interesadas en el seguimiento de las políticas educativas provinciales. Actualmente, tenemos serios problemas para acceder a la información pública del Gobierno provincial –particularmente con el Ministerio de Economía– por lo que consideramos un importante avance que la ley reconozca el derecho al acceso a la información pública en el ámbito del Ministerio de Educación.

Respecto del artículo 35, ya señalamos nuestra posición de eliminarlo y es el referido a la opción de los padres a una educación religiosa. En el artículo 36, se ha introducido a último momento en la comisión una corrección interesante y que queríamos proponer. Me refiero a la parte pertinente donde dice: "... con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos fijados para este nivel por la presente ley, las escuelas primarias serán de jornada extendida o completa." Consideramos que se debiera decir "deberán ser de jornada extendida o completa." Porque es más taxativo y le da un carácter obligatorio para que el Estado

avance en el diagnóstico que señalamos sobre la necesidad de que las escuelas de la Provincia avancen en la jornada extendida y en el futuro hacia la doble escolaridad, objetivo que compartimos.

Respecto del artículo 40, hemos tomado la redacción que propone la legisladora Adela Coria por considerarla más clara. Sin embargo, debemos reconocer que se ha hecho un avance importante con la última modificación que se le hace al señalar que las prácticas tendrán carácter educativo y que no implicarán trabajo en pasantías. De todas maneras, reitero, incorporamos el artículo tal como lo propone la legisladora Coria.

También adherimos a lo expresado por el bloque de la Unión Cívica Radical respecto del artículo 47, en cuanto a la necesidad de hacer un agregado para que la creación de universidades sea a través de una ley especial y que se evite superposición en la oferta de carreras o tramos educativos que ofrecen las universidades actuales.

En el artículo 105, sobre organismos de apoyo, consideramos que se debe incorporar un párrafo que establezca que se deberá dictar una ley específica que reconozca y determine el funcionamiento institucional y administrativo de las asociaciones cooperadoras.

El artículo 107 es muy importante porque está referido al financiamiento de la educación. Nuestra propuesta es que el 35 por ciento de piso sea sobre el Presupuesto Anual aprobado y que ese porcentaje en ningún caso se podrá calcular sobre el presupuesto efectivamente ejecutado. De esta manera, si la ejecución presupuestaria es inferior al total, que el 35 por ciento se garantice desde el Presupuesto aprobado.

El legislador Maiocco expresó acertadamente que este artículo debería concluir cuando dice que “el Gobierno de la Provincia asignará los fondos presupuestarios que fueran necesarios.” En ese sentido proponemos la redacción de este artículo.

Con respecto a las metas, ya hemos señalado su importancia. Cabe agregar que como fueron elaboradas a partir del trabajo del Consejo Provincial de Planificación Estratégica, nos parece que hubiera correspondido que esa propuesta hubiera sido elevada a la Legislatura provincial para que todas las fuerzas políticas hubiéramos podido hacer nuestras propias propuestas.

Sin embargo, hay algo que me parece equivocado, dicho Consejo se las entregó al Ejecutivo provincial formando parte del texto del proyecto de ley cuando, en el marco del COPEC, estamos participando distintas fuerzas políticas. Hubiera sido más apropiado y plural que a ese aporte lo hubiera enviado a la Legislatura de Córdoba y, en todo caso, el oficialismo -con todo derecho-, lo hubiera incorporado al proyecto.

De todas maneras, nos parece bien que el proyecto de ley en tratamiento tenga las metas, que son muy importantes y que tienen que ver con acortar la brecha digital en la provisión de netbooks para la Provincia de Córdoba, los establecimientos educativos y los alumnos; que tiene que ver con nuevas escuelas y aulas, con maestros integradores, etcétera.

Señor presidente: nuestro proyecto tiene un artículo, el 115, que habla de la necesidad de que esta Legislatura se comprometa a la sanción de las leyes que quedaron pendientes desde la 8113 durante casi 20 años y que, si seguimos así, dentro de 20 más, otros legisladores estarán reclamando lo mismo.

Nuestra propuesta es que la Legislatura de la Provincia de Córdoba dé tratamiento y sanción a las leyes que reglamenten el normal funcionamiento de los centros de estudiantes, las asociaciones cooperadoras, como también a una que determine los alcances de las modalidades educativas de los establecimientos de gestión estatal municipal y de gestión privada autorizados. Estas leyes reglamentarias deberán ser aprobadas en el plazo de 120 días a partir de la sanción de la presente ley.

Nuestro partido presentó en la Audiencia Pública un documento que señala esto. Asimismo, se refiere a la inconveniencia del diferimiento de leyes especiales referidas a materias relacionadas y que sean pospuestas a futuro.

Además, el referido documento señala: “Creemos que por imperio de los artículo 104, inciso 13) y 62, inciso 3) de la Constitución provincial, tales regulaciones deben formar parte ineludible del propio cuerpo de la Ley Orgánica de Educación. Lo mismo se señala con respecto a las cooperadoras escolares y centros de estudiantes”.

Con respecto a las cooperadoras, el documento dice que debe regularse en el mismo cuerpo legal el sistema normativo de las asociaciones cooperadoras escolares puesto que no alcanza con imponer al Estado el deber de dotarlas de un sistema normativo, según lo prevé el artículo 105 del proyecto.

Es preciso definir el tipo de personería jurídica y las bases mínimas de organización que han de adoptar las cooperadoras delimitando sus competencias funcionales, reafirmando la voluntariedad de su integración, la gratuidad del servicio prestado por sus integrantes, la naturaleza de su patrimonio y de las actividades que pueden llevar a cabo en beneficio de los establecimientos escolares a cuyo amparo están destinadas.

Se trata de un vacío normativo que no puede continuar prolongándose dado que ello genera inseguridad jurídica y desincentiva la participación de las familias de los alumnos en el quehacer educativo.

Finalmente, el documento señala: "Es preciso que la regulación de los centros de estudiantes se incluya en el cuerpo de la ley y que dicha cuestión no se delegue a la reglamentación administrativa dado que los estudiantes no pueden ser ajenos al gobierno de la educación pública, conforme al artículo 63 de la Constitución provincial, siendo su regulación función indelegable de esta Legislatura".

Señor presidente: para finalizar, decir que nos hubiera gustado –como dijimos al comienzo- que este proyecto de ley se aprobara por unanimidad. Me parece que faltó tiempo de debate, un mayor esfuerzo para lograr consensos y que, de todas maneras, los distintos bloques –y en particular la Coalición Cívica ARI-, vamos a presentar un proyecto alternativo, que vamos a acompañar a los taquígrafos en formato digital, para que sea incorporado al Diario de Sesiones de la presente sesión, a los fines de que quede constancia de que nuestro bloque no acompaña el proyecto oficialista y propone uno alternativo que, entendemos, sintetiza las buenas iniciativas del gobierno y los excelentes aportes de la comunidad y de la sociedad cordobesa.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio

Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: nuestro bloque va a ser más humilde porque no tenemos proyecto propio; por lo tanto, vamos a tratar el proyecto en cuestión, debatido en comisión y durante todo este tiempo.

Tampoco fuimos convocados a firmar un acuerdo de consenso educativo, para el que fueron convocadas algunas fuerzas políticas y que, finalmente, parece que no llegaron a acordar.

También, resaltar que hemos atendido a los grupos de estudiantes y de padres que han venido con sus inquietudes a nuestro bloque. Nos llamó la atención el estudio y esmero que los estudiantes dedicaron a esta ley; conocían la ley en cuestión, la ley en vigencia hasta hoy, y la ley nacional. Realmente, quien habla y nuestros asesores quedamos muy bien impresionados y contentos al comprobar que los jóvenes despertaron por fin a una participación política con un tema comunitario e importante, como esta nueva Ley de Educación.

Además, dejar sentado nuestro reconocimiento a las tres comisiones que intervinieron en el tratamiento de la ley, receptivas a numerosos cambios introducidos.

Por último, manifestar que lamentamos desconocer que haya otro proyecto de ley que se está presentando, pues podría haber sido superador del presente. Pero no podemos opinar sobre él porque no lo conocemos.

Hechas estas consideraciones, entendemos que estamos frente a un proyecto de ley que pretende ser superador de la Ley 8113 en vigencia, y también estar en concordancia con la Ley 26.206, Nacional de Educación.

Consideramos que politizar el tratamiento de esta ley realmente es desmerecer la importancia que la educación tiene para nuestra Provincia, más aún en los momentos tan difíciles que estamos viviendo de comportamientos societarios o comunitarios. De manera que nuestra evaluación será objetiva y relacionada con los conceptos en cuestión.

En sus lineamientos generales incorpora nuevos temas acordes con la realidad social actual, como la inserción desde la formación temprana de criterios sobre calidad de vida, medioambiente, seguridad vial y no discriminación en cualquiera de sus formas, para garantizar el derecho de igualdad de oportunidades, la cultura del trabajo –tan necesaria en este tiempo- y el esfuerzo personal y colaborativo.

Recupera también los conceptos de prácticas educativas en las instituciones o fuera de ellas, con vistas a ampliar las posibilidades de empleo y enfrentar desde la educación formal problemáticas de creciente presencia en nuestros jóvenes –como las adicciones que causan tantos estragos-, y la necesidad de que la sociedad y la comunidad educativa enfrenten el dictado de la educación sexual con responsabilidad y con una base de adecuados conocimientos.

En primer lugar, no podemos dejar de expresar nuestro acuerdo con los siguientes criterios generales, entre ellos, el expresado en el artículo 1º, que establece que la educación y el conocimiento son un bien público garantizado por el Estado, y que la educación constituye una política de Estado prioritaria para la construcción y desarrollo de una sociedad justa.

También estimamos imprescindibles, con las nuevas exigencias, la revalorización de la formación científica y tecnológica, humanística y artística, la capacitación laboral y la formación profesional, según las necesidades y posibilidades personales y regionales, instrumentando políticas especiales que integren a los sectores menos favorecidos, y la

articulación horizontal y externa que posibilite el pasaje entre modalidades, carreras y establecimientos de un mismo nivel y la coordinación con sistemas de otras jurisdicciones.

Compartimos la obligatoriedad de la educación a partir de los 4 años, y los jardines maternales con atención de niños desde los 45 días hasta los 2 años de edad. La educación primaria -espacio fundamental de contención-, por su parte, mejorará en tanto se complete la implementación de la jornada extendida o jornada completa estipulada como meta a mediano plazo en el artículo 113 de la presente ley.

No puedo dejar de mencionar -aunque reiteremos conceptos ya vertidos en el tratamiento del Presupuesto la semana pasada- el artículo 109, que otorga garantía presupuestaria por parte de la Provincia de Córdoba, destinando un porcentaje mínimo de recursos en cada ejercicio no inferior al 35 por ciento del Presupuesto General anual, luego de años de retraso en las partidas presupuestarias educativas. Baste como ejemplo, la magnitud del retraso para la ejecución presupuestaria del año 2010. Si se hubiera proyectado la meta del 6 por ciento del Producto Bruto Interno, se habrían tenido que incorporar 2162 millones de pesos, lo que hubiera significado una mejora en infraestructura, salarios y materiales educativos. Si bien el Presupuesto para el año 2011 -actualmente en estudio- todavía no alcanza dichas metas, los aumentos registrados y las metas previstas son importantes.

Cuando leímos en un medio local que nuestro país cayó en el ranking mundial de desempeño educativo y se ubicó en el puesto 58 entre los 65 países evaluados, según el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, no pudimos menos que sentir urgencia en implementar los cambios. Estos resultados y sus probables ecos constituyen parámetros de medición internacional que no podemos ignorar a menos que nos esté faltando apego a la lectura crítica.

Si bien concordamos con los criterios generales del presente proyecto, no podemos desconocer los aspectos particulares del articulado que suscitara en distintas entidades representativas de padres, alumnos y docentes fuertes cuestionamientos en las Audiencias Públicas, muchos de ellos con gran solidez argumentativa, y que no pudieron concretarse en el logro de un proyecto que surgiera como expresión del acuerdo de todos los sectores involucrados.

Como ya se ha señalado, los puntos controversiales refieren a la educación religiosa, los criterios de implementación de las prácticas educativas y la inclusión de la educación artística como conocimiento de valor y expresión de pensamiento en nuestra sociedad. Comenzando por este último punto -la educación artística- aprobamos y hemos visto con agrado las importantes modificaciones introducidas a lo largo del debate de la ley al proyecto original respecto de los artículos 6, 72, y en especial en el artículo 74, con la incorporación de al menos dos disciplinas artísticas en el transcurso de la escolaridad obligatoria. En este mismo sentido, en el artículo 85 resulta valiosa la incorporación de centros culturales que incluyen arte y cultura en el marco de la educación no formal.

Más conflictiva resultó la modificación del artículo 11, inciso e). El conflicto entre laicismo y clericalismo en el ámbito educativo ha sido una constante en la historia de Córdoba. Sin embargo, deberíamos hacer el esfuerzo por demostrar una mayor madurez en el análisis de un tema que involucra a la mayoría de los cordobeses, estemos o no comprendidos en los alcances de esta ley, profesemos o no alguna fe religiosa.

En primer término, advertimos que la implementación de este artículo podría convertirse en compleja de no plasmarse previamente en una correcta reglamentación. En el despacho de comisión, se agregan las condiciones que clarifican la enseñanza religiosa como enseñanza extracurricular, fuera del horario de clase, sin financiamiento estatal y a cargo de los ministros autorizados de los diferentes cultos. Por otra parte, se eliminó como objetivo de la educación primaria, en el artículo 36, inciso c), con lo cual estamos de acuerdo. Además, el artículo 62, inciso 5), de nuestra Constitución provincial dice: "Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral, según sus convicciones"; por lo tanto, la Constitución provincial permite que se imparta educación religiosa en tanto y en cuanto se respete la libre expresión de culto.

Quien me precedió en el uso de la palabra leyó un artículo de un diario en el cual el Rector de la Universidad Católica de Córdoba, Rafael Velasco, manifestó: "Si la educación religiosa sirve sólo para la crispación, entonces hay que sacar el artículo del proyecto". El mismo artículo menciona que la Rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Carolina Scotto, opinó: "Creo que una cosa es hablar de enseñanza o de educación religiosa, que es el tema que ha generado tanto debate, y otra cosa es hablar del fenómeno religioso como objeto de estudio cultural y plural, desde una perspectiva que incorpore la mayor conciencia sobre la diversidad que las expresiones humanas han tenido en los distintos pueblos", con lo cual reconoce que la religiosidad tiene una gran importancia en la cultura de los pueblos.

Respecto a las prácticas educativas, los estudiantes consideraban que la ley propiciaba la precarización laboral de los alumnos de escuelas técnicas. En los artículos 40 y

66, donde se propicia la vinculación de las escuelas secundarias con el mundo de la producción y el trabajo, se dejó constancia de que en ningún caso debe ser considerado “trabajo” en los términos de la Ley nacional 20.744, o “pasantías”, conforme lo define y establece la Ley nacional 26.427.

Hubiera sido deseable, de nuestra parte, la incorporación de un mínimo de edad y de un período de duración -6 meses, por ejemplo-, tal como lo establece el artículo 33 de la ley nacional.

En cuanto a la auditoría, dirección y control, el proyecto destina esta tarea sólo a los docentes. Creemos que estos debieran ser acompañados por miembros del Ministerio de Educación, a través de un monitoreo, conforme a los resultados e inconvenientes que pudieran suscitar estas prácticas.

Por otro lado, valoramos la importancia que estas prácticas van a tener en la capacitación para una posterior inserción laboral de los jóvenes, a quienes se les abre un mundo que solamente en el ámbito teórico del estudio secundario no van a descubrir.

Conforme a los criterios de no discriminación por condición física o lingüística, estipulados en los principios generales de esta ley -artículo 3, inciso d)-, nuestro bloque se hizo eco de lo planteado por miembros de la Comunidad de Sordos de Córdoba, quienes pidieron ser considerados como minoría lingüística y no como discapacitados, por lo cual solicitaron incorporar al artículo 4º, inciso c), que reza: “La formación en el respeto y valoración de la identidad lingüística y cultural de los pueblos originarios”, el agregado: “y otras minorías lingüísticas”. Este bloque solicitó su inclusión a la Comisión de Educación; lamentamos que no se haya concretado.

Con respecto a la educación sexual, en el artículo 4º, inciso j), el agregado, conforme a lo establecido por la Ley nacional 26.150, también conforma el pensamiento de este bloque.

También estamos de acuerdo con las modificaciones que se realizaron con respecto a los centros estudiantiles. Acordamos con el artículo 12, inciso c), que promueve estas asociaciones para participar en la vida institucional, y en la incorporación en el Consejo Provincial de Políticas Educativas y en el Consejo Provincial de Educación Técnica de las asociaciones de padres y estudiantes, con lo cual se ha dado cumplimiento a muchas de las inquietudes de asociaciones de estudiantes secundarios. Hemos repasado puntillosamente los artículos, y la mayoría de ellos han sido tenidos en cuenta en estas reformas, por lo cual el voto del Vecinalismo Independiente será positivo para este proyecto de ley.

Quiero terminar mis palabras haciendo una reflexión acerca de un artículo publicado en “La Voz del Interior” el día domingo 12 de diciembre de 2010, redactado por el padre Rafael Velasco, a quien vamos a citar porque creemos que vale la pena.

Voy a leer dos párrafos extensos, pero creo que merecen la reflexión: “Se ha priorizado una pedagogía de la contención con la esperanza de que, preservando en la escuela -hablaba de los jóvenes-, algo aprenderá y será mejor que si está en la calle. Algo que, en cierto modo, es verdadero”. O sea, la prioridad es la contención escolar antes de que el joven o niño esté en la calle.

“Por otro lado, ¿qué pasa con esas horas en las que el alumno está dentro de la escuela? ¿Qué recibe? Porque si se prioriza tanto la contención, se termina descuidando otro de los polos fundamentales en el proceso educativo: la autoridad.

Si el alumno debe ser contenido por todos los medios, ¿qué lugar ocupa el docente? ¿Es, entonces, un trabajador que tiene la principal misión de contener al alumno en la escuela? ¿Su primera misión no es enseñar?

Dado que el proceso educativo es asimétrico, porque hay alguien que sabe algo más -el docente- y lo enseña a alguien que aún no sabe, Ese proceso de enseñanza-aprendizaje no puede sostenerse sin dar autoridad al docente, sin consagrar a través de la cultura institucional, que el docente tiene autoridad. Por lo tanto, tiene que ser apoyado por la institución, entre otras cosas, frente a los reclamos -muchas veces desproporcionados- de las familias”.

El último párrafo dice: “Temas centrales. El mencionado debate ha puesto sobre el tapete algunos temas que, considero, no son centrales: el famoso inciso sobre la opción de la enseñanza de la religión en las escuelas del Estado y el tema de la vinculación con las empresas. Esos han sido dos de los grandes temas.

Pero no se ha hablado de un tema central como es esta polaridad: autoridad-contención. Si de verdad pensamos que el sistema educativo debe ayudar a los alumnos a crecer interiormente, a formarse y a ser capaces de asumir un proyecto de vida personal, con la mayor cantidad de herramientas posible para transformar la sociedad, debemos afrontar este tema. No sólo desde la ley, sino como sociedad. Pretendemos que la escuela haga lo que como sociedad no hacemos ni queremos esforzarnos por hacer. Por todas partes canalizamos la banalidad, la avivada, el golpe de suerte (basta ver la televisión) y después pretendemos que la escuela eduque en valores. ¡Qué contradicción!

Creo que en algo los estamos estafando a nuestros adolescentes porque discutimos temas periféricos, pero hace rato que estamos eludiendo el debate verdadero: los educadores, ¿vamos a ser adultos o vamos a seguir en la demagogia? Desde el sistema educativo, ¿vamos a fortalecer la autoridad, sin perder de vista la contención, o vamos a seguir administrando lo que hay?

Ensayar este debate, tal vez sea más provechoso para todos”.

Este bloque reitera su apoyo con el voto positivo a esta ley, con la esperanza y la convicción de que estas nuevas pautas educativas nos van a permitir ensayar este otro debate en el tiempo que tenemos por delante para mejorar los aspectos educativos que también hacen a la calidad que les damos a nuestros educandos.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Raúl Albarracín.

Sr. Albarracín.- Señor presidente, es indudable que a ninguno de los señores legisladores se nos escapa la importancia que tiene el proyecto en tratamiento elevado por el Poder Ejecutivo y en el que ha participado el Consejo Provincial de Políticas Educativas, integrado por representantes de diferentes institutos educativos y conformado por un nutrido grupo de profesionales con incumbencia en el tema que nos ocupa. Este selecto grupo viene estudiando y profundizando la problemática y, luego de un largo proceso que lleva más de un año y medio, han logrado el proyecto de ley de Educación que hoy ponemos a consideración. Sumado a ellos, esta Legislatura ha contribuido de forma genuina y absolutamente democrática a este debate.

Desde esta óptica venimos observando con preocupación cómo en los últimos años, y cada vez con mayor intensidad, viene calando un mensaje interesado que cuestiona la calidad de la educación y acentúa y exagera los “problemas de convivencia” de la escuela pública. En los últimos meses sólo hemos escuchado sobre su desprestigio. Sin embargo, es la escuela pública la que cumple su función educativa con los más débiles, y es en la escuela pública donde se llevan a cabo los proyectos educativos más solidarios.

Desde luego que nuestro sistema educativo es claramente mejorable y es una exigencia de todos los ciudadanos que entendemos que la educación es una inversión a futuro; imprescindible para conseguir una sociedad más equilibrada. Pues, señores legisladores, creemos que este proyecto es un gran paso para conseguir dicho objetivo.

Verdaderamente consideramos insólito e incomprensible cómo es que un sistema que establece nuevos planteos y principios como es una educación para todos; comprensivo y diversificado para dar respuesta a las diferentes capacidades e intereses del alumnado; adaptable a la organización democrática de la sociedad; que establece una enseñanza que favorece aprendizajes funcionales y con un diseño curricular orientado al desarrollo integral de las personas, puede por sí mismo ser el causante de todos los desastres que animosamente se le adjudican desde algunos sectores.

Hay una ley educativa que fue el resultado de un amplio análisis profesional, con un gran debate social y político sobre el sistema educativo que nuestra sociedad democrática requería y que parece haber tocado ciertas fibras sensibles de algunos intolerantes que distorsionan su verdadero pensamiento con un discurso difamador que sólo aporta confusión a quienes los escuchan.

Creemos en la necesidad de potenciar la escuela pública como una escuela para todos, que partiendo de la individualidad de cada persona, considere las diferencias como un valor positivo y respete su singularidad, una escuela que preste atención especial a los grupos más desfavorecidos, ya sea por razones económicas y/o sociales, y a los grupos que, no desfavorecidos, quieran concurrir a ella.

Concluyo señalando que en nuestro análisis partimos desde la consideración de que las desigualdades educativas no pueden aislarse de la realidad social. A medida que determinadas políticas inciden en mayores desigualdades sociales, mayores desigualdades encontramos también en nuestras escuelas. Que la diversidad es insustancial a la historia de la humanidad, es lo habitual y es positivo. Todos tenemos características especiales, somos diversos, y eso es precisamente lo que enriquece nuestra propia existencia. Por eso todos los estudiantes de esta Provincia requieren una atención especial, porque todos y cada uno de ellos son seres especiales y este proyecto de ley de Educación así lo contempla.

El bloque de Propuesta Republicana –PRO– acompaña este proyecto.

Gracias.

Sr. Presidente (Busso).-Tiene la palabra la legisladora Olivero.

Sra. Olivero.- Señor presidente, antes de hacer el análisis en nombre del bloque que represento, quiero plantearle a usted y a todos los presidentes de bloque, el tratar de consensuar la posibilidad –como lo dijera el legislador Pozzi– para que esta Legislatura hoy pueda tener en este recinto a representantes de la comunidad educativa y no solamente a las

cúpulas de quienes participaron en la elaboración de este proyecto en el Consejo de Políticas Educativas.

Si hoy –como se supone– estamos discutiendo la mejor Ley de Educación para los próximos veinte años, las gradas de este recinto debieran estar llenas de estudiantes, docentes y padres para aplaudirla. Por eso le pido, señor presidente, que, al momento de su sanción, a quienes fueron excluidos durante todo el tiempo de elaboración de este proyecto de ley, se les dé la posibilidad de presenciar esta sesión.

Si el proyecto en debate –tal como se desprende de su mensaje de elevación y de los distintos discursos que hemos escuchado– persigue la inclusión y la libertad, ¿por qué tienen miedo hoy, al punto que esta Legislatura esté vallada y militarizada?, ¿cuántos policías y perros nos están “cuidando”, durante el desarrollo de esta discusión, a quienes somos representantes del pueblo?

En nombre de mi bloque y en el de muchísimas personas que fueron acalladas durante el proceso de debate de este proyecto de ley –que ya lleva casi dos años y que se desarrolló en el Consejo de Políticas Educativas y no en la comunidad educativa–, debo decir que, si pretendemos legislar para bien de la libertad de los ciudadanos de la Provincia de Córdoba, debíamos comenzar por corregir, precisamente, la libertad condicionada propia del ámbito de este Poder Legislativo, abriendo las puertas de esta Casa del Pueblo, como le dicen. Pero el pueblo está lejos y no puede participar.

No podemos tomar a la ligera el diseño de un proyecto de Ley General de Educación; no estamos votando hoy la expropiación de un terreno para levantar una obra determinada; no estamos discutiendo en esta Cámara un convenio entre la Provincia y la Nación, sino una política de Estado a nivel educativo como pilar fundamental para construir el futuro de la sociedad cordobesa y –como decía Sarmiento– para “educar al soberano”.

Haciendo una lectura rápida de algunos componentes del proceso de “debate” –por llamarlo de algún modo– que se generó en el Consejo Provincial de Políticas Educativas, me topé con una “sorpresa” que ratifica el carácter antidemocrático y poco participativo del proyecto de ley en tratamiento: el acta número 10 de la reunión de ese Consejo –que tuvo por objeto el análisis del Capítulo I del proyecto de ley– expresa: “En la ciudad de Córdoba, a diecinueve días del mes de octubre, siendo las 9 horas, se reúne en las instalaciones de la Sala del Mercosur de la Casa de Gobierno el Consejo de Políticas Educativas...”, y luego detalla –no voy a leerlo textualmente– quiénes estaban presentes ese día.

Cuando comienza la reunión, presidida por el doctor Sánchez, el profesor Monserrat pide la palabra y ante la presencia de tres directoras de jardines de infantes de instituciones privadas, convocadas por el Consejo de Educación Católica, expresa que si bien no se opone a la presencia de ellas en esa reunión, considera que debió haberse consultado antes al respecto. Cree que este Consejo, conformado por representantes de distintas áreas vinculadas con la educación, ejerce esa representación con responsabilidad y actúa conforme a esta línea y en un marco de organización previsto en la creación del mismo. Sugiere que para otra ocasión se consulte primero al cuerpo.

Luego habla el arquitecto Buitrago diciendo que no se ha pretendido sobrepasar ninguna autoridad del Consejo y considera que no debería haber problemas en contar con la presencia de otras personas.

Creo que todos los legisladores –aunque a algunos no les importe– tienen este escrito en su oficina, y sería bueno que lo leyeran, está en la página 2 del Acta Nº 10.

Se produce después la intervención de la licenciada Alicia Carranza, que comenta la situación derivada de su presencia en una jornada realizada por la fundación Minetti y la empresa Arcor a la que acudió de buena fe y donde surgió el tema del tratamiento de un proyecto de ley para modificar la 8113. Expresa que le llamó la atención la cantidad de “fantasmas” –entrecomillado– originados en torno a lo que se trabaja en ese Consejo, y le sorprenden la mala información circulante y la cantidad de sospechas generadas al respecto.

Luego habla la legisladora Coria, que comenta lo expuesto por la licenciada Carranza y sobre algunas distorsiones que circulan acerca del trabajo del Consejo. Explica que nadie habla sobre el proceso que se sigue al respecto; piensa que sería prudente informar a las distintas instituciones sobre este proceso y explicar que, dentro del mismo, el paso siguiente sería el debate en las escuelas. Asimismo, que se deberían cuidar los tiempos previstos para estas etapas y considera que esta comisión no debería correr el riesgo de elevar una ley que no tenga un debate previo en toda la comunidad educativa. Propone acordar cómo socializar el sistema y explicitar el proceso que se seguirá hasta llegar a la Legislatura, si se debe dar a conocer como un ajuste de la 8113 o como un cambio de ley. Cree que es una forma de resguardar al Consejo y que se debe prever la forma de habilitar distintos espacios de debate.

Para algunos distraídos, voy a recodar la fecha: en octubre de 2009 el Consejo de Políticas Educativas discute cómo llevar adelante el debate democrático dentro de las instituciones.

El doctor Sánchez recuerda que fue planteado por el señor Ministro al comienzo de las deliberaciones y que preveía, una vez discutido en el seno del Consejo, la bajada a las instituciones. ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde estaba la comunidad educativa interiorizándose en el mes de octubre del año 2009, cuando se estaba pretendiendo modificar la Ley 8113?

El doctor Sánchez está de acuerdo con lo planteado, y consulta –no sabemos a quién– sobre cómo manejar los tiempos para realizar, por ejemplo, un comunicado de prensa.

Estábamos discutiendo la modificación de la Ley 8113 y el debate estaba vedado en la Comisión de Políticas Educativas; estaba impedida esa “bajada” a la comunidad educativa para poder discutirla. Y me sorprenden algunas frases de la profesora Carmen Nebreda que manifiesta que “debe quedar claro que la consulta debe ser para que se apruebe la ley y no para que no se haga”. Repudio públicamente lo que está escrito y lo que dijo la diputada nacional Carmen Nebreda, representante –supuestamente– de los docentes cordobeses, y sigo leyendo: “cree que hay otros intereses de sectores muy identificados que trabajan para trabar la ley”. ¿Trabando qué ley, si no sabíamos que se estaba discutiendo un articulado en la Comisión de Políticas Educativas?

Voy a ser muy sincera, con el respeto que se merecen las legisladoras Adela Coria y Evelina Feraudo, con quienes comparto la Comisión de Educación, pero no podemos ser hipócritas. Durante todo el tiempo de debate en que las legisladoras estuvieron en la Comisión de Políticas Educativas no nos dimos ni un minuto en la comisión para poder abordar lo que se estaba discutiendo allí. Entonces, no entiendo a esos legisladores que tienen hojas y hojas escritas con un discurso de dónde está el aspecto democrático del debate de este proyecto de ley en la elaboración colectiva de este concierto plural que debería haber estado desde el primer momento.

Creo que todo lo que vino después fue una “pose”, una “puesta en escena” para hacerle creer al ciudadano que iba a ser consultado sobre algo “cocinado”, como dijeron en las Audiencias Públicas, con algo a lo que seguramente algún sensible le iba a poner el oído para escuchar porque era muy grande la rebelión de los docentes, padres y alumnos, con la primera actitud ejemplar de los alumnos que nos pusieron a los adultos en evidencia de lo que estaba pasando en la Comisión de Políticas Educativas.

Después bajó el anteproyecto –para ser correctamente hablada–, y fue anunciado por algunos medios de prensa –ni siquiera por los medios comunicacionales que debería tener la escuela– y fue –a veces– 48 horas antes, y se puede decir que el que tuvo la suerte de tenerlo 15 días antes, en verdad es un privilegiado. Así, el 28 de julio, con la escasa participación de la mayoría de los 3000 establecimientos escolares, de los 300.000 estudiantes y de los 70.000 docentes que tiene nuestra Provincia, se hizo un ejercicio bárbaro: “el múltiple choice” de una receta donde había pocas posibilidades no sólo de elaborarlo colectivamente sino también de poder opinar seriamente acerca de un anteproyecto de más de 110 artículos.

Después ocurrió la toma de las escuelas, y alguien salió a decir que eran profascistas, que como en Buenos Aires se habían tomado las escuelas, en Córdoba ocurría el “efecto dominó”. Se tomaron las escuelas porque se caían a pedazos, mientras se gastaban la plata en otra cosa. Los alumnos reaccionaron porque viven todo el día en la escuela.

Entonces tomaron las escuelas, reaccionaron por la situación edilicia y se enteraron de que había un proyecto de modificación de la Ley 8113, pero no iba a haber “debate” sino “consulta”, que no es lo mismo. Debate quiere decir intercambio de ideas, con libertad y sin condicionantes. Acá iba a haber una consulta: artículo 1º, tal cosa, artículo 2º, tal otra, y así sucesivamente.

Efectivamente, los alumnos empezaron a querer ser protagonistas, a querer ser libres, a querer entender y comprometerse con la modificación de la Ley de Educación de la Provincia de Córdoba.

Pronto el Gobierno vio que, en realidad, había procedido incorrectamente. No es que se habían olvidado de los alumnos, eso es mentira porque cuando quiere convocar al sector agrario, lo hace; cuando quiere invitar a alguien para discutir algo, lo invita; a gente de los centros vecinales, de los pueblos, jóvenes, viejos y adultos. ¿Cuál es el problema si estamos discutiendo una Ley de Educación y no un convenio entre la Provincia y la Nación, como estamos acostumbrados a votar “entre gallos y medianoche”? Este es el futuro de la Provincia de Córdoba, entonces, no es un tema menor y había que convocar, ser creativos. ¡Miren si no fueron creativos los alumnos que hasta se pusieron una nariz como los payasos para venir a explicarnos lo que pensaban de la Ley de Educación! Había que ser creativos, porque éste es el futuro de la Provincia de Córdoba.

Había que ser democráticos más que creativos porque, en definitiva, es una conceptualización ideológica cercenar, censurar, proscribir, que en realidad es lo que pasó.

Entonces, para “maquillar” esta situación completamente antidemocrática, acordaron con un grupo de alumnos abrir el debate pero en aquellas escuelas que lo pidieran. Tampoco fue “la gran idea” volver otra vez a plantear el debate –que, en realidad, era una consulta- en el ámbito de las escuelas. Entonces, durante 15 días utilizaron algunos módulos y después nos dieron el resultado de esas consultas, voy a decirlo como corresponde: consulta, no debate.

Así llegamos a tener este anteproyecto y, como se dieron cuenta de que los estudiantes seguían movilizados y que “contagiaron” a los padres, siendo entonces no sólo los estudiantes sino también los padres y algunos docentes, sumándose el interior al movimiento de la Capital, se sacó de la galera las Audiencias Públicas.

La resolución, que es inédita en esta Cámara ya que sólo se utilizan las Audiencias Públicas para la discusión del Presupuesto, intentó hacer creer a la ciudadanía que ahora iba a haber debate. Pero en las audiencias se otorgaban diez minutos para exponer ideas, sin debate –otra vez a modo de consulta- y sólo para opinar sobre este proyecto en tratamiento.

Señor presidente, yo me opuse en este recinto a esa resolución; sin embargo, tuve una actitud interesante –que no tuvieron muchos de los miembros de los bloques que votaron afirmativamente- como fue la de participar. De las seis Audiencias Públicas asistí a cinco; no sólo fui a Río Cuarto y a San Francisco, sino que participé en las realizadas en la Capital, escuchando las diversas propuestas.

También quiero hacer una confesión a toda la Cámara: sentí vergüenza. Tuve ese sentimiento porque hubo ocasiones en que éramos 5 o 6 las legisladoras que estábamos sentadas presidiendo una Audiencia Pública. Creo que existe todavía una idea falsa de que somos las mujeres las que nos encargamos de la educación; me parece que eso también representa un símbolo del desprecio que muchos le tienen al proyecto que estamos discutiendo.

Así, escuchamos a voces individuales y de diferentes sectores, asambleas, coordinadoras, grupos de jóvenes, padres y ciudadanos comunes y silvestres que empezaron a pedir participación, porque se dieron cuenta de que era hora de convertir esta democracia formal en una democracia participativa.

Este proceso real que hemos vivido desmiente categóricamente a los legisladores que plantean que este proyecto está munido de pluralismo, democracia y participación. Entonces, este perfil –que no es un aspecto secundario o formal- se transforma, en definitiva, en una posición ideológica que está visible también en el escrito de la ley.

Alguien me puede decir que las audiencias sirvieron porque se hicieron cambios. Al respecto, estaba viendo que los cambios que se hicieron obedecieron a dos motivaciones: en primer lugar, la fuerte presión de los estudiantes y sus padres, trasladada hacia la sociedad que se movilizó porque se enteró del debate de este proyecto, hizo cambiar algunas cuestiones que eran evidentes, ya que se expresó todo el tiempo que este proyecto cordobés tenía un marco nacional, y resulta que las omisiones se daban justamente sobre esa ley nacional. Entonces, lo que se prevé en las cuestiones artísticas y humanísticas es un grueso error, que obedece a un grueso error de política educativa del Gobierno, que realmente se la había “tragado”, porque está en la ley nacional.

Entonces, estas cuestiones, como el tema de la educación sexual –que habían inventado como reproducción responsable- era para buscar algún atajo para no poner lo que dice la Nación. Pero acá hay leyes claras, y nadie se tiene que poner en el marco de esta ley provincial.

De todos modos, creo que los aspectos centrales que han sido cuestionados y objetados por la mayoría de quienes participaron en las Audiencias Públicas y en los distintos ámbitos de debate quedan aún sin modificar.

No voy a entrar en un análisis meticoloso del articulado ya que lo hemos hecho en la presentación del anteproyecto y cuando ingresó el proyecto a la Legislatura; en efecto, tengo sobre mi banca el proyecto con las modificaciones que proponemos. En realidad, lo que quiero plantear es que el espíritu del proyecto no ha sido modificado, lo que debiera hacerse postergando el debate y elaborando un nuevo proyecto.

Hay aspectos del proyecto que estuvieron visibles, que salieron a la luz, como el tema de la religión, la relación trabajo-educación-pasantías y el del presupuesto en lo que se refiere a la legalización de las cooperadoras, que es el esfuerzo que están haciendo los padres para sostener la escuela pública. También el tema de los aportes empresarios y el vínculo de las empresas con las instituciones educativas y el de los derechos laborales de los docentes. Todos estos temas han sido debatidos porque quienes participaron leyeron en profundidad cada uno de los artículos del proyecto.

Sin embargo, hay otros aspectos que no han estado visibles en la discusión y que desde nuestro bloque los hemos planteado en su momento. No compartimos en absoluto la privatización de la educación porque consideramos que es un derecho y no una mercancía. El peronismo, el justicialismo y el menemismo, durante toda su historia –como también lo han hecho otros gobiernos- han favorecido la privatización de la educación a los fines de lograr que el Estado se desentienda de garantizar la educación pública y gratuita de diferentes modos. Es por ello que no es casualidad que este proyecto jerarquice la educación privada al igualarla con la educación pública. Pero esto se hace con los fondos de todos los cordobeses.

Efectivamente, existe una desproporción entre ambos estudiantes ya que la escuela privada cuenta con los recursos que reúne a través de las cuotas más el subsidio que le da el Estado provincial para el pago de los sueldos a los maestros. Por lo tanto, existe una desigualdad objetiva entre estos alumnos y los que van a una escuela pública.

En definitiva, respecto del proyecto, creo que no ha habido grandes cambios en el articulado; se ha modificado la introducción, por ejemplo; la participación de los alumnos sigue siendo acotada, estableciéndose que el Ejecutivo hará la reglamentación.

Ahora, me pregunto, señor presidente, ¿a qué le tienen miedo? Le tuvieron miedo al debate y ahora le tienen miedo a que los alumnos se organicen como quieren. ¡Por favor! Durante todo este tiempo los alumnos se han organizado como han querido y nos han dado un ejemplo. Hasta usted, señor presidente, los ha recibido. También los recibió el Ministro. Y nos referimos a alumnos de escuelas donde no había ninguna reglamentación sobre cómo ir a hablar con un presidente de bloque o con un ministro y lo hicieron muy bien.

¿Cómo vamos a permitir que haya una reglamentación para la organización gremial de los estudiantes? Encima, se la compara con un club o con una asociación estudiantil. Se hacen espectaculares convocatorias para vender rifas para juntar plata para pintar la escuela pero no para armar consejos escolares y definir políticas, no para participar en su desarrollo; no es lo mismo participar en el desarrollo que definir políticas institucionales para poder mejorar la calidad educativa, que está tan lejos.

En cuanto al articulado, tenemos la idea de que, más allá de los parches que se han realizado –que son cosas que tenían que darse porque estaban en la ley nacional-, creemos que la Educación no está definida como laica, pública y gratuita; no están garantizados en este proyecto antidemocrático y poco plural estos conceptos que, desde nuestro bloque, vamos a seguir defendiendo.

El tema del Presupuesto no es menor y tiene que ver con el presupuesto necesario, no con el suficiente. Imagínense que dentro de un par de años, estando vigente esta ley, se produzca –Dios no quiera- una crisis como la de 2001; en lo económico vamos a estar complicados. Entonces, ¿cómo se va a garantizar el recurso económico si no está claro en la ley que tiene que haber una reforma tributaria para que los empresarios paguen los tributos y no para que laven plata tratando de ver como, “cazan” mano de obra barata para llevarla a la fábrica? Y no estoy contando una fábula, hace tres años pasó en la escuela a la que asiste mi hijo porque, efectivamente, hay necesidades, hay familias completas que están excluidas y entre no tener nada y tener algunos de estos jóvenes adolescentes trabajando en una de estas grandes empresas multinacionales, aunque sea por poca plata, muchos dicen: “algo es algo”.

Se llenan la boca diciendo que el año que viene la “niña mimada” será la educación; queremos verlo, porque el 22 de diciembre vamos a discutir en segunda lectura del Presupuesto y nos llama la atención la cantidad de partidas presupuestarias que no entendemos por qué y cómo están.

Los presupuestos son incrementales –no de base cero- y los seguimos arrastrando; así lo hicieron con esta ley: no se hizo un “parate” para ver cómo estaba la Provincia, cuáles son los datos de la realidad que hacen necesario debatir una nueva ley provincial en base a estos problemas, a estos déficit, a estas carencias; porque si tenemos tal porcentaje de alfabetismo, si tenemos este otro índice de desgranamiento, si tenemos planes nacionales que nos están “agarrando” para ver cómo se incluye a esos jóvenes excluidos, habría que discutir tal propuesta. Eso tampoco se hizo.

No era un diagnóstico serio y, ¿sabe qué, señor presidente? A ese diagnóstico lo podría haber encontrado el Ministro de Educación si bajaba el debate a las escuelas –en las rurales, urbanas, de nivel superior y de niveles inferiores-, con los padres, con los vecinos, que muchas veces en los barrios pobres colaboran para sostener la escuela pública. Ni qué hablar de las escuelas rurales; ni qué hablar de las escuelas albergue, que todavía esperan el gas para aprender calentitos.

Entonces, estas cuestiones que tienen que ver con el articulado también reflejan un aspecto ideológico que no compartimos, y vamos a insistir –como lo hice desde el primer día y no tuve que pensar durante todo este tiempo- en la necesidad de plantear la postergación del debate. El Gobierno se llevaría los aplausos de la mayoría de la población cordobesa si de

verdad pospusiese este debate parlamentario, abriendo para el año próximo, sin apuro, un verdadero debate, de abajo para arriba con la comunidad educativa, de norte a sur y de este a oeste en la Provincia de Córdoba, no teniéndole miedo, tratando de admitir la diversidad y las diferencias que hay dentro de nuestra Provincia de Córdoba.

También quiero tomar como mía la preocupación del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, que a través del Defensor Adjunto, me ha mandado una carta - seguramente varios legisladores la tendrán-, que es un expediente en el que se ha hecho eco de los estudiantes y de la comunidad educativa de la ciudad de Río Cuarto, que solicitan la postergación del tratamiento legislativo para elaborar una nueva Ley de Educación, cuestionan la metodología empleada y, justamente, en este planteo del Defensor del Pueblo se hace alusión a la propuesta que acabo de realizar y vamos a sostener.

También me voy a hacer eco de muchos docentes del interior de la Provincia de Córdoba; esos docentes que no podemos escuchar todos los días porque viven lejos o están en otras localidades, pero que hicieron un esfuerzo interesante para plantearnos “la diaria”, lo que viven todos los días, los problemas en las escuelas, las ausencias, las carencias, los problemas que tienen muchas veces, no solamente con los estudiantes sino con las familias, con los directivos, con la ausencia de docentes, con la carencia de personal y, realmente, quiero resaltar la valentía de muchos de estos docentes que, a pesar de haber sido amenazados con la frase “tené cuidado con lo que vas a decir en la Audiencia Pública”, se animaron a plantearnos lo suyo.

Me quiero hacer eco de esta fabulosa organización que se pudieron dar los que estuvieron ausentes en el debate de este proyecto de ley. Me siento completamente identificada con algo que han demostrado que se puede lograr y es tener la libertad de participar en pos de un objetivo común, tal como es la educación.

Seguramente podré retomar el uso de la palabra más tarde, pero a modo de síntesis - estaba revisando que otros aspectos me han quedado en el tintero- debo decir que un proyecto de ley que tiene el espíritu de la inclusión, hoy arranca excluyendo; una ley que recalca la participación se elabora a espaldas de la comunidad.

Los mejores resultados de esta ley podrían depender del consenso, pero hoy ese consenso no existe porque esta Legislatura está vallada, militarizada y custodiada con muchos policías y perros, lo que profundiza la ilegitimidad social, que hace tres meses el bloque que represento denunció públicamente.

Estoy convencida, señor presidente, de que esta no es la ley que queremos ni la que necesitamos; es por eso que nuestra propuesta ha sido, es y será la postergación por el tiempo que sea necesario a fin de que se discuta en el seno de la comunidad educativa, formada por padres, docentes y alumnos y, si fuese posible, por toda la comunidad, incluso por aquellos que ya han dejado la escuela, que no tienen que ver con la misma de manera directa pero que por su experiencia puedan hacer un aporte.

En esta sesión vamos a impulsar una convocatoria para el próximo año a través de un proyecto de ley que lo discutiremos con la comunidad educativa, para citar a un congreso de educación provincial que podría llamarse, por ejemplo, “cabildo” –no estoy atada a ningún nombre.

- Ocupa la Presidencia el señor Presidente, Vicegobernador Héctor Campana.

La ley 8113, que nos rige desde hace 19 años, es necesario cambiarla, pero por algo que realmente sirva y no por un proyecto de ley que seguramente será sancionado sin que signifique una alternativa para resolver la grave crisis educativa que tiene la Provincia de Córdoba.

Porque apostamos por más, y porque no le tenemos miedo al debate y porque queremos generar políticas públicas de abajo para arriba, nuestro bloque va a rechazar el proyecto en tratamiento.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.

Sra. Fernández.- Gracias, señor presidente.

Le voy a decir en qué consiste la ley que en términos generales dicen que no quieren.

El artículo 2º dice –permítanme leerlo así lo recuerdo-: “La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizado por el Estado.

La educación se constituye en política de Estado prioritaria para contribuir a la construcción y desarrollo de una sociedad justa”. Esta es la ley que no quieren: “reafirmar la soberanía e identidad nacional”; esta es ley que no quieren; “profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática ...”

“El Estado Provincial no suscribirá tratados de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública”; a esta ley es a la que se oponen porque, naturalmente, aspiran a todo lo contrario: quieren que esta ley no exista porque plantea estas cosas.

No quieren una ley que obligue a la terminalidad educativa del nivel medio, no quieren una ley con salas de 3 y de 4 años; no quieren una ley que diga, expresamente, cuántas aulas y escuelas se van a construir hasta el 2015.

Esta es la ley que en términos generales dicen que no quieren y que hay que postergar. No la quieren aquellos que hasta se dieron el lujo de cerrar salas de 3 y de 4 años, que padecieron en la ciudad de Córdoba una gran confrontación, la famosa “pueblada” en defensa de la educación pública, cuando se llevaban por delante escuelas secundarias para adultos, cuando les tocaban el bolsillo a los docentes. ¡Claro que no quieren esta ley!

Francamente, señor presidente, creo que las apreciaciones de algunos legisladores han sido sumamente interesantes, incluso de algunos que se han opuesto; pero tengo la sensación -sobre todo a fin de año, cuando uno tiene hijos que se llevan materias y nos citan a reuniones en las escuelas- de que no se puede evitar trasladar esta discusión al ámbito de lo doméstico -lo público llevado a lo doméstico-, a una escuela que padece una modernidad líquida -como dice el filósofo Bauman-, a una escuela pensada en una modernidad sólida que atraviesa una modernidad líquida, donde el docente ya no tiene la hegemonía y el poder para “bajar” el conocimiento y transmitirlo, donde las instituciones han sido liquidadas sistemáticamente.

Uno escucha decir que los jóvenes no se interesan por nada, y hablar del rol de la familia, otro concepto “zombi” -según Barman- que hay que liquidar urgente. El sistema educativo está en crisis porque, desde hace mucho tiempo, está en crisis el rol del Estado.

Tenemos la Ley 8113 que, en realidad, responde a un modelo político y económico.

Me dejaron, por casualidad, un libro del señor Tedesco, quien hizo un trabajo sobre la historia de la educación desde 1880 a 1945, es parte de una tesis, y dice -leo rápidamente. Su hipótesis central es sostener que los grupos dirigentes asignaron a la educación una función política y no una función económica, en tanto los cambios económicos ocurridos en este período -con un modelo agroexportador- no implicaron la necesidad de recurrir a la formación local de recursos humanos, la estructura del sistema educativo cambió sólo en aquellos aspectos susceptibles de interesar políticamente y en función de ese mismo interés político en mantener alejada a la enseñanza de las orientaciones productivas”. O sea, la educación cumplía, más que una función económica, una función política de garantizar una dirigencia -a través de las escuelas normales de aquella época- que gobernara la Argentina del progreso, etcétera.

Otro pedagogo, que él mismo cita, se llama Cirigliano y su tesis era: “La clase baja cosecha y faena, la clase media embala, la clase alta dirige la operación de exportar”. Es decir, la estructura educacional del país -según Cirigliano- estaba pensada en función de preparar funcionarios portuarios, señoritos discretamente cultos, literatos espiritualmente alienados, teóricamente preparados para la vida de la gran urbe pero, de hecho, inútiles para salirse de la esfera de lo aprendido y, fundamentalmente, dependientes. Esto que hablaba Jauretche de la colonización pedagógica.

Pensar en una ley de educación en una sociedad en donde poco se cree, donde todo fluye, donde es muy difícil preservar instituciones que garanticen la justicia, algunos conceptos para nuestros hijos que, en definitiva van a vivir, construir y trabajar en este país, supone un proyecto de país. En verdad, esta es la oportunidad para hacerlo; no estábamos en condiciones de discutir esta ley hasta hace algunos años.

Señor presidente, recuerdo cuando usted trajo a Filmus al Hotel de La Cañada -no sé si estaba Grahovac en aquel momento-, todavía no había salido la Ley de Educación Nacional. Él dijo algo que muchas veces repetí acá: la 1420, cuando se pensó y sancionó, era prácticamente imposible de cumplir. Quién iba a pensar que era posible en aquellos años, cuando -como dice Cirigliano- “los pobres faenaban, la burguesía embalaba y los ricos exportaban”, tener educación pública gratuita. Si embargo, el motor de la historia hizo posible que medianamente esta ley, incluso, haya quedado en el pasado. Respondía a un modelo económico, a un proyecto político.

Las escuelas normales, en realidad, eran hijas de una modernidad sólida; luego apareció el peronismo y se pensó en otro proyecto de educación. Algunos me cuestionarán, algunos dirán que soy “faccio”, pero lo cierto es que también obedecía a la inclusión de las mayorías que habían sido excluidas y se siguió con ese mismo concepto, con una educación pública y gratuita; el peronismo padeció incluso enfrentamientos en función de eso.

Con el menemismo nos fragmentamos, naturalmente, también en el sistema educativo. El neoliberalismo, el modelo neoliberal nos modeló a nosotros, modeló una dirigencia radical, peronista -la que quieran-, pero lo hizo de tal manera en que había que tener gerentes para garantizar un Estado inexistente, chico, excluyente y de argentinos sojuzgados, estupidizados, colonizados pedagógicamente. Ese proyecto se cumplió con efectividad, con eficiencia incuestionable, y hoy estamos donde estamos. Creo que aquellos que reconocen las bondades de esa ley parida en aquella década que, pese a todo lo padecido por los

argentinos, pese a lo anestesiados y colonizados que estábamos, no fue mala, como la 8113. Fíjense que por reconocer aquellas bondades debería tenerse la grandeza política e intelectual para aprobar, aunque sea en términos generales, esta ley, justamente porque la misma rescata muchas cosas de la 8113. Parece un contrasentido defender la 8113 diciendo que es la mejor cuando hay cuestiones que no contempla como la obligatoriedad del nivel medio. ¿Me van a decir que no lo quieren? ¿Me van a decir que docentes que han entregado su vida y hoy están sentadas en esta banca se niegan a que esta ley se cumpla efectivamente? Aquellos que decían, cuando tuvieron la posibilidad de gobernar, que un funcionario tenía que ganar lo mismo que una directora municipal, ¿se oponen a que la educación sea obligatoria en el nivel medio?

Por supuesto, señor presidente, hay algunas cuestiones que tiene esta ley en las que me voy a detener -más específicamente en tres puntos- de manera interrogativa, con el ánimo de aportar y que se atienda también, por qué no, al espíritu del legislador.

Respecto al tema de la educación religiosa, francamente dio mucho para hablar, pero no escuché en la oposición que tuvieran la osadía -por lo menos las fuerzas mayoritarias- de decir que quieren una educación laica; no los vi en la pastoral social, en las congregaciones religiosas militando por una educación laica, atea o lo que quieran. Porque la verdad es que en esta modernidad líquida nadie cree en nada, y los sistemas religiosos y filosóficos están prácticamente destruidos.

Es muy difícil creer en esta sociedad; es más fácil no creer -esto les decía a unos jóvenes que fueron a verme y hablábamos de estas cosas. Cuando uno piensa en la Reforma Universitaria, eran brillantes intelectuales de primera línea, es lo que dio la generación del '80 con ese sistema educativo, que hoy puede parecer anacrónico pero parió a intelectuales que transformaron la sociedad. El Mayo Francés ídem.

Entonces, no es que uno se oponga a la movilización, a las tomas, a los centros de estudiantes, a la organización estudiantil; todo lo contrario, creo que es un aliciente, hay un despertar con demandas absolutamente legítimas. Ahora, no pueden ser sometidos a los caprichos de una vanguardia minoritaria que, en realidad, no representa a todos, o que quizá también tenga algunos intereses que no son del todo nobles, (Aplausos), y que, en definitiva, termina con esto de que algunos quisieran "estar peor para estar mejor", como dicen algunos "si estuviéramos en el 2001"; pero si algún día vuelve a pasar lo del 2001 muchos de los que estamos aquí -inclusive los jóvenes que están afuera- vamos a hacer lo imposible para que este país no vuelva a padecer los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001, fecha a la que nos acercamos, lamentablemente. Habrá que hacer lo posible y aceitar todas las organizaciones y todas las instituciones para que eso no exista, justamente porque algunos, desde la vanguardia, pretenden instalar el que "mientras peor, mejor".

Respecto al inciso que se incluye en el artículo 11, adentrándome al aspecto de la educación religiosa, la Constitución nacional, en su artículo 2º, sostiene la libertad de culto y conciencia, y eso se ha visto reforzado, incluso, por el artículo 19, al establecer que la esfera privada del hombre está exenta de la ingerencia estatal.

La Constitución de Córdoba, al igual que muchas otras constituciones provinciales, establece en su artículo 62, como uno de los principios de la política educativa: "Asegurar el carácter gratuito, asistencial y exento de dogmatismos de la educación pública estatal. Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral según sus convicciones". De tal modo, la disposición de la Constitución nacional pareciera entrar en contradicción con este artículo, aunque al mismo tiempo consagra la libertad de culto y de profesión ideológica.

En el proyecto en debate se establece la educación religiosa dentro de un espacio escolar de gestión estatal y, en tal sentido, se supone -lo conversamos con algunos asesores y con otras personas que estuvieron involucradas en la discusión de la ley, además de haber leído las actas respectivas- que la posibilidad de impartir educación religiosa está fuera de la currícula.

Alguien me dijo: "eso vulnera la Ley nacional 23.592 -Penalización de Actos Discriminatorios-, que establece: 'Quien arbitrariamente impida u obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales, reconocidos en la Constitución, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio'". Entonces, la educación religiosa, en el ámbito de los establecimientos escolares de gestión estatal, afectaría el ejercicio de estos derechos y garantías al generar segregación de estudiantes y docentes a partir de la religión que pudieren llegar a profesar.

Creo que habrá que analizar cómo conciliar algunas prácticas comunitarias. Recuerdo que en tiempos de Mestre, a partir de una cooperativa de docentes se creó un colegio primario y secundario, ya que la Parroquia de Villa El Libertador tenía que prestarle las aulas al Estado; sobraba edificio y espacio físico para prestar ese servicio. Entonces, uno advierte el

desarrollo comunitario e institucional que han provocado algunos cultos religiosos –incluso, como ordenadores sociales– en los barrios, producto de la piedad popular propia del pueblo argentino.

En este aspecto, quiero sincerarme –por supuesto, después vendrán las “corridas por izquierda” y las “corridas por derecha”, a lo cual ya estoy acostumbrada– y expresar que esto es parte de la vida de los pueblos y, en particular, del pueblo argentino porque, a decir verdad, desde la colonización hasta la fecha –por lo menos, hasta la Ley 1420 era así– a la educación la recibió de la Iglesia. Por eso debemos comprender, desde el contexto y el pretexto, por qué los sistemas religiosos todavía tienen tanta incidencia en la vida de los pueblos.

En ciertas conversaciones interesantes, que se tejían en torno a cómo garantizar este derecho –vigente en la Constitución provincial, como en tantas otras–, se cuestionaba fundamentalmente un culto y se comentaba que si “van a mandar al cura o a la catequista a que dé Religión los sábados a la tarde en la escuelita dominical”, que “qué va a pasar con aquellos cultos que no dispongan del número suficiente de pastores para enviar a cada una de las escuelas”.

Me interesa tener presente estos aspectos y dejar abierta una pregunta: ¿cómo garantizar este derecho cuando en esta sociedad y en este mundo todo fluye y todos los sistemas que aparecen como dogmáticos se van cayendo? Me gustaría saber quiénes son los que se inscriben.

Cuando me hablan de “discriminación” pienso que en este mismo recinto se sancionó la creación –cuestioné mucho aquel proyecto y no lo acompañé– del Registro de Beneficiarios de Programas Sociales. Entonces, ponían como ejemplo una mamá que se anota en el PAICor, y dice: “mi hijo va al PAICor y en el Carbó, que tenés desde el hijo de un juez pasando por el hijo de un taxista y de una empleada doméstica, algunos se inscriben y otros no”; la verdad es que ahí no sé cómo se iba a aplicar la ley antidiscriminación. Hay tantas situaciones en la vida institucional, no solamente en las educativas, donde se aprovechan porque hay cohesiones que vulneran el principio de la igualdad que, en verdad, da para charlarlo un buen rato.

Finalmente, con respecto a la gestión, otro punto en el que me quiero detener especialmente es el de la gestión cooperativa y gestión social. En realidad, de esto voy a hablar más tarde, porque recordé algo que sí hay que tener presente.

Con la legisladora Chiofalo presentamos un proyecto de ley por el que se crea un Programa Provincial de Prevención y Asistencia a Víctimas de Grupos que usan Técnicas de Manipulación Psicológica, que todavía está para su tratamiento, y justamente fue tema en el programa de ayer de Mirtha Legrand.

El artículo 3º de este proyecto de ley es el único –después de uno de la Provincia de Entre Ríos– que tiene previsto trabajar sobre estos grupos que pululan, por lo menos en la Provincia de Córdoba, usando técnicas de manipulación psicológica. Son todas aquellas organizaciones, asociaciones o movimientos que exhiben una gran devoción o dedicación a una persona, idea o cosa y que emplean en el adoctrinamiento técnicas de persuasión coercitivas que propician la destrucción de la personalidad previa del adepto o la dañan severamente, la destrucción total o severa de los lazos afectivos y de comunicación afectiva del adepto con su entorno social habitual y consigo mismo, y por su dinámica de funcionamiento o llevan a destruir o conculcar derechos jurídicos inalienables en el Estado de Derecho. Por ejemplo, el caso de La Bolsa, donde una asociación de homeópatas entendía que los niños son seres cósmicos y celestes a los que había que cambiarles el nombre, sacarlos de las instituciones escolares y no permitirles comer carne.

Entonces, pregunto: ¿qué hacemos con estos grupos que aparecen como inofensivos y cada día son más en el mundo?, porque frente a la liquidación de los grandes sistemas religiosos aparecen estos grupos que se presentan como inofensivos y nadie cuestiona sus credos. El problema es cuando se vulneran derechos previstos por las convenciones y tratados internacionales, por la Constitución y por la 26.061 que, gloriosamente, está contemplada y citada en alguno de los artículos de este proyecto de ley.

Al momento de tener presente este inciso donde se debe garantizar la profesión de culto dentro de las escuelas de gestión estatal habrá que tener presentes estas cuestiones que no son nada fáciles de advertir y que son un fenómeno muy nuevo, a tal punto que en la Argentina no hay ninguna ley que las controle, solamente hay en Francia y creo que alguna en Alemania.

Vuelvo al tema de la educación en gestión cooperativa y gestión social. La ley nacional, con la que uno naturalmente acuerda en un ciento por ciento, dice en su artículo 14 que el sistema educativo nacional es un conjunto organizado de servicios y acciones educativas reguladas por el Estado que posibilitan el ejercicio del derecho a la educación. Lo integran los servicios educativos de gestión estatal y gestión privada, gestión cooperativa y

gestión social, de todas las jurisdicciones del país -fíjense qué ambicioso- que abarque los niveles, ciclos y modalidades de la educación.

¿Quiénes podrán tener, entonces, escuelas frente a nuevos fenómenos sociales que avanzan, que van apareciendo y que se organizan? –a esto lo decía Silvia-, ¿qué hacer frente a ese fenómeno cuando el Estado tiene que garantizar la educación pero donde van apareciendo organizaciones de tal nivel que hasta piensan en una universidad, en un colegio primario y secundario? No tengo una respuesta para esto, ni de defensa ni de ataque. Abuelas de Plaza de Mayo tiene una universidad. Ahora, si mañana viene un movimiento piquetero y quiere una escuela, ¿tenemos el sistema educativo preparado para hacer frente a este fenómeno absolutamente nuevo que plantea hasta un “parasistema educativo”, un “parasistema de atención a la familia”? ¿Por qué no pensar en Milagro Salas?, el sistema de prevención de la violencia familiar en el norte es prácticamente –en términos de resultados- mucho más eficiente que los que pueden tener las provincias, pero no son el Estado.

Todas estas son cuestiones que vale la pena discutir, no obstante, pensando en algunos planteos que hacían algunas organizaciones de incluir expresamente lo de la gestión cooperativa y la gestión social, tal como lo dice la ley nacional, amerita tener un Estado con un sistema educativo, con un ministerio que antes de dar la discusión debe tener muchas otras cosas resueltas.

Otra cuestión no resuelta es el tema de los liderazgos en cada una de las escuelas que tiene esta Provincia, y lo digo acá porque he tenido la posibilidad de conversarlo con algunos funcionarios. ¿Cuántas veces en una escuela hay directoras que se ahogan en un vaso de agua porque el techo se raja y hay otras que nunca aparecieron por el Ministerio de Infraestructura porque el Estado las termina “anestesiando” con los años y se va perdiendo la voluntad de transformar permanentemente la institución que tienen a cargo? La crisis de liderazgo en el aula y en las instituciones es innegable. En consecuencia, imagínense lo que pudo llegar a ser la toma de un colegio; no fue lo mismo una toma de un colegio con superiores a la altura de las circunstancias, con la cabeza abierta, con formación para entender lo que ocurre, abiertos a la multiplicidad de posibilidades, sin pensar que la profesora de literatura o gimnasia, que viene dos horas al día “gana sólo 500 pesos menos que yo” –lo digo sin conocer la escala salarial-; pero conducir una escuela no puede ser un karma; hoy nadie quiere ser director.

Otra cuestión respecto a los derechos que tienen los alumnos. Yo creo que hay algunas cuestiones que surgieron a partir de la conversación que tuvimos con algunos estudiantes; ensayamos, jugamos un poco con las posibilidades de construir con ellos un proyecto de participación y, de hecho, se incluyeron en el articulado muchos de los planteos de los jóvenes dados en el Consejo Provincial de Políticas Educativas.

Se habla de la participación como si fuera un fenómeno nuevo e innovador; la verdad es que nosotros somos un pueblo acostumbrado a la participación, que produce los cambios y luego vuelve a la actividad cotidiana, porque así es la vida.

Lo mismo ocurre con los sindicatos, que tienen una lucha efectiva, eficiente, que impacta en la realidad, en su propia realidad, pero no con huelgas permanentes de uno o dos años, lo cual no existe sino que es sólo para desgastar y es una trampa.

Solamente se logran transformaciones reales, concretas, estructurales, cuando existe una verdadera organización. Y así como no hay un gremio que pueda no acatar una norma laboral –en el recinto hay muchos abogados que conocen mejor que yo de estas cuestiones-, tampoco los centros de estudiantes pueden desconocer esta ley y muchas otras resoluciones.

Así que habrá que estar a la altura de las circunstancias para promover espacios de discusión, organización y, sobre todo, los adolescentes tener la capacidad intelectual para discutir con el funcionario que se les siente al frente y “no les pinte la cara”. Es todo un desafío.

Creo que esta ley es un gran desafío, es una “ley bisagra”. De aquí en más, hay muchas cosas que ya están, que son de hecho, pero es necesario que estén en una ley, porque hablamos de un derecho, no me gusta la palabra “servicio”, aclaro: prefiero “derecho”.

En función de estas cuestiones es lo que quería expresar; pueden sonar como ideas sueltas pero, en definitiva, cuando uno habla de un proyecto, cuando uno sueña con un proyecto de país, de provincia, cuando a uno le tocó vivir el colegio secundario cuando las fábricas se cerraban y tus viejos quedaban en la calle, es que hoy es posible pensar en una educación media con orientaciones tecnológicas porque hay fábricas abiertas.

Entonces, al ver que a un alumno lo mandan a barrer en vez de trabajar con el torno, habrá que buscar cómo regular y controlar esta situación, y para ello debe haber un Estado fuerte, que hay que fortalecer todos los días. Por eso se pide más organización, por eso el Consejo Provincial de Educación, por eso esta ley.

En cuanto a oponerse o cuestionar el régimen de pasantías, por supuesto que cuando uno va a Tribunales y ve que lo que debería hacer un funcionario que hace 30 años está ocupando un cargo lo está haciendo un pasante que cobra 800 pesos, a uno le da bronca. Y lo mismo pasa en la Universidad Nacional de Córdoba: miren si no hay explotación en el régimen de pasantías de esa Universidad.

¿Saben por qué hoy podemos hablar de esta Ley de Educación? Porque no podía hacerse antes, no podía hacerse con Mestre, salvando las diferencias que uno pueda tener con él y con la Unión Cívica Radical, o con el Frente Cívico, que quiere postergar esta discusión. Hoy se avizora un proyecto de país.

En aquel momento, recuerdo que la entonces Secretaria de Educación estaba de acuerdo con la Ley de Filmus. Sin embargo, no existe más armonía de esta ley con la ley nacional. ¿Por qué prolongar esta situación de anacronía? ¿Por qué hablar de una 8113 como si se tratara de algo que debe estar en un cajón perfectamente guardado, como si fuera una reliquia? No hay "leyes reliquia". Justamente por eso me llama la atención la falta de honestidad intelectual para reconocer las bondades de esta ley que no son más que el reflejo de una ley nacional con sus bemoles, con sus adaptaciones para una provincia que tiene su perfil productivo, económico, cultural.

Hablar de educación en un país en donde el trabajo es el motor que garantiza el ordenamiento familiar, comunitario y del Estado, es una posibilidad histórica a la que no se puede renunciar.

También me animo a decir que esta es una Ley de Educación que se ha parido con no cualquier Ministro de Educación; es una verdad. Es un amigo que estuvo al frente de un sindicato defendiendo el sistema educativo cuando algunos pretendieron desguazarlo, tratando de sostenerlo cuando un país se caía en cientos de pedazos.

Cuando una mira hacia atrás, recuerda algunas conversaciones y encuentros, y la verdad es que produce alegría que esta posibilidad exista y que se haya dado en el contexto en el que se dio, con las tomas de los colegios y la preocupación que eso significó, con los acuerdos firmados y vueltos a hacer.

No puedo negar que representa una gran responsabilidad, pero también satisfacción, estar aprobando esta ley que, incluso, deja abierta la posibilidad a muchos desafíos intelectuales, operativos, etcétera, más que a enfrentamientos. Los enfrentamientos existieron en otros años, en otras épocas y sería bueno recordarlos para que no vuelvan a ocurrir.

Nada más, señor presidente. (Aplausos).

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.

Sr. Ochoa Romero.- Gracias, señor presidente. En general, cuando hago mis alocuciones intento ser breve, pero tal como dijeron legisladores preopinantes, en realidad esto se trata, nada más ni nada menos, que de la Ley de Educación de la Provincia de Córdoba.

No quiero ser desordenado en la exposición, pero fuera del marco normativo de la ley, del articulado, de los capítulos, apartados, etcétera, a los que ya haré referencia, lo que se cuestiona son dos cosas: primero, la participación, y segundo, la oportunidad.

Señor presidente, ¿cómo se puede cuestionar la oportunidad? ¿Quién fija la oportunidad para que se traigan las leyes a este recinto o para dictar una resolución en un Estado democrático como en el que vivimos? Nada más y nada menos que el Poder Ejecutivo provincial –y los que vendrán, sean de otro signo político o no-, que es el que fija las prioridades y necesidades del Estado. ¿O resulta ahora que a las oportunidades las fija la oposición? Podemos no estar de acuerdo y pensar que esta ley merecía otro tratamiento y que debíamos postergar el debate. Señor presidente, he escuchado una serie de cuestionamientos tanto de la oposición como del oficialismo y, la verdad, me he enriquecido.

Hago el mismo razonamiento cuando se menciona la participación y, gracias al grado de participación que tuvo el debate del proyecto de ley, me enriquecí en lo personal. Participaron del Consejo de Políticas Educativas, once Universidades, pero resulta que no ha habido participación. Hubo cinco sindicatos docentes, y dicen que faltó participación. La Legislatura de la Provincia también estuvo representada, pero dicen que no hubo participación. También estuvieron presentes propietarios de colegios privados. Fueron 18 meses de tratamiento del proyecto en el Consejo y dicen que no hubo participación. Se realizaron Audiencias Públicas en las que escuchamos a más de 300 personas, representantes de asociaciones, padres, particulares. ¿Cómo uno no se va a enriquecer con todo esto?

Estamos cuestionando la participación pero, ¿qué podemos cuestionar? Puede ser que para algunos partidos políticos todo esto no haya sido suficiente porque en el marco de la diversidad de opiniones algunos pueden estar de acuerdo y otros no, pero ello no quiere decir que no haya habido participación.

¿Qué sentido positivo le podemos dar a esta ley que está cuestionada por oportunidad y por falta de participación? Señor presidente, me he salido del formato que tenía en mente porque realmente me sorprende. Reitero: una cosa es que no haya habido participación de ningún tipo y otra es que yo piense que le faltó participación y que ustedes estén de acuerdo o no. Son dos cosas totalmente distintas.

En cuanto a la oportunidad, la fija el Poder Ejecutivo provincial, quien ha considerado conveniente que se trate en el día de la fecha. ¿Qué cuestionamiento podemos hacer a eso?, que podría haber sido postergada pero no lo fue por una política de Estado provincial, que es el que fija las políticas de su Gobierno. Se puede equivocar o no, ya lo veremos. El hecho es que las fijó y, si se equivocó, pagará por ello. Por el contrario, si no se equivocó, habrá fijado la política de su Gobierno en su debida oportunidad.

Señor presidente: no quiero extenderme en el articulado, por lo que brevemente voy a hacer referencia a la estructura de la ley. Primero, tenemos un área temática que se refiere a los principios; luego, un área temática que se refiere a los fines; una tercera parte, muy importante, donde se detallan los derechos y obligaciones de los padres, derechos y obligaciones de esta relación jurídica que se instala entre el Estado, los docentes, los alumnos y los padres como terceros interesados. Luego, una cuarta parte que habla de los niveles de educación. El artículo 49 habla de la educación de las personas con capacidades diferentes.

Pero la estructura de esta ley tiene una característica saliente: propicia 14 años de educación obligatoria; significa que la fuente, la base de la cultura de nuestra sociedad empieza a estar asegurada. Tener 14 años de educación para nuestros hijos significa tener una base sólida. Equívocamente esta situación no fue plasmada con anterioridad.

¿Dónde queremos que estén nuestros chicos sino formándose de acuerdo con sus libres creencias? ¿A dónde queremos que estén los chicos sino aprendiendo con sus maestras y padres?

Les voy a contar una infidencia: cuando me recibí hace muchos años –porque soy más viejo de lo que muchos creen-, en 1968, obtuve el título de Perito Mercantil, Bachiller y Tenedor de Libros. Recuerdo –como si fuera hoy- que en el acto de final de año –en diciembre- me dijeron que a partir de enero tenía trabajo. Habían ido de una empresa a averiguar, no quiénes eran los brillantes sino los que habían pasado razonablemente, y nos buscaron a cuatro o cinco. En febrero del año siguiente ya tenía trabajo, con el título de Perito Mercantil, el cual hoy ya no existe. Actualmente, si un joven no tiene un título terciario, no puede empezar a hablar; si no, pregúntenles a todas las personas de 40 años que pierden su trabajo a dónde van a trabajar.

Como la sociedad muta y cambian las costumbres, es necesario aggiornarse a las situaciones contemporáneas. Quizás, antes sobraba con ser Bachiller y Perito Mercantil; hoy estamos festejando 14 años de educación obligatoria. ¿Y todo lo que les falta a nuestros hijos después de esos 14 años? Hay que pelear para que sigan estudiando a nivel terciario y que se reciban para que tengan futuro. Si no son los padres los que les dan una mano ¿a dónde van con esta carencia de opciones laborales? Por suerte, las mismas están gradualmente siendo paliadas por este Gobierno.

El apartado 4º) se refiere a la Educación Rural, y entiendo que se incluyó a las escuelas albergue; en el apartado 6º) se refiere a la Educación Artística. En la Sección Segunda, se crea el Consejo Provincial de Políticas Educativas; en la Sección Tercera, se crea el Consejo General de Educación Técnica y Trabajo; entiendo que será ampliada la participación de los representantes. En el artículo 108 se refiere a la competencia con municipios, y después habla del financiamiento de la Educación y la fuente de financiamiento.

Señor presidente: debo admitir que el Gobierno provincial ha hecho un gran esfuerzo; hay que tener los números bien afilados para fijar un 35 por ciento de su Presupuesto de base, porque está en la ley; y lo mismo debe ocurrir para anunciar que se va a pasar a más de 41. Estas son apuestas al futuro de la Educación de Córdoba, de nuestros hijos y de los que vendrán.

Seguramente esta ley es perfectible, se plantean las metas a mediano y largo plazo para la educación inicial, primaria y secundaria, en cuanto a las necesidades educativas tanto humanas como edilicias a las cuales no voy a hacer referencia porque nos llevaría mucho tiempo.

Finalmente, en el artículo 114 habla de la afectación presupuestaria hasta tanto se sancione la ley prevista en el artículo 109.

Quiero hacer expresa mención de que el presente proyecto ha tenido Audiencias Públicas, tanto en el ámbito del Capital, en este edificio y también en el interior, en cabeceras departamentales: San Francisco, Cruz del Eje y Río Cuarto. Esta Legislatura abrió las puertas para que diferentes instituciones y personas individuales puedan exponer sus pareceres ante el proyecto que devino del Ministerio de Educación y, por ende, del Poder Ejecutivo.

Deseo aclarar a los cordobeses que no los hemos escuchado en vano; realmente se han hecho aportes, fueron minuciosamente tratados y tomados en el marco del trabajo de las Comisiones de Educación, de Economía y de Legislación General. Acá también quiero hacer un paréntesis porque realmente las Comisiones de Educación, de Economía y de Legislación han sido amplias y plurales; han receptado todas y cada una de las inquietudes.

Recuerdo cuando en las primeras reuniones, jóvenes estudiantes plantearon algunos aspectos relacionados con la ley. La legisladora Feraudo, con su calidez habitual, les decía “discúlpeme porque los hice esperar” a los jóvenes que no querían saber nada con la ley. El legislador Ruiz, a mi izquierda, si no me deja mentir, les planteaba cómo era el procedimiento legislativo para que se apruebe la ley. No obstante ello, los chicos decían “¡ah no!, si este es el procedimiento legislativo, no quiero saber nada”. Esa fue la calidez que se practicó cuando los chicos vinieron a exponer sus diferencias. Entonces, ¿no ha habido participación, señor presidente?

Un recorrido por los antecedentes normativos que llevaron a la confección de esta ley: se partió de la Ley vigente de Educación 8113, que este legislador no cuestionó nunca como tampoco su legitimidad. La Ley 8113 nos ha regido diecinueve años, señor presidente; fíjense si sirvió o no sirvió.

En virtud de esa antigüedad, merecía un exhaustivo análisis y posterior reforma porque algunas cuestiones lucen en esta época desactualizadas. La reforma devenía necesaria, no sólo por el tiempo transcurrido sino por el dictado de la Ley de Educación nacional 26.206, vigente desde el 2006, y la Ley de Educación Técnica Profesional de la Nación, que data del año 2005. En definitiva, esta ley provincial merecía una adecuación que se hacía imperiosa.

Tratando los principios jurídicos generales de esta ley, su artículo 3º establece: “El Estado, por cierto, asume la educación como su responsabilidad exclusiva, reconociendo a la familia como agente natural del proceso educativo de los menores y de la sociedad responsable de respeto a las peculiaridades culturales; pero, por sobre todas las cosas, el eje central son las personas que se integran al sistema en un marco de libertad y convivencia democrática, sin ser discriminadas, y en igualdad de oportunidades. En este marco, el Estado no sólo garantiza la educación sino que además asegura los recursos necesarios y suficientes para financiarla.

En cuanto a los fines, sólo voy a mencionar que fueron adecuados a las peticiones esgrimidas en las Audiencias Públicas. En el campo del conocimiento se incorpora como necesario el arte como parte del proceso cognitivo de la educación integral. Y no es cierto que no estaba incorporado el arte; estaba, pero no como ahora. Eso fue el fruto de haber escuchado las voces que hoy cuestionan que no se les dio tratamiento a ciertos aspectos. No solamente los escuchamos, sino aprendimos de ellos y los incluimos en el proyecto.

El arte como parte –decía– del proceso cognitivo de la educación integral, es comparable tan sólo con lo tecnológico y lo científico como única área de conocimiento; el arte es también un modo de conocer. La educación artística formaba parte de la currícula en todos los niveles escolares.

También, la formación sexual mereció sus adecuaciones a la Ley nacional de Educación 26.206, garantizando la educación sexual en todos los niveles, en concordancia con la Ley de Educación Sexual 26.150, que establece de modo amplio el amparo de la salud sexual y reproductiva.

En cuanto al aspecto religioso –que se ha debatido extensamente–, ameritó cambios en esta comisión. Se lo define como el derecho de los padres; ése es el enfoque que le da la ley. Creo que la ley trata el aspecto religioso visto desde el derecho de los padres a que sus hijos puedan recibir educación religiosa en la escuela pública, pero con la salvedad de que su dictado se encuentra a cargo de los ministros de cultos autorizados, y que sea sólo opcional, extracurricular en su contenido, fuera de los horarios de clase y sin financiamiento del Estado. ¿Qué otra garantía podemos expresar en la ley?

Las modificaciones exclusivas hechas por la Comisión de Educación se amparan en la tolerancia de credos y pone en manos de los cultos las responsabilidades en la formación y sustento económico.

La modificación que formuláramos encaja adecuadamente tanto en los principios de nuestra Constitución nacional como en los de la Provincia de Córdoba; si bien es cierto que los medios y algunos grupos insisten en este punto, no es menos cierto que nuestro proyecto toma la teoría de las obligaciones concurrentes entre el Estado y quienes se encuentren ejerciendo la patria potestad de los menores –generalmente los padres– a quienes se les otorga este derecho.

Otro tópico que debe ser destacado es el regreso a la escuela técnica, que favorece a todos los cordobeses y, de mayor manera, a los sectores más necesitados de una salida

laboral inmediata, integrando positivamente este sector social que la Ley 8103 había desvinculado.

Destaco además, señor presidente, la formación corporal, motriz y deportiva, y la adquisición de hábitos de vida saludable. De más está decir que nuestros niños y jóvenes deben conocer una vida sana que contribuya a su desarrollo psicofísico, echando por tierra los hábitos de vida adictivos que tanto daño les ocasionan.

La Ley de Educación, en su Capítulo II, Título I, estipula la responsabilidad del Estado Provincial en materia educativa, comprometiéndose a generar las vías de acción necesarias para el real ejercicio de la educación en los sectores tanto rurales como urbanos, asimismo -y con mayor ahínco-, en los sectores más desfavorecidos, estableciendo acciones en los campos de la alfabetización, formación científica, tecnológica, humanística y artística, pero también asume el compromiso de la capacitación profesional, de acuerdo con las necesidades y las áreas regionales de la Provincia. En este mismo capítulo, atribuye los derechos y deberes de los padres en materia educativa.

No olvidemos que la educación es concurrente del seno familiar y de los establecimientos educativos. No podríamos formar hombres y mujeres capaces si la familia no se compromete en forma conjunta con el Estado. No sólo trata de estos dos sujetos responsables sino que, además, en el mismo capítulo se otorgan derechos y deberes a los alumnos dentro del esquema enseñanza-aprendizaje.

Entre los derechos de los alumnos, cabe destacar el ejercicio del derecho a asociación que esta ley les otorga, para el integral desarrollo dentro de la vida institucional; podrán crear centros, asociaciones y clubes de estudiantes, atendiendo a la edad de desarrollo de los niños y jóvenes. Estos serán pautados y regulados por vía reglamentaria. No me cabe duda, señor presidente, de que serán modelos de comportamiento que tengan por fin que todos puedan participar de la democratización de los grupos que se formen, en libertad e igualdad.

Los sujetos intervinientes en la enseñanza-aprendizaje -para pasar a lineamientos generales de políticas educativas- otorgan los principios básicos de organización del sistema educativo, proyectando el futuro a largo plazo, sin mezquindades de políticas de turno. La idea es formar y contener a estos niños que están en proceso de crecimiento. En su artículo 26, en un esquema superador del sistema jurídico, se instituye la obligatoriedad de la educación desde los 4 años y hasta la finalización de la educación secundaria -como dije. Con denodado esfuerzo y compromiso se pudo legislar acerca de tan importante responsabilidad que hoy asume el Estado, ampliando la obligatoriedad de los ciclos educativos, aspirando a cordobeses más y mejor formados.

También se amplió el espectro institucional educativo toda vez que, con carácter optativo, comenzarán a funcionar las salas para niños de 3 años. Digo que comenzarán porque de inmediato se instalarán en las zonas más vulnerables de la población, tal como queda expresado en el artículo 27.

Si hacemos historia, de igual manera, optativas, comenzaron hace algunos años las salas de 4 años, y hoy se encuentran legitimadas en todas las escuelas. Seguramente, estas salas para niños de 3 años correrán igual suerte.

Con respecto a la educación del ciclo primario, nos encontramos con las jornadas extendidas para el cumplimiento de los objetivos de ley fijados.

En cuanto al ciclo secundario, será de 6 años, pero se extenderá un año más en las modalidades técnicas y artísticas en el marco de su regulación específica.

Asimismo, en cuanto a las prácticas educativas, el artículo 40, con sus modificaciones, desarticula las voces acerca del mercantilismo educativo. Las prácticas son complementarias de la educación, pero en ningún caso serán consideradas "trabajo" en los términos de la Ley 20.744, o "pasantías" en los términos de la Ley 26.247. Acá me voy a detener dos minutos, señor presidente.

Tanto se ha cuestionado a las pasantías -no sé si el nombre es pasantías, prácticas educativas me parece más correcto- que quiero preguntar algo: ¿cuántos niños se han enriquecido con estas pasantías o prácticas educativas? Mi hija, que está atrás mío, hizo una pasantía en Mc Donalds, porque fue a un colegio público -perdoname por decirlo, Jimena-, y ella me dijo: "es mucho lo que aprendí acá; dado el respeto que me hacían tener por los demás y el respeto que tuvieron para conmigo". ¿Por qué son tan malas esas prácticas educativas o pasantías? Inventan "mercantilismo", señor presidente; nadie es perfecto y seguramente debe haber otros casos, pero me parece que no es inadecuado tener la posibilidad de realizar prácticas educativas.

He realizado un breve racconto sobre los tópicos que fueron cuestionados por nuestra sociedad y subsanados, en mi modesto concepto, por el despacho conjunto de las Comisiones de Educación, de Economía y de Legislación General.

Para terminar, creo que esta ley propone un avance cualitativo en materia educativa, y su reglamentación, seguramente, acentuará el tópico que se expresa de modo general. Una

visión positiva de la misma nos acercará a la excelencia normativa en materia educacional que, a todas luces, es el objetivo final que persigue y merece la sociedad toda.

Con estos breves conceptos, el bloque Frente para la Victoria va a apoyar el presente proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.

Sra. Coria.- Gracias, señor presidente.

Por suerte, estoy en el recinto.

Saludo, en primer lugar, la presencia del señor Ministro y su equipo, y de los miembros del Consejo de Políticas Educativas; registro y lamento la ausencia de estudiantes y padres que solicitaron ingresar al debate; informo, como me informan, que afuera hay disturbios en un enfrentamiento entre policías y estudiantes.

Voy a hablar desde la modernidad sólida que se ha visto un poco vulnerada en este recinto como lo ha sido el pensador neomarxista Bauman. Voy a centrarme en aspectos que creo sustantivos en el debate y en el proceso de discusión de la Ley de Educación provincial, proceso que, a mi entender, debería haberse prolongado volviendo, tras las Audiencias, a las escuelas para que docentes, estudiantes y padres pudieran hacer oír su voz, con el tiempo y la profundización que tan compleja e imprescindible ley amerita.

Para iniciar, no puedo dejar de hacer mención al proceso de elaboración y discusión del proyecto de ley. Desde la oposición reclamé desde el primer día de gestión de este Gobierno que debía hacerse una profunda revisión de la Ley de Educación vigente en la Provincia, en un año no contaminado por cuestiones electorales, e instituí a la Legislatura provincial como ámbito privilegiado para ello, como consta en esta Legislatura y en el Ministerio provincial en los proyectos por mí presentados a inicios de 2008, cuestión que el Gobierno incorporó a su agenda un año después con la creación por decreto del Consejo Provincial de Políticas Educativas donde, incluso, pedimos incluir la presencia no aleatoria de este Poder Legislativo.

A partir de la propuesta de la presidenta de la Comisión de Educación, Evelina Feraudo, he participado durante más de un año y medio en ese Consejo en carácter de miembro titular de esa comisión, habiendo solicitado y obtenido el acuerdo de la misma. No fue menor ni la constitución ni la labor de este órgano, lo que no quiere decir que no haya sido insuficiente; con esto estoy diciendo que no estuvieron actores fundamentales como los estudiantes.

Tengo la absoluta tranquilidad de haber aportado lo mejor que tenía para dar pensando en la educación pública como política de largo aliento y de Estado, y la certeza de haber advertido desde el inicio, como consta en diversas actas, los problemas sustantivos que, posteriormente, ha suscitado el anteproyecto, que pudieron haberse resuelto con voluntad política anticipada.

En el Consejo se expresaron importantes diferencias en temas cruciales en discusión: educación religiosa en escuelas estatales, el derecho a la vida como un valor jerarquizado y, en ese marco, la formación de una sexualidad responsable en lugar de la formación en el conjunto de derechos humanos y la educación sexual como contenido obligatorio por ley nacional.

Hubo profundas diferencias en el Consejo respecto de la mercantilización de la educación y el financiamiento educativo; en artículos fundamentalmente vinculados con la educación técnica; y profundas diferencias respecto de los derechos docentes, que he defendido con uñas y dientes acompañando a los gremios.

También hubo profundas diferencias sobre los derechos de la familia sostenidos por el Consejo de Educación Católica que se oponían a la obligatoriedad de las salas de 4 años y a la jornada extendida.

Sin palabras me deja la más absoluta desjerarquización de la educación artística respecto de otras modalidades educativas que advertí varias veces, como también consta en actas.

Frente a temas tan controversiales se configuraron en el Consejo diversas articulaciones entre los actores representados en función, claramente, de intereses específicos en juego.

Difícil es subsumir en un solo antagonismo la disputa por el sentido de la educación que y ahí se jugaban, como sería el caso de simplificar las cosas en la polaridad, actores del sector público versus actores del sector privado. Pues también se expresaron en la escena del debate radicales diferencias ideológicas resueltas por votación, lo que pasó a denominarse consenso.

Una cuestión crucial en la que también hubo diferencias internas en el Consejo de Políticas Educativas fue el modo de pensar la participación de los colectivos institucionales - docentes, alumnos y padres- en el debate del anteproyecto de ley, el tiempo y la metodología para ello. Pese a las advertencias que formulé junto a la Universidad Nacional de Córdoba sobre la necesidad de garantizar profundidad y cuidado de la estrategia que este debate

reclamaba, en honor a la memoria pedagógica sobre los procesos de reforma educativa en la Provincia en los años '90 y el derecho que les cabía a todos y todas, el Gobierno provincial optó por el camino que creo, en parte, condujo a la actual falta de legitimidad social del proyecto, aunque se exprese lo contrario.

“Una discusión de 4 horas en las escuelas de una ley que tiene más de 100 artículos, es decir 7 minutos por artículo”, o –como lo dice la propia síntesis elevada por el Ministerio de Educación acontecida en aquel día pos vacacional–, “donde los docentes señalan que allí se releva como un tema recurrente que el análisis de un anteproyecto de ley y su importancia se hizo en un escaso tiempo limitado a una sola jornada”. Dos formas de decir, la estudiantil y la docente, que aluden a lo mismo respecto a la estrategia adoptada para debate.

Los excluidos –porque así se sienten y porque así lo sugirió un supervisor cuando preguntó “por qué no estuvimos como supervisores”– quizás por falta de conocimiento público o por no haber sido suficientemente sensibilizados sobre lo que se estaba jugando, o también excluidos por descreimiento o por cierta forma de burocratización de la consulta, incluso autoexcluidos por desidia, padres y alumnos, inevitablemente pusieron bajo sospecha el procedimiento adoptado.

Por la propia movilización de múltiples actores sociales se abrieron las instancias de las Audiencias Públicas, estrategia de legitimación a la que –como es conocido– me opuse porque todo tenía un cronograma de hierro con la espada de la sanción ya anunciada para el día de la fecha, que no daban garantía para que todos se pronunciaran, y no se resolvía a través de ellas la deuda que lucía, realmente, como fractura expuesta.

Acompañé esas Audiencias con compromiso y debida responsabilidad, al igual que lo hice, durante estos casi dos años, en el Consejo. Se aportaron allí infinitos detalles –no sólo recurrencias sobre cuatro o cinco puntos– que podrían haber enriquecido el texto legal; se señalaron falencias, vacíos normativos, contradicciones con la legislación nacional; además, se aportaron ideas y propuestas sobre aspectos que efectivamente el texto de la Ley 8113 no había considerado, como tampoco –y lo asumo como responsabilidad propia– el anteproyecto que surgiera del Consejo de Políticas Educativas.

Señor presidente, contamos con una ley nacional marco, que goza de legitimidad jurídica y que, aun con los problemas que tiene, hoy es reconocida por la mayoría de los actores educacionales como un avance respecto de la legislación de la década pasada. Por tal motivo, creo que debiera haberse ampliado la discusión, profundizado la imaginación y agudizado el sentido de oportunidad histórica.

Las tomas de escuelas por parte de los estudiantes secundarios se iniciaron a raíz de gravísimos problemas de infraestructura, y esa deficiencia en la materialidad –que da cuenta de una deuda histórica del Estado provincial en lo que hace a la calidad educativa– pronto asumió un sentido simbólico que se sintetiza en la consigna que fue articulando las sucesivas marchas, diálogos y negociaciones que el Gobierno sostuvo con el sector estudiantil, que armó carpas frente a la Legislatura, realizó intervenciones artísticas urbanas, y hoy realiza huelgas de hambre. La consigna fue y es la defensa de la educación pública de calidad, laica, gratuita y obligatoria, y recién escuchaba que sólo hacían referencia a estos dos últimos aspectos.

En contraposición a la caracterización de “anacrónica” que esta consigna ha merecido por parte de las autoridades educativas, quiero aportar elementos a esta discusión para ayudar a comprender la vigencia de esa consigna, para lo que haré breves referencias históricas en materia educativa nacional y provincial, referenciando debates respecto del sentido de la educación pública –que se requieren para el presente y el futuro del sistema educativo provincial–, y haré algunas reflexiones sobre la politización de los jóvenes, que podríamos denominar como “la revuelta de la palabra”.

Voy a hablar sobre Córdoba, como brillantemente lo ha sostenido, allá por los años '60, José María Aricó, del grupo “Pasado y Presente”: Se ha movido históricamente, “entre la tradición y la modernidad”, Córdoba de las Campanas, también revulsiva y contestataria; se ha movido entre el conservadurismo ostensible que ha articulado poderes que han pretendido hacer invisible su poder, sin lograrlo; por caso, los grupos concentrados de la economía y la propia Iglesia, se han encontrado frente al sentido pugnado por la contestación y la revuelta, por las luchas populares, de los que son claros exponentes la Reforma Universitaria y el Cordobazo, el mismo que por estos días ha sido indebidamente lastimado al borrar el nombre de Agustín Tosco.

Otro signo distintivo de nuestra Provincia ha sido y sigue siendo la pugna por constituirse en “isla virtual” en el contexto nacional. Ojalá tuviera tiempo y contara con la disposición de los demás para exponer aquí todo lo que escuché en las Audiencias, pero decidí optar por la agudeza de los escritos de Juan Pablo Abratte, colega historiador de la educación de la Universidad Nacional de Córdoba: “La Ley General de Educación de la Provincia de Córdoba 8113 –señala–, fue sancionada en el año 1991 bajo el Gobierno de

Angeloz y modificada por Ley 8525 en 1995 bajo el mandato de Ramón Bautista Mestre, y fue en esta última que asistimos a una situación de verdadera devastación del sistema educativo provincial con el cierre de las salas de cuatro años y la eliminación de la educación técnica, entre otras, en un todo de acuerdo a los desideratum del menemismo”.

Dice Abratte acerca de la 8113: “Algunos de los principales elementos que configuraron el escenario de su debate y sanción pueden sintetizarse en los siguientes puntos: la Ley de Educación derogó la legislación educativa provincial, en particular, la Ley de Educación 1426 de 1896, norma por la que se regulaba la educación primaria de la Provincia tomando como modelo la Ley de Educación 1420, sancionada en 1884, que instauró la tradición sarmientina de educación laica, pero incluyendo a diferencia de ella la educación religiosa dentro del mínimum de instrucción garantizado por el Estado en la escuela pública”.

Esta ley que había regido ininterrumpidamente la educación primaria de la Provincia se enmarcaba en una disputa histórica entre los sectores laicistas y el integrismo católico que había encontrado en Córdoba un espacio fértil para su desarrollo, en tanto se había generado en la Provincia una contraofensiva frente al laicismo triunfante a nivel nacional a fines del siglo XIX.

La Ley 8113 se inscribió en una propuesta de reforma educativa desplegada en los albores de la democratización por sectores del radicalismo que recuperaron elementos de una tradición reformista provincial. Más allá, en algunos casos, del carácter retórico de esa inscripción política pedagógica, la norma incorporó algunos elementos innovadores que la reforma venía desarrollando desde 1984: impulsó la educación de adultos, la educación rural, la democratización del gobierno de la educación, la ampliación de la obligatoriedad del nivel inicial a partir de los cinco años y del nivel medio hasta su ciclo básico.

La sanción de esta norma no puede interpretarse profundamente sino en el marco de las disputas entre Córdoba y la Nación por la transferencia de las escuelas de nivel medio y superior a las jurisdicciones y por las tensiones entre el Gobierno provincial y el nacional.

La reforma constitucional del '87 se sancionó en el marco de un equilibrio político entre sectores que defendían el laicismo y la principalidad del Estado en materia educativa y otros sectores cercanos a posiciones de defensa de un rol subsidiario y de inclusión de la enseñanza religiosa en la escuela pública. Esta disputa se jugó al momento de la sanción de la 8113, los sectores que pugnaban por la subsidiariedad del Estado y la inclusión de la enseñanza religiosa en la escuela pública en nombre de la Constitución provincial no fueron sino el peronismo, la Democracia Cristiana y la Unión de Centro Democrático, según consta en los Diarios de Sesiones de las entonces Cámaras de Diputados y de Senadores de esta Legislatura provincial.

Lamentablemente, lejos estaba en el neoliberalismo -de ayer- como lo está el conservadurismo -del presente- aquel signo lúcido de liberalismo político -para otros política reactiva- que tuvo el General Juan Domingo Perón en 1954, con la supresión de la enseñanza religiosa en las escuelas estatales, quitándole a la Iglesia Católica su conquista más valiosa obtenida en 1943, contradictoria revolución, simultáneamente antioligárquica y clerical.

A esta medida siguieron otras, como la de equiparar los derechos de los hijos considerados ilegítimos con los que se consideraban legítimos; la instauración del divorcio vincular; el dictado de la Ley de Profilaxis con la reapertura de los prostíbulos; la eliminación de la exenciones de impuestos a las instituciones religiosas y la separación de la Iglesia del Estado nacional, medida que, a pesar de ser aprobada en Diputados y Senadores, no pudo efectivizarse por el antipopular y entreguista golpe de Estado de setiembre del '55.

Una de las paradojas del presente es que varios de estos derechos están siendo reivindicados por la misma Ley de Educación Nacional, sancionada en el año 2006, que sostiene -aunque no se pronuncie- la neutralidad del Estado en materia religiosa, y a la que se supone este proyecto de ley viene a ajustarse.

También derechos legitimados por otras leyes fundamentales y recientes, como la Ley de Matrimonio Igualitario, que responde a históricas demandas por la ampliación de derechos de importantes sectores discriminados de la sociedad, aunque con la obstinada objeción de la jerarquía eclesiástica, no así de los creyentes.

Es preciso advertir que lo dicho reviste un aspecto sustantivo de la que interpreto como una matriz de poder operante en la elaboración del proyecto de ley pronto a sancionarse que, por supuesto, es negada en nombre de las mayorías.

Hay dimensiones del proyecto en discusión que recuperan aspectos estructurales, de gran importancia, de la Ley de Educación Nacional: plantear la educación como un derecho; la inclusión y la justicia social; la garantía de los derechos docentes; la ampliación de la obligatoriedad de la educación, avanzando hacia los 4 años, a diferencia de la Nación; la ampliación de las modalidades educativas; la jornada extendida y, por efecto de lucha incluye en el artículo 4º, el inciso j) con la alusión directa a la Ley Nacional de Educación Sexual, y desde el inciso l) al x) se ampliaron fines y objetivos de la educación.

Muchos de estos aspectos ya venían implementándose por decreto -política específica del Gobierno Provincial- o también por la existencia de una ley provincial como fue la Ley de Adhesión de la Provincia a la Ley de Educación Técnica.

Sin embargo, el proyecto en tratamiento, a pesar de los cambios que hemos podido alcanzar y también conquistar -lamento y sufro al decirlo- no innova en algunos de los principios, fundamentos y apartados que hacen al vínculo con el mercado, que estaban en la Ley 8113 y que deberíamos haber modificado.

El proyecto en tratamiento sigue sosteniendo el derecho de los padres a que sus hijos reciban educación religiosa en las escuelas del Estado, con todos los agregados por los que hemos tenido que disputar para que quedara alguna garantía clara de la significación de este inciso. Hasta último minuto no se sabía si era con o sin financiamiento estatal, era lo mínimo. Pero lamentablemente, no se zanjó el problema; lo planteé en el Consejo de entrada: no había que incluir ese inciso. Efectivamente, hay voces que jurídicamente lo han justificado.

Mi biblioteca jurídica es el abogado constitucionalista de la Universidad de Córdoba, que se expresó en la Audiencia Pública, doctor Horacio Etchichury, no el doctor Gentile ni el doctor García Elorrio.

Dice el doctor Etchichury: "Nuestro país no tiene religión oficial, sólo provee sostén financiero a un culto en particular -artículo 2º. En cambio, Argentina protege la libertad de culto -artículos 14 y 20- y preserva a la esfera privada como una zona libre de la injerencia estatal -artículo 19. El artículo 13, inciso 3), del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consagra dos derechos de los padres y tutores. El primero es el de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que cubran los requisitos académicos. El segundo derecho es el de hacer que sus hijos o pupilos reciban educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Ninguno de los dos derechos obliga, en ningún caso, a brindar educación religiosa o moral dentro de la enseñanza pública estatal, entendida como el proceso oficial de transmisión y elaboración de conocimientos.

La Constitución cordobesa otorgó al Estado provincial la atribución de introducir la enseñanza religiosa en el ámbito de la escuela estatal. Esto implica una indebida restricción a la libertad religiosa y libertad de conciencia, ya que pone al Estado en la tarea de promover creencias frente a las que debe guardar una respetuosa neutralidad. De lo contrario, la promesa de libertad de culto se vería vaciada de efecto por permitir una injerencia estatal en un área confiada a la privacidad de las personas.

Aunque haya sido consagrado bajo la forma de un derecho de los padres, eso no puede reconocerse frente a la libertad de culto y de conciencia, consagrada sin restricciones en la Constitución nacional, que tiene jerarquía superior.

Los derechos no enumerados del artículo 33 de la Constitución nacional no pueden definirse como un recorte a los otros derechos consagrados expresamente. Por lo tanto, el artículo 62, inciso 5), de la Constitución de Córdoba, en el tramo que permite al Estado intervenir en la formación religiosa, resulta inconstitucional por contradecir la ley suprema federal."

Concluye Etchichury: "Corresponde eliminar del anteproyecto las referencias incluidas en los artículos 11 y 35 sin que sea necesario para ello una reforma constitucional provincial".

Respecto al artículo 35, por suerte se ha resuelto.

En la propuesta que formulé debidamente a la presidenta de la comisión, Evelina Feraudo -mandando copia al señor Ministro- planteé que las escuelas de gestión privada también debían estar exentas de dogmatismos de cualquier signo para la enseñanza de los contenidos obligatorios y comunes. Efectivamente, eso no ha sido atendido, y no es un capricho personal; tiene que ver con que nosotros financiamos la educación privada y permitimos que para la enseñanza de los contenidos obligatorios y comunes se pueda habilitar también la formación dogmática. Para la enseñanza de los contenidos obligatorios y comunes en escuelas privadas o estatales, la educación debe ser antidogmática.

El proyecto conserva inmutable el derecho a la vida y a su preservación, en nombre de la Constitución de la Provincia, pretendiendo hacer creer que ese enunciado -tan caro para quienes se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo- remite al flagelo de la muerte por accidentes viales. En realidad, en lugar de poner eso, propuse -como debió hacerse, y fue planteado por la agrupación HIJOS en la Audiencia Pública- que la ley debía incluir con claridad parte del artículo 92 de la Ley de Educación nacional, y como contenido obligatorio, la formación en la memoria colectiva de los crímenes de lesa humanidad acaecidos en nuestra provincia y el país en la última dictadura militar. Es lamentable que se deje el "derecho a la vida" -déjenlo, si quieren- sin incluir la cuestión planteada por HIJOS. ¿O acaso esa agrupación no es representativa? ¿Por qué no se los escuchó en las Audiencias?

Señor presidente, el proyecto presenta lo que al principio anuncié como resquicio pero que ahora me tiento a denunciarlo como un verdadero "colador", porque se sigue

habilitando la lógica del mercado en el campo educativo, cuando se niegan a modificar todos los artículos que era preciso cambiar –lo digo producto de lo expresado en las Audiencias-; se conserva, por ejemplo, la idea de servicios públicos, uno de los errores de la ley nacional.

Ese señor llamado Tudesco (así se lo ha nombrado aquí) conservó la idea de servicios públicos”, y en el proyecto que tratamos en lugar de dejarlo al principio se puso en el tercer artículo. Yo propuse el cambio de lugar, pero también propuse enunciar como lo dice la ley nacional: “establecimientos educativos” o “instituciones educativas”.

Tampoco se ha escuchado y fue dicho en las Audiencias –y está expresado en la página 38 del informe que el Ministerio eleva a propuesta de los docentes- que no se incluyen garantías de que los fondos que se autoricen –además de los provenientes del Presupuesto- no se apliquen a gastos corrientes. Se precisa de esta garantía para que el Estado se haga cargo de lo que debe hacer. Tampoco debía implicar ningún tipo de contraprestación, lo que debía agregarse en el inciso j) del artículo 3º.

El artículo 107 establece como fin de las cooperadoras escolares: movilizar, captar y administrar medios y recursos. En ese punto hice entrega de una redacción en la que cambiaba la función de la cooperadora escolar, lo que también fue planteado en la Audiencia Pública.

El artículo 64 ha quedado redactado tal como fue enviado por el Ejecutivo. Invito a que se lea el acta respectiva; ya había sido un logro en el Consejo de Políticas Educativas para que quedara como está, es decir, que las escuelas debían ser autorizadas para el manejo autónomo del producido. Se había planteado que las escuelas podían informar al Estado provincial sobre el manejo autónomo y autárquico del producido. Fue un logro que quedara como está, pero debió haberse excluido porque, la verdad –y lo propuse en el Consejo- es que había que poder imaginar, en todo caso, un fondo redistributivo que lograra zanjear las tremendas brechas que existen entre las escuelas agrotécnicas y técnicas del Norte y del Sur provincial.

Revisando la página del Ministerio advertí que FIAT había donado ropa para estudiantes de las escuelas técnicas. Quisiera que FIAT done ropa no sólo para las escuelas del sur, de Río Cuarto, sino que también lo haga para las de Tulumba o Ischilín.

El proyecto en tratamiento presenta la novedad –respecto del proyecto elevado por el Consejo- de que el piso del Presupuesto será del 35 por ciento; no voy a abundar en las críticas que ya se han hecho en relación a ello y que merecerán su análisis particularizado en la segunda lectura del proyecto de ley de Presupuesto. Me voy a oponer taxativamente a que se propicie la creación de tributos, como ya se ha hecho en este Presupuesto, sobre lo que dialogué con el Ministro cuando presentó el proyecto. El tributo implica 40 millones para el Fondo Educativo y deberíamos discutir también la prioridad para su distribución.

A pesar de que se diga que es potestad del Ejecutivo tomar financiamiento internacional, me parece una vergüenza que se mencione en el Presupuesto; ni siquiera como lo hace, suavemente, Adriana Puiggrós en Buenos Aires, a quien le copié la idea de que se tomen donaciones de agencias de cooperación internacional.

Hasta último momento no sabíamos cómo quedaba redactado el artículo 40; al respecto, en la página 15 de la documentación elevada por el Ministerio, con la recurrencia de las ideas planteadas por los docentes en las escuelas, se decía que había que ampliarlo, tomando el artículo 33 de la Ley nacional de manera completa, no incompleta, hasta un punto. Me pregunto por qué no se ha completado si se ha copiado la fórmula que plantea la Ley de Educación nacional donde se pone límites a las pasantías, a las prácticas en espacios extraescolares, aquí se adopta una fórmula que refiere a las leyes de trabajo.

No entiendo –y me gustaría hacerlo- por qué no se agrega que en todos los casos estas prácticas tendrán carácter educativo y no podrán generar ni reemplazar ningún vínculo contractual o relación laboral. Podrán participar de dichas actividades los y las alumnas de todas las modalidades y orientaciones de educación secundaria, mayores de 16 años de edad, durante el período lectivo, por un lapso no mayor a seis meses –en mi propuesta era de tres meses-, con el acompañamiento de docentes y autoridades pedagógicas designadas a tal fin.

En el caso de las escuelas técnicas y agrotécnicas, la vinculación de estas instituciones con el sector productivo se realizará de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 y 16 de la Ley 26.058. Todo esto es de la ley nacional. Reitero, quisiera que me expliquen por qué se copió solamente la mitad del artículo.

Creo que ha habido detalles importantísimos en las Audiencias que han remitido a lo que voy a plantear a continuación. Me parece que en el proyecto todavía se invisibilizan viejos derechos, como reclama la formación secundaria –sea técnica o no-, que remiten a cómo promovemos la apropiación crítica de nuestros estudiantes en relación con los derechos laborales. Eso está en la Ley nacional de Educación Técnica y también en la Ley de Educación nacional; y también algunos nuevos derechos que se expresan en la esfera pública como el reconocimiento a la no discriminación por orientación –se incluye la de género- a partir del

aporte que formulé; pero, me parece que había que dejar lo de “sexual”, no tenemos que tenerle miedo a eso, es distinto género de sexo.

En ninguna parte de esta ley se habla de familias en plural. En las Audiencias se planteó la cuestión del lenguaje de señas; la verdad es que no lo tenía internalizado y ahí aprendí que debía ser reconocido como lengua. No tuvimos tiempo para discutir eso, señor presidente.

No se alude en ningún lado -a pesar de que agradezco se remita a la Ley de Educación Sexual Integral- a lo que en la Audiencia escuché respecto de la sexualidad de los chicos con discapacidades, tema tabú si los hay.

No se contempla en el apartado de educación rural -al menos como se expuso en Cruz del Eje- el reconocimiento de la identidad campesina, como bien lo hizo la Ley de Bosques.

Hablando de estos nuevos derechos y problemas educativos, había propuesto una garantía en uno de los artículos para que las adolescentes en estado de gravidez tuvieran resuelta la continuidad de sus estudios en la escolaridad secundaria. Ninguna mención a esta cuestión, y que tiene que ver con el estricto presente.

También, me parece que tuvimos que darnos la oportunidad -y no lo hicimos- de reconocer lo que se planteó en la Audiencia respecto de la universalización de todo el nivel inicial, no sólo de la sala de 3, porque en verdad tenemos que avizorar la regulación de esta ley para un futuro. Y en el futuro, cualquiera sea el gobierno y como política de Estado, más allá de las metas para estos cuatro o cinco próximos años, debe garantizarse la universalización a partir de los 45 días de edad.

Si bien se ha modificado justamente la composición de los consejos, reconociendo la participación de estudiantes y padres y sus agremiaciones, es lamentable que el inciso e) del artículo 12, sobre el derecho de los alumnos, se oriente en el sentido de participar “en el desarrollo de la vida institucional”; en lugar de decir, como lo elevó el Consejo de Políticas Educativas “en el funcionamiento de las instituciones”, tal como además consta en los fundamentos de elevación del proyecto.

Lamento que no se diferencie a los centros de estudiantes con claridad respecto de los clubes o asociaciones, que bien pueden ser clubes de infancia o clubes de adolescentes, o lo que sea. Lo que más lamento es que no se los habilite a dictar sus propias reglas de juego, como insistentemente lo reclamaron. Incluso, fue admitido públicamente por las autoridades, sostenido en las Audiencias y esbozado en la propuesta que elevé. Y todo con el argumento que escuché de que había que evitar la anarquía.

Tampoco se ha habilitado, lo que podría haber sido un signo de madurez y de época, la posibilidad -que ya estaba en la Ley 8113- de que en las escuelas secundarias se constituyeran instancias colegiadas de gobierno, con representación de padres, docentes y alumnos, como de hecho ya es una experiencia colectiva que funciona en la Escuela Superior de Comercio “Manuel Belgrano”, dependiente de la Universidad Nacional.

Quiero reconocer en particular -por si no lo he nombrado- lo que ha significado la ampliación -como era merecido y constituyó un error del Consejo que asumo, pero que lo planteé oportunamente- que mereció la educación artística. Quiero agradecer la posibilidad de que quienes se han formado en esa disciplina vean reconocido su propio campo como un campo de conocimiento, que se haya aclarado la idea de modalidad para que se autorreferenciara en ese espacio disciplinario. Pero lamento, señor presidente, que no se haya admitido de mi propuesta la idea de que había que garantizar que, ante modificaciones curriculares de cualquier naturaleza, los docentes tenían que ser reconocidos en sus titulaciones de origen. Tampoco se aceptó el inciso relativo a la jornada completa. Dice: “serán de jornada extendida para toda la escuela primaria, aun cuando en las metas se haya incluido a partir de 4º, 5º, y 6º grado”. Insisto: “para toda la escuela primaria”. Debíamos incluir en ese inciso, señor presidente, las garantías y las condiciones de escolarización desde el punto de vista de la infraestructura, pero también y en relación a lo de artística, la garantía de que esos espacios curriculares relativos a ese campo disciplinario debían y deberán ser ocupados por docentes del área.

Tratando de tomar un poco de distancia de mi propia letra que, de hecho fue involucrada en varios de los artículos de este proyecto de ley, creo que el proyecto ha logrado equilibrarse un poco, cosa que merecíamos y que no es menor, pero lamento que se asemeje en parte a una especie de palimpsesto, es decir, tiene como varias capas superpuestas en cuanto al sentido que mereceríamos volver a discutir por inocultables contradicciones que expresan y que, de algún modo, podría significar que estaríamos ante la presencia de grupos de presión y poder dominante. Me dirán que no, que esto es fruto del consenso de los sectores mayoritarios de la sociedad, pero señor presidente, señores legisladores, ¿nos hemos olvidado de leer lo que dijeron los docentes en las escuelas en esas escasas 4 horas?,

¿nos hemos olvidado de las visiones críticas de la docencia cordobesa?, ¿deberemos decir que la consulta no arrojó nada?

En nombre de no borrar la historia, es decir, aspectos de la Ley 8113, creo que el Poder Ejecutivo ha dejado sobreviviendo lo que debía ser necesariamente modificado para marcar nuevos sentidos al proceso educativo acorde a los desafíos de época; haciendo eco de Hassoun y su libro "Los contrabandistas de la memoria" creo, señor presidente, que en varias partes se han equivocado de memoria. Perdieron, y perdimos todos, la oportunidad de ser coherentes, en la ley, con lo que venimos escuchando que se reclama.

Creo que el texto del proyecto entra en contradicción –como dije– con algunas disposiciones de la Ley nacional de Educación y, en parte, con fragmentos de su articulado. Mantener el imaginario de la "isla cordobesa" puede haber tenido sentido en épocas en que la Córdoba moderna, democrática y transformadora quería imponerse sobre sectores del poder nacional retrógrados y conservadores.

Hoy, si de algo sirve anticiparse a las políticas nacionales, como lo hacemos cuando nos remitimos a la educación obligatoria a partir de los 4 años, es para profundizar y ampliar las oportunidades educativas. Pero diferenciarse de la legislación nacional en principios que han logrado superar algunos de los impuestos en los '90 nos remite –me parece– a aguzar más nuestra imaginación, nuestro coraje y la estrategia política.

Es tiempo, señor presidente, de reconocer que el Consejo trabajó arduamente hasta alcanzar un borrador de texto legal. Pero creo que éste ha sido superado ampliamente por los acontecimientos, la movilización, la inteligencia y la capacidad de diversas instituciones, especialistas, organizaciones sociales y actores educativos y comunitarios.

Me parece que es necesario escuchar un poco más para poder registrar con sensibilidad la memoria social de los cordobeses.

Señor presidente: voy a insistir en que me parece que se han equivocado de memoria.

Para no abundar en algunos aspectos, pasaré el texto completo para que sea incorporado a la versión taquigráfica.

Quiero, finalmente, aludir al sentido público de lo que estamos defendiendo, esa consigna que no es vacía: la educación pública. Sandra Carli, en 2003, decía –con plena vigencia hoy–: "Es más urgente que nunca politizar el debate sobre la educación pública en el sentido de recordar que constituye el espacio privilegiado en el que transita el crecimiento de las nuevas generaciones, de destacar el papel de la educación pública en la sedimentación de un orden cultural futuro y de demandar el fortalecimiento del sector docente como actor social dada su responsabilidad social e institucional. La politización del debate acerca de la educación pública –que es sinónimo de educación estatal, no como en los '90, que se sustituyó su sentido– requiere revisar y reapropiarse críticamente de las tradiciones culturales. Esa tradición de la educación pública no es el cadáver anquilosado del pasado sino, en todo caso, una construcción en el tiempo con los estereotipos, los fantasmas y las huellas que toda historia deja en las instituciones, en los sujetos y en las identidades; una historia que, en definitiva, nos constituye".

En este sentido, quiero rescatar a los dos actores ausentes en este momento: a los estudiantes y a los docentes. Es una alegría que nos convoca que nuestros adolescentes y jóvenes retomen la palabra y el espacio público de la escuela y la ciudad. La dictadura militar y el genocidio acaecido en nuestro país silenciaron miles de cuerpos y voces, donde ser joven como rasgo identitario, hombres y mujeres, constituyó entre otros, el pasaporte al exilio, la muerte o las desapariciones. La recuperación de la democracia reinstituye un lugar de escucha a la palabra juvenil aunque el espacio escolar demorará muchos años y aún demora en restituir las formas organizativas propias e independientes de los estudiantes como expresiones reconocidas, aunque su palabra fuertemente politizada fue matizándose con otras formas de expresión más tangenciales, más reivindicatorias y menos ligadas de modo directo a la inscripción en la praxis política aunque dispuestas a preservar el espíritu de distinción respecto del mundo adulto. Estoy hablando de esos chicos "floggers" o los llamados desinteresados, sin deseos, escépticos y antipolíticos visto desde las reglas dominantes de la política.

También quiero, señor presidente, así como recupero esa revuelta de la palabra "estudiantil", reivindicar la palabra "docente" que se expresó de otro modo –como ya dije– por los carriles del sistema pero dijo "no" a los puntos más controvertidos de este proyecto. Estoy hablando de los 105 mil docentes que figuran en los elementos brindados por el Ministerio y acá se ha dicho, con injusticia, que lo que estamos planteando sólo responde al reclamo del 0,5 por ciento de la población. En el documento elevado de las discusiones en este escaso tiempo en las escuelas, los docentes se jugaron con su saber acerca del oficio y el saber de las escuelas y dijeron: "queremos educación pública, gratuita, laica, obligatoria y de calidad".

Me parece que hay una injusticia si no se reconoce eso como un aporte sustantivo, para que no se diga que son aportes parciales de las Audiencias; todo está en ese texto, señor presidente, los invito a leerlo con detenimiento, los invito a reivindicar a los estudiantes y docentes en términos de sus aportes esenciales.

Señor presidente, por todo lo planteado hasta acá, creo que queda claro que mi voto negativo no significa, para nada, no sostener la defensa de la igualdad, la inclusión y la justicia social; al contrario, voy a controlar y acompañar, voy a seguir prestando mi cabeza para lo que sea necesario en materia de construcción de políticas educativas en la Provincia que atiendan a los intereses del conjunto de la ciudadanía. Pero no puedo, señor presidente - me han obligado- no puedo acompañar este proyecto en tratamiento.

Gracias.

INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA LEGISLADORA CORIA

Voy a disentir también respetuosamente con la Legisladora Olivero quien, tras haber mostrado su lectura del acta número 10 del Consejo de Políticas Educativas, reflejando mis intervenciones como la de otros miembros de ese cuerpo, reclama injustamente a mi persona no haber compartido en la Comisión de Educación de esta Legislatura lo que allí estaba ocurriendo, cuando fue testigo en reuniones de Comisión de mis reiteradas demandas a la presidenta para socializar el proceso y las discusiones del Consejo.

Ahora quisiera avanzar en particular sobre el proyecto en discusión. Hago propios en ese sentido los argumentos políticos, pedagógicos y jurídicos planteados por la Asamblea Interclaustró de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Córdoba, que suscribo habiendo participado como docente en ella, y que fuera presentada en una de las Audiencias Públicas en Córdoba Capital; el aporte del Dr. Horacio Etchichury, también dada a conocer en ellas.

Quiero también dar lectura a las modificaciones en el articulado de la ley, elevadas por mi a la Legisladora Evelina Feraudo, elaboradas en base a la escucha de múltiples voces, y que no han sido tomadas en su integralidad, como tampoco la imperiosa necesidad de volver a la escuela. Dicha propuesta, que adjunté formalmente junto a la nota que también es deber dar a conocer, fue remitida con copia al Sr. Ministro de Educación, Prof. Walter Grahovac.

La propuesta por mi presentada no ha sido un proyecto alternativo, en respeto a mi profunda convicción de que teníamos el deber como legisladores de aportar a la modificación del proyecto profundizando el debate, reelaborándolo (no contra reloj) sobre la base de la riqueza de los documentos de audiencias, de lo producido en julio en las instituciones educativas, y volver a discutirlo en las escuelas, con la plena garantía de participación de docentes, estudiantes y padres. Imaginaba estar discutiendo en este recinto la norma, como se lo hice saber al Sr. Ministro, en el mes de abril, después de un intenso trabajo legislativo en el mes de febrero, y de un mes de trabajo en las escuelas. Se trataba de un esfuerzo político muy lejano a intereses que no sea concebir la educación como política de estado.

El Legislador Omar Ruiz, como lo ha señalado, ha presentado un proyecto que denomina alternativo y que según señala, ha tomado mis aportes para su confección, además de otras modificaciones por él elaboradas. Dejo constancia respetuosamente de mi desacuerdo con ese camino para zanjar la distancia entre el antecedente legislativo y la demanda popular.

Paso entonces a puntualizar las referencias aludidas de la Escuela de Ciencias de la Educación, el Dr. Etchichury, y mi propuesta.

La Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades expresa mediante el presente documento su posicionamiento frente al Anteproyecto de Ley General de educación de la provincia de Córdoba. Este documento refleja los acuerdos a los que llegamos en el debate sostenido entre docentes, alumnos y egresados de la escuela.

Ante la inminente reforma de la ley que regula el Sistema Educativo provincial no podemos dejar de pronunciarnos al respecto. En principio, vale remarcar que una reforma de esta envergadura presenta, inevitablemente, un escenario de conflicto entre intereses encontrados. Sin embargo, y al mismo tiempo, representa una posibilidad de dar un paso hacia adelante en la construcción de una sociedad más justa, más inclusiva y más democrática.

El presente documento expresa sintéticamente los debates que se desarrollaron en diversas jornadas inter-claustró en la Escuela de Ciencias de la Educación (ECE). La modalidad de trabajo procuró recuperar las voces de todos aquellos que hoy integran la Institución: docentes, alumnos y egresados; muchos de ellos participantes como docentes en distintas instituciones educativas en las que ya se había realizado la discusión sobre la ley. Además de un postulado general, se encontraron sugerencias y propuestas de modificación al articulado del mencionado anteproyecto.

Las críticas o aportes que aquí se exponen no pretenden ser exhaustivas, ni mucho menos abarcar el conjunto del articulado del anteproyecto de ley en cuestión. Son, en todo caso, el reflejo de lo que, tiempos y disposiciones institucionales, nos permitieron discutir y consensuar.

Acerca de la metodología de consulta.

En primer lugar, se valoró de manera positiva la instalación del debate político sobre la educación en el contexto actual. Sin embargo, sostenemos una fuerte crítica la metodología y organización de la consulta implementada desde el área central del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, ya que por los escasos tiempos disponibles se reeditó, como en otras ocasiones, "participación simulada".

Consideramos, que la consulta realizada tanto en referencia al instrumento utilizado como a los tiempos dedicados al debate y las modalidades de difusión del Anteproyecto resultaron insuficientes y acotados.

Se entiende a la participación ciudadana en la educación no como una opción, sino como una condición indispensable para sostener, desarrollar y transformar la educación en las direcciones deseadas. Es un imperativo político. Un imperativo democrático.

La participación plena, como modo de trabajo para el desarrollo y la equidad social, debe ser significativa y apreciable; requiere del involucramiento de todos los actores, diferenciando pero sincronizando sus roles; en los diversos ámbitos y dimensiones de lo educativo: desde el aula, la institución, hasta las instancias de macro política educativa.

Acerca de la educación religiosa.

Nos pronunciamos enérgicamente a favor de la educación laica. En ese sentido se propone que los artículos 11 inc. e, 35 inc. c., y todos los demás artículos que de manera directa o indirecta aludan a la formación religiosa dentro de la educación pública estatal, sean excluidos del anteproyecto, sobre la base de las siguientes argumentaciones.

- Argumentos jurídicos (basados en el documento de Horacio Etchichury y debates al interior de la comisión):

- La Constitución Nacional sostiene la libertad de cultos y conciencia (art. 2) y presenta a la esfera privada como una zona libre de la injerencia estatal (art. 19).

- Si bien la Constitución Provincial sostiene como derecho de los padres el que “sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral, según sus convicciones” (art. 62 inc. 5), ninguno de los derechos de los padres o tutores considerados al respecto de la educación religiosa en tratados internacionales dotados de jerarquía constitucional (art 13 inc. 3 del pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) **obligan** en ningún caso a brindar educación religiosa o moral **dentro** de la enseñanza (palabra que puede cambiarse por educación) pública estatal.

- La constitución de Córdoba, en el tramo que permite intervenir en la formación religiosa, resulta inconstitucional por contradecir la Ley Suprema Federal. Sin embargo y por lo pronto, corresponde eliminar del ante proyecto las referencias incluidas en los arts. 11 y 35 ya que la legislatura cordobesa está obligada a sancionar normas coherentes con las normas superiores (en éste caso la CN) sin que sea necesario una reforma constitucional.

- Aún asumiendo que la constitución provincial no contradice a la CN (lo que de hecho si acontece, como se argumenta anteriormente), existe una contradicción al interior de la misma Constitución Provincial, ya que habilita al Estado a introducir la enseñanza religiosa, a la vez que consagra la libertad de cultos y de profesión ideológica y religiosa (arts. 5 y 19 inc. 5), y garantiza que “nadie puede ser obligado a declarar la religión que profesa” (La educación religiosa dentro del espacio escolar forzaría a los niños que no deseen recibirla a manifestar por sí o a través de sus padres, su confesión o la falta de alguna).

- Los artículos del Anteproyecto que aluden a la formación religiosa dentro de la educación pública estatal, entran en contradicción con el artículo en que se enuncian los principio generales de la educación dentro del mismo anteproyecto (art 3 inc f.), donde se sostiene que “la educación pública estatal es (...) exenta de dogmatismos de cualquier signo”

- La educación religiosa dentro de la educación pública estatal entra en contradicción con la Ley antidiscriminación (**23.592**) de carácter nacional que considera particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como religión, entre otros, y norma: “Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio”. La educación religiosa al interior de las escuelas públicas estatales obstruiría el pleno ejercicio sobre las bases igualitarias de los derechos y garantías de la CN al generar por sí misma segregación, tanto de estudiantes como de docentes, en base a las religión o ausencia de ésta que profesen.

- Argumentos pedagógicos:

- Históricamente, la familia como ámbito educativo, asume la formación en torno de las creencias por las que optan, y delega al espacio escolar estatal la función educativa en relación con los saberes legitimados científicamente y compartidos socialmente. El mandato social asignado es el de la transmisión de **lo común y lo diverso o particular en un sentido cultural amplio** (es decir, en respeto de particularidades contextuales), que apunta a la proyección de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos para el ejercicio de una ciudadanía plena. En ese sentido, la alianza entre escuela y familia no debe interpretarse como sustitución de los fines que son inherentes a cada ámbito. El Estado (la escuela en este caso) no interfiere, haciéndose cargo de la transmisión de lo común, sobre el orden privado familiar que puede asumir la formación religiosa o agnóstica, según el caso, a través de diversas instituciones, formas o instancias.

- Las prácticas que se observan en algunas instituciones educativas públicas vinculadas con creencias religiosas tienen un efecto segregatorio con importante impacto subjetivo respecto de estudiantes que no profesan esos credos, lo que se vería reforzado por los artículos en discusión. De ello solo serían ejemplos tener que salir del aula en horas de clase o extra clase cuando se forma en catequesis, enfrentarse a situaciones como no rezar (o no rezar) cuando otros lo hacen en instancias previas a la alimentación. Las diferencias culturales en la escuela deben reconocerse y respetarse, pero siempre en el marco de una opción por lo común, lo compartido, y de principios de inclusión y no discriminación.

- Argumentos políticos:

“¿Cómo es posible que exista por tiempo prolongado una sociedad justa y estable de ciudadanos libres e iguales, profundamente divididos por doctrinas razonables de índole religiosas, filosóficas y morales?” (Rawls)

Este es el problema que se planteó a la temprana modernidad los efectos provocados por las Guerras entre religiones salvacionistas, expansionistas y de credo dogmático y cuya solución requería un nuevo diseño político-institucional que evitara un conflicto mortal entre doctrinas comprensivas y absolutas.

La fragmentación de la cristiandad medieval, caracterizada como una religión doctrinal y de conversión, fue alentada por las tendencias pluralistas de la Reforma del siglo xvi y por el desarrollo de la ciencia moderna, lo que configuraba un nuevo escenario que demandaba, a la vez, la institución de un nuevo estado que consagrara el principio moderno de libertad de conciencia y de pensamiento, principio que está a la base del pluralismo que legitima a las actuales sociedades democráticas.

Es decir, las sociedades modernas parten del pluralismo como un “hecho” inerradicable (NO SE ENTIENDE LA PALABRA) de la vida social, a excepción de que ese apele a recursos coercitivos por parte del Estado, y como un bien valioso en sí mismo. El pluralismo como *modus vivendi* alcanzado por las culturas contemporáneas requiere de la doctrina de la neutralidad del Estado para legitimar y asegurar dicho pluralismo y para trazar la distinción entre las razones públicas y las razones privadas. En efecto, a los fines de que los individuos elaboren y escojan sus propios proyectos de vidas y valores que los inspiren, dicho proceso no debe ser interferido por el Estado, situación en la que se incurriría si este asume su identificación con una concepción religiosa, filosófica o metafísica en particular. La asunción por parte del estado de una cosmovisión determinada supone una suerte de “perfeccionismo”, postura filosófica que tiende a privilegiar formas superiores de vida y convertirlas en objetivos a realizar a través de la vida política. Este compromiso con el perfeccionismo es, de suyo, incompatible con el pluralismo, y está presente, de algún modo, en el propósito de introducir la educación religiosa en las escuelas del estado.

Sin duda, la neutralidad a la que se apela no es absoluta, ya que en la tradición democrática el principio último que la justifica es la **igualdad** por lo que, precisamente, para tratar como iguales a todos los ciudadanos, el Estado debe ser neutral. En términos de Dworkin: “Puesto que los ciudadanos de una sociedad difieren en su concepciones [de la vida buena], el gobierno no los trataría como iguales si prefiriera una concepción a otra, ya porque los funcionarios crean que una de ellas es intrínsecamente superior, ya porque una de ellas sea apoyada por grupos más numerosos o más poderosos”.

En el marco de la discusión que nos concierne, si no se garantiza esta neutralidad en el espacio de la educación pública estatal, se estaría propiciando la utilización de la escuela como espacio para la enseñanza de creencias religiosas compartidas sólo por algunos estudiantes, en detrimento de aquellos cuyos padres no profesan ninguna fe o adhieren a instituciones religiosas que no cuentan con la capacidad para ejercer la transmisión de su credo en las escuelas, aún cuando los padres lo soliciten.

La incompatibilidad de la doctrina de la neutralidad con el perfeccionismo no implica la erradicación de la profesión y práctica religiosa sino el bosquejo de una frontera entre las **razones públicas compartidas** y las razones privadas o no públicas. Las primeras vienen a indicarnos aquello a lo que puede apelarse o exhibirse como argumento y aquello que queda a fuera, a la hora de interpretar o apoyar una cierta forma de vida o cierta norma o ley que regule la vida social, o sea, esto supone que los ciudadanos no pueden invocar razones que los demás no puedan suscribir razonablemente y fuera de todo dogma; nuevamente implica que en el marco de la justificación de las políticas públicas se debe recurrir sólo a las creencias y formas de razonar generalmente aceptados y que encontramos en el sentido común. Lo importante es que las discusiones se lleven a cabo en un contexto de una concepción política de la justicia fundada en valores que los demás puedan razonablemente suscribir, lo que resulta improbable cuando se asume apriorísticamente un sistema de ideas bajo el cual los demás deben regirse. Sin duda, las creencias y prácticas de una concepción comprehensiva –religiosa o metafísica– son legítimas de ejercerse en el ámbito privado y de las asociaciones que las expresan y articulan, sean asociaciones, escuelas, etc., derechos estos constitucionalmente garantizados. Sin embargo, es ilegítimo pretender que este derecho, válido en su respectivo ámbito, sea extendido como el principio axiológico e ideológico que inspire y regule la vida escolar de gestión pública estatal, la que por definición debe garantizar el pluralismo de los proyectos de vida justificado en la doctrina de neutralidad en materia moral y política por parte del Estado lo que inhibe a este de su identificación con una concepción perfeccionista de la vida política.

Estas consideraciones, aparentemente abstractas y alejadas de las urgencias políticas de la coyuntura, sin duda estuvieron presentes en el diseño constitucional de 1853 y su traducción en materia educativa en la Ley 1420. Precisamente, la voluntad de cobijar hombres y mujeres de diversas latitudes, culturas y creencias fueron las razones, entre otras, de adoptar la neutralidad en materia confesional y filosófica a los fines de garantizar el deseado pluralismo. Esta extendida y saludable tradición fue interrumpida por la imposición de la enseñanza de la religión con el golpe militar de 1943 pero nuevamente excluida en 1954.

Sin embargo, esta historia no es lineal y el propósito de introducir la educación confesional ha estado presente en diversos momentos o en los resquicios legales abiertos por determinadas constituciones provinciales, reeditado nuevamente a propósito de las propuestas del actual Ante-Proyecto de la Educación Provincial.

La presente dicotomía laica-confesional en el orden educativo, no hace sino anudar una tensión política más profunda que no es otra que el conflicto irresuelto entre el carácter genuinamente pluralista del Estado o su colonización por parte del poder eclesiástico y su ambición integrista de conformar y normalizar a la totalidad de la sociedad bajo sus propios paradigmas y modelos de vida buena.

ARTÍCULO 1.- Ámbito de Aplicación

Esta ley rige la organización y administración del Sistema Educativo Provincial integrado por los siguientes servicios:

- a) Los servicios educativos públicos de gestión estatal.
- b) Los servicios educativos municipales, regulados por el artículo 80 de esta ley.
- c) Los servicios educativos públicos de gestión privada autorizados.

Propuesta:

Debe incluirse en este artículo los servicios educativos públicos de gestión cooperativa y gestión social con arreglo a la ley nacional de educación Artículo 14: "El Sistema Educativo Nacional es el conjunto organizado de servicios y acciones educativas reguladas por el Estado que posibilitan el ejercicio del derecho a la educación. Lo integran los servicios educativos de gestión estatal y privada, gestión cooperativa y gestión social, de todas las jurisdicciones del país, que abarcan los distintos niveles, ciclos y modalidades de la educación."

ARTICULO 3.- Principios Generales

La política educativa, en cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Provincial, se regirá por los siguientes principios generales:

- a) La educación es función principal, obligatoria y permanente para el Estado Provincial, quien establece y supervisa la política del sector;

Redacción propuesta:

- a) La educación es responsabilidad, obligatoria y permanente para el Estado Provincial.

Aclaración: cambia el concepto de función por el de responsabilidad. Se debe tener en cuenta la supervisión en la transversalidad del anteproyecto de ley. ¿a que entidades se supervisa? ¿se supervisa a entidades privadas?

- b) Se reconoce a la familia, como agente natural y primario de educación, el derecho fundamental de educar a sus hijos y de escoger el tipo de educación más adecuado a sus propias convicciones;

Redacción propuesta:

- b) Se reconoce a las familias, el derecho fundamental de educar a sus hijos y de escoger el tipo de educación más adecuado a sus propias convicciones;

Aclaración: se cuestiona a la "familia como agente natural y primario de educación". ¿que sucede con aquellas familias mas desfavorecidas.

- c) La educación es también función y responsabilidad de la sociedad, orientada a asegurar el respeto de las peculiaridades individuales y culturales y a impulsar, a través de la participación de sus miembros, su propio desarrollo;

Propuesta.

Este inciso debe omitirse.

Se debatió sobre:

- "responsabilidad de la sociedad" ¿quien es la sociedad?

- "participación de sus miembros" es muy general y ambiguo. Deja librado a la incidencia de intereses sectoriales y corporativos que pueden atentar contra la gratuidad y la laicidad de la educación pública.

- queda desdibujado lo público de lo común.

- no se debe dejar de "asegurar el respeto de las peculiaridades individuales y culturales" y tampoco dejar de tener en cuenta la "participación" - tanto de la comunidad educativa como de las organizaciones sociales-. Se debe retomar la concepción de participación de la Ley 26.061, Artículo 6.- Participación comunitaria. La comunidad, por motivos de solidaridad y en ejercicio de la democracia participativa, debe y tiene derecho a ser parte activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes.

- d) Todos los habitantes de la Provincia tienen derecho a la educación para favorecer el desarrollo pleno de su persona e integrarse como ciudadano en un marco de libertad y convivencia democrática.

Es responsabilidad del Estado garantizar el ejercicio de este derecho en igualdad de oportunidades y sin discriminación de ningún tipo;

Redacción propuesta.

- d) Todos los habitantes de la Provincia tienen derecho a la educación para favorecer su desarrollo integral como sujeto de derechos en un marco de libertad y convivencia democrática.

Es responsabilidad del Estado garantizar el ejercicio de este derecho en igualdad de oportunidades y sin discriminación de ningún tipo;

Aclaración: se cambia el concepto espiritualista de "persona" por el de "sujeto de derecho".

- e) Todos los habitantes de la Provincia tienen, así mismo, derecho a acceder a los más altos niveles de formación, investigación y creación, conforme con su vocación y aptitudes y dentro de las exigencias del interés nacional y provincial;

Redacción propuesta.

- e) Todos los habitantes de la Provincia tienen, así mismo, derecho a acceder a los más altos niveles de formación, investigación y creación.

Aclaración: se cuestionan los términos “vocación” por “-responder a concepciones religiosas-”, “aptitudes”- por responder a concepciones militares”-, “del interés nacional y provincial”- esto podría dar lugar a que se avale el denominado “Servicio Cívico Voluntario”.

Se genera un debate en torno a agregar “garantizando las condiciones materiales, pedagógicas y simbólicas. Algunos plantean que puede ser acotada la afirmación, ya que estos son los principios generales.

f) La educación pública de gestión estatal es común, integral, gratuita y exenta de dogmatismos de cualquier signo.

Redacción propuesta.

f) La educación pública es común, integral, permanente y exenta de dogmatismos de cualquier signo.

La educación pública de gestión estatal es gratuita.

Aclaración. La educación pública de gestión privada también debe ser común, integral, permanente y exenta de dogmatismos de cualquier signo, respetando la diversidad.

g) El Estado garantiza el derecho de enseñar y aprender en todo el territorio provincial. Su ejercicio, dentro del sistema educativo, respetará las libertades inherentes a las personas que se educan y lo dispuesto por la Constitución Provincial y la presente Ley.

Redacción propuesta.

g) El Estado garantiza el derecho de enseñar y aprender en todo el territorio provincial. Su ejercicio, dentro del sistema educativo, respetará las libertades inherentes a todos los sujetos de derecho que participan del mismo, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución Provincial y la presente Ley.

h) El Estado garantiza, en el ámbito educativo, el respeto a los derechos de los/as niños/as y adolescentes establecidos en la Ley nº 26.061.

i) El Estado reconoce, asimismo, la libertad de las personas, asociaciones y municipios de crear y gestionar instituciones educativas ajustadas a los principios de la Constitución y a esta Ley.

Redacción propuesta.

i) El Estado reconoce, asimismo, la libertad de los individuos, personas jurídicas y municipios de crear y gestionar instituciones educativas ajustadas a los principios de la Constitución y a esta Ley.

Aclaración: se cambia “personas” por “individuos” y “asociaciones” por “personas jurídicas”

j) El Estado asegura en el presupuesto provincial los recursos suficientes para el financiamiento del sistema educativo e integra con igual fin aportes comunitarios, sectoriales y de otras jurisdicciones.

Redacción propuesta

j) El Estado asegura en el presupuesto provincial los recursos necesarios para el financiamiento del sistema educativo.

Aclaración: Se considera que el Estado Provincial debe asumir la responsabilidad de la provisión de los recursos “necesarios” y no sólo suficientes, independientemente de los aportes provenientes del Estado Nacional. Se plantea además tener en cuenta lo establecido por el artículo Nº 107 de esta misma norma.

ARTICULO 4.- Fines de la Educación

La educación en la Provincia de Córdoba, de acuerdo con los principios y valores de su Constitución, se dirigirá al cumplimiento de los siguientes fines:

a) El desarrollo integral, armonioso y permanente de los alumnos orientado hacia su realización personal y su trascendencia en lo cultural, lo social, lo histórico y lo religioso, según sus propias opciones.

b) La formación de ciudadanos conscientes de sus libertades y derechos y responsables de sus obligaciones cívicas, capaces de contribuir a la consolidación del orden constitucional; a la configuración de una sociedad democrática, justa y solidaria y a la valoración y preservación del patrimonio natural y cultural.

c) La capacitación para el ejercicio de la participación reflexiva y crítica y el comportamiento ético y moral de la persona que le permita su activa integración en la vida social, cultural y política.

d) La preparación laboral, técnica y profesional de la persona, que la habilite para su incorporación idónea al proceso de desarrollo socio productivo y para su formación permanente.

e) La comprensión de los avances científicos y tecnológicos y su utilización al servicio del mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva.

f) La conservación de los valores fundamentales que cimientan la identidad y unidad nacional y latinoamericana, con apertura a la cultura de los pueblos, y la promoción y creación de las expresiones culturales de las diversas comunidades de la Provincia.

g) La formación en el respeto y valoración de la diversidad lingüística y cultura de los pueblos originarios

h) La formación para la comprensión, la cooperación y la paz entre las naciones y la educación relativa a los derechos humanos y libertades fundamentales.

i) La educación incorporará obligatoriamente en todos los niveles educativos y modalidades el estudio de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial, sus normas, espíritu e instituciones.

j) Brindar conocimientos y promover valores que fortalezcan la formación integral de una sexualidad responsable

k) Brindar una formación que promueva el derecho a la vida y su preservación.

l) Desarrollar las capacidades de las personas para prevenir adicciones y el uso indebido de drogas, la formación corporal, motriz y deportiva, la educación vial y el cuidado del medio

ambiente.

Propuesta:

Se propone cambiar el artículo completo remplazándolo por el Artículo 11 de la ley nacional de educación. Esto se fundamenta en las diferencias filosóficas, antropológicas y pedagógicas que se dan entre una y otra. Sin embargo se debe prestar atención en eliminar de todos los incisos el concepto de "persona" conforme a lo expuesto más arriba. Se propone a tal efecto el concepto de "sujeto de derecho". El Artículo 4 del presente anteproyecto responde a concepciones fragmentarias totalmente neoliberales.

ARTICULO 13.- Las Instituciones Educativas y la Convivencia Democrática.

Las instituciones educativas, de los distintos niveles y modalidades del sistema, se organizarán según normas democráticas de convivencia y funcionamiento, respetuosas del pluralismo y la tolerancia facilitando la participación responsable y solidaria que corresponde a cada sector de la comunidad educativa, garantizando así el ejercicio pleno de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones y evitando cualquier forma de discriminación entre los miembros de la misma

Redacción propuesta.

Las instituciones educativas, de los distintos niveles y modalidades del sistema, se organizarán según normas democráticas de convivencia y funcionamiento, respetuosas del pluralismo y la tolerancia facilitando la participación responsable y solidaria de todos los sujetos de derechos de la comunidad educativa, garantizando así el ejercicio pleno de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones y evitando cualquier forma de discriminación entre los miembros de la misma

Aclaración: se acuerda con el cumplimiento de este artículo, reemplazando la conceptualización de "sector de la comunidad" por "sujetos de derechos".

ARTICULO 14 .- El Sistema Educativo Provincial.

Institúyese el sistema educativo provincial integrado orgánicamente por los servicios educativos de gestión estatal, que conjuntamente con los servicios educativos de gestión privada, se inserta en el marco político-institucional del Estado y se organiza conforme los principios y estructura establecidos por esta Ley para dar cumplimiento a sus fines y objetivos.

Redacción propuesta:

Instituyese el sistema educativo provincial integrado orgánicamente por las instituciones educativas de gestión estatal y privada, gestión cooperativa y gestión social insertas en el marco político-institucional del estado organizado conforme los principios y estructura establecido por esta Ley para dar cumplimiento a sus fines y objetivos.

Aclaración: Debe incluirse en este artículo los servicios educativos públicos de gestión cooperativa y gestión social con arreglo al Artículo 14 de la ley nacional de educación.

ARTICULO 16.- Principios Políticos de Organización del Sistema.

El sistema educativo se organiza, en términos de política educacional, conforme con los principios de libertad de enseñanza, de democratización, centralización política y normativa, desconcentración operativa y participación social, a cuyo efecto las autoridades provinciales:

a) Garantizan la equidad en los servicios educativos, a fin de alcanzar igualdad en las oportunidades y posibilidades de acceso, permanencia y logro educativos, y ofrecen una educación que asegure la democrática distribución de los conocimientos personal y socialmente relevantes;

a. Garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso y la permanencia en los diferentes niveles del sistema.

b) Fijan y desarrollan políticas de promoción de la igualdad educativa destinadas a enfrentar situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y otras formas de discriminación, derivadas de factores socio-económicos, culturales, geográficos, étnicos, de género o de cualquier otra índole, que afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación.

c) Establecen las grandes líneas de política educativa y aseguran el cumplimiento de los objetivos del sistema, articulando orgánicamente su gobierno y administración, con el objeto de lograr la mayor eficacia de las acciones propuestas;

c) Establecen las grandes líneas de política educativa y aseguran el cumplimiento de los objetivos del sistema, articulando orgánicamente su gobierno y administración, con el objeto de garantizar las acciones propuestas.

d) Adecuan la oferta educativa a las características de las distintas regiones de la Provincia, respetando sus pautas socio-culturales y promoviendo el despliegue de sus potencialidades;

d) Adecuan las ofertas educativas a las características de las distintas regiones de la Provincia, respetando sus pautas ecológicas y socio-culturales y promoviendo el despliegue de sus potencialidades.

e) Reconocen la capacidad y la responsabilidad de la sociedad para intervenir en la toma de decisiones educativas y en el control de su ejecución y promueven su participación activa en los espacios establecidos para tal fin.

En su ARTICULO 40, el Anteproyecto toma en forma literal lo dispuesto por el ARTICULO 33 de la LEN respecto a las vinculaciones entre las instituciones educativas secundarias y el mundo de la producción y el trabajo, aunque como puede observarse a continuación, se omite un fragmento del este artículo que refiere a las condiciones en las que se desarrollarán estos vínculos. En el texto del ANTEPROYECTO se afirma:

ARTICULO 40.- El Ministerio de Educación propiciará la vinculación de las instituciones educativas secundarias con el mundo de la producción, el trabajo y otros organismos según su orientación. En este marco podrán realizarse prácticas educativas en las escuelas, empresas, organismos estatales, entidades culturales y gremiales, que faciliten al alumno el conocimiento de las organizaciones, el manejo de tecnologías y le brinde experiencias adecuadas a su formación y orientación vocacional.

Mientras que el texto de la LEN dispone:

ARTÍCULO 33.- Las autoridades jurisdiccionales propiciarán la vinculación de las escuelas secundarias con el mundo de la producción y el trabajo. En este marco, podrán realizar prácticas educativas en las escuelas, empresas, organismos estatales, organizaciones culturales y organizaciones de la sociedad civil, que permitan a los/as alumnos/as el manejo de tecnologías o brinden una experiencia adecuada a su formación y orientación vocacional. En todos los casos estas prácticas tendrán carácter educativo y no podrán generar ni reemplazar ningún vínculo contractual o relación laboral. Podrán participar de dichas actividades los/as alumnos/as de todas las modalidades y orientaciones de la Educación Secundaria, mayores de dieciséis (16) años de edad, durante el período lectivo, por un período no mayor a seis (6) meses, con el acompañamiento de docentes y/o autoridades pedagógicas designadas a tal fin. En el caso de las escuelas técnicas y agrotécnicas, la vinculación de estas instituciones con el sector productivo se realizará en conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 y 16 de la Ley N° 26.058.

Sería necesario entonces considerar el artículo completo, para evitar posibles efectos de mercantilización de la educación secundaria, tal como se detallará cuando se analice la Educación Técnico Profesional.

ARTICULO 46.- El Ministerio de Educación debe propiciar la firma de convenios de colaboración mutua entre las autoridades educativas con el sector de la producción y el trabajo a fin de favorecer la realización de prácticas profesionales intracurriculares y/o pasantías laborales de los estudiantes con propósito formativo y garantía de planificación y acompañamiento docente.

Si bien la experiencia laboral educativa fuera de la institución escolar resulta valiosa para la formación de los estudiantes, debería enfatizarse su carácter pedagógico, evitando que pudiera desvirtuarse con prácticas orientadas por intereses sectoriales que tiendan al lucro privado, debiendo excluirse explícitamente del articulado de la ley dicha posibilidad.

ARTICULO 64.- Las instituciones de educación técnico profesional de nivel medio y nivel superior deberán ser autorizadas por el Ministerio de Educación al manejo autónomo del propio producido que surja como Proyecto Escuela – Trabajo – Producción, con carácter educativo. En ningún caso los alumnos asumirán obligaciones que excedan el sentido pedagógico de los proyectos ni serán expuestos a cualquier forma de trabajo informal.

Propuesta

Se propone la eliminación de este artículo. Recuperar la última parte del artículo y enfatizar el carácter formativo de las experiencias y el rechazo terminante a cualquier forma de trabajo en negro o informal por parte de los alumnos. Podría pasar al artículo N° 66.

Se deberían retomar los artículos 15 y 16 de la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058:

ARTICULO 15. — El sector empresario, previa firma de convenios de colaboración con las autoridades educativas, en función del tamaño de su empresa y su capacidad operativa favorecerá la realización de prácticas educativas tanto en sus propios establecimientos como en los establecimientos educativos, poniendo a disposición de las escuelas y de los docentes tecnologías e insumos adecuados para la formación de los alumnos y alumnas. Estos convenios incluirán programas de actualización continua para los docentes involucrados.

ARTICULO 16. — Cuando las prácticas educativas se realicen en la propia empresa, se garantizará la seguridad de los alumnos y la auditoría, dirección y control a cargo de los docentes, por tratarse de procesos de aprendizaje y no de producción a favor de los intereses económicos que pudieran caer a las empresas.

En ningún caso los alumnos sustituirán, competirán o tomarán el lugar de los trabajadores de la empresa.

SOBRE LA MERCANTILIZACIÓN DE LA EDUCACION.

Esta Ley debería tener un apartado o capítulo donde claramente se exprese en el sentido de la no-mercantilización de la educación y las variadas modalidades en las que puede expresarse, sobre todo respecto de la privatización de la educación pública como una tendencia que se observa en otros sistemas educativos de América Latina y del mundo.

Además de que la Ley contenga un artículo que indique que el Estado provincial no firmará ningún tratado o acuerdos que impliquen considerar a la educación como un servicio, “porque la educación no es una mercancía y no debe privatizarse”, es importante dejar expreso que tampoco establecerá convenios o autorizará servicios educativos de corporaciones nacionales o transnacionales.

Los proveedores extranjeros cada vez más presionan para que se abran los países o flexibilicen las barreras que impiden el ingreso de esos servicios

Más aún debería quedar expreso el rol de supervisión y control del Estado Nacional en los servicios educativos vía Internet o algunos formatos de nuevas tecnologías que son, en algunos casos, de dudosa

ARTICULO 106.- Competencias de Los Municipios.

Una ley especial establecerá y reglamentará las competencias y atribuciones de los municipios en materia educativa, las que se ejercerán en forma coordinada y concertada con el Gobierno Provincial, asegurando su concordancia con la presente ley general.

Dicha norma preverá la realización de convenios entre ambos niveles de gobierno, en los cuales se acordarán las condiciones de cooperación y participación correspondientes a la creación, construcción, mantenimiento y equipamiento de las instituciones educativas, así como su regulación pedagógica, académica y administrativa.

Propuesta

Eliminar el segundo párrafo del artículo que deposita en los municipios responsabilidades del Estado provincial. El riesgo es producir mayor fragmentación en el sistema educativo dependiendo de las capacidades de municipios para sostener la "creación, construcción, mantenimiento y equipamiento de las instituciones educativas"

Algunos elementos para el debate sobre el Anteproyecto de reforma a la ley 8113

Por Horacio Javier Etchichury
Profesor, Derecho Constitucional
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
Universidad Nacional de Córdoba

Aquí señalo unos pocos temas que merecen atención en la discusión sobre la reforma de la ley de educación provincial. Se ha dicho que el Anteproyecto no define a la educación como derecho, que elimina la estabilidad docente, que incorpora la enseñanza religiosa en las escuelas, o que subordina la educación a las necesidades de las empresas.

En este texto, intento abordar esas y otras preocupaciones, para contribuir a un mejor debate. Tenemos derecho a una discusión abierta y prolongada. No importa que en su momento el vicegobernador haya dicho que el debate ya está cerrado (La Voz del Interior, 04/10/2010), o que el gobernador haya acusado de "profascistas" a quienes apoyaron las tomas en las que grupos estudiantiles reclamaron, entre otras cosas, conocer y analizar el Anteproyecto (La Voz del Interior, 08/10/2010).

Deseo aportar algunos elementos, aun advirtiendo que mi punto de vista es, principalmente, el del Derecho. Se hace necesario revisar estas ideas a la luz del conocimiento generado por la Pedagogía, la Sociología de la Educación, la Historia y la Ciencia Política, entre otras disciplinas.

1. La educación como derecho

El Anteproyecto define a la educación como un derecho "personal y social, garantizado por el Estado", además de ser un "bien público" (art. 2). Estas palabras reiteran textualmente el art. 2 de la ley 26.206, o Ley Nacional de Educación (LNE). La definición como "derecho" elimina las dudas que puede generar el concepto de "bien público", cuya pertinencia en materia educativa me resulta poco clara. También un texto tomado del art. 10 de la LNE se adopta como parte del mismo art. 2 del Anteproyecto: prohíbe a la Provincia suscribir tratados de libre comercio que "impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienen cualquier forma de mercantilización de la educación pública".

Se mantiene la "gratuidad" de la educación pública de gestión estatal (art. 3 inc. f), siguiendo el principio fijado en el art. 75 inc. 19 de la CN. Esta gratuidad no puede ser desconocida ni reducida en el futuro, en virtud del principio constitucional de progresividad (Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 13; el Pacto tiene la máxima jerarquía legal, según el art. 75 inc. 22 de la CN).

En la educación inicial, las salas de 4 años se hacen obligatorias (art. 27); en la LNE no lo son, ya que la obligatoriedad arranca a los 5 años (art. 18). El ministro de Educación cordobés ha aclarado, sin embargo, que esa obligatoriedad se hará efectiva dentro de 3 años aproximadamente (Día a Día, 03/10/2010).

También se garantizan los derechos de niños, niñas y adolescentes contenidos en la ley 26.061 (art. 3 inc. h).

2. La estabilidad docente

En primer lugar, el Anteproyecto remite al estatuto del docente como norma reguladora de la labor en la enseñanza pública y privada (art. 7). Luego, entre otros derechos, el Anteproyecto reconoce el derecho de los docentes a la estabilidad (art. 7 inc. f) y a la "capacitación y actualización integral, gratuita y en servicio" (art. 7 inc. c), reproduciendo textualmente las pautas del art. 67 de la LNE. Aquí la ley parece seguir las pautas del art. 14 bis de la CN ("protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público"). Como el art. 7 no hace distinciones, estos derechos abarcan tanto a quienes trabajan en la enseñanza privada como en la estatal.

3. La enseñanza religiosa o moral en la escuela pública estatal.

Ha generado discusiones la inclusión de la enseñanza religiosa "opcional" en el Anteproyecto. Aquí analizo la constitucionalidad de esta cláusula.

¿Es constitucional incluir enseñanza religiosa en la escuela pública estatal?

En su art. 11 inc. e, el Anteproyecto define como "derecho" de los padres o tutores "que sus hijos reciban de manera opcional, en el ámbito de la educación pública de gestión estatal, educación religiosa

que les permita aprehender los valores y contenidos básicos de la creencia por la que hubieren optado”. En concordancia con ello, el art. 35 inc. c incluye entre los objetivos de la enseñanza primaria “brindar oportunidades equitativas a todos los niños” para el aprendizaje de diversos campos, incluyendo “a opción de los padres, la educación religiosa”.

Quienes impulsan esta redacción afirman que este derecho surge de la Constitución de la Provincia de Córdoba. La ley suprema local consagra (art. 62 inc. 5) el derecho de los padres “a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral, según sus convicciones”. La misma norma establece que “la educación pública estatal” debe estar “exenta de dogmatismos”.

Mi análisis comienza con este interrogante: ¿es coherente este artículo con la CN? Toda constitución provincial debe adecuarse a ella (CN, art. 31).

Como conclusión, entiendo que la respuesta es negativa. Nuestro país no tiene religión oficial. Sólo provee sostén financiero a un culto en particular (art. 2). En cambio, Argentina protege la libertad de cultos (arts. 14 y 20) y preserva la esfera privada como una zona libre de la injerencia estatal (art. 19). El art. 13 inc. 3 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consagra dos derechos de los padres y tutores. El primero es el de “escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas”, siempre que cubran los requisitos académicos. El segundo derecho es el de “hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Ninguno de los dos derechos obligan, en ningún caso, a brindar la “educación religiosa o moral” dentro de la enseñanza pública estatal, entendida como el proceso oficial de transmisión y elaboración de conocimientos.

La Constitución cordobesa otorgó al Estado provincial la atribución de introducir la enseñanza religiosa en el ámbito de la escuela estatal. Esto implica una indebida restricción a la libertad religiosa y la libertad de conciencia, ya que pone al Estado en la tarea de promover creencias frente a las que debe guardar una respetuosa neutralidad. De lo contrario, la promesa de libertad de cultos se vería vaciada de efectos, por permitir una injerencia estatal en un área confiada a la privacidad de las personas. Aunque se haya consagrado bajo la forma de un “derecho” (de los padres), éste no puede reconocerse frente a la libertad de cultos y de conciencia consagrada sin restricciones en la CN, que tiene jerarquía superior. Los “derechos no enumerados” del art. 33 de la CN no pueden definirse como un recorte a los otros derechos consagrados expresamente.

Por lo tanto, el art. 62 inc. 5 de la Constitución de Córdoba, en el tramo en que permite al Estado intervenir en la formación religiosa, resulta inconstitucional por contradecir la ley suprema federal.

Corresponde eliminar del Anteproyecto las referencias incluidas en los arts. 11 y 35, sin que sea necesario para ello una reforma constitucional provincial. En efecto: si algún ciudadano considerara afectado su derecho, deberá plantearlo por la vía correspondiente, donde deberá defender la validez del art. 62 inc. 5 (en la parte correspondiente) a la luz de la Constitución nacional. Mientras tanto, la Legislatura cordobesa está obligada a sancionar normas coherentes con las normas superiores (en este caso, la CN).

Contradicción entre el Anteproyecto y su supuesta base constitucional local

De todas formas, el Anteproyecto no resulta coherente incluso con el art. 62 inc. 5, aun si aceptáramos sólo como hipótesis su validez. Como vimos, esta norma garantiza una “educación pública estatal” que debe estar “exenta de dogmatismos” y, a la vez, el derecho de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa o moral en la escuela pública estatal.

Ambas cláusulas parecen contradecirse: la educación religiosa o moral implica necesariamente la transmisión de afirmaciones dogmáticas, esto es, no sujetas a verificación empírica ni a una demostración racional. De lo contrario, se trataría de formación científica.

La aparente contradicción debería resolverse a través de una interpretación que armonice el texto en su conjunto. La única manera de lograrlo consistiría en distinguir entre “escuela estatal” y “educación pública estatal”, ya que la Constitución emplea estas dos expresiones y no una sola. La primera noción (“escuela estatal”) alude a la escuela como lugar físico, como un edificio perteneciente al Estado. En tanto, la segunda idea (“educación pública estatal”) se refiere a la enseñanza provista oficialmente por el Estado, al proceso de transmisión y discusión colectivas de conocimientos. A través de esta distinción, contenida en el texto, podría darse vigencia simultánea a todo el art. 62 inc. 5 sin incurrir en contradicciones.

Así, la “educación religiosa o moral”, que incluye afirmaciones dogmáticas, se impartiría en la “escuela estatal” entendida sólo como lugar o ámbito físico. Pero esa enseñanza religiosa o moral no se incluiría en la “educación pública estatal”, porque esta última no debe incluir dogmatismos.

En términos prácticos, la interpretación propuesta se traduciría así: la formación religiosa o moral podría brindarse en los edificios de las escuelas estatales, siempre y cuando los padres la requirieran para sus hijos. Pero debería hacerse fuera del horario de clases obligatorias, esto es, fuera del horario en que se imparte la “educación pública estatal”.

De todas formas, aun esta modalidad seguiría implicando una indebida intromisión del Estado en la libertad religiosa y de conciencia, derechos consagrados en la CN. Insisto: deben eliminarse las referencias a la enseñanza religiosa o moral en la educación pública. Ello no impide en absoluto que se desarrollen con la más amplia libertad las actividades destinadas a transmitir el acervo espiritual de las diversas confesiones o posturas morales. Queda garantizado también que los padres pueden elegir escuelas diferentes a las creadas por el Estado, que tengan orientación religiosa o moral específica. En estas escuelas, sin embargo, los dogmas transmitidos deberían limitarse a lo necesario para garantizar la formación buscada, sin extenderse a otras áreas del conocimiento.

La libertad de culto y conciencia tiene amplia protección en la Constitución provincial. La Constitución cordobesa consagra la libertad de cultos y de “profesión religiosa e ideológica” (art. 19 inc. 5), y establece que la Provincia resulta autónoma frente a la Iglesia Católica, con la que mantiene relaciones de cooperación (art. 6). No hay en la provincia ninguna religión oficial (como indebidamente se establece, por ejemplo, en la Constitución de Santa Fe, art. 3). Esto sirve de base para la libertad inviolable de religión y conciencia, establecida en el art. 5 de la Constitución cordobesa, donde también se garantiza que “nadie puede ser obligado a declarar la religión que profesa”. Esto brinda una razón de peso para entender que la “educación religiosa o moral” sólo podría impartirse fuera del horario de clases.

De lo contrario, esto forzaría a los niños que no desean recibirla a manifestar (por sí o a través de sus padres) cuál es su confesión (o la falta de alguna). Si eso ocurriera, se estaría violando el art. 5 de la ley suprema local.

Visión limitada de los derechos humanos. En este punto, hay que criticar el art. 4 inc. k, donde se fija como objetivo de la educación “[b]rindar una formación que promueva el derecho a la vida y su preservación”. Aquí no se comprende por qué se enfatiza la promoción de un solo derecho (la vida), dejando en un inaceptable segundo plano al resto de los derechos humanos.

Val la pena destacar que ni los tratados internacionales ni nuestra CN establecen jerarquías entre los derechos. De modo que no resulta constitucional la prioridad dada a un derecho sobre otros. Este inciso debería reformularse como “brindar una formación que promueva los derechos humanos y su preservación”.

4. El financiamiento de la educación.

El Anteproyecto remite a una “ley especial” la determinación de “los recursos con que contará el Sistema Educativo” y obliga a destinar para educación un mínimo del 30% del presupuesto ejecutado de la Provincia (art. 107). Debe prestarse suma atención a cómo y cuándo se discutirá esa “ley especial”; también hay que aclarar qué criterios se aplicarán mientras tanto, hasta que esa norma específica quede aprobada.

El mínimo del 30% del presupuesto debe conjugarse con el art. 9 de la LNE. Allí se exige que la inversión pública consolidada de todas las provincias más la ciudad de Buenos Aires y la Nación alcancen el 6% del PBI. En otras palabras, el mínimo provincial puede tener que elevarse en ciertos años para cumplir la meta de la LNE.

Garantías. En mi opinión, se necesitan garantías para exigir (incluso judicialmente) el cumplimiento de esa base presupuestaria. El Anteproyecto debería legitimar, por ejemplo, a gremios docentes, centros de estudiantes, legisladores, o al defensor del Pueblo para impugnar ante la Justicia la violación del límite. A través de esos mecanismos, se obligaría al Gobierno a respetar la pauta legal. De otro modo, el incumplimiento quedaría sin consecuencias.

Otros aportes y “cooperadoras”. El Anteproyecto mantiene (art. 3 inc. h) una pauta de la vigente ley 8113, según la cual el Estado “asegura en el presupuesto provincial los recursos suficientes para el financiamiento del sistema educativo” y permite “integra[r] aportes comunitarios, sectoriales [...]”. Para evitar que ello permita al Estado evadir sus responsabilidades, debería agregarse una cláusula que ponga en claro que esos aportes no pueden destinarse a cubrir gastos corrientes. Sí podrían utilizarse, por ejemplo, para construir laboratorios especiales, financiar proyectos especiales, adquirir maquinarias o colecciones bibliográficas específicas, u otras erogaciones extraordinarias.

Las instituciones de gestión estatal, según el Anteproyecto, promoverán “la participación de la comunidad a través de la cooperación escolar” (art. 101 inc. h), concretada en organismos de apoyo que podrán “movilizar, captar y administrar medios y recursos” (art. 105). Una vez más, aquí debe aclararse que la cooperadora no puede solventar gastos corrientes, para preservar la gratuidad, y para impedir que el Estado transfiera su responsabilidad a las familias.

5. La participación estudiantil y el gobierno de las instituciones

Se reconoce el derecho del alumnado a asociarse en centros de estudiantes (art. 12 inc. e).

Quizá convendría establecer la existencia obligatoria de los centros, a fin de evitar que presiones o restricciones impidan su formación. Algo similar ocurre con otros derechos políticos: por ejemplo, el ejercicio del derecho al voto es obligatorio en la Argentina (CN, 37). El ministro de Educación sostuvo, en su momento, que no se puede obligar a las escuelas a tener centros de estudiantes (Día a Día, 03/10/2010). Por supuesto, si no hay absolutamente ninguna voluntad de crearlo, no habrá ley que

remedie esto. Sin embargo, fijar la obligación como regla no impide crear algunos mecanismos para las excepciones. Por ejemplo, podría fijarse una consulta anual a los alumnos acerca de la creación del Centro (con voto secreto, como un referéndum). Si la mayoría opta por no tener un centro, la institución podría considerarse eximida de la obligación legal.

Asegurar la participación estudiantil resulta importante. En particular, porque el Anteproyecto elimina los Consejos consultivos de cada institución educativa, previstos en la ley 8113 y nunca implementados.

En mi opinión, estos Consejos deberían mantenerse en la próxima ley de educación, para ponerlos en marcha definitivamente. Dotarlos de presupuesto y crear mecanismos de formación para sus integrantes tendrá, seguramente, un impacto efectivo en su existencia real.

6. El gobierno del sistema educativo

En principio, el Ministerio de Educación tiene a su cargo “la planificación, organización, gobierno, administración y fiscalización generales” del área educativa (art. 85), con el principio de “centralización política y administrativa”.

Se incorpora, sin embargo, un órgano consultivo (art. 91): el Consejo Provincial de Políticas Educativas. Está integrado (art. 89) con representantes de:

- el Ministerio de Educación,
- el Ministerio de Ciencia y Tecnología,
- las universidades públicas y privadas con sede en Córdoba,
- las entidades gremiales del sector educativo,
- los Poderes Legislativo y Judicial,
- las entidades representativas de las instituciones educativas de gestión privada,
- y “distintos organismos comprometidos con la temática”, a quienes el ministro de Educación podrá invitar.

En mi opinión, debe eliminarse el último tramo del artículo, ya que abre la posibilidad de ampliar la integración del Consejo y no fija criterios precisos (el “compromiso” con la educación no brinda un límite claro).

También convendría discutir si el Ministerio debe dar más atribuciones a este Consejo, una vez que se establezca claramente su integración definitiva y cerrada.

Participación de las empresas. Como se deduce de la lectura del art. 89, no se prevé la participación de empresas, ni de asociaciones empresarias (salvo las universidades o escuelas privadas, si estuvieran constituidas como empresas; en general, adoptan la forma de fundaciones).

Podrían incorporarse a través del mecanismo de “invitación” ya criticado y que, precisamente por ello, debe eliminarse.

Las asociaciones empresarias y las entidades sindicales sí participan, en cambio, en el Consejo Provincial de Educación Técnica y Trabajo (art. 96), que también tiene funciones sólo consultivas.

7. La relación entre escuela y sistema productivo

El Anteproyecto impulsa distintas modalidades de vinculación entre las instituciones educativas y entidades estatales, sociales y productivas. En mi opinión, más allá de las dudas que puedan generar estas relaciones, lo crucial es preservar su sentido educativo. El centro debe ponerse en la persona y su derecho a la formación. No pueden orientarse a otros fines, como la consolidación de una empresa recuperada, la ganancia de una industria, o el desarrollo de una ONG.

En otras palabras, se trata de defender aquí también la autonomía del proceso educativo. Una motivación similar lleva a eliminar la formación religiosa en las aulas: se busca preservar la lógica educativa frente a las necesidades de los distintos cultos. En esta área, resulta necesario proteger esa misma lógica de la formación respecto de los intereses del sector productivo.

Cualquier regulación debe analizarse bajo este prisma: ¿se asegura adecuadamente el sentido pedagógico del vínculo propuesto? ¿Contribuye al cumplimiento de los fines de la educación, entendida en los tratados internacionales como un proceso destinado al desarrollo integral de la persona y de sus derechos?

En el nivel secundario, el Anteproyecto prevé la posibilidad de “prácticas educativas” que se llevan a cabo en “escuelas, empresas, organismos estatales, entidades culturales y gremiales”, para facilitar a cada estudiante “el conocimiento de las organizaciones, el manejo de tecnologías” y brindarle “experiencias adecuadas a su formación y orientación vocacional” (art. 40). Tienen una finalidad formativa y no se ejecutan sólo en empresas.

Las “prácticas profesionales intracurriculares” y las “pasantías laborales” existen como posibilidad en el nivel superior (art. 46). También tendrán “propósito formativo y garantía de planificación y acompañamiento docente”. La obligatoria participación docente refuerza el sentido de la actividad. Sin

embargo, nuevos mecanismos ayudarían a asegurarlo. Por ejemplo, un consejo institucional integrado con docentes y estudiantes puede controlar la debida ejecución de prácticas y pasantías.

La educación técnico-profesional. El Anteproyecto establece esta modalidad de enseñanza (art. 60 y siguientes). Cabe señalar que la enseñanza técnico-profesional (al menos secundaria) aparece como un derecho específico en el art. 13 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dotado de jerarquía constitucional. Además, existe una Ley Nacional de Educación

Técnica (LNET), aprobada como ley 26.058 el 7 de septiembre de 2005. En su art. 56, la LNET invita a las Provincias a adecuar su legislación a esa norma.

Córdoba, entonces, podría no regular la educación técnica. Simplemente podría remitir a la LNET. De hecho, fue la primera solución adoptada. El 20 de octubre de 2008, la Legislatura aprobó la ley 9511, por la que la Provincia adhirió a la ley nacional.

Pero el Anteproyecto elige incorporar un capítulo sobre esta cuestión. Define a la educación técnico-profesional como "responsable de la formación de técnicos medios y técnicos superiores en áreas ocupacionales específicas y de la formación profesional, promoviendo en sus integrantes el aprendizaje de capacidades conocimientos, habilidades, destrezas, valores, principios éticos y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socioproductivo y para su inserción como ciudadano pleno". Esta modalidad se prevé para educación media y superior. Lamentablemente, no incorpora dentro de la definición "conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría", lo que sí está incluido en la definición adoptada por la LNET (art. 4).

En el Anteproyecto, esta modalidad prevé vínculos específicos con el sector productivo. Las instituciones podrán constituir "cuerpos consultivos o colegiados donde estén representadas las comunidades educativas y socioproductivas" (art. 62 inc. d). En este punto, el texto debería modificarse, para que estos cuerpos no puedan imponer sus decisiones a las instituciones educativas. De lo contrario, queda alterado el principio democrático: los sectores económicos como tales no tienen legitimidad para gobernar. Estos cuerpos deberían tener funciones únicamente consultivas.

También se habilita a las instituciones para "generar proyectos educativos que propicien, en el marco de la actividad educativa y previa aprobación de la autoridad ministerial, la producción de bienes y servicios con la participación de alumnos y docentes, a través de talleres, laboratorios, pasantías, proyectos productivos articulados con otras instituciones, proyectos didácticos/productivos institucionales orientados a satisfacer necesidades del medio socio-cultural o de la misma institución, micro-emprendimientos a cargo de alumnos, desarrollo de actividades técnico-profesionales, empresas o instituciones productivas simuladas y/o cualquier otra modalidad pedagógico-productiva que se implemente" (art. 62 inc. e). En otras palabras, el Anteproyecto abre una gama, cuyo desarrollo extremo puede tener consecuencias preocupantes. La idea de una escuela que produce bienes se parece demasiado a una empresa; un proyecto productivo que atienda las necesidades de la institución puede permitir al Estado evadir sus responsabilidades de financiamiento.

Por esto tiene importancia la segunda parte del art. 62 inc. e, donde se establece que todas estas actividades tendrán el propósito de que los estudiantes "consoliden, integren y amplíen las competencias y saberes que corresponden con el perfil profesional en el que se están formando, referenciadas en situaciones de trabajo desarrolladas dentro o fuera del establecimiento educativo".

A su turno, el Ministerio adopta (art. 65) la función de "regular la vinculación entre el sector productivo y la Educación Técnico Profesional", promoviendo convenios con diversos actores, desde empresas y organizaciones no gubernamentales hasta empresas recuperadas, sindicatos y cooperativas, además de entes públicos como la CNEA y Universidades.

Para las prácticas educativas fuera de la escuela "se garantizará la seguridad de los alumnos y la auditoría, dirección y control a cargo de los docentes"; se reitera que son "procesos de aprendizaje y no de producción a favor de los intereses económicos que pudieran caer a las empresas", por lo que nunca los alumnos pueden tomar el lugar de los trabajadores de la empresa (art. 66), ni tampoco asumir "que excedan el sentido pedagógico de los proyectos" o quedar "expuestos a cualquier forma de trabajo informal" (art. 64).

Estas definiciones contribuyen a limitar los alcances del vínculo entre escuela y sector productivo. Sin embargo, considero necesaria la creación de mecanismos de control y garantía: no basta, en esta materia, la declaración. Una vez más, los consejos escolares podrían ofrecer una instancia para seguir de cerca el desarrollo concreto de estas relaciones, protegiendo la autonomía del proceso educativo frente a otras lógicas e intereses. Hay que incluir dentro de la ley los límites de tiempo para las prácticas y pasantías estudiantiles. Fijando un plazo breve para que se cumplan los objetivos pedagógicos, se evitará que estas actividades permitan el aprovechamiento indebido de la tarea cumplida por alumnas y alumnos.

Beneficios. Cuando la tarea se realice dentro de la escuela, el Anteproyecto confiere al Ministerio de Educación la facultad de autorizar a la institución "el manejo autónomo del propio producido" (art. 64).

Creo que sería positivo fijar como regla que los emprendimientos en escuelas sean sin fines de lucro (luego de cubrir sus gastos). También parece conveniente que el producido (una vez atendidos los

gastos) se destine a un fondo común que se distribuya entre los institutos técnicos y no técnicos. De esta forma, se elimina el incentivo económico en las decisiones de las escuelas: sólo razones pedagógicas entrarían en la discusión. Podría crearse algún mecanismo para admitir excepciones que el Ministerio deba autorizar.

Formación en derechos laborales. A lo largo del Anteproyecto, se omite la educación en materia de derechos laborales. Esto resulta llamativo ante la reiterada insistencia en que los estudiantes se pongan en contacto con el mundo del trabajo. Desde hace más de un siglo, la relación laboral incluye, necesariamente, la defensa de los derechos de las personas que trabajan.

En esto el Anteproyecto se aleja de la LNET. En efecto: esta norma fija como un objetivo de la educación técnica “crear conciencia sobre los derechos laborales” (art. 6 inc. j). La omisión cordobesa resulta, entonces, más estridente. Sobre todo, porque los objetivos de la educación (art. 4) incluyen la educación vial y la educación ambiental, entre otros temas.

Por ello, corresponde incorporar como un objetivo de la educación en general (y especialmente, en la técnica) la adecuada y completa formación en los derechos laborales, con conocimiento completo de los procedimientos y vías disponibles para trabajadores y trabajadoras.

8. A modo de síntesis

El Anteproyecto merece una discusión amplia y una revisión profunda en algunos aspectos, incluyendo:

- la eliminación de la educación religiosa o moral dentro de la enseñanza pública estatal (arts. 11 y 35),
- la garantía del financiamiento comprometido (art. 107),
- la limitación del rol de las cooperadoras a cubrir gastos no corrientes (art. 105),
- la garantía de la participación estudiantil (art. 12) y el mantenimiento de los consejos escolares con mecanismos para su implementación concreta,
- el cierre del Consejo de Políticas, eliminando las “invitaciones” (art. 89),
- la revisión del capítulo sobre educación técnico-profesional (arts. 60 y siguientes), coordinándolo con la LNET y reformulándolo a la luz de los objetivos pedagógicos,- la regulación de los emprendimientos permitidos para las escuelas (art. 62 inc. e), fijando como regla general el funcionamiento sin fines de lucro e impulsando la redistribución de lo producido (art. 64),
- la fijación de mecanismos para controlar el sentido de las pasantías y prácticas, con fijación de límites temporales (art. 64), y la incorporación de la formación en derechos laborales como objetivo de la educación.

Córdoba, 3 de Noviembre de 2010.

Córdoba, 7 de Diciembre de 2010.

**A la
Presidenta de la Comisión de
Educación, Ciencia y Tecnología
Legislatura Provincial
Legisladora Evelina Feraudo**
S / D

Como miembro Titular de la Comisión de Educación, y habiendo participado en esa condición en el Consejo de Políticas Educativas, deseo poner de manifiesto que la documentación elevada por el Ministerio de Educación sobre lo tratado en las escuelas, las producciones de Centros de Estudiantes Secundarios, y las participaciones de distintos actores e instituciones sociales en las audiencias públicas, han implicado numerosos aportes que reclaman:

1- Producir modificaciones en el articulado atendiendo a cuestiones sensibles a amplios sectores de la ciudadanía que han manifestado su desacuerdo con diversos aspectos del proyecto de Ley de Educación 6480/L/10 y con su proceso de elaboración.

2- Realizar una lectura minuciosa de la legislación nacional y provincial comparada, para evitar vacíos y/o ambigüedades en la formulación del proyecto.

3- Corregir aspectos puntuales del articulado que entran en contradicción con la Ley de Educación Nacional o que requieren un mayor ajuste a las disposiciones legales nacionales, para evitar cualquier resquicio de inconstitucionalidad de la ley.

4- Enriquecer el texto del proyecto de ley con propuestas específicas que no fueron consideradas por el Consejo Provincial de Políticas Educativas.

También fue dominante en las audiencias el reclamo por diferir el tratamiento del proyecto, a fin de garantizar una amplia participación de estudiantes y padres junto a docentes, actores fundamentales del proceso educativo que vieron vulnerado su derecho, por no tener participación en el ámbito del Consejo, o no ser convocados a un profundo debate, con la garantía de tiempo y metodología que una ley fundamental como la educativa requiere.

Es mi convicción que la participación lleva tiempo, y hablar de tiempo hoy no es sinónimo de una intencionalidad dilatoria. Sencillamente, el fuerte conflicto social encarnado por estudiantes, padres y también docentes y directivos, demuestra que había y hay poco consenso en torno del proyecto,

fundamentalmente en el espacio plural de la educación estatal. El consenso que se declama es vacío, coyuntural, y pareciera no admitir la diversidad que todo consenso genuino supone.

Puede advertirse que si no se revierte la situación, la combinación entre el escaso consenso y el apremio por la sanción de la ley, traerá por consecuencia una ley que solo legitimará compromisos del poder político con corporaciones y ciertas jerarquías locales, compromisos en los que la sociedad está ausente. Una ley de educación no puede ser fruto del cálculo.

Herencia de los '90, asistimos en las audiencias públicas con estupor a increíbles presiones por equiparar lo privado y lo público. No estamos contra lo privado, pero vamos a defender la prioridad y predominio de lo público, como es deber de quienes defendemos las más igualitarias tradiciones argentinas en materia educativa.

Los nuevos horizontes de época indican que hay una demanda de más educación pública, de más calidad, y el proyecto y los fundamentos de su elevación, lamentablemente, quedan atrapados en compromisos con grupos de poder.

Es preciso advertir que el proyecto de ley avanza en algunos aspectos de importancia, como intentar saldar la histórica deuda del estado provincial producto de la desinversión educativa, deuda que se traza crudamente en los '90 sobre todo con el nivel inicial y la educación técnica. Sin embargo, no innova en sus principios y fundamentos, presenta resquicios por los que se sigue habilitando la lógica del mercado en el campo educativo, e invisibiliza nuevos derechos que hoy se expresan en la escena pública y llegan a tener reconocimiento legal, de lo que es un claro exponente la ley nacional de matrimonio igualitario.

Hemos visto en este tiempo como la lucha estudiantil fue descalificada, cuando en realidad era y es un buen síntoma, es que los estudiantes se asumen como sujetos de derechos, actores políticos que demandan más y mejor educación, y en ese movimiento, expresan también el sentir de una gran mayoría docente que en sus escuelas se expidieron por cambios de importancia en el proyecto de ley.

En una provincia como la nuestra, con la historia de luchas en defensa de lo público y de los intereses populares, nos merecemos el tiempo que sea necesario para construir horizontes educativos igualitarios, sin discriminación de ningún tipo y de avanzada. Aunque sabemos que una ley de educación no modifica necesariamente las condiciones reales de escolarización de los estudiantes, las condiciones laborales cotidianas de las y los maestros y profesores, directivos y supervisores, ni las complejas realidades a que se enfrentan en el presente, esa ley marca rumbos, que no pueden negar ni las mejores tradiciones educativas, ni su época.

Hoy es tiempo de tomar una decisión de genuina escucha de lo que se demanda. Es tiempo de priorizar el interés mayoritario. Sigo en esta instancia expresando mi clara voluntad y la del espacio político en que me inscribo -como la de muchos y muchas que se han expresado en diferentes espacios- de aportar a la modificación del proyecto de ley reclamando un debate más profundo en la legislatura y en las escuelas, para que llegue a alcanzar la legitimidad social y jurídica que amerita.

En ese sentido, y como no es nuestra vocación formular críticas sin propuesta, adjunto aportes para la modificación de los temas más críticos del proyecto que intentan expresar algo de ese interés mayoritario en defensa de la educación pública, laica, gratuita y de calidad, y que se exponen al debido debate.

CC. Ministro de Educación de la Provincia.
Prof. Walter Grahovac

Legisladora Adela Coria
Frente Progresista

Propuesta de modificación de artículos del Anteproyecto de Ley de Educación Provincial
Nº 6480

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

CAPÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES Y FINES DE LA EDUCACIÓN
EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Sección Única:
Principios Generales y Fines de la Educación

ARTÍCULO 1.- La presente ley regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender en el territorio de la provincia de Córdoba, conforme a los principios establecidos en la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella, en la Constitución Provincial, en la Ley de Educación Nacional y en la presente Ley.

ARTÍCULO 2. Fundamentos.

- La educación y el conocimiento **son bienes públicos** y constituyen **derechos personales y sociales**, garantizados por el Estado.

- La educación se constituye en política de Estado prioritaria para contribuir a la construcción y desarrollo de una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo cultural, económico, político y social de la Provincia.

- El Estado Provincial no suscribirá tratados de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública.

ARTÍCULO 3.- Ámbito de Aplicación.

Esta Ley rige la organización y administración del Sistema Educativo Provincial integrado por los siguientes tipos de establecimientos escolares:

- a) Instituciones de gestión estatal provincial.
- b) Instituciones de gestión estatal municipal, reguladas por el ARTÍCULO 106 de esta Ley.
- c) Instituciones de gestión privada autorizadas.
- d) Instituciones de gestión cooperativa y de gestión social.

ARTÍCULO 3.- Principios Generales.

La política educativa, en cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Provincial, se regirá por los siguientes principios generales:

- a) La educación es responsabilidad principal, indelegable, obligatoria y permanente del Estado Provincial, quien establece y supervisa la política del sector.
- b) Se reconoce a las familias el derecho fundamental de educar a sus hijos y de escoger el tipo de educación más adecuado a sus propias convicciones.
- c) Se reconoce a las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades, por motivos de solidaridad y en ejercicio de la democracia participativa, el derecho a ser parte activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías previstos en la presente ley.
- d) Todos los habitantes de la Provincia tienen derecho a la educación para favorecer su desarrollo integral como sujetos de derechos en un marco de libertad y convivencia democrática. Es responsabilidad del Estado garantizar el ejercicio de este derecho en igualdad de oportunidades y sin discriminación de ningún tipo.
- e) Todos los habitantes de la Provincia tienen, así mismo, derecho a acceder a los más altos niveles de formación, investigación y creación.
- f) La educación de gestión estatal es común, integral, permanente, gratuita y exenta de dogmatismos de cualquier signo. La educación de gestión privada, cooperativa y social es común, integral, permanente y exenta de dogmatismos de cualquier signo en la enseñanza de saberes obligatorios y comunes para todas las escuelas.
- g) El Estado garantiza, en el ámbito educativo, el respeto a los derechos de los niños y adolescentes establecidos en la Ley Nº 26.061.
- h) El Estado reconoce, asimismo, la libertad de las personas, asociaciones y municipios de crear y gestionar instituciones educativas ajustadas a los principios de la Constitución y a esta Ley, de modo complementario y no supletorio de la responsabilidad estatal. En ningún caso este reconocimiento supondrá la delegación de la obligación de sostenimiento de las escuelas de gestión estatal en todo el territorio provincial.
- i) El Estado provincial garantiza los recursos necesarios para el financiamiento del Sistema Educativo conforme a las previsiones de la presente ley en su ARTÍCULO 107 y a las metas establecidas en la Ley nacional 26075 o la que en el futuro la reemplace, y otros aportes nacionales. Podrá integrar con igual fin aportes comunitarios y sectoriales, que no deberán aplicarse a gastos corrientes ni implicar contraprestaciones de ninguna naturaleza.

ARTÍCULO 4.- Fines de la Educación.

La educación en la Provincia de Córdoba, de acuerdo con los principios y valores de su Constitución, se dirigirá al cumplimiento de los siguientes fines:

- a) La formación integral que desarrolle todas las dimensiones de la persona y habilite para la integración reflexiva, crítica y transformadora, tanto en los contextos socioculturales que habitan, en la vida social, cultural y política, en la continuidad de estudios superiores y la formación permanente, como en la inserción en el mundo del trabajo y el desarrollo socio-productivo.
- b) La formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural, conscientes de sus libertades y derechos y responsables de sus obligaciones cívicas, capaces de contribuir a la consolidación del orden constitucional; a la configuración de una sociedad democrática, justa y solidaria.
- c) La comprensión de los saberes y desarrollos humanísticos, científicos, artísticos, técnicos y tecnológicos y su aporte al mejoramiento permanente de la calidad de vida individual y colectiva, y a la participación reflexiva en la sociedad contemporánea.
- d) La conservación y recreación de los valores culturales que cimientan la identidad y unidad nacional y latinoamericana, con apertura a las culturas de los pueblos, a los valores universales, y la promoción y creación de las expresiones culturales de las diversas comunidades que residen en territorio provincial.
- e) Asegurar el pleno reconocimiento a los pueblos originarios y las comunidades migrantes, garantizando el respeto a su lengua y a su identidad cultural, y promoviendo la valoración de la interculturalidad en la formación de todos los alumnos.

f) Brindar a las personas con discapacidades, temporales o permanentes, propuestas pedagógicas que permitan el desarrollo de sus posibilidades, la integración social y el pleno ejercicio de sus derechos.

g) La formación para la comprensión, la cooperación y la paz entre las naciones y la educación relativa al respeto irrestricto de los derechos humanos y libertades fundamentales, de rango constitucional.

h) La educación incorporará obligatoriamente en todos los niveles educativos y modalidades:

- el estudio de la Constitución Nacional –en particular, la causa de la recuperación de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, de acuerdo a lo prescripto en su disposición transitoria primera- y de la Constitución Provincial, sus normas, espíritu e instituciones;

- el ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de estado, con el objeto de generar en los/as alumnos/as reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos, en concordancia con lo dispuesto por la Ley 25.633 y lo dispuesto en la ley provincial 9286;

- el ejercicio y construcción de memoria colectiva en relación con los crímenes del holocausto judío y armenio, según ley provincial, y toda otra forma de genocidio (palestino, y pueblos originarios de América entre los fundamentales).

- el fortalecimiento de la perspectiva regional latinoamericana, particularmente de la región del MERCOSUR, en el marco de la construcción de una identidad nacional abierta, respetuosa de la diversidad;

- el conocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061;

- el conocimiento de la diversidad cultural de los pueblos originarios y sus derechos;

- los contenidos y enfoques que contribuyan a generar relaciones basadas en la igualdad, la solidaridad y el respeto entre los sexos, en concordancia con la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de discriminación contra la Mujer, con rango constitucional, y las leyes 24632 y 26071;

- El conocimiento de principios y valores del cooperativismo y mutualismo en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en concordancia con los principios y valores establecidos en la ley 16.583;

i) Garantizar una educación sexual integral, en todos los niveles y modalidades del sistema, en acuerdo a la ley nacional 26150.

j) Brindar una formación que asegure condiciones de igualdad, sin admitir discriminación de ningún tipo, por condición u origen social, de género o étnica, ni por nacionalidad ni orientación cultural, sexual, religiosa o contexto de hábitat, condición física, intelectual o lingüística.

k) Asegurar una formación corporal, motriz y deportiva que favorezca la asunción de hábitos de vida saludable, el logro de una salud integral, la prevención de adicciones y el uso indebido de drogas.

l) La formación que posibilite la autodeterminación y el compromiso con la defensa de la calidad de vida, el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, y la concientización crítica de los procesos de degradación socio-ambiental y el cuidado del medio ambiente y la diversidad biológica.

m) Brindar una formación que garantice una educación artística integral de calidad desarrollando capacidades específicas interpretativas y creativas vinculadas a ese campo de conocimiento, sus distintos lenguajes y disciplinas contemporáneas, que estimule la creación, el gusto y la comprensión de las distintas manifestaciones del arte y culturales en general, en todos los niveles y modalidades del sistema.

n) Desarrollar saberes y capacidades para la comprensión de la realidad creada por los medios de comunicación, y promover la apropiación crítica de los nuevos lenguajes y la producción de conocimientos vinculados a las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo de las capacidades cognitivas, expresivas, creativas y comunicativas, individuales y colectivas.

CAPÍTULO II DERECHO A LA EDUCACIÓN

Sección Primera: Responsabilidad del Estado

ARTÍCULO 5.- Derecho a la Educación. Garantías.

El Estado garantiza la igualdad de oportunidades y posibilidades educacionales asegurando condiciones equitativas para el acceso, permanencia y promoción de los alumnos en todos los niveles y modalidades.

A fin de cumplir con esta responsabilidad sostendrá el sistema educativo en todo el territorio provincial e impulsará el mejoramiento de la calidad de la educación.

Proveerá, asimismo, políticas universales de inclusión educativa y protección integral de los niños, jóvenes y adultos, en especial cuando se encuentren en situaciones socioeconómicas desfavorables.

Atendiendo a problemáticas históricas y otras emergentes en la contemporaneidad:

- Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar el acceso y la permanencia en la escuela de las alumnas en estado de gravidez, así como la continuidad de sus estudios luego de la maternidad, evitando cualquier forma de discriminación que las afecte, en concordancia con el ARTÍCULO 17 de la ley 26061, junto con la participación de organismos gubernamentales y no gubernamentales y otras organizaciones sociales.

- Se promoverán la inclusión de niños/as no escolarizados/as en espacios escolares no formales como tránsito hacia procesos de reinserción escolar plenos.
- Se participará de las acciones preventivas para la erradicación efectiva del trabajo infantil que implementen los organismos competentes.
- Se garantizará en los diferentes niveles y modalidades del sistema el acceso igualitario a todos los recursos tecnológicos necesarios para la inclusión en la sociedad del conocimiento, en cumplimiento del ARTÍCULO 88 de la LEN.

ARTÍCULO 6.- Generalización del ejercicio del Derecho a la Educación

El Estado impulsará la generalización del ejercicio del derecho a la educación entre los sectores menos favorecidos de la sociedad, rurales y urbanos, instrumentando a tal efecto políticas especiales dirigidas a la atención educativa e integración social. Generará y promoverá diversos medios y acciones para la educación permanente, la alfabetización, y la formación humanística, científica, artística, técnica y tecnológica, la capacitación laboral y profesional, y la formación docente, orientados según las necesidades de los contextos sociales regionales y locales.

Sección Segunda:

Derechos y Deberes en la Educación

ARTÍCULO 7.- Derechos y deberes de los Docentes.

Derechos:

- x) A ejercer la docencia a personas sordas o con otras situaciones o diferencias en las condiciones físicas y de otro tipo - hasta hoy excluidas-, a partir de la consideración de nuevos conocimientos científicos y pruebas internacionales que modifican radicalmente las opciones de estas personas por los estudios superiores. Para ello se considerarán capacitaciones específicas.
- f) Al mantenimiento de su estabilidad en el cargo, de conformidad con la normativa provincial y nacional vigente.

ARTÍCULO 11.- Derechos y deberes de los Padres.

Los Padres, o quien los sustituyeren legalmente, tienen, sobre la educación de sus hijos, los siguientes:

Derechos:

- a) A ser reconocidos como agentes naturales y primarios de la educación y al ejercicio pleno de la patria potestad.
- b) A elegir para sus hijos o representados/as, la institución educativa cuyo ideario responda a sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas.
- c) A que sus hijos reciban una educación conforme a los principios y fines de la Constitución y la presente Ley, con la posibilidad de optar por la modalidad y orientación según sus convicciones.
- d) A que sus hijos reciban, en el ámbito de la educación pública, una enseñanza general, común y obligatoria exenta de dogmatismos que pudiera afectar las convicciones personales y familiares.
- e) A ser informados en forma regular y periódica de la evolución y resultados del proceso educativo de sus hijos.
- f) A participar en las actividades de los establecimientos educativos en forma individual o a través de las cooperadoras escolares y los órganos colegiados representativos, en el marco del proyecto educativo institucional.
- g) A participar en el planeamiento del Proyecto Educativo Institucional.

ARTÍCULO 12.- Derechos y Deberes de los Alumnos.

- e) De acuerdo a las edades,
 - A asociarse para participar en el funcionamiento de las instituciones educativas, a través de asociaciones, consejos, clubes de infancia de acuerdo con lo dispuesto por las reglamentaciones institucionales que al efecto se dicten.
 - A asociarse para participar en el funcionamiento y órganos colegiados en las instituciones educativas a través de centros de estudiantes, a dictar sus propias normas de funcionamiento y a integrar instancias organizativas que los articulen.
- g) Participar en la toma de decisiones sobre la formulación de proyectos y en la elección de espacios curriculares complementarios que propendan a desarrollar mayores grados de responsabilidad y autonomía en su proceso de aprendizaje.
- j) Contar con cobertura de seguro obligatorio.

**TÍTULO SEGUNDO
EL SISTEMA EDUCATIVO**

**CAPÍTULO I
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA EDUCACIONAL**

Sección Primera:

Principios de Organización del Sistema Educativo

ARTÍCULO 14.- El Sistema Educativo Provincial.

Institúyese el sistema educativo provincial integrado orgánicamente por las instituciones educativas de gestión estatal y privada, de gestión cooperativa y de gestión social, insertas en el marco político-institucional del Estado, y que se organiza conforme los principios y estructura establecidos por esta Ley para dar cumplimiento a sus fines y objetivos.

ARTÍCULO 16.- Principios Políticos de Organización del Sistema.

c) Establecen las grandes líneas de política educativa y aseguran el cumplimiento de los objetivos del sistema, articulando orgánicamente su gobierno y administración, con el objeto de garantizar las acciones propuestas.

d) Adecuan la oferta educativa a las características de las distintas regiones de la Provincia, respetando sus pautas ecológicas y socio-culturales y promoviendo el despliegue de sus potencialidades.

ARTÍCULO 17.- Funcionalidad del Sistema Educativo Provincial.

d) La apertura y flexibilidad, de modo de entablar una fluida y dinámica interrelación con las condiciones, peculiaridades y necesidades del contexto social, cultural y económico en el que se insertan los establecimientos escolares.

Sección Segunda: Lineamientos Pedagógicos Generales

ARTÍCULO 19.- Calidad de la Educación.

d) Asignando equitativamente los recursos físicos y financieros destinados a mejorar la infraestructura, el equipamiento escolar y la dotación y fortalecimiento de bibliotecas escolares.

e) Promoviendo la producción de materiales educativos en lenguaje audiovisual, multimedial e hipertextual.

ARTÍCULO 20.- Evaluación e Información.

Las autoridades del sector establecerán diferentes formas y mecanismos de evaluación y de control de gestión de los procesos educativos planificados, y de sus resultados, así como también de sus costos en los diferentes niveles, servicios y localizaciones.

Instrumentará un sistema de información ágil y eficaz para guiar la toma de decisiones de política educacional, retroalimentar su planificación, proveer a su adecuado financiamiento, controlar su ejecución y contribuir a regular equitativamente la calidad de las acciones educativas que se desarrollen.

El Ministerio de Educación informará anualmente a la Legislatura Provincial el estado de la gestión educativa y los criterios y mecanismos de evaluación y de control de gestión aplicados a los procesos educativos planificados, sus resultados y costos en los diferentes niveles, servicios y localizaciones. Dicho informe será publicado en la página web del Ministerio de Educación.

ARTÍCULO 22.- Criterios de Orientación Pedagógica.

Los centros educativos de la Provincia deben desarrollar los procesos de enseñanza - aprendizaje en los diferentes niveles y modalidades del sistema, según los siguientes criterios generales:

a) El respeto por las características individuales y socio-culturales de los alumnos, sus valores integrales, la consideración de sus capacidades, conocimientos, **saberes y** experiencias previas de aprendizaje.

c) Los docentes deben orientar los aprendizajes con criterio pedagógico y científico en un ambiente propicio para la participación activa y creadora, promoviendo el desarrollo del pensamiento crítico, la identidad nacional y latinoamericana, la responsabilidad cívica y la formación ética de los educandos, en un marco democrático y solidario.

d) Las estrategias de enseñanza se deben planificar con el propósito de facilitar a los alumnos el logro de **saberes, capacidades y** actitudes necesarias y relevantes que posibiliten construir su autonomía y orientarse en opciones vocacionales que impliquen su proyecto de vida.

CAPÍTULO III ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO

Sección Primera: Estructura General del Sistema

Apartado Primero: Disposiciones Generales

ARTÍCULO 23.- Estructura de los Servicios Educativos.

La educación sistemática se estructura en niveles, ciclos, modalidades y otras formas educativas. Los niveles son las etapas que configuran organizativamente la educación formal, compuesta por un conjunto de saberes cuya enseñanza debe adaptarse flexiblemente para su apropiación en diferentes momentos del proceso evolutivo de los alumnos. Los niveles podrán subdividirse en ciclos, entendidos como unidades formativas articuladas en cada uno de ellos.

Son niveles del sistema educativo provincial la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria y la educación superior.

Las modalidades son opciones organizativas y/o curriculares de la educación común, dentro de uno o más niveles educativos que procuran dar respuesta a requerimientos específicos de formación y atender particularidades de carácter permanente o temporal, personales y o contextuales, con el

propósito de garantizar la igualdad en el derecho a la educación y cumplir con las exigencias legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles educativos, según el ARTÍCULO 17 de la Ley 26206 atendiendo a su vez las necesidades sociales, regionales y económicas de la Provincia. Son modalidades del sistema educativo provincial: la Educación Especial, la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, la Educación en Contextos de Privación de Libertad, la Educación Rural, la Educación Técnico Profesional, la Educación Artística, la Educación Domiciliaria y Hospitalaria y la Educación Intercultural Bilingüe.

ARTÍCULO 26.- Educación Obligatoria.

La obligatoriedad escolar se extiende desde la edad de 4 (cuatro) años hasta la finalización del nivel de Educación Secundaria.

Apartado Segundo:

La Educación Inicial

ARTÍCULO 27.- La educación inicial constituye la primera unidad pedagógica del sistema educativo provincial. Corresponde a los niños comprendidos en el período que se extiende entre los 45 días y los 5 años de edad. Será obligatoria, a partir de los cuatro años, según lo especifica el ARTÍCULO 26.

El Estado provincial garantiza la universalización del Nivel como su obligación y responsabilidad indelegable. Dicha universalización se alcanzará progresivamente en etapas. Se tenderá a universalizar las salas para niños/as de 3 (tres) años prioritariamente en zonas de vulnerabilidad social, según ARTÍCULO 111, inc. I a.

ARTÍCULO 28.- La educación inicial en la Provincia asegurará la formación integral y asistencia del niño orientándose a la obtención de los siguientes objetivos fundamentales:

a) Promover el aprendizaje y desarrollo de los niños como sujetos de derechos y partícipes activos/as de un proceso de formación integral, miembros de una familia y de una comunidad.

b) Promover en los niños la solidaridad, confianza, cuidado, amistad y respeto a sí mismo y los/as otros/as.

e) Desarrollar la capacidad de expresión y comunicación a través de los distintos recursos audiovisuales y multimediales y lenguajes, verbales y no verbales: el movimiento, la danza, el teatro, la música, la expresión plástica y la literatura.

k) Iniciarse en el proceso de educación sexual integral.

l) Garantizar la temprana concientización acerca de los procesos de degradación socio-ambiental y el necesario cuidado del medio ambiente.

m) Propiciar que los niños y cuyas madres se encuentren privadas de libertad concurren a jardines maternales, jardines de infantes y otras actividades recreativas, fuera del ámbito de encierro con el fin de asegurar su contacto con otras realidades y personas que los preparen para su vida fuera del ámbito de encierro. Disponer y articular, con los organismos e instituciones responsables, los medios para acompañar a las madres en este proceso.

ARTÍCULO 31.- La organización de la Educación Inicial tendrá las siguientes características:

a) Los jardines maternales atenderán a los niños desde los cuarenta y cinco (45) días a los dos (2) años de edad inclusive y los Jardines de Infantes a los niños desde los tres (3) a los cinco (5) años de edad inclusive. En función de las características del contexto se reconocen otras formas organizativas del nivel, como salas multiedades o plurisalas en contextos rurales o urbanos, salas de juego u otras, según lo establezca la reglamentación de la presente ley.

Apartado Tercero:

La Educación Primaria

ARTÍCULO 35.- La educación primaria contribuye decisivamente a la formación integral y asistencia del alumno, creando condiciones favorables para su activa integración familiar y socio-cultural. Sus objetivos son:

c) Brindar oportunidades equitativas a todos los niños para el aprendizaje de saberes significativos en los diversos campos del conocimiento, en especial la lengua y la comunicación, las ciencias sociales, la matemática, las ciencias naturales y el medio ambiente, las lenguas extranjeras, el arte, la ética, la educación física, la educación sexual integral, la tecnología; desarrollando la capacidad de transferirlas creativa y críticamente a situaciones de la vida cotidiana

h) Fomentar el desarrollo de la creatividad y la expresión, el placer estético y la comprensión, conocimiento y valoración de las distintas manifestaciones del arte y otras producciones culturales, incorporando el personal docente que tenga especificidad de formación y titulación de cada una de las artes.

ARTÍCULO 36.- Con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos fijados para este nivel por la presente Ley las escuelas primarias serán de jornada extendida o de doble jornada, creando las condiciones de infraestructura correspondientes y asegurando la designación de docentes en un todo de acuerdo a las condiciones estatutarias, en especial a la formación y titulación requerida para la enseñanza de saberes especializados.

Apartado Cuarto:

La Educación Secundaria

ARTÍCULO 39.- Los objetivos de la educación secundaria son:

x) Garantizar la plena escolarización para personas sordas o con otras situaciones o diferencias en las condiciones físicas y de otro tipo - hasta hoy excluidas en la escuela común-, a partir de la consideración de nuevos conocimientos científicos y pruebas internacionales que modifican radicalmente la consideración de las potencialidades de estas personas para los estudios secundarios y superiores.

x) Apoyar la plena inclusión estas personas, promoviendo estrategias adecuadas como el lenguaje de señas para las personas sordas en este nivel de la enseñanza.

e) Desarrollar las capacidades necesarias para la comprensión crítica, la producción y el trabajo colaborativo con los nuevos lenguajes y herramientas producidos en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación.

ARTÍCULO 40.- El Ministerio de Educación propiciará la vinculación de las instituciones educativas secundarias con el mundo de la producción, el trabajo y otros organismos según su orientación. En este marco podrán realizarse prácticas educativas en las escuelas, empresas, organismos estatales, entidades culturales y gremiales, que faciliten al alumno el conocimiento de las organizaciones, el manejo de tecnologías, los derechos laborales y le brinde experiencias adecuadas a su formación y orientación vocacional. En todos los casos estas prácticas tendrán carácter educativo y no podrán generar ni reemplazar ningún vínculo contractual o relación laboral. Podrán participar de dichas actividades los/as alumnos/as de todas las modalidades y orientaciones de la Educación Secundaria, mayores de dieciséis (16) años de edad, durante el período lectivo, por un período no mayor a tres (3) meses, con el acompañamiento de docentes y/o autoridades pedagógicas designadas a tal fin. En el caso de las escuelas técnicas y agrotécnicas, la vinculación de estas instituciones con el sector productivo se realizará en conformidad con lo dispuesto por los ARTÍCULOS 15 y 16 de la Ley N° 26.058.

Apartado Quinto:

La Educación Superior

ARTÍCULO 41.- La educación superior tiene como finalidad promover el progreso de la ciencia y de la cultura y proporcionar formación científica, profesional, humanista, artística y técnica en el más alto nivel, acorde con los avances científicos tecnológicos y las necesidades socio-culturales de la Provincia.- Comprenderá los estudios superiores y universitarios.

ARTÍCULO 44.- La educación superior de formación científica, humanista, técnica, y artística se organizará en carreras de duración variable, en función de múltiples especialidades, con regímenes flexibles que permitan una inserción activa y crítica en el mundo del trabajo en distintas especialidades acordes con las demandas sociales, culturales y económicas de la Provincia. Para las distintas opciones, se integrarán las TIC y los nuevos lenguajes como contenidos fundamentales trabajados transversalmente.

ARTÍCULO X.- El ingreso a la formación docente será irrestricto para personas sordas o con otras situaciones o diferencias en las condiciones físicas o de otro tipo –hasta hoy excluidas- a partir de la consideración de nuevos conocimientos científicos y pruebas internacionales que modifican radicalmente las opciones de estas personas por los estudios superiores.

ARTÍCULO 45.- El Ministerio de Educación debe desarrollar políticas de articulación entre las Instituciones de educación superior de su dependencia y promover la articulación con las Universidades a fin de facilitar el cambio de modalidad, orientación o carrera, la continuación de los estudios en otros establecimientos, la reconversión de los estudios concluidos, tanto en la formación inicial como en la formación continua, promoviendo la no superposición de opciones formativas entre las mismas.

ARTÍCULO 46.- El Ministerio de Educación debe propiciar la firma de convenios de colaboración mutua entre las autoridades educativas con el sector de la producción y el trabajo a fin de favorecer la realización de prácticas profesionales intracurriculares y/o pasantías laborales de los estudiantes con propósito formativo y garantía de planificación y acompañamiento docente. Queda expresamente prohibida la promoción directa o indirecta de intereses sectoriales, que alienten el lucro privado.

Apartado Segundo:

La Educación Permanente de jóvenes y adultos

ARTÍCULO 55.- La organización Curricular e Institucional de la Educación de Jóvenes y Adultos responderá a los siguientes objetivos y criterios:

k) Desarrollar las capacidades necesarias para la comprensión crítica, la producción y el trabajo colaborativo con los nuevos lenguajes y herramientas producidos en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación.

Apartado Cuarto:

La Educación Rural

ARTÍCULO 58.- La Educación Rural corresponde a la modalidad y contenidos del sistema educativo destinados a garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria y de calidad así como la permanencia de los estudiantes en el sistema a través de formas y medios adecuados a las necesidades reales y particularidades de las comunidades que habitan en zonas rurales.

ARTÍCULO 59.- La educación rural se desarrollará conforme los siguientes criterios y objetivos:

a) El enfoque global del proceso educativo que partiendo del conocimiento y reconocimiento de la educación y realidad campesina, local y regional, articule los distintos niveles de enseñanza, la vida cotidiana, el trabajo y la producción. En donde la experiencia cotidiana tenga al trabajo productivo y a la vida comunitaria como principales pilares del desarrollo.

b) La participación de las familias, las comunidades y las organizaciones territoriales en la definición de contenidos, propuestas curriculares-pedagógicas y materiales, promoviendo diseños institucionales que permitan a los alumnos mantener los vínculos con su núcleo familiar y su medio local de pertenencia, generando condiciones materiales y estrategias que permitan a la familias campesinas mantenerse dignamente en el territorio.

c) La aplicación de modelos de organización escolar adecuados a las necesidades reales de las comunidades, en el marco de las diferentes opciones institucionales, en particular, la gestión social y

cooperativa prevista en el ARTÍCULO 3º inc. d, de la presente Ley. Para este tipo de establecimientos la estructura y funcionamiento de cada institución será gestionada, administrada y gobernada por los actores locales integrando a organizaciones del territorio. Se incorporarán, según cada contexto, diversas modalidades como agrupamientos de instituciones, salas plurigrados y grupos multiedad, instituciones que abarquen varios niveles en una misma unidad educativa, escuelas de alternancia, escuelas itinerantes u otras.

d) La creación de condiciones que garanticen la escolarización de calidad de los estudiantes, la accesibilidad, permanencia y egreso, a través de becas, comedores escolares, transporte público, mejoramiento de caminos, salud, bibliotecas escolares, acceso y apropiación crítica de las TICs en los procesos de aprendizaje, flexibilidad y amplitud de las modalidades institucionales y de cursado.

e) El accionar intersectorial coordinado de los agentes de los distintos servicios con las comunidades rurales, integrando redes intersectoriales con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a fin de coordinar la cooperación de los distintos sectores para poder brindar así un servicio eficiente y de calidad.

f) El reconocimiento, valoración y recuperación de los modos de producción de los conocimientos, valores y expresiones culturales locales.

g) El estímulo a la participación y formación de organizaciones sociales representativas, contribuyendo al enfoque democrático y al desarrollo socio-territorial de su actividad.

h) La formación docente en IFD deberá integrar propuestas (materias, seminarios, módulos) y herramientas teórico-metodológicas para la educación en contextos rurales. Se fomentarán experiencias piloto en formación de maestros campesinos, generando los mecanismos para su reconocimiento oficial y su efectiva inserción laboral en el territorio.

i) El reconocimiento oficial de tutores comunitarios que puedan desarrollar tareas de seguimiento y apoyo educativo en las comunidades.

Apartado Quinto: La Educación Técnico profesional

ARTICULO 61.-

i) Promover y regular la vinculación entre el sector productivo y la Educación Técnico Profesional.

ARTICULO 62.-

e) Generar proyectos educativos que propicien, en el marco de la actividad educativa y previa aprobación de la autoridad ministerial, la producción de bienes y servicios con la participación de alumnos y docentes, a través de talleres, laboratorios, pasantías, proyectos productivos articulados con otras instituciones, proyectos didácticos/productivos institucionales orientados a satisfacer necesidades del medio socio-cultural o de la misma institución, micro-emprendimientos, desarrollo de actividades técnico profesionales, empresas o instituciones productivas simuladas y/o cualquier otra modalidad pedagógico-productiva que se implemente. Dichos proyectos se implementarán con el propósito que los estudiantes consoliden, integren y amplíen las competencias y saberes que corresponden con el perfil profesional en el que se están formando, referenciados en situaciones de trabajo desarrolladas dentro o fuera del establecimiento educativo, y que se ajusten a las condiciones y disposiciones previstas para la Educación Técnico Profesional.

ARTÍCULO 64.- En ningún caso los alumnos asumirán obligaciones que excedan el sentido pedagógico de los proyectos ni serán expuestos a cualquier forma de trabajo informal.

ARTÍCULO 65.- El Ministerio de Educación regulará la vinculación entre el sector productivo y la Educación Técnico Profesional y suscribirá convenios con Organizaciones No Gubernamentales, empresas, empresas recuperadas, cooperativas, emprendimientos productivos desarrollados en el marco de los planes de promoción de empleo y fomento de los micro emprendimientos, Sindicatos, Universidades Nacionales, Institutos Nacionales de la Industria y del Agro, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la Comisión Nacional de Energía Atómica, los institutos de formación docente u otros organismos del Estado y/o privados con competencia en el desarrollo científico tecnológico, tendientes a cumplimentar los objetivos establecidos para la Educación Técnico Profesional por la normativa vigente.

LA EDUCACIÓN NO FORMAL

ARTÍCULO 72.- La educación no formal configura una actividad pedagógica de carácter participativo, que se desarrollará a través de un conjunto de servicios, programas y acciones, destinados a satisfacer las necesidades educativas no atendidas o cubiertas en forma insuficiente por el sistema escolar, en el marco de la educación permanente. El Estado promoverá la educación no formal, para el desarrollo de:

e) El desarrollo de instancias educativas de alfabetización digital que contribuyan a la formación de ciudadanos participativos en la Sociedad del Conocimiento.

Apartado Sexto: La Educación Artística

ARTÍCULO 74.- La Educación Artística comprende:

a) La formación en distintos lenguajes artísticos para niños/as y adolescentes, en todos los niveles y modalidades.

b) La modalidad artística orientada a la formación específica de Nivel Secundario para aquellos/as alumnos/as que opten por seguirla.

c) La formación artística impartida en los Institutos de Educación Superior, que comprende los profesorados en los diversos lenguajes artísticos para los distintos niveles de enseñanza y las carreras artísticas específicas.

ARTÍCULO X.- Todos/as los/as alumnos/as, en el transcurso de su escolaridad obligatoria, tendrán oportunidad de desarrollar su sensibilidad y su capacidad creativa en, al menos, DOS (2) disciplinas artísticas. En la Educación Secundaria, la modalidad artística ofrecerá una formación específica en Música, Danza, Artes Visuales, Plástica, Teatro, y otras que pudieran conformarse, admitiendo en cada caso diferentes especializaciones. La formación específica brindada en las escuelas especializadas en artes, podrá continuarse en establecimientos de nivel superior de la misma modalidad.

**Sección Tercera:
Educación de Gestión Privada**

**Sección Tercera:
Educación de Gestión Privada**

ARTÍCULO 79.- El Estado Provincial reconocerá, dentro de los principios de la Constitución y de esta Ley, la libertad de la iniciativa privada para crear y gestionar institutos de enseñanza en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, los que estarán sujetos al reconocimiento, autorización y supervisión del Ministerio de Educación.

Tendrán derecho a sostener sus propuestas educativas la Iglesia Católica, las confesiones religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos, las sociedades cooperativas, organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones, fundaciones y otras personas físicas y jurídicas.

ARTÍCULO X.- Sin perjuicio de las disposiciones que la ley específica fije a tal efecto, para obtener el reconocimiento de la creación y la autorización de los Establecimientos educativos de Gestión Privada deberán acreditar:

- La existencia de local e instalaciones adecuadas.
- Personal idóneo, los que deberán poseer títulos reconocidos por la normativa vigente para ser titular en cargos docentes en establecimientos educativos de gestión estatal.
- Un Proyecto Institucional Educativo que, conservando su identidad, pueda contextualizarse en el marco del Sistema Educativo Provincial.
- Responsabilidad ética, social y pedagógica.

**Sección Segunda:
El Consejo Provincial de Políticas Educativas**

ARTÍCULO 89.- Créase en el ámbito del Ministerio de Educación el Consejo Provincial de Políticas Educativas, el que estará conformado por representantes de los Ministerios de Educación y de Ciencia y Tecnología, de la totalidad de las universidades con sede en la Provincia, sean públicas o privadas, de entidades gremiales del sector educativo, de representantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo; de supervisores de establecimientos de gestión pública y privada; de Municipios; de representantes del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de las Entidades representativas de las Instituciones educativas Pública y Privada (confesionales y no confesionales); por representantes de las entidades que nucleen a padres y estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas, debidamente reconocidas.

Podrán participar también otros organismos comprometidos con la educación pública, a quienes el Ministro de Educación o quien él designe podrá cursar las invitaciones pertinentes a los efectos del tratamiento de temas específicos.

ARTÍCULO 91.- El Consejo Provincial de Políticas Educativas tendrá carácter consultivo, asesorando y colaborando con el Ministerio de Educación en lo que se refiere a:

h) Promover y facilitar la articulación de la Educación Superior prevista en el ARTÍCULO 45 principalmente en lo atinente a la formación docente inicial y continua como a la investigación educativa, a fin de evitar la superposición de ofertas en el territorio provincial. A esos fines se deberá constituir en el seno del Consejo Provincial de Políticas Educativas una comisión permanente con la participación de los sectores involucrados, privilegiando la articulación de las instituciones provinciales y/o regionales.

El Consejo Provincial de Educación Técnica y Trabajo

ARTÍCULO 95.- El Consejo Provincial de Educación Técnica y Trabajo tendrá carácter consultivo, asesorando y colaborando en lo que se refiere a:

b) Proponer para su análisis en las instancias ministeriales correspondientes trayectos y programas de formación Técnico - Profesional teniendo en cuenta las demandas regionales.

ARTÍCULO 96.- El Consejo Provincial de Educación Técnica y Trabajo estará integrado por los señores Ministros de Educación, de Industria, Comercio y Trabajo, de Ciencia y Tecnología y de Agricultura, Ganadería y Alimentos. Contará además con dos representantes (1 titular y 1 suplente) proveniente de los sectores universitario, empresarial - en particular de la pequeña y mediana empresa -, de los trabajadores y de las asociaciones intermedias; de las Asociaciones Gremiales de Educación y de las entidades representativas de las Instituciones educativas de gestión privada.

**CAPÍTULO II
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS**

ARTÍCULO 101.- Las Instituciones Educativas en el marco de las políticas definidas y condiciones habilitadas por el Ministerio de Educación, adoptan para su organización los siguientes criterios:

- a) Definir su proyecto educativo con la participación de todos sus integrantes, respetando los principios y objetivos enunciados en esta Ley y en la legislación educativa nacional.
- b) Implementar modos de organización institucional que garanticen dinámicas democráticas de convocatoria y participación de los/as alumnos/as en la experiencia escolar.
- j) Reconocer y garantizar condiciones de infraestructura para el funcionamiento a los Centros de Estudiantes organizados.

ARTÍCULO 102.- Los Supervisores.

Los supervisores del sistema integrarán el equipo técnico - docente de las distintas Direcciones del Sistema Educativo y desempeñan la tarea de asesorar y apoyar a las instituciones educativas para el mejor desarrollo de su proyecto institucional, facilitar las articulaciones entre las escuelas, y entre ellas y las instituciones y actores de sus contextos socio-comunitarios, así como participar activamente en el trazado de las políticas educativas. El acceso al cargo de supervisor se efectuará con arreglo a las condiciones establecidas por los estatutos y normas reglamentarias que regulan la carrera docente.

ARTÍCULO 103.- El Equipo directivo.

Cada Institución Educativa estará a cargo de un equipo directivo, conformado por Director y Vice-Director, que será apoyado en sus funciones por un equipo de gestión educativa conformado de acuerdo a las características de cada escuela. El acceso a estos cargos se efectúa con arreglo a las condiciones establecidas por los estatutos y normas reglamentarias que regulan la carrera docente.

ARTÍCULO 104.- Las instituciones de educación secundaria y superior serán apoyadas en su gestión a través de organismos colegiados, que favorezcan la participación de los docentes y de los estudiantes en el gobierno de la institución y mayores grados de decisión en el diseño e implementación de su proyecto institucional.

ARTÍCULO 105.- Organismos de Apoyo.

Las instituciones educativas podrán propiciar la creación y organización de asociaciones de apoyo a su accionar, tales como asociaciones cooperadoras, clubes de madres, docentes y padres, con el objetivo fundamental de promover la participación de las familias en el proyecto educativo institucional y colaborar en el proceso educativo de los alumnos y alumnas. Dichos organismos podrán recibir aportes, donaciones y contribuciones de sus asociados, de organismos oficiales y/o privados, para ser destinados a actividades extraordinarias y no para gastos corrientes.

El Estado Provincial debe dotar de un sistema normativo que posibilite un procedimiento ágil y flexible para su constitución, administración, formas periódicas y democráticas de elección de autoridades y todo aquello que haga a su mejor integración y funcionamiento.

ARTÍCULO 106.- Competencias de Los Municipios.

Una Ley Especial establecerá y reglamentará las competencias y atribuciones de los municipios en materia educativa, las que se ejercerán en forma coordinada y concertada con el Gobierno Provincial, asegurando su concordancia con la presente ley general y con la legislación educativa nacional.

Dicha norma preverá la realización de convenios entre ambos niveles de gobierno, en los cuales se acordarán las condiciones de cooperación y participación correspondientes a la creación, construcción, mantenimiento y equipamiento de las instituciones educativas, así como su regulación pedagógica, académica y administrativa.

TÍTULO CUARTO FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN

CAPÍTULO ÚNICO Fuentes de Financiamiento

ARTÍCULO 107.- LA Provincia garantizará para el Sistema Educativo un porcentaje mínimo de recursos en cada ejercicio no inferior al treinta y cinco por ciento (35 %) del Presupuesto General anual. En ningún caso será inferior al 6% del PBG, según ley nacional 26075 o la que en el futuro la reemplace. Para dar cumplimiento a dicha obligación y a los demás objetivos fijados en la presente ley, el Gobierno de la Provincia de Córdoba asignará los fondos presupuestarios que fueren necesarios, afectando recursos tributarios, corrientes y/o extraordinarios, herencias vacantes y demás fondos provenientes del Estado Nacional y las agencias de cooperación internacional.

ARTÍCULO 108.- Las Instituciones educativas de Gestión Privada podrán ser gratuitas o aranceladas. En este último caso, podrán combinar para su financiamiento el aporte estatal –sólo para las asignaturas previstas en los diseños curriculares para los distintos niveles de enseñanza- y los aranceles educacionales, para las asignaturas extracurriculares y otras erogaciones requeridas para el funcionamiento de la actividad educativa prevista en el proyecto institucional. Los criterios para la asignación de aportes estatales a la enseñanza privada serán fijados por ley especial, según se dispone en el ARTÍCULO 79 de la presente ley.

TÍTULO QUINTO DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS y TRANSITORIAS

ARTÍCULO 109.- Derógase la Ley Provincial Nº 8113 del año 1991 y su modificatoria (Ley 8525).

ARTÍCULO 110.- Las modificaciones de planes y programas de estudio que pudiesen llevarse adelante como consecuencia de la aplicación de la presente Ley no podrán causar perjuicio moral y/o patrimonial a los trabajadores de la educación. El Ministerio de Educación deberá efectuar las adecuaciones que correspondan a cada caso. Dichas adecuaciones deberán respetar en un todo la formación en el campo disciplinario a la que accedieran los trabajadores de la educación en ellas implicados.

ARTÍCULO X.- El estado provincial garantiza a las personas migrantes sin Documento Nacional de Identidad, el acceso y las condiciones para la permanencia y egreso de todos los niveles del sistema educativo, mediante la presentación de documentos emanados de su país de origen, conforme a lo establecido por el ARTÍCULO 7 de la Ley 25.871.

Legisladora Adela Coria
Frente Progresista

Sr. Presidente (Campana).-Tiene la palabra el legislador Nicolás.

Sr. Nicolás.- Señor presidente, sé que a esta altura del debate el cansancio debe haber invadido a más de uno de los legisladores y a quienes nos están escuchando.

Hace un momento, escuchaba hablar con la "batería gruesa" a la que nos tiene acostumbrados la legisladora Fernández –que ahora no la veo–; y aunque no me gusta hablar cuando la gente no está, quiero ser sincero diciendo que ella nos puede "tirar con esa batería" porque sabe de dónde venimos, sabe dónde estamos y sabe hacia dónde vamos. Pero cuando uno tiene que contestarle a alguien que se cree viene del peronismo, que se subió al Frente Cívico, y que por ahí tenemos que intuir de dónde viene y dónde está, lo más grave de todo es que no sabemos a dónde va, se nos hace total y absolutamente difícil.

En trece años que hace que la Unión Cívica Radical dejó este Gobierno todavía escuchamos hablar de los errores que cometimos. Gobernar –a esto lo he dicho más de una vez– sobre los errores de los ajenos es de hipócritas. Por algo debe ser que la Unión Cívica Radical –estoy haciendo una autocrítica– perdió la elección. Pero también, en estos raros años el partido puede producir algunos cambios; y con ironía lo voy a decir: no hace tres o cuatro meses ocurrían hechos políticos en esta Provincia, y hoy vemos con asombro que cada vez que habla un legislador del kirchnerismo, el bloque de Unión por Córdoba lo aplaude. Entonces, si observo que algunos partidos políticos en tan poco tiempo han producido cambios, imagínense si nosotros que hace 13 ó 14 años dejamos el gobierno, no podemos llegar a cambiar algo para estar preparados para el 2011.

Digo esto porque tienen que permitirnos que tengamos algunas dudas sobre este proyecto y por eso no lo acompañamos. Algo debe estar mal. La Legislatura está vallada dos cuadras a su alrededor; me informan que hay policías heridos, algunos estudiantes están siendo reprimidos por la policía; algo anda mal.

Los que antes estaban al frente de las manifestaciones van a sentir la extraña sensación –que es la peor de las sensaciones que se pueden sentir– de miedo cuando salgan de este recinto. Por ello, permítasenos tener nuestros reparos en no acompañar este proyecto que estamos tratando hoy.

Escuchaba atentamente al legislador Ochoa cuando decía: "¿quién puede fijar la oportunidad?" Le voy a contestar a través suyo, señor presidente, al legislador Ochoa: ¿quién fija las oportunidades de estas leyes tan profundas para una Provincia? La gente.

Señor presidente, a través suyo le pregunto al legislador Ochoa: ¿usted cree que un partido político, que en su última elección fue acompañado por el 25 por ciento de los votos, tiene la autoridad política para tratar, pocos meses antes de irse, una ley de esta magnitud? La respuesta la dejo para que la elaboren el propio legislador Ochoa Romero y quienes han escuchado mi pregunta.

A continuación, señor presidente, me explayaré sobre algunos de los fundamentos que explican por qué la Unión Cívica Radical no acompaña este proyecto: en primer lugar, creo que el tiempo de debate no ha sido suficiente, y es por eso que existen divergencias; asimismo, no se entiende la ley en tratamiento, como tampoco la intolerancia y el apuro del Gobierno en querer sancionarla sin la suficiente consulta. En segundo término, desde el Gobierno se avala un sistema absolutamente centralizado en el fantástico Consejo de Políticas Educativas. En tercer lugar, esta ley no responde a los principios fundamentales de la educación; por un lado, dice garantizar el desarrollo integral y permanente de los alumnos, en orden a su realización personal, su crecimiento cultural y social y, por otro, fomenta la frecuencia del trabajo.

La ley a sancionar en el día de la fecha, señor presidente, no tiene como objetivo, a nuestro entender, formar ciudadanos conscientes de su libertad y responsabilidad –esto podrá gustarles o no, pero es lo que pensamos– sino que simplemente transforma al Ministerio de Educación en una consultora y agencia de empleo.

Resulta falaz el artículo 113 del proyecto en tratamiento porque no se ha formalizado, bajo ningún aspecto, ningún tipo de acuerdo con ninguna fuerza política, de manera orgánica, sobre las metas a mediano plazo, salvo que este Gobierno considere más importante la firma de un referente que la firma orgánica del presidente de un partido, cosa que suele suceder en el seno del Partido Justicialista.

A nuestro entender, señor presidente, no alcanza con las buenas intenciones; es imprescindible recuperar una escuela pública en la que el conocimiento sea compatible con la permanencia en ella. Esto no se logra de manera intempestiva y caprichosa, sancionando una ley llena de imprecisiones, con pasajes confusos y de aspecto dudoso.

Córdoba La Docta no se merece una ley simplemente sancionada por la mayoría sino nacida del consenso de todas las fuerzas sociales, que sirva para el desarrollo de todos los ámbitos de nuestra Provincia. Sólo el conocimiento es lo que hace libres a los pueblos, y con esta ley –se lo puedo asegurar, señor presidente– les estamos censurando su libertad.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Campana).– Tiene la palabra el señor legislador Birri.

Sr. Birri.– Señor presidente: antes de comenzar mi alocución sobre el tema que nos ocupa, quiero reiterar el pedido que instantes atrás formularon algunos legisladores que me precedieron en el uso de la palabra, en el sentido de que los padres de algunos estudiantes, que están afuera, puedan participar al menos del último tramo del debate y de la posterior votación de una ley indudablemente sensible y, diría, fundamental para el futuro de sus hijos y de sus nietos. Por lo tanto, señor presidente, nuevamente se lo dejamos planteado para que lo valore y, en lo posible, dé una respuesta satisfactoria al pedido.

En verdad, creo no equivocarme si afirmo que a lo largo de la historia de nuestra Patria la educación ha marcado una impronta de vanguardia para toda América Latina, desde Manuel Belgrano en adelante y que, además, ha sabido alumbrar grandes gestas que marcaron a fuego nuestra nacionalidad. Recuerdo la Ley 1420, sancionada en julio de 1884, que estableció la instrucción primaria obligatoria y gratuita para todos los niños en aquel histórico debate donde las bancadas liberales de aquel viejo Parlamento nacional terminaron alumbrando esta ley fundacional para la historia de la educación argentina.

También recuerdo cuando hace 92 años los estudiantes cordobeses, con Deodoro Roca a la cabeza, encendieron la llama de la Reforma Universitaria que no tardó en extenderse a toda América Latina y al mundo, y varias generaciones futuras, incluso las actuales, fueron tributarias de ese proceso.

Más cerca en el tiempo, señor presidente y colegas legisladores, recuerdo el Congreso Pedagógico Nacional, a poco tiempo de haber recuperado los argentinos las instituciones democráticas, y sin perjuicio de la conclusión de ese proceso, que seguramente no fue el que todos anhelábamos, lo tengo presente como una extraordinaria demostración de participación popular y ciudadana, con miles de talleres que se desarrollaron a lo largo y ancho de la geografía nacional donde, -no tengo dudas, seguramente, como quien les habla- muchos formamos parte activa de ese debate que involucró a millones de argentinos.

Recuerdo la participación que hubo en cada uno de los pueblos de la Provincia de Córdoba y de la República Argentina, y recuerdo mi participación en los talleres en mi vieja y querida Escuela Nacional de Comercio de Río Cuarto, donde tuve el inmenso honor de ser elegido delegado para representar a mi departamento en el segundo nivel que se desarrollaba provincialmente en los aún vigentes hoteles de la ciudad de Embalse.

Más cerca todavía, me parece que corresponde destacar en este breve recorrido por la historia educativa de la Nación el proceso de la “carpa blanca”, que puso en debate la necesidad de que el Estado volviera a intervenir en la educación y fue un hito de resistencia a las políticas neoliberales que llevaba adelante el peronismo entregador y degradante de Carlos Menem; todavía están las huellas de aquellos tres años históricos de ayuno frente al Congreso de la Nación.

¿Por qué hago este repaso?, ¿por qué traigo esta cronología de aquellos acontecimientos que marcaron a fuego la historia de la educación en la Argentina? Porque todos tienen un común denominador: todos y cada uno de estos procesos fueron precedidos por una historia de lucha, de resistencia y de profunda participación popular y ciudadana.

Trascendieron gestiones de gobierno, políticas de Estado y a varias generaciones argentinas. Así, con ese legado tuvo hoy –o hace muy poco tiempo– la Provincia de Córdoba y el Gobierno de Unión por Córdoba la oportunidad histórica de estar a la altura de esos acontecimientos y hacer una convocatoria teniendo en cuenta ese llamado histórico. La oportunidad era –y todavía lo sigue siendo– convocar a un debate amplio, plural, democrático, con la participación no sólo de la comunidad educativa sino también de toda la ciudadanía. Pero también tenía otra opción, quizás la más fácil, la del atajo mezquino, la de refugiarse entre cuatro paredes, la de hacer un debate chiquito, corto, mezquino, propio de aquellos que no creen en la participación popular, o de quienes creen que la democracia es votar cada 2 ó 4 años y que cada vez que se vota se delega responsabilidades.

Ante esta opción no quedaban zonas grises y Unión por Córdoba elaboró, ante el Ministerio de Educación, un anteproyecto, que fue analizado por el Consejo de Políticas Educativas y fue sometido a debate durante 4 horas, al final de las vacaciones de invierno, en

un análisis cerrado, con respuestas cerradas por sí o no, con una fuerte participación ficticia para tratar de dar un manto de legitimidad social a una cuestión que venía cerrada.

Estaba claro que había optado por la segunda de las opciones, por el debate corto, mezquino, y desoyendo ese llamado histórico de la Ley 1420, de Manuel Belgrano, de la Reforma Universitaria, de Deodoro Roca, del Congreso Pedagógico y de la carpa blanca, terminó armando un proyecto de laboratorio, entre cuatro paredes, un proyecto sin la gente participando y debatiendo.

La respuesta, señor presidente, usted la conoce, no se hizo esperar: cientos y miles de jóvenes estudiantes acompañados de padres de familia lograron lo que no se había podido lograr hasta el momento, primero, exigiendo ser escuchados; segundo, denunciado las carencias de un proceso que no los involucró y, tercero, colocando en la agenda pública un debate impostergable.

Lo más importante, señor presidente, es que la gente los acompañó y la gran mayoría no solamente comprendió el mensaje de estos jóvenes, sino que también los acompañó en su movilización recorriendo las calles de las ciudades, acampando en las plazas, requiriendo y pidiendo participación golpeando las puertas del Ministerio y de este Poder Legislativo, y tenemos el convencimiento de que, independientemente del resultado de esta votación, que probablemente sea adverso a las pretensiones que tienen los jóvenes cordobeses, ya triunfaron, ya ganaron. Primero, porque lograron que la sociedad los escuchara; segundo, porque alertaron sobre la inexistencia de un debate, y tercero, porque lograron arremeter contra lo que consideraron un tratamiento injusto, reconociendo a ese viejo argentino, José Ingenieros, cuando decía: "Juventud que no arremete es peso muerto para el futuro de su pueblo".

Señor presidente, la movilización no es en vano, la movilización produjo las modificaciones que hoy mejoraron la redacción del texto normativo que llegó hasta este Poder Legislativo.

Con esta cronología, llega a la Legislatura Unicameral de la Provincia de Córdoba, hace unos meses, el proyecto que es objeto de tratamiento en esta sesión.

Como dijimos en aquella oportunidad, esta Legislatura, este hijo pobre del sistema republicano cordobés de la tripartición de poderes, ninguneado más de una vez por el Poder Ejecutivo, tenía delante de sí una extraordinaria oportunidad, una oportunidad de reconciliarse con la sociedad, de contribuir al achicamiento de la brecha que existe entre la política del Estado y la sociedad; que no hacía falta ser un experto ni un psicólogo social ni un avezado político para darse cuenta de que la oportunidad histórica tenía que ver con remediar, subsanar la falta de legitimidad social con que arribaba este proyecto a la Legislatura.

Debía –y eso esperábamos y propuso el Frente Cívico y Social- convocar a ese debate abierto, plural y democrático que nos pedían extramuros de la Legislatura. Por eso, el Frente Cívico, en oportunidad de ingresar el proyecto, le pedía al señor presidente que abriera un ámbito de discusión, al menos en cada una de las 26 cabeceras departamentales que tiene la Provincia de Córdoba, para que todos los cordobeses –no solamente los que viven en las ciudades más importantes- tuvieran la posibilidad de debatir y participar.

En verdad, señor presidente, querido legislador Ochoa Romero, no hubo participación, a menos que usted, el resto de los legisladores y el Ministro de Educación crea que escuchar durante 10 minutos la exposición en cuatro ciudades de la Provincia, cuando tiene 427 unidades territoriales institucionales, es participar. O cuando se convoca a Audiencias en las cabeceras departamentales de cuatro departamentos cuando en realidad hay 26. El compañero legislador –bien sabe que lo aprecio- dice que hubo participación porque debatieron 300 cordobeses cuando Córdoba tiene tres millones y medio de habitantes.

Lamentablemente, este Poder Legislativo perdió la oportunidad que tenía y optó por otro ejercicio simulado de participación achicada, y el broche de oro fue peor todavía, porque se configuró el peor de los escenarios, con una Legislatura vallada, donde parecía que hubiera un ejército de ocupación, en donde cualquier desprevenido que arribara a la ciudad de Córdoba y pasara por las inmediaciones de esta Legislatura, ocupada casi por un ejército de las fuerzas de seguridad, diría: ¿qué está tratando esta gente?, ¿será el ajuste más salvaje del que tenga memoria la historia institucional de la Provincia de Córdoba?

Sin embargo, esto que debió ser una fiesta de la democracia, donde las puertas de la Legislatura debieran estar abiertas de par en par para que la llenara la sociedad y el pueblo, parece una jornada de luto, donde los legisladores estamos rodeados de policías, con un escenario desolado; debió ser una fiesta de la democracia como cuando se alumbró la 1420, o como cuando Deodoro Roca dijo que se habían cortado las últimas cadenas, o cuando todos participábamos en aquellos debates memorables del Congreso Pedagógico, o cuando los docentes de la carpa blanca habían terminado virtualmente de desplomar al régimen nefasto del neoliberalismo y de Carlos Menem.

Ayer, un amigo periodista me preguntaba si la ausencia de legitimidad social invalidaba el proyecto, y también si el mismo no tenía puntos y postulados que compartiera. Yo le contesté que sí, que compartía muchos de los postulados de la letra del texto normativo, pero que claramente era necesario modificar algunas cuestiones de la 8113, como extender la obligatoriedad y tener una jornada ampliada –pero que lo haga la Provincia y no los municipios, como sucede en mi ciudad, Río Cuarto. Pero es tan grande, tan artera la falta de debate y participación que sí, señor, se invalida el proyecto desde sus vicios de gestación, más allá de las coincidencias que pudiéramos tener en su letra.

En verdad, señor presidente, que es llamativa y sorprendente la facilidad de este Gobierno para echar a perder sus mejores oportunidades; posibilidades que le presenta la política, la sociedad y los tiempos históricos.

Me acuerdo –no yendo más allá de los testimonios de mi propia vivencia- cuando discutimos la Ley de Reforma Política en Córdoba, durante un proceso de debate que tenía que remendar aquel otro vergonzoso del 2 de septiembre de 2007. También recuerdo cómo trabajamos durante meses en la Comisión de la Reforma Política y cómo un grupo de expertos elaboró el “así no da más”, cómo trabajamos en un ámbito de armonía porque habíamos logrado generar consenso cinco minutos antes, para que el sticker de Carbonetti, en una suerte de emboscada, hiciera volar por los aires los consensos alcanzados.

Poco tiempo más acá, con esta facilidad para echar a perder todo lo que viene bueno, en el tratamiento de la Ley de Bosques se tiró por la borda un año y medio de trabajo de más de 30 organizaciones populares de la Provincia de Córdoba.

Y, para terminar, el otro día cuando tratábamos la reforma del sistema electoral, después de haber acordado mecanismos que tenían que ver con la boleta única o el voto electrónico, decidieron a último momento eliminar la previsión del financiamiento privado, que sabemos es el agujero negro por donde se filtran los financiamientos muchas veces desproporcionados, ilimitados y espurios.

Señor presidente, lo expresado quizás es el principal argumento por el cual este bloque, no sin antes analizar exhaustivamente esta ley, propicia su rechazo.

Estamos absolutamente convencidos de que las leyes importantes, las trascendentes, aquellas que atraviesan horizontalmente a la sociedad y que trascienden gestiones de Gobierno e incluso varias generaciones porque son leyes que debieran llegar para quedarse, necesitan de la doble legitimación, del doble consenso, el institucional y el constitucional, que es el que le da el consenso político que se obtiene con la mitad más uno de los votos de un parlamento, como es la Unicameral. Pero también, y fundamentalmente, necesitan de la legitimación que les da la sociedad, que hace que los proyectos que se aprueban con ese doble consenso sean apropiados por la sociedad, que es el principal custodio para su adecuada ejecución a partir de allí.

Repito, aún reconociendo que era necesario modificar la Ley 8113 y también reconociendo, con todas las letras, que tenemos coincidencia con muchos de sus postulados, está claro que por su proceso de gestación, y por algunos aspectos de su texto normativo que no compartimos, y porque hay algunos elementos que están notoriamente ausentes, es que hemos decidido propiciar su rechazo.

Nos hubiera gustado que en los primeros párrafos de la ley la Provincia de Córdoba se comprometiera a lograr el analfabetismo cero, cumpliendo de esa manera con el Protocolo de Dakar, del cual es signataria nuestra República, que exige que para el 2012 se reduzca el analfabetismo a cifras casi inexistentes. Sin embargo, en esta Provincia tan rica y con gran potencial actualmente hay 70 mil cordobeses que no saben leer y escribir.

Hago propios los conceptos vertidos en el análisis particularizado que han hecho las legisladoras Esmeralda Rodríguez y Adela Coria, que reproducimos en este acto porque creemos que la educación pública tiene que ser aconfesional, que tiene que haber un ámbito privado, que es el de la familia y el de los templos, donde se incluya cada uno de los cultos que se sostengan.

No concebimos a la educación como un servicio con sesgo economicista sino como un servicio, por lo que tenemos diferencias con los criterios de financiamiento. No acordamos con esta imposición absolutamente injusta de conformar un fondo de 40 millones de pesos para volcarlo a las políticas educativas, porque lo único que termina haciendo es consolidar la matriz inequitativa del sistema tributario provincial. Aunque parezca paradójico y una contradicción flagrante, a ese fondo terminarán contribuyendo los sectores más sensibles de la economía cordobesa: los padres de familia que tienen un inmueble en Villa Azalais o en Villa El Libertador, de mi barrio Alberdi, de Río Cuarto, sectores populares que van a tener que pagar un incremento del Impuesto Inmobiliario cuando propietarios de 5 ó 7 mil hectáreas, que hay muchos en mi sur provincial, no van a pagar un solo peso.

También tenemos diferencias con el artículo 5º, por el que el Estado se ubica como igualmente responsable del sostenimiento de las escuelas públicas y privadas, sin ningún tipo

de prioridad de las primeras sobre las segundas. La política es lo que ha permitido un paulatino proceso de privatización de la educación, ampliando la brecha de la calidad educativa y reproduciendo las condiciones de desigualdad e inequidad que existen en nuestro país y en nuestra provincia.

Finalmente, creo, al igual que una reconocida pedagoga de nuestra Provincia, que decía: “enseñar es aprender a escuchar”, que el Gobierno de Unión por Córdoba en este proceso decidió no escuchar y, quizás, no entendió que la participación, cuando de políticas educativas se trata, no es una opción sino una condición imprescindible e insustituible.

Por eso, junto con el rechazo al proyecto va el compromiso del Frente Cívico y Social, una vez que sea ungido por el voto popular, de arbitrar y proveer las condiciones necesarias para realizar el debate abierto, plural y democrático que este proyecto dejó en el camino.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.

Sr. Passerini.- Señor presidente: atento a que se ha cerrado la lista de oradores, formalmente, antes de hacer uso de la palabra, voy a mocionar el cierre del debate, así, luego de mi alocución pasamos a votar.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de cierre de debate.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.

Continúa en el uso de la palabra el legislador Passerini.

Sr. Passerini.- Señor presidente: en virtud de haber escuchado las expresiones de todos los bloques que componen esta Legislatura Unicameral, después de haber escuchado argumentos mayoritariamente a favor y minoritariamente en contra, creo conveniente -antes de pasar a proponer la modificación de algunos artículos y acompañar la moción de modificación que presentara el bloque de Concertación Plural- referir que mi primera intervención tiene que ver con felicitar y agradecer profundamente a las legisladoras Evelina Feraudo -y a todas las legisladoras y legisladores que integran la Comisión de Educación- y Mabel Genta -y a todos los legisladoras y legisladores que integran la Comisión de Legislación General-, y muy especialmente al legislador Dante Heredia -que preside la Comisión de Economía y que ha desdoblado su tarea en la discusión del Presupuesto y de la Ley de Educación-, por la garantía de participación a la que se comprometió este Pleno a través de una resolución que promovió, de manera inédita en la historia legislativa, el mecanismo de Audiencias Públicas en seis oportunidades, tres en la Capital y tres en el interior provincial, que no sólo fueron un ejemplo de participación sino también constituyeron un insumo importante a la hora de tomar decisiones para consensuar modificaciones en la ley.

Señor presidente: repudio -y todos en esta Legislatura debemos hacerlo de manera unánime, genérica y del lado que venga- toda forma de violencia. Ejercer la violencia de manera extorsiva para modificar la voluntad o un debate debe ser siempre repudiable en el ámbito de la democracia. Hoy quiero expresar, en nombre de todos, que la violencia jamás condujo a buen puerto; jamás ninguna forma de violencia pudo superar un debate o una discusión. No existe en la vida democrática -ni debe existir y debe ser repudiada cada vez que ocurra- una forma violenta de resolver un pleito.

La condición humana nos caracteriza, sobre todo a aquellos que elegimos la forma democrática y el sistema republicano, por agotar las instancias del diálogo. La democracia siempre es buena, se gane o se pierda una elección, se gane o se pierda una votación, se imponga o no una votación.

Luego de esta reflexión, quiero señalar que el texto del proyecto de ley que estamos considerando en este recinto y las modificaciones que vamos a proponer, en primer lugar, cumple con el espíritu de una política de Estado. Una Ley de Educación Pública debe garantizar derechos, promover valores y ser altamente inclusiva; esta ley cumple largamente con esos mandatos.

Una ley de estas características debe requerir de un debate previo, de una discusión social, y esta ley vaya si lo cumple, señor presidente.

Escuchaba que algunos con nostalgia, con una visión política, planteaban el antecedente del Congreso Pedagógico Nacional. Considero que un año y siete meses de haber participado de un debate en un Consejo Provincial de Políticas Educativas -en el cual participaron 105.000 cordobeses y cordobesas de 4.400 instituciones acreditadas, de las cuales 3.900 no sólo participaron sino que acompañan la decisión del anteproyecto de ley que vino a esta Legislatura- que la fuerza de la democracia y el sistema republicano garantizan, hace que la discusión se deba dar en este recinto.

Hemos sido totalmente respetuosos de los tiempos en los cuales se discutió esta ley, de los ámbitos en los cuales se discutió previamente, pero hoy la discusión la tenemos que dar los legisladores, que por algo la gente nos ha puesto en este lugar.

Señor presidente: esta ley respeta largamente -y voy hablar desde la pertenencia política que tenemos quienes integramos este Gobierno de Córdoba- el principio y la visión humanista que tenemos de la sociedad. Si hay algo que caracteriza a nuestra visión política y al espacio político que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo como pilar fundamental de la conducta política, es la defensa de la justicia social; y en el siglo XXI el nombre de la justicia social es la educación.

Esta ley de ninguna manera va en contra de esos principios, todo lo contrario. No sólo defendemos la ley, no sólo militamos cada uno de los aspectos que esta ley plantea como desafío, no sólo estamos convencidos de que esta ley es una necesidad, sino que también vemos con algo de dolor -por qué no decirlo también- que quizás la mezquindad de la proximidad del año electoral hace que desde algunos sectores -que estoy seguro en su espíritu acompañan el sentido de la ley- hoy planteen visiones distintas.

No hace mucho en esta Legislatura, por unanimidad, aprobamos una ley provincial de adhesión a la Ley Nacional de Educación Técnica; que alguien me diga qué tiene de contradictoria esta ley con esa.

Señor presidente: podría decir muchas cosas pero voy a ser respetuoso del uso del tiempo, y sobre todo porque entiendo que los fundamentos y el espíritu de lo que estamos discutiendo, tanto a favor como en contra, han sido claramente expuestos, solicito, en primer lugar, el acompañamiento a las propuestas que planteó el bloque de Concertación Plural, en lo que concierne al artículo 4º, inciso n), y el artículo 113 bis; en el artículo 98, la integración del Consejo Provincial de Educación Técnica y Trabajo, que esté integrado por los señores Ministros de Educación, de Industria, Comercio y Trabajo, de Ciencia y Tecnología, de Agricultura, Ganadería y Alimentos o de los organismos que en el futuro lo sustituyeren; contará, además, con un representante titular y uno suplente provenientes de: a) Sector universitario; b) Sector empresarial; c) Sector de los trabajadores; d) Las asociaciones intermedias; e) Asociaciones gremiales de educación; f) Entidad provincial que agrupe a estudiantes de nivel medio por los establecimientos educativos de modalidad técnico profesional de gestión estatal; g) Entidad provincial que agrupe a estudiantes de nivel medio por los establecimientos educativos de modalidad técnico profesional de gestión privada; h) Entidad provincial que agrupe a estudiantes de nivel superior por los establecimientos educativos de modalidad técnico profesional de gestión estatal; i) Entidad provincial que agrupe a estudiantes de nivel superior por los establecimientos educativos de modalidad técnico profesional de gestión privada; j) Entidad provincial que agrupe a padres o madres de familia por los establecimientos educativos de modalidad técnico profesional de gestión estatal; k) Entidad provincial que agrupe a padres o madres de familia por los establecimientos educativos de modalidad técnico profesional de gestión privada y n) Las entidades representativas de las instituciones de gestión privada.

También, propongo que en el artículo 4º, que fija los fines y objetivos de la educación provincial, en el inciso u), el texto definitivo sostenga el siguiente concepto: promover saberes, aptitudes y valores que fortalezcan las capacidades de las personas para prevenir las adicciones y el uso indebido de las drogas.

Queda claro, señor presidente, que en el trabajo integrado que han hecho las tres comisiones se han respetado largamente las propuestas que han sido propositivas, en el sentido de que la ley tenga amplio consenso, tal como lo está teniendo en esta discusión legislativa en lo que se refiere a educación religiosa -artículo 11-, en lo que hace a las prácticas educativas, a la educación artística, a la participación de los alumnos -obviamente, vamos a ratificar y a reivindicar que la mejor garantía para que la educación pública sea de calidad es plantear las exigencias que se imponen en esta ley como objetivo-, la educación obligatoria, el acceso gratuito, que haya 14 años de escolaridad y, por supuesto, reitero, el espíritu inclusivo que tiene esta Ley de Educación Pública, en donde -lo digo con orgullo- hemos escuchado cuestionamientos de entidades a las cuales uno pertenece como egresado, como el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, pero ninguna institución educativa provincial tiene restricciones en el ingreso para los aspirantes a ocupar un banco.

Asimismo, deseo manifestar, señor presidente, que escuchamos y valoramos todas las opiniones en el convencimiento de que esta ley es una herramienta y una política de Estado porque reúne los atributos y los consensos, porque dio la discusión y porque es una política de Estado sustentable en el tiempo.

Solicito que se autorice a la Secretaría Legislativa a efectuar el ordenamiento y la reenumeración de los artículos e incisos que así lo requieran en mérito a las modificaciones e incorporaciones propuestas y aprobadas en este Plenario.

Para finalizar, en respeto a nuestras convicciones, a nuestra conducta profundamente democrática, a la tolerancia, que es el mejor instrumento para corregir y prevenir la violencia en cualquiera de sus formas, y en respeto a la enseñanza adquirida en la escuela, quiero destacar -y este es un poco el espíritu que hemos perseguido desde nuestro bloque en aras

de sumar consensos en este proyecto de ley- que en la escuela nos enseñan a sumar antes que a dividir. Hoy, tenemos muy vigente esa enseñanza.

Nunca la violencia nos va a extorsionar e imponer un pensamiento que no compartamos, pero nunca vamos a caer en la intolerancia de desconocer opiniones distintas; nunca vamos a caer en el error de creer que hay una única verdad, pero tampoco en creer que perseguir la unanimidad es sólo una cuestión de tiempo; acá hay especulaciones políticas que quieren que la ley no se discuta y nunca se apruebe.

Porque estamos orgullosos de pertenecer a un Gobierno que desde hace once años viene apostando e invirtiendo y tomando la política educativa como una política de Estado, es que les pido a los señores legisladores que acompañen este proyecto de ley y que pasemos a votarlo.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (Campana).- En consideración, en general, el proyecto 6480/E/10, tal como fuera despachado por las Comisiones de Educación, de Economía y de Legislación General.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general.

Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.

Sra. Olivero.- Señor presidente: quería plantear una moción de orden. Quiero que se vote nominalmente, tanto en general como en particular.

Ya opiné sobre lo que tenía que opinar.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de voto nominal, en general y en particular.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.

A los efectos de la votación en particular, y si no hay objeciones, se hará por títulos.

- Se vota y aprueba el Título I, artículos 1º a 13, inclusive, con la modificación propuesta en el artículo 4º.

- Se vota y aprueba el Título II, artículos 14 a 86, inclusive.

- Se vota y aprueba el Título III, artículos 87 a 108, inclusive, con la modificación propuesta en el artículo 98.

- Se vota y aprueba el Título IV, artículos 109 y 110.

- Se vota y aprueba el Título V, artículos 111 a 115, inclusive, con la modificación propuesta en el artículo 114.

Sr. Presidente (Campana).- El artículo 116 es de forma.

Queda aprobado en general y en particular el proyecto.

Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).

Pasamos a un breve cuarto intermedio.

- Es la hora 19 y 26.

PROYECTO DE LEY – 06480/E/10

MENSAJE

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 -inciso 3º- de la Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se procura la sanción de la nueva Ley General de Educación de la Provincia de Córdoba.

Se aspira a que el plexo legal propuesto rija la organización y administración general del Sistema Educativo Provincial, integrado por los servicios educativos públicos de gestión estatal (provinciales o municipales) y de gestión privada autorizados.

A esos efectos, desde el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba se dispuso la conformación del Consejo Provincial de Políticas Educativas, integrado por representantes de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Villa María, la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad Tecnológica Nacional -Regionales Córdoba, Villa María y San Francisco-, el Instituto Universitario Aeronáutico, la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Blas Pascal, la Universidad Empresarial Siglo 21; representantes gremiales de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), de la Asociación de Docentes de Enseñanza Media, Especial y Superior (ADEME), de la Asociación del Magisterio de Educación Técnica (AMET), del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), de la Unión de Docentes Argentinos (UDA); representantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del Poder Judicial y del Poder Legislativo de la Provincia (con representación de los bloques de la mayoría y las 1era. 2da. Minorías), del Consejo Católico para la Educación de Córdoba (CCE), de la Asociación de Institutos Privados de Enseñanza de Córdoba (AIPEC), de la Cámara Cordobesa de Instituciones Educativas Privadas (CACIEP) y miembros del Consejo Asesor de Educación Técnica y Trabajo, y de la Mesa Provincia-Municipios.

Desde este ámbito de representación plural, se encomendó la tarea de discutir y proponer un nuevo marco normativo, superador de la Ley Nº 8113 actualmente en vigencia.

Este Proyecto de nueva Ley General de Educación de la Provincia es el resultado de diecisiete

meses de debate en la diversidad, y de puesta en práctica de la decisión de abordar desafíos y problemas a través del consenso.

Cabe tener presente que la norma vigente, sancionada en el año 1991, fue concebida en un contexto histórico diferente del actual. Con posterioridad a su sanción, se sucedieron profundas transformaciones, tales como la reforma de la Constitución Nacional y la transferencia de los servicios educativos nacionales a las provincias.

En este proceso orientado a la adecuación del régimen normativo provincial, la labor prioritaria ha sido articular este Proyecto con la Ley de Educación Nacional Nº 26.206. El resultado es la incorporación de nuevos principios, acordes a las actuales realidades, y también la adecuación de los avances normativos que se han ido sumando en cuanto a la regulación de la educación a nivel nacional y provincial, en razón de reconocérseles su variedad, riqueza y profundidad.

Se han respetado especialmente los principios de las Constituciones Nacional y Provincial, en vistas a la construcción de una propuesta amplia y con fundamentos claros, de modo que pueda constituir un instrumento eficaz y duradero. La experiencia nos demuestra que es imposible abarcar toda la realidad en un documento escrito, pero sí es preciso proponer una nueva Ley General de Educación Provincial que acompañe este nuevo tiempo educativo.

Se ha puesto énfasis en la construcción de un Proyecto de Ley en el cual se afirmen y sellen principios primordiales y estratégicos que aseguren, ante todo, el objetivo rector de garantizar el derecho a la educación y los de los educadores. Se trató de elaborar una Ley General de Educación que contenga esos principios y todos aquéllos que nos permitan afirmarnos en el camino cierto de la distribución de los bienes culturales y del conocimiento, evitando caer en aspectos regulatorios concretos, que sí deberán ser considerados en las necesarias y consecuentes leyes específicas y reglamentos administrativos.

En esa instancia, se remitió a las instituciones educativas el Anteproyecto de Ley junto con el instrumento que permitía registrar, artículo por artículo, los aportes producidos, en términos de acuerdos, desacuerdos y propuestas.

Como espacios de debate colectivo, se realizaron encuentros -con suspensión de actividades- destinados al intercambio y la discusión fundados en un análisis previo del documento. Cada comunidad educativa colaboró de la forma más apropiada para promover la participación de todos, en especial de los docentes, los alumnos y sus familias.

Los resultados del trabajo realizado en las instituciones fueron sistematizados por el Ministerio de Educación de la Provincia y el documento integral, con las principales conclusiones y aportes, se puso a disposición de las comunidades educativas.

Los aportes que surgieron, fueron receptados en el Consejo Provincial de Políticas Educativas a los fines de mejorar la propuesta del Anteproyecto y son elevados junto con éste al Poder Legislativo, como antecedentes de la nueva Ley General de Educación de la Provincia de Córdoba.

Tal es el caso de las observaciones que se efectuaron a los artículos 7º -inciso f)-, 26, 27, 29, 33, 41 y 48, puntualizaciones que han quedado debidamente aclaradas o salvadas, según el caso, con la redacción final que se dio al Proyecto.

Por lo demás, en su aspecto jurídico-formal, el texto propuesto se condice con los principios, valores y derechos reconocidos y establecidos por la Constitución Nacional en sus artículos 5º, 14, 14 bis, 16, 18, 19, 20, 31 y 75 -incisos 18), 19) y 22)-, como así también por los artículos 7º, 19 -inciso 4)-, 21, 23, 34, 54, 60, 61, 62, 63, 110 -inciso 12)-, 144 -inciso 18)-, 174 y 176 de la Constitución Provincial.

Además y siguiendo el orden de jerarquía de normas, el proyecto responde a los fines y objetivos estipulados en el artículo 11 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, siguiendo este plexo legal en lo que hace a la configuración de los niveles y modalidades por ella establecida, las facultades y atribuciones reconocidas a las autoridades jurisdiccionales y los criterios que rigen la organización y funcionamiento de los centros educativos.

Párrafo aparte merece el artículo 11-inciso e)-, en cuanto establece el derecho de los padres a que sus hijos reciban en escuelas de gestión estatal educación religiosa, de manera opcional; ello se entiende que será en un espacio extracurricular y a contraturno del horario de clases. Con ello se cumplimenta con el artículo 62 -inciso 5)- de la Constitución Provincial y no se lesiona de forma alguna la laicidad de la educación estatal, sobre todo atendiendo a que esta educación religiosa (del credo que sea, tan luego se encuentre registrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación) es optativa.

En el art. 12 inc. e), el proyecto expresa, refiriéndose a Derechos de los alumnos: " e) A asociarse para participar en el funcionamiento de las instituciones educativas, a través de centros, asociaciones, y clubes de estudiantes en relación con las edades y de acuerdo con lo dispuesto por las reglamentaciones que al efecto se dicten"

Cabe observar que se podría interpretar de manera inconveniente la participación de los alumnos en el "funcionamiento" de las instituciones, como así también, dejar librado a la reglamentación las formas y modalidades de esa participación.

En este aspecto nos permitimos recomendar una fórmula que reconozca el derecho de los alumnos de participar en el "...desarrollo de la vida institucional, con mayores responsabilidades conforme avancen en los niveles del sistema educativo y de las pautas reglamentarias que se establezcan al efecto" legislando en forma similar la Ley 26206 en su artículo 126 inc. h).

En ocasión de referirse a la Educación Primaria, el proyecto establece que: Artículo 36.- Con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos fijados para este nivel por la presente Ley las escuelas primarias podrán ser de jornada extendida o completa.

Estimamos que se verifica un error material el haberse consignado que las escuelas primarias "podrán" ser de jornada completa, ello si tenemos presente que por el Acta Nº 12 del Consejo Provincial de Políticas Educativas, se dejó constancia que obtuvo consenso por mayoría de votos la tesis que proponía que las escuelas primarias "... serán de jornada extendida o doble jornada..."

Avanzando en el texto del anteproyecto de Ley, en el art.103, se establece que el Director estará a cargo de cada institución educativa (escuela), esto es así en tanto se trate de escuelas de gestión estatal; cabe puntualizar entonces que cuando se trate de institutos de gestión privada, el Director reviste el carácter de autoridad pedagógica, y la máxima autoridad del establecimiento se traduce en la figura del "representante legal" o en su caso del propietario en cuanto disponga el desempeño también de esta última calidad.

La Ley 5326 en sus Arts. 20 a 22 determina que las adscripciones deberán ser obtenidas por los propietarios de los establecimientos privados, y en sus relaciones con el Estado podrán actuar por sí o por apoderados con mandatos registrados en la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza.

Por último, corresponde considerar especialmente el Título Quinto "Disposiciones Complementarias y Transitorias" del Proyecto puesto en consideración.

En su artículo 110 se establece que cualquier modificación de planes y programas de estudios que se determinare como consecuencia de la ley que se proyecta, no podrá causar perjuicio moral o patrimonial a los trabajadores de la educación; tal como se consigna en la parte final del mismo artículo, le cabe la obligación al Poder Ejecutivo Provincial de llevar adelante las adecuaciones necesarias a tal fin.

Por el artículo 111, se establecen metas a alcanzar en los cuatro años siguientes a la fecha de sanción de la Ley, y ello con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos de la misma, sobre todo los referidos a la obligatoriedad escolar, que se extiende desde el nivel de Educación Inicial hasta la culminación del nivel de Educación Secundaria, y la jornada extendida para el nivel de Educación Primaria; son metas que se fijan y como tales queda en la responsabilidad política de las sucesivas gestiones gubernamentales darles fiel cumplimiento. Para ello, el artículo 107 del mismo proyecto establece que la Provincia garantizará para el Sistema Educativo un porcentaje mínimo de recursos en cada ejercicio no inferior al treinta y cinco por ciento (35%) del Presupuesto General Anual.

En el segundo párrafo del mismo artículo se dispone que para dar cumplimiento a dicha obligación y a los demás objetivos fijados en la presente ley el gobierno de la Provincia asignará los fondos presupuestarios que fueren necesarios, afectando recursos tributarios y/o no tributarios, corrientes y/o extraordinarios, y en su caso, propiciará la creación de tributos y/o tomará financiamiento del sistema financiero nacional y/o internacional.

Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.

Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.

Juan Schiaretti, Walter Mario Grahovac, Jorge Eduardo Córdoba.

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

**TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES**

**CAPÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES Y FINES DE LA EDUCACIÓN
EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA**

**Sección Única:
Principios Generales y Fines de la Educación**

ARTÍCULO 1º.- Ámbito de Aplicación

Esta Ley rige la organización y administración del Sistema Educativo Provincial integrado por los siguientes servicios:

- a) Los servicios educativos públicos de gestión estatal.
- b) Los servicios educativos municipales, regulados por el artículo 106 de esta Ley.
- c) Los servicios educativos públicos de gestión privada autorizados.

ARTÍCULO 2º.- Fundamentos

- La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizado por el Estado.

- La educación se constituye en política de Estado prioritaria para contribuir a la construcción y desarrollo de una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo cultural, económico y social de la Provincia.

- El Estado Provincial no suscribirá tratados de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienen cualquier forma de mercantilización de la educación pública.

ARTÍCULO 3º.- Principios Generales

La política educativa, en cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Provincial, se regirá por los siguientes principios generales:

- a) La educación es función principal, obligatoria y permanente para el Estado Provincial, quien establece y supervisa la política del sector;
- b) Se reconoce a la familia, como agente natural y primario de educación, el derecho fundamental

de educar a sus hijos y de escoger el tipo de educación más adecuado a sus propias convicciones;

c) La educación es también función y responsabilidad de la sociedad, orientada a asegurar el respeto de las peculiaridades individuales y culturales y a impulsar, a través de la participación de sus miembros, su propio desarrollo;

d) Todos los habitantes de la Provincia tienen derecho a la educación para favorecer el desarrollo pleno de su persona e integrarse como ciudadano en un marco de libertad y convivencia democrática.

Es responsabilidad del Estado garantizar el ejercicio de este derecho en igualdad de oportunidades y sin discriminación de ningún tipo;

e) Todos los habitantes de la Provincia tienen, así mismo, derecho a acceder a los más altos niveles de formación, investigación y creación, conforme con su vocación y aptitudes y dentro de las exigencias del interés nacional y provincial;

f) La educación pública de gestión estatal es común, integral, gratuita y exenta de dogmatismos de cualquier signo;

g) El Estado garantiza el derecho de enseñar y aprender en todo el territorio provincial. Su ejercicio, dentro del sistema educativo, respetará las libertades inherentes a las personas que se educan y lo dispuesto por la Constitución Provincial y la presente Ley;

h) El Estado garantiza, en el ámbito educativo, el respeto a los derechos de los niños y adolescentes establecidos en la Ley Nº 26.061;

i) El Estado reconoce, asimismo, la libertad de las personas, asociaciones y municipios de crear y gestionar instituciones educativas ajustadas a los principios de la Constitución y a esta Ley;

j) El Estado asegura en el presupuesto provincial los recursos suficientes para el financiamiento del sistema educativo e integra con igual fin aportes comunitarios, sectoriales y de otras jurisdicciones.

ARTÍCULO 4º.- Fines de la Educación

La educación en la Provincia de Córdoba, de acuerdo con los principios y valores de su Constitución, se dirigirá al cumplimiento de los siguientes fines:

a) El desarrollo integral, armonioso y permanente de los alumnos orientado hacia su realización personal y su trascendencia en lo cultural, lo social, lo histórico y lo religioso, según sus propias opciones.

b) La formación de ciudadanos conscientes de sus libertades y derechos y responsables de sus obligaciones cívicas, capaces de contribuir a la consolidación del orden constitucional; a la configuración de una sociedad democrática, justa y solidaria y a la valoración y preservación del patrimonio natural y cultural.

c) La capacitación para el ejercicio de la participación reflexiva y crítica y el comportamiento ético y moral de la persona que le permita su activa integración en la vida social, cultural y política.

d) La preparación laboral, técnica y profesional de la persona, que la habilite para su incorporación idónea al proceso de desarrollo socio productivo y para su formación permanente.

e) La comprensión de los avances científicos y tecnológicos y su utilización al servicio del mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva.

f) La conservación de los valores fundamentales que cimientan la identidad y unidad nacional y latinoamericana, con apertura a la cultura de los pueblos, y la promoción y creación de las expresiones culturales de las diversas comunidades de la Provincia.

g) La formación en el respeto y valoración de la diversidad lingüística y cultura de los pueblos originarios.

h) La formación para la comprensión, la cooperación y la paz entre las naciones y la educación relativa a los derechos humanos y libertades fundamentales.

i) La educación incorporará obligatoriamente en todos los niveles educativos y modalidades el estudio de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial, sus normas, espíritu e instituciones.

j) Brindar conocimientos y promover valores que fortalezcan la formación integral de una sexualidad responsable.

k) Brindar una formación que promueva el derecho a la vida y su preservación.

l) Desarrollar las capacidades de las personas para prevenir adicciones y el uso indebido de drogas, la formación corporal, motriz y deportiva, la educación vial y el cuidado del medio ambiente.

CAPÍTULO II DERECHO A LA EDUCACIÓN

Sección Primera: Responsabilidad del Estado

ARTÍCULO 5º.- Derecho a la Educación. Garantías

El Estado garantiza la igualdad de oportunidades y posibilidades educacionales ofreciendo, en la prestación de los servicios públicos de gestión estatal y privada reconocidos, condiciones equitativas para el acceso, permanencia y promoción de los alumnos.

A fin de cumplir con esta responsabilidad sostendrá el sistema educativo en todo el territorio provincial impulsará el mejoramiento de la calidad de la educación.

Proveerá, asimismo, políticas de inclusión educativa y protección integral para el crecimiento y desarrollo armónico de los niños, jóvenes y adultos, en especial cuando se encuentren en situaciones socioeconómicas desfavorables.

ARTÍCULO 6º.- Generalización del ejercicio del Derecho a la Educación

El Estado impulsará la generalización del ejercicio del derecho a la educación entre los sectores menos favorecidos de la sociedad, rurales y urbanos, instrumentando a tal efecto políticas especiales

dirigidas a la atención educativa e integración social. Generará y promoverá diversos medios y servicios para la educación permanente, la alfabetización, y la formación científica y tecnológica, la capacitación laboral y la formación profesional, orientados según las necesidades y posibilidades personales y regionales.

**Sección Segunda:
Derechos y Deberes en la Educación**

ARTÍCULO 7º.- Derechos y deberes de los Docentes.

Un estatuto específico regulará los derechos y obligaciones laborales y profesionales de los docentes, en el ámbito de la educación pública de gestión estatal y privada conforme las orientaciones generales de esta norma. Sin perjuicio de lo allí establecido y de otros preceptos constitucionales y legales, se reconoce a los docentes los siguientes:

Derechos:

a) Al desempeño de su profesión docente dentro del ámbito provincial, mediante la acreditación de los títulos y certificaciones conforme a la normativa vigente sobre la materia.

b) A ejercer la docencia sobre la base de la libertad de cátedra y la libertad de enseñanza en el marco de los principios establecidos por la Constitución Nacional y las disposiciones de esta Ley. Su práctica se orientará a la realización de los objetivos propios de las instituciones educativas y de los principios y fines de la educación, establecidos por esta Ley.

c) A la capacitación, y la actualización integral, gratuita y en servicio, a lo largo de toda su carrera.

d) A la activa participación en la elaboración e implementación del proyecto institucional de la escuela.

e) Al desarrollo de sus tareas en condiciones dignas en lo que respecta a seguridad e higiene.

f) Al mantenimiento de su estabilidad en el cargo en tanto su desempeño sea satisfactorio, de conformidad con la normativa provincial y nacional vigente.

g) A los beneficios de la seguridad social, jubilación, seguros y obra social

h) A un salario digno.

i) A participar en el gobierno de la educación por sí y/o a través de sus representantes.

j) Al acceso a programas de salud laboral y prevención de enfermedades profesionales.

k) Al acceso a los cargos y horas por concurso de antecedentes o por concurso de antecedentes y oposición, conforme a lo establecido en la legislación vigente, para las instituciones de gestión estatal.

l) A la negociación colectiva nacional y jurisdiccional

ll) A la libre asociación y al respeto integral de todos sus derechos como ciudadanos.

Deberes:

a) A respetar y hacer respetar los principios constitucionales, las disposiciones de la presente Ley, la normativa institucional y la que regula la tarea docente

b) A cumplir con los lineamientos de la política educativa de la Provincia y con los Diseños Curriculares de cada uno de los niveles y modalidades.

c) A capacitarse y actualizarse en forma permanente.

d) A ejercer su trabajo de manera idónea y responsable

e) A proteger y garantizar los derechos de los/as niños/as y adolescentes que se encuentran bajo su responsabilidad en concordancia con lo dispuesto en la Ley Nº 26061.

f) A respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.

ARTÍCULO 8º.- El personal administrativo, técnico, auxiliar, social, de la salud y de servicio que se desempeña en las escuelas es parte integrante de la comunidad educativa y su misión principal será contribuir a asegurar el funcionamiento de las instituciones educativas y de los servicios de la educación, conforme los derechos y obligaciones establecidas en sus respectivos estatutos.

ARTÍCULO 9º.- El Ministerio de Educación definirá los criterios básicos concernientes a la carrera docente en el ámbito estatal, en concordancia con lo dispuesto en la presente Ley. La carrera docente admitirá al menos dos (2) opciones: a) desempeño en el aula y b) desempeño en la función directiva y de supervisión. La formación continua será una de las dimensiones básicas para el ascenso en la carrera profesional.

A los efectos de la elaboración de dichos criterios, se instrumentarán los mecanismos de consulta pertinentes.

ARTÍCULO 10.- No podrá incorporarse a la carrera docente quien haya sido condenado/a por delitos de lesa humanidad, o haya incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, conforme a lo previsto en el artículo 36 de la Constitución Nacional y el Título X del Libro Segundo del Código Penal, aún cuando se hubieren beneficiado por el indulto o la conmutación de pena.

ARTÍCULO 11.- Derechos y deberes de los Padres.

Los Padres, o quien los sustituyeren legalmente, tienen, sobre la educación de sus hijos, los siguientes:

Derechos:

a) A ser reconocidos como agentes naturales y primarios de la educación y al ejercicio pleno de la patria potestad.

b) A elegir para sus hijos o representados/as, la institución educativa cuyo ideario responda a sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas.

c) A que sus hijos reciban una educación conforme a los principios y fines de la Constitución y la

presente Ley, con la posibilidad de optar por la modalidad y orientación según sus convicciones.

d) A que sus hijos reciban, en el ámbito de la educación pública de gestión estatal, una enseñanza general exenta de dogmatismos que pudiera afectar las convicciones personales y familiares.

e) A que sus hijos reciban de manera opcional, en el ámbito de la educación pública de gestión estatal, educación religiosa que les permita aprehender los valores y contenidos básicos de la creencia por la que hubieren optado.

f) A ser informados en forma regular y periódica de la evolución y resultados del proceso educativo de sus hijos.

g) A participar en las actividades de los establecimientos educativos en forma individual o a través de las cooperadoras escolares y los órganos colegiados representativos, en el marco del proyecto educativo institucional.

h) A participar en el planeamiento del Proyecto Educativo Institucional.

Deberes:

a) Hacer cumplir y asegurar la concurrencia de sus hijos o representados a los establecimientos escolares que elijan durante todo el régimen de educación obligatoria prevista en la presente Ley.

b) Apoyar y colaborar, de modo efectivo, con sentido amplio y solidario, y bajo la autoridad escolar, en el proceso educativo que sus hijos desarrollan en la escuela.

c) Respetar y hacer respetar a sus hijos o representados la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.

d) Respetar y hacer respetar a sus hijos o representados la autoridad pedagógica de los docentes, las normas vigentes del sistema educativo; las reglamentaciones y normas de convivencia propias de la escuela como el Ideario Institucional y su Proyecto Educativo.

e) Seguir y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos.

ARTÍCULO 12.- Derechos y Deberes de los Alumnos.

Los/as alumnos/as de las Instituciones educativas de la Provincia tienen los siguientes:

Derechos:

a) A que se respeten su integridad y dignidad personales, su libertad intelectual, religiosa y de conciencia.

b) A recibir una enseñanza que considere y valore sus intereses, ritmos y posibilidades de aprendizaje y que atienda a sus características individuales, sociales y culturales.

c) A participar reflexiva y críticamente en su proceso de aprendizaje, a acceder a conocimientos y experiencias que le permitan integrarse creativamente en la sociedad, y al reconocimiento y valoración del esfuerzo personal y colectivo..

d) A recibir orientación y asistencia ante los problemas que puedan perturbar su acceso, permanencia o promoción en el sistema y aquellos que dificulten el desarrollo personal.

e) A asociarse para participar en el funcionamiento de las instituciones educativas, a través de centros, asociaciones y clubes de estudiantes en relación con las edades y de acuerdo con lo dispuesto por las reglamentaciones que al efecto se dicten.

f) A desarrollar sus aprendizajes en edificios que respondan a normas de seguridad y salubridad, con instalaciones y equipamiento que aseguren la calidad del servicio educativo.

Deberes:

a) Cumplir con todos los niveles de la escolaridad obligatoria establecida por esta Ley.

b) Hacer uso responsable de las oportunidades de estudiar que el sistema educativo le ofrece y esforzarse por alcanzar el máximo desarrollo según sus capacidades y posibilidades.

c) Respetar el proyecto educativo institucional, las normas de convivencia y organización de la escuela.

d) Asistir a clase regularmente y con puntualidad.

e) Participar en el desarrollo de las actividades educativas en la escuela.

f) Respetar los símbolos nacionales, provinciales e institucionales.

g) Realizar un uso y cuidado responsable de la infraestructura y el equipamiento de la escuela.

h) Respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.

i) Respetar la autoridad pedagógica de los/as docentes en el ejercicio de su tarea.

ARTÍCULO 13.- Las Instituciones Educativas y la Convivencia Democrática.

Las instituciones educativas, de los distintos niveles y modalidades del sistema, se organizarán según normas democráticas de convivencia y funcionamiento, respetuosas del pluralismo y la tolerancia facilitando la participación responsable y solidaria que corresponde a cada sector de la comunidad educativa, garantizando así el ejercicio pleno de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones y evitando cualquier forma de discriminación entre los miembros de la misma.

TÍTULO SEGUNDO EL SISTEMA EDUCATIVO

CAPÍTULO I LINEAMIENTOS DE POLÍTICA EDUCACIONAL

Sección Primera: Principios de Organización del Sistema Educativo

ARTÍCULO 14.- El Sistema Educativo Provincial.

Institúyese el sistema educativo provincial integrado orgánicamente por los servicios educativos de

gestión estatal, que conjuntamente con los servicios educativos de gestión privada, se inserta en el marco político-institucional del Estado y se organiza conforme los principios y estructura establecidos por esta Ley para dar cumplimiento a sus fines y objetivos.

ARTÍCULO 15.- Educación Permanente y Sistema Educativo.

La estructuración del sistema educativo provincial se basa en el principio rector de la educación permanente, atendiendo a la continuidad e integralidad del proceso educativo, con el propósito de ofrecer posibilidades de formación, capacitación y perfeccionamiento a todas las habitantes en las distintas circunstancias y etapas de su vida.

Este principio contribuye, en materia de organización del sistema, a la articulación pedagógica de sus niveles y modalidades, otorgando unidad y coherencia a la oferta educativa.

ARTÍCULO 16.- Principios Políticos de Organización del Sistema.

El sistema educativo se organiza, en términos de política educacional, conforme con los principios de libertad de enseñanza, de democratización, centralización política y normativa, desconcentración operativa y participación social, a cuyo efecto las autoridades provinciales:

a) Garantizan la equidad en los servicios educativos, a fin de alcanzar igualdad en las oportunidades y posibilidades de acceso, permanencia y logro educativos, y ofrecen una educación que asegure la democrática distribución de los conocimientos personal y socialmente relevantes;

b) Fijan y desarrollan políticas de promoción de la igualdad educativa destinadas a enfrentar situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y otras formas de discriminación, derivadas de factores socio-económicos, culturales, geográficos, étnicos, de género o de cualquier otra índole, que afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación.

c) Establecen las grandes líneas de política educativa y aseguran el cumplimiento de los objetivos del sistema, articulando orgánicamente su gobierno y administración, con el objeto de lograr la mayor eficacia de las acciones propuestas;

d) Adecuan la oferta educativa a las características de las distintas regiones de la Provincia, respetando sus pautas socio-culturales y promoviendo el despliegue de sus potencialidades;

e) Reconocen la capacidad y la responsabilidad de la sociedad para intervenir en la toma de decisiones educativas y en el control de su ejecución y promueven su participación activa en los espacios establecidos para tal fin.

ARTÍCULO 17.- Funcionalidad del Sistema Educativo Provincial.

Las autoridades provinciales regulan pedagógica y administrativamente la funcionalidad del sistema educativo, con el objeto de ajustar las acciones a las finalidades propuestas por esta ley, conforme a:

a) La articulación vertical que asegure la continuidad pedagógica entre los sucesivos niveles y la adecuada coordinación entre sus respectivos organismos administrativos; y, la articulación horizontal, que posibilite el pasaje entre modalidades, carreras y establecimientos de un mismo nivel.

b) La coordinación interna, entre los diferentes servicios, niveles y establecimientos de la Provincia; y la coordinación externa, con los sistemas de otras jurisdicciones, evitando superposiciones y estableciendo relaciones de cooperación y colaboración con ellos.

c) La cohesión, que asegure la unidad del conjunto, dentro de la diversidad de las prestaciones, para responder orgánica e integralmente a las demandas educativas de la población.

d) La apertura y flexibilidad, de modo de entablar una fluida y dinámica interrelación con las condiciones, peculiaridades y necesidades del contexto social, cultural y económico en el que se insertan los servicios.

ARTÍCULO 18.- Principios Generales de Administración Educacional.

Las autoridades provinciales desarrollan la administración del sistema como un proceso técnico – político de carácter global regido por los siguientes principios:

a) Eficacia pedagógica, como la capacidad técnica de contribuir a alcanzar los resultados y objetivos educacionales propuestos.

b) Efectividad política, como criterio para valorar la capacidad de atender y responder satisfactoriamente a las demandas sociales.

c) Relevancia cultural, como criterio de desempeño para analizar la adecuación de los actos administrativos según su significación, valor y pertinencia para la comunidad, orientados al mejoramiento de la calidad de vida.

d) Eficiencia económica, como capacidad operacional de maximizar y optimizar el rendimiento en la utilización de los recursos destinados a la consecución de los objetivos principales del sistema educativo

**Sección Segunda:
Lineamientos Pedagógicos Generales**

ARTÍCULO 19.- Calidad de la Educación.

La educación en la Provincia de Córdoba tiende a alcanzar los más altos niveles de calidad.

A tal fin el Gobierno Provincial instrumenta las políticas necesarias para el mejoramiento de la calidad de la educación:

a) Procurando la mayor formación profesional inicial y continua de los docentes

b) Propiciando y/o sosteniendo los procesos de investigación e innovación educacionales planificados y sustentados científica, pedagógica y tecnológicamente.

- c) Renovando las formas de organización y gestión de las instituciones educativas.
- d) Asignando equitativamente los recursos físicos y financieros destinados a mejorar la infraestructura y equipamiento escolar e integrando, con igual fin, aportes comunitarios, sectoriales y de otras jurisdicciones.

ARTÍCULO 20.- Evaluación e Información.

Las autoridades del sector establecerán diferentes formas y mecanismos de evaluación y de control de gestión de los procesos educativos planificados, y de sus resultados, así como también de sus costos en los diferentes niveles, servicios y localizaciones.

Instrumentará un sistema de información ágil y eficaz para guiar la toma de decisiones de política educacional, retroalimentar su planificación, proveer a su adecuado financiamiento, controlar su ejecución y contribuir a regular equitativamente la calidad de las prestaciones.

El Ministerio de Educación informará anualmente a la Legislatura Provincial el estado de la gestión educativa y los criterios y mecanismos de evaluación y de control de gestión aplicados a los procesos educativos planificados, sus resultados y costos en los diferentes niveles, servicios y localizaciones. Dicho informe será publicado en la página web del Ministerio de Educación.

ARTÍCULO 21.- En el ámbito del Consejo Provincial de Políticas Educativas, creado por el artículo 92 de esta Ley, deberá constituirse una Comisión de Evaluación e Información Educativa.

ARTÍCULO 22.- Criterios de Orientación Pedagógica.

Los centros educativos de la Provincia deben desarrollar los procesos de enseñanza - aprendizaje en los diferentes niveles y modalidades del sistema, según los siguientes criterios generales:

a) El respeto por las características individuales y socio-culturales de los alumnos, sus valores integrales, la consideración de sus capacidades, conocimientos y experiencias previas de aprendizaje.

b) El currículum, como proceso dinámico, interactivo, investigativo, integrativo e innovador, se caracteriza por la apertura, la flexibilidad, la integralidad y la regionalización. Orienta la selección pedagógica y organización didáctica que deriven en experiencias educativas apropiadas al desarrollo integral de los alumnos.

c) Los docentes deben orientar los aprendizajes con criterio pedagógico y científico en un ambiente propicio para la participación activa y creadora, promoviendo el desarrollo del pensamiento crítico, la identidad nacional y latinoamericana, la responsabilidad cívica y la formación ética y moral de los educandos, en un marco democrático y solidario.

d) Las estrategias de enseñanza se deben planificar con el propósito de facilitar a los alumnos el logro de actitudes, conocimientos y competencias necesarias y relevantes que posibiliten construir su autoestima y autonomía y orientarse en opciones vocacionales que impliquen su proyecto de vida.

**CAPÍTULO III
ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO**

**Sección Primera:
Estructura General del Sistema**

**Apartado Primero:
Disposiciones Generales**

ARTÍCULO 23.- Estructura de los Servicios Educativos.

La educación sistemática se estructura en niveles, ciclos, modalidades y otras formas educativas. Los niveles son las etapas que configuran organizativamente la educación formal, compuesta por un conjunto de contenidos y competencias, cuya enseñanza - aprendizaje debe adaptarse flexiblemente a los diferentes momentos del proceso evolutivo de los alumnos. Los niveles podrán subdividirse en ciclos, entendidos como unidades formativas articuladas en cada uno de ellos.

Son niveles del sistema educativo provincial la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria y la educación superior.

Las modalidades son las variantes establecidas en el sistema, para adaptarlo a las condiciones, demandas y peculiaridades de los alumnos y para diversificarlo según las necesidades sociales, regionales y económicas de la Provincia. Son modalidades del sistema educativo provincial: la Educación Especial, la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, la Educación en Contextos de Privación de Libertad, la Educación Rural, la Educación Técnico Profesional, la Educación Artística, la Educación Domiciliaria y Hospitalaria y la Educación Intercultural Bilingüe.

ARTÍCULO 24.- El Poder Ejecutivo Provincial podrá adecuar a las condiciones de tiempo y lugar la estructura general descripta en el artículo anterior, resguardando la articulación entre niveles y ciclos y la coherencia entre jurisdicciones.

ARTÍCULO 25.- Reglamento General de la Enseñanza.

El sistema educativo provincial se regula sobre la base de un régimen técnico-administrativo común y de los regímenes especiales, necesarios para su eficiente funcionamiento.

El Ministerio de Educación elaborará el reglamento general de la enseñanza para todos los niveles y modalidades del sistema y los reglamentos especiales que correspondieren, para lo cual será asistido por el Consejo Provincial de Políticas Educativas, además fiscalizará su cumplimiento.

El reglamento general de la enseñanza comprenderá los siguientes aspectos:

- a) Caracterización y organización de los diferentes niveles y modalidades.
- b) Articulación y coordinación entre los niveles y modalidades.
- c) Calendarios y horarios escolares.
- d) Obligatoriedad escolar.
- e) Requisitos de ingreso de los alumnos.
- f) Evaluación y supervisión de la enseñanza.
- g) Promoción, certificación académica y títulos oficiales. Equivalencias, reconocimientos y reválidas.
- h) Desarrollo curricular e innovaciones pedagógicas.
- i) Régimen disciplinario y de convivencia escolar.
- j) Otras normas básicas para la organización y funcionamiento de las instituciones educativas.

ARTÍCULO 26.- Educación Obligatoria. La obligatoriedad escolar se extiende desde la edad de 4 (cuatro) años hasta la finalización del nivel de Educación Secundaria.

**Apartado Segundo:
La Educación Inicial**

ARTÍCULO 27.- La educación inicial constituye la primera unidad pedagógica del sistema educativo provincial. Corresponde a los niños comprendidos en el período que se extiende entre los 45 días y los 5 años de edad. Será obligatoria a partir de los cuatro años, según lo especifica el artículo 26, y tendrá carácter optativo para las restantes edades abarcadas por este nivel, tendiendo a universalizar las salas para niños/as de 3 (tres) años prioritariamente en zonas de vulnerabilidad social.

ARTÍCULO 28.- La educación inicial en la Provincia asegurará la formación integral y asistencia del niño orientándose a la obtención de los siguientes objetivos fundamentales:

- a) Promover el aprendizaje y desarrollo de los niños como personas sujetos de derecho y partícipes activos/as de un proceso de formación integral, miembros de una familia y de una comunidad.
- b) Promover en los niños la solidaridad, autoestima, confianza, cuidado, amistad y respeto a sí mismo y los/as otros/as.
- c) Desarrollar su capacidad creativa y el placer por el conocimiento en las experiencias de aprendizaje.
- d) Promover el juego como contenido de alto valor cultural para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social.
- e) Desarrollar la capacidad de expresión y comunicación a través de los distintos lenguajes, verbales y no verbales: el movimiento, la música, la expresión plástica y la literatura.
- f) Favorecer la formación corporal y motriz a través de la educación física.
- g) Favorecer en los niños el desarrollo progresivo de su identidad y sentido de pertenencia a la familia inserta en la comunidad local, regional, provincial y nacional.
- h) Asegurar la integración y participación de la familia y la comunidad en la acción educativa, en un marco de cooperación y solidaridad.
- i) Atender a las desigualdades educativas de origen social y familiar para favorecer una integración plena de todos/as los/as niños/as en el sistema educativo.
- j) Prevenir y atender en igualdad de oportunidades las necesidades especiales y dificultades de aprendizaje.

ARTÍCULO 29.- Están comprendidas en la presente Ley las Instituciones que brindan educación inicial:

- a) De gestión estatal, pertenecientes tanto a órganos de Gobierno de la educación como a otros organismos gubernamentales,
- b) De gestión privada autorizados por el Ministerio de Educación u otros Organismos estatales.

ARTÍCULO 30.- El Estado Provincial tiene la responsabilidad de:

- a) Expandir los servicios de Educación Inicial.
- b) Promover y facilitar la participación de las familias en el desarrollo de las acciones destinadas al cuidado y educación de sus hijos.
- c) Asegurar el acceso y la permanencia mediante servicios de calidad que garanticen la igualdad de oportunidades, atendiendo especialmente a los sectores menos favorecidos de la población.
- d) Regular, controlar y supervisar el funcionamiento de las instituciones con el objetivo de asegurar la atención, el cuidado y la educación integral de los niños.
- e) Garantizar que la supervisión del nivel será ejercida por personal con título de Profesor de Educación Inicial y experiencia directiva.

ARTÍCULO 31.- La organización de la Educación Inicial tendrá las siguientes características:

- a) Los jardines maternos atenderán a los niños desde los cuarenta y cinco (45) días a los dos (2) años de edad inclusive y los Jardines de Infantes a los niños desde los tres (3) a los cinco (5) años de edad inclusive.
- b) Las certificaciones de cumplimiento de la Educación Inicial obligatoria en cualesquiera de las formas organizativas reconocidas y supervisadas por las autoridades educativas, tendrán plena validez para la inscripción en la Educación Primaria.

ARTÍCULO 32.- Se crearán en el ámbito del Ministerio de Educación mecanismos para la

articulación y/o gestión asociada entre los organismos gubernamentales que atiendan políticas y programas vinculados con la niñez y la familia, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de los/as niños/as establecidos en la Ley Nº 26.061. Tras el mismo objetivo y en función de las particularidades locales o comunitarias, se implementarán otras estrategias de desarrollo infantil, con la articulación y/o gestión asociada de las áreas gubernamentales de desarrollo social, salud y educación, en el ámbito de la educación no formal, para atender integralmente a los niños entre los cuarenta y cinco (45) días y los dos (2) años de edad, con la participación de las familias y otros actores sociales.

ARTÍCULO 33.- Las actividades pedagógicas realizadas en el nivel de Educación Inicial estarán a cargo de personal docente titulado, conforme lo establece la normativa vigente. Dichas actividades pedagógicas serán supervisadas por las autoridades educativas de la Provincia de Córdoba.

**Apartado Tercero:
La Educación Primaria**

ARTÍCULO 34.- La educación primaria constituye la etapa de la educación obligatoria destinada a la formación de los niños a partir de los seis años de edad. Comprenderá seis años de estudio organizados en ciclos.

Las Instituciones educativas que imparten la educación en este nivel son las escuelas primarias.

ARTÍCULO 35.- La educación primaria contribuye decisivamente a la formación integral y asistencia del alumno, creando condiciones favorables para su activa integración familiar y socio - cultural y el desarrollo de los siguientes aprendizajes fundamentales. Sus objetivos son:

a) Garantizar a todos los niños el acceso a un conjunto de saberes comunes que les permitan participar de manera plena y acorde a su edad en la vida familiar, escolar y comunitaria

b) Ofrecer las condiciones necesarias para un desarrollo integral de la infancia en todas sus dimensiones.

c) Brindar oportunidades equitativas a todos los niños para el aprendizaje de saberes significativos en los diversos campos del conocimiento, en especial la lengua y la comunicación, las ciencias sociales, la matemática, las ciencias naturales y el medio ambiente, las lenguas extranjeras, el arte, la ética, la educación física, la tecnología; y, a opción de los padres, la educación religiosa; desarrollando la capacidad de aplicarlas en situaciones de la vida cotidiana

d) Generar las condiciones pedagógicas para el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como para la producción y recepción crítica de los discursos mediáticos.

e) Facilitar la comprensión y el conocimiento de los procesos históricos y sociales y sus relaciones con la identidad regional, nacional y universal.

f) Promover el desarrollo de una actitud y hábito de trabajo y responsabilidad en el estudio, de curiosidad e interés por el aprendizaje, fortaleciendo la confianza en las propias posibilidades de aprender.

g) Desarrollar la iniciativa individual, el trabajo en equipo y prácticas de convivencia solidaria y cooperación.

h) Fomentar el desarrollo de la creatividad y la expresión, el placer estético y la comprensión, conocimiento y valoración de las distintas manifestaciones del arte y otras producciones culturales.

i) Brindar una formación ética que habilite progresivamente para el ejercicio de una ciudadanía responsable y permita asumir los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común, fortaleciendo el sentido de pertenencia regional y nacional, con apertura a la comprensión y solidaridad entre los pueblos.

j) Ofrecer los conocimientos y las estrategias cognitivas necesarias para continuar los estudios en la Educación Secundaria.

k) Brindar oportunidades para una educación física que promueva la formación corporal y motriz y consolide el desarrollo armónico de todos/as los/as niños/as, fomentando especialmente aquellos deportes en equipo.

l) Promover el juego como actividad necesaria para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social.

m) Promover el conocimiento y los valores que permitan el desarrollo de actitudes de protección y cuidado de la salud, el medio ambiente y el patrimonio cultural; apreciando los valores que rigen la vida y la convivencia humana para obrar de acuerdo con ellos.

ARTÍCULO 36.- Con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos fijados para este nivel por la presente Ley las escuelas primarias podrán ser de jornada extendida o completa.

**Apartado Cuarto:
La Educación Secundaria**

ARTÍCULO 37.- La educación secundaria es obligatoria, constituye una unidad pedagógica y organizativa y está destinada a los adolescentes y jóvenes que hayan cumplido el nivel de Educación Primaria. Tiene la finalidad de habilitar a los adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios.

ARTÍCULO 38.- La Educación Secundaria se divide en dos (2) ciclos: Un (1) Ciclo Básico de carácter común a todas las orientaciones y Un (1) Ciclo Orientado, de carácter diversificado según las

distintas áreas del conocimiento, del mundo social y del trabajo. La duración será de seis (6) años y se extenderá un (1) año más en la modalidad técnico profesional y artística, en el marco de sus regulaciones específicas.

ARTÍCULO 39.- Los objetivos de la educación secundaria son:

a) Contribuir a la formación integral de los adolescentes y jóvenes como personas sujetos conscientes de sus derechos y obligaciones, promoviendo el desarrollo de todas sus dimensiones a través de una educación configurada en torno a los valores éticos que les permita desenvolverse en la sociedad practicando el pluralismo libre de toda discriminación; comprometidos con la exigencia de la participación comunitaria; motivados por la solidaridad hacia sus semejantes; preparados para el ejercicio de la vida democrática, en la aceptación y práctica de los Derechos Humanos y la diversidad cultural.

b) Promover prácticas de enseñanza que permitan el acceso al conocimiento como saber integrado, a través de las distintas áreas y disciplinas que lo constituyen fortaleciendo capacidades y hábitos de estudio, de aprendizaje e investigación, de juicio crítico y discernimiento.

c) Formar ciudadanos/as capaces de utilizar el conocimiento como una herramienta para comprender, transformar y actuar crítica y reflexivamente en la sociedad contemporánea.

d) Desarrollar competencias lingüísticas comunicacionales, orales y escritas del idioma nacional; y de comprensión y expresión en una lengua extranjera.

e) Desarrollar las capacidades necesarias para la comprensión y utilización inteligente y crítica de los nuevos lenguajes y herramientas producidos en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación.

f) Estimular la creación artística, la libre expresión, el placer estético y la comprensión de las distintas manifestaciones de la cultura.

g) Promover la formación corporal y motriz a través de la educación física, acorde con los requerimientos del proceso de desarrollo integral de los/as adolescentes y jóvenes.

h) Implementar, en el marco de los proyectos curriculares institucionales, procesos de orientación educacional que contribuyan a las elecciones vocacionales, vinculando a los/as alumnos/as con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia y la tecnología.

ARTÍCULO 40.- El Ministerio de Educación propiciará la vinculación de las instituciones educativas secundarias con el mundo de la producción, el trabajo y otros organismos según su orientación. En este marco podrán realizarse prácticas educativas en las escuelas, empresas, organismos estatales, entidades culturales y gremiales, que faciliten al alumno el conocimiento de las organizaciones, el manejo de tecnologías y le brinde experiencias adecuadas a su formación y orientación vocacional.

Apartado Quinto: La Educación Superior

ARTÍCULO 41.- La educación superior tiene como finalidad promover el progreso de la ciencia y de la cultura y proporcionar formación científica, profesional, humanista y técnica en el más alto nivel, acorde con los avances científicos tecnológicos y las necesidades socio-culturales de la Provincia.- Comprenderá los estudios superiores y universitarios.

ARTÍCULO 42.- Los Institutos de educación superior brindarán una oferta de servicios educativos para la formación docente, y la formación técnico profesional en las áreas socio humanista, científica y artística.

ARTÍCULO 43.- Funciones - La formación docente es parte constitutiva del nivel de Educación Superior y tiene como funciones, entre otras, la formación docente inicial, la formación docente continua, el apoyo pedagógico a las escuelas y la investigación educativa. La formación docente constituye la base para el mejoramiento de la calidad de la educación. La docencia es un trabajo, cuya especificidad se centra en los procesos de transmisión y producción de conocimientos en torno a la enseñanza tendiente al desarrollo integral de las personas con quienes interactúa. Está destinada a la profesionalización de los recursos humanos responsables de orientar el proceso educativo en sus distintos niveles y modalidades. Son funciones de la formación docente:

a) La Formación docente inicial es el proceso pedagógico que posibilita a los y las estudiantes el desarrollo de las capacidades y los conocimientos necesarios para el trabajo docente en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, que los habilitan para el ejercicio profesional.

b) La formación docente continua es el proceso de perfeccionamiento, actualización y capacitación en el ejercicio profesional que realizan los docentes de todos los niveles y modalidades y los agentes educativos que participan en la educación no formal. Se debe garantizar que todos los agentes del sistema educativo puedan acceder a propuestas de formación docente continua que sean relevantes para su desempeño profesional con calidad académica y adecuada a las necesidades de la docencia, sin perjuicio de lo establecido sobre el particular por la negociación colectiva.

c) La investigación educativa: tiene por objetivo el fortalecimiento del desarrollo de investigaciones pedagógicas, sistematización y publicación de experiencias innovadoras que aporten a la reflexión sobre la práctica y a la renovación de las experiencias escolares.

ARTÍCULO 44.- La educación superior de formación científica, humanista, técnica, y artística se organizará en carreras de duración variable, en función de múltiples especialidades, con regímenes flexibles que permitan una adecuada inserción y reconversión laboral acordes con las demandas sociales, culturales y económicas de la Provincia.

ARTÍCULO 45.- El Ministerio de Educación debe desarrollar políticas de articulación entre las Instituciones de educación superior de su dependencia y promover la articulación con las Universidades a fin de facilitar el cambio de modalidad, orientación o carrera, la continuación de los estudios en otros establecimientos, la reconversión de los estudios concluidos, tanto en la formación inicial como en la formación continua.

ARTÍCULO 46.- El Ministerio de Educación debe propiciar la firma de convenios de colaboración mutua entre las autoridades educativas con el sector de la producción y el trabajo a fin de favorecer la realización de prácticas profesionales intracurriculares y/o pasantías laborales de los estudiantes con propósito formativo y garantía de planificación y acompañamiento docente.

ARTÍCULO 47.- El Estado Provincial puede crear, en concordancia con la legislación vigente, centros universitarios y de estudios avanzados procurando la descentralización y destinados a desarrollar actividades de investigación, docencia y extensión en el campo científico, tecnológico y cultural. Generarán nuevas opciones académicas de alta calidad, definida ésta en relación con los avances internacionales del conocimiento y su adecuación a las exigencias del desarrollo provincial.

La estructuración académica, carreras y títulos, gobierno, administración y financiación de dichos centros deberá facilitar su articulación e interrelación con el conjunto del sistema educativo.

ARTÍCULO 48.- El Ministerio de Educación en el marco de acuerdos federales, será responsable de desarrollar acciones de evaluación y seguimiento de los Institutos de Educación Superior como así de autoevaluación institucional de los mismos, que aseguren el cumplimiento de la planificación jurisdiccional y una mejora de la calidad de la educación.

**Sección Segunda:
Modalidades y otras formas de la Educación
Apartado Primero:
La Educación Especial**

ARTÍCULO 49.- La educación especial es la modalidad del sistema educativo que comprende el conjunto de servicios, recursos y procedimientos destinados a garantizar el derecho a la educación de las personas con algún tipo de discapacidad, temporal o permanente.

Por el Principio de inclusión educativa se asegura la integración de los/las alumnos/as con discapacidades en todos los niveles y modalidades según las posibilidades de cada persona.

Asimismo, la escuela especial brinda atención educativa en todas aquellas personas cuyas problemáticas específicas no puedan ser abordadas por la escuela común.

ARTÍCULO 50.- La educación especial deberá asegurar una atención multiprofesional, brindada por equipos interdisciplinarios, que posibilite la identificación y valoración de la discapacidad y/o de las personas con necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, con el objetivo de facilitar su inclusión en los diferentes niveles del sistema de enseñanza, particularmente los obligatorios y un seguimiento continuo en los aspectos afectivo, intelectual, familiar y social.

En el marco de un sistema educativo inclusivo, el Ministerio de Educación en acuerdo con otros Organismos garantizará la participación de las personas con algún tipo de discapacidad en propuestas de capacitación laboral, deportes, recreación y desarrollo de la expresión y creación cultural.

Los programas de formación docente, en sus distintas modalidades, y de las carreras afines a esta temática contemplarán aspectos curriculares referidos a la educación especial.

ARTÍCULO 51: Con el propósito de asegurar el derecho a la educación, la integración escolar y favorecer la inserción social de las personas con discapacidades, temporales o permanentes, el Ministerio de Educación de la Provincia dispondrá las medidas necesarias para:

- a) Posibilitar una trayectoria educativa integral que permita el acceso a los saberes tecnológicos, artísticos y culturales.
- b) Contar con el personal especializado suficiente que trabaje en equipo con los/as docentes de la escuela común
- c) Asegurar la cobertura de los servicios educativos especiales, el transporte, los recursos técnicos y materiales necesarios para el desarrollo del currículo escolar.
- d) Propiciar alternativas de continuidad para su formación a lo largo de toda la vida
- e) Garantizar la accesibilidad física de todos los edificios escolares.

ARTÍCULO 52.- El Ministerio de Educación de la Provincia creará las instancias institucionales y técnicas necesarias para la adecuación, orientación y sostenimiento de la trayectoria escolar más conveniente de los/as alumnos/as con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles de la enseñanza obligatoria, así como también las normas que regirán los procesos de evaluación y certificación escolar. Asimismo, participará en mecanismos de articulación entre ministerios y otros organismos del Estado que atienden a personas con discapacidades, temporales o permanentes, para garantizar un servicio eficiente y de calidad.

**Apartado Segundo:
La Educación Permanente de jóvenes y adultos**

ARTÍCULO 53.- La Educación de Jóvenes y Adultos es la modalidad educativa destinada a garantizar la alfabetización y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a quienes no lo hayan

completado en la edad establecida reglamentariamente y a brindar capacitación técnico profesional de la población adulta con el fin de lograr el constante mejoramiento de su formación individual y su integración social, abriendo posibilidades de educación a lo largo de toda la vida.

ARTÍCULO 54.- El Ministerio de Educación deberá articular los programas y acciones de educación para jóvenes y adultos con acciones de otros Organismos gubernamentales referidos al área como también con el mundo de la cultura, de la producción y el trabajo para poder brindar así un servicio eficiente y de calidad.

ARTÍCULO 55.- La organización Curricular e Institucional de la Educación de Jóvenes y Adultos responderá a los siguientes objetivos y criterios:

- a) Brindar una formación básica que permita adquirir conocimientos y desarrollar las capacidades de expresión, comunicación, relación interpersonal y de construcción del conocimiento, atendiendo las particularidades socioculturales, laborales, contextuales y personales de la población destinataria.
- b) Desarrollar la capacidad de participación en la vida social, cultural, política y económica y hacer efectivo su derecho a la ciudadanía democrática
- c) Mejorar su formación profesional y/o adquirir una preparación que facilite su inserción laboral
- d) Incorporar en sus enfoques y contenidos básicos la equidad de género y la diversidad cultural
- e) Promover la inclusión de la población adulta mayor y de las personas con discapacidades temporales o permanentes
- f) Diseñar una estructura curricular modular basada en criterios de flexibilidad y apertura
- g) Otorgar certificaciones parciales y acreditar los saberes adquiridos a través de la experiencia
- h) Implementar sistemas de equivalencias que permitan y acompañen la movilidad de las personas en el sistema educativo provincial
- i) Desarrollar acciones educativas presenciales y/o a distancia, asegurando la calidad e igualdad de sus resultados
- j) Promover, a través de la firma de convenios, el desarrollo de proyectos educativos con la participación y vinculación de los sectores laborales o sociales de pertenencia de los estudiantes
- k) Promover el acceso al conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías

Apartado Tercero:

La Educación en contexto de privación de libertad

ARTÍCULO 56.- La educación en contextos de privación de libertad es la modalidad del sistema educativo destinada a garantizar el derecho a la educación de todas las personas privadas de libertad para promover su formación integral y desarrollo pleno sin limitación ni discriminación alguna vinculada a la situación de encierro. Este derecho será puesto en conocimiento de todas las personas privadas de libertad, en forma fehaciente, desde el momento de su ingreso a la institución.

ARTÍCULO 57.- La Modalidad de Educación para Jóvenes y Adultos en la Provincia de Córdoba, será abarcativa de la Educación en contextos de privación de libertad de personas adultas y de menores en conflicto con la ley penal.

Apartado Cuarto:

La Educación Rural

ARTÍCULO 58.- La Educación Rural es la modalidad del sistema educativo destinada a garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de formas adecuadas a las necesidades y particularidades de la población que habita en zonas rurales.

ARTÍCULO 59.- La educación rural se desarrollará conforme los siguientes criterios y objetivos:

- a) El enfoque global del proceso educativo que partiendo del conocimiento de la realidad local y regional, integre a los distintos grupos de edad y a los diversos problemas de la producción y de la vida comunitaria.
- b) La participación de la comunidad en las distintas fases de dicho proceso, promoviendo diseños institucionales que permitan a los alumnos mantener los vínculos con su núcleo familiar y su medio local de pertenencia
- c) La aplicación de modelos de organización escolar adecuados a cada contexto, tales como agrupamientos de instituciones, salas plurigrados y grupos multiedad, instituciones que abarquen varios niveles en una misma unidad educativa, escuelas de alternancia, escuelas itinerantes u otras.
- d) Proveer la instrumentación de estrategias y recursos pedagógicos y materiales que garanticen la escolarización de los estudiantes, la accesibilidad, permanencia y egreso, a través de programas específicos (becas, comedores escolares, transporte, salud, recursos informáticos, etc.).
- e) El accionar intersectorial coordinado de los agentes de los distintos servicios con las comunidades rurales, integrando redes intersectoriales con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a fin de coordinar la cooperación de los distintos sectores para poder brindar así un servicio eficiente y de calidad.
- f) La dignificación del trabajo manual integrándolo, en los procesos productivos, con el trabajo intelectual, organizando servicios de educación no formal que contribuyan a la capacitación laboral y la promoción cultural de la población rural
- g) El rescate y fomento de los valores y expresiones culturales de las comunidades rurales.
- h) El estímulo a la participación y formación de organizaciones sociales representativas, contribuyendo al enfoque democrático de su actividad.

Apartado Quinto:
La Educación Técnico profesional

ARTÍCULO 60.- La educación técnico profesional es la modalidad de la Educación Secundaria y de la Educación Superior responsable de la formación de técnicos medios y técnicos superiores en áreas ocupacionales específicas y de la formación profesional, promoviendo en sus integrantes el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores, principios éticos y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socio productivo y para su inserción como ciudadano pleno.

ARTÍCULO 61.- La educación técnico profesional se desarrollará según los siguientes criterios y objetivos:

a) Formar técnicos medios y técnicos superiores en áreas ocupacionales específicas, cuya complejidad requiera la disposición de competencias profesionales que se desarrollan a través de procesos sistemáticos y prolongados de formación para generar en las personas capacidades profesionales que son la base de esas competencias.

b) Contribuir al desarrollo integral de los alumnos y las alumnas, y a proporcionarles condiciones para el crecimiento personal, laboral y comunitario, en el marco de una educación técnico profesional continua y permanente.

c) Desarrollar procesos sistemáticos de formación que articulen el estudio y el trabajo, la investigación y la producción, la complementación teórico- práctico en la formación, la formación ciudadana, la humanística general y la relacionada con campos profesionales específicos.

d) Desarrollar trayectorias de profesionalización que garanticen a los alumnos y alumnas el acceso a una base de capacidades profesionales y saberes que les permita su inserción en el mundo del trabajo, así como continuar aprendiendo durante toda su vida.

e) Desarrollar oportunidades de formación específica propia de la profesión u ocupación abordada y prácticas profesionalizantes dentro del campo ocupacional elegido.

f) Favorecer el reconocimiento y certificación de saberes y capacidades así como la reinserción voluntaria en la educación formal y la prosecución de estudios regulares en los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo.

g) Favorecer niveles crecientes de equidad, calidad, eficiencia y efectividad de la Educación Técnico Profesional, como elemento clave de las estrategias de inclusión social, de desarrollo y crecimiento socioeconómico del país, de la provincia y sus regiones, de innovación tecnológica y de promoción del trabajo decente.

h) Articular las instituciones y los programas de Educación Técnico Profesional con los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la producción y el trabajo.

i) Promover la vinculación entre el sector productivo y la Educación Técnico Profesional.

j) Promover y desarrollar la cultura del trabajo y la producción para el desarrollo sustentable, orientados por criterios de equidad y justicia social.

ARTÍCULO 62.- Las instituciones de gestión estatal o privada que brindan educación técnico profesional, se orientarán a:

a) Impulsar modelos innovadores de gestión que incorporen criterios de calidad y equidad para la adecuación y el cumplimiento a nivel institucional de los objetivos y propósitos de la normativa que regula la Educación Técnico Profesional.

b) Ejecutar las estrategias para atender las necesidades socio-educativas de distintos grupos sociales establecidas en los programas nacionales y jurisdiccionales, y desarrollar sus propias iniciativas con el mismo fin.

c) Establecer sistemas de convivencia basados en la solidaridad, la cooperación y el diálogo con la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa.

d) Contemplar la constitución de cuerpos consultivos o colegiados donde estén representadas las comunidades educativas y socio-productivas.

e) Generar proyectos educativos que propicien, en el marco de la actividad educativa y previa aprobación de la autoridad ministerial, la producción de bienes y servicios con la participación de alumnos y docentes, a través de talleres, laboratorios, pasantías, proyectos productivos articulados con otras instituciones, proyectos didácticos/productivos institucionales orientados a satisfacer necesidades del medio socio-cultural o de la misma institución, micro-emprendimientos a cargo de alumnos, desarrollo de actividades técnico profesionales, empresas o instituciones productivas simuladas y/o cualquier otra modalidad pedagógico-productiva que se implemente. Dichos proyectos se implementarán con el propósito que los estudiantes consoliden, integren y amplíen las competencias y saberes que corresponden con el perfil profesional en el que se están formando, referenciadas en situaciones de trabajo desarrolladas dentro o fuera del establecimiento educativo, y que se ajusten a las condiciones y disposiciones previstas para la Educación Técnico Profesional.

f) Recuperar y desarrollar propuestas pedagógicas y organizativas que formen técnicos con capacidades para promover el desarrollo rural y emprendimientos asociativos y/o cooperativos, sobre la base de las producciones familiares, el cuidado de ambiente y la diversificación en términos de producción y consumo, así como propiciar la soberanía alimentaria.

ARTÍCULO 63.- Las instituciones de educación técnico profesional de nivel medio y nivel superior están facultadas para implementar programas de formación profesional continua en su campo de especialización.

ARTÍCULO 64.- Las instituciones de educación técnico profesional de nivel medio y nivel superior

deberán ser autorizadas por el Ministerio de Educación al manejo autónomo del propio producido que surja como Proyecto Escuela – Trabajo – Producción, con carácter educativo. En ningún caso los alumnos asumirán obligaciones que excedan el sentido pedagógico de los proyectos ni serán expuestos a cualquier forma de trabajo informal.

ARTÍCULO 65.- El Ministerio de Educación regulará la vinculación entre el sector productivo y la Educación Técnico Profesional y promoverá convenios que las instituciones de Educación Técnico Profesional puedan suscribir con Organizaciones No Gubernamentales, empresas, empresas recuperadas, cooperativas, emprendimientos productivos desarrollados en el marco de los planes de promoción de empleo y fomento de los micro emprendimientos, Sindicatos, Universidades Nacionales, Institutos Nacionales de la Industria y del Agro, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la Comisión Nacional de Energía Atómica, los institutos de formación docente u otros organismos del Estado y/o privados con competencia en el desarrollo científico tecnológico, tendientes a cumplimentar los objetivos establecidos para la Educación Técnico Profesional por la normativa vigente.

ARTÍCULO 66.- Cuando las prácticas educativas se realicen fuera del ámbito escolar, se garantizará la seguridad de los alumnos y la auditoría, dirección y control a cargo de los docentes, por tratarse de procesos de aprendizaje y no de producción a favor de los intereses económicos que pudieran caber a las empresas. En ningún caso los alumnos sustituirán, competirán o tomarán el lugar de los trabajadores de la empresa.

ARTÍCULO 67.- La formación profesional tiene como propósitos específicos preparar, actualizar y desarrollar las capacidades de las personas para el trabajo, cualquiera sea su situación educativa inicial, a través de procesos que aseguren la adquisición de conocimientos científico-tecnológicos y el dominio de las competencias básicas, profesionales y sociales requerido por una o varias ocupaciones definidas en un campo ocupacional amplio, con inserción en el ámbito económico-productivo.

ARTÍCULO 68.- La formación profesional es el conjunto de acciones cuyo propósito es la formación sociolaboral para y en el trabajo, dirigida tanto a la adquisición y mejora de las cualificaciones como a la recualificación de los trabajadores, y que permite compatibilizar la promoción social, profesional y personal con la productividad de la economía nacional, regional y local. También incluye la especialización y profundización de conocimientos y capacidades en los niveles superiores de la educación formal.

ARTÍCULO 69.- La formación profesional admite formas de ingreso y de desarrollo diferenciadas de los requisitos académicos propios de los niveles y ciclos de la educación formal.

ARTÍCULO 70.- Las ofertas de formación profesional podrán contemplar la articulación con programas de alfabetización o de terminalidad de los niveles y ciclos comprendidos en la escolaridad obligatoria y post-obligatoria.

ARTÍCULO 71.- Las instituciones educativas y los cursos de formación profesional certificados por el Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico Profesional y el Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones podrán ser reconocidos en la educación formal.

LA EDUCACIÓN NO FORMAL

ARTÍCULO 72.- La educación no formal configura una actividad pedagógica de carácter participativo, que se desarrollará a través de un conjunto de servicios, programas y acciones, destinados a satisfacer las necesidades educativas no atendidas o cubiertas en forma insuficiente por el sistema escolar, en el marco de la educación permanente. El Estado promoverá la educación no formal, para el desarrollo de:

a) Estrategias que atiendan prioritariamente las necesidades, intereses y problemas de los diversos sectores poblacionales

b) Estrategias que apoyen el desarrollo económico de la Provincia, estimulando las capacidades innovadoras y de organización de la población e incorporando efectivamente, a través de la educación, los avances científicos y tecnológicos que permitan mejorar la producción y las condiciones de trabajo.

c) La participación de diversos agentes educativos no convencionales facilitando el desenvolvimiento de la función educativa de la comunidad a través de sus instituciones, organizaciones representativas, empresas, familias y personas y promoviendo la utilización creativa y crítica de los medios masivos de comunicación.

d) La integración y coordinación de acciones entre organismos públicos, no gubernamentales y privados, tendientes al abordaje conjunto de las demandas sociales con el fin de racionalizar el uso de los recursos existentes, ampliar la variedad y aumentar la oferta educativa.

ARTÍCULO 73.- Las Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que brinden servicios de Educación No Formal deberán consignar en toda su documentación, publicidad, comunicación, diplomas o certificados la leyenda "Sin Validez Oficial", sin ningún otra inscripción o aditamento que pueda inducir a interpretar como reconocimiento o validez oficial de la enseñanza que imparte.

Apartado Sexto: La Educación Artística

ARTÍCULO 74.- La educación artística es la modalidad de la formación en distintos lenguajes del arte para niños, adolescentes, jóvenes y adultos de todos los niveles y modalidades.

ARTÍCULO 75.- El Ministerio de Educación garantizará una educación artística de calidad para todos los alumnos del Sistema Educativo, que fomente y desarrolle la sensibilidad y la capacidad creativa de cada persona, en un marco de valoración y protección del patrimonio natural y cultural, material y simbólico de las diversas comunidades que integran la Provincia.

Apartado Séptimo:

La educación domiciliaria y hospitalaria

ARTÍCULO 76.- La educación domiciliaria y hospitalaria es la modalidad del sistema educativo en los niveles de educación Inicial, Primaria y Secundaria destinada a garantizar el derecho a la educación de los alumnos que, por razones de salud, se ven imposibilitados de asistir con regularidad a una institución educativa en los niveles de la educación obligatoria.

ARTÍCULO 77.- El Ministerio de Educación procurará los recursos necesarios a los fines de garantizar la igualdad de oportunidades a los alumnos, permitiendo la continuidad de sus estudios y su reinserción en el sistema educativo común, cuando ello sea posible.

Apartado Octavo:

La educación intercultural bilingüe

ARTÍCULO 78.- La educación Intercultural Bilingüe es la modalidad del sistema educativo de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria que garantiza el derecho de los pueblos indígenas a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica, promoviendo un diálogo mutuamente enriquecedor de conocimientos y valores entre los pueblos indígenas y poblaciones étnica, lingüística y culturalmente diferentes, propiciando el reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias.

Sección Tercera:

Educación de Gestión Privada

ARTÍCULO 79.- El Estado Provincial reconocerá, dentro de los principios de la Constitución y de esta Ley, la libertad de la iniciativa privada para crear y gestionar institutos de enseñanza en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, los que estarán sujetos al reconocimiento, autorización y supervisión del Ministerio de Educación.

Tendrán derecho a prestar estos servicios la Iglesia Católica, las confesiones religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos, las sociedades cooperativas, organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones, fundaciones y otras personas físicas y jurídicas.

ARTÍCULO 80.- La enseñanza de Gestión Privada se imparte en los institutos debidamente reconocidos. Su funcionamiento se regula por una ley especial que establece las condiciones para su reconocimiento y para la cooperación económica del Estado a aquéllos que no persigan fines de lucro.

El Poder Ejecutivo debe disponer un organismo específico para el contralor y orientación de éstos institutos.

ARTÍCULO 81.- Los Institutos de gestión privada tienen los siguientes derechos y deberes:

Derechos: crear, gestionar y sostener establecimientos educativos; matricular, evaluar y emitir certificados y títulos oficiales con validez nacional; nombrar y promover a su personal directivo, docente, administrativo y auxiliar; formular planes y programas de estudio; elaborar el proyecto educativo institucional de acuerdo con su ideario; participar del planeamiento educativo y brindar formación docente continua.

Deberes: cumplir con la normativa y los lineamientos de la política educativa nacional y provincial; ofrecer servicios educativos que respondan a necesidades de la comunidad; brindar toda la información necesaria para la supervisión pedagógica y el control contable y laboral por parte del Estado.

Sección Cuarta:

La Educación a Distancia

ARTÍCULO 82.- La educación a Distancia es una opción pedagógica y didáctica para jóvenes y adulto aplicable a distintos niveles del sistema educativo, que coadyuva al logro de los objetivos de la política educativa y puede integrarse tanto a la educación formal como a la educación no formal.

ARTÍCULO 83.- A efectos de esta Ley, la educación a distancia se define como la opción pedagógica y didáctica donde la relación docente - alumno se encuentra separada en el tiempo y/o en el espacio, durante todo o gran parte del proceso educativo, en el marco de una estrategia pedagógica integral que utiliza soportes materiales y recursos tecnológicos diseñados especialmente para que los/as alumnos/as alcancen los objetivos de la propuesta educativa.

ARTÍCULO 84.- El Ministerio de Educación a través de las Direcciones de Nivel que corresponda deberá supervisar la veracidad de la información difundida desde las instituciones, la estricta coincidencia entre dicha información y la propuesta autorizada e implementada y el cumplimiento de la normativa federal y jurisdiccional correspondiente.

TÍTULO TERCERO

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN

CAPÍTULO I

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL

**Sección Primera:
El Ministerio de Educación**

ARTÍCULO 85.- El Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación será el órgano del Poder Ejecutivo Provincial responsable de la planificación, organización, gobierno, administración y fiscalización generales del área, de acuerdo con el principio constitucional de centralización política y normativa.

ARTÍCULO 86.- Unidades de Organización

El Ministerio de Educación dispondrá de las secretarías, subsecretarías, direcciones y otras unidades de organización necesarias para el más adecuado cumplimiento de sus competencias generales, en concordancia con la legislación vigente que faculta al Poder Ejecutivo a autorizar su funcionamiento.

ARTÍCULO 87.- Funciones del Ministerio

El Ministerio de Educación desarrollará las siguientes funciones generales:

- a) Garantizar el cumplimiento y respeto de los principios constitucionales, de esta Ley y sus reglamentaciones;
- b) Organizar, fiscalizar y evaluar el sistema educativo provincial en todos sus niveles y modalidades;
- c) Elaborar y ejecutar la política general del área considerando las propuestas acordadas en los Organismos de participación y consulta establecidos en la presente Ley.
- e) Preparar y ejecutar el programa presupuestario anual correspondiente al área;
- f) Planificar, instrumentar y difundir investigaciones e innovaciones destinadas al mejoramiento de la inclusión y la calidad educativa;
- g) Promover la formación y capacitación de sus agentes;
- h) Desarrollar acciones de cooperación e intercambio con organismos provinciales, nacionales e internacionales;
- i) Evaluar el rendimiento general del sistema, asistido por el Consejo de Políticas Educativas.

ARTÍCULO 88.- La administración del sistema educativo en el nivel regional será desconcentrada funcional y territorialmente, a fin de adaptar los servicios con eficacia, eficiencia y oportunidad a las necesidades del mismo.

**Sección Segunda:
El Consejo Provincial de Políticas Educativas**

ARTÍCULO 89.- Créase en el ámbito del Ministerio de Educación el Consejo Provincial de Políticas Educativas, el que estará conformado por representantes de los Ministerios de Educación y de Ciencia y Tecnología, de la totalidad de las universidades con asiento en la Provincia, sean públicas o privadas, de entidades gremiales del sector educativo, de representantes del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de las Entidades representativas de las Instituciones educativas e Gestión Privada; así también, por representantes de los distintos organismos comprometidos con la temática, a quienes el Ministro de Educación o quien él designe podrá cursar las invitaciones pertinentes.

ARTÍCULO 90.- El Consejo Provincial de Políticas Educativas estará integrado por dos representantes, uno titular y otro suplente, designados por cada uno de los organismos integrantes del mismo y su coordinación será ejercida por el Ministro de Educación.

ARTÍCULO 91.- El Consejo Provincial de Políticas Educativas tendrá carácter consultivo, asesorando y colaborando con el Ministerio de Educación en lo que se refiere a:

- a. Proponer cuestiones que, a su criterio, resulten necesarias para la elaboración de las políticas educativas, produciendo informes que las avalen y que sean consecuencia del análisis pertinente.
- b. Proponer acciones y medidas que contribuyan al cumplimiento de las leyes educativas nacional y provincial.
- c. Sugerir la modificación de la legislación vigente con el propósito de que aquella se ajuste a la realidad imperante.
- d. Procurar la coordinación de las acciones a implementar en la Provincia, a los efectos de fortalecer en términos de inclusión, equidad, calidad y pertinencia el servicio educativo brindado en todos sus niveles y modalidades.
- e. Ejecutar tareas de monitoreo y evaluación de los resultados de las actividades desarrolladas en el marco de las políticas o acciones por dicho organismo propuestas.
- f. Impulsar acciones conducentes al relevamiento de situaciones que requieran de medidas en materia de política educativa, como así también de los recursos, programas, legislación, investigación y estudios a ellas referidas
- g. Proponer alternativas para la optimización de los recursos que sean asignados a los fines de la implementación de políticas en materia educativa.
- h. Promover y facilitar la articulación de la Educación Superior prevista en el artículo 45 principalmente en lo atinente a la formación docente inicial y continua como a la investigación educativa. A esos fines se deberá constituir en el seno del Consejo Provincial de Políticas Educativas una comisión permanente con la participación de los sectores involucrados.

ARTÍCULO 92.- La Comisión de Evaluación e Información Educativa constituida por el art. 21 en el ámbito del Consejo Provincial de Políticas Educativas, estará integrado por representantes de dicho Consejo, del Ministerio de Educación y miembros de la comunidad académica y científica de reconocida trayectoria en la

materia; la misma tendrá por funciones:

- a) Proponer criterios y modalidades en los modos de construcción de las herramientas de Información y Evaluación de la educación.
- b) Participar en el seguimiento de los procesos de Información y evaluación del Sistema Educativo.
- c) Participar en la difusión y utilización de la información generada por dichos procesos.
- d) Asesorar al Ministerio de Educación en todo lo que hace a la Información y Evaluación de la Educación.

ARTÍCULO 93.- El Consejo Provincial de Políticas Educativas deberá ser convocado en forma ordinaria por lo menos cuatro veces en el año, preferentemente en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre, previo acuerdo con la Coordinación, respecto de la fecha y el temario. Sin perjuicio de ello, el Señor Ministro de Educación podrá convocarlo en forma extraordinaria cuando lo estime conveniente o a solicitud del propio Consejo para el tratamiento de temas extraordinarios y de carácter urgente. Asimismo, podrá disponer la formación de comisiones especiales. En tal caso se deberá determinar: su duración, la finalidad a cumplir y los plazos para elevar sus despachos al Consejo.

El Consejo procurará producir los informes y propuestas por consenso. Cuando esto no se logre, se deberá consignar todas las opiniones disidentes con los fundamentos que las avalen.

El Consejo Provincial de Educación Técnica y Trabajo

ARTÍCULO 94.- Se crea el "Consejo Provincial de Educación Técnica y Trabajo", como ámbito de participación para la formulación y coordinación de las políticas y estrategias provinciales en materia de educación técnica profesional de nivel Medio y Superior y de la formación profesional, a los efectos de fortalecer, en términos de calidad y pertinencia, la formación técnico profesional de los jóvenes y adultos y su enlace con el mundo productivo.

ARTÍCULO 95.- El Consejo Provincial de Educación Técnica y Trabajo tendrá carácter consultivo, asesorando y colaborando en lo que se refiere a:

- a. Establecer mecanismos de consulta y colaboración con los sectores sociales -empresarios, de los trabajadores y de las asociaciones intermedias- a fin de receptar los aportes al diseño y ejecución de las políticas de fortalecimiento y sustentabilidad de la Educación técnico profesional en la Provincia.
- b. Proponer y/o elaborar para su aprobación los trayectos y programas de formación Técnico - Profesional teniendo en cuenta las demandas regionales.
- c. Promover la terminalidad educativa de la población joven y adulta, así como su incorporación en procesos de educación continua
- d. Promover la formación y actualización docente en su relación con la modernidad del mundo productivo.
- e. Promover la vinculación de la Provincia y su reconocimiento ante organismos provinciales, nacionales e internacionales.
- f. Asesorar respecto de las tendencias del desarrollo regional, de las nuevas tecnologías incorporadas a la producción y el trabajo y de las necesidades de capacitación de los distintos sectores, promoviendo la articulación entre las ofertas de los distintos Ministerios.

ARTÍCULO 96.- El Consejo Provincial de Educación Técnica y Trabajo estará integrado por los señores Ministros de Educación, de Industria, Comercio y Trabajo, de Ciencia y Tecnología y de Agricultura, Ganadería y Alimentos. Contará además con dos representantes (1 titular y 1suplente) proveniente de los sectores universitario, empresarial, de los trabajadores y de las asociaciones intermedias; de las Asociaciones Gremiales de Educación y de las entidades representativas de las Instituciones educativas de gestión privada.

ARTÍCULO 97.- La Presidencia del Consejo será ejercida en forma rotativa cada doce meses por los señores Ministros de Educación y de Industria, Comercio y Trabajo

Este Consejo será coordinado por un representante del Ministerio de Educación, designado a tal efecto.

Todos los integrantes del Consejo, desempeñarán sus funciones en forma honoraria, sin derecho a compensación ni retribución de ninguna naturaleza.

CAPÍTULO II LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ARTÍCULO 98.- Las Instituciones Educativas

Las Instituciones educativas constituyen la unidad pedagógica del sistema, responsables de los procesos de enseñanza y aprendizaje destinados al logro de los objetivos establecidos por esta Ley.

ARTÍCULO 99.- La Comunidad Educativa.

Para el cumplimiento de lo establecido en el art. anterior las Instituciones Educativas deberán favorecer y articular la participación de los distintos actores que constituyen la comunidad educativa: directivos, docentes, no docentes, los padres, madres y/o tutores, alumnos, profesionales de los equipos de apoyo, cooperadoras escolares y otros representantes del medio local comprometidos con la función educativa de la Institución.

ARTÍCULO 100.- El Proyecto Educativo Institucional.

Las Instituciones educativas disponen de la autonomía pedagógica necesaria para elaborar y

ejecutar su proyecto institucional. Este se planificará y desarrollará respetando los lineamientos y objetivos generales de la política educacional, atendiendo a las exigencias específicas de la realidad regional y local y considerando las posibilidades operativas de cada Institución.

ARTÍCULO 101.- Las Instituciones Educativas en el marco de las políticas definidas y condiciones habilitadas por el Ministerio de Educación, adoptan para su organización los siguientes criterios:

- a) Definir su proyecto educativo con la participación de todos sus integrantes, respetando los principios y objetivos enunciados en esta Ley.
- b) Promover modos de organización institucional que garanticen dinámicas democráticas de convocatoria y participación de los/as alumnos/as en la experiencia escolar.
- c) Adoptar el principio de no discriminación en el acceso y trayectoria educativa de los/as alumnos/as.
- d) Desarrollar procesos de auto evaluación institucional con el propósito de revisar las prácticas pedagógicas y de gestión.
- e) Realizar adecuaciones curriculares, en el marco de los lineamientos curriculares provinciales y federales, para responder a las particularidades y necesidades de su alumnado y su entorno.
- f) Definir su código de convivencia.
- g) Facilitar iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la investigación pedagógica y de la extensión.
- h) Promover la participación de la comunidad a través de la cooperación escolar en todos los establecimientos educativos de gestión estatal.
- i) Promover experiencias educativas fuera del ámbito escolar, con el fin de permitir a los/as estudiantes conocer la cultura nacional, experimentar actividades físicas y deportivas en ambientes urbanos y naturales y tener acceso a las actividades culturales de su localidad y otras.

ARTÍCULO 102.- Los Supervisores.

Los supervisores del sistema integrarán el equipo técnico - docente de las distintas Direcciones del Sistema Educativo y desempeñan la tarea de asesorar y apoyar a las instituciones educativas para el mejor desarrollo de su proyecto institucional.

El acceso al cargo de supervisor se efectuará con arreglo a las condiciones establecidas por los estatutos y normas reglamentarias que regulan la carrera docente.

ARTÍCULO 103.- El Director.

Cada Institución educativa estará a cargo de un Director, que podrá ser apoyado en sus funciones por un equipo de gestión educativa conformado de acuerdo a las características de cada escuela. El acceso a estos cargos se efectúa con arreglo a las condiciones establecidas por los estatutos y normas reglamentarias que regulan la carrera docente.

ARTÍCULO 104.- Las instituciones de educación superior serán apoyadas en su gestión a través de organismos colegiados, que favorezcan la participación de los docentes y de los estudiantes en el gobierno de la institución y mayores grados de decisión en el diseño e implementación de su proyecto institucional.

ARTÍCULO 105.- Organismos de Apoyo.

Las instituciones educativas podrán propiciar la creación y organización de asociaciones de apoyo a su accionar, tales como asociaciones cooperadoras, clubes de madres, cooperativas de alumnos, docentes y padres. Estos organismos tendrán como finalidad movilizar, captar y administrar medios y recursos para cumplir con las actividades programadas.

El Estado Provincial debe dotar de un sistema normativo que posibilite un procedimiento ágil y flexible para su constitución, administración, formas periódicas y democráticas de elección de autoridades y todo aquello que haga a su mejor integración y funcionamiento.

ARTÍCULO 106.- Competencias de Los Municipios.

Una Ley Especial establecerá y reglamentará las competencias y atribuciones de los municipios en materia educativa, las que se ejercerán en forma coordinada y concertada con el Gobierno Provincial, asegurando su concordancia con la presente ley general.

Dicha norma preverá la realización de convenios entre ambos niveles de gobierno, en los cuales se acordarán las condiciones de cooperación y participación correspondientes a la creación, construcción, mantenimiento y equipamiento de las instituciones educativas, así como su regulación pedagógica, académica y administrativa.

TÍTULO CUARTO FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN

CAPÍTULO ÚNICO Fuentes de Financiamiento

ARTÍCULO 107.- LA Provincia garantizará para el Sistema Educativo un porcentaje mínimo de recursos en cada ejercicio no inferior al treinta y cinco por ciento (35 %) del Presupuesto General anual. Para dar cumplimiento a dicha obligación y a los demás objetivos fijados en la presente ley, el Gobierno de la Provincia de Córdoba asignará los fondos presupuestarios que fueren necesarios, afectando recursos tributarios y/o no tributarios, corrientes y/o extraordinarios y en su caso, propiciará la creación de tributos (impuestos, tasas retributivas de servicios y/u otros), y/o tomará financiamiento del sistema financiero nacional y/o

internacional.

ARTÍCULO 108.- Las Instituciones educativas de Gestión Privada podrán ser gratuitas o aranceladas. En este último caso, podrán combinar para su financiamiento el aporte estatal y los aranceles educacionales.

**TÍTULO QUINTO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS y TRANSITORIAS**

ARTÍCULO 109 Derógase la Ley Provincial Nº 8113 del año 1991.

ARTÍCULO 110.- Las modificaciones de planes y programas de estudio que pudiesen llevarse adelante como consecuencia de la aplicación de la presente Ley no podrán causar perjuicio moral y/o patrimonial a los trabajadores de la educación. El Ministerio de Educación deberá efectuar las adecuaciones que correspondan a cada caso.

ARTÍCULO 111.- A fin de lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente Ley en especial a los referidos a la obligatoriedad escolar tanto de nivel inicial como de nivel secundario y la jornada extendida de nivel primario (artículos 26, 27, 36 y 37) además de alcanzar los acuerdos alcanzados en el Compromiso por la Educación firmado por los referentes de las fuerzas políticas de la Provincia en el marco del Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba(COPEC); se establece las siguientes metas a alcanzar durante los próximos cuatro años:

I) Educación Inicial: Extender la educación Inicial a fin de garantizar la misma para los niños y niñas desde sus primeros años de vida que permita un mejor desarrollo de la trayectoria escolar futura.

I a) Incrementar las salas de tres años, alcanzando una cobertura del 100% en contextos sociales desfavorables, dentro de los próximos tres años para lo:

- Se prevé la creación de 160 nuevas salas de 3 años, conforme el siguiente detalle:

Año 2011: 60 salas

Año 2012: 50 salas

Año 2013: 50 salas

I b) Salas de 4 años: Lograr el cumplimiento de la obligatoriedad de la sala de cuatro años dentro de los próximos cinco años para lo cual

- Se prevé la creación de 226 nuevas salas de 4 años, conforme el siguiente detalle:

Año 2011: 100 salas

Año 2012: 50 salas

Año 2013: 50 salas

Año 2014: 26 salas

Asimismo y a fin de dicha creación, resulta necesario la construcción de nuevas aulas, según se detalla:

Año 2011: 45 aulas para sala de 4 años

Año 2012: 50 aulas para sala de 4 años y 50 aulas para sala de 3 años

Año 2013: 50 aulas para sala de 4 años y 50 aulas para sala de 3 años

Año 2014: 26 aulas para sala de 4 años.

II) Asegurar la escolarización de todos los niños en la educación de nivel primario y nivel secundario en condiciones satisfactorias:

II a) Aumentar, hasta alcanzar el 100% el número de escuelas primarias de jornada extendida o completa, principalmente en el segundo ciclo a fin de favorecer una mejor articulación con el nivel secundario, dentro de los próximos cinco años para lo cual deberá:

Se prevé la incorporación de 398 escuelas primarias en Programa de Jornada extendida y conforme el siguiente detalle:

Año 2011: 200 escuelas

Año 2012: 98 escuelas

Año 2013: 50 escuelas

Año 2014: 50 escuelas

Asimismo se prevé que el total de secciones de segundo ciclo a incorporar entre los años 2011 y 2015 asciende a 3.188 secciones.

Asimismo y a fin de dicha creación, resulta necesario la construcción de nuevas aulas, según se detalla:

Año 2011: 100 aulas

Año 2012: 100 aulas

Año 2013: 100 aulas

Año 2014: 100 aulas

Año 2015: 108 aulas

II b) Sostener programas que incrementen las oportunidades y la atención educativa a la diversidad de necesidades del alumnado (zonas rurales, zonas urbano marginales, pueblos originarios, discapacidad permanente y transitoria) para lo cual se deberá:

Escuelas Primarias Rurales: se prevé la incorporación de 140 maestros de materias especiales (Áreas Educación Física, Artística, Lengua extranjera, Ciencias), los que serán afectados a extensión de jornada y conforme el siguiente detalle:

Año 2011: 40 maestros

Año 2012: 40 maestros

Año 2013: 30 maestros

Año 2014: 20 maestros

Año 2015: 10 maestros

Escuelas Primarias en contexto desfavorable: se prevé la incorporación de 85 maestros de apoyo afectados a Programas de Fortalecimiento en las áreas de Lengua, Ciencias y Matemática (1er. ciclo), y conforme el siguiente detalle:

Año 2011: 25 maestros de apoyo

Año 2012: 20 maestros de apoyo

Año 2013: 20 maestros de apoyo

Año 2014: 10 maestros de apoyo

Año 2015: 10 maestros de apoyo

Procesos de Integración de alumnos con necesidades educativas especiales en escuela común: se prevé la incorporación de 91 maestros integradores, conforme se detalla a continuación:

Año 2011: 30 maestros integradores

Año 2012: 30 maestros integradores

Año 2013: 31 maestros integradores

Se prevé dar continuidad al Programa Provincial De Becas Estudiantiles – Nivel Medio para alumnos pertenecientes a familias de bajos recursos y con buen desempeño académico –

III) Promover la Inclusión de estudiantes de nivel secundario, a partir de iniciativas y acciones sostenidas orientadas a la población objetivo, tales como:

III a) Llevar a cabo acciones que permitan en el menor tiempo posible alcanzar el cumplimiento de la obligatoriedad del nivel para lo cual:

Se prevé el sostenimiento del Programa de Inclusión y terminalidad de la Educación Secundaria (14 a 17) hasta su finalización correspondiente en el transcurso del año 2014.

III b) Generar estrategias que resuelvan el problema de la repitencia escolar y de iniciativas en múltiples campos para mejorar la calidad de la enseñanza para lo cual:

Se prevé avanzar con la incorporación de 266 Coordinadores de Curso en el Nivel Secundario de Educación, conforme el siguiente detalle:

Año 2011: 120 Coordinadores de Curso

Año 2012: 100 Coordinadores de Curso

Año 2013: 46 Coordinadores de Curso

Se prevé reforzar los equipos profesionales de apoyo escolar a través de la incorporación de 65 gabinetistas psicopedagógicos y conforme el siguiente detalle:

Año 2011: 15 Jefes de Gabinete Psicopedagógico

Año 2012: 15 Jefes de Gabinete Psicopedagógico

Año 2013: 15 Jefes de Gabinete Psicopedagógico

Año 2014: 10 Jefes de Gabinete Psicopedagógico

Año 2015: 10 Jefes de Gabinete Psicopedagógico

VI) Ofrecer a todas las personas oportunidades de educación a lo largo de toda la vida garantizando el acceso a la educación y a la formación laboral a las personas jóvenes y adultas con mayores desventajas y necesidades para lo cual:

Se prevé la disponibilidad continua de 90 cargos de maestros de materias especiales, afectados a la formación laboral (oficios), incorporando a los cargos existentes los siguientes:

Año 2011: 12 cargos

Año 2012: 10 cargos

Año 2013: 10 cargos

Año 2014: 10 cargos

Año 2015: 10 cargos

VIII) Dar continuidad a las acciones de mejora en la formación inicial y continua del Profesorado para los distintos niveles del Sistema Educativo, orientado a:

VIII a) Fortalecer los Programas en curso y diseñar otros que promuevan la articulación entre los Institutos Superiores y las Universidades que forman Profesores.

VIII b) Impulsar acciones que acompañen el acceso al trabajo docente en sus primeros años de desempeño profesional para lo cual,

A fin de avanzar en las metas descriptas supra, se prevé la creación de 1200 horas cátedras de nivel superior para afectar a la Investigación, Extensión y acompañamiento en el acceso al trabajo docente y conforme el siguiente detalle:

Año 2011: 400 horas cátedras de Nivel Superior

Año 2012: 400 horas cátedras de Nivel Superior

Año 2013: 400 horas cátedras de Nivel Superior

X) Sostener la incorporación de tecnología y actualización de herramientas y capacitación docente a fin de favorecer su plena utilización como herramienta pedagógica, que optimice el aprendizaje de los estudiantes, para lo cual se pretende proveer de 59.455 netbooks (con equipamiento asociado) a establecimientos educativos de Nivel Inicial, Primario y Modalidad Jóvenes y Adultos, conforme el siguiente detalle:

Año 2011: 18.000 netbooks

Año 2012: 15.800 netbooks

Año 2013: 14.388 netbooks

Año 2014: 5.400 netbooks

Año 2015: 5.867 netbooks

Se prevé además la incorporación de 432 Administradores de Red, conforme el siguiente detalle:

Año 2011: 108 Administradores de Red

Año 2012: 108 Administradores de Red

Año 2013: 216 Administradores de Red

PODER LEGISLATIVO – 49ª REUNION -15-XII-2010

- Se asegura la provisión de conectividad a la totalidad de los edificios educativos de gestión estatal. (Internet)

ARTÍCULO 112.- Hasta tanto se sancione la Ley prevista en el artículo 107 de la presente, manténgase la afectación de los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal –distribución secundaria Ley Nacional nº. 23.548- a favor del Ministerio de Educación, en los mismos términos y condiciones que se establecieron en la Ley 26.075 artículo séptimo, a los fines de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 26.206 de Educación Nacional.

Con el propósito de garantizar la participación de la Provincia en el esfuerzo del financiamiento educativo consolidado, a través de la Ley Anual de Presupuesto Provincial se determinará el monto de esa afectación en función de la variación porcentual del PBI nominal prevista en el marco de la Ley Nº 25.917 del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, artículo 2º y/o demás variables macrofiscales de similar significación.

ARTÍCULO 113.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Juan Schiaretti, Walter Mario Grahovac, Jorge Eduardo Córdoba.

TITULO PRIMERO: DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

CAPITULO I: PRINCIPIOS GENERALES Y FINES DE LA EDUCACION

Sección Única: Principios Generales y Fines de la Educación

CAPITULO II: DERECHO A LA EDUCACION

Sección Primera: Responsabilidad del Estado

Sección Segunda: Derechos y Deberes en la Educación

TITULO SEGUNDO: EL SISTEMA EDUCATIVO

CAPITULO I: LINEAMIENTOS DE POLÍTICA EDUCACIONAL

Sección Primera: Principios de Organización del Sistema Educativo

Sección Segunda: Lineamientos Pedagógicos Generales

CAPITULO 2: ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO

Sección Primera: Estructura General del Sistema

Apartado Primero: Disposiciones Generales

Apartado Segundo: La Educación Inicial

Apartado Tercero: La Educación Primaria

Apartado Cuarto: La Educación Secundaria

Apartado Quinto: La Educación Superior

Sección Segunda: Modalidades y otras formas de la Educación

Apartado Primero: La Educación Especial

Apartado Segundo: La Educación Permanente de jóvenes y Adultos

Apartado Cuarto: La Educación Rural

Apartado Quinto: La Educación Técnico profesional

Formación Profesional

La educación no formal

Apartado Sexto: La Educación Artística

Apartado Séptimo: La educación domiciliaria y hospitalaria

Apartado Octavo: La educación intercultural bilingüe

Sección Tercera: Educación de Gestión Privada

Sección Cuarta: La Educación a Distancia

TÍTULO TERCERO: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN

CAPÍTULO I: DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Sección Primera: El Ministerio de Educación

Sección Segunda: El Consejo Provincial de Políticas Educativas

El Consejo Provincial de Educación Técnica y Trabajo

CAPÍTULO II: LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

TÍTULO CUARTO: FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN

CAPÍTULO ÚNICO: Fuentes de Financiamiento

TÍTULO QUINTO: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Juan Schiaretti, Walter Mario Grahovac, Jorge Eduardo Córdoba.

DESPACHO DE COMISIÓN

Vuestras Comisiones de EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 6480/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece la Organización y Administración General del Sistema Educativo Provincial y deroga la Ley Nº 8113, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

**TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES**

**CAPÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES Y FINES DE LA EDUCACIÓN
EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA**

**Sección Única
Principios Generales y Fines de la Educación**

Artículo 1º.- Fundamentos. La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social garantizado por el Estado.

El Estado respetará los principios establecidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella.

La educación se constituye en política de Estado prioritaria para contribuir a la construcción y desarrollo de una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo cultural, económico y social de la Provincia.

El Estado Provincial no suscribirá tratados de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienen cualquier forma de mercantilización de la educación pública.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación. Esta Ley rige la organización y administración del Sistema Educativo Provincial integrado por los siguientes servicios:

- a) Servicios educativos públicos de gestión estatal;
- b) Servicios educativos municipales regulados por el artículo 108 de esta Ley, y
- c) Servicios educativos públicos de gestión privada autorizados.

Artículo 3º.- Principios generales. La política educativa, en cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Provincial, se rige por los siguientes principios generales:

a) La educación es función principal, obligatoria y permanente para el Estado Provincial, quien establece y supervisa la política del sector;

b) Se reconoce a la familia como agente natural y primario de educación, el derecho fundamental de educar a sus hijos y de escoger el tipo de educación más adecuado a sus propias convicciones;

c) La educación es también función y responsabilidad de la sociedad, orientada a asegurar el respeto de las peculiaridades individuales y culturales y a impulsar, a través de la participación de sus miembros, su propio desarrollo;

d) Todos los habitantes de la Provincia tienen derecho a la educación para favorecer el desarrollo pleno de su persona e integrarse como ciudadano en un marco de libertad y convivencia democrática. Es responsabilidad del Estado garantizar el ejercicio de este derecho en igualdad de oportunidades sin ningún tipo de discriminación fundada en su condición, origen o contexto social en el que vive, de género, étnica, ni por su nacionalidad, su orientación cultural o religiosa y sus condiciones físicas, intelectuales o lingüísticas;

e) Todos los habitantes de la Provincia tienen, asimismo, derecho a acceder a los más altos niveles de formación, investigación y creación, conforme con su vocación y aptitudes y dentro de las exigencias del interés nacional y provincial;

f) La educación pública de gestión estatal es común, integral, gratuita y exenta de dogmatismos de cualquier signo;

g) El Estado garantiza el derecho de enseñar y aprender en todo el territorio provincial. Su ejercicio, dentro del sistema educativo, respetará las libertades inherentes a las personas que se educan y lo dispuesto por la Constitución Provincial y la presente Ley;

h) El Estado garantiza, en el ámbito educativo, el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes establecidos en la Ley Nacional Nº 26.061;

i) El Estado reconoce, asimismo, la libertad de las personas, asociaciones y municipios de crear y gestionar instituciones educativas ajustadas a los principios de la Constitución y a esta Ley, y

j) El Estado asegura en el presupuesto provincial los recursos suficientes para el financiamiento del sistema educativo e integra con igual fin aportes comunitarios, sectoriales y de otras jurisdicciones.

Artículo 4º.- Fines y Objetivos de la Educación Provincial. La educación en la Provincia de Córdoba, de acuerdo con los principios y valores de su Constitución, se dirigirá al cumplimiento de los siguientes fines y objetivos:

- a) El desarrollo integral, armonioso y permanente de los alumnos orientado hacia su realización personal y su trascendencia en lo cultural, lo social, lo histórico y lo religioso, según sus propias opciones;
- b) La formación de ciudadanos conscientes de sus libertades y derechos y responsables de sus obligaciones cívicas, capaces de contribuir a la consolidación del orden constitucional, a la configuración de una sociedad democrática, justa y solidaria, así como a la valoración y preservación del patrimonio natural y cultural;
- c) La capacitación para el ejercicio de la participación reflexiva y crítica y el comportamiento ético y moral de la persona que le permita su activa integración en la vida social, cultural y política;
- d) La preparación laboral, técnica y profesional de la persona que la habilite para su incorporación idónea al proceso de desarrollo socio productivo y técnico, y para su formación permanente;
- e) La comprensión de los avances científicos y tecnológicos y su utilización al servicio del mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva;
- f) La conservación de los valores fundamentales que cimientan la identidad y unidad nacional y latinoamericana, con apertura a la cultura de los pueblos, así como a la promoción y creación de las expresiones culturales de las diversas comunidades de la Provincia;
- g) La formación en el respeto y valoración de la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios;
- h) La formación para la comprensión, la cooperación y la paz entre las naciones y la educación relativa a los derechos humanos y libertades fundamentales;
- i) Incorporar de manera obligatoria en todos los niveles educativos y modalidades el estudio de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial, sus normas, espíritu e instituciones;
- j) Brindar conocimientos y promover valores que contribuyan a una educación sexual integral, conforme a lo establecido por la Ley Nacional Nº 26.150;
- k) Brindar una formación que promueva el derecho a la vida y su preservación;
- l) Desarrollar una educación que posibilite la autodeterminación y el compromiso con la defensa de la calidad de vida, el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y la concientización sobre los procesos de degradación socio-ambiental;
- m) Incorporar el cooperativismo, mutualismo y asociativismo en todos los procesos de formación, en concordancia con los principios y valores establecidos en la Ley Nacional Nº 16.583 y sus normas reglamentarias;
- n) Fortalecer la centralidad de la lectura y escritura como condiciones básicas para la construcción de una ciudadanía responsable y la libre circulación del conocimiento;
- ñ) Desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la información y la comunicación;
- o) Promover el aprendizaje de saberes científicos fundamentales para comprender y participar reflexivamente en la sociedad contemporánea;
- p) Brindar una formación que garantice una educación artística integral y continua que permita la apropiación de sus distintos lenguajes, estimulando la creatividad, el gusto y la comprensión de las distintas manifestaciones del arte y la cultura;
- q) Asegurar una formación corporal motriz y deportiva que favorezca un desarrollo armónico y la adquisición de hábitos de vida saludable;
- r) Desarrollar las capacidades para “aprender a aprender” a lo largo de toda la vida;
- s) Concebir la cultura del trabajo y del esfuerzo personal y cooperativo como principio fundamental de los procesos de enseñanza y aprendizaje;
- t) Brindar una formación que le permita actuar con responsabilidad y compromiso en el cuidado y mejoramiento del ambiente contribuyendo a su desarrollo sustentable;
- u) Promover valores y actitudes que fortalezcan las capacidades de las personas para prevenir las adicciones y el uso indebido de drogas;
- v) Asegurar el conocimiento y respeto de las normas de tránsito y desarrollar actitudes y comportamientos seguros, responsables y solidarios en la vía pública;
- w) Desarrollar las capacidades para aprender a relacionarse, interactuar y trabajar en forma colaborativa, y
- x) Brindar una formación que asegure condiciones de igualdad, sin admitir discriminaciones de ningún tipo.

CAPÍTULO II DERECHO A LA EDUCACIÓN

Sección Primera Responsabilidad del Estado

Artículo 5º.- Derecho a la educación. Garantías. El Estado garantiza la igualdad de oportunidades y posibilidades educacionales ofreciendo, en la prestación de los servicios públicos de gestión estatal y privada reconocidos, condiciones equitativas para el acceso, permanencia y promoción de los alumnos.

A fin de cumplir con esta responsabilidad sostendrá el sistema educativo en todo el territorio provincial e impulsará el mejoramiento de la calidad de la educación.

Proveerá, asimismo, políticas de inclusión educativa y protección integral para el crecimiento y desarrollo armónico de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, en especial cuando se encuentren en situaciones socioeconómicas desfavorables.

Artículo 6º.- Generalización del ejercicio del derecho a la educación. El Estado impulsará la generalización del ejercicio del derecho a la educación entre los sectores menos favorecidos de la sociedad, rurales y urbanos, instrumentando a tal efecto políticas especiales dirigidas a la atención educativa y la integración social. Generará y promoverá diversos medios y servicios para la educación permanente, la alfabetización y la formación científica, tecnológica, humanística y artística, la capacitación laboral y la formación profesional, orientados según las necesidades y posibilidades personales y regionales.

Sección Segunda
Derechos y Deberes en la Educación

Artículo 7º.- Derechos y deberes de los docentes. Un estatuto específico regulará los derechos y obligaciones laborales y profesionales de los docentes en el ámbito de la educación pública de gestión estatal y privada, conforme las orientaciones generales de esta norma. Sin perjuicio de lo allí establecido y de otros preceptos constitucionales y legales, se reconoce a los docentes los siguientes derechos y deberes:

A) Derechos:

a) Al desempeño de su profesión docente dentro del ámbito provincial mediante la acreditación de los títulos y certificaciones conforme a la normativa vigente sobre la materia;

b) A ejercer la docencia sobre la base de la libertad de cátedra y de enseñanza en el marco de los principios establecidos por la Constitución Nacional y las disposiciones de esta Ley. Su práctica se orientará a la realización de los objetivos propios de las instituciones educativas y de los principios y fines de la educación, establecidos por esta Ley;

c) A la capacitación y actualización integral, gratuita y en servicio a lo largo de toda su carrera;

d) A la activa participación en la elaboración e implementación del proyecto institucional de la escuela;

e) Al desarrollo de sus tareas en condiciones dignas en lo que respecta a seguridad e higiene;

f) Al mantenimiento de su estabilidad en el cargo en tanto su desempeño se realice de conformidad con la normativa provincial y nacional vigente;

g) A los beneficios de la seguridad social, jubilación, seguros y obra social;

h) A un salario digno;

i) A participar en el gobierno de la educación por sí o a través de sus representantes;

j) Al acceso a programas de salud laboral y prevención de enfermedades profesionales;

k) Al acceso a los cargos y horas por concurso de antecedentes o por concurso de antecedentes y oposición, conforme a lo establecido en la legislación vigente, para las instituciones de gestión estatal;

l) A la negociación colectiva nacional y jurisdiccional, y

m) A la libre asociación y al respeto integral de todos sus derechos como ciudadanos.

B) Deberes:

a) A respetar y hacer respetar los principios constitucionales, las disposiciones de la presente Ley, la normativa institucional y la que regula la tarea docente;

b) A cumplir con los lineamientos de la política educativa de la Provincia y con los diseños curriculares de cada uno de los niveles y modalidades;

c) A capacitarse y actualizarse en forma permanente;

d) A ejercer su trabajo de manera idónea y responsable;

e) A proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo su responsabilidad, en concordancia con lo dispuesto en la Ley Nacional Nº 26.061, y

f) A respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.

Artículo 8º.- Misión del personal. El personal administrativo, técnico, auxiliar, social, de la salud y de servicios que se desempeña en las escuelas es parte integrante de la comunidad educativa y su misión principal será contribuir a asegurar el funcionamiento de las instituciones educativas y de los servicios de la educación, conforme los derechos y obligaciones establecidos en sus respectivos estatutos, pudiendo requerir una capacitación permanente acorde a sus funciones.

Artículo 9º.- Carrera docente. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba definirá los criterios básicos concernientes a la carrera docente en el ámbito estatal, en concordancia con lo dispuesto en la presente Ley.

La carrera docente admitirá al menos dos (2) opciones:

a) Desempeño en el aula, y

b) Desempeño en la función directiva y de supervisión.

La formación continua es una de las dimensiones básicas para el ascenso en la carrera profesional.

A los efectos de la elaboración de dichos criterios, se instrumentarán los mecanismos de consulta pertinentes.

Artículo 10.- Inhabilitados. No podrá incorporarse a la carrera docente quien haya sido condenado por delitos de lesa humanidad o haya incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, conforme a lo previsto en el artículo 36 de la Constitución Nacional y el Título X del Libro Segundo del Código Penal, aún cuando se hubieren beneficiado por el indulto o la conmutación de pena.

Artículo 11.- Derechos y deberes de los padres. Los padres, o quienes los sustituyeren legalmente, tienen sobre la educación de sus hijos los siguientes derechos y deberes:

A) Derechos:

- a) A ser reconocidos como agentes naturales y primarios de la educación y al ejercicio pleno de la patria potestad;
- b) A elegir para sus hijos o representados la institución educativa cuyo ideario responda a sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas;
- c) A que sus hijos reciban una educación conforme a los principios y fines de la Constitución y la presente Ley, con la posibilidad de optar por la modalidad y orientación según sus convicciones;
- d) A que sus hijos reciban, en el ámbito de la educación pública de gestión estatal, una enseñanza general exenta de dogmatismos que pudiera afectar las convicciones personales y familiares;
- e) A que sus hijos reciban de manera opcional, en el ámbito de la educación pública de gestión estatal, educación religiosa que les permita aprehender los valores y contenidos básicos de la creencia por la que hubieren optado, como contenido extracurricular, sin financiamiento estatal, fuera del horario de clases y a cargo de los ministros autorizados de los diferentes cultos;
- f) A ser informados en forma regular y periódica de la evolución y resultados del proceso educativo de sus hijos;
- g) A participar en las actividades de los establecimientos educativos -en forma individual o a través de las cooperadoras escolares y los órganos colegiados representativos, en el marco del proyecto educativo institucional, y
- h) A participar en el planeamiento del proyecto educativo institucional.

B) Deberes:

- a) Hacer cumplir y asegurar la concurrencia de sus hijos o representados a los establecimientos escolares que elijan durante todo el régimen de educación obligatoria previsto en la presente Ley;
- b) Apoyar y colaborar, de modo efectivo, con sentido amplio y solidario y bajo la autoridad escolar, en el proceso educativo que sus hijos desarrollan en la escuela;
- c) Respetar y hacer respetar a sus hijos o representados la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa;
- d) Respetar y hacer respetar a sus hijos o representados la autoridad pedagógica de los docentes, las normas vigentes del sistema educativo, las reglamentaciones y normas de convivencia propias de la escuela como el ideario institucional y su proyecto educativo, y
- e) Seguir y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos.

Artículo 12.- Derechos y deberes de los alumnos. Los alumnos de las instituciones educativas de la Provincia tienen los siguientes derechos y deberes:

A) Derechos:

- a) A que se respeten su integridad y dignidad personales, su libertad intelectual, religiosa y de conciencia;
- b) A recibir una enseñanza que considere y valore sus intereses, ritmos y posibilidades de aprendizaje, y que atienda a sus características individuales, sociales y culturales;
- c) A participar reflexiva y críticamente en su proceso de aprendizaje, a acceder a conocimientos y experiencias que le permitan integrarse creativamente en la sociedad y al reconocimiento y valoración del esfuerzo personal y colectivo;
- d) A recibir orientación y asistencia ante los problemas que puedan perturbar su acceso, permanencia o promoción en el sistema y aquellos que dificulten el desarrollo personal;
- e) A asociarse para participar en el desarrollo de la vida institucional a través de centros, asociaciones y clubes de estudiantes, en relación con las edades y de acuerdo con lo dispuesto por las reglamentaciones que al efecto se dicten, y
- f) A desarrollar sus aprendizajes en edificios que respondan a normas de seguridad y salubridad, con instalaciones y equipamiento que aseguren la calidad del servicio educativo.

B) Deberes:

- a) Cumplir con todos los niveles de la escolaridad obligatoria establecidos por esta Ley;
- b) Hacer uso responsable de las oportunidades de estudiar que el sistema educativo le ofrece y esforzarse por alcanzar el máximo desarrollo según sus capacidades y posibilidades;
- c) Respetar el proyecto educativo institucional y las normas de convivencia y organización de la escuela;
- d) Asistir a clase regularmente y con puntualidad;
- e) Participar en el desarrollo de las actividades educativas en la escuela;
- f) Respetar los símbolos nacionales, provinciales e institucionales;
- g) Realizar un uso y cuidado responsable de la infraestructura y el equipamiento de la escuela;
- h) Respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, e
- i) Respetar la autoridad pedagógica de los docentes en el ejercicio de su tarea.

Artículo 13.- Las instituciones educativas y la convivencia democrática. Las instituciones educativas de los distintos niveles y modalidades del sistema se organizarán según normas democráticas de convivencia y funcionamiento, respetuosas del pluralismo y la tolerancia, facilitando la participación responsable y solidaria que corresponde a cada sector de la comunidad educativa, garantizando así el ejercicio pleno de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones y evitando cualquier forma de discriminación entre los miembros de la misma.

**TÍTULO SEGUNDO
EL SISTEMA EDUCATIVO**

**CAPÍTULO I
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA EDUCACIONAL**

**Sección Primera
Principios de Organización del Sistema Educativo**

Artículo 14.- El Sistema Educativo Provincial. Institúyese el “Sistema Educativo Provincial” integrado orgánicamente por los servicios educativos de gestión estatal, que conjuntamente con los servicios educativos de gestión privada, se inserta en el marco político-institucional del Estado y se organiza conforme los principios y estructura establecidos por esta Ley para dar cumplimiento a sus fines y objetivos.

Artículo 15.- Educación permanente y sistema educativo. La estructuración del Sistema Educativo Provincial se basa en el principio rector de la educación permanente, atendiendo a la continuidad e integralidad del proceso educativo con el propósito de ofrecer posibilidades de formación, capacitación y perfeccionamiento a todos los habitantes en las distintas circunstancias y etapas de su vida.

Este principio contribuye, en materia de organización del sistema, a la articulación pedagógica de sus niveles y modalidades, otorgando unidad y coherencia a la oferta educativa.

Artículo 16.- Principios políticos de organización del sistema. El Sistema Educativo Provincial se organiza, en términos de política educacional, conforme con los principios de libertad de enseñanza, de democratización, centralización política y normativa, desconcentración operativa y participación social, a cuyo efecto las autoridades provinciales:

- a) Garantizan la equidad en los servicios educativos a fin de alcanzar igualdad en las oportunidades y posibilidades de acceso, permanencia y logros educativos, y ofrecen una educación que asegure la democrática distribución de los conocimientos, personal y socialmente relevantes;
- b) Fijan y desarrollan políticas de promoción de la igualdad educativa destinadas a enfrentar situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y otras formas de discriminación derivadas de factores socio-económicos, culturales, geográficos, étnicos, de género o de cualquier otra índole, que afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación;
- c) Establecen las grandes líneas de política educativa y aseguran el cumplimiento de los objetivos del sistema, articulando orgánicamente su gobierno y administración con el objeto de lograr la mayor eficacia de las acciones propuestas;
- d) Adecuan la oferta educativa a las características de las distintas regiones de la Provincia, respetando sus pautas socio-culturales y promoviendo el despliegue de sus potencialidades, y
- e) Reconocen la capacidad y la responsabilidad de la sociedad para intervenir en la toma de decisiones educativas y en el control de su ejecución, y promueven su participación activa en los espacios establecidos para tal fin.

Artículo 17.- Funcionalidad del Sistema Educativo Provincial. Las autoridades provinciales regulan pedagógica y administrativamente la funcionalidad del Sistema Educativo Provincial con el objeto de ajustar las acciones a las finalidades propuestas por esta Ley, conforme a:

- a) La articulación vertical que asegure la continuidad pedagógica entre los sucesivos niveles y la adecuada coordinación entre sus respectivos organismos administrativos;
- b) La articulación horizontal que posibilite el pasaje entre modalidades, carreras y establecimientos de un mismo nivel;
- c) La coordinación interna entre los diferentes servicios, niveles y establecimientos de la Provincia;
- d) La coordinación externa, con los sistemas de otras jurisdicciones, evitando superposiciones y estableciendo relaciones de cooperación y colaboración con ellos;
- e) La cohesión que asegure la unidad del conjunto dentro de la diversidad de las prestaciones para responder orgánica e integralmente a las demandas educativas de la población, y
- f) La apertura y flexibilidad, de modo de entablar una fluida y dinámica interrelación con las condiciones, peculiaridades y necesidades del contexto social, cultural y económico en el que se insertan los servicios.

Artículo 18.- Principios generales de administración educacional. Las autoridades provinciales desarrollan la administración del Sistema como un proceso técnico-político de carácter global, regido por los siguientes principios:

- a) Eficacia pedagógica, como la capacidad técnica de contribuir a alcanzar los resultados y objetivos educacionales propuestos;
- b) Efectividad política, como criterio para valorar la capacidad de atender y responder satisfactoriamente a las demandas sociales;
- c) Relevancia cultural, como criterio de desempeño para analizar la adecuación de los actos administrativos según su significación, valor y pertinencia para la comunidad orientados al mejoramiento de la calidad de vida, y
- d) Eficiencia económica, como capacidad operacional de maximizar y optimizar el rendimiento en la utilización de los recursos destinados a la consecución de los objetivos principales del Sistema Educativo Provincial.

Sección Segunda

Lineamientos Pedagógicos Generales

Artículo 19.- Calidad de la educación. La educación en la Provincia de Córdoba tiende a alcanzar los más altos niveles de calidad. A tal fin el Gobierno Provincial instrumenta las políticas necesarias para el mejoramiento de la calidad de la educación:

- a) Procurando la mayor formación profesional inicial y continua de los docentes;
- b) Propiciando y/o sosteniendo los procesos de investigación e innovación educacionales planificados y sustentados científica, pedagógica y tecnológicamente;
- c) Renovando las formas de organización y gestión de las instituciones educativas, y
- d) Asignando equitativamente los recursos físicos y financieros destinados a mejorar la infraestructura y equipamiento escolar e integrando, con igual fin, aportes comunitarios, sectoriales y de otras jurisdicciones.

Artículo 20.- Evaluación e información. Las autoridades del sector establecerán diferentes formas y mecanismos de evaluación y control de gestión de los procesos educativos planificados y de sus resultados, así como también de sus costos en los diferentes niveles, servicios y localizaciones.

Instrumentará un sistema de información ágil y eficaz para guiar la toma de decisiones de política educacional, retroalimentar su planificación, proveer a su adecuado financiamiento, controlar su ejecución y contribuir a regular equitativamente la calidad de las prestaciones.

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba informará anualmente a la Legislatura Provincial el estado de la gestión educativa y los criterios y mecanismos de evaluación y control de gestión aplicados a los procesos educativos planificados, sus resultados y costos en los diferentes niveles, servicios y localizaciones. Dicho informe será publicado en la página web del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

Artículo 21.- Comisión de Evaluación. En el ámbito del Consejo Provincial de Políticas Educativas, creado por el artículo 91 de esta Ley, deberá constituirse una "Comisión de Evaluación e Información Educativa".

Artículo 22.- Criterios de orientación pedagógica. Los centros educativos de la Provincia deben desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles y modalidades del Sistema, según los siguientes criterios generales:

- a) El respeto por las características individuales y socio-culturales de los alumnos, sus valores integrales, la consideración de sus capacidades, conocimientos y experiencias previas de aprendizaje;
- b) El currículum como proceso dinámico, interactivo, investigativo, integrativo e innovador que se caracteriza por la apertura, la flexibilidad, la integralidad y la regionalización. Orienta la selección pedagógica y organización didáctica que deriven en experiencias educativas apropiadas al desarrollo integral de los alumnos;
- c) Los docentes deben orientar los aprendizajes con criterio pedagógico y científico en un ambiente propicio para la participación activa y creadora, promoviendo el desarrollo del pensamiento crítico, la identidad nacional y latinoamericana, la responsabilidad cívica y la formación ética y moral de los educandos en un marco democrático y solidario, y
- d) Las estrategias de enseñanza se deben planificar con el propósito de facilitar a los alumnos el logro de actitudes, conocimientos y competencias necesarias y relevantes que posibiliten construir su autoestima y autonomía, y orientarse en opciones vocacionales que impliquen su proyecto de vida.

CAPÍTULO III

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL

Sección Primera

Estructura General del Sistema

Apartado Primero

Disposiciones Generales

Artículo 23.- Estructura de los servicios educativos. La educación sistemática se estructura en niveles, ciclos, modalidades y otras formas educativas.

Los niveles son las etapas que configuran organizativamente la educación formal, compuesta por un conjunto de contenidos y competencias, cuya enseñanza-aprendizaje debe adaptarse flexiblemente a los diferentes momentos del proceso evolutivo de los alumnos. Podrán subdividirse en ciclos, entendidos como unidades formativas articuladas en cada uno de ellos.

Son niveles del Sistema Educativo Provincial:

- a) La educación inicial;
- b) La educación primaria;
- c) La educación secundaria, y
- d) La educación superior.

Constituyen modalidades del Sistema Educativo Provincial aquellas opciones organizativas y/o curriculares de la educación común, dentro de uno o más niveles educativos, que procuran dar respuesta a requerimientos específicos de formación y atender particularidades de carácter permanente o temporal, personales y/o contextuales, con el propósito de garantizar la igualdad en el derecho a la educación y cumplir con las exigencias legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles educativos.

Son modalidades del Sistema Educativo Provincial:

- 1) La educación especial;

- 2) La educación permanente de jóvenes y adultos;
- 3) La educación en contextos de privación de libertad;
- 4) La educación rural;
- 5) La educación técnico profesional;
- 6) La educación artística;
- 7) La educación domiciliaria y hospitalaria, y
- 8) La educación intercultural bilingüe.

Artículo 24.- Adecuación estructural. El Poder Ejecutivo Provincial podrá adecuar a las condiciones de tiempo y lugar la estructura general descripta en el artículo anterior, resguardando la articulación entre niveles y ciclos y la coherencia entre jurisdicciones.

Artículo 25.- Reglamento general de la enseñanza. El Sistema Educativo Provincial se regula sobre la base de un régimen técnico-administrativo común y de los regímenes especiales necesarios para su eficiente funcionamiento.

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba elaborará el reglamento general de la enseñanza para todos los niveles y modalidades del Sistema y los reglamentos especiales que correspondieren, para lo cual será asistido por el Consejo Provincial de Políticas Educativas, que además fiscalizará su cumplimiento.

El reglamento general de la enseñanza comprenderá los siguientes aspectos:

- a) Caracterización y organización de los diferentes niveles y modalidades;
- b) Articulación y coordinación entre los niveles y modalidades;
- c) Calendarios y horarios escolares;
- d) Obligatoriedad escolar;
- e) Requisitos de ingreso de los alumnos;
- f) Evaluación y supervisión de la enseñanza;
- g) Promoción, certificación académica y títulos oficiales. Equivalencias, reconocimientos y reválidas;
- h) Desarrollo curricular e innovaciones pedagógicas;
- i) Régimen disciplinario y de convivencia escolar, y
- j) Otras normas básicas para la organización y funcionamiento de las instituciones educativas.

Artículo 26.- Educación obligatoria. La obligatoriedad escolar se extiende desde la edad de cuatro (4) años hasta la finalización del nivel de educación secundaria.

Apartado Segundo La Educación Inicial

Artículo 27.- Características. La educación inicial constituye la primera unidad pedagógica del Sistema Educativo Provincial. Corresponde a las niñas y niños comprendidos en el período que se extiende entre los cuarenta y cinco (45) días y los cinco (5) años de edad.

Es obligatoria a partir de los cuatro (4) años según lo especifica el artículo 26 de esta Ley y tiene carácter optativo para las restantes edades abarcadas por este nivel, tendiendo a universalizar las salas para niñas y niños de tres (3) años, prioritariamente en zonas de vulnerabilidad social.

Artículo 28.- Objetivos. La educación inicial en la Provincia asegurará la formación integral y asistencia del niño, orientándose a la obtención de los siguientes objetivos fundamentales:

- a) Promover el aprendizaje y desarrollo de las niñas y niños como personas sujetos de derecho y partícipes activos de un proceso de formación integral, miembros de una familia y de una comunidad;
- b) Promover en las niñas y niños la solidaridad, autoestima, confianza, cuidado, amistad y respeto a sí mismos y a los demás;
- c) Desarrollar su capacidad creativa y el placer por el conocimiento en las experiencias de aprendizaje;
- d) Promover el juego como contenido de alto valor cultural para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social;
- e) Desarrollar la capacidad de expresión y comunicación a través de los distintos lenguajes, verbales y no verbales: el movimiento, la música, la expresión plástica y la literatura;
- f) Favorecer la formación corporal y motriz a través de la educación física;
- g) Favorecer en las niñas y niños el desarrollo progresivo de su identidad y sentido de pertenencia a la familia inserta en la comunidad local, regional, provincial y nacional;
- h) Asegurar la integración y participación de la familia y la comunidad en la acción educativa, en un marco de cooperación y solidaridad;
- i) Atender a las desigualdades educativas de origen social y familiar para favorecer una integración plena de las niñas y niños en el Sistema Educativo Provincial, y
- j) Prevenir y atender en igualdad de oportunidades las necesidades especiales y las dificultades de aprendizaje.

Artículo 29.- Entidades comprendidas. Están comprendidas en la presente Ley las instituciones que brindan educación inicial:

- a) De gestión estatal, pertenecientes tanto a órganos de gobierno de la educación como a otros organismos gubernamentales, y
- b) De gestión privada autorizados por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba u otros organismos estatales.

Artículo 30.- Responsabilidad estatal. El Estado Provincial tiene la responsabilidad de:

- a) Expandir los servicios de educación inicial;
- b) Promover y facilitar la participación de las familias en el desarrollo de las acciones destinadas al cuidado y educación de sus hijos;
- c) Asegurar el acceso y la permanencia mediante servicios de calidad que garanticen la igualdad de oportunidades, atendiendo especialmente a los sectores menos favorecidos de la población;
- d) Regular, controlar y supervisar el funcionamiento de las instituciones con el objetivo de asegurar la atención, el cuidado y la educación integral de las niñas y niños, y
- e) Garantizar que la supervisión del nivel sea ejercida por personal con título de Profesor de Educación Inicial y experiencia directiva.

Artículo 31.- Organización. La organización de la educación inicial tiene las siguientes características:

- a) Los jardines maternos atienden a las niñas y niños desde los cuarenta y cinco (45) días a los dos (2) años de edad inclusive y los jardines de infantes a las niñas y niños desde los tres (3) a los cinco (5) años de edad inclusive, y
- b) Las certificaciones de cumplimiento de la educación inicial obligatoria en cualesquiera de las formas organizativas reconocidas y supervisadas por las autoridades educativas, tienen plena validez para la inscripción en la educación primaria.

Artículo 32.- Mecanismos. Se crearán en el ámbito del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba mecanismos para la articulación y/o gestión asociada entre los organismos gubernamentales que atiendan políticas y programas vinculados con la niñez y la familia, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas y niños establecidos en la Ley Nacional N° 26.061. Tras el mismo objetivo y en función de las particularidades locales o comunitarias, se implementarán otras estrategias de desarrollo infantil con la articulación y/o gestión asociada de las áreas gubernamentales de desarrollo social, salud y educación en el ámbito de la educación no formal, para atender integralmente a las niñas y niños entre los cuarenta y cinco (45) días y los dos (2) años de edad con la participación de las familias y otros actores sociales.

Artículo 33.- Actividades pedagógicas. Las actividades pedagógicas realizadas en el nivel de educación inicial estarán a cargo de personal docente titulado, conforme lo establece la normativa vigente. Dichas actividades pedagógicas serán supervisadas por las autoridades educativas de la Provincia de Córdoba.

Apartado Tercero La Educación Primaria

Artículo 34.- Características. La educación primaria constituye la etapa de la educación obligatoria destinada a la formación de las niñas y niños a partir de los seis (6) años de edad. Comprenderá seis (6) años de estudio organizados en ciclos.

Las instituciones educativas que imparten la educación en este nivel son las escuelas primarias.

Artículo 35.- Objetivos. La educación primaria contribuye decisivamente a la formación integral y asistencia del alumno, creando condiciones favorables para su activa integración familiar y socio-cultural y el desarrollo de los siguientes aprendizajes fundamentales. Sus objetivos son:

- a) Garantizar a todas las niñas y niños el acceso a un conjunto de saberes comunes que les permitan participar de manera plena y acorde a su edad en la vida familiar, escolar y comunitaria;
- b) Ofrecer las condiciones necesarias para un desarrollo integral de la infancia en todas sus dimensiones;
- c) Brindar oportunidades equitativas a todos las niñas y niños para el aprendizaje de saberes significativos en los diversos campos del conocimiento, en especial la lengua y la comunicación, las ciencias sociales, la matemática, las ciencias naturales y el medio ambiente, las lenguas extranjeras, el arte, la ética, la educación física y la tecnología, desarrollando la capacidad de aplicarlas en situaciones de la vida cotidiana;
- d) Generar las condiciones pedagógicas para el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como para la producción y recepción crítica de los discursos mediáticos;
- e) Facilitar la comprensión y el conocimiento de los procesos históricos y sociales y sus relaciones con la identidad regional, nacional y universal;
- f) Promover el desarrollo de una actitud y hábito de trabajo y responsabilidad en el estudio, de curiosidad e interés por el aprendizaje, fortaleciendo la confianza en las propias posibilidades de aprender;
- g) Desarrollar la iniciativa individual, el trabajo en equipo y las prácticas de convivencia solidaria y de cooperación;
- h) Fomentar el desarrollo de la creatividad y la expresión, el placer estético y la comprensión, el conocimiento y la valoración de las distintas manifestaciones del arte y otras producciones culturales;
- i) Brindar una formación ética que habilite progresivamente para el ejercicio de una ciudadanía responsable y permita asumir los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común, fortaleciendo el sentido de pertenencia regional y nacional, con apertura a la comprensión y solidaridad entre los pueblos;
- j) Ofrecer los conocimientos y las estrategias cognitivas necesarias para continuar los estudios en la educación secundaria;

k) Brindar oportunidades para una educación física que promueva la formación corporal y motriz, y consolide el desarrollo armónico de las niñas y niños fomentando especialmente aquellos deportes en equipo;

l) Promover el juego como actividad necesaria para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social, y

m) Promover el conocimiento y los valores que permitan el desarrollo de actitudes de protección y cuidado de la salud, el medio ambiente y el patrimonio cultural, apreciando los valores que rigen la vida y la convivencia humana para obrar de acuerdo con ellos.

Artículo 36.- Jornada educativa. Con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos fijados para este nivel por la presente Ley, las escuelas primarias serán de jornada extendida o de jornada completa.

Apartado Cuarto La Educación Secundaria

Artículo 37.- Características. La educación secundaria es obligatoria, constituye una unidad pedagógica y organizativa y está destinada a los adolescentes y jóvenes que hayan cumplido el nivel de educación primaria. Tiene la finalidad de habilitar a los adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de sus estudios.

Artículo 38.- Ciclos. La educación secundaria se divide en dos (2) ciclos:

a) Un (1) ciclo básico de carácter común a todas las orientaciones, y

b) Un (1) ciclo orientado de carácter diversificado según las distintas áreas del conocimiento, del mundo social y del trabajo.

La duración será de seis (6) años y se extenderá un (1) año más en la modalidad técnico profesional y artística, en el marco de sus regulaciones específicas.

Artículo 39.- Objetivos. Los objetivos de la educación secundaria son:

a) Contribuir a la formación integral de los adolescentes y jóvenes como personas sujetos conscientes de sus derechos y obligaciones, promoviendo el desarrollo de todas sus dimensiones a través de una educación configurada en torno a los valores éticos que les permitan desenvolverse en la sociedad practicando el pluralismo libre de toda discriminación, comprometidos con la exigencia de la participación comunitaria, motivados por la solidaridad hacia sus semejantes y preparados para el ejercicio de la vida democrática, en la aceptación y práctica de los Derechos Humanos y la diversidad cultural;

b) Promover prácticas de enseñanza que permitan el acceso al conocimiento como saber integrado, a través de las distintas áreas y disciplinas que lo constituyen, fortaleciendo capacidades y hábitos de estudio, de aprendizaje e investigación, de juicio crítico y discernimiento;

c) Formar ciudadanos capaces de utilizar el conocimiento como una herramienta para comprender, transformar y actuar crítica y reflexivamente en la sociedad contemporánea;

d) Desarrollar competencias lingüísticas comunicacionales, orales y escritas del idioma nacional y de comprensión y expresión en una lengua extranjera;

e) Desarrollar las capacidades necesarias para la comprensión y utilización inteligente y crítica de los nuevos lenguajes y herramientas producidos en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación;

f) Estimular la creación artística, la libre expresión, el placer estético y la comprensión de las distintas manifestaciones de la cultura y las artes;

g) Promover la formación corporal y motriz a través de la educación física acorde con los requerimientos del proceso de desarrollo integral de los adolescentes y jóvenes, y

h) Implementar, en el marco de los proyectos curriculares institucionales, procesos de orientación educacional que contribuyan a las elecciones vocacionales, vinculando a los alumnos con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia y la tecnología.

Artículo 40.- Prácticas educativas. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba propiciará la vinculación de las instituciones educativas secundarias con el mundo de la producción, el trabajo y otros organismos según su orientación. En este marco podrán realizarse prácticas educativas en las escuelas, empresas, organismos estatales, entidades culturales y gremiales que faciliten al alumno el conocimiento de las organizaciones, el manejo de tecnologías y le brinde experiencias adecuadas a su formación y orientación vocacional.

La práctica educativa complementa la formación del alumno, pero en ningún caso debe ser considerada trabajo en los términos de la Ley Nacional Nº 20.744 o pasantía conforme lo define y establece la Ley Nacional Nº 26.427.

Apartado Quinto La Educación Superior

Artículo 41.- Características. La educación superior tiene como finalidad promover el progreso de la ciencia y de la cultura y proporcionar formación científica, técnica, profesional, humanista y artística en el más alto nivel acorde con los avances científicos tecnológicos y las necesidades socio-culturales de la Provincia. Comprenderá los estudios superiores y universitarios.

Artículo 42.- Institutos. Los institutos de educación superior brindarán una oferta de servicios educativos para la formación docente y la formación técnico-profesional en las áreas socio-humanista, científica y artística.

Artículo 43.- Funciones. La formación docente es parte constitutiva del nivel de educación superior y tiene como funciones, entre otras, la formación docente inicial, la formación docente continua, el apoyo pedagógico a las escuelas y la investigación educativa.

La formación docente constituye la base para el mejoramiento de la calidad de la educación.

La docencia es una profesión y un trabajo cuya especificidad se centra en los procesos de transmisión y producción de conocimientos en torno a la enseñanza tendiente al desarrollo integral de las personas con quienes interactúa. Está destinada a la profesionalización de los recursos humanos responsables de orientar el proceso educativo en sus distintos niveles y modalidades.

Son funciones de la formación docente:

a) La formación docente inicial es el proceso pedagógico que posibilita a los estudiantes el desarrollo de las capacidades y los conocimientos necesarios para el trabajo docente en los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo Provincial, que los habilita para el ejercicio profesional;

b) La formación docente continua es el proceso de perfeccionamiento, actualización y capacitación en el ejercicio profesional que realizan los docentes de todos los niveles y modalidades y los agentes educativos que participan en la educación no formal. Se debe garantizar que todos los agentes del Sistema Educativo Provincial puedan acceder a propuestas de formación docente continua que sean relevantes para su desempeño profesional con calidad académica y adecuada a las necesidades de la docencia, sin perjuicio de lo establecido sobre el particular por la negociación colectiva, y

c) La investigación educativa tiene por objetivo el fortalecimiento del desarrollo de investigaciones pedagógicas, sistematización y publicación de experiencias innovadoras que aporten a la reflexión sobre la práctica y a la renovación de las experiencias escolares.

Artículo 44.- Carreras. La educación superior de formación científica, humanista, técnica y artística se organizará en carreras de duración variable, en función de múltiples especialidades, con regímenes flexibles que permitan una adecuada inserción y reconversión laboral acordes con las demandas sociales, culturales y económicas de la Provincia.

Artículo 45.- Políticas de articulación. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba debe desarrollar políticas de articulación entre las instituciones de educación superior de su dependencia y promover la articulación con las universidades a fin de facilitar el cambio de modalidad, orientación o carrera, la continuación de los estudios en otros establecimientos y la reconversión de los estudios concluidos, tanto en la formación inicial como en la formación continua.

Artículo 46.- Convenios de colaboración. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba debe propiciar la firma de convenios de colaboración mutua entre las autoridades educativas con el sector de la producción y el trabajo a fin de favorecer la realización de prácticas profesionales intracurriculares y/o pasantías laborales de los estudiantes con propósito formativo y garantía de planificación y acompañamiento docente.

Artículo 47.- Opciones académicas. El Estado Provincial puede crear, en concordancia con la legislación vigente, centros universitarios y de estudios avanzados procurando la descentralización y destinados a desarrollar actividades de investigación, docencia y extensión en el campo científico, tecnológico, humanístico y artístico. Generarán nuevas opciones académicas de alta calidad, definida ésta en relación con los avances internacionales del conocimiento y su adecuación a las exigencias del desarrollo provincial.

La estructuración académica, carreras y títulos, gobierno, administración y financiación de dichos centros deberá facilitar su articulación e interrelación con el conjunto del Sistema Educativo Provincial.

Artículo 48.- Evaluación institucional. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, en el marco de acuerdos federales, será responsable de desarrollar acciones de evaluación y seguimiento de los institutos de educación superior como así de autoevaluación institucional de los mismos, que aseguren el cumplimiento de la planificación jurisdiccional y una mejora de la calidad de la educación.

Sección Segunda

Modalidades y otras formas de la Educación

Apartado Primero

La Educación Especial

Artículo 49.- Características. La educación especial es la modalidad del Sistema Educativo Provincial que comprende el conjunto de servicios, recursos y procedimientos destinados a garantizar el derecho a la educación de las personas con algún tipo de discapacidad, temporal o permanente.

Por el principio de inclusión educativa se asegura la integración de los alumnos con discapacidades en todos los niveles y modalidades según las posibilidades de cada persona.

Asimismo, la escuela especial brinda atención educativa a todas aquellas personas cuyas problemáticas específicas no puedan ser abordadas por la escuela común.

Artículo 50.- Objetivos. La educación especial debe asegurar una atención multiprofesional brindada por equipos interdisciplinarios que posibilite la identificación y valoración de la discapacidad y/o de las personas con necesidades educativas especiales -temporales o permanentes- con el objetivo de facilitar su inclusión en los diferentes niveles del sistema de enseñanza, particularmente los obligatorios y un seguimiento continuo en los aspectos afectivo, intelectual, familiar y social.

En el marco de un sistema educativo inclusivo, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba en acuerdo con otros organismos, garantizará la participación de las personas con algún tipo de discapacidad en propuestas de capacitación laboral, deportes, recreación y desarrollo de la expresión y creación cultural.

Los programas de formación docente, en sus distintas modalidades, y de las carreras afines a esta temática contemplarán aspectos curriculares referidos a la educación especial.

Artículo 51.- Garantías. Con el propósito de asegurar el derecho a la educación, la integración escolar y favorecer la inserción social de las personas con discapacidades -temporales o permanentes-, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba dispondrá las medidas necesarias para:

- a) Posibilitar una trayectoria educativa integral que permita el acceso a los saberes tecnológicos, artísticos y culturales;
- b) Contar con el personal especializado suficiente que trabaje en equipo con los docentes de la escuela común;
- c) Asegurar la cobertura de los servicios educativos especiales, el transporte, los recursos técnicos y materiales necesarios para el desarrollo del currículo escolar;
- d) Propiciar alternativas de continuidad para su formación a lo largo de toda la vida, y
- e) Garantizar la accesibilidad física de todos los edificios escolares.

Artículo 52.- Instancias institucionales. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba creará las instancias institucionales y técnicas necesarias para la adecuación, orientación y sostenimiento de la trayectoria escolar más conveniente de los alumnos con discapacidades -temporales o permanentes-, en todos los niveles de la enseñanza obligatoria, así como también las normas que regirán los procesos de evaluación y certificación escolar. Asimismo, participará en mecanismos de articulación entre ministerios y otros organismos del Estado que atienden a personas con discapacidades -temporales o permanentes-, para garantizar un servicio eficiente y de calidad.

Apartado Segundo

La Educación Permanente de Jóvenes y Adultos

Artículo 53.- Características. La educación de jóvenes y adultos es la modalidad educativa destinada a garantizar la alfabetización y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a quienes no lo hayan completado en la edad establecida reglamentariamente y a brindar capacitación técnico profesional a la población adulta, con el fin de lograr el constante mejoramiento de su formación individual y su integración social, abriendo posibilidades de educación a lo largo de toda la vida.

Artículo 54.- Acciones. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba debe articular los programas y acciones de educación para jóvenes y adultos con acciones de otros organismos gubernamentales referidos al área como también con el mundo de la cultura, de la producción y el trabajo para poder brindar así un servicio eficiente y de calidad.

Artículo 55.- Objetivos. La organización curricular e institucional de la educación de jóvenes y adultos responderá a los siguientes objetivos y criterios:

- a) Brindar una formación básica que permita adquirir conocimientos y desarrollar las capacidades de expresión, comunicación, relación interpersonal y de construcción del conocimiento, atendiendo las particularidades socioculturales, laborales, contextuales y personales de la población destinataria;
- b) Desarrollar la capacidad de participación en la vida social, cultural, política y económica y hacer efectivo su derecho a la ciudadanía democrática;
- c) Mejorar su formación técnico-profesional y/o adquirir una preparación que facilite su inserción laboral;
- d) Incorporar en sus enfoques y contenidos básicos la equidad de género y la diversidad cultural;
- e) Promover la inclusión de la población adulta mayor y de las personas con discapacidades - temporales o permanentes-;
- f) Diseñar una estructura curricular modular basada en criterios de flexibilidad y apertura;
- g) Otorgar certificaciones parciales y acreditar los saberes adquiridos a través de la experiencia;
- h) Implementar sistemas de equivalencias que permitan y acompañen la movilidad de las personas en el Sistema Educativo Provincial;
- i) Desarrollar acciones educativas presenciales y/o a distancia, asegurando la calidad e igualdad de sus resultados;
- j) Promover, a través de la firma de convenios, el desarrollo de proyectos educativos con la participación y vinculación de los sectores laborales o sociales de pertenencia de los estudiantes, y
- k) Promover el acceso al conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías.

Apartado Tercero

La Educación en Contexto de Privación de Libertad

Artículo 56.- Características. La educación en contextos de privación de libertad es la modalidad del Sistema Educativo Provincial destinada a garantizar el derecho a la educación de todas las personas privadas de libertad para promover su formación integral y desarrollo pleno, sin limitación ni discriminación alguna vinculada a la situación de encierro. Este derecho será puesto en conocimiento de todas las personas privadas de libertad, en forma fehaciente, desde el momento de su ingreso a la institución.

Artículo 57.- Modalidad. La modalidad de educación para jóvenes y adultos en la Provincia de Córdoba será abarcativa de la educación en contextos de privación de libertad de personas adultas y de menores en conflicto con la ley penal.

**Apartado Cuarto
La Educación Rural**

Artículo 58.- Características. La educación rural es la modalidad del Sistema Educativo Provincial destinada a garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de formas adecuadas a las necesidades y particularidades de la población que habita en zonas rurales.

Artículo 59.- Objetivos. La educación rural se desarrollará conforme los siguientes criterios y objetivos:

a) El enfoque global del proceso educativo que, partiendo del conocimiento de la realidad local y regional, integre a los distintos grupos de edad y a los diversos problemas de la producción y de la vida comunitaria;

b) La participación de la comunidad en las distintas fases de dicho proceso, promoviendo diseños institucionales que permitan a los alumnos mantener los vínculos con su núcleo familiar y su medio local de pertenencia;

c) La aplicación de modelos de organización escolar adecuados a cada contexto, tales como agrupamientos de instituciones, escuelas albergue, salas plurigrados y grupos multiedad, instituciones que abarquen varios niveles en una misma unidad educativa, escuelas de alternancia, escuelas itinerantes u otras;

d) Proveer la instrumentación de estrategias y recursos pedagógicos y materiales que garanticen la escolarización de los estudiantes, la accesibilidad, permanencia y egreso a través de programas específicos (becas, comedores escolares, transporte, salud, textos, recursos informáticos o los que la realidad institucional requiera);

e) El accionar intersectorial coordinado de los agentes de los distintos servicios con las comunidades rurales, integrando redes intersectoriales con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a fin de coordinar la cooperación de los distintos sectores para poder brindar así un servicio eficiente y de calidad;

f) La dignificación del trabajo manual integrándolo en los procesos productivos con el trabajo intelectual, organizando servicios de educación no formal que contribuyan a la capacitación laboral y la promoción cultural de la población rural;

g) El rescate y fomento de los valores y expresiones culturales de las comunidades rurales, y

h) El estímulo a la participación y formación de organizaciones sociales representativas, contribuyendo al enfoque democrático de su actividad.

**Apartado Quinto
La Educación Técnico Profesional**

Artículo 60.- Características. La educación técnico profesional es la modalidad de la educación secundaria y de la educación superior responsable de la formación de técnicos medios y técnicos superiores en áreas ocupacionales específicas y de la formación profesional, promoviendo en sus integrantes el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores, principios éticos y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socio-productivo y para su inserción como ciudadano pleno.

Artículo 61.- Objetivos. La educación técnico profesional se desarrollará según los siguientes criterios y objetivos:

a) Formar técnicos medios y técnicos superiores en áreas ocupacionales específicas, cuya complejidad requiera la disposición de competencias profesionales que se desarrollan a través de procesos sistemáticos y prolongados de formación para generar en las personas capacidades profesionales que son la base de esas competencias;

b) Contribuir al desarrollo integral de los alumnos y a proporcionarles condiciones para el crecimiento personal, laboral y comunitario en el marco de una educación técnico profesional continua y permanente;

c) Desarrollar procesos sistemáticos de formación que articulen el estudio y el trabajo, la investigación y la producción, la complementación teórico-práctico en la formación, la formación ciudadana, la humanística general y la relacionada con campos profesionales específicos;

d) Desarrollar trayectorias de profesionalización que garanticen a los alumnos el acceso a una base de capacidades profesionales y saberes que les permita su inserción en el mundo del trabajo, así como continuar aprendiendo durante toda su vida;

e) Desarrollar oportunidades de formación específica propias de la profesión u ocupación abordada y prácticas profesionalizantes dentro del campo ocupacional elegido;

f) Favorecer el reconocimiento y certificación de saberes y capacidades, así como la reinserción voluntaria en la educación formal y la prosecución de estudios regulares en los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo Provincial;

g) Favorecer niveles crecientes de equidad, calidad, eficiencia y efectividad de la educación técnico profesional como elemento clave de las estrategias de inclusión social, de desarrollo y crecimiento socioeconómico del país, de la provincia y sus regiones, de innovación tecnológica y de promoción del trabajo decente;

h) Articular las instituciones y los programas de educación técnico profesional con los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la producción y el trabajo;

- i) Promover la vinculación entre el sector productivo y la educación técnico profesional, y
- j) Promover y desarrollar la cultura del trabajo y la producción para el desarrollo sustentable, orientados por criterios de equidad y justicia social.

Artículo 62.- Orientación educativa. Las instituciones de gestión estatal o privada que brindan educación técnico profesional, se orientarán a:

- a) Impulsar modelos innovadores de gestión que incorporen criterios de calidad y equidad para la adecuación y el cumplimiento a nivel institucional de los objetivos y propósitos de la normativa que regula la educación técnico profesional;
- b) Ejecutar las estrategias para atender las necesidades socio-educativas de distintos grupos sociales establecidas en los programas nacionales y jurisdiccionales, y desarrollar sus propias iniciativas con el mismo fin;
- c) Establecer sistemas de convivencia basados en la solidaridad, la cooperación y el diálogo con la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa;
- d) Contemplar la constitución de cuerpos consultivos o colegiados donde estén representadas las comunidades educativas y socio-productivas;
- e) Generar proyectos educativos que propicien, en el marco de la actividad educativa y previa aprobación de la autoridad ministerial, la producción de bienes y servicios con la participación de alumnos y docentes a través de talleres, laboratorios, pasantías, proyectos productivos articulados con otras instituciones, proyectos didácticos/productivos institucionales orientados a satisfacer necesidades del medio socio-cultural o de la misma institución, micro-emprendimientos a cargo de alumnos, desarrollo de actividades técnico profesionales, empresas o instituciones productivas simuladas y/o cualquier otra modalidad pedagógico-productiva que se instaure. Dichos proyectos se implementarán con el propósito que los estudiantes consoliden, integren y amplíen las competencias y saberes que corresponden con el perfil profesional en el que se están formando, referenciadas en situaciones de trabajo desarrolladas dentro o fuera del establecimiento educativo y que se ajusten a las condiciones y disposiciones previstas para la educación técnico profesional, y
- f) Recuperar y desarrollar propuestas pedagógicas y organizativas que formen técnicos con capacidades para promover el desarrollo rural y emprendimientos asociativos y/o cooperativos, sobre la base de las producciones familiares, el cuidado del ambiente y la diversificación en términos de producción y consumo, así como propiciar la soberanía alimentaria.

Artículo 63.- Programas de formación profesional. Las instituciones de educación técnico profesional de nivel medio y nivel superior están facultadas para implementar programas de formación profesional continua en su campo de especialización.

Artículo 64.- Manejo autónomo. Las instituciones de educación técnico profesional de nivel medio y nivel superior deben ser autorizadas por el Ministerio de Educación al manejo autónomo del propio producido que surja como Proyecto Escuela - Trabajo - Producción, con carácter educativo.

En ningún caso los alumnos asumirán obligaciones que excedan el sentido pedagógico de los proyectos ni serán expuestos a cualquier forma de trabajo informal.

Artículo 65.- Convenios. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba regulará la vinculación entre el sector productivo y la educación técnico profesional y promoverá convenios que las instituciones de esta modalidad puedan suscribir con Organizaciones No Gubernamentales, empresas, empresas recuperadas, cooperativas, emprendimientos productivos desarrollados en el marco de los planes de promoción de empleo y fomento de los micro emprendimientos, sindicatos, universidades nacionales, institutos nacionales de la industria y del agro, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la Comisión Nacional de Energía Atómica, los institutos de formación docente u otros organismos del Estado y/o privados con competencia en el desarrollo científico-tecnológico, tendientes a cumplimentar los objetivos establecidos para la educación técnico profesional por la normativa vigente.

Artículo 66.- Prácticas educativas. Cuando las prácticas educativas se realicen fuera del ámbito escolar se garantizará la seguridad de los alumnos y la auditoría, dirección y control a cargo de los docentes, por tratarse de procesos de aprendizaje y no de producción a favor de los intereses económicos que pudieran haber a las empresas.

En ningún caso los alumnos sustituirán, competirán o tomarán el lugar de los trabajadores de la empresa.

La práctica educativa complementa la formación del alumno, pero en ningún caso debe ser considerada trabajo en los términos de la Ley Nacional Nº 20.744.

Artículo 67.- Formación profesional. Definición. La formación profesional es el conjunto de acciones cuyo propósito es la formación socio-laboral para y en el trabajo, dirigida tanto a la adquisición y mejora de las cualificaciones como a la recualificación de los trabajadores, que permite compatibilizar la promoción social, profesional y personal con la productividad de la economía nacional, regional y local. También incluye la especialización y profundización de conocimientos y capacidades en los niveles superiores de la educación formal.

Artículo 68.- Formación profesional. Propósitos. La formación profesional tiene como propósitos específicos preparar, actualizar y desarrollar las capacidades de las personas para el trabajo, cualquiera sea su situación educativa inicial a través de procesos que aseguren la adquisición de conocimientos científico-tecnológicos y el dominio de las competencias básicas, profesionales y sociales

requerido por una o varias ocupaciones definidas en un campo ocupacional amplio, con inserción en el ámbito económico-productivo.

Artículo 69.- Ingreso y desarrollo. La formación profesional admite formas de ingreso y de desarrollo diferenciadas de los requisitos académicos propios de los niveles y ciclos de la educación formal.

Artículo 70.- Formación profesional. Ofertas. Las ofertas de formación profesional podrán contemplar la articulación con programas de alfabetización o de terminalidad de los niveles y ciclos comprendidos en la escolaridad obligatoria y post-obligatoria.

Artículo 71.- Reconocimiento de títulos. Las instituciones educativas y los cursos de formación profesional certificados por el Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico Profesional y el Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones podrán ser reconocidos en la educación formal.

Apartado Sexto **La Educación Artística**

Artículo 72.- Características. La educación artística es la modalidad que comprende la formación en los distintos lenguajes del arte: música, artes visuales, teatro, danza, plástica y otras que pudieran conformarse, admitiendo -en cada caso- distintas especializaciones. La misma se brinda para la educación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos de todos los niveles y modalidades.

Artículo 73.- Garantía de calidad. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba garantizará una educación artística de calidad para todos los alumnos del Sistema Educativo Provincial, que fomente y desarrolle la sensibilidad y la capacidad creativa de cada persona en un marco de valoración y protección del patrimonio natural y cultural, material y simbólico de las diversas comunidades que integran la Provincia.

Artículo 74.- Formación específica. Todos los alumnos, en el transcurso de su escolaridad obligatoria, tienen la oportunidad de desarrollar su sensibilidad y su capacidad creativa en al menos dos (2) disciplinas artísticas.

En la educación secundaria la modalidad artística ofrecerá una formación específica en música, danza, artes visuales, plástica, teatro y otras que pudieran conformarse, admitiendo -en cada caso- diferentes especializaciones.

La formación específica brindada en las escuelas especializadas en artes podrá continuarse en establecimientos de nivel superior de la misma modalidad.

Apartado Séptimo **La Educación Domiciliaria y Hospitalaria**

Artículo 75.- Características. La educación domiciliaria y hospitalaria es la modalidad del Sistema Educativo Provincial en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria destinada a garantizar el derecho a la educación de los alumnos que, por razones de salud, se ven imposibilitados de asistir con regularidad a una institución educativa en los niveles de la educación obligatoria.

Artículo 76.- Recursos. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba procurará los recursos necesarios a los fines de garantizar la igualdad de oportunidades a los alumnos, permitiendo la continuidad de sus estudios y su reinserción en el Sistema Educativo Provincial común, cuando ello sea posible.

Apartado Octavo **La Educación Intercultural Bilingüe**

Artículo 77.- Características. La educación intercultural bilingüe es la modalidad del Sistema Educativo Provincial de los niveles inicial, primario y secundario que garantiza el derecho de los pueblos indígenas a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica, promoviendo un diálogo mutuamente enriquecedor de conocimientos y valores entre los pueblos indígenas y poblaciones étnica, lingüística y culturalmente diferentes, propiciando el reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias.

Sección Tercera **Educación de Gestión Privada**

Artículo 78.- Prestadores. El Estado Provincial reconocerá, dentro de los principios de la Constitución y de esta Ley, la libertad de la iniciativa privada para crear y gestionar institutos de enseñanza en los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo Provincial, los que estarán sujetos al reconocimiento, autorización y supervisión del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

Tienen derecho a prestar estos servicios la Iglesia Católica, las confesiones religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos, las sociedades cooperativas, organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones, fundaciones y otras personas físicas y jurídicas.

Artículo 79.- Funcionamiento. La enseñanza de gestión privada se imparte en los institutos debidamente reconocidos.

Su funcionamiento se regula por una ley especial que establece las condiciones para su reconocimiento y para la cooperación económica del Estado a aquellos que no persigan fines de lucro.

El Poder Ejecutivo Provincial debe disponer un organismo específico para el contralor y orientación de estos institutos.

Artículo 80.- Derechos y deberes. Los institutos de gestión privada tienen los siguientes derechos y deberes:

A) Derechos:

- a) Crear, gestionar y sostener establecimientos educativos;
- b) Matricular, evaluar y emitir certificados y títulos oficiales con validez nacional;
- c) Nombrar y promover a su personal directivo, docente, administrativo y auxiliar;
- d) Formular planes y programas de estudio;
- e) Elaborar el proyecto educativo institucional de acuerdo con su ideario, y
- f) Participar del planeamiento educativo y brindar formación docente continua.

B) Deberes:

- a) Cumplir con la normativa y los lineamientos de la política educativa nacional y provincial;
- b) Ofrecer servicios educativos que respondan a necesidades de la comunidad, y
- c) Brindar toda la información necesaria para la supervisión pedagógica y el control contable y laboral por parte del Estado.

**Sección Cuarta
La Educación a Distancia**

Artículo 81.- Características. La educación a distancia es una opción pedagógica y didáctica para jóvenes y adultos, aplicable a distintos niveles del Sistema Educativo Provincial, que coadyuva al logro de los objetivos de la política educativa y puede integrarse tanto a la educación formal como a la educación no formal.

Artículo 82.- Definición. A efectos de esta Ley, la educación a distancia se define como la opción pedagógica y didáctica donde la relación docente-alumno se encuentra separada en el tiempo y/o en el espacio durante todo o gran parte del proceso educativo, en el marco de una estrategia pedagógica integral que utiliza soportes materiales y recursos tecnológicos diseñados especialmente para que los alumnos alcancen los objetivos de la propuesta educativa.

Artículo 83.- Supervisión oficial. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, por intermedio de las direcciones de nivel que correspondan, debe supervisar la veracidad de la información difundida desde las instituciones, la estricta coincidencia entre dicha información y la propuesta autorizada e implementada y el cumplimiento de la normativa federal y jurisdiccional correspondiente.

**Sección Quinta
La Educación No Formal**

Artículo 84.- Características. La educación no formal configura una actividad pedagógica de carácter participativo que se desarrollará a través de un conjunto de servicios, programas y acciones destinados a satisfacer las necesidades educativas no atendidas o cubiertas en forma parcial por el sistema escolar, en el marco de la educación permanente.

El Estado promoverá la educación no formal para el desarrollo de:

- a) Estrategias que atiendan prioritariamente las necesidades, intereses y problemas de los diversos sectores poblacionales;
- b) Estrategias que apoyen el desarrollo económico de la Provincia, estimulando las capacidades innovadoras y de organización de la población e incorporando efectivamente, a través de la educación, los avances científicos y tecnológicos que permitan mejorar la producción y las condiciones de trabajo;
- c) La participación de diversos agentes educativos no convencionales facilitando el desenvolvimiento de la función educativa de la comunidad a través de sus instituciones, organizaciones representativas, empresas, familias y personas, y promoviendo la utilización creativa y crítica de los medios masivos de comunicación, y
- d) La integración y coordinación de acciones entre organismos públicos, no gubernamentales y privados, tendientes al abordaje conjunto de las demandas sociales con el fin de racionalizar el uso de los recursos existentes, ampliar la variedad y aumentar la oferta educativa.

Artículo 85.- Centros culturales. El Estado debe organizar centros culturales para niñas, niños, adolescentes y jóvenes con la finalidad de desarrollar capacidades expresivas, lúdicas y de investigación mediante programas no escolarizados de actividades vinculadas con las artes, la cultura, la ciencia, la tecnología y el deporte.

Artículo 86.- Validez de los títulos. El Estado Provincial certificará las acciones que se desarrollen en el ámbito de la educación no formal destinadas a la capacitación laboral y formación profesional.

Las personas físicas o jurídicas -públicas o privadas- que brinden servicios de educación no formal deberán consignar en toda su documentación, publicidad, comunicación, diplomas o certificados la leyenda "SIN VALIDEZ OFICIAL", sin ninguna otra inscripción o aditamento que pueda inducir a interpretar como reconocimiento o validez oficial de la enseñanza que imparten.

TÍTULO TERCERO

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN

CAPÍTULO I
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Sección Primera
El Ministerio de Educación

Artículo 87.- Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba será el órgano del Poder Ejecutivo Provincial responsable de la planificación, organización, gobierno, administración y fiscalización generales del área, de acuerdo con el principio constitucional de centralización política y normativa.

Artículo 88.- Unidades de organización. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba dispondrá de las secretarías, subsecretarías, direcciones y otras unidades de organización necesarias para el más adecuado cumplimiento de sus competencias generales, en concordancia con la legislación vigente, que faculta al Poder Ejecutivo Provincial a autorizar su funcionamiento.

Artículo 89.- Funciones del Ministerio. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba desarrollará las siguientes funciones generales:

- a) Garantizar el cumplimiento y respeto de los principios constitucionales, de esta Ley y sus reglamentaciones;
- b) Organizar, fiscalizar y evaluar el Sistema Educativo Provincial en todos sus niveles y modalidades;
- c) Elaborar y ejecutar la política general del área, considerando las propuestas acordadas en los organismos de participación y consulta establecidos en la presente Ley;
- d) Preparar y ejecutar el programa presupuestario anual correspondiente al área;
- e) Planificar, instrumentar y difundir investigaciones e innovaciones destinadas al mejoramiento de la inclusión y la calidad educativa;
- f) Promover la formación y capacitación de sus agentes;
- g) Desarrollar acciones de cooperación e intercambio con organismos provinciales, nacionales e internacionales, y
- h) Evaluar el rendimiento general del Sistema, asistido por el Consejo de Políticas Educativas.

Artículo 90.- Desconcentración administrativa. La administración del Sistema Educativo Provincial en el nivel regional será desconcentrada funcional y territorialmente a fin de adaptar los servicios con eficacia, eficiencia y oportunidad a las necesidades del mismo.

Sección Segunda
El Consejo Provincial de Políticas Educativas

Artículo 91.- Creación. Créase en el ámbito del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba el "Consejo Provincial de Políticas Educativas" que estará conformado por representantes de los siguientes organismos y entidades con sede en el territorio provincial:

- a) Ministerio de Educación u organismo que en el futuro lo sustituyere;
- b) Ministerio de Ciencia y Tecnología u organismo que en el futuro lo sustituyere;
- c) Universidades públicas;
- d) Universidades privadas;
- e) Entidades gremiales del sector educativo;
- f) Poder Legislativo;
- g) Poder Judicial;
- h) Entidades representativas de las instituciones educativas de gestión privada;
- i) Entidad provincial que agrupe a estudiantes de nivel secundario por los establecimientos educativos de gestión estatal;
- j) Entidad provincial que agrupe a estudiantes de nivel secundario por los establecimientos educativos de gestión privada;
- k) Entidad provincial que agrupe a estudiantes de nivel superior por los establecimientos educativos de gestión estatal;
- l) Entidad provincial que agrupe a estudiantes de nivel superior por los establecimientos educativos de gestión privada;
- m) Entidad provincial que agrupe a padres o madres de familia por los establecimientos educativos de gestión estatal;
- n) Entidad provincial que agrupe a padres o madres de familia por los establecimientos educativos de gestión privada, y
- ñ) Otros organismos comprometidos con la temática a quienes el Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba o quien él designe podrá cursar las invitaciones pertinentes.

Artículo 92.- Integración. El Consejo Provincial de Políticas Educativas estará integrado por dos (2) representantes, uno titular y otro suplente, designados por cada uno de los organismos integrantes del mismo y su coordinación será ejercida por el Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba.

Artículo 93.- Carácter. El Consejo Provincial de Políticas Educativas tiene carácter consultivo, asesorando y colaborando con el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba en lo que se refiere a:

- a) Proponer cuestiones que, a su criterio, resulten necesarias para la elaboración de las políticas educativas, produciendo informes que las avalen y que sean consecuencia del análisis pertinente;
- b) Proponer acciones y medidas que contribuyan al cumplimiento de las leyes educativas nacionales y provinciales;
- c) Sugerir la modificación de la legislación vigente con el propósito de que aquella se ajuste a la realidad imperante;
- d) Procurar la coordinación de las acciones a implementar en la Provincia a los efectos de fortalecer en términos de inclusión, equidad, calidad y pertinencia el servicio educativo brindado en todos sus niveles y modalidades;
- e) Ejecutar tareas de monitoreo y evaluación de los resultados de las actividades desarrolladas en el marco de las políticas o acciones por dicho organismo propuestas;
- f) Impulsar acciones conducentes al relevamiento de situaciones que requieran de medidas en materia de política educativa, como así también de los recursos, programas, legislación, investigación y estudios a ellas referidas;
- g) Proponer alternativas para la optimización de los recursos que sean asignados a los fines de la implementación de políticas en materia educativa, y
- h) Promover y facilitar la articulación de la educación superior prevista en el artículo 45 de esta Ley, principalmente en lo atinente a la formación docente inicial y continua como a la investigación educativa. A esos fines se debe constituir en el seno del Consejo Provincial de Políticas Educativas una comisión permanente con la participación de los sectores involucrados.

Artículo 94.- Comisión de evaluación. La Comisión de Evaluación e Información Educativa a que hace referencia el artículo 21 de la presente Ley, que funcionará en el ámbito del Consejo Provincial de Políticas Educativas, está integrada por representantes de dicho Consejo, del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y por miembros de la comunidad académica y científica de reconocida trayectoria en la materia.

La Comisión de Evaluación e Información Educativa tiene por funciones:

- a) Proponer criterios y modalidades en los modos de construcción de las herramientas de información y evaluación de la educación;
- b) Participar en el seguimiento de los procesos de información y evaluación del Sistema Educativo Provincial;
- c) Participar en la difusión y utilización de la información generada por dichos procesos, y
- d) Asesorar al Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba en todo lo que hace a la información y evaluación de la educación.

Artículo 95.- Convocatoria. El Consejo Provincial de Políticas Educativas debe ser convocado en forma ordinaria por lo menos cuatro (4) veces en el año, preferentemente en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre, previo acuerdo con la coordinación respecto de la fecha y el temario. Sin perjuicio de ello, el Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba puede convocarlo en forma extraordinaria cuando lo estime conveniente o a solicitud del propio Consejo para el tratamiento de temas extraordinarios y de carácter urgente. Asimismo, puede disponer la formación de comisiones especiales. En tal caso, se debe determinar su duración, la finalidad a cumplir y los plazos para elevar sus despachos al Consejo.

El Consejo Provincial de Políticas Educativas procurará producir los informes y propuestas por consenso. Cuando esto no se logre, se deben consignar todas las opiniones disidentes, con los fundamentos que las avalen.

Sección Tercera

El Consejo Provincial de Educación Técnica y Trabajo

Artículo 96.- Creación. Créase el "Consejo Provincial de Educación Técnica y Trabajo" como ámbito de participación para la formulación y coordinación de las políticas y estrategias provinciales en materia de educación técnica profesional de nivel medio y superior y de la formación profesional a los efectos de fortalecer, en términos de calidad y pertinencia, la formación técnico profesional de los jóvenes y adultos y su enlace con el mundo productivo.

Artículo 97.- Funciones. El Consejo Provincial de Educación Técnica y Trabajo tiene carácter consultivo, asesorando y colaborando en lo que se refiere a:

- a) Establecer mecanismos de consulta y colaboración con los sectores sociales -empresarios, de los trabajadores y de las asociaciones intermedias- a fin de receptar los aportes al diseño y ejecución de las políticas de fortalecimiento y sustentabilidad de la educación técnico profesional en la Provincia;
- b) Proponer y/o elaborar para su aprobación los trayectos y programas de formación técnico-profesional, teniendo en cuenta las demandas regionales;
- c) Promover la terminalidad educativa de la población joven y adulta, así como su incorporación en procesos de educación continua;
- d) Promover la formación y actualización docente en su relación con la modernidad del mundo productivo;
- e) Promover la vinculación de la Provincia y su reconocimiento ante organismos provinciales, nacionales e internacionales, y

f) Asesorar respecto de las tendencias del desarrollo regional, de las nuevas tecnologías incorporadas a la producción y el trabajo y de las necesidades de capacitación de los distintos sectores, promoviendo la articulación entre las ofertas de los distintos Ministerios.

Artículo 98.- Integración. El Consejo Provincial de Educación Técnica y Trabajo está integrado por los señores Ministros de Educación, de Industria, Comercio y Trabajo, de Ciencia y Tecnología y de Agricultura, Ganadería y Alimentos o de los organismos que en el futuro los sustituyeren.

Contará además con un (1) representante titular y uno (1) suplente, provenientes de:

- a) Sector universitario;
- b) Sector empresarial;
- c) Sector de los trabajadores;
- d) Las asociaciones intermedias;
- e) Las asociaciones gremiales de educación;
- f) La entidad provincial que agrupe a estudiantes de nivel medio y superior por los establecimientos educativos de modalidad técnico-profesional;
- g) La entidad provincial que agrupe a padres o madres de familia por los establecimientos educativos de modalidad técnico-profesional, y
- h) Las entidades representativas de las instituciones educativas de gestión privada.

Artículo 99.- Autoridades. La Presidencia del Consejo Provincial de Educación Técnica y Trabajo será ejercida en forma rotativa cada doce (12) meses por los señores Ministros de Educación y de Industria, Comercio y Trabajo.

Será coordinado por un representante del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, designado a tal efecto.

Todos los integrantes del Consejo desempeñarán sus funciones en forma honoraria sin derecho a compensación ni retribución de ninguna naturaleza.

CAPÍTULO II LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Artículo 100.- Unidades pedagógicas. Las instituciones educativas constituyen la unidad pedagógica del sistema, responsables de los procesos de enseñanza y aprendizaje destinados al logro de los objetivos establecidos por esta Ley.

Artículo 101.- Comunidad Educativa. Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 100 de esta Ley, las instituciones educativas deben favorecer y articular la participación de los distintos actores que constituyen la comunidad educativa: directivos, docentes, no docentes, padres, madres y/o tutores, alumnos, profesionales de los equipos de apoyo, cooperadoras escolares y otros representantes del medio local comprometidos con la función educativa de la institución.

Artículo 102.- Proyecto Educativo Institucional. Las instituciones educativas disponen de la autonomía pedagógica necesaria para elaborar y ejecutar su proyecto institucional. Éste se planificará y desarrollará respetando los lineamientos y objetivos generales de la política educacional, atendiendo a las exigencias específicas de la realidad regional y local, considerando las posibilidades operativas de cada institución.

Artículo 103.- Criterios organizativos. Las instituciones educativas, en el marco de las políticas definidas y condiciones habilitadas por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, adoptan para su organización los siguientes criterios:

- a) Definir su proyecto educativo con la participación de todos sus integrantes, respetando los principios y objetivos enunciados en esta Ley;
- b) Promover modos de organización institucional que garanticen dinámicas democráticas de convocatoria y participación de los alumnos en la experiencia escolar;
- c) Adoptar el principio de no discriminación en el acceso y trayectoria educativa de los alumnos;
- d) Desarrollar procesos de autoevaluación institucional con el propósito de revisar las prácticas pedagógicas y de gestión;
- e) Realizar adecuaciones curriculares en el marco de los lineamientos curriculares provinciales y federales para responder a las particularidades y necesidades de su alumnado y su entorno;
- f) Definir su código de convivencia;
- g) Facilitar iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la investigación pedagógica y de la extensión;
- h) Promover la participación de la comunidad a través de la cooperación escolar en todos los establecimientos educativos de gestión estatal, e
- i) Promover experiencias educativas fuera del ámbito escolar con el fin de permitir a los estudiantes conocer la cultura nacional, experimentar actividades físicas y deportivas en ambientes urbanos y naturales, tener acceso a las actividades culturales de su localidad y otras.

Artículo 104.- Supervisores. Los supervisores del sistema integrarán el equipo técnico-docente de las distintas direcciones del Sistema Educativo Provincial y desempeñan la tarea de asesorar y apoyar a las instituciones educativas para el mejor desarrollo de su proyecto institucional.

El acceso al cargo de supervisor se efectuará con arreglo a las condiciones establecidas por los estatutos y normas reglamentarias que regulan la carrera docente.

Artículo 105.- Director. Cada institución educativa estará a cargo de un director que podrá ser apoyado en sus funciones por un equipo de gestión educativa conformado de acuerdo a las características de cada escuela. El acceso a estos cargos se efectúa con arreglo a las condiciones establecidas por los estatutos y normas reglamentarias que regulan la carrera docente.

En las instituciones de gestión privada el director reviste el carácter de autoridad pedagógica, mientras que la entidad propietaria es la responsable del funcionamiento integral de la institución.

Artículo 106.- Apoyo de gestión. Las instituciones de educación superior serán apoyadas en su gestión a través de organismos colegiados que favorezcan la participación de los docentes y de los estudiantes en el gobierno de la institución y mayores grados de decisión en el diseño e implementación de su proyecto institucional.

Artículo 107.- Organismos de apoyo. Las instituciones educativas pueden propiciar la creación y organización de asociaciones de apoyo a su accionar, tales como asociaciones cooperadoras, clubes de madres, cooperativas de alumnos, docentes y padres. Estos organismos tendrán como finalidad movilizar, captar y administrar medios y recursos para cumplir con las actividades programadas.

El Estado Provincial debe dotar de un sistema normativo que posibilite un procedimiento ágil y flexible para su constitución, administración, formas periódicas y democráticas de elección de autoridades y todo aquello que haga a su mejor integración y funcionamiento.

Artículo 108.- Competencias de los municipios. Una ley especial establecerá y reglamentará las competencias y atribuciones de los municipios en materia educativa, las que se ejercerán en forma coordinada y concertada con el Gobierno Provincial, asegurando su concordancia con la presente Ley general.

Dicha norma preverá la realización de convenios entre ambos niveles de gobierno, en los cuales se acordarán las condiciones de cooperación y participación correspondientes a la creación, construcción, mantenimiento y equipamiento de las instituciones educativas, así como su regulación pedagógica, académica y administrativa.

TÍTULO CUARTO FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN

CAPÍTULO ÚNICO Fuentes de Financiamiento

Artículo 109.- Garantía presupuestaria. La Provincia garantiza para el Sistema Educativo Provincial un porcentaje mínimo de recursos en cada ejercicio no inferior al treinta y cinco por ciento (35%) del Presupuesto General anual. Para dar cumplimiento a dicha obligación y a los demás objetivos fijados en la presente Ley, el Gobierno de la Provincia de Córdoba asignará los fondos presupuestarios que fueren necesarios, afectando recursos tributarios y/o no tributarios, corrientes y/o extraordinarios, y en su caso, propiciará la creación de tributos (impuestos, tasas retributivas de servicios y/u otros), y/o tomará financiamiento del sistema financiero nacional y/o internacional.

Artículo 110.- Aranceles. Las instituciones educativas de gestión privada pueden ser gratuitas o aranceladas. En este último caso, pueden combinar para su financiamiento el aporte estatal y los aranceles educacionales.

TÍTULO QUINTO DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS y TRANSITORIAS

Artículo 111.- Derogación. Derógase la Ley Nº 8113 y sus modificatorias.

Artículo 112.- Modificación de programas. Las modificaciones de planes y programas de estudio que pudiesen llevarse adelante como consecuencia de la aplicación de la presente Ley no pueden causar perjuicio moral y/o patrimonial a los trabajadores de la educación. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba debe efectuar las adecuaciones que correspondan a cada caso.

Artículo 113.- Metas a mediano plazo. A fin de lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente Ley, en especial a los referidos a la obligatoriedad escolar tanto de nivel inicial como de nivel secundario y la jornada extendida de nivel primario -artículos 26, 27, 36 y 37 de la presente Ley-, además de alcanzar los acuerdos logrados en el Compromiso por la Educación firmado por los referentes de las fuerzas políticas de la Provincia en el marco del Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba (COPEC), se establecen las siguientes metas a alcanzar durante los próximos cuatro (4) años:

a) Educación inicial: extender la educación inicial a fin de garantizar la misma para las niñas y niños desde sus primeros años de vida, que permita un mejor desarrollo de la trayectoria escolar futura.

1) Incrementar las salas de tres (3) años alcanzando una cobertura del ciento por ciento (100%) en contextos sociales desfavorables dentro de los próximos tres (3) años, para lo cual se prevé la creación de ciento sesenta (160) nuevas salas, conforme al siguiente detalle:

Año 2011: sesenta (60) salas;
Año 2012: cincuenta (50) salas, y
Año 2013: cincuenta (50) salas.

2) Lograr el cumplimiento de la obligatoriedad de las salas de cuatro (4) años dentro de los próximos cinco (5) años, para lo cual se prevé la creación de doscientas veintiséis (226) nuevas salas, conforme al siguiente detalle:

Año 2011: cien (100) salas;
Año 2012: cincuenta (50) salas;
Año 2013: cincuenta (50) salas, y
Año 2014: veintiséis (26) salas.

Asimismo, y a fin de dicha creación, resulta necesaria la construcción de nuevas aulas, según el siguiente detalle:

Año 2011: cuarenta y cinco (45) aulas para salas de cuatro (4) años;
Año 2012: cincuenta (50) aulas para salas de cuatro (4) años y cincuenta (50) aulas para salas de tres (3) años;
Año 2013: cincuenta (50) aulas para salas de cuatro (4) años y cincuenta (50) aulas para salas de tres (3) años, y
Año 2014: veintiséis (26) aulas para salas de cuatro (4) años.

b) Educación Primaria y Secundaria: asegurar la escolarización de todas las niñas y niños en la educación de nivel primario y secundario en condiciones satisfactorias.

1) Aumentar, hasta alcanzar el ciento por ciento (100%) el número de escuelas primarias de jornada extendida o completa, principalmente en el segundo ciclo, a fin de favorecer una mejor articulación con el nivel secundario dentro de los próximos cinco (5) años, para lo cual se prevé la incorporación de trescientas noventa y ocho (398) escuelas primarias en programa de jornada extendida, conforme al siguiente detalle:

Año 2011: doscientas (200) escuelas;
Año 2012: noventa y ocho (98) escuelas;
Año 2013: cincuenta (50) escuelas, y
Año 2014: cincuenta (50) escuelas.

Se prevé que el total de secciones de segundo ciclo a incorporar entre los años 2011 y 2015 asciende a tres mil ciento ochenta y ocho (3.188) unidades.

Asimismo, y a fin de dicha creación, resulta necesaria la construcción de nuevas aulas, según el siguiente detalle:

Año 2011: cien (100) aulas;
Año 2012: cien (100) aulas;
Año 2013: cien (100) aulas;
Año 2014: cien (100) aulas, y
Año 2015: ciento ocho (108) aulas.

2) Sostener programas que incrementen las oportunidades y la atención educativa a la diversidad de necesidades del alumnado (zonas rurales, zonas urbano-marginales, pueblos originarios, discapacidad permanente y transitoria).

3) Escuelas primarias rurales: se prevé la incorporación de ciento cuarenta (140) maestros de materias especiales (áreas de educación física, artística, lengua extranjera y ciencias), los que serán afectados a extensión de jornada y conforme al siguiente detalle:

Año 2011: cuarenta (40) maestros;
Año 2012: cuarenta (40) maestros;
Año 2013: treinta (30) maestros;
Año 2014: veinte (20) maestros, y
Año 2015: diez (10) maestros.

4) Escuelas primarias en contexto desfavorable: se prevé la incorporación de ochenta y cinco (85) maestros de apoyo afectados a programas de fortalecimiento en las áreas de lengua, ciencias y matemática (1er. ciclo), conforme al siguiente detalle:

Año 2011: veinticinco (25) maestros de apoyo;
Año 2012: veinte (20) maestros de apoyo;
Año 2013: veinte (20) maestros de apoyo;
Año 2014: diez (10) maestros de apoyo, y
Año 2015: diez (10) maestros de apoyo.

5) Procesos de integración de alumnos con necesidades educativas especiales en escuela común: se prevé la incorporación de noventa y un (91) maestros integradores, conforme se detalla a continuación:

Año 2011: treinta (30) maestros integradores;
Año 2012: treinta (30) maestros integradores;
Año 2013: treinta y un (31) maestros integradores.

6) Se prevé dar continuidad al "Programa Provincial de Becas Estudiantiles - Nivel Medio" para alumnos pertenecientes a familias de bajos recursos y con buen desempeño académico.

c) Promover la inclusión de estudiantes de nivel secundario a partir de iniciativas y acciones sostenidas orientadas a la población objetivo, tales como:

1) Llevar a cabo acciones que permitan en el menor tiempo posible alcanzar el cumplimiento de la obligatoriedad del nivel para lo cual se prevé el sostenimiento del Programa de Inclusión y Terminalidad de la Educación Secundaria hasta su finalización correspondiente, en el transcurso del año 2014.

2) Generar estrategias que resuelvan el problema de la repitencia escolar y de iniciativas en múltiples campos para mejorar la calidad de la enseñanza para lo cual se prevé avanzar con la incorporación de doscientos sesenta y seis (266) coordinadores de curso en el nivel secundario de educación, conforme al siguiente detalle:

Año 2011: ciento veinte (120) coordinadores de curso;

Año 2012: cien (100) coordinadores de curso, y

Año 2013: cuarenta y seis (46) coordinadores de curso.

3) Se prevé reforzar los equipos profesionales de apoyo escolar a través de la incorporación de sesenta y cinco (65) gabinetistas psicopedagógicos, conforme al siguiente detalle:

Año 2011: quince (15) jefes de gabinete psicopedagógico;

Año 2012: quince (15) jefes de gabinete psicopedagógico;

Año 2013: quince (15) jefes de gabinete psicopedagógico;

Año 2014: diez (10) jefes de gabinete psicopedagógico, y

Año 2015: diez (10) jefes de gabinete psicopedagógico.

d) Ofrecer a todas las personas oportunidades de educación a lo largo de toda la vida, garantizando el acceso a la educación y a la formación laboral a las personas jóvenes y adultas con mayores desventajas y necesidades para lo cual se prevé la disponibilidad continua de noventa (90) cargos de maestros de materias especiales, afectados a la formación laboral (oficios), incorporando a los cargos existentes los siguientes:

Año 2011: doce (12) cargos;

Año 2012: diez (10) cargos;

Año 2013: diez (10) cargos;

Año 2014: diez (10) cargos, y

Año 2015: diez (10) cargos.

e) Dar continuidad a las acciones de mejora en la formación inicial y continua del profesorado para los distintos niveles del Sistema Educativo Provincial, orientado a:

1) Fortalecer los programas en curso y diseñar otros que promuevan la articulación entre los institutos superiores y las universidades que forman profesores, y

2) Impulsar acciones que acompañen el acceso al trabajo docente en sus primeros años de desempeño profesional para lo cual se prevé la creación de un mil doscientas (1.200) horas cátedras de nivel superior para afectar a la investigación, extensión y acompañamiento en el acceso al trabajo docente y conforme al siguiente detalle:

Año 2011: cuatrocientas (400) horas cátedras de nivel superior;

Año 2012: cuatrocientas (400) horas cátedras de nivel superior, y

Año 2013: cuatrocientas (400) horas cátedras de nivel superior.

f) Sostener la incorporación de tecnología y actualización de herramientas y capacitación docente a fin de favorecer su plena utilización como herramienta pedagógica que optimice el aprendizaje de los estudiantes, para lo cual se pretende proveer de cincuenta y nueve mil cuatrocientas cincuenta y cinco (59.455) netbooks (con equipamiento asociado) a establecimientos educativos de nivel inicial, primario y modalidad jóvenes y adultos, conforme al siguiente detalle:

Año 2011: dieciocho mil (18.000) netbooks;

Año 2012: quince mil ochocientas (15.800) netbooks;

Año 2013: catorce mil trescientas ochenta y ocho (14.388) netbooks;

Año 2014: cinco mil cuatrocientas (5.400) netbooks, y

Año 2015: cinco mil ochocientas sesenta y siete (5.867) netbooks.

Se prevé además la incorporación de cuatrocientos treinta y dos (432) administradores de red, conforme al siguiente detalle:

Año 2011: ciento ocho (108) administradores de red;

Año 2012: ciento ocho (108) administradores de red, y

Año 2013: doscientos dieciséis (216) administradores de red.

Se asegura la provisión de conectividad (internet) a la totalidad de los edificios educativos de gestión estatal.

Artículo 114.- Afectación presupuestaria. Hasta tanto se sancione la ley prevista en el artículo 109 de la presente norma, manténgase la afectación de los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal -distribución secundaria Ley Nacional Nº 23.548- a favor del Ministerio de Educación en los mismos términos y condiciones que se establecieron en el artículo 7º de la Ley Nacional Nº 26.075, a los fines de lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley Nacional Nº 26.206 -de Educación Nacional-.

Con el propósito de garantizar la participación de la Provincia en el esfuerzo del financiamiento educativo consolidado a través de la Ley Anual de Presupuesto Provincial, se determinará el monto de esa afectación en función de la variación porcentual del PBI nominal prevista en el marco de la Ley Nacional Nº 25.917 del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, artículo 2º y/o demás variables macrofiscales de similar significación.

Artículo 115.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DIOS GUARDE A V.H.

Feraudo, Bressan, Cuello, Gamaggio Sosa, Rosso, Solusolia, Ochoa Romero, Heredia, Chiofalo, Monier, Ipérico, Manzanares, Valarolo, Genta, Brügge, Nieto, Maiocco.

**PROYECTO DE LEY – 06480/E/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA**

**SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

**TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES
CAPÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES Y FINES DE LA EDUCACIÓN
EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA**

Sección Única

Principios Generales y Fines de la Educación

Artículo 1º.- Fundamentos. La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social garantizado por el Estado.

El Estado respetará los principios establecidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella.

La educación se constituye en política de Estado prioritaria para contribuir a la construcción y desarrollo de una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo cultural, económico y social de la Provincia.

El Estado Provincial no suscribirá tratados de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación. Esta Ley rige la organización y administración del Sistema Educativo Provincial integrado por los siguientes servicios:

- a) Servicios educativos públicos de gestión estatal;
- b) Servicios educativos municipales regulados por el artículo 108 de esta Ley, y
- c) Servicios educativos públicos de gestión privada autorizados.

Artículo 3º.- Principios generales. La política educativa, en cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Provincial, se rige por los siguientes principios generales:

a) La educación es función principal, obligatoria y permanente para el Estado Provincial, quien establece y supervisa la política del sector;

b) Se reconoce a la familia como agente natural y primario de educación, el derecho fundamental de educar a sus hijos y de escoger el tipo de educación más adecuado a sus propias convicciones;

c) La educación es también función y responsabilidad de la sociedad, orientada a asegurar el respeto de las peculiaridades individuales y culturales y a impulsar, a través de la participación de sus miembros, su propio desarrollo;

d) Todos los habitantes de la Provincia tienen derecho a la educación para favorecer el desarrollo pleno de su persona e integrarse como ciudadano en un marco de libertad y convivencia democrática. Es responsabilidad del Estado garantizar el ejercicio de este derecho en igualdad de oportunidades sin ningún tipo de discriminación fundada en su condición, origen o contexto social en el que vive, de género, étnica, ni por su nacionalidad, su orientación cultural o religiosa y sus condiciones físicas, intelectuales o lingüísticas;

e) Todos los habitantes de la Provincia tienen, asimismo, derecho a acceder a los más altos niveles de formación, investigación y creación, conforme con su vocación y aptitudes y dentro de las exigencias del interés nacional y provincial;

f) La educación pública de gestión estatal es común, integral, gratuita y exenta de dogmatismos de cualquier signo;

g) El Estado garantiza el derecho de enseñar y aprender en todo el territorio provincial. Su ejercicio, dentro del sistema educativo, respetará las libertades inherentes a las personas que se educan y lo dispuesto por la Constitución Provincial y la presente Ley;

h) El Estado garantiza, en el ámbito educativo, el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes establecidos en la Ley Nacional Nº 26.061;

i) El Estado reconoce, asimismo, la libertad de las personas, asociaciones y municipios de crear y gestionar instituciones educativas ajustadas a los principios de la Constitución y a esta Ley, y

j) El Estado asegura en el presupuesto provincial los recursos suficientes para el financiamiento del sistema educativo e integra con igual fin aportes comunitarios, sectoriales y de otras jurisdicciones.

Artículo 4º.- Fines y Objetivos de la Educación Provincial. La educación en la Provincia de Córdoba, de acuerdo con los principios y valores de su Constitución, se dirigirá al cumplimiento de los siguientes fines y objetivos:

a) El desarrollo integral, armonioso y permanente de los alumnos orientado hacia su realización personal y su trascendencia en lo cultural, lo social, lo histórico y lo religioso, según sus propias opciones;

b) La formación de ciudadanos conscientes de sus libertades y derechos y responsables de sus obligaciones cívicas, capaces de contribuir a la consolidación del orden constitucional, a la configuración de una sociedad democrática, justa y solidaria, así como a la valoración y preservación del patrimonio natural y cultural;

c) La capacitación para el ejercicio de la participación reflexiva y crítica y el comportamiento ético y moral de la persona que le permita su activa integración en la vida social, cultural y política;

d) La preparación laboral, técnica y profesional de la persona que la habilite para su incorporación idónea al proceso de desarrollo socio productivo y técnico, y para su formación permanente;

- e) La comprensión de los avances científicos y tecnológicos y su utilización al servicio del mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva;
- f) La conservación de los valores fundamentales que cimientan la identidad y unidad nacional y latinoamericana, con apertura a la cultura de los pueblos, así como a la promoción y creación de las expresiones culturales de las diversas comunidades de la Provincia;
- g) La formación en el respeto y valoración de la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios;
- h) La formación para la comprensión, la cooperación y la paz entre las naciones y la educación relativa a los derechos humanos y libertades fundamentales;
- i) Incorporar de manera obligatoria en todos los niveles educativos y modalidades el estudio de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial, sus normas, espíritu e instituciones;
- j) Brindar conocimientos y promover valores que contribuyan a una educación sexual integral, conforme a lo establecido por la Ley Nacional Nº 26.150;
- k) Brindar una formación que promueva el derecho a la vida y su preservación;
- l) Desarrollar una educación que posibilite la autodeterminación y el compromiso con la defensa de la calidad de vida, el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y la concientización sobre los procesos de degradación socio-ambiental;
- m) Incorporar el cooperativismo, mutualismo y asociativismo en todos los procesos de formación, en concordancia con los principios y valores establecidos en la Ley Nacional Nº 16.583 y sus normas reglamentarias;
- n) Promover el aprendizaje y utilización en la comunidad educativa de los métodos alternativos de resolución de conflictos, en el marco de lo establecido por la Ley Provincial de Mediación Nº 8858;
- ñ) Fortalecer la centralidad de la lectura y escritura como condiciones básicas para la construcción de una ciudadanía responsable y la libre circulación del conocimiento;
- o) Desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la información y la comunicación
- p) Promover el aprendizaje de saberes científicos fundamentales para comprender y participar reflexivamente en la sociedad contemporánea;
- q) Brindar una formación que garantice una educación artística integral y continua que permita la apropiación de sus distintos lenguajes, estimulando la creatividad, el gusto y la comprensión de las distintas manifestaciones del arte y la cultura;
- r) Asegurar una formación corporal motriz y deportiva que favorezca un desarrollo armónico y la adquisición de hábitos de vida saludable;
- s) Desarrollar las capacidades para “aprender a aprender” a lo largo de toda la vida;
- t) Concebir la cultura del trabajo y del esfuerzo personal y cooperativo como principio fundamental de los procesos de enseñanza y aprendizaje;
- u) Brindar una formación que le permita actuar con responsabilidad y compromiso en el cuidado y mejoramiento del ambiente contribuyendo a su desarrollo sustentable;
- v) Promover saberes, actitudes y valores que fortalezcan las capacidades de las personas para prevenir las adicciones y el uso indebido de drogas;
- w) Asegurar el conocimiento y respeto de las normas de tránsito y desarrollar actitudes y comportamientos seguros, responsables y solidarios en la vía pública;
- x) Desarrollar las capacidades para aprender a relacionarse, interactuar y trabajar en forma colaborativa, e
- y) Brindar una formación que asegure condiciones de igualdad, sin admitir discriminaciones de ningún tipo.

CAPÍTULO II DERECHO A LA EDUCACIÓN

Sección Primera

Responsabilidad del Estado

Artículo 5º.- **Derecho a la educación. Garantías.** El Estado garantiza la igualdad de oportunidades y posibilidades educacionales ofreciendo, en la prestación de los servicios públicos de gestión estatal y privada reconocidos, condiciones equitativas para el acceso, permanencia y promoción de los alumnos.

A fin de cumplir con esta responsabilidad sostendrá el sistema educativo en todo el territorio provincial e impulsará el mejoramiento de la calidad de la educación.

Proveerá, asimismo, políticas de inclusión educativa y protección integral para el crecimiento y desarrollo armónico de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, en especial cuando se encuentren en situaciones socioeconómicas desfavorables.

Artículo 6º.- **Generalización del ejercicio del derecho a la educación.** El Estado impulsará la generalización del ejercicio del derecho a la educación entre los sectores menos favorecidos de la sociedad, rurales y urbanos, instrumentando a tal efecto políticas especiales dirigidas a la atención educativa y la integración social. Generará y promoverá diversos medios y servicios para la educación permanente, la alfabetización y la formación científica, tecnológica, humanística y artística, la capacitación laboral y la formación profesional, orientados según las necesidades y posibilidades personales y regionales.

Sección Segunda

Derechos y Deberes en la Educación

Artículo 7º.- **Derechos y deberes de los docentes.** Un estatuto específico regulará los derechos y obligaciones laborales y profesionales de los docentes en el ámbito de la educación pública de gestión estatal y privada, conforme las orientaciones generales de esta norma. Sin perjuicio de lo allí

establecido y de otros preceptos constitucionales y legales, se reconoce a los docentes los siguientes derechos y deberes:

A) Derechos:

- a) Al desempeño de su profesión docente dentro del ámbito provincial mediante la acreditación de los títulos y certificaciones conforme a la normativa vigente sobre la materia;
- b) A ejercer la docencia sobre la base de la libertad de cátedra y de enseñanza en el marco de los principios establecidos por la Constitución Nacional y las disposiciones de esta Ley. Su práctica se orientará a la realización de los objetivos propios de las instituciones educativas y de los principios y fines de la educación, establecidos por esta Ley;
- c) A la capacitación y actualización integral, gratuita y en servicio a lo largo de toda su carrera;
- d) A la activa participación en la elaboración e implementación del proyecto institucional de la escuela;
- e) Al desarrollo de sus tareas en condiciones dignas en lo que respecta a seguridad e higiene;
- f) Al mantenimiento de su estabilidad en el cargo en tanto su desempeño se realice de conformidad con la normativa provincial y nacional vigente;
- g) A los beneficios de la seguridad social, jubilación, seguros y obra social;
- h) A un salario digno;
- i) A participar en el gobierno de la educación por sí o a través de sus representantes;
- j) Al acceso a programas de salud laboral y prevención de enfermedades profesionales;
- k) Al acceso a los cargos y horas por concurso de antecedentes o por concurso de antecedentes y oposición, conforme a lo establecido en la legislación vigente, para las instituciones de gestión estatal;

l) A la negociación colectiva nacional y jurisdiccional, y

m) A la libre asociación y al respeto integral de todos sus derechos como ciudadanos.

B) Deberes:

- a) A respetar y hacer respetar los principios constitucionales, las disposiciones de la presente Ley, la normativa institucional y la que regula la tarea docente;
- b) A cumplir con los lineamientos de la política educativa de la Provincia y con los diseños curriculares de cada uno de los niveles y modalidades;
- c) A capacitarse y actualizarse en forma permanente;
- d) A ejercer su trabajo de manera idónea y responsable;
- e) A proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo su responsabilidad, en concordancia con lo dispuesto en la Ley Nacional Nº 26.061, y
- f) A respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.

Artículo 8º.- Misión del personal. El personal administrativo, técnico, auxiliar, social, de la salud y de servicios que se desempeña en las escuelas es parte integrante de la comunidad educativa y su misión principal será contribuir a asegurar el funcionamiento de las instituciones educativas y de los servicios de la educación, conforme los derechos y obligaciones establecidos en sus respectivos estatutos, pudiendo requerir una capacitación permanente acorde a sus funciones.

Artículo 9º.- Carrera docente. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba definirá los criterios básicos concernientes a la carrera docente en el ámbito estatal, en concordancia con lo dispuesto en la presente Ley.

La carrera docente admitirá al menos dos (2) opciones:

- a) Desempeño en el aula, y
- b) Desempeño en la función directiva y de supervisión.

La formación continua es una de las dimensiones básicas para el ascenso en la carrera profesional.

A los efectos de la elaboración de dichos criterios, se instrumentarán los mecanismos de consulta pertinentes.

Artículo 10.- Inhabilitados. No podrá incorporarse a la carrera docente quien haya sido condenado por delitos de lesa humanidad o haya incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, conforme a lo previsto en el artículo 36 de la Constitución Nacional y el Título X del Libro Segundo del Código Penal, aún cuando se hubieren beneficiado por el indulto o la conmutación de pena.

Artículo 11.- Derechos y deberes de los padres. Los padres, o quienes los sustituyeren legalmente, tienen sobre la educación de sus hijos los siguientes derechos y deberes:

A) Derechos:

- a) A ser reconocidos como agentes naturales y primarios de la educación y al ejercicio pleno de la patria potestad;
- b) A elegir para sus hijos o representados la institución educativa cuyo ideario responda a sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas;
- c) A que sus hijos reciban una educación conforme a los principios y fines de la Constitución y la presente Ley, con la posibilidad de optar por la modalidad y orientación según sus convicciones;
- d) A que sus hijos reciban, en el ámbito de la educación pública de gestión estatal, una enseñanza general exenta de dogmatismos que pudiera afectar las convicciones personales y familiares;
- e) A que sus hijos reciban de manera opcional, en el ámbito de la educación pública de gestión estatal, educación religiosa que les permita aprehender los valores y contenidos básicos de la creencia por la que hubieren optado, como contenido extracurricular, sin financiamiento estatal, fuera del horario de clases y a cargo de los ministros autorizados de los diferentes cultos;

f) A ser informados en forma regular y periódica de la evolución y resultados del proceso educativo de sus hijos;

g) A participar en las actividades de los establecimientos educativos -en forma individual o a través de las cooperadoras escolares y los órganos colegiados representativos-, en el marco del proyecto educativo institucional, y

h) A participar en el planeamiento del proyecto educativo institucional.

B) Deberes:

a) Hacer cumplir y asegurar la concurrencia de sus hijos o representados a los establecimientos escolares que elijan durante todo el régimen de educación obligatoria previsto en la presente Ley;

b) Apoyar y colaborar, de modo efectivo, con sentido amplio y solidario y bajo la autoridad escolar, en el proceso educativo que sus hijos desarrollan en la escuela;

c) Respetar y hacer respetar a sus hijos o representados la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa;

d) Respetar y hacer respetar a sus hijos o representados la autoridad pedagógica de los docentes, las normas vigentes del sistema educativo, las reglamentaciones y normas de convivencia propias de la escuela como el ideario institucional y su proyecto educativo, y

e) Seguir y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos.

Artículo 12.- Derechos y deberes de los alumnos. Los alumnos de las instituciones educativas de la Provincia tienen los siguientes derechos y deberes:

A) Derechos:

a) A que se respeten su integridad y dignidad personales, su libertad intelectual, religiosa y de conciencia;

b) A recibir una enseñanza que considere y valore sus intereses, ritmos y posibilidades de aprendizaje, y que atienda a sus características individuales, sociales y culturales;

c) A participar reflexiva y críticamente en su proceso de aprendizaje, a acceder a conocimientos y experiencias que le permitan integrarse creativamente en la sociedad y al reconocimiento y valoración del esfuerzo personal y colectivo;

d) A recibir orientación y asistencia ante los problemas que puedan perturbar su acceso, permanencia o promoción en el sistema y aquellos que dificulten el desarrollo personal;

e) A asociarse para participar en el desarrollo de la vida institucional a través de centros, asociaciones y clubes de estudiantes, en relación con las edades y de acuerdo con lo dispuesto por las reglamentaciones que al efecto se dicten, y

f) A desarrollar sus aprendizajes en edificios que respondan a normas de seguridad y salubridad, con instalaciones y equipamiento que aseguren la calidad del servicio educativo.

B) Deberes:

a) Cumplir con todos los niveles de la escolaridad obligatoria establecidos por esta Ley;

b) Hacer uso responsable de las oportunidades de estudiar que el sistema educativo le ofrece y esforzarse por alcanzar el máximo desarrollo según sus capacidades y posibilidades;

c) Respetar el proyecto educativo institucional y las normas de convivencia y organización de la escuela;

d) Asistir a clase regularmente y con puntualidad;

e) Participar en el desarrollo de las actividades educativas en la escuela;

f) Respetar los símbolos nacionales, provinciales e institucionales;

g) Realizar un uso y cuidado responsable de la infraestructura y el equipamiento de la escuela;

h) Respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, e

i) Respetar la autoridad pedagógica de los docentes en el ejercicio de su tarea.

Artículo 13.- Las instituciones educativas y la convivencia democrática. Las instituciones educativas de los distintos niveles y modalidades del sistema se organizarán según normas democráticas de convivencia y funcionamiento, respetuosas del pluralismo y la tolerancia, facilitando la participación responsable y solidaria que corresponde a cada sector de la comunidad educativa, garantizando así el ejercicio pleno de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones y evitando cualquier forma de discriminación entre los miembros de la misma.

**TÍTULO SEGUNDO
EL SISTEMA EDUCATIVO
CAPÍTULO I**

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA EDUCACIONAL

Sección Primera

Principios de Organización del Sistema Educativo

Artículo 14.- El Sistema Educativo Provincial. Institúyese el “Sistema Educativo Provincial” integrado orgánicamente por los servicios educativos de gestión estatal, que conjuntamente con los servicios educativos de gestión privada, se inserta en el marco político-institucional del Estado y se organiza conforme los principios y estructura establecidos por esta Ley para dar cumplimiento a sus fines y objetivos.

Artículo 15.- Educación permanente y sistema educativo. La estructuración del Sistema Educativo Provincial se basa en el principio rector de la educación permanente, atendiendo a la continuidad e integralidad del proceso educativo con el propósito de ofrecer posibilidades de formación, capacitación y perfeccionamiento a todos los habitantes en las distintas circunstancias y etapas de su vida.

Este principio contribuye, en materia de organización del sistema, a la articulación pedagógica de sus niveles y modalidades, otorgando unidad y coherencia a la oferta educativa.

Artículo 16.- Principios políticos de organización del sistema. El Sistema Educativo Provincial se organiza, en términos de política educacional, conforme con los principios de libertad de enseñanza, de democratización, centralización política y normativa, desconcentración operativa y participación social, a cuyo efecto las autoridades provinciales:

a) Garantizan la equidad en los servicios educativos a fin de alcanzar igualdad en las oportunidades y posibilidades de acceso, permanencia y logros educativos, y ofrecen una educación que asegure la democrática distribución de los conocimientos, personal y socialmente relevantes;

b) Fijan y desarrollan políticas de promoción de la igualdad educativa destinadas a enfrentar situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y otras formas de discriminación derivadas de factores socio-económicos, culturales, geográficos, étnicos, de género o de cualquier otra índole, que afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación;

c) Establecen las grandes líneas de política educativa y aseguran el cumplimiento de los objetivos del sistema, articulando orgánicamente su gobierno y administración con el objeto de lograr la mayor eficacia de las acciones propuestas;

d) Adecuan la oferta educativa a las características de las distintas regiones de la Provincia, respetando sus pautas socio-culturales y promoviendo el despliegue de sus potencialidades, y

e) Reconocen la capacidad y la responsabilidad de la sociedad para intervenir en la toma de decisiones educativas y en el control de su ejecución, y promueven su participación activa en los espacios establecidos para tal fin.

Artículo 17.- Funcionalidad del Sistema Educativo Provincial. Las autoridades provinciales regulan pedagógica y administrativamente la funcionalidad del Sistema Educativo Provincial con el objeto de ajustar las acciones a las finalidades propuestas por esta Ley, conforme a:

a) La articulación vertical que asegure la continuidad pedagógica entre los sucesivos niveles y la adecuada coordinación entre sus respectivos organismos administrativos;

b) La articulación horizontal que posibilite el pasaje entre modalidades, carreras y establecimientos de un mismo nivel;

c) La coordinación interna entre los diferentes servicios, niveles y establecimientos de la Provincia;

d) La coordinación externa, con los sistemas de otras jurisdicciones, evitando superposiciones y estableciendo relaciones de cooperación y colaboración con ellos;

e) La cohesión que asegure la unidad del conjunto dentro de la diversidad de las prestaciones para responder orgánica e integralmente a las demandas educativas de la población, y

f) La apertura y flexibilidad, de modo de entablar una fluida y dinámica interrelación con las condiciones, peculiaridades y necesidades del contexto social, cultural y económico en el que se insertan los servicios.

Artículo 18.- Principios generales de administración educacional. Las autoridades provinciales desarrollan la administración del Sistema como un proceso técnico-político de carácter global, regido por los siguientes principios:

a) Eficacia pedagógica, como la capacidad técnica de contribuir a alcanzar los resultados y objetivos educacionales propuestos;

b) Efectividad política, como criterio para valorar la capacidad de atender y responder satisfactoriamente a las demandas sociales;

c) Relevancia cultural, como criterio de desempeño para analizar la adecuación de los actos administrativos según su significación, valor y pertinencia para la comunidad orientados al mejoramiento de la calidad de vida, y

d) Eficiencia económica, como capacidad operacional de maximizar y optimizar el rendimiento en la utilización de los recursos destinados a la consecución de los objetivos principales del Sistema Educativo Provincial.

Sección Segunda

Lineamientos Pedagógicos Generales

Artículo 19.- Calidad de la educación. La educación en la Provincia de Córdoba tiende a alcanzar los más altos niveles de calidad. A tal fin el Gobierno Provincial instrumenta las políticas necesarias para el mejoramiento de la calidad de la educación:

a) Procurando la mayor formación profesional inicial y continua de los docentes;

b) Propiciando y/o sosteniendo los procesos de investigación e innovación educacionales planificados y sustentados científica, pedagógica y tecnológicamente;

c) Renovando las formas de organización y gestión de las instituciones educativas, y

d) Asignando equitativamente los recursos físicos y financieros destinados a mejorar la infraestructura y equipamiento escolar e integrando, con igual fin, aportes comunitarios, sectoriales y de otras jurisdicciones.

Artículo 20.- Evaluación e información. Las autoridades del sector establecerán diferentes formas y mecanismos de evaluación y control de gestión de los procesos educativos planificados y de sus resultados, así como también de sus costos en los diferentes niveles, servicios y localizaciones.

Instrumentará un sistema de información ágil y eficaz para guiar la toma de decisiones de política educacional, retroalimentar su planificación, proveer a su adecuado financiamiento, controlar su ejecución y contribuir a regular equitativamente la calidad de las prestaciones.

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba informará anualmente a la Legislatura Provincial el estado de la gestión educativa y los criterios y mecanismos de evaluación y control de gestión aplicados a los procesos educativos planificados, sus resultados y costos en los diferentes niveles,

servicios y localizaciones. Dicho informe será publicado en la página web del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

Artículo 21.- Comisión de Evaluación. En el ámbito del Consejo Provincial de Políticas Educativas, creado por el artículo 91 de esta Ley, deberá constituirse una "Comisión de Evaluación e Información Educativa".

Artículo 22.- Criterios de orientación pedagógica. Los centros educativos de la Provincia deben desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles y modalidades del Sistema, según los siguientes criterios generales:

a) El respeto por las características individuales y socio-culturales de los alumnos, sus valores integrales, la consideración de sus capacidades, conocimientos y experiencias previas de aprendizaje;

b) El currículum como proceso dinámico, interactivo, investigativo, integrativo e innovador que se caracteriza por la apertura, la flexibilidad, la integralidad y la regionalización. Orienta la selección pedagógica y organización didáctica que deriven en experiencias educativas apropiadas al desarrollo integral de los alumnos;

c) Los docentes deben orientar los aprendizajes con criterio pedagógico y científico en un ambiente propicio para la participación activa y creadora, promoviendo el desarrollo del pensamiento crítico, la identidad nacional y latinoamericana, la responsabilidad cívica y la formación ética y moral de los educandos en un marco democrático y solidario, y

d) Las estrategias de enseñanza se deben planificar con el propósito de facilitar a los alumnos el logro de actitudes, conocimientos y competencias necesarias y relevantes que posibiliten construir su autoestima y autonomía, y orientarse en opciones vocacionales que impliquen su proyecto de vida.

CAPÍTULO III ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL

Sección Primera Estructura General del Sistema Apartado Primero Disposiciones Generales

Artículo 23.- Estructura de los servicios educativos. La educación sistemática se estructura en niveles, ciclos, modalidades y otras formas educativas.

Los niveles son las etapas que configuran organizativamente la educación formal, compuesta por un conjunto de contenidos y competencias, cuya enseñanza-aprendizaje debe adaptarse flexiblemente a los diferentes momentos del proceso evolutivo de los alumnos. Podrán subdividirse en ciclos, entendidos como unidades formativas articuladas en cada uno de ellos.

Son niveles del Sistema Educativo Provincial:

- a) La educación inicial;
- b) La educación primaria;
- c) La educación secundaria, y
- d) La educación superior.

Constituyen modalidades del Sistema Educativo Provincial aquellas opciones organizativas y/o curriculares de la educación común, dentro de uno o más niveles educativos, que procuran dar respuesta a requerimientos específicos de formación y atender particularidades de carácter permanente o temporal, personales y/o contextuales, con el propósito de garantizar la igualdad en el derecho a la educación y cumplir con las exigencias legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles educativos.

Son modalidades del Sistema Educativo Provincial:

- 1) La educación especial;
- 2) La educación permanente de jóvenes y adultos;
- 3) La educación en contextos de privación de libertad;
- 4) La educación rural;
- 5) La educación técnico profesional;
- 6) La educación artística;
- 7) La educación domiciliar y hospitalaria, y
- 8) La educación intercultural bilingüe.

Artículo 24.- Adecuación estructural. El Poder Ejecutivo Provincial podrá adecuar a las condiciones de tiempo y lugar la estructura general descrita en el artículo anterior, resguardando la articulación entre niveles y ciclos y la coherencia entre jurisdicciones.

Artículo 25.- Reglamento general de la enseñanza. El Sistema Educativo Provincial se regula sobre la base de un régimen técnico-administrativo común y de los regímenes especiales necesarios para su eficiente funcionamiento.

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba elaborará el reglamento general de la enseñanza para todos los niveles y modalidades del Sistema y los reglamentos especiales que correspondieren, para lo cual será asistido por el Consejo Provincial de Políticas Educativas, que además fiscalizará su cumplimiento.

El reglamento general de la enseñanza comprenderá los siguientes aspectos:

- a) Caracterización y organización de los diferentes niveles y modalidades;
- b) Articulación y coordinación entre los niveles y modalidades;
- c) Calendarios y horarios escolares;
- d) Obligatoriedad escolar;
- e) Requisitos de ingreso de los alumnos;
- f) Evaluación y supervisión de la enseñanza;

- g) Promoción, certificación académica y títulos oficiales. Equivalencias, reconocimientos y reválidas;
- h) Desarrollo curricular e innovaciones pedagógicas;
- i) Régimen disciplinario y de convivencia escolar, y
- j) Otras normas básicas para la organización y funcionamiento de las instituciones educativas.

Artículo 26.- Educación obligatoria. La obligatoriedad escolar se extiende desde la edad de cuatro (4) años hasta la finalización del nivel de educación secundaria.

Apartado Segundo

La Educación Inicial

Artículo 27.- Características. La educación inicial constituye la primera unidad pedagógica del Sistema Educativo Provincial. Corresponde a las niñas y niños comprendidos en el período que se extiende entre los cuarenta y cinco (45) días y los cinco (5) años de edad.

Es obligatoria a partir de los cuatro (4) años según lo especifica el artículo 26 de esta Ley y tiene carácter optativo para las restantes edades abarcadas por este nivel, tendiendo a universalizar las salas para niñas y niños de tres (3) años, prioritariamente en zonas de vulnerabilidad social.

Artículo 28.- Objetivos. La educación inicial en la Provincia asegurará la formación integral y asistencia del niño, orientándose a la obtención de los siguientes objetivos fundamentales:

- a) Promover el aprendizaje y desarrollo de las niñas y niños como personas sujetos de derecho y partícipes activos de un proceso de formación integral, miembros de una familia y de una comunidad;
- b) Promover en las niñas y niños la solidaridad, autoestima, confianza, cuidado, amistad y respeto a sí mismos y a los demás;
- c) Desarrollar su capacidad creativa y el placer por el conocimiento en las experiencias de aprendizaje;
- d) Promover el juego como contenido de alto valor cultural para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social;
- e) Desarrollar la capacidad de expresión y comunicación a través de los distintos lenguajes, verbales y no verbales: el movimiento, la música, la expresión plástica y la literatura;
- f) Favorecer la formación corporal y motriz a través de la educación física;
- g) Favorecer en las niñas y niños el desarrollo progresivo de su identidad y sentido de pertenencia a la familia inserta en la comunidad local, regional, provincial y nacional;
- h) Asegurar la integración y participación de la familia y la comunidad en la acción educativa, en un marco de cooperación y solidaridad;
- i) Atender a las desigualdades educativas de origen social y familiar para favorecer una integración plena de las niñas y niños en el Sistema Educativo Provincial, y
- j) Prevenir y atender en igualdad de oportunidades las necesidades especiales y las dificultades de aprendizaje.

Artículo 29.- Entidades comprendidas. Están comprendidas en la presente Ley las instituciones que brindan educación inicial:

- a) De gestión estatal, pertenecientes tanto a órganos de gobierno de la educación como a otros organismos gubernamentales, y
- b) De gestión privada autorizados por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba u otros organismos estatales.

Artículo 30.- Responsabilidad estatal. El Estado Provincial tiene la responsabilidad de:

- a) Expandir los servicios de educación inicial;
- b) Promover y facilitar la participación de las familias en el desarrollo de las acciones destinadas al cuidado y educación de sus hijos;
- c) Asegurar el acceso y la permanencia mediante servicios de calidad que garanticen la igualdad de oportunidades, atendiendo especialmente a los sectores menos favorecidos de la población;
- d) Regular, controlar y supervisar el funcionamiento de las instituciones con el objetivo de asegurar la atención, el cuidado y la educación integral de las niñas y niños, y
- e) Garantizar que la supervisión del nivel sea ejercida por personal con título de Profesor de Educación Inicial y experiencia directiva.

Artículo 31.- Organización. La organización de la educación inicial tiene las siguientes características:

- a) Los jardines maternos atienden a las niñas y niños desde los cuarenta y cinco (45) días a los dos (2) años de edad inclusive y los jardines de infantes a las niñas y niños desde los tres (3) a los cinco (5) años de edad inclusive, y
- b) Las certificaciones de cumplimiento de la educación inicial obligatoria en cualesquiera de las formas organizativas reconocidas y supervisadas por las autoridades educativas, tienen plena validez para la inscripción en la educación primaria.

Artículo 32.- Mecanismos. Se crearán en el ámbito del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba mecanismos para la articulación y/o gestión asociada entre los organismos gubernamentales que atiendan políticas y programas vinculados con la niñez y la familia, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas y niños establecidos en la Ley Nacional Nº 26.061. Tras el mismo objetivo y en función de las particularidades locales o comunitarias, se implementarán otras estrategias de desarrollo infantil con la articulación y/o gestión asociada de las áreas gubernamentales de desarrollo social, salud y educación en el ámbito de la educación no formal, para atender integralmente a las niñas y niños entre los cuarenta y cinco (45) días y los dos (2) años de edad con la participación de las familias y otros actores sociales.

Artículo 33.- Actividades pedagógicas. Las actividades pedagógicas realizadas en el nivel de educación inicial estarán a cargo de personal docente titulado, conforme lo establece la normativa vigente. Dichas actividades pedagógicas serán supervisadas por las autoridades educativas de la Provincia de Córdoba.

Apartado Tercero

La Educación Primaria

Artículo 34.- Características. La educación primaria constituye la etapa de la educación obligatoria destinada a la formación de las niñas y niños a partir de los seis (6) años de edad. Comprenderá seis (6) años de estudio organizados en ciclos.

Las instituciones educativas que imparten la educación en este nivel son las escuelas primarias.

Artículo 35.- Objetivos. La educación primaria contribuye decisivamente a la formación integral y asistencia del alumno, creando condiciones favorables para su activa integración familiar y socio-cultural y el desarrollo de los siguientes aprendizajes fundamentales. Sus objetivos son:

a) Garantizar a todas las niñas y niños el acceso a un conjunto de saberes comunes que les permitan participar de manera plena y acorde a su edad en la vida familiar, escolar y comunitaria;

b) Ofrecer las condiciones necesarias para un desarrollo integral de la infancia en todas sus dimensiones;

c) Brindar oportunidades equitativas a todos las niñas y niños para el aprendizaje de saberes significativos en los diversos campos del conocimiento, en especial la lengua y la comunicación, las ciencias sociales, la matemática, las ciencias naturales y el medio ambiente, las lenguas extranjeras, el arte, la ética, la educación física y la tecnología, desarrollando la capacidad de aplicarlas en situaciones de la vida cotidiana;

d) Generar las condiciones pedagógicas para el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como para la producción y recepción crítica de los discursos mediáticos;

e) Facilitar la comprensión y el conocimiento de los procesos históricos y sociales y sus relaciones con la identidad regional, nacional y universal;

f) Promover el desarrollo de una actitud y hábito de trabajo y responsabilidad en el estudio, de curiosidad e interés por el aprendizaje, fortaleciendo la confianza en las propias posibilidades de aprender;

g) Desarrollar la iniciativa individual, el trabajo en equipo y las prácticas de convivencia solidaria y de cooperación;

h) Fomentar el desarrollo de la creatividad y la expresión, el placer estético y la comprensión, el conocimiento y la valoración de las distintas manifestaciones del arte y otras producciones culturales;

i) Brindar una formación ética que habilite progresivamente para el ejercicio de una ciudadanía responsable y permita asumir los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común, fortaleciendo el sentido de pertenencia regional y nacional, con apertura a la comprensión y solidaridad entre los pueblos;

j) Ofrecer los conocimientos y las estrategias cognitivas necesarias para continuar los estudios en la educación secundaria;

k) Brindar oportunidades para una educación física que promueva la formación corporal y motriz, y consolide el desarrollo armónico de las niñas y niños fomentando especialmente aquellos deportes en equipo;

l) Promover el juego como actividad necesaria para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social, y

m) Promover el conocimiento y los valores que permitan el desarrollo de actitudes de protección y cuidado de la salud, el medio ambiente y el patrimonio cultural, apreciando los valores que rigen la vida y la convivencia humana para obrar de acuerdo con ellos.

Artículo 36.- Jornada educativa. Con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos fijados para este nivel por la presente Ley, las escuelas primarias serán de jornada extendida o de jornada completa.

Apartado Cuarto

La Educación Secundaria

Artículo 37.- Características. La educación secundaria es obligatoria, constituye una unidad pedagógica y organizativa y está destinada a los adolescentes y jóvenes que hayan cumplido el nivel de educación primaria. Tiene la finalidad de habilitar a los adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de sus estudios.

Artículo 38.- Ciclos. La educación secundaria se divide en dos (2) ciclos:

a) Un (1) ciclo básico de carácter común a todas las orientaciones, y

b) Un (1) ciclo orientado de carácter diversificado según las distintas áreas del conocimiento, del mundo social y del trabajo.

La duración será de seis (6) años y se extenderá un (1) año más en la modalidad técnico profesional y artística, en el marco de sus regulaciones específicas.

Artículo 39.- Objetivos. Los objetivos de la educación secundaria son:

a) Contribuir a la formación integral de los adolescentes y jóvenes como personas sujetos conscientes de sus derechos y obligaciones, promoviendo el desarrollo de todas sus dimensiones a través de una educación configurada en torno a los valores éticos que les permitan desenvolverse en la sociedad practicando el pluralismo libre de toda discriminación, comprometidos con la exigencia de la participación comunitaria, motivados por la solidaridad hacia sus semejantes y preparados para el ejercicio de la vida democrática, en la aceptación y práctica de los Derechos Humanos y la diversidad cultural;

- b) Promover prácticas de enseñanza que permitan el acceso al conocimiento como saber integrado, a través de las distintas áreas y disciplinas que lo constituyen, fortaleciendo capacidades y hábitos de estudio, de aprendizaje e investigación, de juicio crítico y discernimiento;
- c) Formar ciudadanos capaces de utilizar el conocimiento como una herramienta para comprender, transformar y actuar crítica y reflexivamente en la sociedad contemporánea;
- d) Desarrollar competencias lingüísticas comunicacionales, orales y escritas del idioma nacional y de comprensión y expresión en una lengua extranjera;
- e) Desarrollar las capacidades necesarias para la comprensión y utilización inteligente y crítica de los nuevos lenguajes y herramientas producidos en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación;
- f) Estimular la creación artística, la libre expresión, el placer estético y la comprensión de las distintas manifestaciones de la cultura y las artes;
- g) Promover la formación corporal y motriz a través de la educación física acorde con los requerimientos del proceso de desarrollo integral de los adolescentes y jóvenes, y
- h) Implementar, en el marco de los proyectos curriculares institucionales, procesos de orientación educacional que contribuyan a las elecciones vocacionales, vinculando a los alumnos con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia y la tecnología.

Artículo 40.- Prácticas educativas. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba propiciará la vinculación de las instituciones educativas secundarias con el mundo de la producción, el trabajo y otros organismos según su orientación. En este marco podrán realizarse prácticas educativas en las escuelas, empresas, organismos estatales, entidades culturales y gremiales que faciliten al alumno el conocimiento de las organizaciones, el manejo de tecnologías y le brinde experiencias adecuadas a su formación y orientación vocacional.

La práctica educativa complementa la formación del alumno, pero en ningún caso debe ser considerada trabajo en los términos de la Ley Nacional Nº 20.744 o pasantía conforme lo define y establece la Ley Nacional Nº 26.427.

Apartado Quinto

La Educación Superior

Artículo 41.- Características. La educación superior tiene como finalidad promover el progreso de la ciencia y de la cultura y proporcionar formación científica, técnica, profesional, humanista y artística en el más alto nivel acorde con los avances científicos tecnológicos y las necesidades socio-culturales de la Provincia. Comprenderá los estudios superiores y universitarios.

Artículo 42.- Institutos. Los institutos de educación superior brindarán una oferta de servicios educativos para la formación docente y la formación técnico-profesional en las áreas socio-humanista, científica y artística.

Artículo 43.- Funciones. La formación docente es parte constitutiva del nivel de educación superior y tiene como funciones, entre otras, la formación docente inicial, la formación docente continua, el apoyo pedagógico a las escuelas y la investigación educativa.

La formación docente constituye la base para el mejoramiento de la calidad de la educación.

La docencia es una profesión y un trabajo cuya especificidad se centra en los procesos de transmisión y producción de conocimientos en torno a la enseñanza tendiente al desarrollo integral de las personas con quienes interactúa. Está destinada a la profesionalización de los recursos humanos responsables de orientar el proceso educativo en sus distintos niveles y modalidades.

Son funciones de la formación docente:

a) La formación docente inicial es el proceso pedagógico que posibilita a los estudiantes el desarrollo de las capacidades y los conocimientos necesarios para el trabajo docente en los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo Provincial, que los habilita para el ejercicio profesional;

b) La formación docente continua es el proceso de perfeccionamiento, actualización y capacitación en el ejercicio profesional que realizan los docentes de todos los niveles y modalidades y los agentes educativos que participan en la educación no formal. Se debe garantizar que todos los agentes del Sistema Educativo Provincial puedan acceder a propuestas de formación docente continua que sean relevantes para su desempeño profesional con calidad académica y adecuada a las necesidades de la docencia, sin perjuicio de lo establecido sobre el particular por la negociación colectiva, y

c) La investigación educativa tiene por objetivo el fortalecimiento del desarrollo de investigaciones pedagógicas, sistematización y publicación de experiencias innovadoras que aporten a la reflexión sobre la práctica y a la renovación de las experiencias escolares.

Artículo 44.- Carreras. La educación superior de formación científica, humanista, técnica y artística se organizará en carreras de duración variable, en función de múltiples especialidades, con regímenes flexibles que permitan una adecuada inserción y reconversión laboral acordes con las demandas sociales, culturales y económicas de la Provincia.

Artículo 45.- Políticas de articulación. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba debe desarrollar políticas de articulación entre las instituciones de educación superior de su dependencia y promover la articulación con las universidades a fin de facilitar el cambio de modalidad, orientación o carrera, la continuación de los estudios en otros establecimientos y la reconversión de los estudios concluidos, tanto en la formación inicial como en la formación continua.

Artículo 46.- Convenios de colaboración. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba debe propiciar la firma de convenios de colaboración mutua entre las autoridades educativas con el sector de la producción y el trabajo a fin de favorecer la realización de prácticas profesionales intracurriculares y/o pasantías laborales de los estudiantes con propósito formativo y garantía de planificación y acompañamiento docente.

Artículo 47.- Opciones académicas. El Estado Provincial puede crear, en concordancia con la legislación vigente, centros universitarios y de estudios avanzados procurando la descentralización y

destinados a desarrollar actividades de investigación, docencia y extensión en el campo científico, tecnológico, humanístico y artístico. Generarán nuevas opciones académicas de alta calidad, definida ésta en relación con los avances internacionales del conocimiento y su adecuación a las exigencias del desarrollo provincial.

La estructuración académica, carreras y títulos, gobierno, administración y financiación de dichos centros deberá facilitar su articulación e interrelación con el conjunto del Sistema Educativo Provincial.

Artículo 48.- Evaluación institucional. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, en el marco de acuerdos federales, será responsable de desarrollar acciones de evaluación y seguimiento de los institutos de educación superior como así de autoevaluación institucional de los mismos, que aseguren el cumplimiento de la planificación jurisdiccional y una mejora de la calidad de la educación.

Sección Segunda
Modalidades y otras formas de la Educación
Apartado Primero
La Educación Especial

Artículo 49.- Características. La educación especial es la modalidad del Sistema Educativo Provincial que comprende el conjunto de servicios, recursos y procedimientos destinados a garantizar el derecho a la educación de las personas con algún tipo de discapacidad, temporal o permanente.

Por el principio de inclusión educativa se asegura la integración de los alumnos con discapacidades en todos los niveles y modalidades según las posibilidades de cada persona.

Asimismo, la escuela especial brinda atención educativa a todas aquellas personas cuyas problemáticas específicas no puedan ser abordadas por la escuela común.

Artículo 50.- Objetivos. La educación especial debe asegurar una atención multiprofesional brindada por equipos interdisciplinarios que posibilite la identificación y valoración de la discapacidad y/o de las personas con necesidades educativas especiales -temporales o permanentes- con el objetivo de facilitar su inclusión en los diferentes niveles del sistema de enseñanza, particularmente los obligatorios y un seguimiento continuo en los aspectos afectivo, intelectual, familiar y social.

En el marco de un sistema educativo inclusivo, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba en acuerdo con otros organismos, garantizará la participación de las personas con algún tipo de discapacidad en propuestas de capacitación laboral, deportes, recreación y desarrollo de la expresión y creación cultural.

Los programas de formación docente, en sus distintas modalidades, y de las carreras afines a esta temática contemplarán aspectos curriculares referidos a la educación especial.

Artículo 51.- Garantías. Con el propósito de asegurar el derecho a la educación, la integración escolar y favorecer la inserción social de las personas con discapacidades -temporales o permanentes-, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba dispondrá las medidas necesarias para:

- a) Posibilitar una trayectoria educativa integral que permita el acceso a los saberes tecnológicos, artísticos y culturales;
- b) Contar con el personal especializado suficiente que trabaje en equipo con los docentes de la escuela común;
- c) Asegurar la cobertura de los servicios educativos especiales, el transporte, los recursos técnicos y materiales necesarios para el desarrollo del currículo escolar;
- d) Propiciar alternativas de continuidad para su formación a lo largo de toda la vida, y
- e) Garantizar la accesibilidad física de todos los edificios escolares.

Artículo 52.- Instancias institucionales. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba creará las instancias institucionales y técnicas necesarias para la adecuación, orientación y sostenimiento de la trayectoria escolar más conveniente de los alumnos con discapacidades -temporales o permanentes-, en todos los niveles de la enseñanza obligatoria, así como también las normas que regirán los procesos de evaluación y certificación escolar. Asimismo, participará en mecanismos de articulación entre ministerios y otros organismos del Estado que atienden a personas con discapacidades -temporales o permanentes-, para garantizar un servicio eficiente y de calidad.

Apartado Segundo
La Educación Permanente de Jóvenes y Adultos

Artículo 53.- Características. La educación de jóvenes y adultos es la modalidad educativa destinada a garantizar la alfabetización y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a quienes no lo hayan completado en la edad establecida reglamentariamente y a brindar capacitación técnico profesional a la población adulta, con el fin de lograr el constante mejoramiento de su formación individual y su integración social, abriendo posibilidades de educación a lo largo de toda la vida.

Artículo 54.- Acciones. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba debe articular los programas y acciones de educación para jóvenes y adultos con acciones de otros organismos gubernamentales referidos al área como también con el mundo de la cultura, de la producción y el trabajo para poder brindar así un servicio eficiente y de calidad.

Artículo 55.- Objetivos. La organización curricular e institucional de la educación de jóvenes y adultos responderá a los siguientes objetivos y criterios:

- a) Brindar una formación básica que permita adquirir conocimientos y desarrollar las capacidades de expresión, comunicación, relación interpersonal y de construcción del conocimiento, atendiendo las particularidades socioculturales, laborales, contextuales y personales de la población destinataria;
- b) Desarrollar la capacidad de participación en la vida social, cultural, política y económica y hacer efectivo su derecho a la ciudadanía democrática;

- c) Mejorar su formación técnico-profesional y/o adquirir una preparación que facilite su inserción laboral;
- d) Incorporar en sus enfoques y contenidos básicos la equidad de género y la diversidad cultural;
- e) Promover la inclusión de la población adulta mayor y de las personas con discapacidades -temporales o permanentes-;
- f) Diseñar una estructura curricular modular basada en criterios de flexibilidad y apertura;
- g) Otorgar certificaciones parciales y acreditar los saberes adquiridos a través de la experiencia;
- h) Implementar sistemas de equivalencias que permitan y acompañen la movilidad de las personas en el Sistema Educativo Provincial;
- i) Desarrollar acciones educativas presenciales y/o a distancia, asegurando la calidad e igualdad de sus resultados;
- j) Promover, a través de la firma de convenios, el desarrollo de proyectos educativos con la participación y vinculación de los sectores laborales o sociales de pertenencia de los estudiantes, y
- k) Promover el acceso al conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías.

Apartado Tercero

La Educación en Contexto de Privación de Libertad

Artículo 56.- Características. La educación en contextos de privación de libertad es la modalidad del Sistema Educativo Provincial destinada a garantizar el derecho a la educación de todas las personas privadas de libertad para promover su formación integral y desarrollo pleno, sin limitación ni discriminación alguna vinculada a la situación de encierro. Este derecho será puesto en conocimiento de todas las personas privadas de libertad, en forma fehaciente, desde el momento de su ingreso a la institución.

Artículo 57.- Modalidad. La modalidad de educación para jóvenes y adultos en la Provincia de Córdoba será abarcativa de la educación en contextos de privación de libertad de personas adultas y de menores en conflicto con la ley penal.

Apartado Cuarto

La Educación Rural

Artículo 58.- Características. La educación rural es la modalidad del Sistema Educativo Provincial destinada a garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de formas adecuadas a las necesidades y particularidades de la población que habita en zonas rurales.

Artículo 59.- Objetivos. La educación rural se desarrollará conforme los siguientes criterios y objetivos:

- a) El enfoque global del proceso educativo que, partiendo del conocimiento de la realidad local y regional, integre a los distintos grupos de edad y a los diversos problemas de la producción y de la vida comunitaria;
- b) La participación de la comunidad en las distintas fases de dicho proceso, promoviendo diseños institucionales que permitan a los alumnos mantener los vínculos con su núcleo familiar y su medio local de pertenencia;
- c) La aplicación de modelos de organización escolar adecuados a cada contexto, tales como agrupamientos de instituciones, escuelas albergue, salas plurigrados y grupos multiedad, instituciones que abarquen varios niveles en una misma unidad educativa, escuelas de alternancia, escuelas itinerantes u otras;
- d) Proveer la instrumentación de estrategias y recursos pedagógicos y materiales que garanticen la escolarización de los estudiantes, la accesibilidad, permanencia y egreso a través de programas específicos (becas, comedores escolares, transporte, salud, textos, recursos informáticos o los que la realidad institucional requiera);
- e) El accionar intersectorial coordinado de los agentes de los distintos servicios con las comunidades rurales, integrando redes intersectoriales con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a fin de coordinar la cooperación de los distintos sectores para poder brindar así un servicio eficiente y de calidad;
- f) La dignificación del trabajo manual integrándolo en los procesos productivos con el trabajo intelectual, organizando servicios de educación no formal que contribuyan a la capacitación laboral y la promoción cultural de la población rural;
- g) El rescate y fomento de los valores y expresiones culturales de las comunidades rurales, y
- h) El estímulo a la participación y formación de organizaciones sociales representativas, contribuyendo al enfoque democrático de su actividad.

Apartado Quinto

La Educación Técnico Profesional

Artículo 60.- Características. La educación técnico profesional es la modalidad de la educación secundaria y de la educación superior responsable de la formación de técnicos medios y técnicos superiores en áreas ocupacionales específicas y de la formación profesional, promoviendo en sus integrantes el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores, principios éticos y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socio-productivo y para su inserción como ciudadano pleno.

Artículo 61.- Objetivos. La educación técnico profesional se desarrollará según los siguientes criterios y objetivos:

a) Formar técnicos medios y técnicos superiores en áreas ocupacionales específicas, cuya complejidad requiera la disposición de competencias profesionales que se desarrollan a través de procesos sistemáticos y prolongados de formación para generar en las personas capacidades profesionales que son la base de esas competencias;

b) Contribuir al desarrollo integral de los alumnos y a proporcionarles condiciones para el crecimiento personal, laboral y comunitario en el marco de una educación técnico profesional continua y permanente;

c) Desarrollar procesos sistemáticos de formación que articulen el estudio y el trabajo, la investigación y la producción, la complementación teórico-práctico en la formación, la formación ciudadana, la humanística general y la relacionada con campos profesionales específicos;

d) Desarrollar trayectorias de profesionalización que garanticen a los alumnos el acceso a una base de capacidades profesionales y saberes que les permita su inserción en el mundo del trabajo, así como continuar aprendiendo durante toda su vida;

e) Desarrollar oportunidades de formación específica propias de la profesión u ocupación abordada y prácticas profesionalizantes dentro del campo ocupacional elegido;

f) Favorecer el reconocimiento y certificación de saberes y capacidades, así como la reinserción voluntaria en la educación formal y la prosecución de estudios regulares en los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo Provincial;

g) Favorecer niveles crecientes de equidad, calidad, eficiencia y efectividad de la educación técnico profesional como elemento clave de las estrategias de inclusión social, de desarrollo y crecimiento socioeconómico del país, de la provincia y sus regiones, de innovación tecnológica y de promoción del trabajo decente;

h) Articular las instituciones y los programas de educación técnico profesional con los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la producción y el trabajo;

i) Promover la vinculación entre el sector productivo y la educación técnico profesional, y

j) Promover y desarrollar la cultura del trabajo y la producción para el desarrollo sustentable, orientados por criterios de equidad y justicia social.

Artículo 62.- Orientación educativa. Las instituciones de gestión estatal o privada que brindan educación técnico profesional, se orientarán a:

a) Impulsar modelos innovadores de gestión que incorporen criterios de calidad y equidad para la adecuación y el cumplimiento a nivel institucional de los objetivos y propósitos de la normativa que regula la educación técnico profesional;

b) Ejecutar las estrategias para atender las necesidades socio-educativas de distintos grupos sociales establecidas en los programas nacionales y jurisdiccionales, y desarrollar sus propias iniciativas con el mismo fin;

c) Establecer sistemas de convivencia basados en la solidaridad, la cooperación y el diálogo con la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa;

d) Contemplar la constitución de cuerpos consultivos o colegiados donde estén representadas las comunidades educativas y socio-productivas;

e) Generar proyectos educativos que propicien, en el marco de la actividad educativa y previa aprobación de la autoridad ministerial, la producción de bienes y servicios con la participación de alumnos y docentes a través de talleres, laboratorios, pasantías, proyectos productivos articulados con otras instituciones, proyectos didácticos/productivos institucionales orientados a satisfacer necesidades del medio socio-cultural o de la misma institución, micro-emprendimientos a cargo de alumnos, desarrollo de actividades técnico profesionales, empresas o instituciones productivas simuladas y/o cualquier otra modalidad pedagógico-productiva que se instaure. Dichos proyectos se implementarán con el propósito que los estudiantes consoliden, integren y amplíen las competencias y saberes que corresponden con el perfil profesional en el que se están formando, referenciadas en situaciones de trabajo desarrolladas dentro o fuera del establecimiento educativo y que se ajusten a las condiciones y disposiciones previstas para la educación técnico profesional, y

f) Recuperar y desarrollar propuestas pedagógicas y organizativas que formen técnicos con capacidades para promover el desarrollo rural y emprendimientos asociativos y/o cooperativos, sobre la base de las producciones familiares, el cuidado del ambiente y la diversificación en términos de producción y consumo, así como propiciar la soberanía alimentaria.

Artículo 63.- Programas de formación profesional. Las instituciones de educación técnico profesional de nivel medio y nivel superior están facultadas para implementar programas de formación profesional continua en su campo de especialización.

Artículo 64.- Manejo autónomo. Las instituciones de educación técnico profesional de nivel medio y nivel superior deben ser autorizadas por el Ministerio de Educación al manejo autónomo del propio producido que surja como Proyecto Escuela - Trabajo - Producción, con carácter educativo.

En ningún caso los alumnos asumirán obligaciones que excedan el sentido pedagógico de los proyectos ni serán expuestos a cualquier forma de trabajo informal.

Artículo 65.- Convenios. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba regulará la vinculación entre el sector productivo y la educación técnico profesional y promoverá convenios que las instituciones de esta modalidad puedan suscribir con Organizaciones No Gubernamentales, empresas, empresas recuperadas, cooperativas, emprendimientos productivos desarrollados en el marco de los planes de promoción de empleo y fomento de los micro emprendimientos, sindicatos, universidades nacionales, institutos nacionales de la industria y del agro, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la Comisión Nacional de Energía Atómica, los institutos de formación docente u otros organismos del Estado y/o privados con competencia en el desarrollo científico-tecnológico, tendientes a cumplimentar los objetivos establecidos para la educación técnico profesional por la normativa vigente.

Artículo 66.- Prácticas educativas. Cuando las prácticas educativas se realicen fuera del ámbito escolar se garantizará la seguridad de los alumnos y la auditoría, dirección y control a cargo de los docentes, por tratarse de procesos de aprendizaje y no de producción a favor de los intereses económicos que pudieran caber a las empresas.

En ningún caso los alumnos sustituirán, competirán o tomarán el lugar de los trabajadores de la empresa.

La práctica educativa complementa la formación del alumno, pero en ningún caso debe ser considerada trabajo en los términos de la Ley Nacional Nº 20.744.

Artículo 67.- Formación profesional. Definición. La formación profesional es el conjunto de acciones cuyo propósito es la formación socio-laboral para y en el trabajo, dirigida tanto a la adquisición y mejora de las cualificaciones como a la recualificación de los trabajadores, que permite compatibilizar la promoción social, profesional y personal con la productividad de la economía nacional, regional y local. También incluye la especialización y profundización de conocimientos y capacidades en los niveles superiores de la educación formal.

Artículo 68.- Formación profesional. Propósitos. La formación profesional tiene como propósitos específicos preparar, actualizar y desarrollar las capacidades de las personas para el trabajo, cualquiera sea su situación educativa inicial a través de procesos que aseguren la adquisición de conocimientos científico-tecnológicos y el dominio de las competencias básicas, profesionales y sociales requerido por una o varias ocupaciones definidas en un campo ocupacional amplio, con inserción en el ámbito económico-productivo.

Artículo 69.- Ingreso y desarrollo. La formación profesional admite formas de ingreso y de desarrollo diferenciadas de los requisitos académicos propios de los niveles y ciclos de la educación formal.

Artículo 70.- Formación profesional. Ofertas. Las ofertas de formación profesional podrán contemplar la articulación con programas de alfabetización o de terminalidad de los niveles y ciclos comprendidos en la escolaridad obligatoria y post-obligatoria.

Artículo 71.- Reconocimiento de títulos. Las instituciones educativas y los cursos de formación profesional certificados por el Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico Profesional y el Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones podrán ser reconocidos en la educación formal.

Apartado Sexto La Educación Artística

Artículo 72.- Características. La educación artística es la modalidad que comprende la formación en los distintos lenguajes del arte: música, artes visuales, teatro, danza, plástica y otras que pudieran conformarse, admitiendo -en cada caso- distintas especializaciones. La misma se brinda para la educación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos de todos los niveles y modalidades.

Artículo 73.- Garantía de calidad. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba garantizará una educación artística de calidad para todos los alumnos del Sistema Educativo Provincial, que fomente y desarrolle la sensibilidad y la capacidad creativa de cada persona en un marco de valoración y protección del patrimonio natural y cultural, material y simbólico de las diversas comunidades que integran la Provincia.

Artículo 74.- Formación específica. Todos los alumnos, en el transcurso de su escolaridad obligatoria, tienen la oportunidad de desarrollar su sensibilidad y su capacidad creativa en al menos dos (2) disciplinas artísticas.

En la educación secundaria la modalidad artística ofrecerá una formación específica en música, danza, artes visuales, plástica, teatro y otras que pudieran conformarse, admitiendo -en cada caso- diferentes especializaciones.

La formación específica brindada en las escuelas especializadas en artes podrá continuarse en establecimientos de nivel superior de la misma modalidad.

Apartado Séptimo La Educación Domiciliaria y Hospitalaria

Artículo 75.- Características. La educación domiciliaria y hospitalaria es la modalidad del Sistema Educativo Provincial en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria destinada a garantizar el derecho a la educación de los alumnos que, por razones de salud, se ven imposibilitados de asistir con regularidad a una institución educativa en los niveles de la educación obligatoria.

Artículo 76.- Recursos. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba procurará los recursos necesarios a los fines de garantizar la igualdad de oportunidades a los alumnos, permitiendo la continuidad de sus estudios y su reinserción en el Sistema Educativo Provincial común, cuando ello sea posible.

Apartado Octavo La Educación Intercultural Bilingüe

Artículo 77.- Características. La educación intercultural bilingüe es la modalidad del Sistema Educativo Provincial de los niveles inicial, primario y secundario que garantiza el derecho de los pueblos indígenas a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica, promoviendo un diálogo mutuamente enriquecedor de conocimientos y valores entre los pueblos indígenas y poblaciones étnica, lingüística y culturalmente diferentes, propiciando el reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias.

Sección Tercera Educación de Gestión Privada

Artículo 78.- Prestadores. El Estado Provincial reconocerá, dentro de los principios de la Constitución y de esta Ley, la libertad de la iniciativa privada para crear y gestionar institutos de enseñanza en los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo Provincial, los que estarán sujetos al reconocimiento, autorización y supervisión del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

Tienen derecho a prestar estos servicios la Iglesia Católica, las confesiones religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos, las sociedades cooperativas, organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones, fundaciones y otras personas físicas y jurídicas.

Artículo 79.- Funcionamiento. La enseñanza de gestión privada se imparte en los institutos debidamente reconocidos.

Su funcionamiento se regula por una ley especial que establece las condiciones para su reconocimiento y para la cooperación económica del Estado a aquellos que no persigan fines de lucro.

El Poder Ejecutivo Provincial debe disponer un organismo específico para el contralor y orientación de estos institutos.

Artículo 80.- Derechos y deberes. Los institutos de gestión privada tienen los siguientes derechos y deberes:

A) Derechos:

- a) Crear, gestionar y sostener establecimientos educativos;
- b) Matricular, evaluar y emitir certificados y títulos oficiales con validez nacional;
- c) Nombrar y promover a su personal directivo, docente, administrativo y auxiliar;
- d) Formular planes y programas de estudio;
- e) Elaborar el proyecto educativo institucional de acuerdo con su ideario, y
- f) Participar del planeamiento educativo y brindar formación docente continua.

B) Deberes:

- a) Cumplir con la normativa y los lineamientos de la política educativa nacional y provincial;
- b) Ofrecer servicios educativos que respondan a necesidades de la comunidad, y
- c) Brindar toda la información necesaria para la supervisión pedagógica y el control contable y laboral por parte del Estado.

Sección Cuarta

La Educación a Distancia

Artículo 81.- Características. La educación a distancia es una opción pedagógica y didáctica para jóvenes y adultos, aplicable a distintos niveles del Sistema Educativo Provincial, que coadyuva al logro de los objetivos de la política educativa y puede integrarse tanto a la educación formal como a la educación no formal.

Artículo 82.- Definición. A efectos de esta Ley, la educación a distancia se define como la opción pedagógica y didáctica donde la relación docente-alumno se encuentra separada en el tiempo y/o en el espacio durante todo o gran parte del proceso educativo, en el marco de una estrategia pedagógica integral que utiliza soportes materiales y recursos tecnológicos diseñados especialmente para que los alumnos alcancen los objetivos de la propuesta educativa.

Artículo 83.- Supervisión oficial. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, por intermedio de las direcciones de nivel que correspondan, debe supervisar la veracidad de la información difundida desde las instituciones, la estricta coincidencia entre dicha información y la propuesta autorizada e implementada y el cumplimiento de la normativa federal y jurisdiccional correspondiente.

Sección Quinta

La Educación No Formal

Artículo 84.- Características. La educación no formal configura una actividad pedagógica de carácter participativo que se desarrollará a través de un conjunto de servicios, programas y acciones destinados a satisfacer las necesidades educativas no atendidas o cubiertas en forma parcial por el sistema escolar, en el marco de la educación permanente.

El Estado promoverá la educación no formal para el desarrollo de:

- a) Estrategias que atiendan prioritariamente las necesidades, intereses y problemas de los diversos sectores poblacionales;
- b) Estrategias que apoyen el desarrollo económico de la Provincia, estimulando las capacidades innovadoras y de organización de la población e incorporando efectivamente, a través de la educación, los avances científicos y tecnológicos que permitan mejorar la producción y las condiciones de trabajo;
- c) La participación de diversos agentes educativos no convencionales facilitando el desenvolvimiento de la función educativa de la comunidad a través de sus instituciones, organizaciones representativas, empresas, familias y personas, y promoviendo la utilización creativa y crítica de los medios masivos de comunicación, y
- d) La integración y coordinación de acciones entre organismos públicos, no gubernamentales y privados, tendientes al abordaje conjunto de las demandas sociales con el fin de racionalizar el uso de los recursos existentes, ampliar la variedad y aumentar la oferta educativa.

Artículo 85.- Centros culturales. El Estado debe organizar centros culturales para niñas, niños, adolescentes y jóvenes con la finalidad de desarrollar capacidades expresivas, lúdicas y de investigación mediante programas no escolarizados de actividades vinculadas con las artes, la cultura, la ciencia, la tecnología y el deporte.

Artículo 86.- Validez de los títulos. El Estado Provincial certificará las acciones que se desarrollen en el ámbito de la educación no formal destinadas a la capacitación laboral y formación profesional.

Las personas físicas o jurídicas -públicas o privadas- que brinden servicios de educación no formal deberán consignar en toda su documentación, publicidad, comunicación, diplomas o certificados la leyenda "SIN VALIDEZ OFICIAL", sin ninguna otra inscripción o aditamento que pueda inducir a interpretar como reconocimiento o validez oficial de la enseñanza que imparten.

TÍTULO TERCERO
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN
CAPÍTULO I

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Sección Primera
El Ministerio de Educación

Artículo 87.- Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba será el órgano del Poder Ejecutivo Provincial responsable de la planificación, organización, gobierno, administración y fiscalización generales del área, de acuerdo con el principio constitucional de centralización política y normativa.

Artículo 88.- Unidades de organización. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba dispondrá de las secretarías, subsecretarías, direcciones y otras unidades de organización necesarias para el más adecuado cumplimiento de sus competencias generales, en concordancia con la legislación vigente, que faculta al Poder Ejecutivo Provincial a autorizar su funcionamiento.

Artículo 89.- Funciones del Ministerio. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba desarrollará las siguientes funciones generales:

- a) Garantizar el cumplimiento y respeto de los principios constitucionales, de esta Ley y sus reglamentaciones;
- b) Organizar, fiscalizar y evaluar el Sistema Educativo Provincial en todos sus niveles y modalidades;
- c) Elaborar y ejecutar la política general del área, considerando las propuestas acordadas en los organismos de participación y consulta establecidos en la presente Ley;
- d) Preparar y ejecutar el programa presupuestario anual correspondiente al área;
- e) Planificar, instrumentar y difundir investigaciones e innovaciones destinadas al mejoramiento de la inclusión y la calidad educativa;
- f) Promover la formación y capacitación de sus agentes;
- g) Desarrollar acciones de cooperación e intercambio con organismos provinciales, nacionales e internacionales, y
- h) Evaluar el rendimiento general del Sistema, asistido por el Consejo de Políticas Educativas.

Artículo 90.- Desconcentración administrativa. La administración del Sistema Educativo Provincial en el nivel regional será desconcentrada funcional y territorialmente a fin de adaptar los servicios con eficacia, eficiencia y oportunidad a las necesidades del mismo.

Sección Segunda

El Consejo Provincial de Políticas Educativas

Artículo 91.- Creación. Créase en el ámbito del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba el "Consejo Provincial de Políticas Educativas" que estará conformado por representantes de los siguientes organismos y entidades con sede en el territorio provincial:

- a) Ministerio de Educación u organismo que en el futuro lo sustituyere;
- b) Ministerio de Ciencia y Tecnología u organismo que en el futuro lo sustituyere;
- c) Universidades públicas;
- d) Universidades privadas;
- e) Entidades gremiales del sector educativo;
- f) Poder Legislativo;
- g) Poder Judicial;
- h) Entidades representativas de las instituciones educativas de gestión privada;
- i) Entidad provincial que agrupe a estudiantes de nivel secundario por los establecimientos educativos de gestión estatal;
- j) Entidad provincial que agrupe a estudiantes de nivel secundario por los establecimientos educativos de gestión privada;
- k) Entidad provincial que agrupe a estudiantes de nivel superior por los establecimientos educativos de gestión estatal;
- l) Entidad provincial que agrupe a estudiantes de nivel superior por los establecimientos educativos de gestión privada;
- m) Entidad provincial que agrupe a padres o madres de familia por los establecimientos educativos de gestión estatal;
- n) Entidad provincial que agrupe a padres o madres de familia por los establecimientos educativos de gestión privada, y
- ñ) Otros organismos comprometidos con la temática a quienes el Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba o quien él designe podrá cursar las invitaciones pertinentes.

Artículo 92.- Integración. El Consejo Provincial de Políticas Educativas estará integrado por dos (2) representantes, uno titular y otro suplente, designados por cada uno de los organismos integrantes del mismo y su coordinación será ejercida por el Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba.

Artículo 93.- **Carácter.** El Consejo Provincial de Políticas Educativas tiene carácter consultivo, asesorando y colaborando con el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba en lo que se refiere a:

- a)** Proponer cuestiones que, a su criterio, resulten necesarias para la elaboración de las políticas educativas, produciendo informes que las avalen y que sean consecuencia del análisis pertinente;
- b)** Proponer acciones y medidas que contribuyan al cumplimiento de las leyes educativas nacionales y provinciales;
- c)** Sugerir la modificación de la legislación vigente con el propósito de que aquella se ajuste a la realidad imperante;
- d)** Procurar la coordinación de las acciones a implementar en la Provincia a los efectos de fortalecer en términos de inclusión, equidad, calidad y pertinencia el servicio educativo brindado en todos sus niveles y modalidades;
- e)** Ejecutar tareas de monitoreo y evaluación de los resultados de las actividades desarrolladas en el marco de las políticas o acciones por dicho organismo propuestas;
- f)** Impulsar acciones conducentes al relevamiento de situaciones que requieran de medidas en materia de política educativa, como así también de los recursos, programas, legislación, investigación y estudios a ellas referidas;
- g)** Proponer alternativas para la optimización de los recursos que sean asignados a los fines de la implementación de políticas en materia educativa, y
- h)** Promover y facilitar la articulación de la educación superior prevista en el artículo 45 de esta Ley, principalmente en lo atinente a la formación docente inicial y continua como a la investigación educativa. A esos fines se debe constituir en el seno del Consejo Provincial de Políticas Educativas una comisión permanente con la participación de los sectores involucrados.

Artículo 94.- **Comisión de evaluación.** La Comisión de Evaluación e Información Educativa a que hace referencia el artículo 21 de la presente Ley, que funcionará en el ámbito del Consejo Provincial de Políticas Educativas, está integrada por representantes de dicho Consejo, del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y por miembros de la comunidad académica y científica de reconocida trayectoria en la materia.

La Comisión de Evaluación e Información Educativa tiene por funciones:

- a)** Proponer criterios y modalidades en los modos de construcción de las herramientas de información y evaluación de la educación;
- b)** Participar en el seguimiento de los procesos de información y evaluación del Sistema Educativo Provincial;
- c)** Participar en la difusión y utilización de la información generada por dichos procesos, y
- d)** Asesorar al Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba en todo lo que hace a la información y evaluación de la educación.

Artículo 95.- **Convocatoria.** El Consejo Provincial de Políticas Educativas debe ser convocado en forma ordinaria por lo menos cuatro (4) veces en el año, preferentemente en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre, previo acuerdo con la coordinación respecto de la fecha y el temario. Sin perjuicio de ello, el Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba puede convocarlo en forma extraordinaria cuando lo estime conveniente o a solicitud del propio Consejo para el tratamiento de temas extraordinarios y de carácter urgente. Asimismo, puede disponer la formación de comisiones especiales. En tal caso, se debe determinar su duración, la finalidad a cumplir y los plazos para elevar sus despachos al Consejo.

El Consejo Provincial de Políticas Educativas procurará producir los informes y propuestas por consenso. Cuando esto no se logre, se deben consignar todas las opiniones disidentes, con los fundamentos que las avalen.

Sección Tercera

El Consejo Provincial de Educación Técnica y Trabajo

Artículo 96.- **Creación.** Créase el “Consejo Provincial de Educación Técnica y Trabajo” como ámbito de participación para la formulación y coordinación de las políticas y estrategias provinciales en materia de educación técnica profesional de nivel medio y superior y de la formación profesional a los efectos de fortalecer, en términos de calidad y pertinencia, la formación técnico profesional de los jóvenes y adultos y su enlace con el mundo productivo.

Artículo 97.- **Funciones.** El Consejo Provincial de Educación Técnica y Trabajo tiene carácter consultivo, asesorando y colaborando en lo que se refiere a:

- a)** Establecer mecanismos de consulta y colaboración con los sectores sociales - empresarios, de los trabajadores y de las asociaciones intermedias- a fin de receptar los aportes al diseño y ejecución de las políticas de fortalecimiento y sustentabilidad de la educación técnico profesional en la Provincia;
- b)** Proponer y/o elaborar para su aprobación los trayectos y programas de formación técnico-profesional, teniendo en cuenta las demandas regionales;
- c)** Promover la terminalidad educativa de la población joven y adulta, así como su incorporación en procesos de educación continua;
- d)** Promover la formación y actualización docente en su relación con la modernidad del mundo productivo;
- e)** Promover la vinculación de la Provincia y su reconocimiento ante organismos provinciales, nacionales e internacionales, y

f) Asesorar respecto de las tendencias del desarrollo regional, de las nuevas tecnologías incorporadas a la producción y el trabajo y de las necesidades de capacitación de los distintos sectores, promoviendo la articulación entre las ofertas de los distintos Ministerios.

Artículo 98.- Integración. El Consejo Provincial de Educación Técnica y Trabajo está integrado por los señores Ministros de Educación, de Industria, Comercio y Trabajo, de Ciencia y Tecnología y de Agricultura, Ganadería y Alimentos o de los organismos que en el futuro los sustituyeren. Contará además con un (1) representante titular y uno (1) suplente provenientes de:

- a) Sector universitario;
- b) Sector empresarial;
- c) Sector de los trabajadores;
- d) Las asociaciones intermedias;
- e) Las asociaciones gremiales de educación;
- f) La entidad provincial que agrupe a estudiantes de nivel medio por los establecimientos educativos de modalidad técnico-profesional de gestión estatal;
- g) La entidad provincial que agrupe a estudiantes de nivel medio por los establecimientos educativos de modalidad técnico-profesional de gestión privada;
- h) La entidad provincial que agrupe a estudiantes de nivel superior por los establecimientos educativos de modalidad técnico-profesional de gestión estatal;
- i) La entidad provincial que agrupe a estudiantes de nivel superior por los establecimientos educativos de modalidad técnico-profesional de gestión privada;
- j) La entidad provincial que agrupe a padres o madres de familia por los establecimientos educativos de modalidad técnico-profesional de gestión estatal;
- k) La entidad provincial que agrupe a padres o madres de familia por los establecimientos educativos de modalidad técnico-profesional de gestión privada, y
- l) Las entidades representativas de las instituciones educativas de gestión privada.

Artículo 99.- Autoridades. La Presidencia del Consejo Provincial de Educación Técnica y Trabajo será ejercida en forma rotativa cada doce (12) meses por los señores Ministros de Educación y de Industria, Comercio y Trabajo.

Será coordinado por un representante del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, designado a tal efecto.

Todos los integrantes del Consejo desempeñarán sus funciones en forma honoraria sin derecho a compensación ni retribución de ninguna naturaleza.

CAPÍTULO II LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Artículo 100.- Unidades pedagógicas. Las instituciones educativas constituyen la unidad pedagógica del sistema, responsables de los procesos de enseñanza y aprendizaje destinados al logro de los objetivos establecidos por esta Ley.

Artículo 101.- Comunidad Educativa. Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 100 de esta Ley, las instituciones educativas deben favorecer y articular la participación de los distintos actores que constituyen la comunidad educativa: directivos, docentes, no docentes, padres, madres y/o tutores, alumnos, profesionales de los equipos de apoyo, cooperadoras escolares y otros representantes del medio local comprometidos con la función educativa de la institución.

Artículo 102.- Proyecto Educativo Institucional. Las instituciones educativas disponen de la autonomía pedagógica necesaria para elaborar y ejecutar su proyecto institucional. Éste se planificará y desarrollará respetando los lineamientos y objetivos generales de la política educacional, atendiendo a las exigencias específicas de la realidad regional y local, considerando las posibilidades operativas de cada institución.

Artículo 103.- Criterios organizativos. Las instituciones educativas, en el marco de las políticas definidas y condiciones habilitadas por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, adoptan para su organización los siguientes criterios:

- a) Definir su proyecto educativo con la participación de todos sus integrantes, respetando los principios y objetivos enunciados en esta Ley;
- b) Promover modos de organización institucional que garanticen dinámicas democráticas de convocatoria y participación de los alumnos en la experiencia escolar;
- c) Adoptar el principio de no discriminación en el acceso y trayectoria educativa de los alumnos;
- d) Desarrollar procesos de autoevaluación institucional con el propósito de revisar las prácticas pedagógicas y de gestión;
- e) Realizar adecuaciones curriculares en el marco de los lineamientos curriculares provinciales y federales para responder a las particularidades y necesidades de su alumnado y su entorno;
- f) Definir su código de convivencia;
- g) Facilitar iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la investigación pedagógica y de la extensión;
- h) Promover la participación de la comunidad a través de la cooperación escolar en todos los establecimientos educativos de gestión estatal, e
- i) Promover experiencias educativas fuera del ámbito escolar con el fin de permitir a los estudiantes conocer la cultura nacional, experimentar actividades físicas y deportivas en ambientes urbanos y naturales, tener acceso a las actividades culturales de su localidad y otras.

Artículo 104.- Supervisores. Los supervisores del sistema integrarán el equipo técnico-docente de las distintas direcciones del Sistema Educativo Provincial y desempeñan la tarea de asesorar y apoyar a las instituciones educativas para el mejor desarrollo de su proyecto institucional.

El acceso al cargo de supervisor se efectuará con arreglo a las condiciones establecidas por los estatutos y normas reglamentarias que regulan la carrera docente.

Artículo 105.- Director. Cada institución educativa estará a cargo de un director que podrá ser apoyado en sus funciones por un equipo de gestión educativa conformado de acuerdo a las características de cada escuela. El acceso a estos cargos se efectúa con arreglo a las condiciones establecidas por los estatutos y normas reglamentarias que regulan la carrera docente.

En las instituciones de gestión privada el director reviste el carácter de autoridad pedagógica, mientras que la entidad propietaria es la responsable del funcionamiento integral de la institución.

Artículo 106.- Apoyo de gestión. Las instituciones de educación superior serán apoyadas en su gestión a través de organismos colegiados que favorezcan la participación de los docentes y de los estudiantes en el gobierno de la institución y mayores grados de decisión en el diseño e implementación de su proyecto institucional.

Artículo 107.- Organismos de apoyo. Las instituciones educativas pueden propiciar la creación y organización de asociaciones de apoyo a su accionar, tales como asociaciones cooperadoras, clubes de madres, cooperativas de alumnos, docentes y padres. Estos organismos tendrán como finalidad movilizar, captar y administrar medios y recursos para cumplir con las actividades programadas.

El Estado Provincial debe dotar de un sistema normativo que posibilite un procedimiento ágil y flexible para su constitución, administración, formas periódicas y democráticas de elección de autoridades y todo aquello que haga a su mejor integración y funcionamiento.

Artículo 108.- Competencias de los municipios. Una ley especial establecerá y reglamentará las competencias y atribuciones de los municipios en materia educativa, las que se ejercerán en forma coordinada y concertada con el Gobierno Provincial, asegurando su concordancia con la presente Ley general.

Dicha norma preverá la realización de convenios entre ambos niveles de gobierno, en los cuales se acordarán las condiciones de cooperación y participación correspondientes a la creación, construcción, mantenimiento y equipamiento de las instituciones educativas, así como su regulación pedagógica, académica y administrativa.

TÍTULO CUARTO FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN CAPÍTULO ÚNICO

Fuentes de Financiamiento

Artículo 109.- Garantía presupuestaria. La Provincia garantiza para el Sistema Educativo Provincial un porcentaje mínimo de recursos en cada ejercicio no inferior al treinta y cinco por ciento (35%) del Presupuesto General anual. Para dar cumplimiento a dicha obligación y a los demás objetivos fijados en la presente Ley, el Gobierno de la Provincia de Córdoba asignará los fondos presupuestarios que fueren necesarios, afectando recursos tributarios y/o no tributarios, corrientes y/o extraordinarios, y en su caso, propiciará la creación de tributos (impuestos, tasas retributivas de servicios y/u otros), y/o tomará financiamiento del sistema financiero nacional y/o internacional.

Artículo 110.- Aranceles. Las instituciones educativas de gestión privada pueden ser gratuitas o aranceladas. En este último caso, pueden combinar para su financiamiento el aporte estatal y los aranceles educacionales.

TÍTULO QUINTO DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS y TRANSITORIAS

Artículo 111.- Derogación. Derógase la Ley Nº 8113 y sus modificatorias.

Artículo 112.- Modificación de programas. Las modificaciones de planes y programas de estudio que pudiesen llevarse adelante como consecuencia de la aplicación de la presente Ley no pueden causar perjuicio moral y/o patrimonial a los trabajadores de la educación. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba debe efectuar las adecuaciones que correspondan a cada caso.

Artículo 113.- Metas a mediano plazo. A fin de lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente Ley, en especial a los referidos a la obligatoriedad escolar tanto de nivel inicial como de nivel secundario y la jornada extendida de nivel primario -artículos 26, 27, 36 y 37 de la presente Ley-, además de alcanzar los acuerdos logrados en el Compromiso por la Educación firmado por los referentes de las fuerzas políticas de la Provincia en el marco del Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba (COPEC), se establecen las siguientes metas a alcanzar durante los próximos cuatro (4) años:

a) Educación inicial: extender la educación inicial a fin de garantizar la misma para las niñas y niños desde sus primeros años de vida, que permita un mejor desarrollo de la trayectoria escolar futura.

1) Incrementar las salas de tres (3) años alcanzando una cobertura del ciento por ciento (100%) en contextos sociales desfavorables dentro de los próximos tres (3) años, para lo cual se prevé la creación de ciento sesenta (160) nuevas salas, conforme al siguiente detalle:

Año 2011: sesenta (60) salas;

Año 2012: cincuenta (50) salas, y

Año 2013: cincuenta (50) salas.

2) Lograr el cumplimiento de la obligatoriedad de las salas de cuatro (4) años dentro de los próximos cinco (5) años, para lo cual se prevé la creación de doscientas veintiséis (226) nuevas salas, conforme al siguiente detalle:

Año 2011:cien (100) salas;
Año 2012:cincuenta (50) salas;
Año 2013:cincuenta (50) salas, y
Año 2014:veintiséis (26) salas.

Asimismo, y a fin de dicha creación, resulta necesaria la construcción de nuevas aulas, según el siguiente detalle:

Año 2011:cuarenta y cinco (45) aulas para salas de cuatro (4) años;
Año 2012:cincuenta (50) aulas para salas de cuatro (4) años y cincuenta (50) aulas para salas de tres (3) años;
Año 2013:cincuenta (50) aulas para salas de cuatro (4) años y cincuenta (50) aulas para salas de tres (3) años, y
Año 2014:veintiséis (26) aulas para salas de cuatro (4) años.

b) Educación Primaria y Secundaria: asegurar la escolarización de todas las niñas y niños en la educación de nivel primario y secundario en condiciones satisfactorias.

1) Aumentar, hasta alcanzar el ciento por ciento (100%) el número de escuelas primarias de jornada extendida o completa, principalmente en el segundo ciclo, a fin de favorecer una mejor articulación con el nivel secundario dentro de los próximos cinco (5) años, para lo cual se prevé la incorporación de trescientas noventa y ocho (398) escuelas primarias en programa de jornada extendida, conforme al siguiente detalle:

Año 2011:doscientas (200) escuelas;
Año 2012:noventa y ocho (98) escuelas;
Año 2013:cincuenta (50) escuelas, y
Año 2014:cincuenta (50) escuelas.

Se prevé que el total de secciones de segundo ciclo a incorporar entre los años 2011 y 2015 asciende a tres mil ciento ochenta y ocho (3.188) unidades.

Asimismo, y a fin de dicha creación, resulta necesaria la construcción de nuevas aulas, según el siguiente detalle:

Año 2011:cien (100) aulas;
Año 2012:cien (100) aulas;
Año 2013:cien (100) aulas;
Año 2014:cien (100) aulas, y
Año 2015:ciento ocho (108) aulas.

2) Sustener programas que incrementen las oportunidades y la atención educativa a la diversidad de necesidades del alumnado (zonas rurales, zonas urbano-marginales, pueblos originarios, discapacidad permanente y transitoria).

3) Escuelas primarias rurales: se prevé la incorporación de ciento cuarenta (140) maestros de materias especiales (áreas de educación física, artística, lengua extranjera y ciencias), los que serán afectados a extensión de jornada y conforme al siguiente detalle:

Año 2011:cuarenta (40) maestros;
Año 2012:cuarenta (40) maestros;
Año 2013:treinta (30) maestros;
Año 2014:veinte (20) maestros, y
Año 2015:diez (10) maestros.

4) Escuelas primarias en contexto desfavorable: se prevé la incorporación de ochenta y cinco (85) maestros de apoyo afectados a programas de fortalecimiento en las áreas de lengua, ciencias y matemática (1er. ciclo), conforme al siguiente detalle:

Año 2011:veinticinco (25) maestros de apoyo;
Año 2012:veinte (20) maestros de apoyo;
Año 2013:veinte (20) maestros de apoyo;
Año 2014:diez (10) maestros de apoyo, y
Año 2015:diez (10) maestros de apoyo.

5) Procesos de integración de alumnos con necesidades educativas especiales en escuela común: se prevé la incorporación de noventa y un (91) maestros integradores, conforme se detalla a continuación:

Año 2011:treinta (30) maestros integradores;
Año 2012:treinta (30) maestros integradores;
Año 2013:treinta y un (31) maestros integradores.

6) Se prevé dar continuidad al "Programa Provincial de Becas Estudiantiles - Nivel Medio" para alumnos pertenecientes a familias de bajos recursos y con buen desempeño académico.

c) Promover la inclusión de estudiantes de nivel secundario a partir de iniciativas y acciones sostenidas orientadas a la población objetivo, tales como:

1) Llevar a cabo acciones que permitan en el menor tiempo posible alcanzar el cumplimiento de la obligatoriedad del nivel para lo cual se prevé el sostenimiento del Programa de Inclusión y Terminalidad de la Educación Secundaria hasta su finalización correspondiente, en el transcurso del año 2014.

2) Generar estrategias que resuelvan el problema de la repitencia escolar y de iniciativas en múltiples campos para mejorar la calidad de la enseñanza para lo cual se prevé avanzar con la incorporación de doscientos sesenta y seis (266) coordinadores de curso en el nivel secundario de educación, conforme al siguiente detalle:

Año 2011:ciento veinte (120) coordinadores de curso;
Año 2012:cien (100) coordinadores de curso, y
Año 2013:cuarenta y seis (46) coordinadores de curso.

3) Se prevé reforzar los equipos profesionales de apoyo escolar a través de la incorporación de sesenta y cinco (65) gabinetistas psicopedagógicos, conforme al siguiente detalle:

Año 2011: quince (15) jefes de gabinete psicopedagógico;

Año 2012: quince (15) jefes de gabinete psicopedagógico;

Año 2013: quince (15) jefes de gabinete psicopedagógico;

Año 2014: diez (10) jefes de gabinete psicopedagógico, y

Año 2015: diez (10) jefes de gabinete psicopedagógico.

d) Ofrecer a todas las personas oportunidades de educación a lo largo de toda la vida, garantizando el acceso a la educación y a la formación laboral a las personas jóvenes y adultas con mayores desventajas y necesidades para lo cual se prevé la disponibilidad continua de noventa (90) cargos de maestros de materias especiales, afectados a la formación laboral (oficios), incorporando a los cargos existentes los siguientes:

Año 2011: doce (12) cargos;

Año 2012: diez (10) cargos;

Año 2013: diez (10) cargos;

Año 2014: diez (10) cargos, y

Año 2015: diez (10) cargos.

e) Dar continuidad a las acciones de mejora en la formación inicial y continua del profesorado para los distintos niveles del Sistema Educativo Provincial, orientado a:

1) Fortalecer los programas en curso y diseñar otros que promuevan la articulación entre los institutos superiores y las universidades que forman profesores, y

2) Impulsar acciones que acompañen el acceso al trabajo docente en sus primeros años de desempeño profesional para lo cual se prevé la creación de un mil doscientas (1.200) horas cátedras de nivel superior para afectar a la investigación, extensión y acompañamiento en el acceso al trabajo docente y conforme al siguiente detalle:

Año 2011: cuatrocientas (400) horas cátedras de nivel superior;

Año 2012: cuatrocientas (400) horas cátedras de nivel superior, y

Año 2013: cuatrocientas (400) horas cátedras de nivel superior.

f) Sustener la incorporación de tecnología y actualización de herramientas y capacitación docente a fin de favorecer su plena utilización como herramienta pedagógica que optimice el aprendizaje de los estudiantes, para lo cual se pretende proveer de cincuenta y nueve mil cuatrocientas cincuenta y cinco (59.455) netbooks (con equipamiento asociado) a establecimientos educativos de nivel inicial, primario y modalidad jóvenes y adultos, conforme al siguiente detalle:

Año 2011: dieciocho mil (18.000) netbooks;

Año 2012: quince mil ochocientas (15.800) netbooks;

Año 2013: catorce mil trescientas ochenta y ocho (14.388) netbooks;

Año 2014: cinco mil cuatrocientas (5.400) netbooks, y

Año 2015: cinco mil ochocientas sesenta y siete (5.867) netbooks.

Se prevé además la incorporación de cuatrocientos treinta y dos (432) administradores de red, conforme al siguiente detalle:

Año 2011: ciento ocho (108) administradores de red;

Año 2012: ciento ocho (108) administradores de red, y

Año 2013: doscientos dieciséis (216) administradores de red.

Se asegura la provisión de conectividad (internet) a la totalidad de los edificios educativos de gestión estatal.

Artículo 114.- Salas cuna. A los fines del cumplimiento de la obligatoriedad escolar establecida por los artículos 26, 27 y 37 de la presente Ley, la Autoridad de Aplicación articulará con el Ministerio de Desarrollo Social la disponibilidad de salas cuna o dispositivos similares creados o a crearse, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación para las adolescentes madres.

Artículo 115.- Afectación presupuestaria. Hasta tanto se sancione la ley prevista en el artículo 109 de la presente norma, manténgase la afectación de los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal -distribución secundaria Ley Nacional Nº. 23.548- a favor del Ministerio de Educación en los mismos términos y condiciones que se establecieron en el artículo 7º de la Ley Nacional Nº 26.075, a los fines de lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley Nacional Nº 26.206 -de Educación Nacional-.

Con el propósito de garantizar la participación de la Provincia en el esfuerzo del financiamiento educativo consolidado a través de la Ley Anual de Presupuesto Provincial, se determinará el monto de esa afectación en función de la variación porcentual del PBI nominal prevista en el marco de la Ley Nacional Nº 25.917 del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, artículo 2º y/o demás variables macrofiscuales de similar significación.

Artículo 116.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

– Siendo la hora 19 y 32:

-8-

ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA

Sr. Presidente (Campana).- Continúa la sesión.

Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados a última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

XXIX

6751/L/10

Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual adhiere a la muestra "Fotoapuntos", en la que se presentarán trabajos finales de alumnos del 2º Curso de Fotografía Digital, a desarrollarse el 20 de diciembre en la Legislatura de la Provincia.

XXX

6756/L/10

Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Monier y Feraudo, por el cual declara de Interés Legislativo la publicación del libro "Un Pasito Mas", de la autora Anabella Llerena.

XXXI

6757/L/10

Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual manifiesta la necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, para que a través del OCCOVI arbitre lo medios para desmalezar las banquinas y demarque horizontalmente la Ruta Nacional Nº 38.

XXXII

6763/L/10

Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Senn y Passerini, por el cual adhiere al Centenario de la Parroquia "San Isidro Labrador" de la localidad de Portaña, departamento San Justo, a celebrarse el 17 de diciembre.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Del Poder Ejecutivo

XXXIII

6762/E/10

Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que denomina "Autovía del Bicentenario Agustín Tosco", la Ruta Provincial Nº E-53, en el tramo comprendido entre la ciudad de Córdoba y la localidad de Salsipuedes.

Sr. Presidente (Campana).- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos y de Legislación General.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

XXXIV

Peticiones y asuntos particulares ...

6766/N/10

Nota de la Secretaria Técnica Parlamentaria, María Belén Cocciolo: Elevando a consideración del Cuerpo su renuncia al cargo.

Sr. Presidente (Campana).- Queda reservado en Secretaría.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

XXXV

Despachos de comisión

Despacho de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

6480/E/10

Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo la Organización y Administración General del Sistema Educativo Provincial y Deroga la Ley Nº 8113.

Despachos de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

1)6652/E/10

Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el Convenio de Compraventa de Acciones y la Addenda al Convenio de Compraventa de Acciones suscripto entre la Provincia y la empresa Delta SA, para la adquisición de la totalidad de las acciones que Delta SA posee en Caminos de las Sierras SA con sus consecuentes derechos patrimoniales y políticos.

2)6653/E/10

Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el Convenio de Compraventa de Acciones y la Addenda al Convenio de Compraventa de Acciones suscripto entre la

Provincia y la empresa Codi SA, para la adquisición de la totalidad de las acciones que Codi SA posee en Caminos de las Sierras SA con sus consecuentes derechos patrimoniales y políticos.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.

-9-

A) CLUB DE RUGBY LOS CUERVOS DE BELL VILLE. OBTENCIÓN DEL SUBCAMPEONATO DEL TORNEO ASCENSO Y UNA PLAZA EN EL TORNEO REGIONAL DEL CENTRO. BENEPLÁCITO.

B) LOCALIDAD DE CANALS, DPTO. UNIÓN. FIESTA PATRONAL DE EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

C) PILOTO FABIÁN MOSCATELLO. OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE CAMPEÓN ARGENTINO DE VELOCIDAD, EN LA CATEGORÍA SUPERBIKE DE MOTOCICLISMO. BENEPLÁCITO.

D) PRIMERA LIGA DE FÚTBOL FEMENINO DE BELL VILLE, DPTO UNIÓN. BENEPLÁCITO.

E) DÍA INTERNACIONAL DE LA SOLIDARIDAD HUMANA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

F) AGRUPACIÓN GAUCHA "SANTOS GUAYAMA", EN VILLA DOLORES. 7º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

G) DRA. RAQUEL DODELSON DE KREMER. RECONOCIMIENTO OTORGADO POR B'NAI B'RITH INTERNACIONAL, REGIONAL CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

H) LIBRO "CARACOL ADENTRO", DE MILDRE AMBROGGIO. PUBLICACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

I) 10º CAMPEONATO COMERCIAL DE FÚTBOL DE VERANO 2010, EN PINCÉN, DPTO. GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

J) XXV ENCUENTRO NACIONAL DE FÚTBOL INFANTIL "NUESTRO FUTURO", EN VILLA HUIDOBRO, DPTO. GENERAL ROCA.

K) GEÓLOGA MARÍA JÉSSICA GIULIANO ALBO. PREMIO NOVEL PROFESIONAL. OBTENCIÓN EN EL X CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA PARA EL DESARROLLO, EN CARACAS, VENEZUELA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

L) PARROQUIA SAN ISIDRO LABRADOR, EN PORTEÑA, DPTO. SAN JUSTO. CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

M) CENTRO OFTALMOLÓGICO DR. ERNESTO GUEVARA. 1º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

N) MUESTRA "FOTOAPUNTES", EN LA LEGISLATURA DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

Ñ) LIBRO "UN PASITO MÁS", DE ANABELLA LLERENA. PUBLICACIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.

O) RUTA NACIONAL N° 38. DESMALEZAMIENTO DE BANQUINAS Y DEMARCACIÓN HORIZONTAL. SOLICITUD AL PEN.

Tratamiento en los términos del Art. 157.

Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones, en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en estado de comisión a los siguientes proyectos de adhesión y beneplácito: 6311, 6312, 6313, 6328, 6544, 6611, 6723, 6737, 6738, 6739, 6746, 6747, 6748, 6751; 6756; 6757 y 6763/L/2010, sometiéndolos a votación conforme el texto acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.

En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.

**PROYECTO DE DECLARACION – 06311/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:**

Su beneplácito por el desempeño deportivo del Club de Rugby Los Cuervos de Bell Ville, quienes obtuvieron el pasado 12 de setiembre el Subcampeonato del Torneo de Ascenso de su división, ganándose de esa manera un espacio en la competencia del Torneo Regional del Centro de máximo nivel de la liga interior del país.

Domingo Carbonetti.

FUNDAMENTOS

Frente a los desafíos que impone el ajetreado modus vivendi de nuestra modernidad, y el decaimiento de las mejores costumbres en la juventud, la muchachada de “Los Cuervos” de Bell Ville, a puro talento, entrenamiento y fuerza de voluntad, desempeñó durante este año 2010 una exigente campaña deportiva por la gloria del Torneo de Ascenso del Rugby local, marcando el ejemplo a seguir por los jóvenes del sudeste cordobés.

Así, el pasado 12 de Setiembre y luego de una brillante campaña, se enfrentó por la Final en el Estadio Chateau Córdoba con el experimentado equipo de Carlos Paz.

Frente al entusiasmo con el que la población de Bell Ville seguía la suerte del match, “Los Cuervos” tuvieron un inicio brillante en los primeros 30 minutos del encuentro llegando a marcar una diferencia a su favor de 15 a 0 acariciando la posibilidad de consagrarse campeón de la divisional a través del esfuerzo en conjunto del todo el equipo, sus entrenadores con los try de fabulosas corridas de Amilcar Montesanto visitando el ingoal de Carlos Paz y los penales de Luciano Verón.

Pero se trata de una liga muy competitiva y el experimentado equipo de Carlos Paz, tres veces campeón en la división, recuperó el máximo de concentración, y a puro oficio retomó el comando de la guinda pasando a diez minutos del final a ganar por la mínima diferencia 16 a 15 que se mantuvo hasta el final del encuentro tras un malogrado penal de “Los Cuervos”. Los carlospacenses festejaron así un año más el campeonato cuando el árbitro Garay marcó el final del encuentro.

Así, la formación de “Los Cuervos”, con 1- Federico Zanetta, 2- Franco Martínez, 3- Juan Mansilla, 4- Alan Campos, 5- Pablo Lamothe, 6- Mario Barrios, 7- Luciano Nuñez, 8- Mauricio Chicco, 9- Germán Buso, 10, Gonzalo Nuñez, 11- Ezequiel Nuñez, 12- Luciano Verón, 13- Dario Martinato, 14- Amilcar Montesantos, 15- Ezequiel Sánchez. Y los reemplazos Miguel Buso, Damián Canavosio, Paulo Luna, Juan Gallo, Andrés Tosolini mas el resto del equipo y sus entrenadores Esteban Ambroggio y Alejandro Campanella, coronaron el Sub-campeonato.

Fue un espectáculo deportivo de gran categoría en el que ninguno de los equipos se guardó nada, entregando todo lo que había.....pasada la tensión de la justa deportiva, ambos equipos con la satisfacción de haber cumplido su deber pasaron a la premiación en un fraterno ambiente de camaradería que caracteriza a este deporte.

Ambos clasificaron para jugar en una instancia superior ganándose el derecho al ascenso en el Torneo Regional del Centro, el máximo nivel de la liga del interior del país.

Por estos motivos pido a los señores legisladores la aprobación de la siguiente declaración.

Domingo Carbonetti.

PROYECTO DE DECLARACION – 06311/L/10 – TEXTO DEFINITIVO

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA**

DECLARA:

Su beneplácito y felicitación a los integrantes del **Club de Rugby “Los Cuervos”** de la ciudad de Bell Ville, quienes obtuvieron el pasado 12 de septiembre el **Subcampeonato del “Torneo de Ascenso”** de su división, ganándose un lugar en el **Torneo “Regional del Centro”**.

PROYECTO DE DECLARACION – 06312/L/10

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA**

DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la celebración de la Fiesta Patronal de Exaltación de la Santa Cruz de la parroquia de la localidad de Canals, en el Departamento Unión, que reinauguró la iluminación de la tradicional torre y campanario, el último 14 de septiembre de 2010.

Domingo Carbonetti.

FUNDAMENTOS

Estas fiestas patronales tienen en todo el interior de la Provincia la muy importante tarea de unir a la ciudadanía en una jornada de reflexión cristiana y de festejo comunal.

En la localidad de Canals, muy particularmente, este fenómeno se profundiza por la extensa tradición católica de sus habitantes.

En esta edición 2010 los festejos comenzaron temprano por la mañana con una salva de bombas y el rezo de Laúdes comunitarias y contaron con la presencia de autoridades municipales, representantes de las instituciones de la zona, abanderados y escoltas de las escuelas de Canals y las Colonias de la Parroquia La Anunciación y Santo Cristo, en una solemne procesión con la Sagrada Imagen de Jesús y la celebración de la Santa Misa presidida por SER Monseñor Eduardo Eliseo Martín.

Además, en este día de celebración se reabrió luego de su refacción el Museo Regional “Fortín Loboy”, y la obra de iluminación de la torre y campanario de la Parroquia.

Año tras año esta parroquia de la Diócesis Villa de la Concepción del Río Cuarto corona sus esfuerzos en esta importante festividad, a través del continuo y denodado esfuerzo del Pbro. Hugo Daniel Sánchez cura párroco a cargo.

Deseando que esta importante tarea continúe es que me animo a pedirles a los señores Legisladores que así lo hallan interpretado sírvanse acompañar la siguiente declaración.

Domingo Carbonetti.

PROYECTO DE DECLARACION – 06312/L/10 – TEXTO DEFINITIVO

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por la celebración de la **Fiesta Patronal de Exaltación de la Santa Cruz** de la Parroquia de la localidad de Canals, Departamento Unión, que reinauguró la iluminación de su tradicional torre y el campanario el pasado 14 de septiembre de 2010.

**PROYECTO DE DECLARACION – 06313/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:**

Su beneplácito por la obtención del Título de Campeón en la Categoría Superbike del Campeonato Argentino de Velocidad conseguido por el piloto cordobés Fabián Moscatello este domingo 10 de octubre en el Autódromo "Termas de Río Hondo" de Santiago del Estero.

Domingo Carbonetti.

FUNDAMENTOS

En el mundo del motociclismo, Fabian Moscatello, con sus cuarenta y cuatro años y luego de una ausencia de quince años de las pistas de velocidad, rompió todos los pronósticos.

Moscatello es un experimentado corredor bellvillense que debutó en las competencias a los 12 años de edad con una Puma 98cc. Siempre ligado a los fierros y la velocidad, logró los laureles del campeonato en la categoría de 250 centímetros cúbicos en 1994, y tras renunciar a la posibilidad de disputar en los máximos circuitos europeos dejó las carreras por un largo período.

Pero en este 2010, tras probar una Yamaha R1 de 1000cc y con el apoyo de su gente, decidió reverdecir esos laureles que había conseguido tiempo atrás. Así, abrochó triunfo tras triunfo a lo largo del campeonato, seis pole-position en siete carreras y en la restante obtuvo el segundo lugar totalizando 102 puntos lo que, faltando aún dos fechas para concluir el campeonato, lo consagra Campeón Argentino de Velocidad en la categoría Superbike tras ganar la carrera de este domingo 10 de octubre en el autódromo "Termas de Río Hondo".

Sin duda, un ejemplo de seriedad y dedicación para el mundo del deporte en general y para el mundo de la competencia de velocidad en dos ruedas.

Solicito a los señores Legisladores se sirvan apoyar el logro de este piloto cordobés aprobando la presente declaración.

Domingo Carbonetti.

**PROYECTO DE DECLARACION – 06313/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:**

Su beneplácito y felicitación al piloto de motociclismo oriundo de la ciudad de Bell Ville **Fabián Moscatello** por la obtención del **Título de Campeón en la Categoría Superbike del Campeonato Argentino de Velocidad**, el que consiguió el 10 de octubre en la competencia disputada en el Autódromo "Termas de Río Hondo" de la Provincia de Santiago del Estero.

**PROYECTO DE DECLARACION – 06328/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:**

Su beneplácito por la celebración de la Primer Liga de Fútbol Femenino de Bell Ville, que tuvo como campeonas al equipo "Las Gitanas", certamen disputado en la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión.

Domingo Carbonetti.

FUNDAMENTOS

Muchos se preguntarán... una declaración para una liga de fútbol femenino? Y sí, con sobrados fundamentos y orgullo bellvillense, esta Liga debe ser reconocida por esta Legislatura.

El deporte, sobre todo del interior provincial, reúne a las familias, concentra compañerismo y solidaridad, afianza las raíces, educa en el reconocimiento del individuo como ser sociable y participativo de su cultura, de su identidad con el pueblo que los ve crecer y le brinda todo el apoyo, de la alegría en el desarrollo de actividades competitivas, pero de esfuerzo mancomunado.

Y esto no puede ser menospreciado, debe ser alentado y apoyado.

Ante una multitud de personas, que enardecida vitoreaba por uno u otro equipo, se disputó la final de este torneo llevado a cabo en el Complejo Padován sobre la ruta 3.

Con una gran expectativa, hasta último momento la incertidumbre agitaba más los corazones de los apasionados del fútbol, ya que "Las Atrevidas", en el primer encuentro, vencían al Seleccionado "A" por 3 a 0 y obligaban a las punteras e invictas "Las Gitanas" a conseguir indefectiblemente el triunfo para asegurar el título.

Y así lo hicieron, 3 a 0 fue el resultado final de "Las Gitanas" por sobre "Las Tigresas", logrando el reconocimiento de sus contrincantes.

Estas fueron las posiciones finales:

1º.- Las Gitanas	25 puntos
2º.- Las Atrevidas	24 puntos

PODER LEGISLATIVO – 49ª REUNION -15-XII-2010

3º.- Seleccionado A	17 puntos
4º.- Las Botineras	16 puntos
5º.- Las Tigresas/Las Leonas	11 puntos
6º.- Seleccionado B	10 puntos
7º.- Las Moles/Las Dinamitas	8 puntos
8º.- Las Diosas	0 puntos

Nuestro reconocimiento a todas, que el mayor triunfo es el esfuerzo y el compañerismo, la entrega y el corazón puesto en cada desafío.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de declaración.

Domingo Carbonetti.

PROYECTO DE DECLARACION – 06328/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:

Su beneplácito y felicitación a las integrantes del equipo de fútbol femenino “**Las Gitanas**”, quienes obtuvieron el Campeonato de la **1º Liga de Fútbol Femenino de Bell Ville**, certamen disputado en la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión.

PROYECTO DE DECLARACION – 06544/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito al “Día Internacional de la Solidaridad Humana” a conmemorarse el día 20 de diciembre de cada año.

Alicia Narducci.

FUNDAMENTOS

La solidaridad con las personas afectadas por la pobreza y la opresión, es uno de los principios fundacionales de las Naciones Unidas. La solidaridad, que se basa en la igualdad, la inclusión y la justicia social, conlleva una obligación mutua entre todos los miembros de la sociedad y de la comunidad mundial.

La Asamblea General del día 22 de diciembre del año 2005, consideró que la solidaridad era uno de los valores fundamentales y universales en que deberían basarse las relaciones entre los pueblos en el siglo XXI y, a este respecto, decide proclamar el 20 de diciembre de cada año “Día Internacional de la Solidaridad Humana”.

Se promovió el concepto de solidaridad como cuestión fundamental en la lucha contra la pobreza y la participación de todos los interesados pertinentes mediante iniciativas como el Fondo Mundial de Solidaridad para erradicar la pobreza y la proclamación de este importante Día Internacional.

El Día Internacional de la Solidaridad Humana, sirve para recordarnos la importancia de la solidaridad para el logro de los acuerdos convenidos internacionalmente, incluidos los programas de acción de las conferencias internacionales y los acuerdos multilaterales.

Alicia Narducci.

PROYECTO DE DECLARACION – 06544/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “**Día Internacional de la Solidaridad Humana**”, que fuera instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2005, a celebrarse cada 20 de diciembre.

PROYECTO DE DECLARACION – 06611/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por el Séptimo aniversario de la creación de la Agrupación Gaucha “Santos Guayama” de la localidad de Villa Dolores, cuya celebración se realizará el domingo 19 de diciembre próximo con integrantes del Movimiento Gaucho de Traslasierra y Norte Puntano, Provincia de San Luis.

Ítalo Gudiño.

FUNDAMENTOS

En la ciudad de Villa Dolores se ha promovido la creación de una Agrupación Gaucha que recibiera el nombre de Santos Guayama, que el próximo 19 de Diciembre celebrará el Séptimo aniversario de su creación.

La Agrupación, como manifestación genuina y tradicional de los pueblos serranos, tiene entre sus objetivos reivindicar los valores y sentimientos del gaucho argentino que son los usos y costumbres del trabajador rural de nuestra Argentina profunda.

La idiosincrasia de los pueblos se ve reflejada en estas agrupaciones que también se constituyen en el marco y el motivo de reunión de una comunidad. Sus fiestas convocan a quienes la integran en cada pueblo o paraje y se nutre de la visita numerosa de otras agrupaciones y en este caso por el Movimiento Gaucho de Traslasierra, y Norte Puntano, Provincia de San Luis que, identificadas en el color de un poncho, en determinadas pilchas criollas o en su ropa de fajina, llegan montadas a caballo para celebrar en una peña o fogón, un nuevo encuentro.

En estas celebraciones no faltan las comidas criollas, la música y el baile de nuestro folclore y todos aquellos juegos y acrobacias de nuestro campo argentino.

Cumplir Siete años en esta continua y sentida vocación por rescatar las costumbres criollas no es poco. Todo lo contrario, importa el esfuerzo y la perseverancia de luchar por sus ideales más allá de las limitaciones que a veces les impone la realidad de todos los días.

Por las razones vertidas y las que daré al momento de su tratamiento, solicito la aprobación del presente proyecto.

Ítalo Gudiño.

PROYECTO DE DECLARACION – 06611/L/10 – TEXTO DEFINITIVO

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA**

DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del **7º aniversario** de la creación de la **Agrupación Gaucha "Santos Guayama"** de la ciudad de Villa Dolores, cuya celebración se desarrollará el día 19 de diciembre de 2010 contando con la participación de integrantes del Movimiento Gaucho de Traslasierras y Norte Puntano, Provincia de San Luis.

PROYECTO DE DECLARACION – 06723/L/10

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA**

DECLARA:

Su adhesión y beneplácito al reconocimiento de la Dra Raquel Dodelson de Kremer por parte de la B`nai B`rith Argentina, Distrito 26 de B`nai B`rith Internacional, Regional Córdoba, Filial Menajem Begin, por sus investigaciones de las Enfermedades Metabólicas Hereditarias- Centro de Estudio de las Metabolopatías Congénitas (CEMECO).

María Amelia Chiofalo.

FUNDAMENTOS

La Dra. Raquel Dodelson de Kremer y su equipo, iniciaron su camino en 1976, en el mismo momento organizó CEMECO, centro de extracción estatal, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y de la Universidad nacional de Córdoba, con funciones asistenciales, de docencia e investigación en el Hospital de Niños de Córdoba, acreedora de grandiosas gratificaciones, siendo el trato con los pacientes lo que la hace reconciliarse continuamente con la vida, para poder superar los obstáculos de todo tipo que atraviesa.

Ganadora en 1993 del prestigioso Premio Reina Sofía, demostrando que el 90% de estos problemas son afecciones que comprometen el sistema nervioso central, llevándola a detectar innumerables patologías inéditas en nuestro país.

Las bastas investigaciones, se pueden apreciar en publicaciones de distintas revistas indexadas y de difusión internacional de la especialidad, en capítulos de libros y en numerosas conferencias y presentaciones en congresos. La Dra. Dirige además proyectos de investigación subsidiados por organismos nacionales, tesis, tesistas, becarios e investigadores.

Transmitiendo en todos los ámbitos donde se desempeña enormes valores humanos.

Por los motivos antes mencionados la Dra. Raquel Dodelson de Kremer, hoy recibe el premio B`nai B`rith. Fundada en 1843, es reconocida universalmente como una de las más grandes y antiguas organizaciones judías humanitarias, de acción social y derechos humanos.

La Organización B`nai B`rith se ha impuesto la misión de unir a los judíos en la tarea de cultivar sus más elevados ideales y los de toda la humanidad; de preocuparse del desarrollo y la elevación del carácter moral y espiritual del pueblo judío; de inculcarle los más puros principios de filantropía y honor; de fomentar el desarrollo de las ciencias y las artes; de aliviar las angustias de los pobres e indigentes; de visitar y atender a los enfermos; de socorrer a las víctimas y los huérfanos, conforme a los más altos principios de la humanidad.

Fuente constante de innovación y beneficencia para las poblaciones de todo el mundo, B`nai B`rith ha fundado hospitales, hogares para niños huérfanos, comunidades de viviendas para adultos mayores, ha realizado campañas de ayuda en caso de desastres naturales, fundado bibliotecas, creado programas para combatir la discriminación e incontables y diferentes iniciativas de interés público en los 58 países donde actúa.

B`nai B`rith Argentina nació en 1930 y desde entonces sirve a la comunidad nacional bregando siempre por una democracia pluralista, los derechos humanos y la dignidad de todos los hombres.

Por lo expuesto anteriormente es que solicito a los Sres. Legisladores la aprobación del presente proyecto.

María Amelia Chiofalo.

PROYECTO DE DECLARACION – 06723/L/10 – TEXTO DEFINITIVO

LA LEGISLATURA DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el reconocimiento otorgado a la **Dra. Raquel Dodelson de Kremer** por parte de la B'nai B'rith Argentina, Distrito 26 de B'nai B'rith Internacional, Regional Córdoba - Filial Menajem Begin, por sus investigaciones de las Enfermedades Metabólicas Hereditarias - Centro de Estudio de las Metabopatías Congénitas (CEMECO).

PROYECTO DE DECLARACION – 06737/L/10

LA LEGISLATURA DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la publicación del libro "Caracol Adentro" de la escritora cordobesa Mildre Ambroggio.

Raúl Jiménez.

FUNDAMENTOS

Mildre Ambroggio nació en Portaña, Departamento San Justo de nuestra Provincia de Córdoba en 1951. Cursó estudios superiores en la Universidad Nacional de Córdoba.

En 1977, se radicó en Estocolmo, Suecia, donde residió hasta 1984.

De regreso en Córdoba, se forma como narradora oral con María Rosa Finchelman.

Con otros autores de Córdoba, publica "Letrario", "Letras de Miércoles", y una tercera antología de próxima aparición.

Caracol Adentro, es su primer libro de poesías.

Dice el escritor Hernán Jaeggi "Para Mildre Ambroggio poetizar es dedicación, exorcismo, cacería, tarea de perseguidor que va al encuentro de una presa siempre esquiva e inalcanzable. En ese recorrido va dejando marcas, signos, inscripciones, figuras, el texto se hace cuerpo: señales de vida."

Y continúa Jaeggi "Caracol adentro es poesía con mujer adentro, que recrea la íntima comunión entre la experiencia individual y la experiencia de un sentimiento de alegría o dolor a través de la palabra poética".

Estamos frente a la obra poética de esta escritora cordobesa, auténtica expresión de la cultura local, creemos que son precisamente estas expresiones las que debemos alentar y promover. Es por ello que solicito a mis pares su acompañamiento al presente proyecto de declaración.

Raúl Jiménez.

PROYECTO DE DECLARACION – 06737/L/10 – TEXTO DEFINITIVO

LA LEGISLATURA DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la publicación del libro de poesías "Caracol Adentro" de la escritora cordobesa **Mildre Ambroggio**.

PROYECTO DE DECLARACION – 06738/L/10

LA LEGISLATURA DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el "10º Campeonato Comercial de Fútbol de Verano 2010" organizado por el Club Atlético Pincén, evento que se realizará desde el 18 de diciembre de 2010 al 18 de enero de 2011 en la localidad de Pincén, Departamento General Roca.

Roberto Pagliano.

FUNDAMENTOS

La localidad de Pincén, fundada hace más de 100 años, se encuentra distante a unos 480 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital, cercana al límite con la Provincia de La Pampa.

En esta localidad, funciona una Institución muy arraigada en el corazón de los habitantes de esta comunidad y zona, el Club Atlético Pincén, que supo congrega a deportistas destacados en clubes provinciales y nacionales.

La tradición deportiva en el C.A.P., ha generado el interés por la creación de una Escuela de Fútbol Infantil, la cual se creó en el año 2008 a través de un Proyecto de Reinserción Educativa, Deportiva y Social promovido por un grupo de Personas afines al Deporte y Actividades Comunitarias.

Fue así como, desde un comienzo se desarrollan actividades deportivas, básicamente fútbol con la asistencia de un Profesor de Educación Física y un Técnico de Fútbol.

En esta oportunidad, el C.A.P. organizará por 10º año consecutivo el Campeonato Comercial de Fútbol de Verano con la participación de 12 equipos de todo el Departamento General Roca. Lo recaudado, estará destinado a la refacción de la Sede Social de dicha Institución y a la compra de Pelotas de Fútbol, Arcos, Conos, Pecheras, etc. para la Escuela de Fútbol.

Finalmente, es importante destacar que dicha Institución cementa su formación Deportiva en los valores humanos de Solidaridad, Compañerismo, Amistad, Respeto, Sana Competencia, etc. lo que la transforma no solo en una Escuela Deportiva sino en un medio Social de Incentivación, Motivación y Formación de nuestros niños.

Por todo lo expuesto es que solicito a la honorable cámara la aprobación del presente proyecto.

Roberto Pagliano.

**PROYECTO DE DECLARACION – 06738/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por la realización del “**10º Campeonato Comercial de Fútbol de Verano 2010**” que, organizado por el Club Atlético Pincén, se desarrollará del 18 de diciembre de 2010 al 18 de enero de 2011 en la localidad de Pincén, Departamento General Roca.

**PROYECTO DE DECLARACION – 06739/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por el XXVº Encuentro Nacional de Fútbol Infantil “Nuestro Futuro”, a desarrollarse los días 17,18 y 19 de Diciembre de 2010 en las instalaciones del Club Deportivo Juventud Unida de Villa Huidobro, en la homónima localidad del Departamento General Roca.

Roberto Pagliano.

FUNDAMENTOS

La localidad de Villa Huidobro, cabecera política del Departamento General Roca, se encuentra en el extremo sur oeste de la Provincia, a unos 430 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital.

En esta localidad, funciona una de las Instituciones Deportivas con más historia en el Departamento General Roca, el Club Deportivo Juventud Unida de Villa Huidobro. El mismo, realiza el E.N.F.I. de manera interrumpida desde el año 1986, convocando cada año a más de 1200 niños de distintos lugares de nuestro país.

En esta oportunidad especial, este evento cumple los 25 Años de implementado por lo que se realizarán diferentes actividades especiales como reconocimientos a los primeros organizadores, deportistas destacados, clubes y escuelas de fútbol participantes, etc.

En éste torneo han participado y volverán a participar prestigiosas instituciones, tales como la Escuela de Fútbol Renato Cesarini (Rosario – Santa Fé), Escuela de Fútbol de Carlos Mac Allister (Santa Rosa – La Pampa), Comisiones de Actividades Infantiles (Comodoro Rivadavia – Santa Cruz), Club Atlético General Paz Juniors (Córdoba) y un importante número de instituciones del Sur de nuestra provincia, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, San Juan y San Luis. Las mismas participarán con 2 Categorías; la ‘97-’98 y ‘99-’2000.

Este acontecimiento, constituye el evento deportivo más importante de nuestra región, y es llevado a cabo a raíz del esfuerzo de mucha gente perteneciente no solo a la institución anfitriona, sino también a toda la localidad de Villa Huidobro, que con su desinteresada colaboración se encarga de organizar, hospedar y alimentar a mas de 30 delegaciones que anualmente nos visitan, cumpliendo de ésta manera con una importantísima actividad social de contención de numerosos niños, basándose siempre en el esfuerzo y el trabajo solidario; brindando de ésta manera a los habitantes y a los responsables del Club organizador, la alegría de saber que torneos como éstos son la génesis de amistades duraderas, de deportista cabales y de hombres de bien.

En virtud de lo manifestado, la Legislatura de la Provincia no debe permanecer ajena a éste evento, por lo que solicito a nuestros pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Roberto Pagliano.

**PROYECTO DE DECLARACION – 06739/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por la realización del **XXV Encuentro Nacional de Fútbol Infantil “Nuestro Futuro”**, a desarrollarse durante los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2010 en las instalaciones del Club Deportivo Juventud Unida de Villa Huidobro, en la homónima localidad del Departamento General Roca.

**PROYECTO DE DECLARACION – 06746/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por el reconocimiento profesional a la geóloga sanfrancisqueña María Jélica Giuliano Albo, quien desempeña sus actividades como becaria de Conicet en el Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico – Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto y fue distinguida con el premio “Novel Profesional” en el X Congreso de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo, realizado en Caracas, Venezuela, entre el 18 y el 22 de octubre de 2010.

Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Estela Bressan.

FUNDAMENTOS

La joven geóloga María Jélica Giuliano Albo, de 28 años de edad, oriunda de la ciudad de San Francisco, que actualmente se desempeña como becaria del Conicet en el Departamento de Geología de

la Universidad Nacional de Río Cuarto, recibió un importante reconocimiento internacional por su investigación acerca de la problemática de la calidad del agua y los riesgos de contaminación. Dicho reconocimiento la hizo acreedora del premio "Novel Profesional", otorgado en el marco del X Congreso de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo, realizado en Caracas, Venezuela, entre el 18 y el 22 de octubre de 2010.

El trabajo presentado por Giuliano Albo se titula "Caracterización hidrogeoquímica del agua superficial y subterránea en las cuencas La Barranquita -Knutzen". La temática del trabajo forma parte de la tesis doctoral que lleva adelante la geóloga y se enmarca en un proyecto de investigación que la becaria realiza junto a las doctoras Mónica Blarasin y Adriana Cabrera, y la especialista Edel Matteoda, docentes del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico – Químicas y Naturales de la UNRC.

El premio "Novel Profesional" son menciones que otorga la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo a los mejores trabajos presentados por jóvenes profesionales de diferentes países de Latinoamérica.

Sobre la mención recibida, María Jélica Giuliano dijo que "este tipo de premiaciones te dan mucho más ganas de seguir trabajando, sobre todo por el reconocimiento al esfuerzo y al trabajo que uno realiza todos los días, y al grupo en general", y agregó que "es muy importante cuando uno se va al exterior verse reflejado en una mención tan especial" porque permite darse cuenta del nivel de desarrollo alcanzado, y eso genera un envión anímico muy grande no sólo para uno, sino para todo el grupo de trabajo".

Según la geóloga, la investigación presentada en el mencionado Congreso, describe las características geológicas de las cuencas y aquellas más relevantes del subsuelo, fundamentalmente del acuífero freático sedimentario, que abastece de agua subterránea a esa región.

El trabajo aborda, entre otras cosas, la problemática de la calidad del agua y los riesgos de contaminación. "Describe en detalle la geoquímica de arsénico y fluoruros en aguas, además de aspectos vinculados a la contaminación derivada de actividades humanas a través de indicadores como nitratos y demanda química de oxígeno", señaló Giuliano Albo, galardonada con el premio Novel Profesional por la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea.

Como consecuencia de la distinción recibida, la joven profesional fue nominada en la ciudad de Río Cuarto como una de las candidatas a recibir el premio de "Ciudadana destacada del Año", para lo cual ya fue seleccionada entre una terna en el rubro Ciencia y Técnica y Es la tercera finalista que el próximo 17 de Diciembre podrá ser elegida, junto a Walter Carranza (Dirigentes Sociales y Gremiales) y Julio Ducurón (Arte y Espectáculos).

Constituye un orgullo para nuestro país y nuestra provincia y muy especialmente para San Francisco que la vio nacer y crecer y para Río Cuarto que la adoptó como habitante y profesional, la distinción obtenida por María Jélica Giuliano Albo, que pone en evidencia la calidad humana y la capacidad y responsabilidad profesional de nuestros jóvenes.

Por todo lo expuesto es que solicitamos de nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.

Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Estela Bressan.

PROYECTO DE DECLARACION – 06746/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el reconocimiento profesional a la geóloga sanfrancisqueña María Jélica Giuliano Albo, quien desempeña sus actividades como becaria de Conicet en el Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico – Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto y fue distinguida con el premio "Novel Profesional" en el X Congreso de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo, realizado en Caracas, Venezuela, entre el 18 y el 22 de octubre de 2010.

PROYECTO DE DECLARACION – 06747/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el Centenario de la creación de la Parroquia "San Isidro Labrador" de la localidad de Porteña (Dpto. San Justo) y el homenaje por su apostolado a los sacerdotes de ayer y hoy.

Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Estela Bressan.

FUNDAMENTOS

El avance socio – cultural; la integralidad de la familia; el amplio espectro educacional; la acción ética de los distintos cultos religiosos, la dedicación al trabajo tanto rural como urbano y mucho más hacen a la identidad de un Departamento como San Justo que ocupa un lugar de privilegio en la provincia.

La Iglesia "San Isidro Labrador" de la localidad de Porteña, de esta jurisdicción departamental, cumple 100 años de vida de su comunidad.

El viernes 17 de diciembre se realizará el acto central de la celebración y la Eucaristía concebida con sacerdotes presentes, y presidida por el Sr. Obispo Diocesano Monseñor Carlos José Tissera; habiéndose previsto también, el homenaje a los fallecidos de esta localidad, simbolizado en una ofrenda

floral.

La fe en un Ser Superior, que guía y orienta sus pasos, fortalece la vida de una comunidad. Por todo lo expuesto es que solicito de nuestros pares la aprobación del presente proyecto.

Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Estela Bressan.

**PROYECTO DE DECLARACION – 06763/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito al festejo de los 100 años de la Parroquia “San Isidro Labrador” de la localidad de Portaña, que se realizará el próximo 17 de diciembre de 2010.

Horaldo Senn, Daniel Passerini.

FUNDAMENTOS

El 1 de octubre de 1893 fue bendecida la piedra fundamental de la Capilla San Isidro Labrador y en 1910 fue elevada al rango de parroquia bajo la misma advocación.

Su arquitectura ecléctica le confiere un aspecto que exalta la verticalidad. Consta de atrio con arcos de medio punto y torre campanario de unos 30 metros de altura. La nave es de planta rectangular con ábside, tiene techo de zinc a dos aguas con cielorraso en bóveda de cañón corrido de machimbre. De su ornamentación interior sólo se conserva original el coro y la escalera caracol, el resto sufrió diversas modificaciones y reformas. En el costado derecho del templo se encuentra la Gruta Nuestra Señora de Lourdes inaugurada el 31 de diciembre de 1950.

Han transcurrido 100 años y en conmemoración a estos años que pasaron, el próximo viernes 17 de diciembre lo celebrarán mediante una ceremonia en donde tendrá la palabra el Párroco Héctor Calderón, asistirá el coro de la parroquia, tendrá lugar una solemne misa en Acción de Gracias y la fiesta culminará con un emotivo despliegue de fuegos artificiales frente a la parroquia.

Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.

Horaldo Senn, Daniel Passerini.

**PROYECTOS DE DECLARACION – 06747 Y 6763/L/10 – COMPATIBILIZADOS
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del **Centenario de la creación de la Parroquia “San Isidro Labrador”** de la localidad de Portaña, Departamento San Justo, a celebrarse el 17 de diciembre de 2010, recordando especialmente a los sacerdotes que llevaron adelante su apostolado durante su historia.

**PROYECTO DE DECLARACION – 06748/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del 1º aniversario de la inauguración del Centro Oftalmológico Dr. Ernesto Guevara y las 1.000 operaciones realizadas de catarata y pterigion, efectuadas de manera gratuita. A realizarse el día 15 de diciembre del corriente, a las 21 hs. en el salón cultural “Francisco Chicho Simone” Banco Credicoop Filial Córdoba, con la presencia del Embajador de la República de Cuba, Sr. Jorge Lamadrid Mascaró.

María Amelia Chiofalo.

FUNDAMENTOS

Operación Milagro es un programa de cooperación humanitaria iniciado por Cuba y respaldado por la República Bolivariana de Venezuela, que ya se desarrolla en 28 países de América Latina y el Caribe, destinado a tratar quirúrgicamente a personas afectadas en su visión. El programa es universal y absolutamente gratuito, básicamente orientado a los sectores que carecen de cobertura social alguna, en América Latina y el Caribe.

Desde el año 2008 el Banco Solidario de Sangre funciona como sede local de este programa, gracias a un acuerdo celebrado entre la ONG Un Mundo Mejor Es Posible (UMMEP), siendo la presidente la Profesora Claudia Camba. El proyecto tiene como objetivo dar atención sanitaria a personas que poseen problemas de cataratas y pterigio (conocida como “carnosidad en el ojo”), afecciones que sufren muchos argentinos.

A través de un trabajo articulado, el Banco de Sangre funciona como sede receptora y de contacto, realizando las primeras revisiones médicas y brindando charlas informativas para obtener el diagnóstico certero, que habilita al vecino interesado a ser operado en las localidades de Yacuiba y Villazón en el país hermano de Bolivia.

La problemática de la visión en Argentina afecta a más de 3 millones de personas, alrededor del 32 por ciento de los enfermos carece de cobertura de obra social o medicina prepaga y sólo el 8 por ciento de las cirugías se realiza en el sector público. Por ende, la falta de acceso a servicios oftalmológicos por razones económicas constituye un obstáculo severo, aún cuando el 80% de las

afecciones son reversibles.

En Córdoba, el Centro Oftalmológico "Dr. Ernesto Guevara", que funciona en la Cooperativa de Salud Junín (Ex Clínica Junín) de ésta Ciudad, recuperada por los trabajadores en la ciudad.

El Centro está a cargo del Dr. Ricardo Hernández, que con la asesoría de profesionales cubanos y la operación de médicos argentinos llevan adelante esta misión.

La meta es lograr alrededor de diez operaciones por día, para llegar a satisfacer la demanda, que cada vez crece más con la difusión que va teniendo.

El programa se lleva a cabo de la siguiente manera:

Primer Paso: Identificación de las personas que posiblemente padezcan Cataratas y Pterigium por parte de colaboradores voluntarios en los barrios, instituciones o en nuestro Centro Oftalmológico.

Segundo Paso: Las personas identificadas en el paso anterior son evaluadas por un profesional en una reunión zonal, en la institución organizadora o en nuestro Centro Oftalmológico, para realizar un prediagnóstico.

Tercer Paso: Los casos positivos son evaluados en nuestro Centro Oftalmológico para confirmar el diagnóstico y decidir si puede ser apto para cirugía.

Cuarto Paso: Los pacientes que resultan aptos para la cirugía son operados por nuestros oftalmólogos unos días después. Y continúan atendidos en nuestro Centro Oftalmológico hasta que se les da el alta.

Todo el proceso es y debe ser Absolutamente Gratuito, desde la pesquisa hasta el Alta definitiva luego de la cirugía, si la hubiera.

Desde que comenzara a funcionar el Centro Oftalmológico, en octubre de 2009, se han operado gratuitamente más de 1.000 cordobeses. Ofrecen gacetillas de cómo hay que actuar frente a los casos de los que pueden tratarse en ese centro. El centro brinda asesoramiento en esas hipótesis.

Por los fundamentos expuestos solicito a los señores Legisladores acompañar el presente proyecto declaración.

María Amelia Chiofalo.

PROYECTO DE DECLARACION – 06748/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del **1º aniversario de la inauguración del Centro Oftalmológico "Dr. Ernesto Guevara"**, a celebrarse el 15 de diciembre de 2010 en el Salón Cultural "Francisco Chicho Simone" del Banco Credicoop -Filial Córdoba-, destacando la presencia del Embajador de la República de Cuba, Sr. Jorge Lamadrid Mascaró.

PROYECTO DE DECLARACION – 06751/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la muestra "Fotoapuntos", en la que se hará la presentación de de los trabajos finales realizados a lo largo de este semestre por los alumnos del 2º Curso de Fotografía digital, dictado por la Profesora Ianina Ipohorski, que organiza conjuntamente la Dirección de Capacitación y Extensión Legislativa y la Comisión de Cultura del Consejo Provincial de la Mujer a realizarse el día 20 de diciembre a las 18:30 hs. en la Sala Protocolar de la Legislatura de Córdoba, dando así culminación a este curso.

Estela Bressan.

FUNDAMENTOS

A lo largo del año, el Consejo Provincial de la Mujer brindó mediante su Comisión de Cultura, una serie de actividades destinados a mujeres que querían participar en aquellos cursos que le otorguen en un futuro una salida laboral, entre ellos, el Curso-Taller de Fotografía Digital, realizado en conjunto con la Dirección de Capacitación y Extensión Legislativa de la Legislatura de Córdoba. Pero a éste luego se fueron sumando hombres.

Hoy, finalizado el cursado de este Taller, los alumnos exponen sus obras fotográficas en esta Muestra llamada "Fotoapunte", la que además contará con la presencia de la reconocida artista "Liliana Menéndez".

Esta muestra es conclusión de una instancia de trabajo, intercambio y búsqueda, a la vez que cuenta del inicio de procesos expresivos individuales. Lo que aquí se expone es producto de encuentro y descubrimientos cotidianos.

Participan:

María Del Valle Barrera

Jorge Gavilán

Rocío Ledesma

Silvia López

Carlos Luna

María del Milagro Nóbile

Héctor Pedraza

Nicolás Ravetti

Víctor Rivas

Mercedes Scattolón

Coordinadora: Ianina Ipohorski

Como hacedora y promotora de la cultura en sus distintas expresiones, y con motivo de ser además Presidenta de la Comisión de Cultura del Consejo Provincial de la mujer, pido a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Estela Bressan.

PROYECTO DE DECLARACION – 06751/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la realización de la muestra “**FOTOAPUNTES**”, en la que se presentarán los trabajos finales desarrollados en el último semestre por los alumnos del **2º Curso de Fotografía Digital**, dictado por la **Profesora Ianina Ipohorski** y organizado conjuntamente por la Dirección de Capacitación y Extensión Legislativa y la Comisión de Cultura del Consejo Provincial de la Mujer, a llevarse a cabo el día 20 de diciembre de 2010 en la Sala Protocolar de la Legislatura de Córdoba, dando así culminación a este curso.

PROYECTO DE DECLARACION – 06756/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:

De Interés Legislativo la publicación del libro “Un Pasito Mas” del cual es autora Anabella Llerena quien, en una actitud de servicio, vuelca en el mismo su experiencia como docente del noroeste cordobés y acerca estrategias, surgidas de su capacidad, creatividad y experiencia para el trayecto escolar del primer ciclo en el área Lenguas con integración y transferencia a las otras áreas.

José Monier, Evelina Feraudo.

FUNDAMENTOS

La docencia es un trabajo, es una profesión, pero sobre todo es una misión, que implica capacidad, responsabilidad, autenticidad y un compromiso permanente con la comunidad. Y precisamente por este compromiso y tratando de dar su aporte para un nuevo ritmo del proceso enseñanza-aprendizaje Anabella Llerena que es profesora de Enseñanza Primaria y de nivel inicial con postítulo de UNC para la Formación de Profesores y que se desempeñara como Directora de 3ª de P.V. en el centro Educativo Avelino Piñeiro y luego con el mismo cargo en el Centro Educativo “Juan Ignacio Gorriti, Docente del Proyecto de fortalecimiento Pedagógico en Lengua, Matemática y Ciencias en el Centro Educativo Antártida argentina (2008) y Docente Narradora del Ministerio de Educación (2009), nos brinda su experiencia como docente.

Como ella misma lo manifiesta:

“Me une el deseo de acercarles a nuestros alumnos las actividades pertinentes para que aprendan a leer y a escribir”.

“El mundo de los cuentos, las historias y sus propias vivencias es el lugar propicio desde donde partir en esta aventura de la lectura y la escritura”.

“Los chicos aprenden a escribir con la practica diaria, los docentes contribuimos a su desarrollo, aceptando y valorando sus propias producciones entendiendo que es un proceso y que cada alumno tiene sus propios tiempos de aprendizaje”.

“La disposición de esta propuesta es al solo efecto de encontrar cierto orden para ser presentada.”

“Contiene actividades ordenadas alfabéticamente con el solo objetivo de organizar el trabajo. Esto no implica que deberán seguir esta secuencia de actividades, las mismas pueden ser realizadas en forma individual en grupos reducidos o en la totalidad del grupo clase, según el avance de los niños, la dificultad que representa o la circunstancia particular de cada momento de enseñanza y aprendizaje”

Con respecto a su experiencia en la participación de la estrategia propuesta nos dice:

“Habiéndolo practicado personalmente en escuelitas del campo, entendí que los pequeños poseen una aceptable “memoria de resolución.”Mediante la utilización de dibujos he obtenido resultados harto favorables.”

El libro de Anabella es una invitación “para que nuestros niños aprendan con alegría, facilidad y en felicidad”.

Hacemos notar que la Autora, con fecha 08/10/10 mediante Expte. Nº 880112, ha depositado en custodia esta obra inédita en la Dirección Nacional del Derecho de Autor, a los fines pertinentes.

Esta Legislatura destaca el esfuerzo y dedicación de la Autora y reconoce el importante aporte de la presente Obra a la Educación en la asimilación de forma más efectiva de los primeros conocimientos escolares.

Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresaremos en su tratamiento, solicitamos a este Cuerpo Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido formulado.

José Monier, Evelina Feraudo.

PROYECTO DE DECLARACION – 06756/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:

PODER LEGISLATIVO – 49ª REUNION -15-XII-2010

De **Interés Legislativo** la publicación del libro “**Un Pasito Mas**” de la autora **Anabella Llerena** quien, en una actitud de servicio, vuelca en el mismo su experiencia como docente del noroeste cordobés y acerca estrategias surgidas de su capacidad, creatividad y experiencia para el trayecto escolar del primer ciclo en el Área Lenguas con integración y transferencia a las otras áreas.

PROYECTO DE DECLARACION – 06757/L/10

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

DECLARA:

La necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que por intermedio del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), visto el marco del Decreto Nº 1615/08 y de la Resolución del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Nº 1095/08, que disponen la concesión por peaje del Corredor Vial Nº 4 “Ruta Nacional Nº 38”, para que se arbitren los medios correspondientes para el desmalezado de banquinas y la demarcación horizontal de la ruta a lo largo de toda su extensión, en virtud de la peligrosidad que implica la poca visibilidad de las demarcaciones horizontales y las malezas en las banquinas que obstaculizan la visual.

Alicia Narducci.

FUNDAMENTOS

Para quienes transitan por la Ruta Nacional Nº 38, que atraviesa el Departamento Punilla, deben hacerlo con total cuidado, en virtud de que la Ruta se encuentra en total estado de abandono y sumamente peligrosa.

Así con las Demarcaciones horizontales gastadas y muy poco visibles, de gran peligrosidad en el horario nocturno, ya que las demarcaciones tienen un efecto reflectivo al ser enfocadas y proyecta la luminosidad de alerta y las banquinas ocupadas por malezas y lugares de cierta peligrosidad que no se divisan por el avance de los yuyales sobre la cinta asfáltica, conforman un panorama que hoy se observa en esta Ruta de permanente tráfico vehicular, sea de particulares, de transporte de carga y de pasajeros, además de ser camino diario de los pobladores de las distintas Localidades del Departamento Punilla, como así también del importante caudal de turistas que visitan las serranías.

Nuestra inquietante preocupación como funcionarios, se encuentra apoyada no solo en la creciente demanda que los usuarios de la Ruta nos hacen llegar cotidianamente sino también en la de nuestro vecinos de Punilla y Turistas que transitan ésta Ruta, la que se puede considerar como el corazón del corredor turístico de Punilla y de provincias vecinas; y cabe destacar que a la fecha y aún sin estar en temporada alta la Ruta 38 colapsa por exceso de tránsito, y eso nos da la pauta de que en breve a la llegada de la temporada se sobrepasan todos los límites.

Ya con fecha 11 de marzo de 2009, la Legislatura de la Pcia. de Córdoba, Declaración Nº D9626/09, Proyecto de Autoría de la Legisladora Alicia Narducci, aprobó la necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que se evalúe la factibilidad de la construcción de una tercera trocha, para aquellos tramos cuya topografía así lo amerite, en virtud de la elevada intensidad del tránsito circulante sobre la citada ruta.

Por lo cual consideramos indispensable que, por intermedio del OCCOVI, se realice el reacondicionamiento de la Demarcación correspondiente y desmalezamiento de las Banquinas, para ganar en seguridad en ésta Ruta, de manera que los conductores que por allí circulan puedan advertir con la seguridad y la anticipación necesaria la presencia de las Demarcaciones de advertencia, a fin de prevenir accidentes y evitar más muertes innecesarias.

Por lo antedicho, solicito a mis pares que acompañen el siguiente proyecto con su voto positivo.

Alicia Narducci.

PROYECTO DE DECLARACION – 06757/L/10 – TEXTO DEFINITIVO

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

DECLARA:

La necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, por intermedio del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), visto el marco del Decreto Nº 1615/08 y de la Resolución del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Nº 1095/08, que disponen la concesión por peaje del Corredor Vial Nº 4 “Ruta Nacional Nº 38”, para que se arbitren los medios correspondientes para el desmalezado de banquinas y la demarcación horizontal de la ruta a lo largo de toda su extensión en virtud de la peligrosidad que implica la poca visibilidad de las demarcaciones horizontales y las malezas en las banquinas que obstaculizan la visual.

-10-

A) CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. CONVENIO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES Y ADDENDA, ENTRE LA PROVINCIA Y LA EMPRESA DELTA S.A. APROBACIÓN.

B) CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. CONVENIO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES Y ADDENDA, ENTRE LA PROVINCIA Y LA EMPRESA CODI S.A. APROBACIÓN.

Tratamiento sobre tablas.

Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 6652 y 6653/E/2010, que cuentan con despacho de las Comisiones de Economía y de Obras Públicas, y se leerá a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Expte 6652/E/10

Expte 6653/E/10

Córdoba, 15 de diciembre de 2010.

**Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba**

Héctor Campana

S / D

De mi mayor consideración:

En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 6652/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el cual se aprueba el Convenio de Compraventa de Acciones y la Addenda al Convenio de Compraventa de acciones suscripto entre la Provincia y la Empresa Delta S. A., para la adquisición de la totalidad de las acciones que Delta S.A. posee en Caminos de las Sierras S.A. con sus consecuentes derechos patrimoniales y políticos, y 6653/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el cual se aprueba el Convenio de Compraventa de Acciones y la Addenda al Convenio de Compraventa de Acciones suscripto entre la Provincia y la Empresa Codi S.A., para la adquisición de la totalidad de las acciones que Codi S.A. posee en Caminos de las Sierras S.A. con sus consecuentes derechos patrimoniales y políticos.

Ponemos a consideración del Pleno estas normativas que cuentan con despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Haciendas; y de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía, y cuyos fundamentos brindará el legislador miembro informante.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Daniel Passerini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.

Conforme lo resuelto en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria estos proyectos serán tratados en conjunto con votación por separado en su oportunidad.

Tiene la palabra el legislador Frossasco.

Sr. Frossasco.- Señor presidente, señores legisladores: vamos a fundamentar los proyectos de ley 6652/E/10 y 6653/E/10, iniciados por el Poder Ejecutivo, mediante los cuales se propone la aprobación de respectivos convenios de compraventa de acciones y reestructuración de pasivos de dos de las accionistas de la empresa Caminos de Las Sierras S.A.

El proyecto 6652/E/10 se refiere a la aprobación del Convenio de Compraventa de Acciones suscripto entre la Provincia de Córdoba y la empresa Delta S.A. el día 7 de junio, ratificado por Decreto 926/10 y su addenda complementaria, de fecha 8 de octubre de 2010, ratificada por el Decreto 2098, del 8 de noviembre del mismo año.

Por su parte, por el proyecto 6653/E/10 se aprueba el Convenio de Compraventa de Acciones, suscripto entre la Provincia de Córdoba y la empresa Codi S.A. el día 29 de marzo de 2010, ratificado por medio del Decreto 2099, de fecha 8 de noviembre del mismo año.

Los referidos convenios y sus addendas establecen una serie de medidas y acciones destinadas al cumplimiento de las condiciones necesarias para producir la transferencia final de acciones entre los firmantes del acuerdo. Estos convenios siguen la misma línea de intencionalidad política iniciada con la compraventa de acciones que poseía, en Caminos de las Sierras S.A., la empresa Impregilo International Infraestructures N.V., cual es la estatización, tomando el control de la mencionada concesionaria, denominada Red de Accesos a Córdoba.

Lo anteriormente expresado queda de manifiesto en los objetivos previstos en la compraventa de acciones y reestructuración de pasivos –aprobada por medio del Decreto 165/10, ratificado por la Ley 9799 y su addenda, ratificada por el Decreto 1007/10, ratificado a su vez por la Ley 9809-, que marcaron las principales operaciones en ese sentido. Con aquella operatoria, la Provincia tomó el control del 90,52 por ciento del paquete accionario de la mencionada concesionaria.

En esta oportunidad, los objetivos que se persiguen son, por un lado, que la Provincia adquiera de Delta S.A. la totalidad de las acciones que ésta posee en Caminos de las Sierras S.A., que representan el 2,475 por ciento del capital y de los votos de la sociedad, con sus consecuentes derechos patrimoniales y políticos; por otro, adquirir de Codi S.A. la totalidad de las acciones que ésta posee en Caminos de las Sierras S.A., que representan el 6,257 por ciento del capital y de los votos de la sociedad, con sus consecuentes derechos patrimoniales y políticos.

Para el logro de estos objetivos, en los cuerpos de los referidos convenios se establece la totalidad de las disposiciones necesarias para su concreción, tales como: precio y modalidad de pago; condiciones de refinanciación y cancelación del pasivo de la sociedad; garantías a otorgar para asegurar su cumplimiento; condiciones suspensivas a las que se encuentra sujeta la efectivización del acuerdo; operaciones de cierre de la negociación; eventos de incumplimiento y demás formalidades propias de un acuerdo de este tipo, tales como la constitución de domicilio, reglas de resolución de controversias, distribución de gastos y honorarios, etcétera. Por su parte, el convenio complementario surge de la concreción de la transferencia del accionista principal, a posteriori de los plazos previstos y de las condiciones verificadas, que resultaban necesariamente verificables.

Completadas estas operatorias, el Gobierno de la Provincia toma el control accionario de Caminos de las Sierras S.A. en un equivalente al 99,252 por ciento del paquete, quedando un último socio –la empresa Carusso Construcciones– con un 0,748 por ciento, cumpliendo solamente el rol de socio parte a efectos de no dejar caer legalmente la sociedad, hasta tanto el Estado provincial decida las acciones a llevar adelante respecto de la continuidad de la empresa.

Señor presidente, señores legisladores: no hay mucho más por agregar sobre este tema que aborda los proyectos de ley en tratamiento ya que, como apuntara anteriormente, se han debatido intensamente en este recinto con motivo de la transferencia de las acciones del principal propietario, Impregilo International Infraestructures.

Por lo tanto, como miembro informante de la mayoría propongo su aprobación, adelantando el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Campana).– Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.

Sr. Pozzi.– Señor presidente: el señor Gobernador tiene un concepto equivocado de la estatización de los medios de producción, porque esto implica que la sociedad los posee a través de instituciones y estructuras y los utiliza para el bien común. Sin embargo, en los dos proyectos en tratamiento no se persigue el bien común sino beneficiar a empresas que, como dijimos al momento de tratar el convenio de compraventa de acciones, harán un traspaso de pasivos a la órbita del Estado. El bloque de la Unión Cívica Radical en aquel momento rechazó ese proyecto de ley, igual que lo hará en esta oportunidad, ya que no podemos ser partícipes de un nuevo ardid del oficialismo para licuar pasivos privados.

Estas nuevas addendas al convenio de compraventa de acciones y reestructuración de pasivos que el Poder Ejecutivo ha suscripto con las empresas Delta Sociedad Anónima y Codi Sociedad Anónima, a través de los Decretos 2098 y 2099, respectivamente, nos hablan de la improvisación con que el Gobierno se maneja en este tipo de convenios, ya que en menos de seis meses ingresaron a esta Legislatura el convenio y tres addendas.

Además de los argumentos expuestos al momento de tratarse el proyecto de ley de compraventa de acciones, nos preocupa el costo financiero que tendrá para la Provincia esta operación. Hablar hoy de un 9,5 por ciento en dólares implica un costo de 2.763.600 pesos más en el caso de Delta y de 2.007.000 pesos en el caso de Codi, pero si la Provincia no cumpliera con las condiciones de pago deberá pagar una multa diaria de 547 dólares en el caso de Delta y de 1382 dólares en el caso de Codi. Realmente, parece un contrato elaborado por las empresas sin participación de funcionario alguno por parte de la Provincia.

Señor presidente: creo que el actual Gobierno transita por una suerte de confusión entre lo que dice y lo que hace. En democracia el Gobernador debe proteger los derechos y libertades de los ciudadanos a los cuales debe su cargo y, en este sentido, el oficialismo hace poco por defender los derechos de los cordobeses y mucho por defender los derechos de empresas multinacionales.

Por estas razones, señor presidente, desde el bloque de la Unión Cívica Radical no vamos a acompañar los dos proyectos en tratamiento.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Campana).– Tiene la palabra el señor legislador Bischoff.

Sr. Bischoff.– Señor presidente: si no estuviera seguro de que es absolutamente imposible, creería que el miembro informante nos está tomando el pelo, pero como sé que es imposible, quiero decirle que realmente estoy estupefacto frente al tratamiento acelerado que tienen estas dos addendas, tratamiento que me hace tener interés en profundizar leyendo las

300 páginas que tengo frente a mí -y ustedes con mucha amabilidad van a tener la paciencia de escucharme-, 300 páginas que le servirían a la mayor parte de nuestros legisladores para enterarse de que nuevamente están condonando una deuda importantísima a dos empresas privadas que no han cumplido con los contratos que firmaron en su momento.

Me voy a apiadar de los taquígrafos y no voy a leer las 300 páginas que tengo ante mí, pero voy a decirles que nuevamente estamos frente a una estatización de la deuda privada. Caminos de las Sierras es una empresa privada a la cual se le han condonado deudas y se le ha permitido no efectuar las inversiones que tuvo comprometidas en el año 1997, cuando se firmó el convenio original; pero a la parte importante de la culpa la tuvo el último gobierno del doctor De la Sota, del cual nuestro actual Gobernador fue Ministro de Economía.

Desde nuestra perspectiva, no podemos permitir que los errores cometidos por anteriores gestiones sean pagados por los cordobeses. Jamás acompañaremos este tipo de contratos porque estaríamos perjudicando al erario público y a la sociedad, porque todo el proceso llevado adelante con la RAC es una muestra del Estado que nosotros no queremos y al que nos oponemos; un Estado que acuerda un contrato por demás beneficioso, garantizando la rentabilidad de una empresa privada; un Estado que decide por encima de sus representados y perdona inversiones extremadamente necesarias; un Estado que decide dejarse explotar por medio de intereses y multas de características usurarias, que le proporciona al vendedor una tasa de interés del 9,5 por ciento en dólares, y que asciende al 15 por ciento en caso de mora del pago por parte de la Provincia, más una multa de 6 millones de dólares por incumplimiento; un Estado que hoy nos muestra que prioriza el interés de una empresa antes que el de los ciudadanos.

El justificativo del convenio con Impregilo está determinado por el desistimiento por parte de la empresa de la demanda planteada ante el CIADI. ¿Cuál es el justificativo en este caso?, ¿dejar limpia la empresa para venderla y luego privatizarla nuevamente? Creemos que es un análisis razonable.

¿Por qué decidimos hacernos cargo de pagar por las acciones de una empresa que no hizo las inversiones requeridas, que por lo tanto tiene deudas adquiridas? Es un acto de absoluta irresponsabilidad de este Gobierno y con esto volvemos a afirmar que durante años y décadas vamos a tener afectada, en garantía de deudas propias y ajenas, a la Provincia, nuestra coparticipación provincial, la cual se compone de los impuestos que pagan todos los cordobeses permanentemente.

Señor presidente: este es un ejemplo de un excelente negocio, negocio que hará la empresa que compre la futura empresa saneada. Y es un ejemplo, como EPEC, de la inoperancia absoluta de esta gestión.

Nada más.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.

Sra. Rivero.- Señor presidente: brevemente, para no repetir las razones expuestas al momento de tratarse la compra de acciones de Impregilo, vamos a aprobar las addendas en tratamiento, no sin antes instar de manera expresa, como se hizo en aquella oportunidad, a la designación de un director obrero proveniente de la representación de los trabajadores de los peajes en el directorio de la empresa.

En esa instancia, damos nuestro voto positivo.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.

Sr. Maiocco.- Señor presidente: así como cuando se aprobó el primer convenio sobre la compra de acciones de Impregilo estuvimos en contra del proyecto, en igual sentido no vamos a acompañar los proyectos en tratamiento.

Nada más.

Sr. Presidente (Campana).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, constando los proyectos de dos artículos, siendo el segundo de forma, se ponen en consideración en general y particular en una misma votación.

En consideración el proyecto 6652/L/10, tal cual fuera despachado por las comisiones.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

En consideración el proyecto 6653/L/10, tal cual fuera despachado por las comisiones.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

PROYECTO DE LEY – 06652/E/10

MENSAJE

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que preside, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se solicita la aprobación del Convenio de Compraventa de Acciones suscripto entre la Provincia de Córdoba y la empresa Delta S.A. el día 07 de Junio, ratificado por Decreto 926/10 (B.O. 05-08-2010) y de su addenda complementaria de fecha 8 de Octubre de 2010 ratificada por Decreto 2098 de fecha 8 de noviembre de 2010 (B.O. 11-11-2010).

Por el citado Convenio y en su addenda se establecen una serie de medidas y acciones destinadas al cumplimiento de condiciones necesarias para producir la transferencia final de acciones entre los firmantes del acuerdo.

El convenio sub examine surge con motivo de la intensión del Gobierno de la Provincia de Córdoba de tomar mayor control accionario de la Concesionaria tendiente al cumplimiento de los objetivos previstos en la Compraventa de Acciones y Restructuración de pasivos aprobado por Decreto 165/10 ratificado por ley 9799 y su adenda ratificada por Decreto 1007/10 ratificado por Ley 9809.

Tiene por objeto que la Provincia adquiera de Delta S.A. la totalidad de las acciones que ésta posee en Caminos de las Sierras S.A., representativas del 2,475% (dos coma cuatrocientos setenta y cinco por ciento) del capital y de los votos de la sociedad, con sus consecuentes derechos patrimoniales y políticos.

A tal fin se establecen en el cuerpo del convenio la totalidad de las disposiciones necesarias para su concreción, tales como: precio y modalidad de pago; condiciones de refinanciación y cancelación del pasivo de la sociedad; garantías a otorgar para asegurar su cumplimiento; condiciones suspensivas a las que se encuentra sujeta la efectivización del acuerdo; operaciones de cierre de la negociación; eventos de incumplimiento y demás formalidades propias de un acuerdo de este tipo (constitución de domicilios, reglas de resolución de controversias, distribución de gastos y honorarios, etc.).

En tanto el convenio complementario surge de la concreción de la transferencia del accionista principal a posteriori de los plazos previstos y de condiciones verificadas que resultaban necesariamente revisables.

Por lo expuesto, y en ejercicio de la atribución conferida en el Artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, me permito solicitar la aprobación del presente Proyecto de Ley, si así lo estima oportuno.

Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.

Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el “Convenio de Compraventa de Acciones” y la “Addenda al Convenio de Compraventa de Acciones” suscripto entre la Provincia de Córdoba y la empresa Delta S.A. el día 7 de junio de 2010 y 8 de octubre de 2010, que tiene por objeto la adquisición por parte de la Provincia de la totalidad de las acciones que Delta S.A. posee en Caminos de las Sierras S.A., con sus consecuentes derechos patrimoniales y políticos.

El Convenio ratificado por Decreto 926/10 del 18 de junio de 2010 y la Addenda ratificada por Decreto 2098/10 de fecha 8 de noviembre de 2010, compuesto de treinta y siete (38) fojas útiles, forma parte la presente Ley como Anexo Único.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.

ANEXOS

6652 E 10

ANEXO I

Poder Ejecutivo
Córdoba



VISTO: El expediente N° 0451-055924/2009 – Cuerpos 1 al 5 mediante el cual el señor Ministro de Obras y Servicios Públicos eleva a Consideración del Poder Ejecutivo un convenio denominado COMPRAVENTA DE ACCIONES suscripto con la firma EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A.

Y CONSIDERANDO:

Que el referido convenio es el resultado de una propuesta realizada desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, luego de que la Comisión designada para dar cumplimiento a los objetivos de la Minuta de Entendimiento del mes de abril del año 2009, no alcanzara acuerdo alguno referido a la Renegociación del Contrato de Concesión de la RAC.

Que la Cláusula 5.7 del convenio, prevé en forma expresa la suscripción y publicación de un decreto ratificatorio a los fines de darle virtualidad jurídica.

Que asimismo es necesaria la realización, redacción y confección de instrumentos técnicos y jurídicos complementarios en los plazos previstos para tales efectos.

Que el Convenio de referencia prevé una serie de medidas y acciones a realizar por parte del Ministerio de Obras y Servicios Públicos necesarias para el cumplimiento del mismo.

Por ello y las disposiciones del Decreto N° 1846/93 y por la Legislatura Provincial mediante Ley N° 8.361, Decreto Provincial N° 1598/97, Decreto N° 1590/97, Ley 9078 y concordantes, y lo dictaminado por la Subsecretaría de Asuntos Legales del Ministerio de Obras y Servicios Públicos con el N° 238/10 y por Fiscalía de Estado bajo el N° 0121/10, casos similares

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

926

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

CONSTANZA MAYOR DE TILARD
JEFE DEPARTAMENTO DESPACHO
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MIGUEL A. GARAY
JEFE DE SECCION
Registros Oficiales y Expediente
FISCALIA DE ESTADO
ES COPIA

6652 E10



Artículo 1º.- RATIFÍCASE el Convenio de COMPRAVENTA DE ACCIONES de fecha 7 de junio de 2010 obrante a fs. 1471/1495 (Cuerpo 5), suscripto entre el señor Ministro de Obras y Servicios Públicos y la firma EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A., que como ANEXO I compuesto de VEINTICINCO (25) fojas integra el presente Decreto.

Artículo 2º.- FACÚLTASE al señor Ministro de Obras y Servicios Públicos a realizar las medidas y acciones que resulten necesarias a los fines de dar cumplimiento al convenio que se aprueba por el artículo 1º del presente decreto.

Artículo 3º.- ENCOMIÉNDASE, FACÚLTASE y AUTORIZÁSE al señor Ministro de Finanzas las siguientes acciones:

) Instrumente las medidas necesarias para garantizar la afectación en garantía de participación Federal en los términos y condiciones del convenio agregado en el NEXO I del presente Decreto.

Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministro de Obras y Servicios Públicos, Ministro de Finanzas y Fiscal de Estado.

Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, remítase al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, al Ministerio de Finanzas a sus efectos, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DECRETO

926



926
18-06-10

JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

CARLOS CASERIO
MINISTRO DE GOBIERNO

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO
PROVINCIA DE CÓRDOBA

CONSTANZA MAYOR DE TILLARD
Jefe de Departamento Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

DR. HUGO ATILIO TESTA
Ministro de Obras y Servicios Públicos

Ofc. Ministerio de Finanzas

MIGUEL A. GARAY
JEFE DE SECCION



Entre todos

6652110
Anexo I



Ministerio de
OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS



CONVENIO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES

Entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba, con domicilio en Boulevard Chacabuco 1300, Ciudad de Córdoba (la "Provincia" o el "Comprador"), representada en este acto por el Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos Ingeniero Hugo Atilio Testa (ad – referéndum del Poder Ejecutivo), por una parte, y por la otra Empresa Constructora Delta S.A. con domicilio en calle Duarte Quirós 1400 Local 225 de la ciudad de Córdoba, (el "Vendedor"), representada en este acto por Horacio José Agustín Álvarez Rivero en su carácter de Presidente, por la otra parte, en conjunto las "Partes", y

CONSIDERANDO:

- Que, con fecha 4 de diciembre de 1992, el Estado Nacional y la Provincia suscribieron un convenio mediante el cual la Nación delegó a la Provincia las facultades de adjudicación y administración del Contrato de Concesión de Obra Pública de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba. Dicho Convenio fue aprobado por el Poder Ejecutivo Provincial mediante Decreto N° 1846/93 y por la Legislatura Provincial mediante Ley N° 8.361.
- Que, posteriormente el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, de acuerdo a lo dispuesto por Decreto N° 1529/94, efectuó, mediante Resolución N° 149/94, el llamado a Concurso Nacional e Internacional para la calificación y selección de empresas para la construcción de mejoras, reparación, conservación, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración y explotación bajo el sistema de Concesión de Obra Pública por Peaje de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba (la "RAC").
- Que, con fecha 4 de septiembre de 1997, se suscribió en forma definitiva, entre la Provincia y Caminos de las Sierras S.A. ("CASISA"), el contrato por el cual se otorgó a esta última, en concesión de obra pública por peaje, la RAC, según fuera definida en la Resolución N° 1681/94 de la ex Dirección Provincial de Vialidad y delimitada en el Anexo Técnico Particular (el "Contrato de Concesión").
- Que dicho Contrato de Concesión fue aprobado mediante Decreto Provincial N° 1598/97 de fecha 11 de septiembre de 1997 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia con fecha 12 de septiembre de 1997.
- Que, mediante el dictado del Decreto N° 1590/97, el Poder Ejecutivo de la Provincia aprobó el Reglamento Administrativo de las Prestaciones, la Fiscalización y Control y Protección del Usuario y los Bienes del Estado – Marco Regulatorio de la RAC.
- Que el 12 de noviembre de 1997, mediante acta, de la misma fecha, se hizo entrega a CASISA de las rutas que comprenden la RAC, a partir de lo cual se comenzaron las Obras de Primera Etapa.

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

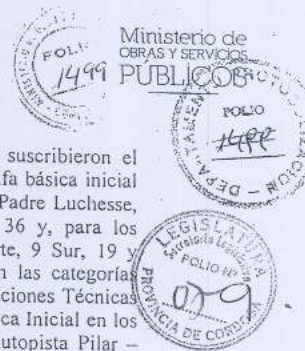
[Handwritten signatures]
Sra. MARIA JOSE ROMERO

MIGUEL A. GARAY
Jefe de Sección
Fiscalía de Estado
ES COPIA

926



Enretodos 6652 110



- g) Que el 20 de enero del año 2000, la Provincia y CASISA suscribieron el Convenio N° 38 por el cual se acordó reducir el valor de la tarifa básica inicial en las rutas: RP N° 5, RN N° 20-38, RP E-55, RP E-53; Av. Padre Luchesse, Camino Intermunicipal Villa Allende – Unquillo y RN N° 36 y, para los residentes dentro de la RAC, en las Rutas Nacionales 9 Norte, 9 Sur, 19 y Autopista Pilar – Córdoba de los vehículos comprendidos en las categorías definidas en el punto 29.3.1. y 29.3.2. del Anexo de Especificaciones Técnicas Generales del Contrato de Concesión, y mantener la Tarifa Básica Inicial en los corredores de las Rutas Nacional 9 Norte, Nacional 9 Sur, Autopista Pilar – Córdoba y Nacional 19 para el resto de los usuarios.
- h) Que, en compensación de esa reducción tarifaria, se acordó incorporar la Avenida Circunvalación —Ruta Nacional A 019— dentro del sistema de Cobro de Peaje, como así también a las localidades de La Calera (Dpto. Colón) y Montecristo (Dpto. Río Primero).
- i) Que el 4 de octubre de 2000 se suscribió, entre el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia y CASISA, el Convenio Complementario al Convenio N° 38, que fue aprobado por el Poder Ejecutivo de la Provincia mediante Decreto N° 1851/00, por el cual se acordó la realización de obras por parte de la Concesionaria no previstas en el anteproyecto técnico definitivo, el adelantamiento de obras previstas detalladas en anexo al mencionado convenio complementario y el diferimiento de la terminación y habilitación de algunas obras de Primera Etapa.
- j) Que en el Convenio celebrado en el mes de abril de 2003 entre la Provincia y CASISA se dejó indicado “que el cobro del peaje en la Avda. de Circunvalación no ha tenido adecuada receptividad por parte de la opinión pública cordobesa, razón por la cual el Poder Ejecutivo Provincial ha llevado a cabo gestiones ante el Gobierno Nacional tendientes a compensar a la Concesionaria los perjuicios derivados de la reducción de la tarifa, a través del Fondo Fiduciario creado por los Decretos N° 802/2001 y N° 976/2001 del Poder Ejecutivo Nacional”, resolviéndose, en consecuencia, fijar la compensación referida en la suma mensual de \$ 1.185.361 (pesos un millón ciento ochenta y cinco mil trescientos sesenta y uno), para el período que corría desde el mes de diciembre de 2002 al mes de octubre de 2003, como así también, al vencimiento del período (octubre 2003), “reexaminar la distorsión provocada por la aludida reducción de las tarifas de peaje, a los efectos del mantenimiento de la ecuación económico-financiera y del flujo de caja de la Concesionaria, según lo previsto en la Cláusula Séptima del Convenio 38.”
- k) Que la Provincia, mediante el dictado del Decreto N° 2656/01, del 12 de noviembre de 2001, declaró “la emergencia económica – financiera y administrativa del sector público”, que comprendía “la ejecución de los contratos y prestación de servicios relativos al sector”, lo cual fue ratificado mediante la sanción de la Ley N° 9.078, por lo cual el Contrato de Concesión de la RAC se consideró sujeto a renegociación.

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despeño
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despeño
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

MICHEL A. GARAY
JEFE DE SECCION
Registro de Oficios y Expedientes
FISCALIA DE ESTADO
ES COPIA
LEY 926



Entretodos

6652 E10



10



- l) Que CASISA, mediante nota al Gobernador de fecha 6 de marzo de 2002, ampliada a requerimiento del ERSEP, por notas CS/303/ER/02 del 7 de junio de 2002 y CS/376/ER/02 del 15 de julio de 2002, reclamó la recomposición de la ecuación económico financiera del Contrato de Concesión, en procura de que se le compensen los perjuicios que dijo haber soportado y seguir soportando, a raíz de: (1) la imposibilidad de recuperar las inversiones y hacer frente a los gastos de operación y mantenimiento con motivo de la devaluación del peso y el incrementos de sus costos operado a partir de enero de 2002, como consecuencia de la pesificación y congelamiento de la tarifa que se le impuso; (2) la ejecución de obras adicionales no previstas en el Anteproyecto Técnico Definitivo del Contrato de Concesión, que debió ejecutar a solicitud de la Provincia; (3) la falta de compensación de rebaja de la tarifa establecida en el Convenio N°38, a raíz de la no incorporación al sistema de cobro de peaje de la Avda. de Circunvalación; (4) la demora en la habilitación de las obras de primera etapa; (5) la incidencia de impuestos sobrevinientes no previstos en la oferta; entre otros.
- m) Que, con el dictado del Decreto Provincial N° 530/02, el Poder Ejecutivo de la Provincia estableció el inicio efectivo de la renegociación del Contrato de Concesión de la RAC, fundado en “que la devaluación del signo monetario decidida por el Gobierno Nacional torna imprescindible reglar la reestructuración de las obligaciones en curso de ejecución surgidas de los contratos que tengan por objeto la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos celebrados por el sector público provincial, en la medida en que la nueva paridad cambiaria haya afectado la economía del contrato”, como así también en “que la señalada situación y el impacto sobreviniente en la ecuación de los contratos, justifica arbitrar mecanismos compensatorios que permitan un restablecimiento equitativo de las prestaciones pendientes de cumplimiento”.
- n) Que, a tal fin, por Resolución N° 148/02 del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia, se dispuso requerir la asistencia del Ente Regulador de Servicios Públicos (el “ERSEP”) a los fines de cumplimentar con las disposiciones previstas en el Decreto N° 530/02.
- o) Que, por Resoluciones N° 581/02 y N° 53/03 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, convalidadas por Decreto N° 90/04, se ampliaron los plazos para la renegociación pese a lo cual, dentro de los nuevos plazos previstos, no se encontraron soluciones adecuadas para establecer un nuevo marco contractual.
- p) Que CASISA reiteró el 24 de junio de 2005, el 12 de abril de 2006 y el 07 de julio de 2006, su solicitud de recomposición de la ecuación económico financiera del Contrato de Concesión.
- q) Que CASISA intimó a la Provincia el 17 de abril de 2007 a que, en el plazo de cuarenta y cinco días, adoptara medidas que evidenciaran el compromiso de

Sra. MARTA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

MIGUEL A. BARAY
JEFE DE SECCION
DEPARTAMENTO PROTECCION
FISCALIA DE ESTADO
ES COPIA
LEV. 926



Entre todos

6652 E10



Ministerio de
OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS



restablecer el equilibrio de la ecuación económico financiera del Contrato de Concesión, bajo apercibimiento de rescindir el mismo.

- r) Que la Provincia y CASISA suscribieron el 1º de junio de 2007, una Minuta de Entendimiento a fin de constituir una Comisión Conjunta para la elaboración de un Acta de Renegociación a ser suscripta y elevada a la Autoridad de Aplicación antes del 15 de setiembre de 2007.
- s) Que el 18 de septiembre de 2007 CASISA comunicó a la Provincia, que atento al vencimiento del plazo contenido en la Minuta de Entendimiento, se ponían nuevamente en curso los plazos de la intimación anteriormente formulada bajo apercibimiento de rescisión por culpa del Concedente.
- t) Que el 28 de noviembre de 2007 CASISA solicitó la rescisión del Contrato de Concesión por culpa del Concedente, sosteniendo que no habían sido reconocidos los reclamos formulados desde el año 2002 para el reestablecimiento de la ecuación económico-financiera del Contrato de Concesión.
- u) Que el 28 de junio de 2008 se dictó el Decreto N° 1010/08 por el cual la Provincia rechazó la solicitud de CASISA por considerar que resultaba sustancialmente improcedente.
- v) Que CASISA interpuso el 11 de julio de 2008 un recurso de reconsideración contra lo dispuesto por el Decreto N° 1010/08.
- w) Que el 17 de noviembre de 2008 CASISA dio por denegado tácitamente el recurso de reconsideración interpuesto contra el Decreto N° 1010/08 e intimó a la Provincia para que, antes del 3 de diciembre de 2008, se hiciera cargo de la Concesión.
- x) Que el 28 de noviembre de 2008 la Provincia, alegando tener por finalidad mitigar el efecto del incremento de costos de operación y mantenimiento del sistema, incluyendo las demandas de ajuste salarial y poder garantizar la prestación del servicio, solicitó al ERSeP la convocatoria a Audiencia Pública para implementar un aumento tarifario inmediato y establecer una condición de equilibrio operativo durante un ulterior período de renegociación del Contrato de Concesión.
- y) Que el 15 de diciembre de 2008 se celebró, sin la intervención de CASISA, la Audiencia Pública dispuesta por Resolución ERSeP N° 3855/08, en el marco de la solicitud formulada por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, a fin de dar tratamiento al aumento tarifario de aplicación en la RAC bajo concesión de CASISA.
- z) Que el 18 de diciembre de 2008 CASISA solicitó ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 13ª Nominación, Soc. 1 – Sec. la apertura del Concurso Preventivo de la Sociedad (el “Concurso Preventivo de CASISA”).

ra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

4

4

ANEXO

MIGUEL A. GARAY
JEFE DE SECCION
Registros Unificales y Expediente
FISCALIA DE ESTADO
ES COPIA

11



ra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL



Entretodos

6652 T10



- aa) Que el 29 de diciembre de 2008 la Provincia invitó a CASISA a reiniciar el proceso de renegociación contractual para lograr la recomposición y fortalecimiento de un vínculo de largo plazo, que implicara poder materializar un acuerdo que contemple los intereses de cada parte, genere un esquema sustentable de prestación de los servicios objeto de la concesión y asegure la realización de las obras de mantenimiento, adecuación y ampliación de la RAC.
- bb) Que el 15 de enero de 2009 CASISA cursó respuesta a dicha invitación, fijando su posición con referencia a la misma.
- cc) Que el 30 de diciembre de 2008 el ERSeP, por Resolución N° 4210/08, consideró adecuados los valores tarifarios propuestos por la Provincia a fin de lograr restituir el equilibrio operativo de corto plazo de la Concesión.
- dd) Que el 30 de diciembre de 2008 el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 13° Nominación, Soc.1 – Sec. mediante Sentencia N° 845, decretó la apertura del Concurso Preventivo de CASISA, fijando el plazo para el cual se presentan los pedidos de verificación y títulos justificativos de créditos hasta el del 1° de abril de 2009.
- ee) Que el 15 de enero de 2009 se dictó el Decreto N° 34/09 por el cual se aprobó el incremento tarifario y el nuevo cuadro tarifario para los años 2009 y 2010 aplicable a la RAC, habiendo CASISA fijado su posición por notas CS/4663/ER/08, del 11 de diciembre de 2008; CS/4679/ER/08, del 30 de diciembre de 2008; CS/4692/ER/09 y CS/1830/00/09, ambas del 23 de enero de 2009; y CS/4719/ER/09, del 20 de febrero de 2009.
- ff) Que con fecha 23 de enero de 2009 CASISA presentó un recurso de reconsideración contra los artículos 2° y 3° del Decreto N° 34/09, por considerar que su aplicación conlleva una profundización del quiebre de la ecuación económico financiera del Contrato de Concesión y una mayor afectación de su situación patrimonial.
- gg) Que con fecha 25 de enero de 2009 comenzó la aplicación efectiva del cobro del peaje por parte de CASISA a los valores básicos de \$1,50 (pesos uno con 50/100) para el corredor turístico y de \$3,00 (pesos tres) para el corredor productivo, habiendo CASISA fijado su posición al respecto en las notas citadas en el “Considerando” (ee).
- hh) Que con fecha 27 de mayo de 2009, CASISA presentó demanda ante la justicia contencioso administrativa, solicitando la nulidad del Decreto N° 1010/08 y la rescisión del Contrato de Concesión, y, asimismo, que se obligue a la Provincia a recibir la Concesión.
- ii) Que con fecha 23 de abril de 2009 el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia y CASISA suscribieron una Minuta de Entendimiento para impulsar la renegociación del Contrato de Concesión (la “Minuta de Entendimiento”), por la que se conformó una “Comisión Conjunta de

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

MICHAEL A. GARAY
JEFE DE SECCION
Registros Oficiales y Expediente
FISCALIA DE ESTADO
ES COPIA



Entre todos

6652 E10



Ministerio de
OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS



Renegociación del Contrato RAC” que tenía por objetivo “la elaboración y suscripción de un ‘ACTA DE RENEGOCIACIÓN DEFINITIVA’ por la que se modifiquen los términos y condiciones del Contrato de Concesión de modo tal que se posibilite alcanzar una situación de equilibrio contractual sustentable en el largo plazo y que se contemple la recuperación tanto de los costos de operación y mantenimiento así como de las inversiones realizadas por EL CONCESIONARIO, permitiendo a éste la obtención de un margen razonable de beneficio”.

jj) Que, conforme la cláusula 4ª de la referida Minuta de Entendimiento, el acuerdo alcanzado en el acta indicada en el considerando anterior entraría en vigencia antes del 31 de agosto de 2009.

kk) Que mediante sucesivas prórrogas aprobadas por Decreto N° 1265/09 del 7 de septiembre de 2009, Decreto N° 1419/09 del 5 de octubre de 2009, Decreto N° 1780/09 del 9 de diciembre de 2009 y Decreto N° 32/10 del 13 de enero de 2010, se extendió el plazo originariamente previsto en la cláusula 4ª de la referida Minuta para el 31 de agosto del 2009, al 27 de enero de 2010.

ll) Que el Vendedor es legítimo titular de 2.969.856 (dos millones novecientos sesenta y nueve mil ochocientos cincuenta y seis) acciones de CASISA clase C, ordinarias, nominativas no endosables de valor nominal \$1 y con derecho a un voto cada una, que representan el 2,475% (dos coma cuatrocientos setenta y cinco por ciento) del capital suscrito y emitido de CASISA. El Vendedor ostenta el derecho real de dominio de las Acciones referenciadas, salvo por la cantidad de 890.956 (ochocientos noventa mil novecientos cincuenta y seis) acciones cuya propiedad fiduciaria ha sido transferida a favor del BBVA Francés S.A., de conformidad con lo previsto en la cláusula 5.6 del Contrato de Concesión y el Contrato de Fideicomiso y Colocación.

rr) Que el ERSeP verificó en el Concurso Preventivo de CASISA, un crédito por un monto equivalente a \$ 1.305.727,78 (pesos un millón trescientos cinco mil setecientos veintisiete con 78/100) (el “Crédito ERSeP”), el cual ha sido motivo de un planteo de revisión por parte de CASISA.

ss) Que el Instituto de Investigación de Servicios Públicos e Infraestructura de la Universidad Nacional de Córdoba, según convenio suscripto con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, ha desarrollado el “Estudio Técnico Económico de la Concesión de la Red de Accesos a Córdoba (RAC)” (el “Estudio Técnico de la Universidad de Córdoba”) y como conclusión del mismo ha emitido el Informe Final de fecha 28 de noviembre de 2008, en el que ha estimado que la Base de Capital de la Concesión a ser tomada en cuenta a efectos de la renegociación del Contrato de Concesión, asciende al monto de \$ 416.592.000 (pesos cuatrocientos dieciséis millones quinientos noventa y dos mil).

tt) Que CASISA, en su nota presentada a la Provincia el 7 de julio de 2009, ha puntualizado los errores que, a su entender, contiene la estimación del Estudio

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

[Handwritten signatures and initials]

MIGUEL A. GARAY
DEFENDIDO FISCAL
FISCALIA DE ESTADO
ES COPIA FIEL



Entre todos

6852 110



Ministerio de OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Técnico de la Universidad de Córdoba en relación a la base de capital de la concesión, a raíz de no tomar en cuenta los montos reales de inversión, ni las obras adicionales, ni el efecto financiero del IVA; y expuso, por su parte, que, corrigiendo los referidos errores, el monto de inversión a recuperar por CASISA sería de \$ 816.266.000 (pesos ochocientos dieciséis millones doscientos sesenta y seis mil) guarismo que se elevaría aproximadamente a los \$ 1.800.000.000 (pesos mil ochocientos millones) en caso de aplicarse la Tasa Interna de Retorno de la oferta, es decir, del 15,31% (quince coma treinta y uno por ciento), en lugar de la del 7,24% (siete coma veinticuatro por ciento) aplicada por la Universidad Nacional de Córdoba.

uu) Que en el Informe General del síndico presentado en el Concurso Preventivo de CASISA se atribuye a los activos de CASISA un valor de \$1.685.426.749 (pesos mil seiscientos ochenta y cinco millones cuatrocientos veintiséis mil setecientos cuarenta y nueve).

vv) Que según el Informe General del Concurso Preventivo de CASISA elaborado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39, inc. 3, de la Ley Nº 25.589, la composición del pasivo, que incluye también como previsión, detalle de los créditos que CASISA denunciara en su presentación y que se hubieren presentado a verificar, así como los demás que resulten de la contabilidad o de otros elementos verosímiles, asciende a la suma de \$ 484.084.703,80 (pesos cuatrocientos ochenta y cuatro millones ochenta y cuatro mil setecientos tres con 80/100).

ww) Que el Comprador y CASISA no han podido hasta el presente, y pese a las sucesivas ampliaciones de plazo acordadas por ellas, arribar a un acuerdo con relación a la renegociación definitiva del Contrato de Concesión en el marco de la Minuta de Entendimiento mencionada en el "considerando" (ii).

xx) Que mediante el Convenio de Compra de Acciones y Reestructuración de Pasivos celebrado entre la Provincia e Impregilo International Infrastructures N.V (en adelante, "Impregilo International") con fecha 3 de febrero de 2010 (el "Convenio de Compra de Acciones y Reestructuración de Pasivos"), Impregilo International, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas antes del 30 de mayo de 2010 y a que cumplidas éstas, se lleven a cabo el 25 de junio de 2010 todos los actos previstos para el Cierre, transfirió a favor de la Provincia la totalidad de su participación accionaria (90,52%) en CASISA, conformada por 108.624.358 (ciento ocho millones seiscientos veinticuatro mil trescientos cincuenta y ocho) acciones clase A ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal un Peso (\$ 1) cada una y con derecho a un voto por acción, representativas del 90,52% (noventa coma cincuenta y dos por ciento) del capital y de los votos de la Sociedad, con sus consecuentes derechos patrimoniales y políticos, incluyendo entre estas acciones las que fueron transferidas fiduciariamente a favor del BBVA Banco Francés S.A. de conformidad con lo previsto en la cláusula 5.6. del Contrato de Concesión y en el Contrato de Fideicomiso y Colocación (las "Acciones Fideicomitidas"), respecto de las cuales Impregilo International tiene (a) el

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefe de División Despatch
Módulo de Datos y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

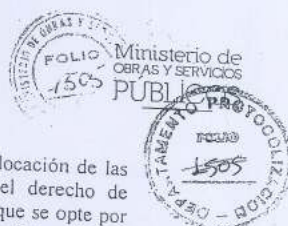
Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefe de División Despatch
Módulo de Datos y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

7
ANEXO
MIGUEL A. GARAY
JEFE DE SECCION
Registros Civiles 02 y Espectáculos



Entre todos

6652 E10



15



derecho a percibir su respectiva porción del producido de la colocación de las Acciones Fideicomitadas resultante de la oferta pública y/o el derecho de recuperar para sí dichas Acciones Fideicomitadas en el supuesto que se opte por incrementar el capital social de CASISA a fin de destinarlo a la oferta pública, según lo establecido en la Cláusula 7.6 del Contrato de Fideicomiso y Colocación y en la Cláusula 5.7 del Contrato de Concesión, y (b) el derecho a percibir los dividendos en efectivo correspondientes a dichas Acciones Fideicomitadas y cualquier otra distribución en efectivo que hiciere CASISA en relación a las mismas, en adelante, la "Transferencia Accionaria de Impregilo".

yy) El precio que las Partes del Convenio de Compraventa de Acciones y reestructuración de Pasivos asignaron a la Transferencia Accionaria de Impregilo, fue de US\$ 20.000.000 (dólares estadounidenses veinte millones), a ser pagado de la siguiente manera: (i) US\$ 100.000 (dólares estadounidenses cien mil) en el momento del Cierre que debería operarse el 25 de junio de 2010 si antes del 30 de mayo de 2010 se cumplieran las condiciones suspensivas a las que sujeto dicho Cierre; y (ii) el saldo de US\$ 19.900.000 (dólares estadounidenses diecinueve millones novecientos mil), en 83 (ochenta y tres) cuotas mensuales, consecutivas e iguales que incluyen intereses a la tasa del 9,5% anual, de US\$ 328.442,00 (dólares estadounidenses trescientos veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y dos).

zz) El pago total del referido precio de compra y sus intereses, de la Transferencia Accionaria de Impregilo, fue garantizado mediante cesión a Impregilo International en el acto del Cierre, de los derechos de cobro de la Provincia de la coparticipación federal de impuestos nacionales que le corresponda a la Provincia.

aaa) Que el Comprador considera que las referidas condiciones de la Transferencia Accionaria de Impregilo, aplicadas en proporción a su participación accionaria en CASISA, resultan adecuadas a los fines de la transferencia de sus acciones en CASISA a la Provincia.

bbb) Que, frente a todo lo expuesto en los párrafos precedentes, el Vendedor está conteste en transferir sus acciones a la Provincia, en análogas condiciones que las acordadas por ésta en la Transferencia Accionaria de Impregilo, para el caso que se opere el Cierre del Convenio de Compraventa de Acciones y reestructuración de Pasivos previsto en el mismo para el 25 de junio de 2010.

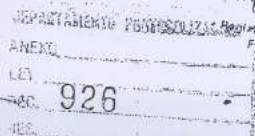
Por ello y en atención a los considerandos expuestos, las parten acuerdan en celebrar el presente:

CONVENIO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES (el "Convenio")

TÍTULO I

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

MICHAEL A. GARAY
JEFE DE SECCION
Registros Civiles y Expedientes
FISCALIA DE ESTADO
ES COPIA





Entre todos

6652E10



Ministerio de OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN

1.1 Definiciones: Tal como se utilizan bajo el presente Convenio y sin perjuicio de otras definiciones contenidas en el presente, los siguientes términos tendrán el significado que se detalla a continuación:

“**Acciones**” significa 2.969.856 (dos millones novecientos sesenta y nueve mil ochocientos cincuenta y seis) acciones clase C ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal un Peso (\$ 1) cada una y con derecho a un voto por acción, de titularidad de Empresa Constructora Delta S.A., representativas del 2.475% (dos coma cuatrocientos setenta y cinco por ciento) del capital y de los votos de la Sociedad, con sus consecuentes derechos patrimoniales y políticos. Se encuentran comprendidas entre estas acciones las que fueron transferidas fiduciariamente a favor del BBVA Banco Francés S.A. de conformidad con lo previsto en la cláusula 5.6. del Contrato de Concesión y en el Contrato de Fideicomiso y Colocación (las “**Acciones Fideicomitidas**”), respecto de las cuales el Vendedor tiene (a) el derecho a percibir su respectiva porción del producido de la colocación de las Acciones Fideicomitidas resultante de la oferta pública y/o el derecho de recuperar para sí dichas Acciones Fideicomitidas en el supuesto que se opte por incrementar el capital social de CASISA a fin de destinarlo a la oferta pública, según lo establecido en la Cláusula 7.6 del Contrato de Fideicomiso y Colocación y en la Cláusula 5.7 del Contrato de Concesión, y (b) el derecho a percibir los dividendos en efectivo correspondientes a dichas Acciones Fideicomitidas y cualquier otra distribución en efectivo que hiciere CASISA en relación a las mismas, según lo dispone la cláusula 4.3 del Contrato de Fideicomiso y Colocación y en la cláusula 5.6 del Contrato de Concesión.

“**CASISA**” o la “**Sociedad**” tiene el significado asignado en los Considerandos.

“**Cierre**” significa el conjunto de operaciones previstas en el Artículo VII para que se produzca la transferencia de las Acciones al Comprador y se efectúen los pagos previstos con afectación al Precio del Compra. La fecha en que ello ocurra se denomina “**Fecha de Cierre**”.

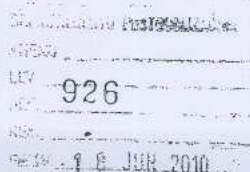
“**Cierre del Convenio de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos**”, significa el conjunto de operaciones previstas en el Artículo VIII del Convenio de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos, para que se produzca la transferencia de las acciones de Impregilo International al Comprador. La fecha en que ello ocurra está prevista para el 25 de junio de 2010.

“**Cláusula Penal sobre el saldo de Precio de Compra**” significa la cláusula penal estipulada en el Artículo 3.4.

“**Concurso Preventivo de CASISA**” significa el proceso concursal iniciado conforme se describe en los “Considerandos” (z) y (dd).

“**Convenio**” significa el presente Convenio.

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL



MIGUEL A. GARAY
JEFE DE SECCION
Registros Oficinas y Expedientes
FISCALIA DE ESTADO
ES COPIA



Entretodos

6652E10



“Convenio de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos” es el Convenio de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos celebrado entre la Provincia e Impregilo International Infrastructures N.V con fecha 3 de febrero de 2010, mencionado en el “Considerando” (xx).

“Contrato de Concesión” es el instrumento mencionado en el “Considerando” (c).

“Contrato de Fideicomiso y Colocación” Es el contrato suscripto con fecha 7 de agosto de 1998 entre (a) Banco Río de la Plata S.A. como Banco Designado, (b) Banco Río de la Plata S.A. y Galicia Capital Markets S.A. como los colocadores, (c) José Cartellone Construcciones Civiles S.A., Impregilo S.p.A., IGLYS S.A., Codi S.A., Empresas Constructora Delta S.A., y Carlos A. Caruso y Cía. S.A.C. e l. como los Socios, y (d) CASISA, en virtud del cual los referidos Socios, transfirieron a favor del Banco Río de la Plata, la propiedad fiduciaria de las acciones ordinarias emitidas por CASISA que eran de su propiedad, representativas del 30% del capital social y de los votos de CASISA; contrato que fuera luego modificado por (i) el Acuerdo Modificadorio al Contrato de Fideicomiso y Colocación suscripto con fecha 16 de agosto de 2001 por el cual se reemplazó a Banco Río de la Plata S.A. en su carácter de Banco Designado, por BBVA Banco Francés S.A., (ii) el Segundo Acuerdo Modificadorio de fecha 6 de septiembre de 2001, por el cual se deja constancia del reemplazo de José Cartellone Construcciones Civiles S.A. por Banco Río de la Plata S.A., Banco Galicia y Buenos Aires S.A. e Impregilo S.p.A. en carácter de accionistas de CASISA y titulares de las acciones de aquél cedidas en fideicomiso; (iii) el Tercer Acuerdo Modificadorio de fecha 10 de septiembre de 2003, por el cual se adecua el Contrato de Fideicomiso y Colocación al nuevo plazo dispuesto por la Provincia para la realización de la oferta pública de las acciones fideicomitidas; (iv) el Cuarto Acuerdo Modificadorio de fecha 13 de septiembre de 2004, por el cual se deja constancia del reemplazo de Banco Río de la Plata S.A. y Banco Galicia y Buenos Aires S.A. por Impregilo International Infrastructures N.V. en carácter de accionista de CASISA y titular de las acciones de aquéllos cedidas en fideicomiso; y (v) el Quinto Acuerdo Modificadorio de fecha 28 de octubre de 2005, por el cual se deja constancia del reemplazo de Impregilo S.p.A. e IGLYS S.A. por Impregilo International Infrastructures N.V. en carácter de accionista de CASISA y titular de las acciones de aquéllos cedidas en fideicomiso.

“Coparticipación Federal” significa la coparticipación federal de impuestos nacionales que le corresponda percibir a la Provincia de acuerdo a la normativa vigente cuyos derechos de cobro serán cedidos fiduciariamente al Fideicomiso Financiero en las condiciones establecidas en el presente Convenio.

“Día Hábil” significa cualquier día que no fuere sábado, domingo, feriado, o día no laborable en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

“Evento de Incumplimiento” tendrá el significado asignado en el Artículo 8.3.

“Fideicomiso Financiero del Crédito Ex - Galicia” es el Fideicomiso Financiero por el que actualmente se encuentra afectado el 35% (treinta y cinco por ciento) de la cobranza de CASISA, al pago del crédito del Banco Galicia de Galicia y Buenos Aires

10
MADIA INSC. DAMELO
MIGUEL A. GARAY
JEFE DE SECCION
FISCALIA DE ESTADO



Entretodos

6652E10



Ministerio de
OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS



18



S.A. equivalente a la suma de \$ 54.528.593,36 (pesos cincuenta y cuatro millones quinientos veintiocho mil quinientos noventa y tres con 36/100) que fuera cedido a IGLYS S.A.

“Fideicomiso Financiero” es el “Fideicomiso Financiero del Crédito Ex - Galicia” según se lo modifique o reemplace, manteniendo al mismo Fiduciario.

“Fiduciario” es el fiduciario del Fideicomiso Financiero, actualmente el Banco Santander Río, o quien lo reemplace.

“Garantía de la Provincia” significa la garantía previstas en el Artículo 3.5.

“Gravamen” significa cualquier gravamen, embargo, hipoteca, prenda, usufructo, servidumbre ya sea que hayan sido incurridos voluntariamente, con excepción del fideicomiso relacionado en el “Considerando” (mm), de la prenda a favor de Impregilo y de cualquier otro que las partes acuerden.

“Impuestos” significa cualquier impuesto, tasa o carga a pagarse al Estado Nacional de la República Argentina, o de cualquiera de sus Provincias, Municipios u otras subdivisiones políticas o entidades.

“Minuta de Entendimiento” es el instrumento mencionado en el “Considerando” (ii).

“Nuevo Modelo Regulatorio” significa el nuevo esquema económico-financiero del Contrato de Concesión a ser acordado antes del vencimiento del Plazo de Cumplimiento de las Condiciones Suspensivas, entre CASISA y la Provincia, por el que se prevea que los ingresos globales de CASISA se mantendrán actualizados en función de los costos integrales de explotación de la RAC, incluyendo en los mismos la amortización de los pasivos reestructurados de CASISA, como mínimo hasta el repago total del Crédito Reestructurado de Impregilo International.

“Obligaciones Condicionales de Pago” son, (i) en su caso, la Cláusula Penal sobre el saldo del Precio de Compra; y (ii) en su caso, las costas que deba soportar la Provincia.

“Obligaciones de Pago” son, conjuntamente, las obligaciones de pago de: (i) el Precio de Compra y (ii) los intereses compensatorios y/o moratorios y demás accesorios que el mismo devengue.

“Parte” significa, en forma individual, el Vendedor o el Comprador.

“Partes” significa, en forma conjunta, el Vendedor y la Provincia.

“Precio de Compra” tiene el significado asignado en el Artículo 3.1.

Interpretación:

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

MIGUEL A. GARAY
JEFE DE SECCION
Registros, Actas y Expedientes
FISCALIA DE ESTADO
ES COPIA

926

11

15-12-2010



Entre todos

000241



Ministerio de OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



- (a) Salvo indicación en contrario, las referencias que se hicieren a un Considerando, Título o a Artículo, se referirán a un Considerando, Título o Artículo del Convenio.
- (b) El encabezamiento o el sub-encabezamiento de los Títulos o Artículos se insertan como referencia y no podrán afectar la interpretación.
- (c) Cuando el contexto así lo admitiere, cualquier referencia realizada en singular incluirá también al plural, y cualquier referencia realizada en plural incluirá también el singular, como así también cualquier referencia realizada a un género incluirá todos los géneros.
- (d) Las referencias que se realizaren a días o fechas (incluyendo en forma enunciativa la Fecha de Cierre) que no coincidan con un Día Hábil serán interpretadas como referencias al día o fecha inmediatamente posterior que fuere un Día Hábil.
- (e) La palabra “incluyendo” (o sus derivados, v. gr. “incluye”) siempre será interpretada, salvo indicación expresa en contrario, de manera que significará “incluyendo en forma enunciativa”.
- (f) En el cálculo de los periodos de tiempo contados desde una fecha determinada hasta otra fecha determinada, la palabra “desde” significa “desde pero excluyendo” y las palabras “hasta” y “a” significan “hasta e incluyendo”.
- (g) El término “días” significará días calendario.



TÍTULO II

OBJETO

2.1 El presente Convenio tiene por objeto que, una vez cumplidas las condiciones establecidas en el Título VI del presente Convenio: (i) el Vendedor transfiera las Acciones al Comprador, y éste adquiera las mismas del Vendedor, libres de todo Gravamen, contando para ello con la garantía de pago a otorgar por la Provincia en las condiciones estipuladas en el presente.

TÍTULO III

PRECIO DE COMPRA DE LAS ACCIONES

3.1 El precio que las Partes de la Compraventa asignan por la transferencia de las Acciones (el “Precio de Compra”), es de US\$ 546.812 (dólares estadounidenses un

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

MIGUEL GARAY
Jefe de Sección
Registro de Planes y Expedientes
FISCALIA DE ESTADO
ES COPIA



Entre todos

6652 E 10



Ministerio de OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



20



quinientos cuarenta y seis mil ochocientos doce). Este importe será pagado por el Comprador al Vendedor de la siguiente manera: (i) US\$ 2.374 (dólares estadounidenses seis mil novecientos doce) en el momento del Cierre; y (ii) el saldo de US\$ 544.438 (dólares estadounidenses un millón trescientos setenta y cinco mil quinientos cuarenta) en 83 (ochenta y tres) cuotas mensuales de US\$ 8.980 (dólares estadounidenses ocho mil novecientos ochenta). Dichas cuotas serán mensuales, consecutivas e iguales, e incluyen capital e intereses. La primera de ellas vencerá el día 28 (veintiocho), o si éste no fuera hábil, el día hábil inmediato siguiente, del mes calendario inmediatamente posterior a la Fecha de Cierre y a partir de allí, cada cuota subsiguiente vencerá entre el día 28 (veintiocho) y el día 3 (tres) del mes calendario sucesivo. En función de verificarse el cierre final el día 28 de Septiembre de 2010 conforme a la cláusula 7.1, la cuota 1, 2 y 3 se efectivizaran conjuntamente con el anticipo del punto (i) arriba descripto, abonando las restantes cuotas conforme lo dispone el presente artículo.

3.2 El Precio de Compra a abonar por el Comprador conforme se detalla en el apartado anterior devengará desde la Fecha de Cierre, un interés equivalente a una tasa del 9 ½ % (nueve y medio por ciento) anual sobre saldos deudores, el que está incluido en el cálculo de las cuotas mensuales consecutivas e iguales indicadas. El Comprador pagará cada cuota de capital e intereses del Precio de Compra mediante la entrega al Fiduciario de la cantidad de pesos necesaria para adquirir las divisas necesarias para que el Fiduciario pueda ingresar a la cuenta del banco que el Vendedor le haya indicado, los montos íntegros que, una vez acreditados, sean equivalentes y se correspondan a cada una de las cuotas de capital e intereses del Precio de Compra. En el caso previsto en el Artículo 5.5, el Comprador no será responsable por la restricción pero deberá cumplir el pago de la manera allí prevista. Todo impuesto de cualquier tipo que se establezca a partir de la firma del presente Convenio, así como todo incremento de impuesto existente a la fecha de firma del presente Convenio, resultantes en ambos casos ya sea de nuevas normas y/o de nuevas interpretaciones de normas vigentes, y que recaiga sobre el pago al Vendedor y/o la transferencia a la cuenta bancaria del Vendedor, estará a cargo del Comprador como accesorio del Precio de Compra.

3.3 Sin perjuicio de los plazos concedidos para cada una de las cuotas, la falta de pago de cualquiera de ellas, previa intimación por 15 (quince) días por medio fehaciente, producirá de pleno derecho la caducidad de los plazos de todas las cuotas restantes, las que serán exigibles a partir de ese momento, junto con los intereses por mora que se indican seguidamente y, en su caso y si correspondiera según lo dispuesto en el punto 3.4, la Cláusula Penal sobre el saldo de Precio de Compra. En tal supuesto, los intereses durante la mora, en lugar del 9,5% (nueve coma cinco por ciento) expresado en el Artículo 3.2, se incrementarán al 15% (quince por ciento) anual.

3.4 Si la mora en el pago de las cuotas del Precio de Compra excediera de seis meses (en un solo período o sumando todos los períodos de mora incurridos, ya sea de una o más cuotas del saldo del Precio de Compra y/o del total de las mismas en caso de producirse la caducidad de los plazos) se devengará, adicionalmente a los intereses moratorios, una cláusula penal de US\$ 164.044 (dólares estadounidenses ciento

Dr. MARIA JOSE GONERO
Jefe de División Estudios
Medio de Ocas y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

Sra. MARIA JOSE GONERO

13

926

MICHELLE GARAY
JEFE DE SECCION
Registros Civiles y Expediente
FISCALIA DE ESTADO
ES COPIA



Entre todos

6652110



Ministerio de OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



21.



sesenta y cuatro mil cuarenta y cuatro) la que deberá ser pagada por el Comprador dentro de los 30 (treinta días) de así requerirlo el Vendedor.

3.5 El Comprador garantizará al Vendedor el pago total del Precio de Compra con sus intereses y demás Obligaciones de Pago, y afectará irrevocablemente al efecto la Coparticipación Federal, por un monto equivalente al saldo del Precio de Compra impago, a cuyo fin cederá al Vendedor en el acto del Cierre los derechos de cobro de esa Coparticipación Federal para el caso de que las cuotas pactadas y sus intereses no fueran abonadas a su vencimiento. En el caso de las Obligaciones Condicionales de Pago, la Provincia garantizará su pago mediante la cesión al Vendedor de los derechos de cobro de la Coparticipación Federal en los términos del Artículo 4.2.

3.6 En caso de que las Acciones adquiridas por la Provincia sean transferidas a un tercero, el Vendedor aceptará la sustitución de la garantía de Coparticipación Federal otorgada por la Provincia para el pago de las Acciones si el nuevo adquirente de las Acciones presenta una garantía bancaria a favor del Vendedor otorgada por el Banco de la Nación Argentina o por una entidad financiera internacional de reconocida solvencia y prestigio y calificada "A" o equivalente por Moody's, S&P o Fitch, con términos sustancialmente equivalentes a los de las Garantías de la Provincia.

3.7 El crédito resultante del saldo del Precio de Compra y sus accesorios, será cesible, en todo o en parte, con efecto ante la Provincia, a partir de que la cesión le sea fehacientemente notificada.

TÍTULO IV

OBLIGACIONES DE PAGO DE LA PROVINCIA

4.1 A los efectos de implementar las Garantías de la Provincia, en el acto de Cierre la Provincia entregará al Acreedor, para su posterior entrega al Banco de la Nación Argentina, una carta instruyendo irrevocablemente a este último a pagar al Vendedor y al Acreedor las sumas necesarias (de acuerdo con lo previsto en el Artículos 3.2) para el pago de cada cuota de capital e intereses del Precio de Compra vencida que el Fiduciario le informe que no ha sido pagada en término, debiendo el Banco de la Nación Argentina pagar al Fiduciario el monto así informado por éste dentro de los cinco días hábiles de haber recibido dicha información, afectando para ello el porcentaje que corresponda de la acreditación periódica de fondos correspondientes a la Provincia en concepto de Coparticipación Federal. La instrucción al Banco de la Nación Argentina preverá que, en caso de que por un faltante transitorio en la cuenta en la que se acredite a favor de la Provincia la Coparticipación Federal no se pudiese atender, total o parcialmente, una o más cuotas de capital e intereses del Precio de Compra, dicho faltante será pagado de inmediato, aun parcialmente, a medida que se acrediten los fondos necesarios en dicha cuenta.

4.2 Análogamente, la Provincia deberá gestionar la aprobación y la aceptación previstas en los Artículos 6.1.4 y 6.1.14, respectivamente, con respecto a las Obligaciones

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

[Handwritten signatures]

14

MIGUEL A. GARAY
JEFE DE SECCION
Registros Oficiales y Expediente
FISCALIA DE ESTADO



Entre todos

6652E10



Ministerio de OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Condicionales de Pago, e instruir irrevocablemente al Banco de la Nación Argentina a pagar de inmediato al Vendedor y/o al Acreedor, según corresponda, ante la solicitud del propio Vendedor y, en su caso, ante una orden en tal sentido de un tribunal arbitral o judicial competente, la totalidad de las cuotas pendientes del Precio de Compra, con sus intereses compensatorios y moratorios, en caso de operarse la caducidad de plazos, con más, en su caso, el monto de las Obligaciones Condicionales de Pago que se hubieren devengado, afectando para todo ello el porcentaje que corresponda de los depósitos diarios correspondientes a la Provincia en concepto de Coparticipación Federal. En caso de que la Provincia (i) no haya obtenido las referidas aprobación y/o aceptación y/o (ii) no expida dicha instrucción dentro de los 30 (treinta) días (plazo que podrá extenderse por otros 30 [treinta] días, a pedido de la Provincia, por una única vez) de requerirlo el Vendedor o, de promover la Provincia el Arbitraje cuestionando dentro de dicho plazo la procedencia de las Obligaciones Condicionales de Pago y/o de la caducidad de los plazos, dentro de los treinta días de haber quedado firme el laudo que disponga dicha procedencia, la Provincia deberá pagar al Vendedor una multa diaria de US\$ 546,81 (dólares estadounidenses quinientos cuarenta y seis con ochenta y un centavos) hasta que otorgue dicha instrucción o se pague al Vendedor y/o al Acreedor, según corresponda, el total de la suma adeudada por las Obligaciones de Pago y las Obligaciones Condicionales de Pago y sus intereses acrecidos, costas y gastos. La existencia del trámite del Arbitraje y demás trámites accesorios no afectará la continuidad del régimen y de los pagos previstos en el Artículo 4.1.

4.3 La afectación de la Coparticipación Federal no se entenderá como limitando la responsabilidad de la Provincia de responder con su restante patrimonio por las Obligaciones de Pago y por las Obligaciones Condicionales de Pago en los términos del Artículo 4.2 que asume bajo el presente Convenio.

4.4 En caso de que en cualquier momento existiere cualquier prohibición por parte del Banco Central de la República Argentina o existiere cualquier otra restricción y/o prohibición por parte de cualquier otra autoridad de la República Argentina que efectivamente impida o restrinja el acceso por parte del Fiduciario al mercado libre de cambios en la República Argentina, que impida transferir al Vendedor todos o algunos de los pagos debidos bajo el presente Convenio, la Provincia no será responsable por tal restricción, pero deberá cumplir dichos pagos y, para ello, deberá entregar al Fiduciario la cantidad de pesos necesaria para que éste último realice, a opción del Vendedor, alguna de las siguientes operaciones a efectos de efectuar el pago: (i) adquiera FRB ("Floating Rate Bonds") con cotización en dólares estadounidenses en el exterior, en una cantidad tal que, liquidados en un mercado del exterior en precios y condiciones de plaza, y una vez deducidos los impuestos, gastos, costos y/o comisiones correspondientes, su producido en dólares estadounidenses fuere igual a la cantidad total que deba ser transferida; o bien (ii) adquiera títulos de deuda pública o privada (incluyendo, pero no limitado al Bonex Global, obligaciones negociables, etc.) o de acciones de compañías privadas argentinas con cotización en dólares estadounidenses en el exterior, en una cantidad tal que, liquidados en un mercado del exterior en precios y condiciones de plaza, y una vez deducidos los impuestos, gastos, costos y/o condiciones correspondientes, su producido en dólares estadounidenses fuere igual a la cantidad total en dicha moneda que deba ser transferida; o bien (iii) deposite pesos (o

DR. MARIA JOSE ROMERO
Jefe de División Trámites
Control de Bases y Gestión de
T.S. C.P.A. P.E.I.

15

MIGUEL A. GARAY
JEFE DE SECCION
Registros Oficiales y Expediente
FISCALIA DE ESTADO
ES COPIA

926



Entretodos

6652E10



Ministerio de OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



23



aquella moneda que en aquel momento tuviere curso legal en la República Argentina) en una cantidad tal que, en la fecha de transferencia de que se trate dichos Pesos fueren suficientes, una vez deducidos los impuestos, costos, comisiones y/o gastos que correspondieren para adquirir la totalidad de los dólares estadounidenses que deban ser transferidos, según el tipo de cambio detallado en la pantalla denominada "Reuters Currency Page" correspondiente al día hábil bancario anterior al de conversión para efectuar adquisiciones de dólares estadounidenses con pesos en la Ciudad de Nueva York a las 12 (doce) horas PM (hora de la ciudad de Nueva York) de la fecha de transferencia o pago, o bien (iv) mediante cualquier otro procedimiento existente en la República Argentina o en el exterior, en cualquier fecha en que deba efectuarse una transferencia para la adquisición de dólares estadounidenses.

TÍTULO V

CONDICIONES

5.1 Según fuera condición de la oferta, el denominado Cierre para el presente, se verificará a los sesenta días (90) del previsto para igual situación en la compraventa de acciones y reestructuración de pasivos suscripto con Impregilo y si y solo si este se verificara satisfactoriamente, se incorpora como Anexo Unico del presente, la aceptación efectuada por DELTA S.A. de fecha 27 de Mayo de 2010. Sin perjuicio de lo referido, para el presente y a los fines de que se pueda verificar el cierre para la presente previsto para el día 28 de Septiembre de 2010 deberán antes de dicha fecha verificarse las siguientes condiciones suspensivas (las "Condiciones Suspensivas"):

5.1.1 Aprobación por la Legislatura provincial del endeudamiento, de la afectación de los fondos coparticipables y de toda otra cláusula del presente Convenio que requiera tal aprobación en los términos de la Ley Provincial N° 9.086 y demás normativa aplicable.

5.1.2 Emisión por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación u otra autoridad nacional competente de la aprobación del otorgamiento por parte de la Provincia de la garantía mediante la Coparticipación Federal para el pago total de las Obligaciones de Pago en los términos previstos en los Títulos III y IV.

5.1.3 Emisión por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación u otra autoridad nacional competente de la aprobación prevista en las Leyes N° 25.570 y N° 25.917 con respecto al pasivo que la Provincia asume por el presente Convenio y la garantía sobre la Coparticipación Federal que otorga en el marco del presente Convenio.

5.1.4 Aprobación, si fuere necesaria, de la compra de las acciones en los términos del Artículo 8° de la Ley N° 25.156 otorgada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ("CNDC").

5.1.5 Haber notificado mediante el acta notarial a la Nación, de la cesión al Acreedor de los derechos de cobro de la Coparticipación Federal otorgada en garantía de pago del Precio de Compra, sus intereses y accesorios y demás Obligaciones de Pago.

MARIA JOSE ROMERO
Jefe de División Desagote
de la División Desagote
de la División Desagote
S. COPIA FIEL

MARIA JOSE ROMERO
Jefe de División Desagote
de la División Desagote
de la División Desagote
S. COPIA FIEL

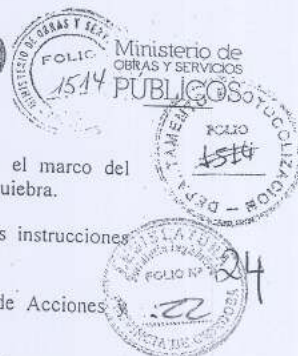
MIGUEL A. GARAY
JEFE DE SECCION
Registros Oficiales y Expediente
FISCALIA DE ESTADO
ES. COPIA



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
CÓRDOBA

Entretodos

6652E 10



5.1.6 Se haya homologado el Concordato ofrecido por CASISA en el marco del Concurso Preventivo de CASISA y CASISA no haya sido declarada en quiebra.

5.1.7 Aceptación por parte del Banco de la Nación Argentina de las instrucciones irrevocables previstas en el Artículo 4.1.

5.1.8 Se haya producido el Cierre del Convenio de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos que las Partes declaran conocer.

5.2 Ninguna de las Partes tendrá responsabilidad alguna frente a la/s otra/s o a terceros por la falta de cumplimiento de una o más de las Condiciones Suspensivas, en tanto ello no sea el resultado de un incumplimiento del estándar previsto en el Artículo 6.1.2.

5.3 Las siguientes Condiciones Suspensivas se entienden pactadas a favor del Vendedor quien podrá, a su sola discreción y según corresponda en cada caso, renunciar a una o más de ellas: 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.1.5 y 5.1.7.

5.4 Las Condiciones Suspensivas previstas en los Artículos 5.1.6 y 5.1.8 se entienden pactadas a favor del Comprador quien podrá, a su sola discreción, renunciar a cualquiera de ellas.

5.5 Las Condiciones Suspensivas no previstas en los Artículos 5.3 y 5.4 se entenderán pactadas a favor de todas las Partes.

5.6 Sin perjuicio de las condiciones suspensivas condicionantes del cierre del presente (que se produzca el Cierre con de Compraventa de acciones y reestructuración de Pasivos con Impregilo), en caso de que para el 28 de septiembre de 2010 (el "Plazo de Cumplimiento de las Condiciones Suspensivas") no se hubieran cumplido todas las Condiciones Suspensivas, y no hubieran sido renunciadas todas las incumplidas por la Parte o Partes a quien favorece(n), cualquiera de las Partes podrá, desde ese momento y en adelante y mientras dicha situación se mantenga, declarar rescindido de pleno derecho el Convenio mediante comunicación cursada por medio fehaciente a la/s otra/s parte/s, y será de allí en más de aplicación el Artículo 11.2.

5.7 Si para el 22 de Junio de 2010 no se hubiere publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el decreto del Poder Ejecutivo provincial que aprueba el presente Convenio, el Vendedor podrá de allí en más y mientras dicha situación se mantenga, declarar por sí y ante sí terminado el presente Convenio notificando tal terminación a la Provincia, en cuyo caso serán de aplicación las reglas previstas en el Artículo 11.2.

TÍTULO VI

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

6.1 A partir de la firma del presente Convenio las Partes tendrán las siguientes obligaciones:

17

9.26

COPIA FIEL
Copia y Servicios Públicos
División Despacho
SARAH JOSÉ ROMERO

MIGUEL A. GURAY
JEFE DE SECCION
Registros Oficiales y Expediente
FISCALIA DE ESTADO
ES COPIA



Entretodos

6652E10



Ministerio de OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



25



6.1.1 Dentro de los 7 (siete) días contados desde la firma del presente Convenio, las Partes harán las presentaciones que correspondan ante la CNDC, describiendo la operación de compraventa objeto de este Convenio, y solicitando se determine si la misma está sujeta a la aprobación prevista en el artículo 8º de la Ley Nº 25.156. Si así se determinase las Partes de la Compraventa harán sus mejores esfuerzos a fin de obtenerla. Las Partes deberán suscribir toda la documentación que fuera requerida para formalizar dichos trámites; prestar su más amplia colaboración y brindar toda la información que razonablemente le solicite la CNDC a fin de dar debido cumplimiento con los trámites previstos en dicha Ley tendientes a la obtención de la aprobación de la compraventa de acciones indicada en el presente Convenio. La obligación que la Provincia asume por el presente artículo 6.1.1 sólo se hará efectiva a partir del decimoquinto día contado a partir de la publicación del decreto provincial previsto en el Artículo 5.7.

6.1.2 Las Partes comprometen sus razonables mejores esfuerzos y diligencia para procurar el cumplimiento de las demás condiciones suspensivas

TÍTULO VII

CIERRE

7.1 Siempre que, dentro del Plazo de Cumplimiento de las Condiciones Suspensivas, todas las Condiciones Suspensivas se hubieren cumplido y/o renunciado por las Partes a quienes benefician, a excepción de la correspondiente al Cierre con Impregilo de fecha 25 de Junio de 2010, el Cierre de la compraventa de Acciones se operará el día 28 (veintiocho) de Septiembre de 2010. El Cierre tendrá lugar en las oficinas de CASISA en Camino de la Merced 5995 de la Ciudad de Córdoba o donde las Partes convengan.

7.2 En el Cierre se otorgarán los siguientes actos como parte de un único y mismo acto:

7.2.1. El Comprador pagará al Vendedor, de la manera prevista en el Artículo 3.2, la parte del Precio de Compra prevista en el Artículo 3.1 para el momento del Cierre.

7.2.2. El Vendedor entregará al Comprador la comunicación prevista por el Artículo 215 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 comunicando la transferencia de las Acciones a favor de la Provincia libres de todo gravamen y se registrará la transferencia de las Acciones a favor del Comprador, libres de todo gravamen, en el Registro de Accionistas de la Sociedad.

7.2.3. El Comprador entregará al Vendedor las garantías de la Provincia, en los términos previstos en el Artículo 3.5, y su conformidad para afectar la Coparticipación Federal cubriendo la integridad de las Obligaciones de Pago.

7.2.4. Se modificará o reemplazará el Fideicomiso Financiero, con la suscripción de la documentación pertinente por todas las partes involucradas.

Sta. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

Sta. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

MICHAEL A. GARAY
JEFE DE SECCION
Registros Oficiales y Expediente
FISCALIA DE ESTADO
ES COPIA

926

GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
CORDOBA

Entre todos

665211



Ministerio de
OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS



7.2.5. La Provincia entregará al Vendedor el acta notarial notificando a la Nación la cesión fiduciaria al Vendedor y al Acreedor de los derechos de cobro de la Coparticipación Federal otorgada en garantía de pago de la totalidad de las Obligaciones de Pago, conjuntamente con la nota dirigida al Banco de la Nación Argentina prevista en el Artículo 4.1, y con la aceptación de este último en los términos del Artículo 5.1.7.

7.2.6. El vendedor entregará al Comprador una carta de renuncia del director titular y suplente y del síndico titular y suplente, designados por la clase accionaria B y B y C, respectivamente, en la última asamblea de designación de autoridades.

7.3 De llevarse a cabo el Cierre, y sujeto al cumplimiento de todos los actos previstos en el Artículo 7.2, se entenderá irrevocablemente y de pleno derecho que: (i) el Vendedor ha renunciado a toda acción contra la Provincia y/o CASISA y/o los funcionarios, directores y empleados de la Provincia y de CASISA, vinculados con el Contrato de Concesión, de causa anterior al Cierre, excepto aquellas acciones que surgen del presente Convenio; (ii) CASISA ha renunciado a toda acción contra la Provincia y/o el Vendedor y/o los funcionarios, directores y empleados de la Provincia y/o del Vendedor, vinculados con el Contrato de Concesión, de causa anterior al Cierre, excepto aquellas acciones que surgen del presente Convenio; (iii) la Provincia ha prestado su conformidad con la situación jurídica, contable, patrimonial, financiera y de otro tipo de CASISA y ha renunciado a toda acción contra el Vendedor, CASISA y/o los funcionarios, directores y empleados del Vendedor y/o de CASISA, vinculados con el Contrato de Concesión, de causa anterior al Cierre, y con dicha situación, excepto aquellas acciones que surgen del presente Convenio.

7.4 Si por cualquier razón, atribuible o no a cualquiera de las Partes, no fuera posible otorgar el Cierre con todos los actos previstos para el mismo, para la Fecha de Cierre, el presente Convenio quedará de pleno derecho sin efecto sin responsabilidad para ninguna de las Partes, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 6.1.2, y será de aplicación el Artículo 11.2.

TÍTULO VIII

SITUACIÓN DE CASISA Y EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO

8.1. En ningún caso la declaración de quiebra de CASISA, sea por cualquier causa que fuera, en cualquier momento en que ella se produzca después del Cierre: (i) hará responsable al Vendedor frente a la Provincia; (ii) podrá ser invocada por la Provincia ya sea como causal de rescisión del Contrato de Concesión por incumplimiento de CASISA y/o como causal de rescisión, anulación y/o terminación del presente Convenio.

8.2 Con posterioridad al Cierre, los siguientes podrán ser considerados "Eventos de Incumplimiento" y, como tales, provocarán la caducidad de todas las cuotas del Precio de Compra y, en su caso, la aplicación de la Cláusula Penal:

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

MICHELLE A. GARAY
JEFE DE SECCION
Registros, Oficiales y Expediente
FISCALIA DE ESTADO
ES COPIA

926



Entre todos

6652E10



Ministerio de
OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS



- a. La extinción del Fideicomiso Financiero por cualquier causa a que ello se deba que no sea imputable al Vendedor, o el incumplimiento total o parcial de los pagos debidos por el Fideicomiso Financiero al Vendedor.
- b. La modificación o alteración de funcionamiento del Fideicomiso Financiero que no cuente con la aprobación del Vendedor, aprobación que no será irrazonablemente denegada.
- c. La modificación del régimen de la Coparticipación Federal que actúe en detrimento de los derechos del Vendedor.
- g. Cualquier acción administrativa, legislativa o judicial que impida u obstaculice el fiel cumplimiento de las estipulaciones del presente y el pleno goce de los derechos que el presente otorga al Vendedor y no sea dejada sin efecto dentro de los 90 (noventa) días de haberse puesto en vigor.



TÍTULO IX

DECLARACIONES DEL COMPRADOR

9.1. En caso de que por efecto de cualquier medida judicial y/o administrativa y/o legislativa, sea del orden municipal, provincial y/o nacional, el Nuevo Modelo Regulatorio y/o cualquiera de sus disposiciones y/o cualquiera de los actos que en función de sus previsiones debiera dictarse, fuera suspendido y/o revocado, ello no podrá ser alegado por el Comprador para liberarse de (i) sus obligaciones de pago por la Compraventa de las Acciones; ni (ii) de sus demás Obligaciones de Pago y Obligaciones Condicionales de Pago incluyendo, sin limitación, aquella derivada de la garantía otorgada al Vendedor, así como de su obligación de permitir la cesión de los derechos de cobro de la Coparticipación Federal.

TÍTULO X

DECLARACIONES DEL VENDEDOR

10.1 El Vendedor declara que las Acciones objeto de esta compraventa son de su propiedad y no están sujetas a Gravamen alguno, salvo por lo expuesto respecto de las acciones transferidas fiduciariamente al Banco BBVA Francés según fueron identificadas en el "Considerando" (mm) del presente Convenio y por la prenda a favor de Impregilo.

10.2 El Vendedor tiene la libre disponibilidad de (i) las acciones no comprendidas en la cesión fiduciaria referida en el Artículo precedente y (ii) de los derechos emergentes del Contrato de Fideicomiso y Colocación respecto de las acciones alcanzadas por dicha cesión fiduciaria. Asimismo, manifiesta que no existe ninguna medida precautoria.

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

20

JOSE GARAY
Jefe de Sección
Registros Civiles y Explotación
FISCALIA DE ESTADO
ES COPIA



Entretodos

6652 E 10



provisoria o definitiva u orden o resolución judicial o administrativa o de cualquier naturaleza que afecte o restrinja su libre disponibilidad, teniendo el Vendedor dominio pleno, irrestricto y perfecto de las Acciones, con excepción de las acciones transferidas fiduciariamente al Banco BBVA Francés que se mencionan en el "Considerando" (II) del presente Convenio.

TÍTULO XI

TERMINACIÓN

11.1 Con excepción de las obligaciones establecidas en el Artículo 6.1.2., y las disposiciones del Título XIII, el presente Convenio no generará obligaciones para las Partes hasta que se opere el Cierre previsto en el Título VII en las condiciones estipuladas en el Artículo 7.2.

11.2 En caso de que (i) dentro del Plazo de Cumplimiento de las Condiciones Suspensivas no se cumplan todas las Condiciones Suspensivas, y no se renuncien todas las condiciones incumplidas por la o las Partes de la Compraventa a quien favorece(n); o (ii) no se opere el Cierre en la fecha prevista al efecto con el cumplimiento de todos los actos previstos en el Artículo 7.2, entonces el Convenio quedará de pleno derecho sin efecto, sin responsabilidad para ninguna de las Partes.

TÍTULO XII

POSICIÓN DE LAS PARTES

12.1 Las Partes formulan expresa reserva de todos sus derechos y acciones, manteniendo las posiciones jurídicas que han adoptado hasta el presente y sin prestar su consentimiento para retrotraer etapas ya cumplidas.

TÍTULO XIII

GENERAL

13.1 Cada una de las Partes soportará los gastos y honorarios en los que cada una de ellas incurra con motivo de la evaluación, negociación, instrumentación y/o perfeccionamiento de la compra de las Acciones y la cesión de créditos descriptas en el presente Convenio, incluyendo y sin que ello signifique limitación alguna, honorarios de abogados, auditores, síndicos, contadores y asesores.

13.2 El presente Convenio y todos los documentos necesarios para que se opere el Cierre y/o se implementen sus disposiciones serán alcanzados por las exenciones impositivas que comprenden al Estado Provincial conforme a las normas tributarias

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

MIGUEL A. GARAY
JEFE DE SECCION
Cartera y Expediente
FISCALIA DE ESTADO



Entre todos

6652E 10



vigentes en materia de sellos. Si, pese a ello, el presente Convenio o cualquiera de los documentos necesarios para que opere el Cierre en los términos de los Artículos 7.2.4, 7.2.5 y/o 7.2.8 y/o para que se implementen sus disposiciones, fuera alcanzado por impuestos de sellos, dichos impuestos con sus accesorios serán soportados en su total incidencia y sin limitación alguna, por la Provincia..

13.3 Todas las comunicaciones y notificaciones que las Partes deban efectuarse con motivo del presente Convenio se realizarán por escrito y serán entregadas por medio fehaciente de comunicación. Las comunicaciones se cursarán a las siguientes direcciones:

“Comprador”:

Boulevard Chacabuco 1300
Ciudad de Córdoba
Provincia de Córdoba

“Vendedor”:

Duarte Quirós 1400 Local 225
Ciudad de Córdoba
Provincia de Córdoba.

Los domicilios antes mencionados revisten el carácter de “domicilio especial” a todos los efectos del Convenio y, en consecuencia, serán válidos hasta tanto sean modificados en las condiciones antes estipuladas y las notificaciones de toda clase —incluyendo la notificación de una demanda judicial— que a ellos se realicen surtirán plenos efectos aun cuando las Partes no se encontraren en ellos.

13.4 El presente Convenio se regirá y se interpretará de conformidad con las leyes de la República Argentina.

13.5 Resolución de controversias: Todas las desavenencias que deriven del presente Convenio o que guarden relación con el mismo, serán resueltas definitivamente por arbitraje (el “Arbitraje”) de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional que se encuentre vigente a la fecha de interposición de la demanda arbitral. El tribunal arbitral estará compuesto por 1 (un) árbitro designado por cada una de las Partes y 1 (un) árbitro designado por la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional que actuará como Presidente del Tribunal. La sede del Arbitraje será la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. El Arbitraje se conducirá en idioma Español y las normas jurídicas aplicables al fondo de la controversia serán las leyes de la República Argentina.

13.6 Las disposiciones de este Título XIII regirán desde la firma del presente Convenio y no perderán vigencia por dejarse sin efecto el presente según lo previsto en el Artículo 5.6.



Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

[Handwritten signatures and initials]

22
926
ES COPIA




30

Ing. HORAGO J. A. ALVAREZ RIVERO
PRESIDENCIA

MIGUEL A. GARAY
JEFE DE SECCION
Registros Oficiales y Expedientes
FISCALIA DE ESTADO
ES COPIA

926
JUN 18 2010

Sra. MARIA JOSE ROCHA
Igreja de Nossa Senhora

CONSTANZA MAYOR DE TILLARD



Entre todos

6652E10



Ministerio de
OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS



ANEXO 1

Miguel A. Garay
MIGUEL A. GARAY
JEFE DE SECCION
Registros, Mapas y Expediente
FISCALIA DE ESTADO
ES COPIA

Sra. Maria Jose Romer
Sra. MARIA JOSE ROMER
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

Sra. Maria Jose Romer
Sra. MARIA JOSE ROMER
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

REPARTICION PROTECCION	
ANEXO	
LEY	
NO.	926
RES.	
FECHA	16 JUN 2010

CONSTANZA MAYOR DE TILLARD
JEFE DEPARTAMENTO DESPACHO
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ES COPIA FIEL

6652110



32

CÓRDOBA, 27 DE MAYO DE 2010

SR. MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICO

ING. HUGO ATILIO TESTA.

S...../.....D

REF. EXPDTE. 0451-055924-09

De nuestra consideración:

En mi carácter de Presidente de EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A. y en referencia a la propuesta formulada de compraventa de acciones de la participación que tiene mi representada en CASISA (2,47%) de fecha 19/03/2010 y su nota complementaria aclaratoria de fecha 23/03/2010, comunico mi formal aceptación a las condiciones allí propuestas solicitando me remita el modelo convencional mencionado en el inciso b) a los fines de cumplimentar los trámites de rigor.

Que en forma expresa renuncio a los términos de la nota de fecha 26/03/2010, donde rechazaba la propuesta antes referida quedando la misma sin efecto alguno en virtud de la aceptación expresada en la presente.

Que acompaño copia de las tres notas de referencia como anexo a la presente nota.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

(Handwritten mark)

EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A.
Ing. HORACIO J. ALVAREZ RIVERO
PRESIDENTE

GOBIERNO PROTECCIÓN LEGAL	
RECIBO	
LEY	
DEC.	926
FECH.	18 JUN 2010

Gobierno de la Provincia de Córdoba
Consulte su Trámite en la Página www.cba.gov.ar



257322 024 010

A CONSTRUCTORA DELTA S.A.
Trámite 1400 1-2-2010

G.O.P.A.C.	
SISTEMA UNICO DE ATENCION AL CIUDADANO	
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
Recibido el	27 MAY 2010
FIRMA	

HIGUEL A. GARAY
JEFE DE SECCION
Registros, Consultas y Expediente
FISCALIA DE ESTADO
ES COPIA

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

6652E10

Poder Ejecutivo
Córdoba

CORDOBA, - 8 NOV 2010

VISTO: El expediente N° 0451-060516/10 en el que se propici la aprobación de la Addenda al CONVENIO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES Y REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS, celebrado el día 7 de junio de 2010 entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Empresa Constructora Delta S.A. ratificado por Decreto N° 926/10,

Y CONSIDERANDO:

Que según constancias obrantes a fs. 33/40 se ha realizado e Acta de Cierre, con fecha con fecha 31 de agosto de 2010, entre la firma IMPREGILO INTERNATIONAL INFRASTRUCTURES N.V. y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, condición necesaria para el perfeccionamiento de la Addenda referida, según lo establecido en la misma.

Que el objeto de la referida Addenda consiste en modifica parcialmente los términos y condiciones del citado Convenio, a fin de instrumenta lo acordado por las partes conforme se indica en los considerandos de la misma.

Que en consonancia con las prórrogas del cierre original, e cumplimiento de diversas condiciones, como así también la necesidad de adoptar una nueva fecha de cierre para el Convenio de que se trata, la cual ha sido fijada para el día 17 de diciembre del corriente año, se modifican cláusulas y modalidades a fin de adaptarlas al nuevo escenario.

Que todo ello se enmarca en el uso de las potestades que nacen del convenio originario, ratificado por Ley 9799, por lo que puede procederse como se solicita.

Por ello, lo dictaminado por la Subsecretaría de Asuntos Legales del Ministerio de Obras y Servicios Públicos con el N° 549/10 y por Fiscalía de Estado bajo N° 01357/10

2098

ES COPIA FIEL
MIGUEL ANGEL GARAY
Jefe de División de Registros Públicos
y Espectro de la Subsecretaría de Asuntos Legales
de Trámite y registro de Instrucción de la
Subsecretaría Legal y Técnica

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Asesoría

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

Artículo 1º.- **APRÚEBASE** la "ADDENDA AL CONVENIO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES Y REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS", celebrado el día 8 de octubre de 2010 entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba, representado en ese acto por el señor Ministro de Obras y Servicios Públicos, Ingeniero Hugo Atilio TESTA y la Empresa Constructora Delta S.A., representada en ese acto por su Presidente, Ingeniero Horacio José Agustín ALVAREZ RIVERO, que como Anexo I, compuesto de diez (10) fojas, forma parte integrante del presente Decreto.

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Obras y Servicios Públicos y Fiscal de Estado.

Artículo 3º.- **PROTOCOLÍCESE**, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase al Ministerio de Obras y Servicios Públicos a sus efectos, dése intervención al Ministerio de Finanzas a los fines que pudieren corresponder y archívese.

DECRETO

Nº 2098

M.O.P.
<i>De</i>
2098
03-15-10

JORGEDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO
PROVINCIA DE CORDOBA

JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ES COPIA FIEL
MIGUEL ANGEL GARAY
Jefe de División de Registros Oficiales
y Expediente de la Subdirección de Antecedentes de Costos
de trámite y registro de inscripciones de la
Subsecretaría Legal y Técnica

ING. HUGO ATILIO TESTA
Ministro de Obras y Servicios Públicos

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

6652E10

Anexo I

GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ADDENDA AL CONVENIO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES Y
REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS

Entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba, con domicilio en Boulevard Chacabuco 1300, Ciudad de Córdoba (la "Provincia" o el "Comprador"), representada en este acto por el Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos Ingeniero Hugo Atilio Testa; EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A., con domicilio en Duarte Quirós 1400 Local 225, Ciudad de Córdoba, República Argentina, (el "Vendedor"), representada en este acto por el Ing. Horacio José Agustín Álvarez Rivero en su calidad de Presidente en conjunto las "Partes", y

CONSIDERANDO:

- Que, con fecha 07 de Junio de 2010, las Partes suscribieron un Convenio de Compraventa de Acciones (el "Convenio") mediante el cual se acordó, la transferencia de la totalidad de las acciones de titularidad de EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A. en CASISA a favor de la Provincia, por un valor de US\$ 546.812 (el "Precio de la Compraventa de Acciones").
- Que el Convenio fue ratificado mediante el Decreto Provincial N° 926/2010 (18 de Junio 2010), publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 5 de Agosto de 2010, indicándose en su primer "considerando" que "el referido convenio es el resultado de una propuesta realizada desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, luego de que la Comisión designada para dar cumplimiento a los objetivos de la Minuta de Entendimiento de abril del año 2009, no alcanzara acuerdo alguno referido a la Renegociación del Contrato de Concesión de la RAC...."
- Que el Decreto Provincial N°926/2010 facultó al Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos que "Artículo 2: ...a realizar las medidas y acciones que resulten necesaria a los fines de dar cumplimiento al convenio que se aprueba por el artículo 2 del presente Decreto....."
- Que en los términos del Convenio ratificado por Decreto 926/2010 resulta posible realizar dispensas de condiciones establecidas a favor de las partes por quienes resulten beneficiarios de las mismas individual o conjuntamente.
- Que se ha verificado el CIERRE y las condiciones no dispensadas en la Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos con Impregilo y CASISA convenidas en el convenio ratificado por Decreto 165/10 y ley 9799 y sus modificatorias por Decreto 1007/10 ratificado por ley 9809, y las prórrogas

EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A.

Ing. HORACIO J. A. ALVAREZ RIVERO
PRESIDENTE

REPARTAMENTO LEGISLATIVO

SENC

LEY

DEC. 2098

DEC.

MIGUEL ANGEL GARRA

Jefe de División de Registros Públicos

y Expediente de la "Caja" de la División de Registros Públicos

de trámite y "Caja" de la División de Registros Públicos

Subsecretaría Legal y Técnica

SRA. MARIA JOSE ROMERO
Jefe de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

6652E10



convenidas por las partes y ratificadas por Decreto Nro. 1164/10 (B.O. 10-08-10), 1267/10 y 1283/10 (B.O. 03-09-10), que en lo pertinente se hacen extensivas a la presente Adenda.

- f) Que atento la variación de la fecha de Cierre del Convenio de Compraventa de Acciones y Reestructuración de pasivos entre Impregilo International Infraestructures N.V, Iglys S.A., Caminos de las Sierras S.A. y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, y su carácter de condición suspensiva en el compromiso de compraventa de acciones aprobado por Decreto 926/2010, imposibilitan el cumplimiento en tiempo propio de las condiciones de cumplimiento previo establecidas en el punto 5.1 y subsiguientes del Convenio de referencia.
- g) Que asimismo, como consecuencia del cierre de la operación aprobada por el Decreto 165/10 y sus modificatorios, algunas de las disposiciones, condiciones y cláusulas del convenio aprobado por Decreto 926/2010, requieren de su adecuación y/u eliminación previa a su remisión a la Honorable Legislatura Unicameral para su ratificación en los términos de la ley 9086 y concordantes.
- h) Que entre las condiciones verificadas, dispensadas y las modificaciones que surgen como consecuencia de las mismas y de la fecha de cierre final para el presente convenio, diferente a la pautada oportunamente, tienen incidencia directa o indirecta en las cláusulas 1.1. 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.1.1, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.8, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6.1.1, 7.1, 7.2.4, 7.2.5, 8.2 inciso a y b, principalmente.
- i) Que cuando en el texto de los Títulos III la mención al "Fiduciario" y/o Acreedor, deberá entenderse que se hace referencia al Vendedor (Artículos 3.2, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1.5, y 7.2.5.).
- j) Que en función del pronunciamiento por Resolución nro. 281/10 de la Comisión Nacional de la Competencia en relación a Impregilo Internacional Infraestructures N.V, y habiendo tomado el control de la sociedad CASISA el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba de la misma, las operaciones de transferencia minoritaria, no resultan típicas para justificar dicha intervención y pronunciamiento, por lo tanto las partes debieran concluir las ya iniciadas de común acuerdo, solicitando la conclusión de las actuaciones iniciadas por EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A. mediante expediente nro. S01:0218459/2010 – caratulado EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A. –S/NOTIFICACION ARTICULO 8º LEY 25.156 (CONC.830).
- k) Que en virtud de lo indicado en los "considerandos" precedentes, las Partes están contestes en definir como nueva fecha de cierre el día 17 de Diciembre de

EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A.
Ing. HORACIO J. A. ALVAREZ RIVERA
PRESIDENTE

DEPARTAMENTO PROTOCOLO
RECIBIDO
FOLIO 2
EXTE. 2098
REC.

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

NOTA DEL SEÑOR GARCIA
Jefe de División de Registro Civil
Exposición de la Subcomisión de Asesoría de Legitimación de la
de trámite y registro de la Legitimación de la
Subcomisión Legal y Técnica

2008 OCT 21 11:11 AM
MICHAEL ANGEL GARCIA
Unión de Registros Oficiales
Subcomisión de Inspección de Control
Registro de Instrucción de la
Vía Legal y Técnica

6652810

GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



TERCERA: MODIFICACIONES AL CONVENIO

Las PARTES acuerdan modificar los términos y condiciones del Convenio, conforme se describe a continuación:

3.1. Se modifica el Artículo 1.1 del Convenio, dejándose sin efecto la definición del "Nuevo Modelo Regulatorio".

3.2. Se modifica el Artículo 3.1 del Convenio, el que queda así redactado:

"3.1 El precio que las Partes de la Compraventa asignan por la transferencia de las Acciones (el "Precio de Compra"), es de **US\$ 546.812 (dólares estadounidenses quinientos cuarenta y seis mil ochocientos doce)**. Este importe será pagado por el Comprador al Vendedor de la siguiente manera: (i) **US\$ 2.374 (dólares estadounidenses dos mil trescientos setenta y cuatro)** en el momento del Cierre; y (ii) el saldo de **US\$ 544.438 (dólares quinientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho)** en 83 (ochenta y tres) cuotas mensuales de **US\$ 8.980 (dólares estadounidenses ocho mil novecientos ochenta)**. Dichas cuotas serán mensuales, consecutivas e iguales, e incluyen capital e intereses. La primera de ellas hubiera vencido el día 28/07/2010 y a partir de allí, cada cuota subsiguiente vencerá entre el día 28 (veintiocho) y el día 3 (tres) del mes calendario sucesivo. En función de verificarse el cierre final el día 17 de Diciembre de 2010, con posibilidad de prorrogarse de común acuerdo entre las partes cuando circunstancias así lo determinaren conforme a la cláusula 7.1, las cuotas 1, 2, 3, 4 y 5 se efectivizaran conjuntamente con el anticipo del punto (i) arriba descripto, abonando las restantes cuotas conforme lo dispone el presente artículo.

3.3. Se modifica el Artículo 3.2 del Convenio en su encabezado el que quedará redactado de la siguiente forma:

"3.2 El Precio de Compra a abonar por el Comprador conforme se detalla en el apartado anterior devengará desde la Fecha de Cierre, un interés equivalente a una tasa del 9 ½ % (nueve y medio por ciento) anual sobre saldos deudores, el que está incluido en el cálculo de las cuotas mensuales consecutivas e iguales indicadas. El Comprador pagará cada cuota de capital e intereses del Precio de Compra mediante la entrega al vendedor de la cantidad de pesos necesaria para adquirir las divisas necesarias para que los montos sean equivalentes y se correspondan a cada una de las cuotas de capital e intereses del Precio de Compra. En el caso previsto en el Artículo 4.4, el Comprador no será responsable por la restricción pero deberá cumplir el pago de la manera allí prevista. Todo impuesto de cualquier tipo que se establezca a partir de la firma del presente Convenio, así como todo incremento de impuesto existente a la fecha de firma del presente Convenio, resultantes en ambos casos ya sea de nuevas

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despesa
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A.

Ing. Humberto A. ANARIZ RIVERA
PRESIDENTE

RECEIVED MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

4

2098

MIGUEL ANGEL ROMERO

Jefe de División de Registro y Asesoría

Ministerio de Obras y Servicios Públicos

ES COPIA FIEL

6652E10



GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

normas y/o de nuevas interpretaciones de normas vigentes, y que recaiga sobre el pago al Vendedor y/o la transferencia a la cuenta bancaria del Vendedor, estará a cargo del Comprador como accesorio del Precio de Compra."

3.4. Se modifica el Artículo 4.1 del Convenio en su encabezado el que quedará redactado de la siguiente forma

"4.1 A los efectos de implementar las Garantías de la Provincia, en el acto de Cierre la Provincia entregará al Acreedor, para su posterior entrega al Banco de la Nación Argentina, una carta instruyendo irrevocablemente a este último a pagar al Vendedor las sumas necesarias (de acuerdo con lo previsto en el Artículos 3.2) para el pago de cada cuota de capital e intereses del Precio de Compra vencida que el Vendedor le informe que no ha sido pagada en término, debiendo el Banco de la Nación Argentina pagar al Vendedor el monto así informado por éste dentro de los cinco días hábiles de haber recibido dicha información, afectando para ello el porcentaje que corresponda de la acreditación periódica de fondos correspondientes a la Provincia en concepto de Coparticipación Federal. La instrucción al Banco de la Nación Argentina preverá que, en caso de que por un faltante transitorio en la cuenta en la que se acredite a favor de la Provincia la Coparticipación Federal no se pudiere atender, total o parcialmente, una o más cuotas de capital e intereses del Precio de Compra, dicho faltante será pagado de inmediato, aun parcialmente, a medida que se acrediten los fondos necesarios en dicha cuenta"

3.5. Se modifica el Artículo 4.2 del Convenio en su encabezado el que quedará redactado de la siguiente forma:

"4.2 Análogamente, la Provincia deberá gestionar la aprobación y la aceptación previstas en los Artículos 5.1.4 y 5.1.7, respectivamente, con respecto a las Obligaciones Condicionales de Pago, e instruir irrevocablemente al Banco de la Nación Argentina a pagar de inmediato al Vendedor, según corresponda, ante la solicitud del propio Vendedor y, en su caso, ante una orden en tal sentido de un tribunal arbitral o judicial competente, la totalidad de las cuotas pendientes del Precio de Compra, con sus intereses compensatorios y moratorios, en caso de operarse la caducidad de plazos, con más, en su caso, el monto de las Obligaciones Condicionales de Pago que se hubieren devengado, afectando para todo ello el porcentaje que corresponda de los depósitos diarios correspondientes a la Provincia en concepto de Coparticipación Federal. En caso de que la Provincia (i) no haya obtenido las referidas aprobación y/o aceptación y/o (ii) no expida dicha instrucción dentro de los 30 (treinta) días (plazo que podrá extenderse por otros 30 [treinta] días, a pedido de la Provincia, por una única vez) de requerirlo el Vendedor o, de promover la Provincia el Arbitraje cuestionando dentro de dicho plazo la procedencia de las Obligaciones

EMPRESA CONSTRUTORA DELTA
Ing. HORACIO J. A. ALVAREZ RIVERO
PRESIDENTE
DEC. 2098

Cra. MARIA JOSE ROMERO

MIGUEL ANGEL...
Jefe de...
y Expediente de la...
del...
S...
S...

6652E10



GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Condicional de Pago y/o de la caducidad de los plazos, dentro de los treinta días de haber quedado firme el laudo que disponga dicha procedencia, la Provincia deberá pagar al Vendedor una multa diaria de **US\$ 546,81 (dólares estadounidenses quinientos cuarenta y seis con ochenta y un centavos)** hasta que otorgue dicha instrucción o se pague al Vendedor, según corresponda, el total de la suma adeudada por las Obligaciones de Pago y las Obligaciones Condicionales de Pago y sus intereses acrecidos, costas y gastos. La existencia del trámite del Arbitraje y demás trámites accesorios no afectará la continuidad del régimen y de los pagos previstos en el Artículo 4.1.

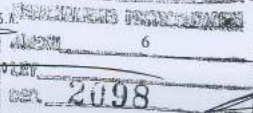
3.6. Se modifica el Artículo 4.4 del Convenio en su encabezado el que quedará redactado de la siguiente forma:

"4.4 En caso de que en cualquier momento existiere cualquier prohibición por parte del Banco Central de la República Argentina o existiere cualquier otra restricción y/o prohibición por parte de cualquier otra autoridad de la República Argentina que efectivamente impida o restrinja el acceso por parte del Vendedor al mercado libre de cambios en la República Argentina para cumplir en la moneda especificada las cuotas del presente Convenio, la Provincia no será responsable por tal restricción, pero deberá cumplir dichos pagos y, para ello, deberá entregar al Vendedor la cantidad de pesos necesaria para que éste último realice, a opción del Vendedor, alguna de las siguientes operaciones a efectos de efectuar el pago: (i) adquiera FRB ("Floating Rate Bonds") con cotización en dólares estadounidenses en el exterior, en una cantidad tal que, liquidados en un mercado del exterior en precios y condiciones de plaza, y una vez deducidos los impuestos, gastos, costos y/o comisiones correspondientes, su producido en dólares estadounidenses fuere igual a la cantidad total que deba ser transferida; o bien (ii) adquiera títulos de deuda pública o privada (incluyendo, pero no limitado al Bonex Global, obligaciones negociables, etc.) o de acciones de compañías privadas argentinas con cotización en dólares estadounidenses en el exterior, en una cantidad tal que, liquidados en un mercado del exterior en precios y condiciones de plaza, y una vez deducidos los impuestos, gastos, costos y/o comisiones correspondientes, su producido en dólares estadounidenses fuere igual a la cantidad total en dicha moneda que deba ser transferida; o bien (iii) deposite pesos (o aquella moneda que en aquel momento tuviere curso legal en la República Argentina) en una cantidad tal que, en la fecha de transferencia de que se trate dichos Pesos fueren suficientes, una vez deducidos los impuestos, costos, comisiones y/o gastos que correspondieren para adquirir la totalidad de los dólares estadounidenses que deban ser transferidos, según el tipo de cambio detallado en la pantalla denominada "Reuters Currency Page" correspondiente al día hábil bancario anterior al de conversión para efectuar adquisiciones de dólares estadounidenses con pesos en la Ciudad de Nueva York a las 12 (doce) horas PM (hora de la ciudad de Nueva York) de la fecha de transferencia o pago, o bien (iv) mediante cualquier otro procedimiento existente en la República Argentina o en el exterior, en

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A.

Ing. HORACIO A. ALTARE RIVERO S.R.L.
PRESIDENTE



MIGUEL ANGEL GARAY
Jefe de División de Ejecución, Operaciones
y Mantenimiento de la Subvención
Sueldo y/o sueldo

6652 E 10



GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

cualquier fecha en que deba efectuarse una transferencia para la adquisición de dólares estadounidenses."

3.7. Se modifica el Artículo 5.1 del Convenio en su encabezado el que quedará redactado de la siguiente forma:

'5.1 Según fuera condición de la oferta, el denominado Cierre para el presente, se verificará el 17 de Diciembre de 2010, con posibilidad de prorrogarse de común acuerdo entre las partes cuando circunstancias así lo determinaren. Sin perjuicio de lo referido para el presente y a los fines de que se pueda verificar el cierre en la fecha referida, deberán antes de dicha fecha verificarse las siguientes condiciones suspensivas (las "Condiciones Suspensivas"):

3.8. Se modifica el Artículo 5.1 del Convenio, dejándose sin efecto las condiciones suspensivas indicadas en los apartados 5.1.6, 5.1.8, en virtud de haberse verificado su cumplimiento y/o modificado conforme la normativa citada en el considerando e que le fueran aplicables, particularmente a la addenda aprobada por ley Decreto 1007/10 (7-7-2010) – (BO. 17-07-2010) ratificado por Ley 9809 (BO. 26-07-2010), sin alterarse la numeración de los restantes apartados.

3.9. Se modifica el Artículo 5.1.1 del Convenio en su encabezado el que quedará redactado de la siguiente forma:

'5.1.1 Aprobación por la Legislatura provincial, previa aprobación por Decreto del Sr. Gobernador, del endeudamiento, de la afectación de los fondos coparticipables y de toda otra cláusula del presente Convenio y/o de su ADDENDA que requiera tal aprobación en los términos de la Ley Provincial N° 9.086 y demás normativa aplicable'

3.10. Se modifica el Artículo 5.1.4 del Convenio que quedará redactado de la siguiente forma:

"5.1.4. Que en función del pronunciamiento por Resolución nro. 281/10 de la Comisión Nacional de la Competencia en relación a Impregilo Internacional Infraestructures N.V, y habiendo tomado el control de la sociedad CASISA el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba de la misma, las operaciones de transferencia minoritaria, no resultan típicas para justificar dicha intervención y pronunciamiento, por lo tanto las partes debieran concluir las ya iniciadas de común acuerdo, solicitando la conclusión de las actuaciones iniciadas por EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A. mediante expediente nro. S01:0218459/2010 - caratulado EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A. -S/NOTIFICACION ARTICULO 8º LEY 25.156 (CONC.830), fijando como condición previa la presentación y el pronunciamiento en tal sentido de la CNDC."

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefe de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A.
Ing. HORACIO J. ...
FOLIO 2098

NICOLAS ANGELO ...
Jefe de División de Negocios Jurídicos
y Expediente de la Subsecretaría de Asesoría Legal
do trámite y ...
Subsecretaría

6652E10



GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

3.11. Se deja sin efecto el Artículo 5.4 del Convenio sin alterarse la numeración de los restantes apartados

3.12. Se modifica el Artículo 5.5 del Convenio que quedará redactado de la siguiente forma:

'5.5 La Condiciones Suspensivas no previstas en los Artículos 5.3 se entenderán pactadas a favor de todas las Partes'

3.13. Se modifica el Artículo 5.6 del Convenio que quedará redactado de la siguiente forma:

'5.6 Para el caso en que para el 17 de Diciembre de 2010 y/o sus prórrogas acordadas en función del Artículo 5.1 ("Plazo de Cumplimiento de las Condiciones Suspensivas") no se hubieran cumplido todas las Condiciones Suspensivas, y no hubieran sido renunciadas todas las incumplidas por la Parte o Partes a quien favorece(n), cualquiera de las Partes podrá, desde ese momento y en adelante y mientras dicha situación se mantenga, declarar rescindido de pleno derecho el Convenio mediante comunicación cursada por medio fehaciente a la/s otra/s parte/s, y será de allí en más de aplicación el Artículo 11.2'

3.14. Se modifica el Artículo 5.7 del Convenio que quedará redactado de la siguiente forma:

'5.7 Si para el 10 de Noviembre de 2010 no se hubiere publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el decreto del Poder Ejecutivo provincial que aprueba el presente Convenio, el Vendedor podrá de allí en más y mientras dicha situación se mantenga, declarar por sí y ante sí terminado el presente Convenio notificando tal terminación a la Provincia, en cuyo caso serán de aplicación las reglas previstas en el Artículo 11.2'

3.15. Se modifica el Artículo 6.1.1 del Convenio que quedará redactado de la siguiente forma:

'6.1.1 Que conforme se refiere en el artículo 5.1.4 modificado del convenio, EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A. ha iniciado mediante expediente nro. S01:0218459/2010 – caratulado EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A. – S/NOTIFICACION ARTICULO 8º LEY 25.156 (CONC.830), requiriendo la intervención de la CNDC en función de lo dispuesto por convenio ratificado mediante decreto 926/10. En tal carácter ha dado cumplimiento a la presentación dispuesta por la anterior versión del art. 6.1.1. Subsistiendo la obligación por parte de la provincia de presentar la documentación y el pedido al que hace referencia. En dicho pedido se

EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A.
Ing. HORACIO A. MARTÍNEZ
LEY 2098
2098

SE COPIA PARA
MIGUEL ANGEL GARAY
Jefe de Oficina de Registro, Estudios
y Expediente de la Subsecretaría de
de Trámite y Ejecución
Subsecretaría de Trámite y Ejecución

6652E10

GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



describe la operación de compraventa objeto del Convenio a la luz del artículo 8 de la ley N° 25.156. Sin perjuicio de entender que a tenor de la resolución 281/10 respecto a Impregilo, no corresponde su pronunciamiento, la provincia realizará la presentación correspondiente a partir de la publicación del decreto provincial previsto en el Artículo 5.7.

3.16. Se modifica el Artículo 7.1. del Convenio que quedará redactado de la siguiente forma:

"7.1 Siempre que, dentro del Plazo de Cumplimiento de las Condiciones Suspensivas, todas las Condiciones Suspensivas se hubieren cumplido y/o renunciado por las Partes a quienes benefician, el Cierre de la compraventa de Acciones se operará el día 17 de Diciembre de 2010 y/o sus prórrogas acordadas en función del Artículo 5.1. El Cierre tendrá lugar en las oficinas de CASISA en Camino a Chacra de la Merced 5995 de la Ciudad de Córdoba o donde las Partes convengan"

3.17. Se modifica el Artículo 7.2.5. del Convenio que quedará redactado de la siguiente forma

"7.2.5 La Provincia entregará al Vendedor el acta notarial notificando a la Nación la cesión fiduciaria al Vendedor de los derechos de cobro de la Coparticipación Federal otorgada en garantía de pago de la totalidad de las Obligaciones de Pago, conjuntamente con la nota dirigida al Banco de la Nación Argentina prevista en el Artículo 4.1, y con la aceptación de éste último en los términos del artículo 5.1.7"

3.18. Se suprime el artículo 7.2.4 del Convenio sin alterarse la numeración de los restantes apartados

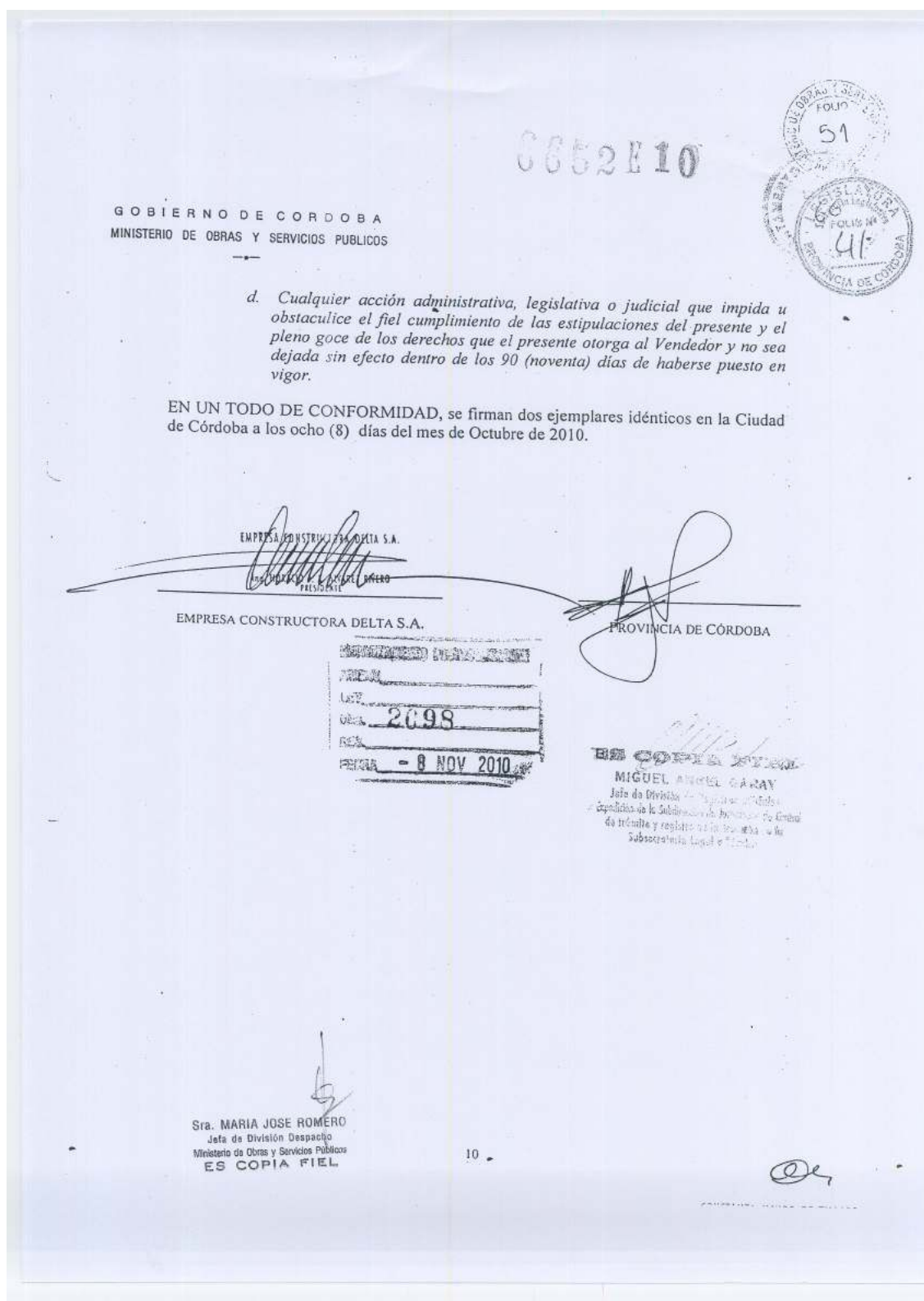
3.19. Se suprimen los puntos a y b del artículo 8.2 del Convenio sin alterarse la numeración de los restantes apartados quedando redactado de la siguiente forma:

"8.2 Con posterioridad al Cierre, los siguientes podrán ser considerados "Eventos de Incumplimiento" y, como tales, provocarán la caducidad de todas las cuotas del Precio de Compra y, en su caso, la aplicación de la Cláusula Penal:

- a. Suprimido.
- b. Suprimido.
- c. La modificación del régimen de la Coparticipación Federal que actúe en detrimento de los derechos del Vendedor.

EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A.
Ing. HORACIO J. A. ALVAREZ RIVERO
PRESIDENTE
2098

EN COPIA
MIGUEL ANGEL SARAY
Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica
y Expediente de la Subsecretaría de Gestión de Calidad
da trámite y copia a la Subsecretaría de Gestión de Calidad
Subsecretaría



Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.

DESPACHO DE COMISIÓN 6652

Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA y de OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 6652/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el Convenio de Compra de Acciones y la Addenda al Convenio de Compra de Acciones suscrito entre la Provincia y la Empresa Delta SA, para la adquisición de la totalidad de las acciones que Delta SA posee en Caminos de Las Sierras SA, con sus

PODER LEGISLATIVO – 49ª REUNION -15-XII-2010

consecuentes derechos patrimoniales y políticos, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación con la siguientes modificaciones:

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

Artículo 1º.- APRUÉBASE el “Convenio de Compraventa de Acciones” y la “Addenda al Convenio de Compraventa de Acciones” suscriptos entre la Provincia de Córdoba y la empresa Delta SA el día 07 de junio de 2010 y 08 de octubre de 2010, respectivamente, que tienen por objeto la adquisición por parte de la Provincia de la totalidad de las acciones que Delta SA posee en Caminos de Las Sierras SA, con sus consecuentes derechos patrimoniales y políticos.

El Convenio, la Addenda y sus Decretos ratificatorios N° 926/10 de fecha 18 de junio de 2010 y 2098/10 de fecha 08 de noviembre de 2010, respectivamente, compuestos de treinta y siete (37) fojas útiles, forman parte de la presente Ley como Anexo Único.

Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.

DIOS GUARDE A V.H.

Heredia, Ipérico, Valarolo, Monier, Senn, Vásquez, Pagliano, Vega.

**PROYECTO DE LEY – 06653/E/10
MENSAJE**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que preside, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se solicita la aprobación del Convenio de Compraventa de Acciones suscripto entre la Provincia de Córdoba y la empresa Codi S.A. el día 29 de Marzo de 2010, ratificado por Decreto 587/10 (B.O. 19-05-2010) y de su addenda complementaria de fecha 8 de Octubre de 2010 ratificada por Decreto 2099 de fecha 8 de noviembre de 2010 (B.O. 11-11-2010).

Por el citado Convenio y en su addenda se establecen una serie de medidas y acciones destinadas al cumplimiento de condiciones necesarias para producir la transferencia final de acciones entre los firmantes del acuerdo.

El convenio sub examine surge con motivo de la intensión del Gobierno de la Provincia de Córdoba de tomar mayor control accionario de la Concesionaria tendiente al cumplimiento de los objetivos previstos en la Compraventa de Acciones y Reestructuración de pasivos aprobado por Decreto 165/10 ratificado por ley 9799 y su addenda ratificada por Decreto 1007/10 ratificado por Ley 9809.

Tiene por objeto que la Provincia adquiera de Codi S.A. la totalidad de las acciones que ésta posee en Caminos de las Sierras S.A., representativas del 6,257% (seis coma doscientos cincuenta y siete por ciento) del capital y de los votos de la sociedad, con sus consecuentes derechos patrimoniales y políticos.

A tal fin se establecen en el cuerpo del convenio la totalidad de las disposiciones necesarias para su concreción, tales como: precio y modalidad de pago; condiciones de refinanciación y cancelación del pasivo de la sociedad; garantías a otorgar para asegurar su cumplimiento; condiciones suspensivas a las que se encuentra sujeta la efectivización del acuerdo; operaciones de cierre de la negociación; eventos de incumplimiento y demás formalidades propias de un acuerdo de este tipo (constitución de domicilios, reglas de resolución de controversias, distribución de gastos y honorarios, etc.).

En tanto el convenio complementario surge de la concreción de la transferencia del accionista principal a posteriori de los plazos previstos y de condiciones verificadas que resultaban necesariamente revisables.

Por lo expuesto, y en ejercicio de la atribución conferida en el Artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, me permito solicitar la aprobación del presente Proyecto de Ley, si así lo estima oportuno.

Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.

Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el “Convenio de Compraventa de Acciones” y la “Addenda al Convenio de Compraventa de Acciones” suscripto entre la Provincia de Córdoba y la empresa Codi S.A. el día 29 de marzo de 2010 y 8 de octubre de 2010, que tiene por objeto la adquisición por parte de la Provincia de la totalidad de las acciones que Codi S.A. posee en Caminos de las Sierras S.A., con sus consecuentes derechos patrimoniales y políticos,

El Convenio ratificado por Decreto 587/10 del 19 de mayo de 2010 y la Addenda ratificada por Decreto 2099/10 de fecha 8 de noviembre de 2010, compuesto de treinta y siete (37) fojas útiles, forma parte la presente Ley como Anexo Único.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.

ANEXOS

6653110

ANEXO I

Poder Ejecutivo
Córdoba

CORDOBA, 22 ABR 2010

6

VISTO: El expediente N° 0451-055924/2009 – Cuerpos 1 al 5
mediante el cual el señor Ministro de Obras y Servicios Públicos eleva a
Consideración del Poder Ejecutivo un convenio denominado COMPRAVENTA DE
ACCIONES suscrito con la firma CODI S.A.

Y CONSIDERANDO:

Que el referido convenio es el resultado de una propuesta
realizada desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, luego de que la
Comisión designada para dar cumplimiento a los objetivos de la Minuta de
entendimiento de Abril del año 2009, no alcanzara acuerdo alguno referido a la
Renegociación del Contrato de Concesión de la RAC.

Que la Cláusula 5.7 del convenio, prevé en forma expresa la
suscripción y publicación de un Decreto ratificatorio a los fines de darle virtualidad
jurídica.

Que asimismo es necesaria la realización, redacción y
confección de instrumentos técnicos y jurídicos complementarios en los plazos
previstos para tales efectos.

Que el Convenio de referencia prevé una serie de medidas y
acciones a realizar por parte del Ministerio de Obras y Servicios Públicos
necesarias para el cumplimiento del mismo.

Por ello y las disposiciones del Decreto N° 1846/93 y por la
Legislatura Provincial mediante Ley N° 8.361, Decreto Provincial N° 1598/97,
Decreto N° 1590/97, Ley 9078 y concordantes, y lo dictaminado por la
Subsecretaría de Asuntos Legales del Ministerio de Obras y Servicios Públicos
con el N° 147/10 y por Fiscalía de Estado bajo el N° 121/2010, casos simi-
lares;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

587

ing. JUAN JOSE HERENCIA
Subdirector de Jurisdicción
Control de Trámite y Reg. de Instr. Leg.
Subsecretaría Legal y Técnica
Fiscalía de Estado
ES COPIA

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

CONSTANZA MAYOR DE TRÁMITE
Jefe Departamento Despacho

6653 10



Artículo 1°.- RATIFÍCASE el Convenio DE COMPRAVENTA DE ACCIONES de fecha 29 de marzo de 2010 obrante a fs. 1357/1381 Cuerpo 5, suscripto entre el señor Ministro de Obras y Servicios Públicos y la firma CODI S.A., que como ANEXO I compuesto de VEINTICINCO (25) fojas integra el presente Decreto.

Artículo 2°.- FACÚLTASE al señor Ministro de Obras y Servicios Públicos a realizar las medidas y acciones que resulten necesarias a los fines de dar cumplimiento al convenio que se aprueba por el artículo 1° del presente Decreto.

Artículo 3°.- ENCOMIÉNDASE, FACÚLTASE y AUTORIZÁSE al Sr. Ministro de Finanzas las siguientes acciones:
1) Instrumente las medidas necesarias para garantizar la afectación en garantía de Coparticipación Federal en los términos y condiciones del convenio agregado en el ANEXO I del presente Decreto.

Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Obras y Servicios Públicos, Ministro de Finanzas y Fiscal de Estado.

Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, remítase al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, al Ministerio de Finanzas a sus efectos, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DECRETO

587



41410
587

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

Dr. ANGEL MARIO ELIZOTTE
MINISTRO DE FINANZAS

JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CONSTANZA MAYOR DE TITULO
JEFE DEPARTAMENTO DESPACHO
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
ES COPIA FIEL

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Ing. JUAN JOSE ROMERO

VEINTICINCO (25) FEBRERO

Ministerio de Obras y Servicios Públicos

6653E10

CONVENIO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES

Entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba, con domicilio en Boulevard Chacabuco 1300, Ciudad de Córdoba (la "Provincia" o el "Comprador"), representada en este acto por el Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos Ingeniero Hugo Atilio Testa (ad – referéndum del Poder Ejecutivo), por una parte, y por la otra CODI S.A., con domicilio en Florida 537 2º piso Of. 509, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, (el "Vendedor"), representada en este acto por el Ing. Hilario Carlos Magliano en su calidad de Director con suficientes facultades para la presente, por la otra parte, en conjunto las "Partes", y

CONSIDERANDO:

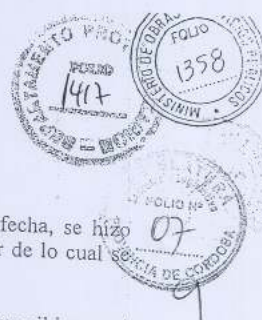
- Que, con fecha 4 de diciembre de 1992, el Estado Nacional y la Provincia suscribieron un convenio mediante el cual la Nación delegó a la Provincia las facultades de adjudicación y administración del Contrato de Concesión de Obra Pública de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba. Dicho Convenio fue aprobado por el Poder Ejecutivo Provincial mediante Decreto N° 1846/93 y por la Legislatura Provincial mediante Ley N° 8.361.
- Que, posteriormente el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, de acuerdo a lo dispuesto por Decreto N° 1529/94, efectuó, mediante Resolución N° 149/94, el llamado a Concurso Nacional e Internacional para la calificación y selección de empresas para la construcción de mejoras, reparación, conservación, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración y explotación bajo el sistema de Concesión de Obra Pública por Peaje de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba (la "RAC").
- Que, con fecha 4 de septiembre de 1997, se suscribió en forma definitiva, entre la Provincia y Caminos de las Sierras S.A. ("CASISA"), el contrato por el cual se otorgó a esta última, en concesión de obra pública por peaje, la RAC, según fuera definida en la Resolución N° 1681/94 de la ex Dirección Provincial de Vialidad y delimitada en el Anexo Técnico Particular (el "Contrato de Concesión").
- Que dicho Contrato de Concesión fue aprobado mediante Decreto Provincial N° 1598/97 de fecha 11 de septiembre de 1997 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia con fecha 12 de septiembre de 1997.
- Que, mediante el dictado del Decreto N° 1590/97, el Poder Ejecutivo de la Provincia aprobó el Reglamento Administrativo de las Prestaciones, la Fiscalización y Control y Protección del Usuario y los Bienes del Estado – Marco Regulatorio de la RAC.

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

Ing. JUAN

Ministerio de Obras y Servicios Públicos 6653E10



- f) Que el 12 de noviembre de 1997, mediante acta de la misma fecha, se hizo entrega a CASISA de las rutas que comprenden la RAC, a partir de lo cual comenzaron las Obras de Primera Etapa.
- g) Que el 20 de enero del año 2000, la Provincia y CASISA suscribieron el Convenio N° 38 por el cual se acordó reducir el valor de la tarifa básica inicial en las rutas: RP N° 5, RN N° 20-38, RP E-55, RP E-53; Av. Padre Luchesse, Camino Intermunicipal Villa Allende – Unquillo y RN N° 36 y, para los residentes dentro de la RAC, en las Rutas Nacionales 9 Norte, 9 Sur, 19 y Autopista Pilar – Córdoba de los vehículos comprendidos en las categorías definidas en el punto 29.3.1. y 29.3.2. del Anexo de Especificaciones Técnicas Generales del Contrato de Concesión, y mantener la Tarifa Básica Inicial en los corredores de las Rutas Nacional 9 Norte, Nacional 9 Sur, Autopista Pilar – Córdoba y Nacional 19 para el resto de los usuarios.
- h) Que, en compensación de esa reducción tarifaria, se acordó incorporar la Avenida Circunvalación —Ruta Nacional A 019— dentro del sistema de Cobro de Peaje, como así también a las localidades de La Calera (Dpto. Colón) y Montecristo (Dpto. Río Primero).
- i) Que el 4 de octubre de 2000 se suscribió, entre el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia y CASISA, el Convenio Complementario al Convenio N° 38, que fue aprobado por el Poder Ejecutivo de la Provincia mediante Decreto N° 1851/00, por el cual se acordó la realización de obras por parte de la Concesionaria no previstas en el anteproyecto técnico definitivo, el adelantamiento de obras previstas detalladas en anexo al mencionado convenio complementario y el diferimiento de la terminación y habilitación de algunas obras de Primera Etapa.
- j) Que en el Convenio celebrado en el mes de abril de 2003 entre la Provincia y CASISA se dejó indicado “que el cobro del peaje en la Avda. de Circunvalación no ha tenido adecuada receptividad por parte de la opinión pública cordobesa, razón por la cual el Poder Ejecutivo Provincial ha llevado a cabo gestiones ante el Gobierno Nacional tendientes a compensar a la Concesionaria los perjuicios derivados de la reducción de la tarifa, a través del Fondo Fiduciario creado por los Decretos N° 802/2001 y N° 976/2001 del Poder Ejecutivo Nacional”, resolviéndose, en consecuencia, fijar la compensación referida en la suma mensual de \$ 1.185.361 (pesos un millón ciento ochenta y cinco mil trescientos sesenta y uno), para el período que corría desde el mes de diciembre de 2002 al mes de octubre de 2003, como así también, al vencimiento del período (octubre 2003), “reexaminar la distorsión provocada por la aludida reducción de las tarifas de peaje, a los efectos del mantenimiento de la ecuación económico-financiera y del flujo de caja de la Concesionaria, según lo previsto en la Clausula Séptima del Convenio 38.”

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefe de División Negocios

587

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Subdirectora de Jurisdicción

Sra. MARIA JOSE ROMERO

Ministerio de Obras y Servicios Públicos 6653410



10

- k) Que la Provincia, mediante el dictado del Decreto N° 2656/01, del 12 de noviembre de 2001, declaró "la emergencia económica – financiera y administrativa del sector público", que comprendía "la ejecución de los contratos y prestación de servicios relativos al sector", lo cual fue ratificado mediante la sanción de la Ley N° 9.078, por lo cual el Contrato de Concesión de la RAC se consideró sujeto a renegociación.
- l) Que CASISA, mediante nota al Gobernador de fecha 6 de marzo de 2002, ampliada a requerimiento del ERSEP, por notas CS/303/ER/02 del 7 de junio de 2002 y CS/376/ER/02 del 15 de julio de 2002, reclamó la recomposición de la ecuación económico financiera del Contrato de Concesión, en procura de que se le compensen los perjuicios que dijo haber soportado y seguir soportando, a raíz de: (1) la imposibilidad de recuperar las inversiones y hacer frente a los gastos de operación y mantenimiento con motivo de la devaluación del peso y el incrementos de sus costos operado a partir de enero de 2002, como consecuencia de la pesificación y congelamiento de la tarifa que se le impuso; (2) la ejecución de obras adicionales no previstas en el Anteproyecto Técnico Definitivo del Contrato de Concesión, que debió ejecutar a solicitud de la Provincia; (3) la falta de compensación de rebaja de la tarifa establecida en el Convenio N°38, a raíz de la no incorporación al sistema de cobro de peaje de la Avda. de Circunvalación; (4) la demora en la habilitación de las obras de primera etapa; (5) la incidencia de impuestos sobrevinientes no previstos en la oferta; entre otros.
- m) Que, con el dictado del Decreto Provincial N° 530/02, el Poder Ejecutivo de la Provincia estableció el inicio efectivo de la renegociación del Contrato de Concesión de la RAC, fundado en "que la devaluación del signo monetario decidida por el Gobierno Nacional torna imprescindible reglar la reestructuración de las obligaciones en curso de ejecución surgidas de los contratos que tengan por objeto la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos celebrados por el sector público provincial, en la medida en que la nueva paridad cambiaria haya afectado la economía del contrato", como así también en "que la señalada situación y el impacto sobreviniente en la ecuación de los contratos, justifica arbitrar mecanismos compensatorios que permitan un restablecimiento equitativo de las prestaciones pendientes de cumplimiento".
- n) Que, a tal fin, por Resolución N° 148/02 del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia, se dispuso requerir la asistencia del Ente Regulador de Servicios Públicos (el "E.R.Se.P.") a los fines de cumplimentar con las disposiciones previstas en el Decreto N° 530/02.
- o) Que, por Resoluciones N° 581/02 y N° 53/03 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, convalidadas por Decreto N° 90/04, se ampliaron los plazos para la renegociación pese a lo cual, dentro de los nuevos plazos previstos, no se encontraron soluciones adecuadas para establecer un nuevo marco contractual.

Ing. JUAN JOSÉ HERENCIA
Subdirector de Jurisdicción

WALTER JOSÉ ROMERO
Subdirector de Servicios Públicos

Ministerio de Obras y Servicios Públicos 10



17

- p) Que CASISA reiteró el 24 de junio de 2005, el 12 de abril de 2006 y el 07 de julio de 2006, su solicitud de recomposición de la ecuación económico financiera del Contrato de Concesión.
- q) Que CASISA intimó a la Provincia el 17 de abril de 2007 a que, en el plazo de cuarenta y cinco días, adoptara medidas que evidenciaran el compromiso de restablecer el equilibrio de la ecuación económico financiera del Contrato de Concesión, bajo apercibimiento de rescindir el mismo.
- r) Que la Provincia y CASISA suscribieron el 1º de junio de 2007, una Minuta de Entendimiento a fin de constituir una Comisión Conjunta para la elaboración de un Acta de Renegociación a ser suscripta y elevada a la Autoridad de Aplicación, antes del 15 de setiembre de 2007.
- s) Que el 18 de septiembre de 2007 CASISA comunicó a la Provincia, que atento al vencimiento del plazo contenido en la Minuta de Entendimiento, se ponían nuevamente en curso los plazos de la intimación anteriormente formulada bajo apercibimiento de rescisión por culpa del Concedente.
- t) Que el 28 de noviembre de 2007 CASISA solicitó la rescisión del Contrato de Concesión por culpa del Concedente, sosteniendo que no habían sido reconocidos los reclamos formulados desde el año 2002 para el reestablecimiento de la ecuación económico-financiera del Contrato de Concesión.
- u) Que el 28 de junio de 2008 se dictó el Decreto N° 1010/08 por el cual la Provincia rechazó la solicitud de CASISA por considerar que resultaba sustancialmente improcedente.
- v) Que CASISA interpuso el 11 de julio de 2008 un recurso de reconsideración contra lo dispuesto por el Decreto N° 1010/08.
- w) Que el 17 de noviembre de 2008 CASISA dio por denegado tácitamente el recurso de reconsideración interpuesto contra el Decreto N° 1010/08 e intimó a la Provincia para que, antes del 3 de diciembre de 2008, se hiciera cargo de la Concesión.
- x) Que el 28 de noviembre de 2008 la Provincia, alegando tener por finalidad mitigar el efecto del incremento de costos de operación y mantenimiento del sistema, incluyendo las demandas de ajuste salarial y poder garantizar la prestación del servicio, solicitó al E.R.Se.P la convocatoria a Audiencia Pública para implementar un aumento tarifario inmediato y establecer una condición de equilibrio operativo durante un ulterior período de renegociación del Contrato de Concesión.

Sra. MARIA JOSE ROMERO

587

ING. JUAN JOSE HERENGIA

MARIA JOSE ROMERO

Sra. MARIA JOSE ROMERO
-Jefe de División de Asesoría y
Asesoría de Obras y Servicios Públicos
-3 COPIAS FFI

Ministerio de Obras y Servicios Públicos

6653E10



12

- y) Que el 15 de diciembre de 2008 se celebró, sin la intervención de CASISA, la Audiencia Pública dispuesta por Resolución E.R.Se.P N° 3855/08, en el marco de la solicitud formulada por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, a fin de dar tratamiento al aumento tarifario de aplicación en la RAC bajo concesión de CASISA.
- z) Que el 18 de diciembre de 2008 CASISA solicitó ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 13° Nominación, Soc. 1 – Sec. la apertura del Concurso Preventivo de la Sociedad (el “Concurso Preventivo de CASISA”).
- aa) Que el 29 de diciembre de 2008 la Provincia invitó a CASISA a reiniciar el proceso de renegociación contractual para lograr la recomposición y fortalecimiento de un vínculo de largo plazo, que implicara poder materializar un acuerdo que contemple los intereses de cada parte, genere un esquema sustentable de prestación de los servicios objeto de la concesión y asegure la realización de las obras de mantenimiento, adecuación y ampliación de la RAC.
- bb) Que el 15 de enero de 2009 CASISA cursó respuesta a dicha invitación, fijando su posición con referencia a la misma.
- cc) Que el 30 de diciembre de 2008 el E.R.Se.P, por Resolución N° 4210/08, consideró adecuados los valores tarifarios propuestos por la Provincia a fin de lograr restituir el equilibrio operativo de corto plazo de la Concesión.
- dd) Que el 30 de diciembre de 2008 el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 13° Nominación, Soc.1 – Sec. mediante Sentencia N° 845, decretó la apertura del Concurso Preventivo de CASISA, fijando el plazo para el cual se presentan los pedidos de verificación y títulos justificativos de créditos hasta el del 1° de abril de 2009.
- ee) Que el 15 de enero de 2009 se dictó el Decreto N° 34/09 por el cual se aprobó el incremento tarifario y el nuevo cuadro tarifario para los años 2009 y 2010 aplicable a la RAC, , habiendo CASISA fijado su posición por notas CS/4663/ER/08, del 11 de diciembre de 2008; CS/4679/ER/08, del 30 de diciembre de 2008; CS/4692/ER/09 y CS/1830/00/09, ambas del 23 de enero de 2009; y CS/4719/ER/09, del 20 de febrero de 2009.
- ff) Que con fecha 23 de enero de 2009 CASISA presentó un recurso de reconsideración contra los artículos 2° y 3° del Decreto N° 34/09, por considerar que su aplicación conlleva una profundización del quiebre de la ecuación económico financiera del Contrato de Concesión y una mayor afectación de su situación patrimonial.
- gg) Que con fecha 25 de enero de 2009 comenzó la aplicación efectiva del cobro del peaje por parte de CASISA a los valores básicos de \$1,50 (pesos uno con 50/100) para el corredor turístico y de \$3,00 (pesos tres) para el corredor

Sra. MARIA JOSE ROMERO

587

587

Ing. JOSE HERENCIA

587

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefe de División de Recurso
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
C/5 (C/5) P/5

Ministerio de Obras y Servicios Públicos

6653E10



productivo, habiendo CASISA fijado su posición al respecto en las notas citadas en el "Considerando" (ee).

- hh) Que con fecha 27 de mayo de 2009, CASISA presentó demanda ante la justicia contencioso administrativa, solicitando la nulidad del Decreto N° 1010/08 y la rescisión del Contrato de Concesión, y, asimismo, que se obligue a la Provincia a recibir la Concesión.
- ii) Que con fecha 23 de abril de 2009 el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia y CASISA suscribieron una Minuta de Entendimiento para impulsar la renegociación del Contrato de Concesión (la "Minuta de Entendimiento"), por la que se conformó una "Comisión Conjunta de Renegociación del Contrato RAC" que tenía por objetivo "la elaboración y suscripción de un 'ACTA DE RENEGOCIACIÓN DEFINITIVA' por la que se modifiquen los términos y condiciones del Contrato de Concesión de modo tal que se posibilite alcanzar una situación de equilibrio contractual sustentable en el largo plazo y que se contemple la recuperación tanto de los costos de operación y mantenimiento así como de las inversiones realizadas por EL CONCESIONARIO, permitiendo a éste la obtención de un margen razonable de beneficio".
- jj) Que, conforme la cláusula 4ª de la referida Minuta de Entendimiento, el acuerdo alcanzado en el acta indicada en el considerando anterior entraría en vigencia antes del 31 de agosto de 2009.
- kk) Que mediante sucesivas prórrogas aprobadas por Decreto N° 1265/09 del 7 de septiembre de 2009, Decreto N° 1419/09 del 5 de octubre de 2009, Decreto N° 1780/09 del 9 de diciembre de 2009 y Decreto N° 32/10 del 13 de enero de 2010, se extendió el plazo originariamente previsto en la cláusula 4ª de la referida Minuta para el 31 de agosto del 2009, al 27 de enero de 2010.
- ll) Que el Vendedor es legítimo titular de 7.508.404 (siete millones quinientos ocho mil cuatrocientos cuatro) acciones de CASISA clase B, ordinarias, nominativas no endosables de valor nominal \$1 y con derecho a un voto cada una, que representan el 6,257% (seis coma doscientos cincuenta y siete por ciento) del capital suscrito y emitido de CASISA. El Vendedor ostenta el derecho real de dominio de las Acciones referenciadas, salvo por la cantidad de 2.252.522 (dos millones doscientos cincuenta y dos mil quinientos veintidós) acciones cuya propiedad fiduciaria ha sido transferida a favor del BBVA Francés S.A., de conformidad con lo previsto en la cláusula 5.6 del Contrato de Concesión y el Contrato de Fideicomiso y Colocación.
- rr) Que el E.R.Se.P verificó en el Concurso Preventivo de CASISA, un crédito por un monto equivalente a \$ 1.305.727,78 (pesos un millón trescientos cinco mil setecientos veintisiete y 78/100).

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

Sra. MARIA JOSE ROMERO



Ing. JUAN JOSÉ HERENCIA
Director de Jurisdicción
Contro. de Trámite y Reg. de Instr. Leg.
Secretaría Legal y Técnica
Fiscalía de Estado
ES COPIA

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Ministerio de Obras y Servicios Públicos

6653410



setecientos veintisiete con 78/100) (el "Crédito E.R.Se.P"), el cual ha sido motivo de un planteo de revisión por parte de CASISA.

- ss) Que el Instituto de Investigación de Servicios Públicos e Infraestructura de la Universidad Nacional de Córdoba, según convenio suscripto con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, ha desarrollado el "Estudio Técnico Económico de la Concesión de la Red de Accesos a Córdoba (RAC)" (el "Estudio Técnico de la Universidad de Córdoba") y como conclusión del mismo ha emitido el Informe Final de fecha 28 de noviembre de 2008, en el que ha estimado que la Base de Capital de la Concesión a ser tomada en cuenta a efectos de la renegociación del Contrato de Concesión, asciende al monto de \$ 416.592.000 (pesos cuatrocientos dieciséis millones quinientos noventa y dos mil).
- tt) Que CASISA, en su nota presentada a la Provincia el 7 de julio de 2009, ha puntualizado los errores que, a su entender, contiene la estimación del Estudio Técnico de la Universidad de Córdoba en relación a la base de capital de la concesión, a raíz de no tomar en cuenta los montos reales de inversión, ni las obras adicionales, ni el efecto financiero del IVA; y expuso, por su parte, que, corrigiendo los referidos errores, el monto de inversión a recuperar por CASISA sería de \$ 816.266.000 (pesos ochocientos dieciséis millones doscientos sesenta y seis mil) guarismo que se elevaría aproximadamente a los \$ 1.800.000.000 (pesos mil ochocientos millones) en caso de aplicarse la Tasa Interna de Retorno de la oferta, es decir, del 15,31% (quince coma treinta y uno por ciento), en lugar de la del 7,24% (siete coma veinticuatro por ciento) aplicada por la Universidad Nacional de Córdoba.
- uu) Que en el Informe General del síndico presentado en el Concurso Preventivo de CASISA se atribuye a los activos de CASISA un valor de \$1.685.426.749 (pesos mil seiscientos ochenta y cinco millones cuatrocientos veintiséis mil setecientos cuarenta y nueve).
- vv) Que según el Informe General del Concurso Preventivo de CASISA elaborado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39, inc. 3, de la Ley N° 25.589, la composición del pasivo, que incluye también como previsión, detalle de los créditos que CASISA denunciara en su presentación y que se hubieren presentado a verificar, así como los demás que resulten de la contabilidad o de otros elementos verosímiles, asciende a la suma de \$ 484.084.703,80 (pesos cuatrocientos ochenta y cuatro millones ochenta y cuatro mil setecientos tres con 80/100).
- ww) Que el Comprador y CASISA no han podido hasta el presente, y por sucesivas ampliaciones de plazo acordadas por ellas, arribar a un acuerdo con relación a la renegociación definitiva del Contrato de Concesión en el marco de la Minuta de Entendimiento mencionada en el "considerando" (ii).

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

2da MARIA JOSE ROMERO

Ing. JUAN JOSE HERNANDEZ
Subdirector de Jurisdicción
Procedimientos de Inscripción, Leg
Subsecretaría Legal y Técnica
Fiscalía de Estado
COPIA

587

Ministerio de Obras y Servicios Públicos

6653E10



xx) Que mediante el Convenio de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos celebrado entre la Provincia e Impregilo International Infrastructures N.V (en adelante, "Impregilo International") con fecha 3 de febrero de 2010 (el "Convenio de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos"), Impregilo International, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas antes del 30 de mayo de 2010 y a que cumplidas éstas, se lleven a cabo el 25 de junio de 2010 todos los actos previstos para el Cierre, transfirió a favor de la Provincia la totalidad de su participación accionaria (90,52%) en CASISA, conformada por 108.624.358 (ciento ocho millones seiscientos veinticuatro mil trescientos cincuenta y ocho) acciones clase A ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal un Peso (\$ 1) cada una y con derecho a un voto por acción, representativas del 90,52% (noventa coma cincuenta y dos por ciento) del capital y de los votos de la Sociedad, con sus consecuentes derechos patrimoniales y políticos, incluyendo entre estas acciones las que fueron transferidas fiduciariamente a favor del BBVA Banco Francés S.A. de conformidad con lo previsto en la cláusula 5.6. del Contrato de Concesión y en el Contrato de Fideicomiso y Colocación (las "Acciones Fideicomitidas"), respecto de las cuales Impregilo Internacional tiene (a) el derecho a percibir su respectiva porción del producido de la colocación de las Acciones Fideicomitidas resultante de la oferta pública y/o el derecho de recuperar para sí dichas Acciones Fideicomitidas en el supuesto que se opte por incrementar el capital social de CASISA a fin de destinarlo a la oferta pública, según lo establecido en la Cláusula 7.6 del Contrato de Fideicomiso y Colocación y en la Cláusula 5.7 del Contrato de Concesión, y (b) el derecho a percibir los dividendos en efectivo correspondientes a dichas Acciones Fideicomitidas y cualquier otra distribución en efectivo que hiciere CASISA en relación a las mismas, en adelante, la "Transferencia Accionaria de Impregilo".

yy) El precio que las Partes del Convenio de Compraventa de Acciones y reestructuración de Pasivos asignaron a la Transferencia Accionaria de Impregilo, fue de US\$ 20.000.000 (dólares estadounidenses veinte millones), a ser pagado de la siguiente manera: (i) US\$ 100.000 (dólares estadounidenses cien mil) en el momento del Cierre que debería operarse el 25 de junio de 2010 si antes del 30 de mayo de 2010 se cumplieran las condiciones suspensivas a las que sujeto dicho Cierre; y (ii) el saldo de US\$ 19.900.000 (dólares estadounidenses diecinueve millones novecientos mil), en 83 (ochenta y tres) cuotas mensuales, consecutivas e iguales que incluyen intereses a la tasa del 9,5% anual, de US\$ 328.442,00 (dólares estadounidenses trescientos veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y dos).

zz) El pago total del referido precio de compra y sus intereses, de la Transferencia Accionaria de Impregilo, fue garantizado mediante cesión a Impregilo International en el acto del Cierre, de los derechos de cobro de la Provincia de la

Sra. MARIA JOSE RUIZ

587 8

Sra. MARIA JOSE RUIZ
Jefa de División Desempeño
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Sra. MARIA JOSE RUIZ
Jefa de División Desempeño
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Jurisdicción
y Reg. de Instr. Leg.
Subsecretaría Legal y Técnica
de Estado
ES COPIA

Ministerio de Obras y Servicios Públicos

6653E10



coparticipación federal de impuestos nacionales que le corresponda a la Provincia.

aaa) Que el Comprador considera que las referidas condiciones de la Transferencia Accionaria de Impregilo, aplicadas en proporción a su participación accionaria en CASISA, resultan adecuadas a los fines de la transferencia de sus acciones en CASISA a la Provincia.

bbb) Que, frente a todo lo expuesto en los párrafos precedentes, el Vendedor está conteste en transferir sus acciones a la Provincia, en análogas condiciones que las acordadas por ésta en la Transferencia Accionaria de Impregilo, para el caso que se opere el Cierre del Convenio de Compra de Acciones y reestructuración de Pasivos previsto en el mismo para el 25 de junio de 2010.

Por ello y en atención a los considerandos expuestos, las partes acuerdan en celebrar el presente:

CONVENIO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES (el "Convenio")

TÍTULO I

DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN

1.1 Definiciones: Tal como se utilizan bajo el presente Convenio y sin perjuicio de otras definiciones contenidas en el presente, los siguientes términos tendrán el significado que se detalla a continuación:

"Acciones" significa 7.508.404 (siete millones quinientos ocho mil cuatrocientos cuatro) acciones clase B ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal un Peso (\$ 1) cada una y con derecho a un voto por acción, de titularidad de CODI S.A., representativas del 6,257 % (seis como doscientos cincuenta y siete por ciento) del capital y de los votos de CASISA, con sus consecuentes derechos patrimoniales y políticos. Se encuentran comprendidas entre estas acciones, las 2.252.522 (dos millones doscientos cincuenta y dos mil quinientos veintidós) que fueron transferidas fiduciariamente a favor del BBVA Banco Francés S.A. de conformidad con lo previsto en la cláusula 5.6. del Contrato de Concesión y en el Contrato de Fideicomiso y Colocación (las "**Acciones Fideicomitidas**"), respecto de las cuales el Vendedor tiene (a) el derecho a percibir su respectiva porción del producido de la colocación de las Acciones Fideicomitidas resultante de la oferta pública y/o el derecho de recuperar para sí dichas Acciones Fideicomitidas en el supuesto que se opte por incrementar el capital social de CASISA a fin de destinarlo a la oferta pública, según lo establecido en la Cláusula 7.6 del Contrato de Fideicomiso y Colocación y en la Cláusula 5.7 del Contrato de Concesión, y (b) el derecho a percibir los dividendos en efectivo correspondientes a dichas Acciones Fideicomitidas y cualquier otra distribución en efectivo que hiciere CASISA en relación a las mismas, según lo dispone la cláusula 4.3

ing. JUAN JOSE REVENCHY
Subdirector de Inspección
Control de Trans. y Reg. de Instr. L. 19
Subsecretaría Legal y Técnica
Fiscalía de Estado

ES COPIA

MARIA JOSE ROMERO
Ing. de Control, Inspección
Fiscalía de Estado

Sra MARIA JOSE ROMERO

6653E10
Ministerio de Obras y Servicios Públicos



del Contrato de Fideicomiso y Colocación y en la cláusula 5.6 del Contrato de Concesión.

“CASISA” o la “Sociedad” tiene el significado asignado en los Considerandos.

“Cierre” significa el conjunto de operaciones previstas en el Artículo VII para que se produzca la transferencia de las Acciones al Comprador y se efectúen los pagos previstos con afectación al Precio del Compra. La fecha en que ello ocurra se denomina “Fecha de Cierre”.

“Cierre del Convenio de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos”, significa el conjunto de operaciones previstas en el Artículo VIII del Convenio de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos, para que se produzca la transferencia de las acciones de Impregilo International al Comprador. La fecha en que ello ocurra está prevista para el 25 de junio de 2010.

“Cláusula Penal sobre el saldo de Precio de Compra” significa la cláusula penal estipulada en el Artículo 3.4.

“Concurso Preventivo de CASISA” significa el proceso concursal iniciado conforme se describe en los “Considerandos” (z) y (dd).

“Convenio” significa el presente Convenio.

ing. JUAN JOSÉ HERENCIA
Subdirector de Inspección
Control de Tránsito y Reg. de Instr. L. 14
Subsecretaría Legal y Asesoría
Fiscalía de Estado

“Convenio de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos” es el Convenio de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos celebrado entre la Provincia e Impregilo International Infrastructures N.V. con fecha 3 de febrero de 2010, mencionado en el “Considerando” (xx).

“Contrato de Concesión” es el instrumento mencionado en el “Considerando” (c).

“Contrato de Fideicomiso y Colocación” Es el contrato suscripto con fecha 7 de agosto de 1998 entre (a) Banco Río de la Plata S.A. como Banco Designado, (b) Banco Río de la Plata S.A. y Galicia Capital Markets S.A. como los colocadores, (c) José Cartellone Construcciones Civiles S.A., Impregilo S.p.A., IGLYS S.A., Codi S.A., Empresas Constructora Delta S.A., y Carlos A. Caruso y Cía. S.A.C. e I. como los Socios, y (d) CASISA, en virtud del cual los referidos Socios, transfirieron a favor del Banco Río de la Plata, la propiedad fiduciaria de las acciones ordinarias emitidas por CASISA que eran de su propiedad, representativas del 30% del capital social y de los votos de CASISA; contrato que fuera luego modificado por (i) el Acuerdo Modificatorio al Contrato de Fideicomiso y Colocación suscripto con fecha 16 de agosto de 2001 por el cual se reemplazó a Banco Río de la Plata S.A. en su carácter de Banco Designado por BBVA Banco Francés S.A., (ii) el Segundo Acuerdo Modificatorio de fecha 6 de septiembre de 2001, por el cual se deja constancia del reemplazo de José Cartellone Construcciones Civiles S.A. por Banco Río de la Plata S.A., Banco Galicia y Buenos Aires S.A. e Impregilo S.p.A. en carácter de accionistas

Dr. MARIN ROSENBERG
Procurador General
Fiscalía de Estado

5.8.7 10
Sta. MARIA ROSENBERG

6653E10
Ministerio de Obras y Servicios Públicos



de CASISA y titulares de las acciones de aquél cedidas en fideicomiso; (iii) el Tercer Acuerdo Modificatorio de fecha 10 de septiembre de 2003, por el cual se adecua el Contrato de Fideicomiso y Colocación al nuevo plazo dispuesto por la Provincia para la realización de la oferta pública de las acciones fideicomitidas; (iv) el Cuarto Acuerdo Modificatorio de fecha 13 de septiembre de 2004, por el cual se deja constancia del reemplazo de Banco Río de la Plata S.A. y Banco Galicia y Buenos Aires S.A. por Impregilo International Infrastructures N.V. en carácter de accionista de CASISA y titular de las acciones de aquéllos cedidas en fideicomiso; y (v) el Quinto Acuerdo Modificatorio de fecha 28 de octubre de 2005, por el cual se deja constancia del reemplazo de Impregilo S.p.A. e IGLYS S.A. por Impregilo International Infrastructures N.V. en carácter de accionista de CASISA y titular de las acciones de aquéllos cedidas en fideicomiso.

“Coparticipación Federal” significa la coparticipación federal de impuestos nacionales que le corresponda percibir a la Provincia de acuerdo a la normativa vigente cuyos derechos de cobro serán cedidos fiduciariamente al Fideicomiso Financiero en las condiciones establecidas en el presente Convenio.

“Día Hábil” significa cualquier día que no fuere sábado, domingo, feriado, o día no laborable en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

“Evento de Incumplimiento” tendrá el significado asignado en el Artículo 8.399. JUAN JOSÉ HERENCO, Subdirector de Jurisdicción Control de Trámite y Reg. de Instr. Leg. Subsecretaría Legal y Técnica Provincia de Córdoba.

“Fideicomiso Financiero del Crédito Ex - Galicia” es el Fideicomiso Financiero el que actualmente se encuentra afectado el 35% (treinta y cinco por ciento) de la cobranza de CASISA, al pago del crédito del Banco Galicia de Galicia y Buenos Aires S.A. equivalente a la suma de \$ 54.528.593,36 (pesos cincuenta y cuatro millones quinientos veintiocho mil quinientos noventa y tres con 36/100) que fuera cedido a IGLYS S.A.

“Fideicomiso Financiero” es el “Fideicomiso Financiero del Crédito Ex - Galicia” según se lo modifique o reemplace, manteniendo al mismo Fiduciario.

“Fiduciario” es el fiduciario del Fideicomiso Financiero, actualmente el Banco Santander Río, o quien lo reemplace.

“Garantía de la Provincia” significa la garantía previstas en el Artículo 3.5.

“Gravamen” significa cualquier gravamen, embargo, hipoteca, prenda, usufructo, servidumbre ya sea que hayan sido incurridos voluntariamente, con excepción del fideicomiso relacionado en el “Considerando” (mm) y de cualquier otro que las partes acuerden.

“Impuestos” significa cualquier impuesto, tasa o carga a pagarse al Estado Nacional de la República Argentina, o de cualquiera de sus Provincias, Municipios u otras subdivisiones políticas o entidades.

[Handwritten signature]

587

Sra. MARIA J. ROMERO
Jefe de División Pasado
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

6653E10

Ministerio de Obras y Servicios Públicos



“Minuta de Entendimiento” es el instrumento mencionado en el “Considerando” (ii).

“Nuevo Modelo Regulatorio” significa el nuevo esquema económico-financiero del Contrato de Concesión a ser acordado antes del vencimiento del Plazo de Cumplimiento de las Condiciones Suspensivas, entre CASISA y la Provincia, por el que se prevea que los ingresos globales de CASISA se mantendrán actualizados en función de los costos integrales de explotación de la RAC, incluyendo en los mismos la amortización de los pasivos reestructurados de CASISA, como mínimo hasta el repago total del Crédito Reestructurado de Impregilo International.

“Obligaciones Condicionales de Pago” son, (i) en su caso, la Cláusula Penal sobre el saldo del Precio de Compra; y (ii) en su caso, las costas que deba soportar la Provincia.

“Obligaciones de Pago” son, conjuntamente, las obligaciones de pago de: (i) el Precio de Compra y (ii) los intereses compensatorios y/o moratorios y demás accesorios que el mismo devengue.

“Parte” significa, en forma individual, el Vendedor o el Comprador.

“Partes” significa, en forma conjunta, el Vendedor y la Provincia.

“Precio de Compra” tiene el significado asignado en el Artículo 3.1.

ing. JUAN JOSÉ HERENCIA
Subdirector de Inspección
Control de Tránsito y Reg. de Instr. Leg.
Subsecretaría Legal y Técnica
Fiscalía de Estado
ES COPIA

Interpretación:

- Salvo indicación en contrario, las referencias que se hicieren a un Considerando, Título o a Artículo, se referirán a un Considerando, Título o Artículo del Convenio.
- El encabezamiento o el sub-encabezamiento de los Títulos o Artículos se insertan como referencia y no podrán afectar la interpretación.
- Cuando el contexto así lo admitiere, cualquier referencia realizada en singular incluirá también al plural, y cualquier referencia realizada en plural incluirá también el singular, como así también cualquier referencia realizada a un género incluirá todos los géneros.
- Las referencias que se realizaren a días o fechas (incluyendo en forma enunciativa la Fecha de Cierre) que no coincidan con un Día Hábil serán interpretadas como referencias al día o fecha inmediatamente posterior que fuere un Día Hábil.
- La palabra “incluyendo” (o sus derivados, v. gr. “incluye”) siempre será interpretada, salvo indicación expresa en contrario, de manera que significará “incluyendo en forma enunciativa”.

ing. JUAN JOSÉ HERENCIA
Subdirector de Inspección
Control de Tránsito y Reg. de Instr. Leg.
Subsecretaría Legal y Técnica
Fiscalía de Estado
ES COPIA

Sra. MARIA DEL ROSARIO
Jefe de División Desempeño de Funciones

587

6653E10

Ministerio de Obras y Servicios Públicos



- (f) En el cálculo de los períodos de tiempo contados desde una fecha determinada hasta otra fecha determinada, la palabra “desde” significa “desde pero excluyendo” y las palabras “hasta” y “a” significan “hasta e incluyendo”.
- (g) El término “días” significará días calendario.

20

TÍTULO II

OBJETO

2.1 El presente Convenio tiene por objeto que, una vez cumplidas las condiciones establecidas en el Título VI del presente Convenio, que el Vendedor transfiera las Acciones al Comprador, y éste adquiera las mismas del Vendedor, libres de todo Gravamen.

TÍTULO III

PRECIO DE COMPRA DE LAS ACCIONES

3.1 El precio que las Partes de la Compraventa asignan por la transferencia de las Acciones (el “Precio de Compra”), es de US\$ 1.382.452 (dólares estadounidenses un millón trescientos ochenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y dos). Este importe será pagado por el Comprador al Vendedor de la siguiente manera: (i) US\$ 6.912 (dólares estadounidenses seis mil novecientos doce) en el momento del Cierre; y (ii) el saldo de US\$ 1.375.540 (dólares estadounidenses un millón trescientos setenta y cinco mil quinientos cuarenta) en 83 (ochenta y tres) cuotas mensuales de US\$ 22.703 (dólares estadounidenses veintidós mil setecientos tres). Dichas cuotas serán mensuales, consecutivas e iguales, e incluyen capital e intereses. La primera de ellas vencerá el día 28 (veintiocho), o si éste no fuera hábil, el día hábil inmediato siguiente, del mes calendario inmediatamente posterior a la Fecha de Cierre y a partir de allí, cada cuota subsiguiente vencerá entre el día 28 (veintiocho) y el día 3 (tres) del mes calendario sucesivo. En función de verificarse el cierre final el día 25 de Agosto de 2010 conforme a la cláusula 7.1, la cuota 1 y 2 se efectivizaran conjuntamente con el anticipo del punto (i) arriba descripto, abonando las restantes cuotas conforme lo dispone el presente artículo,

3.2 El Precio de Compra a abonar por el Comprador conforme se detalla en el apartado anterior devengará desde la Fecha de Cierre, un interés equivalente a una tasa del 9 ½ % (nueve y medio por ciento) anual sobre saldos deudores, el que está incluido en el cálculo de las cuotas mensuales consecutivas e iguales indicadas. El Comprador pagará cada cuota de capital e intereses del Precio de Compra mediante la entrega al Fiduciario de la cantidad de pesos necesaria para adquirir las divisas necesarias para que el

ING. JUAN JOSE HERENC
Subdirector de Jurisdicción
Control de Trámite y Reg. de Instr. La
Subsecretaría Legal y Técnica
Fiscalía de Estado
ES COPIA

ING. MARIA JOSE ROMERO
Jefe de División, Trámites
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA PUEL

527 13

ING. MARIA JOSE ROMERO
Jefe de División, Trámites
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Ministerio de Obras y Servicios Públicos

6653E10



Fiduciario pueda ingresar a la cuenta del banco que el Vendedor le haya indicado, los montos íntegros que, una vez acreditados, sean equivalentes y se correspondan a cada una de las cuotas de capital e intereses del Precio de Compra. En el caso previsto en el Artículo 5.5, el Comprador no será responsable por la restricción pero deberá cumplir el pago de la manera allí prevista. Todo impuesto de cualquier tipo que se establezca a partir de la firma del presente Convenio, así como todo incremento de impuesto existente a la fecha de firma del presente Convenio, resultantes en ambos casos ya sea de nuevas normas y/o de nuevas interpretaciones de normas vigentes, y que recaiga sobre el pago al Vendedor y/o la transferencia a la cuenta bancaria del Vendedor, estará a cargo del Comprador como accesorio del Precio de Compra.

3.3 Sin perjuicio de los plazos concedidos para cada una de las cuotas, la falta de pago de cualquiera de ellas, previa intimación por 15 (quince) días por medio fehaciente, producirá de pleno derecho la caducidad de los plazos de todas las cuotas restantes, las que serán exigibles a partir de ese momento, junto con los intereses por mora que se indican seguidamente y, en su caso y si correspondiera según lo dispuesto en el punto 3.4, la Cláusula Penal sobre el saldo de Precio de Compra. En tal supuesto, los intereses durante la mora, en lugar del 9,5% (nueve coma cinco por ciento) expresados en el Artículo 3.2, se incrementarán al 15% (quince por ciento) anual.

3.4 Si la mora en el pago de las cuotas del Precio de Compra excediera de seis meses (en un solo período o sumando todos los períodos de mora incurridos, ya sea en una o más cuotas del saldo del Precio de Compra y/o del total de las mismas en caso de producirse la caducidad de los plazos) se devengará, adicionalmente a los intereses moratorios, una cláusula penal de US\$ 414.735 (dólares estadounidenses cuatrocientos catorce mil setecientos treinta y cinco) la que deberá ser pagada por el Comprador dentro de los 30 (treinta días) de así requerirlo el Vendedor.

3.5 El Comprador garantizará al Vendedor el pago total del Precio de Compra con sus intereses y demás Obligaciones de Pago, y afectará irrevocablemente al efecto la Coparticipación Federal, por un monto equivalente al saldo del Precio de Compra impago, a cuyo fin cederá al Vendedor en el acto del Cierre los derechos de cobro de esa Coparticipación Federal para el caso de que las cuotas pactadas y sus intereses no fueran abonadas a su vencimiento. En el caso de las Obligaciones Condicionales de Pago, la Provincia garantizará su pago mediante la cesión al Vendedor de los derechos de cobro de la Coparticipación Federal en los términos del Artículo 4.2.

3.6 En caso de que las Acciones adquiridas por la Provincia sean transferidas a un tercero, el Vendedor aceptará la sustitución de la garantía de Coparticipación Federal otorgada por la Provincia para el pago de las Acciones si el nuevo adquirente de las Acciones presenta una garantía bancaria a favor del Vendedor otorgada por el Banco de la Nación Argentina o por una entidad financiera internacional de reconocida solvencia y prestigio y calificada "A" o equivalente por Moody's, S&P o Fitch, con términos sustancialmente equivalentes a los de las Garantías de la Provincia.

JUAN JOSE HEREDIA
Secretario de Trabajo y Reg. de Instr. Legal
Escuela de Estado
ES COPIA

MARIA JOSE ROMERO
Mesa de Enlace y Seguimiento
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

587 14

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefe de Mesa

Ministerio de Obras y Servicios Públicos

6653E10



3.7 El crédito resultante del saldo del Precio de Compra y sus accesorios, será cesible, en todo o en parte, con efecto ante la Provincia, a partir de que la cesión le sea fehacientemente notificada.

TÍTULO IV

OBLIGACIONES DE PAGO DE LA PROVINCIA

4.1 A los efectos de implementar las Garantías de la Provincia, en el acto de Cierre la Provincia entregará al Acreedor, para su posterior entrega al Banco de la Nación Argentina, una carta instruyendo irrevocablemente a este último a pagar al Vendedor y al Acreedor las sumas necesarias (de acuerdo con lo previsto en el Artículos 3.2) para el pago de cada cuota de capital e intereses del Precio de Compra vencida que el Fiduciario le informe que no ha sido pagada en término, debiendo el Banco de la Nación Argentina pagar al Fiduciario el monto así informado por éste dentro de los cinco días hábiles de haber recibido dicha información, afectando para ello el porcentaje que corresponda de la acreditación periódica de fondos correspondientes a la Provincia en concepto de Coparticipación Federal. La instrucción al Banco de la Nación Argentina preverá que, en caso de que por un faltante transitorio en la cuenta en la que se acredite a favor de la Provincia la Coparticipación Federal no se pudiese atender, total o parcialmente, una o más cuotas de capital e intereses del Precio de Compra, dicho faltante será pagado de inmediato, aun parcialmente, a medida que se acredite en los fondos necesarios en dicha cuenta.

4.2 Análogamente, la Provincia deberá gestionar la aprobación y la aceptación previstas en los Artículos 5.1.4 y 5.1.12, respectivamente, con respecto a las Obligaciones Condicionales de Pago, e instruir irrevocablemente al Banco de la Nación Argentina a pagar de inmediato al Vendedor y/o al Acreedor, según corresponda, ante la solicitud del propio Vendedor y, en su caso, ante una orden en tal sentido de un tribunal arbitral o judicial competente, la totalidad de las cuotas pendientes del Precio de Compra, con sus intereses compensatorios y moratorios, en caso de operarse la caducidad de plazos, con más, en su caso, el monto de las Obligaciones Condicionales de Pago que se hubieren devengado, afectando para todo ello el porcentaje que corresponda de los depósitos diarios correspondientes a la Provincia en concepto de Coparticipación Federal. En caso de que la Provincia (i) no haya obtenido las referidas aprobación y/o aceptación y/o (ii) no expida dicha instrucción dentro de los 30 (treinta) días (plazo que podrá extenderse por otros 30 [treinta] días, a pedido de la Provincia, por una única vez) de requerirlo el Vendedor o, de promover la Provincia el Arbitraje cuestionando dentro de dicho plazo la procedencia de las Obligaciones Condicionales de Pago y/o de la caducidad de los plazos, dentro de los treinta días de haber quedado firme el laudo que disponga dicha procedencia, la Provincia deberá pagar al Vendedor una multa diaria de US\$ 1.382,45 (dólares estadounidenses mil trescientos ochenta y dos con cuarenta y cinco centavos) hasta que otorgue dicha instrucción o se pague al Vendedor y/o al Acreedor, según corresponda, el total de la suma adeudada por las Obligaciones de Pago y las

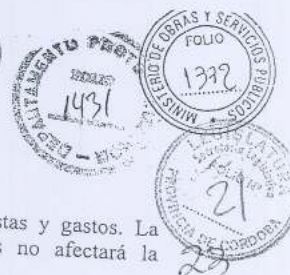
ES COPIA

Sra. MARIA JOSE BARRERA

587

Ministerio de Obras y Servicios Públicos

6658E10



Obligaciones Condicionales de Pago y sus intereses acrecidos, costas y gastos. La existencia del trámite del Arbitraje y demás trámites accesorios no afectará la continuidad del régimen y de los pagos previstos en el Artículo 4.1.

4.3 La afectación de la Coparticipación Federal no se entenderá como limitando la responsabilidad de la Provincia de responder con su restante patrimonio por las Obligaciones de Pago y por las Obligaciones Condicionales de Pago en los términos del Artículo 4.2 que asume bajo el presente Convenio.

4.4 En caso de que en cualquier momento existiere cualquier prohibición por parte del Banco Central de la República Argentina o existiere cualquier otra restricción y/o prohibición por parte de cualquier otra autoridad de la República Argentina que efectivamente impida o restrinja el acceso por parte del Fiduciario al mercado libre de cambios en la República Argentina, que impida transferir al Vendedor todos o algunos de los pagos debidos bajo el presente Convenio, la Provincia no será responsable por tal restricción, pero deberá cumplir dichos pagos y, para ello, deberá entregar al Fiduciario la cantidad de pesos necesaria para que éste último realice, a opción del Vendedor, alguna de las siguientes operaciones a efectos de efectuar el pago: (i) adquiera FRB ("Floating Rate Bonds") con cotización en dólares estadounidenses en el exterior, en una cantidad tal que, liquidados en un mercado del exterior en precios y condiciones de plaza, y una vez deducidos los impuestos, gastos, costos y/o comisiones correspondientes, su producido en dólares estadounidenses fuere igual a la cantidad total que deba ser transferida; o bien (ii) adquiera títulos de deuda pública o privada (incluyendo, pero no limitado al Bonex Global, obligaciones negociables, etc.) o de acciones de compañías privadas argentinas con cotización en dólares estadounidenses en el exterior, en una cantidad tal que, liquidados en un mercado del exterior en precios y condiciones de plaza, y una vez deducidos los impuestos, gastos, costos y/o comisiones correspondientes, su producido en dólares estadounidenses fuere igual a la cantidad total en dicha moneda que deba ser transferida; o bien (iii) deposite Pesos (o aquella moneda que en aquel momento tuviere curso legal en la República Argentina) en una cantidad tal que, en la fecha de transferencia de que se trate dichos Pesos fueren suficientes, una vez deducidos los impuestos, costos, comisiones y/o gastos que correspondieren para adquirir la totalidad de los dólares estadounidenses que deban ser transferidos, según el tipo de cambio detallado en la pantalla denominada "Reuters Currency Page" correspondiente al día hábil bancario anterior al de conversión para efectuar adquisiciones de dólares estadounidenses con pesos en la Ciudad de Nueva York a las 12 (doce) horas PM (hora de la ciudad de Nueva York) de la fecha de transferencia o pago, o bien (iv) mediante cualquier otro procedimiento existente en la República Argentina o en el exterior, en cualquier fecha en que deba efectuarse una transferencia para la adquisición de dólares estadounidenses.

COPIA

DR. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

TÍTULO V
CONDICIONES

587

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

Ministerio de Obras y Servicios Públicos

6653E10



5.1 Según fuera condición de la oferta, el denominado Cierre para el presente, se verificará a los sesenta días (60) del previsto para igual situación en la compraventa de acciones y reestructuración de pasivos suscripto con Impregilo y si y solo si este se verificara satisfactoriamente, se incorpora como Anexo Único del presente, la propuesta de fecha 19 de marzo de 2010 remitida por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y su correspondiente aceptación por CODI S.A. de fecha 22 de marzo de 2010 Sin perjuicio de lo referido, para el presente y a los fines de que se pueda verificar el cierre para la presente previsto para el día 25 de Agosto de 2010 deberán antes de dicha fecha verificarse las siguientes condiciones suspensivas (las “Condiciones Suspensivas”):

5.1.1 Verificación por parte del Comprador del estado patrimonial de CASISA y de la inexistencia de pasivos o compromisos de pago contraídos con posterioridad a la fecha del Concurso Preventivo de CASISA que modifiquen sensiblemente su situación patrimonial o puedan afectar el equilibrio financiero de la sociedad.

5.1.2 Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de un Decreto del Gobernador de la Provincia aprobando el sistema de ajuste tarifario aplicable a CASISA en el marco del Nuevo Modelo Regulatorio.

5.1.3 Aprobación por la Legislatura provincial del endeudamiento, de la afectación de los fondos coparticipables y de toda otra cláusula del presente Convenio que requiera tal aprobación en los términos de la Ley Provincial N° 9.086 y demás normativa aplicable.

5.1.4 Emisión por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación u otra autoridad nacional competente de la aprobación del otorgamiento por parte de la Provincia de la garantía mediante la Coparticipación Federal para el pago total de las Obligaciones de Pago en los términos previstos en los Títulos III y IV.

5.1.5 Emisión por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación u otra autoridad nacional competente de la aprobación prevista en las Leyes N° 25.570 y N° 25.917 con respecto al pasivo que la Provincia asume por el presente Convenio y la garantía sobre la Coparticipación Federal que otorga en el marco del presente Convenio.

5.1.6 Aprobación, si fuere necesaria, de la compra de las acciones en los términos del Artículo 8° de la Ley N° 25.156 otorgada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (“CNDC”).

5.1.7 Haberse implementado o haberse aprobado la norma legal de aplicación para el nuevo Modelo Regulatorio de la Concesión, que deberá regir la misma a partir de la fecha de Cierre.

5.1.8 Suscripción de un acuerdo modificatorio al Contrato de Fideicomiso y Colocación, a fin de reflejar los cambios resultantes de la cesión por parte del Vendedor al Comprador de la totalidad de los derechos y obligaciones que le corresponden en virtud de dicho Contrato de Fideicomiso y Colocación.

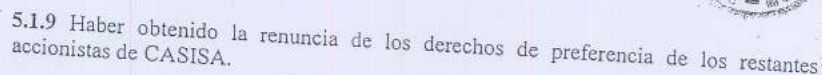
Dr. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Ejecución
Unidad de Obras y Servicios Públicos
E/CORREA (B)

[Handwritten signature]

507

JUSTANZA MAYOR DE PLAZA
JEFE DEPARTAMENTO DESPACHO
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
GOBIERNO DE CORDOBA

[Handwritten signature]



5.1.10 Haber notificado mediante el acta notarial a la Nación, de la cesión al Acreedor de los derechos de cobro de la Coparticipación Federal otorgada en garantía de pago del Precio de Compra, sus intereses y accesorios y demás Obligaciones de Pago.

5.1.11 Se haya homologado el Concordato ofrecido por CASISA en el marco del Concurso Preventivo de CASISA y CASISA no haya sido declarada en quiebra.

5.1.12 Aceptación por parte del Banco de la Nación Argentina de las instrucciones irrevocables previstas en el Artículo 4.1.

5.1.13 Se haya producido el Cierre del Convenio de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos que las Partes declaran conocer.

5.2 Ninguna de la Partes tendrá responsabilidad alguna frente a la/s otra/s o a terceros por la falta de cumplimiento de una o más de las Condiciones Suspensivas, en tanto ello no sea el resultado de un incumplimiento del estándar previsto en el Artículo 6.1.2.

5.3 Las siguientes Condiciones Suspensivas se entienden pactadas a favor del Vendedor quien podrá, a su sola discreción y según corresponda en cada caso, renunciar a una o más de ellas: 5.1.4; 5.1.5; 5.1.6; 5.1.10 y 5.1.12.

5.4 Las Condiciones Suspensivas previstas en los Artículos 5.1.1; 5.1.9 y 5.1.11 se entienden pactadas a favor del Comprador quien podrá, a su sola discreción, renunciar a cualquiera de ellas.

5.5 Las Condiciones Suspensivas no pactadas a favor de todas las Partes, previstas en los Artículos 5.3 y 5.4 se entenderán

5.6 Sin perjuicio de las condiciones suspensivas condicionantes del cierre del presente (que se produzca el Cierre con de Compraventa de acciones y reestructuración de Pasivos con Impregilo), en caso de que para el 25 de Agosto de 2010 (el "Plazo de Cumplimiento de las Condiciones Suspensivas") no se hubieran cumplido todas las Condiciones Suspensivas, y no hubieran sido renunciadas todas las incumplidas por la Parte o Partes a quien favorece(n), cualquiera de las Partes podrá, desde ese momento y en adelante y mientras dicha situación se mantenga, declarar rescindido de pleno derecho el Convenio mediante comunicación cursada por medio fehaciente a la/s otra/s parte/s, y será de allí en más de aplicación el Artículo 12.2.

5.7 Si para el 30 de Abril de 2010 no se hubiere publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el decreto del Poder Ejecutivo provincial que aprueba el presente Convenio, el Vendedor podrá de allí en más y mientras dicha situación se mantenga, declarar por sí y ante sí terminado el presente Convenio notificando tal terminación a la Provincia, en cuyo caso serán de aplicación las reglas previstas en el Artículo 11.2.

ing. JUAN JOSÉ HERENCIA
Subdirector de Jurisdicción
Control de Tráfico Aéreo de Inst. Lav

Sra. MARIA JOSE

Ministerio de Obras y Servicios Públicos

6653E10



TÍTULO VI

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

6.1 A partir de la firma del presente Convenio las Partes tendrán las siguientes obligaciones:

6.1.1 Dentro de los 7 (siete) días contados desde la firma del presente Convenio, las Partes harán las presentaciones que correspondan ante la CNDC, describiendo la operación de compraventa objeto de este Convenio, y solicitando se determine si la misma está sujeta a la aprobación prevista en el artículo 8° de la Ley N° 25.156. Si así se determinase las Partes de la Compraventa harán sus mejores esfuerzos a fin de obtenerla. Las Partes deberán suscribir toda la documentación que fuera requerida para formalizar dichos trámites; prestar su más amplia colaboración y brindar toda la información que razonablemente le solicite la CNDC a fin de dar debido cumplimiento con los trámites previstos en dicha Ley tendientes a la obtención de la aprobación de la compraventa de acciones indicada en el presente Convenio. La obligación que la Provincia asume por el presente artículo 6.1.1 sólo se hará efectiva a partir del decimoquinto día contado a partir de la publicación del decreto provincial previsto en el Artículo 5.7.

6.1.2 Las Partes comprometen sus razonables mejores esfuerzos y diligencia para procurar el cumplimiento de las demás condiciones suspensivas

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

TÍTULO VII

CIERRE

7.1 Siempre que, dentro del Plazo de Cumplimiento de las Condiciones Suspensivas, todas las Condiciones Suspensivas se hubieren cumplido y/o renunciado por las Partes a quienes benefician, a excepción de la correspondiente al Cierre con Impregilo de fecha 25 de Junio de 2010, el Cierre de la compraventa de Acciones se operará el día 25 de (veinticinco) de agosto de 2010. El Cierre tendrá lugar en las oficinas de CASISA en Camino de la Merced 5995 de la Ciudad de Córdoba o donde las Partes convengan.

7.2 En el Cierre se otorgarán los siguientes actos como parte de un único y mismo acto:

7.2.1. El Comprador pagará al Vendedor, de la manera prevista en el Artículo 3.2, la parte del Precio de Compra prevista en el Artículo 3.1 para el momento del Cierre.

7.2.2. El Vendedor entregará al Comprador la comunicación prevista por el Artículo 215 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 comunicando la transferencia de las Acciones a favor de la Provincia libres de todo gravamen y se registrará la

Sra. JUAN JOSE HERENCIA
Subdirector de Jurisdicción
Control de Trámites y Reg. de Instr. Leg.
Subsecretaría Legal y Técnica
Ministerio de Estado
ES COPIA

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

Ministerio de Obras y Servicios Públicos

6653E10



transferencia de las Acciones a favor del Comprador, libres de todo gravamen, en el Registro de Accionistas de la Sociedad.

7.2.3. El Comprador entregará al Vendedor las garantías de la Provincia, en los términos previstos en el Artículo 3.5, y su conformidad para afectar la Coparticipación Federal cubriendo la integridad de las Obligaciones de Pago.

7.2.4. Se modificará o reemplazará el Fideicomiso Financiero, con la suscripción de la documentación pertinente por todas las partes involucradas.

7.2.5. La Provincia entregará al Vendedor el acta notarial notificando a la Nación la cesión fiduciaria al Vendedor y al Acreedor de los derechos de cobro de la Coparticipación Federal otorgada en garantía de pago de la totalidad de las Obligaciones de Pago, conjuntamente con la nota dirigida al Banco de la Nación Argentina prevista en el Artículo 4.1, y con la aceptación de este último en los términos del Artículo 5.1.12.

7.2.6. El vendedor entregará al Comprador una carta de renuncia del director titular y suplente, designados por la clase accionaria B, respectivamente, en la última asamblea de designación de autoridades.

7.3 De llevarse a cabo el Cierre, y sujeto al cumplimiento de todos los actos previstos en el Artículo 7.2, se entenderá irrevocablemente y de pleno derecho que: (i) el Vendedor ha renunciado a toda acción contra la Provincia y/o CASISA y/o los funcionarios, directores y empleados de la Provincia y de CASISA, vinculados con el Contrato de Concesión, de causa anterior al Cierre, excepto aquellas acciones que surgen del presente Convenio; (ii) CASISA ha renunciado a toda acción contra la Provincia y/o el Vendedor y/o los funcionarios, directores y empleados de la Provincia y/o del Vendedor, vinculados con el Contrato de Concesión, de causa anterior al Cierre, excepto aquellas acciones que surgen del presente Convenio; (iii) la Provincia ha prestado su conformidad con la situación jurídica, contable, patrimonial, financiera y de otro tipo de CASISA y ha renunciado a toda acción contra el Vendedor, CASISA y/o los funcionarios, directores y empleados del Vendedor y/o de CASISA, vinculados con el Contrato de Concesión, de causa anterior al Cierre, y con dicha situación, excepto aquellas acciones que surgen del presente Convenio.

7.4 Si por cualquier razón, atribuible o no a cualquiera de las Partes, no fuera posible otorgar el Cierre con todos los actos previstos para el mismo, para la Fecha de Cierre, el presente Convenio quedará de pleno derecho sin efecto sin responsabilidad para ninguna de las Partes, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 6.1.2, y será de aplicación el Artículo 12.2.

TÍTULO VIII

Sra. MARIA JOSE ROMERO

ing. JUAN JOSE HERENCIA

Subdirector de Jurisdicción
Control de Tránsito y Reg. de Instr. Leg.
Subsecretaría Legal y Técnica
Fiscalía de Estado

ES COPIA
Firma de División Despacho
Firma de Obras y Servicios Públicos
Firma de Obras y Servicios Públicos

Ministerio de Obras y Servicios Públicos

665341



SITUACIÓN DE CASISA Y EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO

8.1. En ningún caso la declaración de quiebra de CASISA, sea por cualquier causa que fuera, en cualquier momento en que ella se produzca después del Cierre: (i) hará responsable al Vendedor frente a la Provincia; (ii) podrá ser invocada por la Provincia ya sea como causal de rescisión del Contrato de Concesión por incumplimiento de CASISA y/o como causal de rescisión, anulación y/o terminación del presente Convenio.

8.2 Con posterioridad al Cierre, los siguientes podrán ser considerados "Eventos de Incumplimiento" y, como tales, provocarán la caducidad de todas las cuotas del Precio de Compra y, en su caso, la aplicación de la Cláusula Penal:

- a. La extinción del Fideicomiso Financiero por cualquier causa a que ello se deba que no sea imputable al Vendedor, o el incumplimiento total o parcial de los pagos debidos por el Fideicomiso Financiero al Vendedor.
- b. La modificación o alteración de funcionamiento del Fideicomiso Financiero que no cuente con la aprobación del Vendedor, aprobación que no será irrazonablemente denegada.
- c. La modificación del régimen de la Coparticipación Federal que actúe en detrimento de los derechos del Vendedor.
- g. Cualquier acción administrativa, legislativa o judicial que impida u obstaculice el fiel cumplimiento de las estipulaciones del presente y el pleno goce de los derechos que el presente otorga al Vendedor y no sea dejada sin efecto dentro de los 90 (noventa) días de haberse puesto en vigor.

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

TÍTULO IX

DECLARACIONES DEL COMPRADOR

9.1. En caso de que por efecto de cualquier medida judicial y/o administrativa y/o legislativa, sea del orden municipal, provincial y/o nacional, el Nuevo Modelo Regulatorio y/o cualquiera de sus disposiciones y/o cualquiera de los actos que en función de sus previsiones debiera dictarse, fuera suspendido y/o revocado, ello no podrá ser alegado por el Comprador para liberarse de (i) sus obligaciones de pago por la Compraventa de las Acciones; ni (ii) de sus demás Obligaciones de Pago y Obligaciones Condicionales de Pago incluyendo, sin limitación, aquella derivada de la garantía otorgada al Vendedor, así como de su obligación de permitir la cesión de los derechos de cobro de la Coparticipación Federal.

Ing. JUAN JOSÉ HERENCIA

Subdirector de Jurisdicción

21

Subsecretaría de Planificación y Reg. de Instr. Leg.

Sra. MARIA JOSE ROMERO

Jefa de División

Ministerio de Obras y Servicios Públicos

6653E10



TÍTULO X

DECLARACIONES DEL VENDEDOR

11.1 El Vendedor declara que las Acciones objeto de esta compraventa son de su propiedad y no están sujetas a Gravamen alguno, salvo por lo expuesto respecto de las acciones transferidas fiduciariamente al Banco BBVA Francés según fueron identificadas en el "Considerando" (mm) del presente Convenio.

11.2 El Vendedor tiene la libre disponibilidad de (i) las acciones no comprendidas en la cesión fiduciaria referida en el Artículo precedente y (ii) de los derechos emergentes del Contrato de Fideicomiso y Colocación respecto de las acciones alcanzadas por dicha cesión fiduciaria. Asimismo, manifiesta que no existe ninguna medida precautoria, provisoria o definitiva u orden o resolución judicial o administrativa o de cualquier naturaleza que afecte o restrinja su libre disponibilidad, teniendo el Vendedor dominio pleno, irrestricto y perfecto de las Acciones, con excepción de las acciones transferidas fiduciariamente al Banco BBVA Francés que se mencionan en el "Considerando" (II) del presente Convenio.

29

TÍTULO XII

TERMINACIÓN

12.1 Con excepción de las obligaciones establecidas en el Artículo 6.1.2., y las disposiciones del Título XIII, el presente Convenio no generará obligaciones para las Partes hasta que se opere el Cierre previsto en el Título VII en las condiciones estipuladas en el Artículo 7.2.

12.2 En caso de que (i) dentro del Plazo de Cumplimiento de las Condiciones Suspensivas no se cumplan todas las Condiciones Suspensivas, y no se renuncien todas las condiciones incumplidas por la o las Partes de la Compraventa a quien favorece(n); o (ii) no se opere el Cierre en la fecha prevista al efecto con el cumplimiento de todos los actos previstos en el Artículo 7.2, entonces el Convenio quedará de pleno derecho sin efecto, sin responsabilidad para ninguna de las Partes.

12.3 Habiéndose cumplido satisfactoriamente la condición enunciada referida al cierre de la operación de compraventa con Impregilo, durante el plazo que medie hasta el cierre de la presente (25 de agosto de 2010) no le serán exigibles a CODI S.A. aportes algunos a CASISA de capital, fondos, garantías o cualquier otro tipo de recursos.

ing. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ
Subdirector de Jurisdicción
Control de Transito y Reg. de Tránsito
Subsecretaría Legal y Técnica
Fiscalía de Estado

ES COPIA

TÍTULO XII

POSICIÓN DE LAS PARTES

Sra. MARIA JOSÉ ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

[Signature]

[Signature]

587

Sra. MARIA JOSÉ ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

[Signature]
Sra. MARIA JOSÉ ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

6653 10
Ministerio de Obras y Servicios Públicos



12.1 Las Partes formulan expresa reserva de todos sus derechos y acciones, manteniendo las posiciones jurídicas que han adoptado hasta el presente y sin prestar su consentimiento para retrotraer etapas ya cumplidas.

TITULO XIII

GENERAL

14.1 Cada una de las Partes soportará los gastos y honorarios en los que cada una de ellas incurra con motivo de la evaluación, negociación, instrumentación y/o perfeccionamiento de la compra de las Acciones y la cesión de créditos descriptas en el presente Convenio, incluyendo y sin que ello signifique limitación alguna, honorarios de abogados, auditores, síndicos, contadores y asesores.

14.2 El presente Convenio y todos los documentos necesarios para que se opere el Cierre y/o se implementen sus disposiciones serán alcanzados por las exenciones impositivas que comprenden al Estado Provincial conforme a las normas tributarias vigentes en materia de sellos. Si, pese a ello, el presente Convenio o cualquiera de los documentos necesarios para que opere el Cierre en los términos de los Artículos 7.2.4, 7.2.5 y/o 7.2.8 y/o para que se implementen sus disposiciones, fuera alcanzado por impuestos de sellos, dichos impuestos con sus accesorios serán soportados en su total incidencia y sin limitación alguna, por la Provincia..

14.3 Todas las comunicaciones y notificaciones que las Partes deban efectuarse con motivo del presente Convenio se realizarán por escrito y serán entregadas por medio fehaciente de comunicación. Las comunicaciones se cursarán a las siguientes direcciones:

“Comprador”:

Boulevard Chacabuco 1300
Ciudad de Córdoba
Provincia de Córdoba

“Vendedor”:

Codi S.A.
Florida 537 Piso 2º, Of. 509,
Ciudad de Buenos Aires

Los domicilios antes mencionados revisten el carácter de “domicilio especial” a todos los efectos del Convenio y, en consecuencia, serán válidos hasta tanto sean modificados en las condiciones antes estipuladas y las notificaciones de toda clase —incluyendo la notificación de una demanda judicial— que a ellos se realicen surtirán plenos efectos aun cuando las Partes no se encuentren en ellos.

Ing. JUAN JOSE GENTANA
Ejecutor de Intervención
Control de Trámite y Reg. de Instr. Leg.
Subsecretaría Legal y Técnica
Planes de Estado
ES COPIA

Ing. JUAN JOSE GENTANA
Ejecutor de Intervención
Control de Trámite y Reg. de Instr. Leg.
Subsecretaría Legal y Técnica
Planes de Estado
ES COPIA FIEL

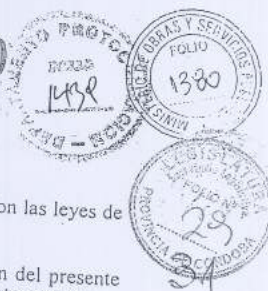
Sra. MARIA JOSE ROMERO



Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Ministerio de Obras y Servicios Públicos

6653E10



14.4 El presente Convenio se registrará y se interpretará de conformidad con las leyes de la República Argentina.

14.5 Resolución de controversias: Todas las desavenencias que deriven del presente Convenio o que guarden relación con el mismo, serán resueltas definitivamente por arbitraje (el "Arbitraje") de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional que se encuentre vigente a la fecha de interposición de la demanda arbitral. El tribunal arbitral estará compuesto por 1 (un) árbitro designado por cada una de las Partes y 1 (un) árbitro designado por la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional que actuará como Presidente del Tribunal. La sede del Arbitraje será la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. El Arbitraje se conducirá en idioma Español y las normas jurídicas aplicables al fondo de la controversia serán las leyes de la República Argentina.

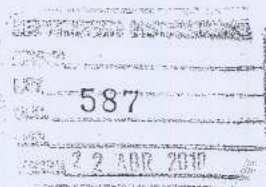
14.6 Las disposiciones de este Título XIII regirán desde la firma del presente Convenio y no perderán vigencia por dejarse sin efecto el presente según lo previsto en el Artículo 5.6.

EN UN TODO DE CONFORMIDAD, se firman dos ejemplares idénticos en la Ciudad de Córdoba a los veintinueve días de Marzo de 2010.

CODI S.A..

HUGO JULIO TESTA
Ministro de Obras y Servicios Públicos

PROVINCIA DE CORDOBA



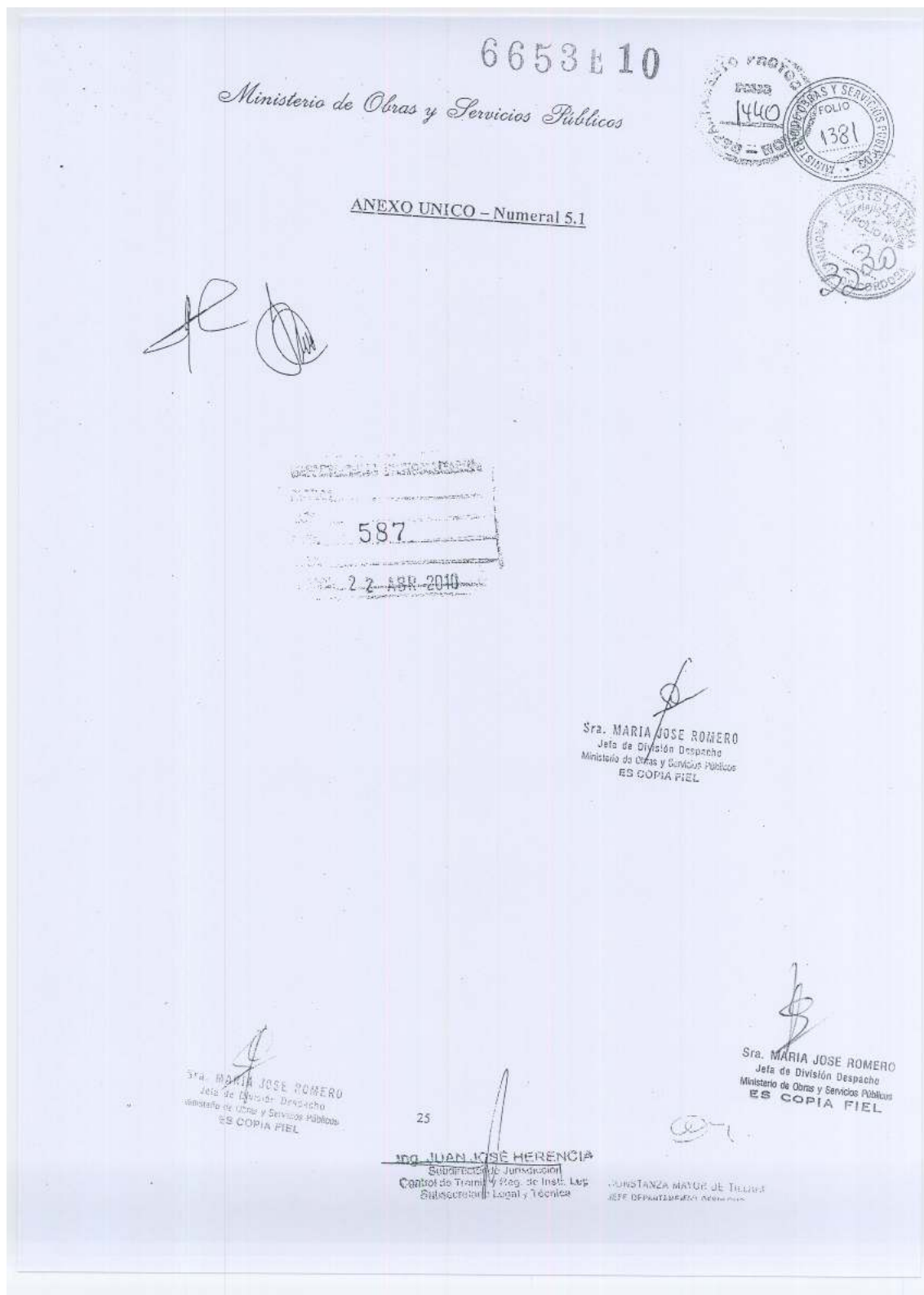
Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

24

Sra. MARIA JOSE ROMERO

Ing. JUAN JOSÉ HERENCIA
Subcomisario de Jurisdicción
Control de Tránsito y Reg. de Inst. Leg.



6653 E 10



Poder Ejecutivo
Córdoba

CORDOBA,

- 8 NOV 2010

VISTO: El expediente N° 0451-060517/10 en el que se propici la aprobación de la Addenda al CONVENIO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES Y REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS, celebrado el día 29 de marzo de 201 entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la firma CODI S.A., ratificado por Decreto N° 587/10,

Y CONSIDERANDO:

Que según constancias obrantes a fs. 33/40 se ha realizado e Acta de Cierre, con fecha con fecha 31 de agosto de 2010, entre la firma IMPREGILO INTERNATIONAL INFRASTRUCTURES N.V. y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, condición necesaria para el perfeccionamiento de la Addenda referida, según lo establecido en la misma.

Que el objeto de la referida Addenda consiste en modificar parcialmente los términos y condiciones del citado Convenio, a fin de instrumentar lo acordado por las partes conforme se indica en los considerandos de la misma.

Que en consonancia con las prórrogas del cierre original, e cumplimiento de diversas condiciones, como así también la necesidad de adoptar una nueva fecha de cierre para el Convenio de que se trata, la cual ha sido fijada para el día 17 de diciembre del corriente año, se modifican cláusulas y modalidades a fin de adaptarlas al nuevo escenario.

Que todo ello se enmarca en el uso de las potestades que nacen del convenio originario, ratificado por Ley 9799, por lo que puede procederse como se solicita.

Por ello, lo dictaminado por la Subsecretaría de Asuntos Legales del Ministerio de Obras y Servicios Públicos con el N° 550/10 y por Fiscalía de Estado bajo N° 1358/10

ES COPIA FIEL
MIGUEL ANGEL GARAY
Jefe de División de Registros Oficiales
y Inspección de la Subsecretaría de Jurisdicción de Control
de tránsito y registro de Instrucción de la
Subsecretaría Legal y Técnica

Sra. MARIA JOSE ROMERO

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Desocho

2099

6653E10

Anexo I

GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ADDENDA AL CONVENIO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES Y
REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS

Entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba, con domicilio en Boulevard Chacabuco 1300, Ciudad de Córdoba (la "Provincia" o el "Comprador"), representada en este acto por el Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos Ingeniero Hugo Atilio Testa; CODI S.A., con domicilio en Florida 537 2º piso Of. 509, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, (el "Vendedor"), representada en este acto por el Ing. Hilario C. Magliano en su calidad de Director en conjunto las "Partes", y

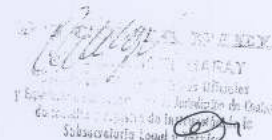
CONSIDERANDO:

- Que, con fecha 29 de Marzo 2010, las Partes suscribieron un Convenio de Compraventa de Acciones (el "Convenio") mediante el cual se acordó, la transferencia de la totalidad de las acciones de titularidad de CODI S.A. en CASISA a favor de la Provincia, por un valor de US\$ 1.382.452 (el "Precio de la Compraventa de Acciones").
- Que el Convenio fue ratificado mediante el Decreto Provincial N° 587/2010 (22-04-2010), publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 19 de Mayo de 2010, indicándose en su primer "considerando" que "el referido convenio es el resultado de una propuesta realizada desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, luego de que la Comisión designada para dar cumplimiento a los objetivos de la Minuta de Entendimiento de abril del año 2009, no alcanzara acuerdo alguno referido a la Renegociación del Contrato de Concesión de la RAC...."
- Que el Decreto Provincial N° 587/2010 facultó al Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos que "Artículo 2: ...a realizar las medidas y acciones que resulten necesaria a los fines de dar cumplimiento al convenio que se aprueba por el artículo 2 del presente Decreto...."
- Que en los términos del Convenio ratificado por Decreto 587/2010 resulta posible realizar dispensas de condiciones establecidas a favor de las partes por quienes resulten beneficiarios de las mismas individual o conjuntamente.
- Que se ha verificado el CIERRE y las condiciones no dispensadas en la Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos con Inpregilo y CASISA convenidas en el convenio ratificado por Decreto 165/10 y ley 9799 y sus modificatorias por Decreto 1007/10 ratificado por ley 9809, y las prórrogas convenidas por las partes y ratificadas por Decreto Nro. 1164/10 (B.O. 10-08-10), 1267/10 y 1283/10 (B.O. 03-09-10), que en lo pertinente se hacen extensivas a la presente Adenda.



María José Romero

DEPARTAMENTO NOTARIAL
ANEXO
LEY
DEC. 2099
RES.


Hilario C. Magliano
Director en conjunto
de la Compañía de Inversión de Capital
Subsecretaría Legal y Técnica

CONCEPCION MAYOR DE TILAND

6653E10



GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

- f) Que la variación de la fecha de Cierre como condición de la exigibilidad del compromiso de compraventa de acciones aprobado por Decreto 587/2010 en atención a los plazos de prórroga, comenzarían a regir a partir del día 31 de Agosto de 2010, imposibilitan el cumplimiento en tiempo propio de las condiciones de cumplimiento previo establecidas en el punto 5.1 y subsiguientes del Convenio de referencia.
- g) Que asimismo, como consecuencia del cierre de la operación aprobada por el Decreto 165/10 y sus modificatorios, algunas de las disposiciones, condiciones y cláusulas del convenio aprobado por Decreto 587/2010, requieren de su adecuación y/u eliminación previa a su remisión a la Honorable Legislatura Unicameral para su ratificación en los términos de la ley 9086 y concordantes.
- h) Que entre las condiciones verificadas, dispensadas y las modificaciones que surgen como consecuencia de las mismas y de la fecha de cierre final para el presente convenio, diferente a la pautaada oportunamente, tienen incidencia directa o indirecta en las cláusulas 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.9, 5.1.11, 5.1.13, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6.1.1, 7.1, 7.2.4, 8.2 inciso a y b, 11.1, 12.3, principalmente.
- i) Que cuando en el texto de los Títulos III la mención al "Fiduciario"y/o Acreedor, deberá entenderse que se hace referencia al Vendedor (Artículos 3.2, 4.1, 4.2, y 4.4.).
- j) Que en función del pronunciamiento por Resolución nro. 281/10 de la Comisión Nacional de la Competencia en relación a Impregilo Internacional Infraestructures N.V, y habiendo tomado el control de la sociedad CASISA el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba de la misma, las operaciones de transferencia minoritaria, no resultan típicas para justificar dicha intervención y pronunciamiento, por lo tanto las partes debieran concluir las ya iniciadas de común acuerdo, solicitando la conclusión de las actuaciones iniciadas por CODI S.A. mediante expediente nro. *S01:0124258/10 – caratulado CODI S.A. –S/ CONSULTA INTERPRETACION LEY 25156 (OPI 186).*
- k) Que en virtud de lo indicado en los "considerandos" precedentes, las Partes están contestes en definir como nueva fecha de cierre el día 17 de Diciembre de 2010, con posibilidad de prorrogarse de común acuerdo entre las partes cuando circunstancias así lo determinaren, y en consecuencia prestar conformidad con los contenidos de los instrumentos descriptos en el punto e) y g), adaptando y/o suprimiendo definiciones (1.1) adaptando fechas de cierre (3.1, 5.1, 7.1, 12.3,) denominaciones (por caso Fiduciario por Vendedor – 3.2, 4.1, 4.2, 4.4,) condiciones ya cumplidas o dispensadas (5.1.1, 5.1.2, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.9, 5.1.11, 5.1.13, 5.3, 5.4, 5.5), adecuar cláusulas relacionadas con los pagos y aspectos fiduciarios (3.1, 8.2 inciso a y b), entre otras relacionadas.
- l) Que la presente Adenda debe ser aprobada por actos y normas de igual rango que el Convenio, en tanto implica una modificación de sus términos.

[Handwritten signature]

Sra. MARIA JOSE ROMERO

2. DEPARTAMENTO POSTULACIONES
ANEXO
LEY 2090

[Handwritten signature]
SECRETARÍA DE LEGISLACIÓN
FOLIO 43

LEGISLACIÓN MATER DE TILLES
DEPARTAMENTO LEGISLACIÓN

6653E10

GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

- m) Que la Fecha de Cierre y el Plazo de Cumplimiento de las Condiciones Suspensivas originalmente previstos deben ser consiguientemente reajustados sin que ello implique alterar las condiciones económico-financieras originalmente acordadas.

POR TODO ELLO, LAS PARTES ACUERDAN EL OTORGAMIENTO DE LA PRESENTE ADDENDA AL CONVENIO (LA "ADDENDA"), LA QUE SE REGISTRARÁ POR LAS CLÁUSULAS Y CONDICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

PRIMERA: OBJETO

- 1.1. El objeto de esta ADDENDA consiste en modificar parcialmente los términos y condiciones del Convenio a fin de instrumentar lo acordado por las Partes conforme se indica en los Considerandos de la presente.
- 1.2. Las Partes acuerdan que la presente ADDENDA se tendrá por incorporada al texto del Convenio, el que seguirá plenamente vigente entre las Partes en todo lo que no fuera modificado por la presente ADDENDA.

SEGUNDA: DEFINICIONES

- 2.1. Todos los términos en mayúscula contenidos en la presente ADDENDA, tanto en singular como en plural, que no se encuentran expresamente definidos en el presente, tendrán el significado que se les asigna en el Convenio.
- 2.2. Toda mención al Convenio en la parte modificada y no modificada del mismo, se entenderá como referida al Convenio con las modificaciones introducidas por la presente ADDENDA.

TERCERA: MODIFICACIONES AL CONVENIO

Las PARTES acuerdan modificar los términos y condiciones del Convenio, conforme se describe a continuación:

- 3.1. Se modifica el Artículo 1.1 del Convenio, dejándose sin efecto la definición del "Nuevo Modelo Regulatorio".
- 3.2. Se modifica el Artículo 3.1 del Convenio, el que queda así redactado:

"3.1 El precio que las Partes de la Compraventa asignan por la transferencia de las Acciones (el "Precio de Compra"), es de US\$ 1.382.452 (dólares estadounidenses un millón trescientos ochenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y dos). Este importe será pagado por el Comprador al Vendedor de la siguiente manera: (i) US\$ 6.912 (dólares estadounidenses seis mil novecientos doce) en el momento del Cierre; y (ii) el saldo de US\$ 1.375.540 (dólares estadounidenses un millón trescientos setenta y cinco mil quinientos cuarenta) en 83 (ochenta y tres) cuotas mensuales de US\$ 22.703 (dólares estadounidenses veintidós mil setecientos tres). Dichas cuotas serán mensuales.

[Firma]

Sra. MARIA JOSE ROMERO

3
DEPARTAMENTO PROTOCOLIZACION
ANEXO
LEY
DEC. 2099

[Firma]
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Córdoba, 15 de Diciembre de 2010

6653E10

45

GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

consecutivas e iguales, e incluyen capital e intereses. La primera de ellas vencerá el día 28 (veintiocho), o si éste no fuera hábil, el día hábil inmediato siguiente, del mes calendario inmediatamente posterior a la Fecha de Cierre y a partir de allí, cada cuota subsiguiente vencerá entre el día 28 (veintiocho) y el día 3 (tres) del mes calendario sucesivo. En función de verificarse el cierre final el día 17 de Diciembre de 2010, con posibilidad de prorrogarse de común acuerdo entre las partes cuando circunstancias así lo determinaren conforme a la cláusula 7.1, la cuota 1, 2, 3, 4 se efectivizaran conjuntamente con el anticipo del punto (i) arriba descripto, abonando las restantes cuotas conforme lo dispone el presente artículo.

3.3. Se modifica el Artículo 3.2 el que queda así redactado:

"3.2 El Precio de Compra a abonar por el Comprador conforme se detalla en el apartado anterior devengará desde la Fecha de Cierre, un interés equivalente a una tasa del 9 ½ % (nueve y medio por ciento) anual sobre saldos deudores, el que está incluido en el cálculo de las cuotas mensuales consecutivas e iguales indicadas. El Comprador pagará cada cuota de capital e intereses del Precio de Compra mediante la entrega al vendedor de la cantidad de pesos necesaria para adquirir las divisas necesarias para que los montos sean equivalentes y se correspondan a cada una de las cuotas de capital e intereses del Precio de Compra. En el caso previsto en el Artículo 4.4, el Comprador no será responsable por la restricción pero deberá cumplir el pago de la manera allí prevista. Todo impuesto de cualquier tipo que se establezca a partir de la firma del presente Convenio, así como todo incremento de impuesto existente a la fecha de firma del presente Convenio, resultantes en ambos casos ya sea de nuevas normas y/o de nuevas interpretaciones de normas vigentes, y que recaiga sobre el pago al Vendedor y/o la transferencia a la cuenta bancaria del Vendedor, estará a cargo del Comprador como accesorio del Precio de Compra."

3.4. Se modifica el artículo 4.1 que queda así redactado:

"4.1 A los efectos de implementar las Garantías de la Provincia, en el acto de Cierre la Provincia entregará al Acreedor, para su posterior entrega al Banco de la Nación Argentina, una carta instruyendo irrevocablemente a este último a pagar al Vendedor las sumas necesarias (de acuerdo con lo previsto en el Artículos 3.2) para el pago de cada cuota de capital e intereses del Precio de Compra vencida que el Vendedor le informe que no ha sido pagada en término, debiendo el Banco de la Nación Argentina pagar al Vendedor el monto así informado por éste dentro de los cinco días hábiles de haber recibido dicha información, afectando para ello el porcentaje que corresponda de la acreditación periódica de fondos correspondientes a la Provincia en concepto de Coparticipación Federal. La instrucción al Banco de la Nación Argentina preverá que,

MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

[Firma]

GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS DE CARRETERAS
DIRECCION DE OBRAS DE FERROVIARIAS
DIRECCION DE OBRAS DE PUENTES
DIRECCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO
DIRECCION DE OBRAS DE VIALIDAD
DIRECCION DE OBRAS DE VIALIDAD
DIRECCION DE OBRAS DE VIALIDAD
DIRECCION DE OBRAS DE VIALIDAD

4
DEPARTAMENTO LEGISLATIVO
ANEXO
LEY
Nº. 2099
REC.

CONSEJERIA MADE DE FIDUCIA
JEFE DEPARTAMENTO DESPACHO
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

6653E10

46

GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



en caso de que por un faltante transitorio en la cuenta en la que se acredite a favor de la Provincia la Coparticipación Federal no se pudiese atender, total o parcialmente, una o más cuotas de capital e intereses del Precio de Compra, dicho faltante será pagado de inmediato, aun parcialmente, a medida que se acrediten los fondos necesarios en dicha cuenta"

3.5. Se modifica el Artículo 4.2 el que quedara redactado de la siguiente forma:

"4.2 Análogamente, la Provincia deberá gestionar la aprobación y la aceptación previstas en los Artículos 5.1.4 y 5.1.12, respectivamente, con respecto a las Obligaciones Condicionales de Pago, e instruir irrevocablemente al Banco de la Nación Argentina a pagar de inmediato al Vendedor, según corresponda, ante la solicitud del propio Vendedor y, en su caso, ante una orden en tal sentido de un tribunal arbitral o judicial competente, la totalidad de las cuotas pendientes del Precio de Compra, con sus intereses compensatorios y moratorios, en caso de operarse la caducidad de plazos, con más, en su caso, el monto de las Obligaciones Condicionales de Pago que se hubieren devengado, afectando para todo ello el porcentaje que corresponda de los depósitos diarios correspondientes a la Provincia en concepto de Coparticipación Federal. En caso de que la Provincia (i) no haya obtenido las referidas aprobación y/o aceptación y/o (ii) no expida dicha instrucción dentro de los 30 (treinta) días (plazo que podrá extenderse por otros 30 [treinta] días, a pedido de la Provincia, por una única vez) de requerirlo el Vendedor o, de promover la Provincia el Arbitraje cuestionando dentro de dicho plazo la procedencia de las Obligaciones Condicionales de Pago y/o de la caducidad de los plazos, dentro de los treinta días de haber quedado firme el laudo que disponga dicha procedencia, la Provincia deberá pagar al Vendedor una multa diaria de **US\$ 1.382,45 (dólares estadounidenses mil trescientos ochenta y dos con cuarenta y cinco centavos)** hasta que otorgue dicha instrucción o se pague al Vendedor, según corresponda, el total de la suma adeudada por las Obligaciones de Pago y las Obligaciones Condicionales de Pago y sus intereses acrecidos, costas y gastos. La existencia del trámite del Arbitraje y demás trámites accesorios no afectará la continuidad del régimen y de los pagos previstos en el Artículo 4.1."

3.6. Se modifica el artículo 4.4 del Convenio, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"4.4 En caso de que en cualquier momento existiere cualquier prohibición por parte del Banco Central de la República Argentina o existiere cualquier otra restricción y/o prohibición por parte de cualquier otra autoridad de la República Argentina que efectivamente impida o restrinja el acceso por parte del Vendedor al mercado libre de cambios en la República Argentina para cumplir en la moneda especificada las cuotas del presente Convenio, la Provincia no será responsable por tal restricción, pero deberá cumplir dichos pagos y, para ello, deberá entregar al Vendedor la cantidad de pesos necesaria para que éste último realice, a opción del Vendedor, alguna de las siguientes operaciones a efectos de efectuar el pago: (i) adquiera FRB ("Floating Rate

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
SECRETARÍA
de la Gobernación de Córdoba
Córdoba, 15 de Diciembre de 2010

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO
ANEXO
LEY
Nº 2099

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

[Handwritten signature]

6653E10

47

GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Bonds") con cotización en dólares estadounidenses en el exterior, en una cantidad tal que, liquidados en un mercado del exterior en precios y condiciones de plaza, y una vez deducidos los impuestos, gastos, costos y/o comisiones correspondientes, su producido en dólares estadounidenses fuere igual a la cantidad total que deba ser transferida; o bien (ii) adquiera títulos de deuda pública o privada (incluyendo, pero no limitado al Bonex Global, obligaciones negociables, etc.) o de acciones de compañías privadas argentinas con cotización en dólares estadounidenses en el exterior, en una cantidad tal que, liquidados en un mercado del exterior en precios y condiciones de plaza, y una vez deducidos los impuestos, gastos, costos y/o condiciones correspondientes, su producido en dólares estadounidenses fuere igual a la cantidad total en dicha moneda que deba ser transferida; o bien (iii) deposite pesos (o aquella moneda que en aquel momento tuviere curso legal en la República Argentina) en una cantidad tal que, en la fecha de transferencia de que se trate dichos Pesos fueren suficientes, una vez deducidos los impuestos, costos, comisiones y/o gastos que correspondieren para adquirir la totalidad de los dólares estadounidenses que deban ser transferidos, según el tipo de cambio detallado en la pantalla denominada "Reuters Currency Page" correspondiente al día hábil bancario anterior al de conversión para efectuar adquisiciones de dólares estadounidenses con pesos en la Ciudad de Nueva York a las 12 (doce) horas PM (hora de la ciudad de Nueva York) de la fecha de transferencia o pago, o bien (iv) mediante cualquier otro procedimiento existente en la República Argentina o en el exterior, en cualquier fecha en que deba efectuarse una transferencia para la adquisición de dólares estadounidenses."

3.7. Se modifica el Artículo 5.1 del Convenio, dejándose sin efecto las condiciones suspensivas indicadas en los apartados 5.1.1, 5.1.2, 5.1.7, 5.1.9, 5.1.11, 5.1.13, en virtud de haberse verificado su cumplimiento y/o modificado conforme la normativa citada en el considerando e que le fueran aplicables, particularmente a la adenda aprobada por ley Decreto 1007/10 (7-7-2010) – (BO. 17-07-2010) ratificado por Ley 9809 (BO. 26-07-2010), sin alterarse la numeración de los restantes apartados.

3.8. Se modifica el Artículo 5.1 del Convenio en su encabezado el que quedará redactado de la siguiente forma:

5.1 Según fuera condición de la oferta, el denominado Cierre para el presente, se verificará el 17 de Diciembre de 2010, con posibilidad de prorrogarse de común acuerdo entre las partes cuando circunstancias así lo determinaren. Sin perjuicio de lo referido para el presente y a los fines de que se pueda verificar el cierre en la fecha referida, deberán antes de dicha fecha verificarse las siguientes condiciones suspensivas (las "Condiciones Suspensivas").

3.9. Se modifica el Artículo 5.1.3 del Convenio que quedará redactado de la siguiente forma:

5.1.3 Aprobación por la Legislatura provincial, previa aprobación por Decreto del Sr. Gobernador, del endeudamiento, de la afectación de los fondos coparticipables y de toda otra

[Handwritten signature]

RE COPIA 6
GABINETE
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Subsecretaría de Inversión y Mantenimiento

DEPARTAMENTO PROTOCOLIZACION
ANEXO
LEY
DEC. 2000

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

[Handwritten signature]

CONSTANZA MAYOR ES 2010

6653E10

48



GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

cláusula del presente Convenio y/o de su ADDENDA que requiera tal aprobación en los términos de la Ley Provincial N° 9.086 y demás normativa aplicable'

3.10. Se modifica el Artículo 5.1.6 del Convenio que quedará redactado de la siguiente forma:

"5.1.6. Que en función del pronunciamiento por Resolución nro. 281/10 de la Comisión Nacional de la Competencia en relación a Impregilo Internacional Infraestructures N.V. y habiendo tomado el control de la sociedad CASISA el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba de la misma, las operaciones de transferencia minoritaria, no resultan típicas para justificar dicha intervención y pronunciamiento, por lo tanto las partes debieran concluir las ya iniciadas de común acuerdo, solicitando la conclusión de las actuaciones iniciadas por CODI S.A. mediante expediente nro. S01:0124258/10 – caratulado CODI S.A. –S/ CONSULTA INTERPRETACION LEY 25156 (OPI 186), fijando como condición previa la presentación y el pronunciamiento en tal sentido de la CNDC."

3.11. Se modifica el Artículo 5.3 del Convenio que quedará redactado de la siguiente forma:

"5.3 Las siguientes Condiciones Suspensivas se entienden pactadas a favor del Vendedor quien podrá, a su sola discreción y según corresponda en cada caso, renunciar a una o más de ellas: 5.1.4; 5.1.5; 5.1.10 y 5.1.12"

3.11. Se deja sin efecto el Artículo 5.4 del Convenio sin alterarse la numeración de los restantes apartados

3.12. Se modifica el Artículo 5.5 del Convenio que quedará redactado de la siguiente forma:

"5.5 La Condiciones Suspensivas no previstas en los Artículos 5.3 se entenderán pactadas a favor de todas las Partes"

3.13. Se modifica el Artículo 5.6 del Convenio que quedará redactado de la siguiente forma:

"5.6 Para el caso en que para el 17 de Diciembre de 2010 y/o sus prórrogas acordadas en función del Artículo 5.1 ("Plazo de Cumplimiento de las Condiciones Suspensivas") no se hubieran cumplido todas las Condiciones Suspensivas, y no hubieran sido renunciadas todas las incumplidas por la Parte o Partes a quien favorece(n), cualquiera de las Partes podrá, desde ese momento y en adelante y mientras dicha situación se mantenga, declarar rescindido de pleno derecho el Convenio mediante comunicación cursada por medio fehaciente a la/s otra/s parte/s, y será de allí en más de aplicación el Artículo 12.2"

[Handwritten signatures]
MICHAEL CARAY
7
Subsecretaría Legal y Técnica

DEPARTAMENTO PROTOCOLIZACION
ANEXO
LEY 2090

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Desaprol
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIE

[Handwritten signature]

6653E10

49



GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

3.14. Se modifica el Artículo 5.7 del Convenio que quedará redactado de la siguiente forma:

‘5.7 Si para el 10 de Noviembre de 2010 no se hubiere publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el decreto del Poder Ejecutivo provincial que aprueba el presente Convenio, el Vendedor podrá de allí en más y mientras dicha situación se mantenga, declarar por sí y ante sí terminado el presente Convenio notificando tal terminación a la Provincia, en cuyo caso serán de aplicación las reglas previstas en el Artículo 11.2’

3.15. Se modifica el Artículo 6.1.1 del Convenio que quedará redactado de la siguiente forma:

‘6.1.1 Que conforme se refiere en el artículo 5.1.6 modificado del convenio, CODI S.A. ha iniciado mediante expediente nro. S01:0124258/10 – caratulado CODI S.A. –S/ CONSULTA INTERPRETACION LEY 25156 (OPI 186), ha requerido la intervención de la CNDC en función de lo dispuesto por convenio ratificado mediante decreto 587/10. En tal carácter ha dado cumplimiento a la presentación dispuesta por la anterior versión del art. 6.1.1. Subsistiendo la obligación por parte de la provincia de presentar la documentación y el pedido al que hace referencia. Que dicho pedido en el que se describe la operación de compraventa objeto del Convenio a la luz del artículo 8 de la ley N° 25.156. que sin perjuicio de entender que a tenor de la resolución 281/10 respecto a Impregilo, no corresponde su pronunciamiento, la provincia realizará la presentación correspondiente a partir de la publicación del decreto provincial previsto en el Artículo 5.7.’

3.16. Se modifica el Artículo 7.1. del Convenio que quedará redactado de la siguiente forma:

‘7.1 Siempre que, dentro del Plazo de Cumplimiento de las Condiciones Suspensivas, todas las Condiciones Suspensivas se hubieren cumplido y/o renunciado por las Partes a quienes benefician, el Cierre de la compraventa de Acciones se operará el día 17 de Diciembre de 2010 y/o sus prórrogas acordadas en función del Artículo 5.1. El Cierre tendrá lugar en las oficinas de CASISA en Camino de la Merced 5995 de la Ciudad de Córdoba o donde las Partes convengan’

3.17. Se suprime el artículo 7.2.4 y 7.2.6 del Convenio sin alterarse la numeración de los restantes apartados

3.18. Se deja suprimen los puntos a y b del artículo ^{8.2} del Convenio sin alterarse la numeración de los restantes apartados quedando redactado de la siguiente forma:

‘8.2 Con posterioridad al Cierre, los siguientes podrán ser considerados “Eventos de Incumplimiento” y, como tales, provocarán la caducidad de todas las cuotas del Precio de Compra y, en su caso, la aplicación de la Cláusula Penal:

a. Suprimido.

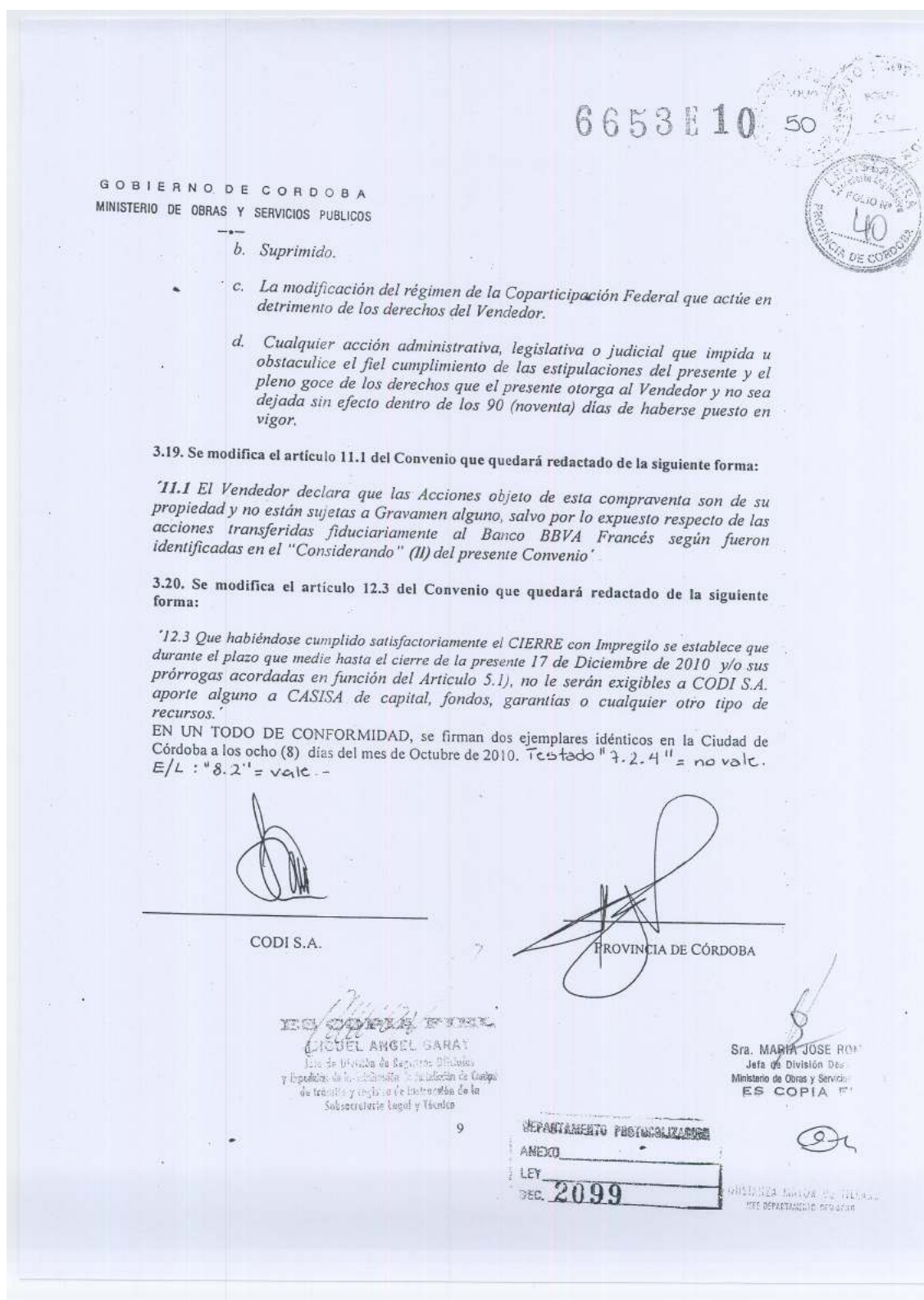
[Firma]
MIGUEL ANGEL GARA
Jefe de División de Registros Públicos
y Espectáculos de la Provincia de Córdoba
de Instrucción y registro de Inscripciones de los
Subsistemas Legal y Técnico

DEPARTAMENTO NOTARIAL
ANEXO
LEY
DEC. 2099
RES.

Sra. MARIA JOSE ROMERO
Jefa de División Despacho
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA FIEL

[Firma]

ASISTENTE MAYOR DE TALLERES
DTC NOTARIAL



Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.

DESPACHO DE COMISIÓN - 6653

Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA y de OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 6653/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el Convenio de Compraventa de Acciones y la Addenda al Convenio de Compraventa de Acciones suscrito entre la provincia y la empresa Codi SA, para la adquisición de la totalidad de las acciones que Codi SA posee en Caminos de Las Sierras SA con sus consecuentes

PODER LEGISLATIVO – 49ª REUNION -15-XII-2010

derechos patrimoniales y políticos, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación con la siguientes modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Artículo 1º.- Apruébase el "Convenio de Compraventa de Acciones" y la "Addenda al Convenio de Compraventa de Acciones" suscriptos entre la Provincia de Córdoba y la empresa Codi SA el día 29 de marzo de 2010 y 08 de octubre de 2010, respectivamente, que tienen por objeto la adquisición por parte de la Provincia de la totalidad de las acciones que Codi SA posee en Caminos de Las Sierras SA, con sus consecuentes derechos patrimoniales y políticos.

El Convenio, la Addenda y sus Decretos ratificatorios Nº 587/10 de fecha 19 de marzo de 2010 y 2099/10 de fecha 08 de noviembre de 2010, respectivamente, compuestos de treinta y siete (37) fojas útiles, forman parte de la presente Ley como Anexo Único.

Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.

DIOS GUARDE A V.H.

Heredia, Ipérico, Valarolo, Monier, Senn, Vásquez, Pagliano, Vega.

-11-

ESCALAFÓN DEL PERSONAL CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE LA PROVINCIA. ESTABLECIMIENTO. LEY 8453. DEROGACIÓN.

Moción de preferencia.

Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 6535/E/10, con una moción de preferencia que será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 15 de diciembre de 2010.

**Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor O. Campana
S. / D.**

De mi mayor consideración:

En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 125 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar preferencia por 7 días para el proyecto de ley 6535/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual establece el Escalafón del Personal Científico y Tecnológico de la Provincia, derogando la Ley 8453.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

**Daniel Passerini
Legislador provincial**

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de preferencia leída por Secretaría.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.

En consecuencia, se incorpora al Orden del día de la 46ª sesión ordinaria.

-12-

SEÑORA MARÍA BELÉN COCCIOLO. CARGO DE SECRETARIA TÉCNICA PARLAMENTARIA. RENUNCIA.

Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota 6766/N/10, remitida por la señora María Belén Cocciolo, en la cual presenta su renuncia al cargo de Secretaria Técnica Parlamentaria, que será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 15 de diciembre de 2010.

**Sr. Presidente de la
Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S. / D.**

De mi consideración:

PODER LEGISLATIVO – 49ª REUNION -15-XII-2010

Por medio de la presente me dirijo a usted, y por vuestro intermedio a todos los señores legisladores miembros de esa Honorable Legislatura Provincial, a fin de comunicarle mi renuncia indeclinable al cargo de Secretaria Técnica Parlamentaria, con que se me honrara desde diciembre de 2007.

Motiva la presente el hecho de asumir como Vocal del Directorio de la Agencia Córdoba Deportes S.E.M.

Por lo expuesto, y descontando que ese Honorable Cuerpo aceptará mi renuncia, sabiendo interpretar los motivos que la fundamentan, quiero hacer llegar mi más sincero agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por la deferencia, el respeto y la consideración con la que se me ha tratado durante todos estos años.

Ruego también haga extensivo mi agradecimiento a todo el personal legislativo con el que compartí el día a día con gran satisfacción durante todos estos años de gestión.

Sin otro particular, saludo a usted con distinguida estima y consideración.

María Belén Cocciolo

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la nota leída por Secretaría.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.

No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Juan Brügge a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público presente a ponerse de pie.

-Así se hace.

Sr. Presidente (Campana).- Queda levantada la sesión.

-Es la hora 19 y 55.

Sra. Graciela Maretto
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Héctor Oscar Campana
Vicegobernador

Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo